



HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE AMÉRICA LATINA

América Latina en el siglo xx

**Thomas E. Skidmore
Peter H. Smith**

CRÍTICA

Agradecimientos

Para esta traducción castellana, que corresponde a la cuarta edición inglesa, hemos actualizado nuestra interpretación de la historia contemporánea de América Latina en un contexto internacional que cambia rápidamente. El fin de la guerra fría ha eliminado una de las características que definían su historia desde 1945 y ha llevado nuevas cuestiones al primer plano de la agenda interamericana, entre ellas el libre comercio, el narcotráfico y la migración ilegal. La preocupación por la recuperación económica después de la devastación de los años ochenta ha concentrado la atención en los antiquísimos asuntos de la pobreza, la desigualdad y la justicia social.

La continuada transición de régímenes militares a civiles ha dado fundamento a la esperanza de que América Latina puede aún superar con éxito el desafortunado legado histórico descrito en este libro. Está en juego no sólo la consolidación de la democracia, sino también la amplitud y calidad del sistema democrático.

Entre quienes proporcionaron útiles sugerencias y comentarios para esta edición figuran Lynne Guitar y Eric van Young. Julie Grey, quién también ayudó en el proceso de edición, y Frances Mejía ofrecieron su competente ayuda de investigación.

Una vez más, agradecemos los comentarios y sugerencias de los lectores.

Providence, Rhode Island
La Jolla, California
Marzo de 1996

T. E. S.
P. H. S.

— Prólogo —

¿Por qué América Latina?

«Estados Unidos haría cualquier cosa por América Latina, menos leer sobre ella», afirma James Reston, decano durante muchos años de los comentaristas políticos estadounidenses. ¿Hay alguna razón por la que debamos tratar de probar que se equivoca? Hay varias. En primer lugar, Estados Unidos posee innumerables intereses económicos en la región. América Latina es su principal socio comercial, el destino de gran parte de su inversión y su fuente de petróleo y otras materias primas básicas. Un crecimiento acelerado en países clave como México y Brasil quizás ponga pronto en la escena mundial nuevas potencias importantes.

También existen vínculos políticos. Sus levantamientos revolucionarios y las respuestas represivas constituyen un desafío directo para la política exterior estadounidense, pues suscitan difíciles interrogantes sobre el modo de proteger y fomentar sus intereses nacionales (definidos no sólo como intereses estratégicos o económicos). Ronald Reagan escenificó este hecho poco después de su elección en 1980 al reunirse con el presidente mexicano José López Portillo sobre la frontera entre ambos países, en lo que fue la primera conferencia de ese tipo que mantuvo con otro jefe de Estado. Después, durante los años ochenta, Estados Unidos soportó una encarnizada división acerca del apoyo a un ejército exiliado (la Contra) que luchaba por derrocar al gobierno sandinista de Nicaragua. El presidente George Bush dio prioridad a sus propias inquietudes al buscar una relación especial con México y proponer un acuerdo de libre comercio que estrecharía los lazos económicos entre ambos países. Su sucesor y rival político, el presidente Bill Clinton, ha seguido la política de libre comercio al recibir una «cumbre de las Américas» hemisférica en Miami en diciembre de 1994.

Existe otra importante consideración que resulta más próxima a Estados Unidos. Grandes partes del país se han hispanizado por la influencia de los inmigrantes de México, Puerto Rico, Centroamérica y el Caribe, que se añaden a los descendientes hispanos de la población hispanohablante del antiguo suroeste mexicano. Luego, la migración histórica y reciente llevó a las gentes y costumbres de América Latina al suroeste estadounidense (de Texas a California), Florida y Nueva York. Muchas de las principales ciudades es-

tadounidenses tienen más niños de familias que hablan español que de cualquier otro grupo. El bilingüismo se ha convertido en un asunto político que nos fuerza a replantearnos el significado de la América de lengua española, dentro de las fronteras estadounidenses y en el exterior.

La mayoría de los ciudadanos estadounidenses (o «norteamericanos», como se los suele conocer en América Latina) saben poco acerca de las sociedades vecinas del sur. Muchos creen que Estados Unidos puede imponer su voluntad en la región mediante la diplomacia del «garrote» o el poderío militar. A otros ni les preocupa. Cuando buscan una lengua extranjera «fácil», los estudiantes de secundaria o de universidad eligen el español y luego dan por sentado que todo lo que se asocie con hablar español debe ser «fácil». Tal ignorancia puede ser peligrosa, por lo que uno de los objetivos de este libro es ayudar a reducir una información equivocada. De hecho, esta falta de conocimiento es igualmente pronunciada en Europa Occidental. Los periodistas ingleses contaban que unos cuantos hicieron una vez un concurso para dar con el titular periodístico más aburrido posible (tenía que ser real y que se hubiera impreso) y el resultado fue: «Pequeño terremoto en Chile: No

ESTEREOTIPOS ESTADOUNIDENSES SOBRE AMÉRICA LATINA

El 10 de diciembre de 1940, el Departamento de Investigación sobre la Opinión Pública (Office of Public Opinion Research) llevó a cabo una encuesta nacional en la que se proporcionó a los participantes una tarjeta con diecinueve palabras y se les pidió que indicaran aquellas que parecían describir mejor a la gente de Centroamérica y Suramérica. Los resultados fueron los siguientes:

	%		%
De piel oscura	80	Imaginativo	23
Irascible	49	Sagaz	16
Emotivo	47	Inteligente	15
Religioso	45	Honrado	13
Atrasado	44	Valiente	12
Vago	41	Generoso	12
Ignorante	34	Progresista	11
Suspicaz	32	Eficiente	5
Amigable	30	No contesta	4
Sucio	28	No sabe	0
Orgulloso	26		

Como se pidió a los participantes que eligieran cuantos términos descriptivos desearan, los porcentajes suman considerablemente más de 100.

Fuentes: John J. Johnson, *Latin America in Caricature*, Austin, University of Texas Press, 1980, p. 18; Hadley Cantril, ed., *Public Opinion, 1935-1946*, Princeton, Princeton University Press, 1951, p. 502.

ha habido muchas muertes». La compleja historia de este país durante los últimos treinta años pone tristemente de relieve su provincianismo.

Por nuestra formación y perspectivas, la mayoría de los norteamericanos y europeos buscamos fórmulas intelectuales que proporcionen respuestas claras a nuestras preguntas: el «amante latino», «Frito Bandito», el espiritual Che Guevara, las mulatas brasileñas reinas del carnaval, son las imágenes que primero suelen venir a la mente. Pero cuando dejamos atrás esas caricaturas (que tienen su verdad propia que contar), nos encontramos con que América Latina es una región compleja.

No resulta fácil de comprender, a pesar de que se hable español en toda ella, menos en Brasil (donde se habla portugués), los Andes (donde se habla quechua y otras lenguas indígenas), el Caribe (francés, inglés y holandés), México (bolsas dispersas de lenguas indias) y Guatemala (más de veinte lenguas indias). El término América Latina abarca una vasta variedad de gentes y lugares. Desde el punto de vista geográfico, incluye la masa de tierra que se extiende desde la frontera de Río Grande entre Texas y México hasta el extremo meridional de Suramérica, más algunas islas del Caribe: un área total de dos veces y media el tamaño de Estados Unidos. El mismo Brasil es más grande que la parte continental de Estados Unidos.

Las características físicas presentan diferencias pronunciadas: de la cordillera andina, que se extiende por todo el occidente de Suramérica, a la selva tropical de la cuenca amazónica; de las áridas llanuras del norte de México a las fértiles praderas de la pampa argentina. Sus pueblos contienen elementos y mezclas de tres grupos raciales: indios nativos, europeos blancos y africanos negros. En 1992, su población total llegaba a los 453 millones, en comparación con los 255 millones de Estados Unidos.

La sociedad latinoamericana presenta contrastes sorprendentes entre ricos y pobres, entre la ciudad y el campo, entre gente culta y analfabeta, entre el poderoso señor de la hacienda y el campesino respetuoso, entre los ricos empresarios y los desesperados chicos de la calle. Desde el punto de vista político, América Latina incluye veintiséis naciones, grandes y pequeñas, cuyas experiencias recientes van de la dictadura militar a la democracia electoral y al régimen socialista de Fidel Castro en Cuba (véase el mapa 1). En cuanto a la economía, forma parte del mundo «en vías de desarrollo», cuyo avance económico rápido se ve hostigado por obstáculos históricos y actuales, pero aquí también hay diversidad: de la dependencia de un solo cultivo de la diminuta Honduras a la promesa industrial del dinámico Brasil.

Durante toda su historia contemporánea, los latinoamericanos, con mayor o menor celo, han tratado de lograr la independencia económica de las potencias coloniales, imperiales y neoimperiales. Así, es una amarga ironía que el término América Latina fuera acuñado por los franceses del siglo XIX, que pensaban que como su cultura, al igual que la de la América española y portuguesa, era «latina» (es decir, de lengua romance), Francia estaba destinada a asumir el liderazgo de todo el continente.

Como sugieren estas observaciones, América Latina se resiste a una cla-



1. América Latina en la actualidad (población de 1992, en millones).

sificación fácil. Es una región rica en paradojas, percepción que proporciona varias pistas instructivas.

En primer lugar, América Latina es joven y antigua a la vez. Desde 1492, la conquista realizada por españoles y portugueses creó un orden social totalmente nuevo, basado en la dominación, la jerarquía y el entrecruzamiento de elementos europeos, africanos e indígenas. La intrusión europea alteró de forma profunda e indeleble las comunidades indias. Comparadas con las antiguas civilizaciones de África y Asia, estas sociedades latinoamericanas son

relativamente jóvenes. Por otra parte, la mayoría de las naciones de la región obtuvieron la independencia política —de España y Portugal— a comienzos del siglo XIX, más de cien años antes de que lograran sus objetivos los movimientos anticoloniales de otros países del Tercer Mundo. Por ello, si se sigue el criterio de la independencia, América Latina es relativamente antigua.

En segundo lugar, durante toda su historia, ha pasado tanto por agitación como por estabilidad. La conquista inició una tradición de violencia política que ha hecho erupción en golpes, asesinatos, movimientos armados, intervenciones militares y (más raramente) revoluciones sociales. Las confrontaciones ideológicas entre liberalismo, positivismo, corporativismo, anarquismo, socialismo, comunismo, fascismo y los panegiristas de cada matiz doctrinal han acentuado la intensidad de la contienda. Pero, a pesar de las diferentes formas de conflicto político, han persistido las antiguas estructuras sociales y económicas. Perviven muchos aspectos de la sociedad tradicional incluso donde se ha padecido una revolución moderna, como es el caso de México (1918) y Bolivia (1952). En principio, la Revolución cubana (1959) parece una excepción, aunque allí también se ha mantenido fuerte la inercia de la historia, como veremos.

En tercer lugar, América Latina ha sido dependiente e independiente, autónoma y subordinada. La consecución de la independencia antes de 1830 en todas partes menos en la cuenca del Caribe representa una afirmación de soberanía enraizada en el pensamiento ilustrado. No obstante, una nueva forma de penetración de potencias externas —primero Gran Bretaña y Francia y luego Estados Unidos— la puso en peligro. Su debilidad económica y política frente a Europa y Norteamérica ha limitado a menudo las posibilidades de sus responsables políticos. Dentro de América Latina, el poder es irónicamente ambiguo: es el bien supremo, pero sólo tiene un efecto limitado.

En cuarto lugar, América Latina es próspera y pobre. Desde la misma conquista, se la ha descrito como una mina fabulosa de recursos naturales. Primero llegó la codicia europea de plata y oro. Hoy la demanda puede ser de petróleo, gas, cobre, hierro, café, azúcar, soja o por ampliar el comercio general, pero la imagen de riqueza sin cuento permanece. En contraste asombroso, también existe el cuadro de la pobreza: campesinos sin aperos, obreros sin trabajo, niños sin alimento, madres sin esperanza. Un dicho muy repetido resume la escena: «América Latina es un mendigo sobre una montaña de oro».

No es difícil pensar en más contrastes, pero éstos pueden ilustrar lo difícil —y fascinante— que resulta abordarla. Entender su historia y su sociedad requiere un planteamiento flexible y amplio, que es el que intentamos ofrecer en este libro. Utilizamos el trabajo de muchos estudiosos para presentar nuestra propia interpretación, pero también proporcionamos al lector otras opiniones alternativas.

Interpretaciones de América Latina

La mayoría de los analistas de América Latina contemporánea han destacado su inestabilidad política, marcada con mucha frecuencia por la dictadura. Los observadores norteamericanos y europeos se han sentido especialmente atraídos por dos cuestiones: ¿Por qué la dictadura?, ¿por qué no la democracia? Esta preocupación no es reciente. En 1930, por ejemplo, un geógrafo económico estadounidense que se especializaba en la región observó: «Se suceden los años y surgen la ansiedad y el descontento de un pueblo mal equipado que intenta establecer formas de gobierno verdaderamente republicanas». Un año antes, un estudioso inglés había señalado que «la historia política de las repúblicas había constituido una crónica de períodos alternativos de libertad y despotismo». Dando por sentado de forma implícita o afirmando a las claras que su estilo de democracia es superior a los demás modelos de organización política, los escritores norteamericanos y europeos se solían preguntar qué fallaba en América Latina o con los latinoamericanos.

Durante muchos años, se aceptaron como respuestas una mezcla de epítetos racistas, simplificaciones psicológicas, trivialidades geográficas y distorsiones culturales. Según tales consideraciones, América Latina no podía lograr la democracia porque sus gentes de piel oscura (negros e indios) no eran adecuadas para ella; o porque los apasionados temperamentos latinos no la soportaban, los climas tropicales la impedían de algún modo, o las doctrinas de la Iglesia católica y romana la inhibían.

Cada una de las acusaciones tiene refutación: el gobierno dictatorial ha florecido en países predominantemente blancos, como Argentina, así como entre las sociedades mestizas, como México; ha aparecido en climas templados, como Chile, y no sólo en los trópicos, como Cuba; ha obtenido el respaldo de no católicos y de católicos no practicantes, mientras que muchos devotos fervientes han luchado por la libertad; y, como demuestran los régimes autoritarios ajenos a América Latina, como la Alemania de Hitler o la Rusia estalinista, la dictadura no se restringe a un único temperamento. Tales explicaciones no sólo no aclaraban nada, sino que, llevadas a su extremo, ayudaban a justificar la cada vez mayor penetración europea y estadounidense —financiera, cultural, militar— en las «atrasadas» repúblicas del sur.

El panorama intelectual mejoró a finales de los años cincuenta y comienzos de los sesenta, cuando los científicos sociales norteamericanos formularon la «teoría de la modernización». Según se aplicó a América Latina, esta teoría sostenía que el crecimiento económico generaría el cambio social que, a su vez, haría posible una política más «desarrollada». La transición de una sociedad rural a una urbana conllevaría un cambio de valores. La gente comenzaría a pertenecer y a participar en las organizaciones voluntarias que requiere la auténtica democracia. Y lo que es más importante, surgiría una clase media para desempeñar un papel progresista y moderado a la vez. América Latina y su ciudadanía no eran de por sí tan diferentes de Europa

y Norteamérica. Simplemente estaban por «detrás». Los adeptos de la modernización pensaban que la crónica histórica mostraba que este proceso estaba ya en marcha.

Por ello, los analistas se pusieron a trabajar para describir la historia latinoamericana a la luz de esta teoría. Un estudioso optimista, muy leído en Estados Unidos, descubrió en 1958 que los «sectores medios» se habían vuelto «estabilizadores y conciliadores, y en el proceso habían aprendido los peligros de tratar con postulados absolutos». El autor de un libro de texto de finales de los años setenta sobre historia latinoamericana consideraba «la historia latinoamericana desde la independencia como el crecimiento lento de la modernización contra la resistencia de las viejas instituciones y actitudes».

Sin embargo, la realidad resultó más dura. En lugar de extender la prosperidad general, el crecimiento económico de los años sesenta y setenta (que alcanzó un alto índice sostenido en México y Brasil) hizo más desigual la distribución de la renta y aumentó la brecha entre los niveles de vida de la ciudad y el campo. También descendió la capacidad del capital interno para competir con las enormes firmas transnacionales. Mientras tanto, la política seguía a duras penas el modelo predicho por muchos expertos en la modernización. Los estratos medios, relativamente privilegiados, forjaron un sentimiento de «conciencia de clase» que, en momentos críticos de decisión, como en Argentina en 1955 o 1976, Brasil en 1964 y Chile en 1973, los llevó a unirse con las clases gobernantes en oposición a las masas populares. La política giró hacia el autoritarismo y produjo gobiernos militares. Y en absoluta contradicción con la teoría de la modernización, estos modelos surgieron en los países más desarrollados —y que se desarrollaron más rápidamente— del continente. ¿Cuál era el error?

Aparecieron dos conjuntos de respuestas. Un grupo de estudiosos se centró en las tradiciones de América Latina y sus orígenes español y portugués. Estos analistas sostuvieron que la política antidemocrática era (y sigue siendo) producto de una perspectiva del mundo católica y mediterránea, que hacía hincapié en la necesidad de armonía, orden y eliminación de conflictos. Al no haber logrado captar este plan argumental en la experiencia ibérica, los estudiosos habían confundido forma con sustancia, retórica con realidad. Las constituciones latinoamericanas nunca eran tan democráticas como parecían, los partidos políticos no eran tan representativos como podrían aparentar. La comunidad académica norteamericana y europea, afligida por su propia miopía y desviaciones, sólo había interpretado mal los hechos sociales.

Un segundo grupo de investigadores aceptó el enlace de las causas socioeconómicas de la teoría de la modernización con los resultados políticos, pero dieron la vuelta a la respuesta: el desarrollo económico latinoamericano era cualitativamente diferente del de Norteamérica y Europa Occidental y, por lo tanto, producía resultados políticos distintos. De forma específica, sostienen que la experiencia latinoamericana estaba determinada por el hecho profundo de su dependencia económica. Como uno de sus exponentes ha explicado:

Por dependencia entendemos una situación en la que la economía de ciertos países está condicionada por el desarrollo y la expansión de otra economía a la que la primera está sujeta. La relación de interdependencia de dos o más economías y entre éstas y el comercio mundial toma la forma de dependencia cuando algunos países (los dominantes) pueden expandirse y autosostenerse, mientras que otros países (los dependientes) sólo pueden hacerlo como reflejo de esa expansión, que puede tener un efecto positivo o negativo en su desarrollo inmediato.

Por su carácter intrínseco, el «desarrollo dependiente» genera desigualdades, proporcionando beneficios a los sectores que participan en el mercado mundial y negándolos a los otros grupos. Un caso típico puede ser el de un país cuyo crecimiento económico dependa de un solo cultivo para la exportación, como café o azúcar. Una élite latifundista nacional, los plantadores, colaboraría con los comerciantes importadores-exportadores, con frecuencia extranjeros, para vender los bienes en un mercado ultramarino. La mayor parte de los beneficios estarían restringidos a estos grupos. Los plantadores utilizarían mucho de su dinero para importar costosos artículos de consumo de Europa o de Estados Unidos y los comerciantes (si son extranjeros) remitirían las ganancias a sus países. De este modo, los ingresos por exportación proporcionarían un pequeño capital precioso para diversificar la economía local y crear una situación que algunos observadores han denominado «crecimiento sin desarrollo». Debido al excedente de fuerza laboral, los trabajadores del campo seguirían percibiendo salarios bajos; los grupos ajenos al sector de exportación obtendrían poco beneficio. En consecuencia, se intensificarían los desequilibrios regionales y la distribución de la renta se volvería más desigual que antes. Además, si se diera crecimiento, estaría sujeto a un riesgo sustancial. Si el mercado ultramarino del café o el azúcar se contrajera —por la razón que fuera, como pasó en los años treinta—, toda la economía se resentiría. En este sentido, sería «dependiente» para seguir creciendo de las decisiones tomadas en otro lugar y estaría condicionado, como ya señaló el autor antes citado, «por el desarrollo y expansión de otra economía».

Quienes proponían la «teoría de la dependencia», como pronto se la acabó conociendo, sostenían que conducía al autoritarismo político. Según su opinión, la situación «dependiente» de las economías latinoamericanas ponía limitaciones inherentes a su capacidad de crecimiento, especialmente en la industria. La señal más segura de la existencia de problemas económicos es la crisis en las cuentas externas, la capacidad del país para pagar las importaciones necesarias, como ocurrió de forma espectacular en México, Argentina, Chile y Brasil a finales de 1982 y comienzos de 1983. Las exportaciones se rezagan de las importaciones y la diferencia sólo se puede cubrir con afluencia de capital. Pero los acreedores extranjeros —compañías, bancos, organismos internacionales como el Banco Mundial— niegan la financiación extra necesaria porque creen que el gobierno no puede imponer los «sacrificios» precisos. Arrinconado contra la pared, el país debe tomar las medidas necesarias

para mantener el flujo de importaciones. La estrategia política se convierte en rehén de la necesidad de convencer a los acreedores extranjeros.

La solución más frecuente durante los años sesenta y setenta fue el golpe militar. El gobierno autoritario resultante podía entonces tomar decisiones «duras», por lo general medidas antiinflacionistas muy impopulares, como el aumento del precio de los servicios públicos y recortes en el salario real y el crédito. Las clases más golpeadas son las inferiores. Por ello, para poner en práctica estas medidas se requiere ejercer mano dura sobre los sectores populares. Así, los golpes y regímenes autoritarios represivos que surgieron en Brasil, Argentina y Chile no lo hicieron a pesar del desarrollo económico de América Latina, sino debido a él.

Los años ochenta reemplazaron a esos regímenes autoritarios por dirigentes civiles y gobiernos elegidos. Las explicaciones de esta tendencia tomaron muchas formas. Los regímenes autoritarios, una vez considerados dominantes y monolíticos, acabaron demostrando mucha incoherencia y fragilidad. Los ciudadanos comunes se levantaron en movimientos de protesta, formaron organizaciones cívicas y demandaron elecciones populares. Enfrentada a una severa crisis económica, la gente de Argentina y Chile a Centroamérica trató de expresar sus derechos políticos. A mediados de los años noventa, casi todos los países de la región, con la excepción notable de Cuba, tenían gobiernos electos. Fueran completamente «democráticos» o no, punto que condujo a un amplio debate, representaban una mejora considerable de los modelos flagrantemente dictatoriales de los años setenta. Muchos observadores expresaron su esperanza optimista de que, al fin, América Latina se estuviera desplazando hacia un futuro democrático.

Las perspectivas económicas también mejoraron. Bajo la presión de los acreedores internacionales durante los años ochenta, los dirigentes latinoamericanos impusieron medidas de largo alcance destinadas a «liberalizar» sus economías nacionales (la reducción de aranceles y otras limitaciones al comercio, la venta de compañías controladas por el Estado a inversores privados y la restricción del déficit). La inflación bajó y creció la inversión extranjera. En consecuencia, el crecimiento promedio de América Latina pasó de un escaso 1,5 por 100 anual en 1985-1989 al 3,5 por 100 a comienzos de los años noventa. El inesperado comienzo de la crisis económica en México a fines de 1994 conllevó desencanto y confusión —expandiendo el llamado «efecto tequila» en otros países de la región— pero muchos analistas mantenían la esperanza de que, a largo plazo, las perspectivas económicas seguirían siendo positivas.

Los estudiosos abordaron estos desarrollos económicos y políticos con cautela intelectual. En lugar de lanzar grandes teorías, tales como la modernización o la dependencia, los analistas políticos insisten en el papel de las creencias, ideas y convicciones humanas. Algunos interpretaron la vuelta a la democracia en América Latina y otros lugares como un triunfo global de los valores estadounidenses, especialmente a la luz de la caída de la Unión Soviética. Otros subrayaron la importancia del liderazgo y las maniobras tácticas.

cas a nivel de la élite. En cuanto a la economía, algunos expertos consideraron la aceleración del crecimiento de inicios de los noventa como una vindicación de las reformas procapitalistas y de las políticas de libre mercado. Otros señalaron que el auge tendió a reflejar el flujo y reflujo de las inversiones internacionales, y que el capital desapareció rápidamente ante la crisis, dejando a América Latina tan «dependiente» como antes. Una preocupación constante, para muchos, era la problemática relación entre la transformación económica y la transformación política. ¿Lleva la liberalización económica a la democracia política? ¿O podría ser al revés? De modo que los desarrollos recientes en América Latina plantean nuevas preguntas y nuevos desafíos para la comunidad intelectual.

Temas analíticos de este libro

Este libro es una investigación sobre la historia latinoamericana, no la formulación de una teoría social; pero no podemos evitar necesitar conceptos al plantear nuestro material. De la teoría de la modernización tomamos la premisa causal de que las transformaciones económicas inducen cambios sociales que, a su vez, tienen consecuencias políticas. De la escuela de la dependencia tomamos prestadas las ideas de que:

1. el lugar que ocupa un país en la división internacional del trabajo define la forma de las sendas de que dispone para el crecimiento económico;
2. la localización funcional en la «periferia» del sistema mundial, como diferente del «centro» comercial-industrial y el desarrollo en un estadio en el que el sistema del Atlántico Norte estaba ya muy avanzado, supuso que las transformaciones económicas en América Latina fueran diferentes de los modelos conocidos anteriormente en Europa y Norteamérica;
3. estas diferencias en los procesos económicos produciría formas distintas de cambio social con respecto, por ejemplo, a la naturaleza de las «clases medias», las clases obreras rurales y urbanas, y las relaciones interclases;
4. esta combinación de fuerzas sociales y económicas definiría las opciones con que contaron los dirigentes políticos y ayuda a explicar la alteración de los régimenes democráticos y autoritarios;
5. dentro de estas limitaciones, a algunos países latinoamericanos les fue mucho mejor que a otros en la explotación de sus recursos propios (especialmente agrícolas) para lograr el desarrollo económico.

En otras palabras, pretendemos examinar la relación existente entre economía y política dentro de un contexto internacional. Creemos que este planteamiento puede aplicarse no sólo a los años sesenta, setenta, ochenta y noventa, sino también a todo el periodo contemporáneo. Buscaremos estos rasgos clave a lo largo de todo el libro.

Pero también contemplamos límites a la utilidad de este planteamiento. Cuanto más retrocedamos en la historia latinoamericana, más difícil será encontrar datos sobre las relaciones económicas y el comportamiento de clase social. No aceptamos la teoría de ámbito universal expresada por algunos analistas y no compartimos la opinión de que sólo las revoluciones pueden romper los ciclos de dependencia. De forma más fundamental, creemos que las transformaciones históricas son procesos complejos y para entenderlos necesitamos adoptar un planteamiento multicausal. Las ideas e ideologías, por ejemplo, no son simples adornos o superestructuras, sino que tienen efectos importantes sobre las percepciones, actitudes y acciones del pueblo que hace la historia. Todo aquel que haya intentado comparar las tradiciones políticas de Argentina y Brasil puede corroborarlo. Los factores demográficos, como el rápido crecimiento poblacional, también tienen efectos sociales y políticos de largo alcance. En nuestro retrato de la sociedad latinoamericana, esperamos integrar un planteamiento de «economía política internacional» con la consideración de otras fuerzas culturales y otras fuerzas no económicas.

Iniciamos nuestra narración describiendo primero la conquista y el periodo colonial (1492-1825), cuando América Latina entró en la periferia del sistema mundial capitalista mediante su subordinación a España y Portugal. Luego detallamos cómo la interrupción de esta conexión llevó a la independencia, seguida de una fase de consolidación económica y política entre 1830 y 1880.

A finales del siglo XIX, América Latina estrechó sus vínculos con el sistema mundial, esta vez proporcionando materias primas (especialmente alimentos y minerales) a Gran Bretaña, Europa continental y Estados Unidos. La formación de estas economías orientadas a la exportación y sus sucesoras ocupan la mayor parte de nuestra atención. ¿Por qué hemos elegido este planteamiento para América Latina contemporánea? Porque según los indicadores mejor conocidos —crecimiento de la exportación, urbanización, esperanza de vida, alfabetización, participación política— la región entró, en torno a 1880, en el periodo de cambio más rápido de los que había experimentado desde la conquista ibérica en el siglo XVI.

El capítulo 2 presenta una visión general de este proceso. Investiga algunos procesos y modelos comunes que acompañaron el énfasis otorgado a la exportación y, después, el impulso hacia la industrialización «postergada». A continuación pasamos a los estudios concretos: Argentina, con su tradicional acento puesto en la carne y el trigo, arruinada por la rivalidad interna y la intervención militar antes del reciente giro hacia la democracia (capítulo 3); Chile, fuente primordial de nitratos y cobre y, finalmente, emplazamiento de un experimento socialista abortado (capítulo 4); Brasil, tan famoso por el café y, en tiempos más recientes, por su rápido crecimiento industrial en medio de la transición política (capítulo 5); Perú, con sus sólidas tradiciones indias y sus tumbos vacilantes hacia la independencia nacional (capítulo 6); México, próximo a Estados Unidos y escenario de un levantamiento popular

22 *Historia contemporánea de América Latina*

en 1910 (capítulo 7); Cuba, tan dependiente del azúcar y tan cerca de Estados Unidos, la única sociedad latinoamericana que ha pasado por una revolución socialista con todas las de la ley (capítulo 8); el Caribe, donde las agudas luchas ideológicas se han adueñado de las pequeñas naciones isleñas (capítulo 9); Centroamérica, una región de sociedades muy estratificadas ignoradas durante mucho tiempo, hasta las explosiones políticas de finales de los años setenta y comienzos de los ochenta (capítulo 10). En estos estudios sobre países concretos, intentamos otorgar una consideración plena a los temas sociales y políticos, por lo que cada capítulo puede leerse por separado. Tomados en conjunto, representan el 84 por 100 de la población latinoamericana y aproximadamente la misma proporción de su territorio.

En el capítulo 11, resumimos las relaciones recientes y actuales entre América Latina y la comunidad internacional, particularmente Estados Unidos, y en el epílogo especulamos acerca de los acontecimientos probables hasta el año 2000 y después.

Este libro ofrece un cuadro de la sociedad latinoamericana, no un catálogo definitivo de hechos. Nuestro objetivo es trazar modelos y tendencias que nos ayuden a entender las complejidades y variaciones de las sendas recorridas por América Latina hasta el presente. Confiamos en que estimule la discusión y el debate, y esperamos que alumnos y colegas difieran con muchas de nuestras interpretaciones. Sobre todo, queremos presentar a nuestros lectores el estímulo y fascinación que ofrece la historia de una región interesante por derecho propio y que tiene un papel singular que desempeñar en el escenario mundial.

Los cimientos coloniales (1492-década de 1880)

Cuando los europeos llegaron a lo que hoy constituye América Latina, encontraron tres civilizaciones importantes: la maya, la azteca y la inca. El hecho de que sigamos llamando a los pueblos nativos de este hemisferio «indios» perpetúa el error cometido por los españoles en el siglo XVI, que querían creer que habían arribado a las Indias, ricas en especias.

El pueblo maya, que ocupaba la península de Yucatán situada al sur de México y la mayor parte de lo que hoy constituye Guatemala, comenzó a cimentar su civilización en torno al año 500 a. C. Sus logros más apreciados fueron de índole cultural: no sólo edificó templos exquisitos, sino que también fue precursor en arquitectura, escultura, pintura, escritura jeroglífica, matemáticas, astronomía y cronología (incluida la invención del calendario). Los mayas se organizaban generalmente en un conjunto de ciudades-estado independientes, algunas con una población que alcanzaba los 200.000 habitantes o incluso más, y desarrollaron un complejo orden social. Por razones desconocidas, la sociedad maya clásica se derrumbó, cayó víctima de la dominación (972-1200) y luego de la absorción (1200-1540) por parte de los invasores toltecas, procedentes de las tierras altas del centro de México. No obstante, los descendientes directos de los mayas han sobrevivido en el sur de México y en Guatemala hasta nuestros días.

Más tarde, el espacioso valle central de México se convirtió finalmente en el emplazamiento del imperio azteca. Los aztecas, una de las tribus chimacas que llegaron del norte para someter a los toltecas en los siglos XII y XIII, establecieron guerras constantes con sus vecinos y acabaron construyendo la ciudad de Tenochtitlán alrededor del año 1325 (en el lugar que hoy ocupa la Ciudad de México). Tras obtener el control de todo el valle de México, crearon un importante imperio, que estaba llegando a su cúspide cuando Colón arribó a la costa en el Caribe.

Los aztecas se destacaron por su organización militar y su destreza para edificar ciudades ceremoniales. Su arte, exceptuando su poesía perturbadora, era inferior en sutileza y acabado al de muchas otras antiguas civilizaciones mexicanas.

En su forma final, la sociedad azteca estaba rígidamente estratificada.

Los esclavos ocupaban el escalón más bajo, mientras que la nobleza hereditaria se hallaba situada en el más alto. La educación, el matrimonio y el trabajo estaban programados con meticulosidad y la economía tenía carácter comunal. Gobernantes hereditarios, como Moctezuma II, ejercían un poder político inmenso. Sin embargo, a pesar de la centralización de la autoridad, los estados conquistados de las regiones vecinas no se incorporaban al imperio. Se los trataba como vasallos sometidos a tributo y a algunos —como la cercana Tlaxcala— se les permitía mantener un estado perpetuo de guerra con Tenochtitlán. Una de las razones para ello era que la religión azteca requería el sacrificio humano y los prisioneros de guerra podían utilizarse para los rituales de sangre.

Los incas adoptaron un modelo de organización muy diferente. Su imperio abarcaba más de 5.000 km en los Andes, desde el norte de Ecuador, todo Perú, hasta el sur de Chile, y también el interior. Después de consolidar su dominio en el valle de Cuzco, en Perú, comenzaron a extender su imperio a comienzos de 1400 y continuaron en esta empresa hasta la conquista española en 1532. Una vez vencidos, los grupos se convertían en partes integrantes del imperio. Para fortalecer el apoyo al emperador, o inca, los nobles de las regiones conquistadas eran llevados a Cuzco y tratados como huéspedes reales, mientras que los elementos que ofrecían resistencia en las zonas de conquista reciente se transferían a otras controladas por fieles seguidores. El poder político correspondía a una burocracia con una organización muy estrecha y una estricta disciplina, compuesta en su base por equipos de funcionarios locales a quienes encabezaba un único dirigente supremo. Por ello, los incas podían ejercer una autoridad efectiva sobre la mayor parte de los Andes.

Eran diestros ingenieros que construyeron un vasto sistema de carreteras (para tránsito humano y animal, ya que no utilizaban la rueda), un intrincado sistema de irrigación y una agricultura de terrazas impresionante en las laderas de las montañas. También sobresalieron en el diseño textil y en el tratamiento de lesiones de cabeza debido a su extraordinaria habilidad para trepanar el cráneo humano.

Además de los mayas, aztecas e incas, había muchas otras culturas indias. Sólo en la zona de lo que hoy es México, había más de doscientos grupos lingüísticos diferentes. Los cálculos sobre la población indígena latinoamericana han variado ampliamente. Un estudiioso ha establecido la cifra de 90 a 112 millones, de los que 30 millones corresponderían a México y otros tantos a Perú. Aunque este cálculo quizás sea demasiado elevado, es evidente que para las pautas europeas de finales del siglo xv las sociedades indias habían crecido mucho. Entonces llegaron los españoles.

El contexto europeo

El «descubrimiento» europeo de América (es presumible que los indios sabían dónde estaban) formó parte de la considerable expansión europea durante el siglo xv. Europa iba percibiendo el resto del mundo a medida que sus navegantes y exploradores ampliaban las fronteras del globo conocido hasta entonces. A comienzos del siglo xvii ya había desplegado redes de comunicaciones alrededor de toda la tierra y había establecido el predominio económico que moldearía el mundo moderno.

Este estallido de la expansión europea lo hizo posible una combinación de factores, entre los que se hallaba la destreza técnica. El pilotaje y la navegación constituyeron ejemplos notables, al igual que la habilidad de adaptar los barcos costeros a los retos que suponía el océano abierto. Y otro ejemplo fué el armamento, que iba a hacer fuertes a los europeos enfrentados con los pueblos nativos americanos, en alguna ocasión bien armados, como en el caso de México.

Un segundo factor fue la base económica, que brindó capital para la empresa marítima y militar. La tecnología sólo no resultaba suficiente. Los vikingos habían demostrado habilidad técnica para alcanzar América, pero carecieron de los recursos necesarios para establecer asentamientos y comenzar la colonización, que requería hombres y dinero. En pocas palabras, el Nuevo Mundo no iba a pertenecer a especuladores de escasos recursos u objetivos limitados.

Como tercer factor, tuvo que haber un poder europeo interesado en algo más que la experiencia técnica y el beneficio. Tenía que estar dispuesto a perseguir lo desconocido con una determinación excepcional. España y Portugal se ajustaban a esta descripción. Estas monarquías católicas, con su ideal de cruzada para convertir a las masas gentiles a la verdadera religión, poseían una motivación única. España, en particular, había llegado tarde a la consolidación de su territorio contra el infiel ocupante musulmán. Portugal, aunque se había deshecho antes del intruso musulmán, también se hallaba comprometido con la expansión militante de la fe cristiana. Su arrojo estableció un precedente para que los intrusos europeos se dirigieran a América Latina durante los cuatro siglos siguientes. A pesar de toda la resistencia que ésta ofreció, iba a seguir siendo una extensión, a veces una contradicción, de la Europa que había navegado hacia el oeste en el siglo xv.

América española: de la conquista a la colonia, 1492-1600

No fue una coincidencia que Colón llegara a América el mismo año en que los españoles liquidaron la última fortaleza mora en España. La reconquista de la Península Ibérica contempló cómo los nobles guerreros cristianos se hacían con tierras y la corona estrechaba su control político. Como resultado,

en 1492 había una nobleza establecida y otra en ciernes ansiosas de más conquistas, y una corona dispuesta a dirigirlas a ultramar.

Así pues, los españoles llegaron al Nuevo Mundo en una conquista espiritual que ya estaba bien desarrollada en su tierra. España había representando una oportunidad moderada para prosperar en la escala social y existen pruebas considerables que sugieren que los conquistadores del Nuevo Mundo —Hernán Cortés, Francisco Pizarro y sus seguidores— llegaron a América para conseguir un puesto en la sociedad, así como riqueza. Sin duda, la motivación española era compleja. Fernando e Isabel y los monarcas sucesivos pensaron que la riqueza del Nuevo Mundo podría fortalecer su autoridad en Europa. Muchos celosos misioneros esperaban salvar las almas de los indios infieles. Los conquistadores tenían en mente muchos objetivos: como dijo uno de ellos, «aquí venimos a servir a Dios y al Rey, y también a hacernos ricos». Pero su motivo central parece haber sido lograr nobleza y opulencia. (Alrededor de un tercio de los conquistadores de Perú provenían de la baja nobleza; dos tercios tenían orígenes plebeyos. Todos debían conseguir una posición.) Con este impulso, partieron hacia un destino desconocido. En muy pocos años, habían llegado a la cima de los poderosos imperios de los aztecas e incas.

¿Cómo lo consiguieron? ¿Cómo unos cuantos cientos de españoles vencieron a unos imperios de millones de indios? Cuando Cortés partió de Cuba hacia México en 1519, sólo tenía 550 hombres y 16 caballos. En dos años y medio, con su vapuleado contingente español (asistido por refuerzos que sumaron varios cientos) había reducido a escombros Tenochtitlán, la espléndida capital azteca, y había aceptado la rendición de Moctezuma, su desalentado y perplejo rey-dios. Esta derrota se explicaría por la superioridad del equipo y las tácticas españoles: pólvora (utilizada en los mosquetes y cañones), caballos, organización y la confianza de resistir constantemente el ataque. Otro factor fue la inicial propensión de los aztecas a identificar a Cortés y sus hombres con el dios Quetzalcóatl, cuyo retorno al valle predecía un mito. También fue importante el papel de los pueblos no aztecas, como los tlaxcaltecas, que se resistían a los aztecas y les tenían resentimiento y que proporcionaron a los españoles tropas y consejos sobre las tácticas militares más convenientes. Por último, y quizás lo más importante, un brote de viruela, hasta entonces desconocida en América, diezmó a la población india, que carecía de inmunidad natural. En 1521, dos años después del inicio de la campaña de Cortés y a menos de treinta años del primer viaje de Colón, el imperio azteca había caído bajo el dominio español. Cortés no perdió tiempo en afirmar su autoridad: se hizo con garantías de lealtad de los caciques vecinos y dirigió un vigoroso esfuerzo de reconstrucción.

Algunos de los factores que favorecieron a los españoles en México operaron también en Perú, pero la tarea de Pizarro se simplificó por la guerra civil que entonces arruinaba el imperio inca: el inca Atahualpa, preocupado por el conflicto local, no llegó a ocuparse de Pizarro con la seriedad requerida. La pequeña banda española había consumado la conquista en 1533. Se



- América española: virreinatos
- América portuguesa (virreinato de Brasil): capitanías generales c. 1780.

Los virreinatos de la Plata y Nueva Granada pertenecieron originalmente al virreinato de Perú.

2. América Latina colonial: organización política.

llevaron como botín una cantidad de oro y plata que llenaría una habitación de unos 4×5 m hasta la altura del brazo extendido de un hombre. El sueño de El Dorado se había hecho realidad en los Andes.

La conquista española se centró en el Caribe y en las plazas fuertes de los dos grandes imperios indios, el azteca y el inca. También se emprendieron exploraciones desde los principales centros de población, pero no contaron con los hombres o los recursos para establecer el control directo en muchas de esas regiones. Su atención se concentró en especial en sus nuevos reinos de México y Perú.

No se tardó demasiado en recrear muchos aspectos de su propia sociedad en América. Se proyectaron ciudades típicamente españolas y se crearon sociedades de una rica complejidad. Sometidos a un estricto control inmigratorio, llegaron toneleros, panaderos, escribanos —gente procedente de España de toda condición— a hacer fortuna en el Nuevo Mundo.

El número de hombres era mayor que el de las mujeres en este éxodo. Según un estudio sobre Perú, por ejemplo, la proporción de hombres blancos con respecto a las mujeres de su misma raza era de siete a una, por lo menos. Esto no sólo ocasionó una intensa competencia por la mano de estas mujeres, sino que también llevó a tomar mujeres indias como consortes. Sus hijos de sangre mixta, casi siempre ilegítimos, acabaron siendo conocidos como mestizos. Con el tiempo, la raza mestiza se convertiría en el componente étnico dominante de gran parte de la América española, incluidos México, Centroamérica y los países andinos.

La corona española se dio cuenta pronto de que existía un conflicto de interés con los conquistadores de tendencias independientes y creó con premura una complicada burocracia para mantener la economía y la sociedad del Nuevo Mundo bajo un control firme. En España, la institución clave para los asuntos del Nuevo Mundo fue el Consejo de Indias. En ultramar, la principal unidad organizativa fue el virreinato, gobernado por un virrey nombrado por el rey. El primer virreinato se estableció en México (entonces conocido como Nueva España) en 1535, el segundo en Perú en 1544; se erigieron dos más en el siglo XVIII (véase el mapa 2). La Iglesia poseía estructuras paralelas, dirigidas por el arzobispo y las autoridades de la Inquisición.

En la práctica, esta burocracia condujo a un intenso conflicto sobre temas de jurisdicción, pero el ingenio del sistema consistía en que una vez que se llegaba a un punto muerto, siempre se podía traspasar el problema a una autoridad superior, ya fuera el virrey o el Consejo de Indias, lo que significaba que las distintas instituciones hacían de perros guardianes unas sobre otras (además de las revistas y las investigaciones periódicas sobre el desempeño de un cargo). Aunque resulte sorprendente, otro de los rasgos del sistema era su flexibilidad. Prácticamente todos los grupos tenían cierta medida de acceso a la burocracia. Y aunque la corona retenía la autoridad última, las autoridades locales poseían una considerable autonomía, como lo demuestran algunas de sus respuestas a decretos reales: «Obedezco pero no cumplo». A pesar de sus aparentes peculiaridades, la burocracia española

operó bastante bien en el Nuevo Mundo y mantuvo a las colonias bajo el dominio real durante cerca de 300 años.

Apuntalando esta estructura política se hallaba un conjunto de valores y premisas que legitimaban el dominio monárquico y elitista. Tenían su origen en la aserción fundamental católica y romana, articulada con la mayor claridad por Tomás de Aquino, de que había tres clases de derecho: el divino, es decir, la propia voluntad divina; el natural, un reflejo perfecto o encarnación del derecho divino en el mundo de la naturaleza; y el humano, el intento completamente imperfecto de los hombres de aproximarse a la voluntad divina dentro de la sociedad. Nacida en el pecado original, la humanidad era falible por definición y sólo por la gracia de Dios algunas personas eran menos falibles que las demás. Por lo tanto, la meta de la organización política era elevar a los menos falibles al poder para que pudieran interpretar y ejecutar la voluntad de Dios de un modo superior. Y el gobernante, una vez en el poder, era responsable ante su conciencia y ante Dios, no ante la voluntad del pueblo.

Este razonamiento proporcionó una justificación convincente para la supremacía de la monarquía española. Su origen teológico revelaba y fortalecía estrechos vínculos entre la Iglesia y el Estado. Este código, resucitado a menudo en la época poscolonial, también proporcionó, como veremos, una crítica devastadora de la teoría democrática. Andando el tiempo, los gobernantes legitimarían su poder mediante aspectos residuales de la doctrina católica y romana tradicional.

La estructura económica del imperio era un reflejo de la teoría mercantilista predominante de que la actividad económica debía realzar el poder y prestigio del Estado, medido por las barras de oro o plata. Un buen mercantilismo había de presentar una balanza comercial favorable y adquirir especias o lingotes como pago. Siguiendo esta lógica, España trató de monopolizar el acceso a la riqueza descubierta en el Nuevo Mundo. El objetivo principal fue la minería, primero de oro y luego fundamentalmente de plata. Otro objetivo era mantener un control completo sobre el comercio. En contraste, la agricultura recibió al principio poca atención de las autoridades reales (excepto si se trataba de productos de exportación) y la manufactura, cuando se consideró más tarde, se desalentó de forma activa.

El fundamento central de esta economía fue el trabajo indígena, que se obtenía mediante una forma u otra de coerción. Los nativos pagaban tributo a la corona y a sus emisarios. Como resultaba crítico obtener una fuerza laboral barata, la corona española, los colonizadores y los clérigos lucharon con acritud para controlar a los indios. En 1542, para reducir a los colonizadores, el rey decretó las *Nuevas Leyes* con el fin de proteger a los indios al apartarlos de la tutela directa de los conquistadores y ponerlos bajo la jurisdicción directa de la corona. En 1600 la corona había logrado ampliamente su objetivo, al menos en términos legales. Sin embargo, en la realidad, estos cambios sólo alteraron la forma legal de la opresión, ya que ésta persistió.

Para los indios, la conquista significó sobre todo un descenso drástico de

la población. Los estudiosos han discutido mucho y con dureza acerca del tamaño de la población indígena a la llegada de los españoles. Las investigaciones más fiables sobre México central sitúan la población anterior a la conquista, en 1519, en alrededor de 25 millones; para 1523 la cifra es de 16,8 millones, para 1580 de 1,9 millones y para 1605 de un millón, lo que significa un descenso total del 95 por 100. Los datos sobre Perú son menos completos, pero también evidencian un descenso continuo, de 1,3 millones en 1570 (cuarenta años después de la conquista) a menos de 600.000 en 1620, una caída de más de un 50 por 100. Aunque no se cuente con magnitudes exactas, sin duda la conquista ocasionó un desastre demográfico, atribuible en gran medida a enfermedades como la viruela, el sarampión y la gripe.

Los indios supervivientes vieron socavado y distorsionado su orden social. Obligados a entregar su trabajo a los españoles, lucharon por mantener sus redes sociales tradicionales. Las tierras más fértiles fueron usurpadas por los conquistadores, quienes, en muchos casos, las dedicaron a la ganadería. Los indios contemplaron la destrucción de los símbolos de su antigua religión y se apegaron a cuantas prácticas sincréticas pudieron idear. Las enfermedades causaron más bajas entre los hombres que entre las mujeres, lo cual, al desequilibrar los sexos, condujo a una ruptura mayor de los patrones de matrimonio y de la estructura familiar.

Para paliar el descenso de la población indígena, particularmente en las regiones de tierras bajas tropicales, los españoles comenzaron a importar esclavos negros de África, práctica que ya era conocida en España, Portugal y sus islas atlánticas. Entre 1518 y 1870, la América española importó más de un millón y medio de esclavos —más de un 16 por 100 del total del comercio esclavista atlántico—, la mayor parte a través de Cuba y el extremo septentrional de Suramérica, destinados al trabajo en las zonas de tierras bajas costeras. Brasil, con sus dilatadas plantaciones de azúcar, llevó alrededor de 3,7 millones.

Como veremos más adelante, América Latina produjo sociedades con un gran componente multirracial, en contraste con la sociedad birracial altamente polarizada que se desarrolló en Norteamérica.

Los tres componentes étnicos de la población colonial hispanoamericana —indios, europeos y africanos— se combinaron en una estructura social que se dividía por líneas de raza y función. El sector blanco, que incluía menos del 2 por 100 de la población del siglo XVI, era el más poderoso y de mayor prestigio. En ese mismo periodo, el grupo mestizo incluía a los negros libres, los mestizos (hijos de indios y blancos) y los mulatos —en conjunto, menos del 3 por 100 del total. Los indios, más del 95 por 100 de la población, se situaban en una posición única, limitada cuidadosamente y protegida por una batería de leyes reales.

Había además otras relaciones sociales importantes. Una era la rivalidad entre los blancos nacidos en España (peninsulares) y los blancos nacidos en el Nuevo Mundo (criollos). Otra era la estructura de la ocupación desempeñada: la de la Iglesia, el ejército, los comerciantes o los ganaderos. Estas ca-

tegorías sociales que se solapaban produjeron en la América española colonial un complejo sistema de estratificación en el que la posición social constituyía la recompensa principal. El conflicto entre peninsulares y criollos acabaría dando forma a las luchas que llevaron a la independencia del dominio europeo.

La interacción entre los grupos raciales no llegaba a ser tirante, sino que era tenue. Aunque se hallaba extendido el concubinato interracial, es probable que el matrimonio de este tipo fuera raro y, de producirse, seguiría gradaciones: los blancos podrían casarse con mestizos y éstos con indios, pero rara vez los blancos se casarían con indios. A medida que se extendió la consagración civil y religiosa a las uniones interraciales, en especial a aquellas en las que tomaban parte los blancos, se fueron borrando las fronteras sociales, legitimando las aspiraciones de movilidad y fomentando la incertidumbre acerca del sistema de estratificación. Indudablemente, existía movilidad, tanto social como geográfica, y los individuos podían experimentar un cambio considerable durante su vida.

El matrimonio y las costumbres familiares solían dar por sentado el dominio masculino sobre las mujeres. El culto a la superioridad masculina (machismo) apareció pronto en América Latina, dentro de una amplia escala de estratos sociales y étnicos, y muchas mujeres llevaron una vida restringida. Pero, contra la imagen estereotipada, la familia tipo no siempre estaba encabezada por un patriarca masculino que presidía una gran prole de hijos. Era mucho más habitual que las familias estuvieran formadas por parejas casadas de una edad razonablemente próxima y de dos a cuatro hijos.

No obstante, no todas las mujeres se casaban y las que lo hacían no permanecían en ese estado de por vida. Los datos acerca del siglo XVI son dispersos, pero ya en 1811, según los resultados de los censos, sólo el 44 por 100 de las mujeres adultas de la Ciudad de México estaban casadas. Muchas eran viudas y aproximadamente un tercio de los hogares de esa ciudad tenían a la cabeza una mujer, en parte debido a la inferior expectativa de vida de los hombres. Sea por la razón que fuere, muchas mujeres mexicanas pasaban gran parte de sus vidas como solteras.

América española: la transformación de la sociedad colonial, 1600-1750

Las colonias hispanoamericanas sufrieron profundos cambios poco después de 1600. El primer impulso vino de Europa, donde España comenzó a perder el poder que había disfrutado desde finales del siglo XV y durante el siglo XVI. Tras la derrota de la armada a manos inglesas en 1588, la tesorería real afrontó la bancarrota repetidamente, los nobles se enfrentaron a la corona, Cataluña se alzó en una revuelta y, en 1640, Portugal —desde 1580 gobernado por la monarquía española— logró reafirmar su independencia. Al mismo tiempo, España y Portugal comenzaron a perder sus monopolios so-

bre el Nuevo Mundo. Los ingleses, holandeses y franceses establecieron asentamientos en Norteamérica y también se hicieron con posiciones firmes en el Caribe.

Con España en declive, el resto del siglo XVII Europa buscó contrarrestar a Francia, ahora la potencia dirigente. El Nuevo Mundo se convirtió en un elemento vital para la ecuación de poder europea. Esto se hizo evidente en la guerra de Sucesión española (1700-1713), que instaló a los Borbones en el trono español y proporcionó a los ingleses el contrato (asiento) del tráfico de esclavos para las colonias españolas.

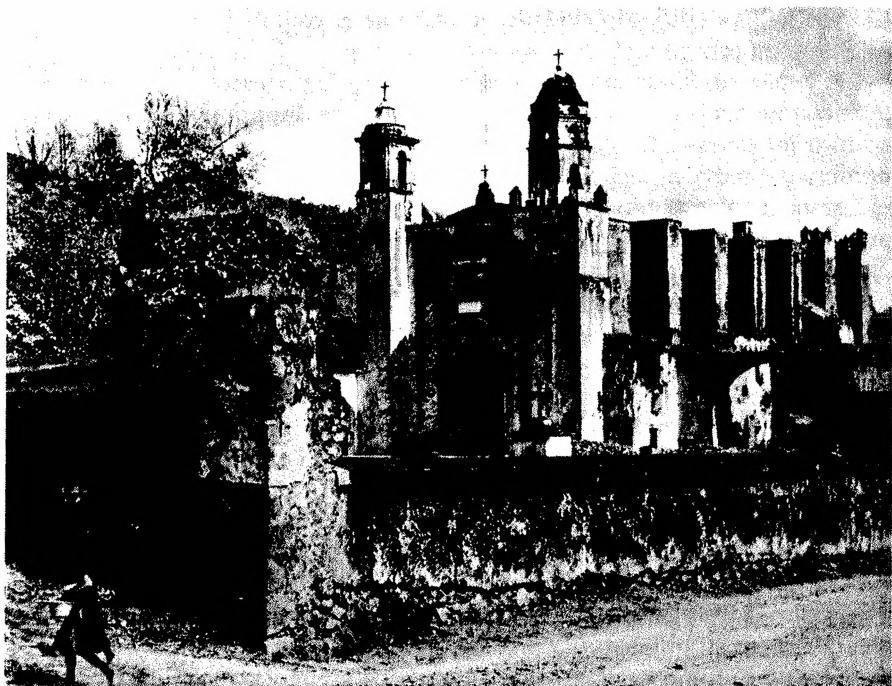
En las colonias también estaban ocurriendo cambios de largo alcance. La composición étnica de la sociedad sufrió una transición profunda. La inmigración continua y el crecimiento natural convirtió a los blancos, en su mayoría criollos, en un segmento de población considerable, quizás ya un 20 por 100 en 1825. Mucho más espectacular fue el crecimiento relativo de los mestizos y las distintas mezclas sanguíneas, que pasaron de menos de un 3 por 100 hacia 1570 a aproximadamente un 28 por 100 en 1825. El cambio en la población india fue aún mayor, pese a un ligero aumento en términos absolutos: de un 95 por 100 descendió a un escaso 42 por 100. En el mismo año (1825), los negros constituyan en torno al 12 por 100 de la población hispanoamericana.

Según fue pasando el tiempo, los criollos comenzaron a asumir papeles activos en sectores clave de la economía, tales como la minería y el comercio. Resulta especialmente sorprendente que cada vez se hicieran con más tierras (algo que los monarcas españoles anteriores habían desalentado) y, en algunas zonas, aparecieran las grandes fincas o haciendas. Caracterizadas por su vasta extensión y el peonaje por deudas, solían convertirse en comunidades rurales casi autónomas, gobernadas por sus dueños o su capataz. Los títulos sobre la tierra eran hereditarios y la mayoría estaban en manos de los criollos. En la América española, la hacienda supuso la vuelta de algunos valores (aunque no de la estructura) de una sociedad feudal clásica. A mediados del siglo XVIII, la corona ya se enfrentaba con una orgullosa nobleza del Nuevo Mundo.

El papel político de los criollos fue menos obvio. A finales del siglo XVII y comienzos del XVIII, ocuparon muchos puestos políticos importantes, en su mayoría de ámbito local o regional, como en los concejos municipales o audiencias. Los cargos más elevados seguían reservados a los peninsulares. Sin embargo, con el declive de España como potencia imperial, las instituciones políticas dejaron de funcionar como hasta entonces.

América portuguesa: ¿un mundo diferente?

La historia de la América portuguesa contrasta con la de la española. Bajo la casa real de Aviz, Portugal había establecido un vasto imperio con puestos de avanzada en India, China, África y algunas islas atlánticas. De hecho, se ha-



La construcción semejante a la de una fortaleza de este monasterio dominico del siglo XVI situado en la zona sur-central de México ilustra a la perfección la alianza existente entre la Iglesia y la corona en la conquista de Nueva España. (Cortesía de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.)

bía convertido en el líder europeo de la exploración por el inteligente uso que hacía de su superioridad técnica en cartografía y navegación. En 1494, el Tratado de Tordesillas entre España y Portugal otorgó a éste la mitad oriental de Suramérica (era difícil que la línea divisoria fuera precisa en un territorio desconocido) y en 1500 Pedro Alvares Cabral, el capitán de navío portugués a quien se debe el «descubrimiento» de Brasil, reclamó ese vasto territorio para su monarca (véase el mapa 2).

Esta incursión en el Nuevo Mundo se diferenció de la española en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, no había una civilización india comparable a la azteca o la inca. Los tupí-guaraníes, el grupo lingüístico más extenso, vivían a lo largo de la costa, desde la actual Venezuela hasta el sur de Brasil y Paraguay, y los tapuias habitaban en el interior. Algunos indios eran caníbales y la mayoría, seminómadas, lo que significó que Brasil hubiera de ser colonizado de forma gradual en lugar de tomarse de golpe. Lo que es más importante, significó que los portugueses, a diferencia de los españoles, no se enfrentaran a una civilización indígena asentada y muy organizada. Estos in-

dios no habían edificado ciudades grandiosas ni contaban con explicaciones míticas para esta repentina intromisión extranjera.

Además, no había indicios de plata u oro y, en consecuencia, no se contaba con un fácil camino a una opulencia fabulosa. La primera actividad económica importante fue la exportación de palo del brasil (de aquí el actual nombre del país), apreciado en Europa por sus cualidades como tinte. Y, con el tiempo, contrastando agudamente con la mayoría de las colonias hispano-americanas, en la economía brasileña colonial predominó la agricultura, en especial el cultivo de la caña de azúcar.

La escasez (comparado con España) de recursos humanos y minerales forzó a la corona portuguesa a valerse de medios inusuales en un intento por persuadir o atraer a sus súbditos para ocupar las posesiones del Nuevo Mundo. En la década de 1530, los reyes comenzaron a hacer concesiones masivas de poder efectivo sobre la tierra (casi en su totalidad por explorar), usualmente a militares con experiencia anterior en India o África o a favoritos personales seleccionados, y en cualquier caso a hombres de «sangre noble». Las donaciones de tierra fueron enormes, ya que alcanzaron unos 234 km a lo largo de la línea costera y llegaron hasta la Línea de Demarcación imaginaria (900 km o más en dirección oeste) que separaba la América española de la portuguesa.

Hasta 1549 la corona no comenzó a establecer una burocracia imperial efectiva, pero su objetivo fue proteger la zona de las intrusiones francesas e inglesas y no, como en el caso de la América española, reconquistar las posesiones de los conquistadores. Por el contrario, fue la falta de presencia portuguesa lo que forzó la actuación de Lisboa.

Debido en parte a que en este primer siglo Brasil recibió menor prioridad que otros dominios portugueses ultramarinos (que eran más rentables), el control monárquico se inició de forma mucho más relajada que en la América española. Incluso cuando la corona portuguesa se endureció a partir de 1549, las instituciones reales se limitaron en general a la costa atlántica, donde se podían cobrar con facilidad los impuestos sobre las exportaciones. En el ámbito local, el poder residía en los terratenientes y los consejos de las ciudades. Hasta la Iglesia era débil en el Brasil del siglo XVI, comparada con México y Perú.

A finales del siglo XVI y comienzos del XVII, los terratenientes desarrollaron una lucrativa industria azucarera en el noreste brasileño. Los portugueses ya antes habían hecho incursiones tecnológicas en la elaboración del azúcar en sus islas atlánticas, tales como las Madeiras, y acabaron por confiar a los holandeses la venta al por menor del producto en Europa. Sin embargo, cultivar azúcar en América requería una mano de obra abundante. Los terratenientes portugueses se dirigieron primero a los indios brasileños, pero, como en México y Perú, pronto cayeron víctimas de las devastadoras enfermedades europeas. Los supervivientes huyeron a menudo hacia el interior. Aunque los portugueses siguieron explotando a los indios hasta bien entrado el siglo XVIII, tuvieron que buscar en otro lugar un abastecimiento de mano de obra satisfactorio.

La fuente obvia era África. A comienzos de 1500, los españoles y portugueses ya tenían medio siglo de experiencia en cuanto al trabajo de los esclavos africanos, tanto en sus países como en las islas atlánticas: las Canarias (España) y Madeiras (Portugal). Pero hasta la década de 1580, los portugueses no consideraron que hubiera un beneficio potencial suficiente para garantizar su importación. A pesar de ello, en 1650 el noreste de Brasil ya se había convertido en la mayor fuente mundial de caña de azúcar, producida en general mediante mano de obra esclava. Sus exportaciones de azúcar se estimaban en 2,5 millones de libras esterlinas, lo que hacía al noreste costero brasileño la región quizás más rica de todas las Américas.

Otras potencias europeas quisieron participar del auge azucarero. Los ingleses y holandeses llevaron una nueva tecnología, que acabó haciendo del Caribe el productor de caña más importante del mundo. Los holandeses invadieron Brasil en 1624 y controlaron el noreste rico en azúcar hasta que una alianza entre los plantadores portugueses, los comerciantes y las tropas de mestizos y mulatos los arrojaron al océano en 1654. Pero los portugueses nunca iban a volver a acercarse al monopolio de la producción azucarera del Nuevo Mundo que habían disfrutado antes.

En las regiones central y sur de Brasil, la economía empezó centrándose en la cría de ganado y, lo que fue más importante, en las incursiones de los esclavos contra los indios (a quienes se embarcaba a menudo hacia el noreste). Como se lamentaba un misionero jesuita, «el verdadero propósito» de esas expediciones «era capturar indios: arrancar de sus venas el oro rojo que siempre ha sido la mina de esa provincia». Efectuadas por los *bandeirantes*, cuya posición legendaria en la historia nacional recuerda una mezcla entre los buscadores de oro californianos y los vaqueros norteamericanos, estas incursiones extendieron el control portugués sobre el interior brasileño. Además llevaron al descubrimiento de la riqueza en minerales que había esquivado a los portugueses durante tanto tiempo. En la década de 1690, se encontró oro en Minas Gerais y la gente afluyó a la zona. Se localizaron diamantes en 1729. La minería alcanzó su cumbre en 1750, con una producción anual de 3,6 millones de libras esterlinas, aunque el bajo nivel tecnológico contribuyó a que declinara a finales de la década de 1700. Esta etapa también produjo un breve auge en la exportación de algodón, pero Brasil habría de esperar hasta el «boom» del café en el siglo XIX para recobrar gran parte de su prosperidad.

La economía colonial de Brasil se había creado para la exportación. Era «la plantación del rey». La estructura social resultante reflejaba la inversión que la corona portuguesa había efectuado. La consecuencia humana más importante fue la honda presencia de los esclavos africanos. Ya en 1810 se habían llevado a Brasil más de dos millones y medio de africanos, cerca de un tercio del tráfico esclavista atlántico de esa era. Los negros eran un importante componente de la sociedad americana portuguesa, en contraste con la mayoría de las zonas de la América española.

Como muestra el cuadro 1.1, los negros sumaban casi la mitad de la po-

CUADRO 1.1. Composición racial de la primera población de América Latina

	<i>América española</i>	<i>América portuguesa</i>		
	1570 (%)	1825 (%)	1570 (%)	1825 (%)
Blancos (definidos legalmente o por convención social)	1,3	18,2	2,4	23,4
Grupo mestizo (mestizos o mulatos)	2,5	28,3	3,5	17,8
Negros	(incluidos con el grupo)	11,9	(incluidos con el grupo)	49,8
Indios	96,3	41,7	94,1	9,1
Total	100,1	100,1	100,0	100,1

nota: Algunas columnas pueden no sumar 100 debido al redondeo de datos.

fuente: Adaptado de Richard M. Morse, «The Heritage of Latin America», en Louis Hartz, ed., *The Founding of New Societies*, Nueva York, Harcourt, Brace & World, 1964, p. 138.

blación brasileña total hacia 1825, en comparación con el 12 por 100 de la América española, y el grupo mestizo, fundamentalmente mulatos, añadía otro 18 por 100. En conjunto, quizás dos tercios de toda la población brasileña de comienzos del siglo XIX tuviera ascendencia total o parcial negra.

Esta sociedad colonial multirracial estaba altamente estratificada, según la escasa investigación efectuada hasta la fecha. Era raro el matrimonio inter-racial, ya que no alcanzaba más de un 10 por 100 del total y, como en la América española, seguía líneas de gradación: los blancos podían casarse con mulatos, pero casi nunca lo hacían con negros. El concubinato y las uniones consensuales eran más frecuentes entre los negros que entre los blancos. Como en la Ciudad de México, en una muestra de comunidades coloniales brasileñas, cerca de un tercio de las unidades familiares tenían al frente a una mujer sola.

Una segunda e importante faceta de la estructura social era la división interna que existía en el estrato dirigente blanco, en particular entre los terratenientes nacidos en Brasil y los comerciantes nacidos en Portugal. Esta diferenciación recordaba el conflicto criollo-peninsular de la América española y podía dirigir un movimiento independentista. Cuando se hizo evidente, los políticos europeos cortaron el proceso de raíz. En cualquier caso, el control más suave ejercido por la corona había generado menos resentimiento entre los colonos que en la mayor parte de la América española.

La integración de la América portuguesa en la economía occidental como zona periférica recordaba la de la América española, pero con algunas diferencias notables: en primer lugar, durante dos siglos Brasil no contó con el oro y la plata que obsesionaron a los españoles en México y Perú; en se-

gundo lugar, la principal contribución de Brasil hasta el siglo XVIII fue la agricultura, no la minería; por último, y quizás lo más importante, Portugal había desarrollado un sistema más simple para asegurarse ingresos de su apreciada colonia («la vaca lechera», como se la conocía en Lisboa). A diferencia de España, Portugal no desplegó una vasta red de burocracia para recaudar impuestos y controlar el mercado interno. Por el contrario, se concentró casi por completo en gravar las exportaciones brasileñas. Como resultado, Brasil ofreció menos potencial que la América española para alimentar una poderosa alianza de intereses coloniales que se rebelara contra la autoridad política de la madre patria.

Las raíces de la independencia

Los movimientos independentistas que llevaron a la creación de la mayoría de las actuales naciones latinoamericanas deben sus orígenes a acontecimientos acaecidos en Europa. No fueron radicales en su mayor parte y ninguno ocasionó cambios cataclísmicos en el orden social. Gran parte del impulso resultó ser conservador y conformó la dirección de las jóvenes repúblicas a comienzos del siglo XIX. Nuestra historia comienza en Europa.

Los Borbones españoles, cuya familia había accedido a la corona en 1713, habían tratado de contrarrestar el declive de España, tanto en Europa como en América. Con la esperanza de apuntalar las defensas del Nuevo Mundo contra las potencias europeas rivales, a la vez que aumentar los ingresos de la corona, impusieron reformas administrativas y políticas de largo alcance. Una consistió en crear nuevos virreinatos: uno en Nueva Granada (primero en 1717 y de nuevo en 1739) y otro en Buenos Aires (1776).

Además, Carlos III (1759-1788) reemplazó el complejo aparato administrativo de los Habsburgo por el sistema de intendencias. En la práctica, supuso el reemplazo de los odiados corregidores de la América española por los intendentes, gobernadores locales directamente responsables ante la corona, no ante el virrey. Casi todos ellos eran peninsulares en lugar de criollos americanos, probablemente para asegurarse la lealtad al monarca. Los intendentes estrecharon mucho el control de la corona sobre el gobierno, pero también entraron en colisión con los prósperos criollos, muchos de los cuales se habían beneficiado de una administración relajada.

Este giro puede verse en la administración de los tribunales locales. Como los Habsburgo de finales del siglo XVII necesitaban fondos de forma desesperada, pusieron a la venta los cargos de los tribunales, como ya antes había hecho Felipe II. Quienes los compraron eran criollos y, en 1750, de 93 jueces, 51 eran nacidos en América. Los monarcas borbones cambiaron la tendencia y en 1807 ya sólo 12 de los 99 jueces eran criollos. Finalmente, los criollos decidirían buscar en otro lugar puestos de autoridad y prestigio.

Uno de los lugares donde los buscaron fue en los concejos municipales o cabildos, que funcionaban a duras penas a comienzos del siglo XVIII. No siem-

pre hallaban compradores ávidos los cargos del cabildo. Sin embargo, con la llegada de los intendentes, un sistema tributario más eficiente les proporcionó un aumento de ingresos y la reafirmación de su función. De este modo, los cabildos se convirtieron en la base institucional de la autoridad criolla.

Carlos III también trató de aumentar el poder real estrechando su autoridad sobre la Iglesia. El paso más trascendental fue la expulsión de la orden jesuita de toda la América española en 1767, a la que consideraba un estado dentro del estado, una fuente de poder y riqueza rival. Sus mejores propiedades se subastaron y lo recaudado, por supuesto, fue a la corona.

Los militares eran otra fuente de poder. Para guardarse de amenazas y aplastar cualquier posible rebelión, el rey decretó el establecimiento de milicias coloniales, una excelente fuente de prestigio para los criollos hambrientos de posición. Pero también alteró el equilibrio militar. Por ejemplo, en 1800 sólo había 6.000 miembros del ejército regular español en el virreinato de Nueva España, en comparación con los 23.000 miembros nacidos en América de la milicia colonial. Fue el cimiento del ejército patriota que después lucharía por la independencia.

Los Borbones deseaban de forma especial promover el desarrollo económico colonial para fortalecer su posición en Europa. En 1778, Carlos III promulgó un decreto de libre comercio, que significó que los 24 puertos de la América española podrían comerciar desde entonces directamente con cualquier puerto español o entre sí (pero *no* con un puerto que no perteneciera al reino español). El comercio ya no estaría restringido a los cuatro puertos coloniales (Veracruz, Cartagena, Lima/Callao y Panamá) o sujeto al monopolio de Cádiz. De inmediato, Buenos Aires comenzó a beneficiarse de la medida. De hecho, el comercio de contrabando había florecido durante mucho tiempo en esas rutas anteriormente prohibidas. Pero la corona aumentó sus ingresos de aduanas, ya que ahora cobraba impuestos a los bienes que antes pasaban de contrabando.

Por esta razón en parte, la economía colonial floreció bajo los Borbones. El puerto de Buenos Aires, un pueblo pequeño y sin lustre en 1776, se había convertido en una ciudad de 50.000 habitantes en 1800. En la década de 1790, México acuñaba tres veces más plata y oro que lo había hecho en la década de 1740. El comercio prosperaba al terminar el siglo.

La política borbónica parecía ser un éxito. La administración se hizo más eficiente, mejoraron las defensas, se intensificó el comercio y aumentaron los ingresos del gobierno. Pero había malestar entre los criollos por muchos de estos cambios, que amenazaban (y a menudo lo conseguían) con reducir su posición e influencia. Fue este reto a su posición, más que la influencia del pensamiento ilustrado o el ejemplo de las colonias inglesas de Norteamérica, lo que acabó impulsando a los dominios hispanoamericanos a optar por la independencia.

Sin duda, había existido una resistencia colonial. En 1780, Túpac Amaru II, sosteniendo que era el descendiente directo de los incas, encabezó una revuelta indígena con un ejército cercano a los 80.000 hombres. Se tardaron

dos años de lucha brutal en sofocar las insurrecciones que barrieron el sur de Perú y Bolivia. En 1781, los ciudadanos de Socorro, en Nueva Granada, protestaron de forma violenta contra la subida de impuestos y el disturbio se extendió por gran parte del virreinato. Aunque los patrióticos historiadores latinoamericanos suelen describir estos sucesos como «precursores» de los movimientos de independencia encabezados por los criollos del siglo XIX, no fue este el caso. En lo que respecta a Túpac Amaru II, algunos rasgos de su insurrección apuntan hacia la independencia, pero en términos de liderazgo indígena, que nunca habrían obtenido un apoyo criollo sólido. En la rebelión de 1781 en Nueva Granada, los que protestaron no buscaban la independencia de la corona española; protestaron dentro del sistema, no contra él.

Entonces, ¿cómo llegó la independencia? Una vez más, el destino de América Latina lo determinó la política dinástica en el Viejo Mundo. Tras haber tratado de ayudar a los Borbones franceses a salvar su corona sin conseguirlo, España se alió con el régimen revolucionario francés en 1796, pacto que llevó de forma directa a la aniquilación de la armada española en la batalla de Trafalgar (1805). Mientras tanto, Napoleón Bonaparte, ahora dictador de Francia, en 1807 ocupó Portugal, aliado de Inglaterra desde hacía tiempo. Napoleón alcanzó las colinas de Lisboa justo cuando la armada real inglesa se llevaba a Brasil a la casa real de Braganza y a su corte. Luego volvió a España. En 1808 ocupó Madrid, instalando a su hermano, José, en el trono español. Este acto fue el que impulsó a los colonos a la revuelta.

En España hubo resistencia a José cuando los partidarios de Fernando VII se unieron a la causa. Se estableció una junta en Sevilla para gobernar en nombre del rey Fernando. En 1810 la siguió un parlamento, o cortes, dominado por los liberales que se habían desplazado al vacío creado por la ausencia del monarca. En 1812 proclamaron una nueva constitución, que afirmó la autoridad del parlamento, abolió la Inquisición y restringió el papel del rey.

La respuesta colonial

Cuando Napoleón colocó a su hermano en el trono español, los criollos lo rechazaron como impostor, como habían hecho la mayoría de españoles. Como España ya no tenía gobierno, sostenían los colonos, la soberanía revertía al pueblo. ¿Podía esta lógica extenderse como argumento para la independencia?

No obstante, no hubo nada ineludible en la sucesión de acontecimientos que sorprendieron a la América española. Ni la Ilustración europea ni el ejemplo de la Revolución americana por sí solos habrían fomentado las rebeliones. Sin la intervención de Napoleón, las colonias hispanoamericanas quizás hubieran seguido siéndolo hasta bien entrado el siglo XIX, como fue el caso de Cuba.

Uno de los focos de resistencia contra Napoleón fue Buenos Aires, asiento del virreinato más reciente, cuyo cabildo ya había adquirido una notable

autoridad. En 1806, un escuadrón inglés ocupó la ciudad y puso en fuga al virrey hacia la ciudad interior de Córdoba. Un ejército de ciudadanos expulsó a los ingleses y en 1807 los echó con cajas destempladas cuando atacaron por segunda vez. Así que fueron los criollos, no las autoridades virreinales, quienes lograron defender a Buenos Aires de la invasión, lo que demostró a la vez la debilidad de la corona y la capacidad de la ciudadanía.

Otro asunto pendiente en la región de Río de la Plata era el comercio libre. El decreto de 1778 lo había abierto de forma parcial para Buenos Aires, que ahora podía embarcar bienes rumbo a España directamente, en lugar de hacerlo a través de la larga y tortuosa ruta por vía terrestre hasta Panamá y después por el Atlántico. Pero era Inglaterra, y no España, la que ofrecía el más prometedor mercado para las pieles y la carne en salazón. Así pues, floreció un comercio de contrabando y el deseo argentino de un comercio abierto con otros países europeos se intensificó.

En 1809, después de que Napoleón hubiera desalojado a Fernando VII, un joven abogado llamado Mariano Moreno pidió que se hiciera el experimento durante dos años de liberar totalmente el comercio. Sostenía que tal paso fortalecería las lealtades a la corona española y proporcionaría un aumento de beneficios, ya que podían gravarse impuestos sobre el comercio legal pero no sobre el tráfico de contrabando. Ese mismo año más tarde, el virrey concedió a Buenos Aires una libertad de comercio limitada con las naciones aliadas de España o neutrales en las guerras napoleónicas. Una vez más, la élite de Buenos Aires paladeó el éxito político.

Cuando las fuerzas napoleónicas pusieron sitio a los centros de resistencia borbónicos españoles en 1810, los ciudadanos influyentes se reunieron y decidieron crear una «junta provisional de las Provincias del Río de la Plata, que gobernaría en nombre de Fernando VII». Aunque hasta 1816 el congreso no declararía formalmente la independencia, se había establecido la pauta.

En 1810 surgió en Caracas un movimiento similar, cuando el cabildo municipal depuso al capitán general español y organizó una junta para gobernar en nombre de Fernando VII. Al igual que en Buenos Aires, el grupo insidente estaba formado fundamentalmente por criollos acaudalados. Sus dirigentes tenían puntos de vista más firmes. El más famoso, Simón Bolívar, quería la independencia de América desde el comienzo.

Nacido en el seno de una acaudalada familia criolla de Caracas en 1783, Bolívar se quedó huérfano a los nueve años. Le enviaron a España a completar su educación y regresó a su ciudad después de tres años con una joven esposa española, que a los pocos meses murió de fiebre amarilla. Bolívar quedó deshecho y nunca se volvió a casar. (Sin embargo, no se privó de compañía femenina.) Con su personalidad magnética, encantadora y persuasiva, inspiraba lealtad y confianza entre sus seguidores. Conocedor de las ideas de la Ilustración, juró en 1805 librarse a su tierra natal del dominio español. En julio de 1811, el congreso reunido para gobernar Venezuela respondió a sus expectativas declarando la independencia.

Pero la regencia pro fernandina de Sevilla resultó ser más flexible de lo

que se hubiera esperado y envió tropas para aplastar esta rebelión advenediza. Junto con los negros y luego los llaneros de los llanos venezolanos del interior, las fuerzas españolas vencieron a las tropas coloniales a las órdenes de Francisco de Miranda. El mismo Bolívar tuvo que escapar a Nueva Granada, pero regresó en 1813 a Venezuela y obtuvo una serie de asombrosas victorias militares, triunfos que le valieron el título de «el Libertador».

Pero de nuevo se inmiscuyeron los acontecimientos europeos. En 1814, Fernando VII volvió al trono español, anuló la constitución liberal de 1812 y se restauró como monarca absoluto. Muchos criollos llegaron a la conclusión de que, como el rey había vuelto, no había razón para continuar su movilización.

Entonces Bolívar vio mermados sus hombres y municiones. Tras una serie de derrotas, no le quedó más opción que huir otra vez a Nueva Granada y luego a la isla inglesa de Jamaica. Esperaba que América española se convirtiera en una sola nación, pero sabía que había pocas probabilidades. Estaba mucho más influido por los fracasos recientes para establecer un gobierno republicano en Venezuela. La 'democracia republicana «es más que perfecta y demanda virtudes y talentos políticos muy superiores a los nuestros. Por la misma razón, rechazo una monarquía que es en parte aristocracia y en parte democracia, aunque con tal gobierno Inglaterra haya logrado mucha fortuna y esplendor». Así que Bolívar concluía: «No adoptemos el mejor sistema de gobierno, sino el que tenga más posibilidades de éxito».

En Nueva España, los acontecimientos tomaron un curso diferente. En un golpe preventivo contra los patriotas criollos, los peninsulares expulsaron al virrey José de Iturrigaray en 1808 y de inmediato reconocieron la regencia de Sevilla. La Ciudad de México estuvo en firmes manos leales hasta 1821.

Las provincias de Nueva España, en particular las situadas al norte de la capital, fueron otra historia. Ya en 1810 un grupo de criollos prominentes, incluido un cura llamado Miguel Hidalgo y Costilla, planeaban hacerse con la autoridad en nombre de Fernando. Cuando se descubrió el complot, Hidalgo decidió actuar. El 16 de septiembre de 1810, en el pueblecito de Dolores, lanzó un apasionado llamamiento a las armas. Y, curiosamente, no fueron los notables locales quienes se le unieron, sino los sufridos mestizos e indios. Se congregaron alrededor del estandarte de la Virgen de Guadalupe, a la que desde hacía tiempo consideraban suya. Esta «plebe colorista» formaba ahora una ejército masivo, irritado e indisciplinado, «una horda» a los ojos de la asombrada élite criolla.

Los hombres de Hidalgo tomaron por asalto la ciudad de Guanajuato, donde mataron a 500 soldados y civiles españoles, incluido el intendente, en la toma de la alhóndiga municipal. Tras saquear libremente, se encaminaron hacia Ciudad de México. Hidalgo luchaba por mantener el control.

En el mes de noviembre de 1810, se encontraba a las afueras de Ciudad de México con unos 50.000 hombres en armas. En una decisión que ha suscitado debate y especulación desde entonces, se retiró. Sin duda hubiera tomado la capital. ¿Por qué no lo hizo? ¿Tenía miedo de sus propios seguidos-

res? En lugar de ello, se dirigió hacia el norte. Después de una derrota cerca de Guadalajara a comienzos de 1811, fue a Coahuila, donde fue capturado y a continuación fusilado en Chihuahua.

Entonces el caudillaje de la maltrecha insurgencia pasó a José María Morelos, otro sacerdote. Como Hidalgo, apoyaba la abolición del tributo indígena y de la esclavitud e incluso propuso la reforma agraria. La última era un tema explosivo entre la élite colonial. También insistía en que los ciudadanos tenían derecho a elegir su propia forma de gobierno. Por último, Morelos imaginaba un nuevo gobierno, mediante el cual todos los habitantes, excepto los peninsulares, ya no serían designados indios, mulatos o mestizos, sino que todos serían conocidos como americanos. De este modo, combinaba el nacionalismo con un compromiso por la igualdad social y racial.

En 1813, el Congreso de Chilpancingo declaró la independencia de México (aunque es el 16 de septiembre, aniversario del «Grito de Dolores» por Hidalgo, cuando se celebra el día de la independencia). El congreso también decretó la abolición de la esclavitud y declaró el catolicismo la religión oficial. La constitución adoptada el año siguiente afirmó el ideal de la soberanía popular, creó un sistema de elecciones indirectas y diseñó un legislativo poderoso junto a un ejecutivo débil de tres personas.

Mientras tanto, los españoles iban consiguiendo victorias militares. Uno de los mandos españoles era el joven Agustín de Iturbide, que más tarde desempeñaría un importante papel en la independencia mexicana. En 1815, Morelos fue capturado, juzgado (por la Inquisición, así como por las autoridades seculares) y ejecutado. Otros continuaron luchando por la causa, pero ahora los españoles llevaban la voz cantante.

Así terminó la primera fase de los movimientos de independencia hispanoamericanos. Los novohispanos Hidalgo y Morelos habían muerto. Bolívar languidecía en su exilio jamaicano. La Junta del Río de la Plata luchaba por mantener la unidad y aún no había reclamado la independencia. En 1815, con Fernando de nuevo en el trono, parecía que la corona española había extinguido su rebelión colonial.

La consecución de la independencia

La ventaja militar española en Suramérica no iba a durar mucho. En 1816 Bolívar regresó a Venezuela y comenzó a emular sus victorias anteriores, pero ahora tenía como aliado a José Antonio Páez, brillante dirigente de los arrojados llaneros que antes habían peleado del lado de los realistas. Ahora Páez luchaba por la independencia de España. La causa de Bolívar se vio además afianzada por la llegada de refuerzos de Inglaterra, que en 1819 alcanzaron más de 4.000 personas. Con este fortalecimiento, Bolívar estableció un firme control sobre Venezuela a comienzos de 1819.

Tras derrotar a las fuerzas españolas en Nueva Granada, intentó crear en 1821 un nuevo estado de Gran Colombia, uniendo Venezuela, Nueva Grana-

da y Ecuador. Obtuvo escaso apoyo, por lo que se dirigió hacia el sur, a la caza de más realistas y españoles que derrotar.

Mientras tanto, José de San Martín dirigía una extraordinaria campaña militar en el sur. Hijo de un oficial español y nacido en la frontera norte de la actual Argentina, comenzó la carrera militar a los once años. En 1812 ofreció sus servicios a la junta de Buenos Aires, al haberse decidido en favor de la independencia para las colonias. Soldado por su entrenamiento e ideales, no tenía la perspicacia política de Bolívar ni el compromiso social de Morelos, pero era un competente estratega militar.

Como jefe de las fuerzas rebeldes, en 1817 San Martín ya se encontraba dispuesto para emprender una de las más osadas hazañas de esa etapa: encabezar un ejército de 5.000 soldados cruzando los Andes para atacar por sorpresa a las tropas realistas en Chile. Halló a los españoles desprevenidos por completo, obtuvo una importante victoria en la batalla de Chacabuco y entró triunfalmente en la ciudad de Santiago. Ahora se preparó para el próximo paso de su campaña, la liberación de Perú.

En 1820 alcanzó la costa peruana. Lima era aún más monárquica que Ciudad de México. Como capital de un importante virreinato, había recibido numerosos favores y privilegios de la corona. Aunque la elevación de Buenos Aires a virreinado en la era borbónica había dañado su economía, su sentimiento monárquico seguía fuerte. Criollos y peninsulares tendían a ser favorables a la continuación del gobierno de Fernando VII. San Martín se abstuvo de atacar, señalando: «No busco la gloria militar, ni ambiciono el título de conquistador del Perú: sólo deseo liberarlo de la opresión. ¿Qué bien me haría Lima si sus habitantes fueran políticamente hostiles?».

También aquí un cambio radical ocurrido en España catalizó los acontecimientos. Cuando Fernando VII sucumbió ante la presión política y sancionó de improviso la constitución de 1812, el cambio político pasmó a sus partidarios limeños. Les afligió en especial la abolición de la Inquisición y el desafío a la dignidad de los sacerdotes. Muchos podían aceptar limitaciones a la autoridad monárquica, pero no al papel y poder de la Iglesia.

Este cambio de acontecimientos en España alteró de forma drástica el clima de opinión en Ciudad de México y en Lima. La independencia no era ya una causa radical o incluso liberal. Ahora era un objetivo *conservador*, un medio de preservar los valores tradicionales y los códigos sociales. Como si reconociera este hecho, el cabildo de Lima invitó a San Martín a entrar en la ciudad a mediados de 1821. El 28 de julio, proclamó formalmente la independencia de Perú.

Tras algunas escaramuzas más con las tropas realistas, San Martín partió hacia Ecuador para mantener un encuentro histórico con Simón Bolívar. Nunca se ha establecido con exactitud lo que allí pasó. Quizás Bolívar marcara el tono cuando ofreció un brindis por los dos hombres más grandes de América, el general San Martín y él mismo. Parece que Bolívar rechazó la propuesta de San Martín para establecer una monarquía en Perú, insistió en la unión de la Gran Colombia y declinó su oferta de servir bajo su mando.

En cualquier caso, luego San Martín licenció a todos sus oficiales y partió para Europa, donde murió en 1850.

— A finales de 1823, Bolívar se trasladó a Perú, donde los españoles seguían manteniendo una fuerza importante. En 1824, los realistas fueron vencidos por las tropas coloniales en la decisiva batalla de Ayacucho. En 1825 Bolívar entró en el Alto Perú (actual Bolivia) con la esperanza de que formara con Perú una sola nación, pero era demasiado tarde. Los dirigentes del Alto Perú habían determinado crear su propia república, lo que hicieron de inmediato, poniéndole el nombre por Bolívar, al que nombraron presidente vitalicio.

Después de regresar a Lima, Bolívar insistió sobre la Gran Colombia, con la ilusión de remendar la unión fallida. Por entonces se había vuelto agrio y vengativo porque sus sueños no se habían hecho realidad. En 1830 Venezuela y Ecuador abandonaron Gran Colombia. Bolívar padecía tuberculosis y miraba el pasado con desesperación. «La América —decía— es in gobernable para nosotros. El que sirve una revolución ara en el mar». El 17 de diciembre, a los cuarenta y siete años, el Libertador murió de tuberculosis.

En México, la derrota de Morelos en 1815 había parado el movimiento de independencia, hasta que Fernando VII declaró su sometimiento a la constitución de 1812, lo que empujó a los criollos prósperos y prominentes del lado de la independencia. Encabezó la causa el mismo Agustín de Iturbide, que había dirigido a los realistas contra Morelos. Irónicamente, el movimiento de independencia adquirió un tinte conservador.

El oportunista Iturbide persuadió al gobernador para que le otorgara el mando de las fuerzas realistas en el sur. Luego marchó contra un cabecilla rebelde con el que de inmediato estableció una alianza en aras de la independencia. En 1821 emitió un llamamiento con tres «garantías»: la religión (la religión católica sería el credo oficial), la independencia (presumiblemente bajo una monarquía) y la unión (trato justo para criollos y peninsulares). Iturbide tomó Ciudad de México y estableció un imperio, con él mismo, por supuesto, como emperador. Duró sólo dos años.

En Centroamérica, a la clase criolla terrateniente le preocupó tanto el dominio liberal en España como a sus iguales mexicanos. En 1822 los latifundistas centroamericanos decidieron compartir la suerte del imperio de Iturbide y anunciaron su anexión al México realista. Cuando Iturbide abdicó en 1823, los estados de la actual Centroamérica, de Guatemala a Costa Rica (excluido Panamá), se convirtieron en las Provincias Unidas de América Central independientes.

El camino brasileño hacia la independencia

La independencia llegó a Brasil de un modo muy diferente al de la América española, debido en parte al hecho de que ya en 1800 era más populoso y próspero que la diminuta madre patria. Por el contrario, ningún territorio colonial español por separado igualaba a la metrópoli en poder económico o político. Cuando los habitantes de las colonias proclamaron la independencia, España se resistió con tenacidad y consiguió que la América española odiara a la corona. Por su parte, los portugueses ni siquiera tenían la potencia militar suficiente para evitar que los brasileños se encaminaran hacia la autonomía política.

El contexto de la independencia brasileña señala otra diferencia importante. Cuando el ejército napoleónico invadió la Península Ibérica en noviembre de 1807, toda la corte portuguesa pudo huir a Brasil gracias a la armada real inglesa.

Cuando llegó a comienzos de 1808, la corte portuguesa encontró una colonia que carecía de imprenta, de universidades y de comercio, salvo con la madre patria. El recién llegado príncipe regente, después Dom João VI, decretó de inmediato el fin del monopolio comercial portugués, abriendo los puertos brasileños. Su lógica era obvia. Ya que ahora Napoleón controlaba Portugal, el monarca portugués exiliado sólo podía continuar aprovechando el comercio exterior de Brasil si se rompía el vínculo exclusivo con Lisboa. Los principales beneficiarios fueron los ingleses, que, después de todo, habían llevado a la familia Braganza y su séquito a Brasil.

Gran Bretaña obtuvo un acceso privilegiado a Brasil en 1810 mediante acuerdos oficiales que duraron 15 años y que: 1) le concedieron el arancel más bajo (incluso más bajo que a Portugal) sobre los bienes que entraran en Brasil; 2) comprometían a la corona portuguesa a la abolición gradual del tráfico de esclavos africanos; y 3) garantizaba a los ingleses de Brasil el derecho a ser juzgados por jueces nombrados por Gran Bretaña. Estos tratados originaron pronto un profundo resentimiento entre la élite brasileña.

El monarca portugués exiliado emprendió entonces la creación de nuevas instituciones, tales como una biblioteca nacional, un museo nacional y un jardín botánico, todo ello en Río de Janeiro. Se solicitó una misión artística francesa para acelerar la profesionalización de la arquitectura, la pintura y la escultura.

La corona también quiso atraer inmigrantes extranjeros, pero tuvo poco éxito y la inmigración europea a gran escala no comenzó hasta finales de la década de 1880. Hubo un impulso para promover la manufactura textil, que incluyó la revocación del decreto real de 1785 que prohibía toda industria. Pero tales medidas no podían llegar a las causas más profundas del atraso económico brasileño: falta de capital, tecnología, mano de obra cualificada y un mercado interno significativo.

A finales de 1808 las tropas francesas fueron expulsadas de Portugal y se convocó una asamblea (*Cortes Gerais*) para que redactara una nueva consti-

tución. Los liberales portugueses victoriosos, interesados en explotar la riqueza brasileña, presionaron por el retorno de la corte real a Portugal. Dom João pronto regresó a Lisboa, dejando a su hijo Dom Pedro en Brasil como príncipe regente de los Reinos Conjuntos.

Ahora la atención se centró en las *Cortes Gerais*, que aprobaron medidas que habrían restaurado el monopolio comercial de Lisboa sobre Brasil mediante la imposición de aranceles más bajos para las importaciones que llegaran en navíos portugueses o que se embarcaran desde Portugal. Las cortes también aprobaron medidas que devolvían a cada una de las provincias brasileñas al gobierno directo y separado de Lisboa, con lo que minaban el gobierno central creado en Río de Janeiro desde 1808. Aunque los liberales portugueses lo fueran mucho en Portugal, aborrecían el movimiento hacia la autonomía de su «reino conjunto» americano.

Los terratenientes y profesionales urbanos que constituyan la élite brasileña se habían estado preparando para enfrentarse a los nuevos colonizadores portugueses. Su apasionada retórica anegaba la bisoña prensa de Río. Querían que el príncipe regente Dom Pedro se negara a regresar a Lisboa. En junio de 1822, Dom Pedro ya había decidido convocar una Asamblea Constituyente en Brasil. Entonces las cortes de Lisboa pidieron su regreso inmediato y tomaron medidas para contrarrestar la creciente autonomía brasileña. Pero las presiones de los plantadores sobre Dom Pedro surtieron efecto: el 9 de enero de 1822, desafió las órdenes de las cortes. «¡Me quedaré!», gritó, dando nacimiento a la única monarquía duradera e independiente de la historia moderna de América Latina.

Para conseguir su independencia, los brasileños tuvieron que luchar, pero no en la misma escala que los hispanoamericanos. Los combates más salvajes se entablaron en Bahía, en la costa noreste, y en Grão Pará, en el valle amazónico oriental. En Bahía, una junta proclamó lealtad a Portugal y rechazó a los rebeldes independentistas. En 1823 los rebeldes triunfaron, ayudados por el almirante Cochrane, uno de los militares ingleses contratados para proporcionar a los gobiernos rebeldes ayuda experta en el combate. Otro mercenario, el almirante Grenfell, comandó la victoria sobre una junta leal similar en Grão Pará. Luego sus fuerzas barrieron una facción rebelde que demandaba un cambio social más radical. En Brasil, como en México, la élite estaba alerta para reprimir cualquier desafío importante al orden socioeconómico establecido.

La debilidad militar de Portugal explica en parte por qué la lucha de Brasil por su independencia resultó bastante menos sangrienta que la hispanoamericana. La misma importancia tiene el hecho de que los rebeldes brasileños no se dividieran ante el republicanismo ya que, con algunas excepciones, la élite prefería una monarquía a una república y, gracias al exilio de la corte, pudieron optar por una monarquía independiente. De este modo, Brasil entró en la independencia con un legado único. No resulta menos importante que los brasileños no asociaran la independencia con la hazaña militar: no surgió un Simón Bolívar o un San Martín brasileño que dominara la imaginación patriótica.

Las secuelas de la independencia, 1830-1850

En la década de 1820, las nuevas repúblicas hispanoamericanas se enfrentaron con enormes problemas mientras se embarcaban en la independencia. La violencia física de las guerras causó el desastre económico. La destrucción quizás alcanzó su cota más alta en Venezuela, donde la guerra a muerte causó muchas bajas humanas y redujo el ganado en más de la mitad entre 1810 y 1830. Las primeras fases de la guerra mexicana, en particular durante las campañas de Hidalgo y Morelos, ocasionaron pérdidas similares de personas y propiedades. Uruguay, donde José Artigas comandó bandas de rebeldes gauchos contra las tropas españolas bien pertrechadas, también sufrió graves pérdidas. Durante la segunda fase del movimiento, el escenario de operaciones cambió a otras regiones, en especial a Perú, donde la lucha parece haber sido menos intensa que antes, pero la carga de apoyar grandes ejércitos nunca era leve. La fuerza de trabajo civil estaba diezmada y escaseaba el capital por todo el continente.

Las economías de las nuevas naciones se basaban de forma aplastante en la agricultura y la minería, a semejanza de la mayor parte del mundo, con la excepción del occidente europeo. Sin embargo, América Latina difería de la mayor parte de África, el Oriente Próximo y Asia en que durante los dos siglos y medio pasados se la había introducido parcialmente en la economía de mercado mundial dominada por Europa. El excedente exportable de la producción agrícola y minera latinoamericana era lo que la vinculaba con la economía del Atlántico Norte. Con la creación de países separados, esta estructura económica básica permaneció intacta casi en todos ellos, parairse modificando con lentitud en las décadas siguientes.

Los intercambios habían cesado casi por completo entre 1810 y 1826. El comercio con España se había detenido y el existente entre las antiguas colonias también se había reducido mucho. El noroeste de Argentina, por ejemplo, se resentía de la pérdida de intercambio con Perú. Montevideo, aún bajo control español, ya no podía hacer de centro comercial. La guerra de guerrillas en Nueva España y otras zonas hacía difícil y peligroso el transporte. Los sistemas de comunicación internos y de las antiguas colonias entre sí, nunca muy favorecidos por los españoles, cayeron en una falta de uso casi total.

También estaba el factor del conflicto regional postindependentista dentro de las zonas principales de la América española y portuguesa. México estaba arruinado por batallas que mantuvieron al país dividido y sin una dirección nacional efectiva hasta 1850. Al mismo tiempo, Brasil se derrumbaba en una serie de revueltas regionales que dejaron a la monarquía neutralizada hasta la década de 1840. Y en la región del Río de la Plata, la fiera rivalidad entre la provincia de Buenos Aires y el resto del país fue temporalmente resuelta sólo por la dictadura de Juan Manuel Rosas (1829-1852). En todas partes se trataba de afirmar la autonomía económica por localidad o región, lo

que significaba fragmentación. En la América española, supuso que se enterrara el sueño de Bolívar bajo el avance del nacionalismo. Una tras otra, las nuevas repúblicas reclamaron independencia económica. Pronto encontrarián en el mercado mundial una seria prueba.

En muchas partes de la América española, los nuevos gobiernos tuvieron que tratar con deudas públicas antes de que pudieran intentar reconstruir sus economías. Para sostener la lucha y equipar los ejércitos, muchas veces los regímenes insurgentes tuvieron que hacerse con fondos o pedirlos prestados. La recaudación de impuestos, por decirlo suavemente, era difícil. Como resultado, las tesorerías nacionales estaban vacías y las autoridades gubernamentales habían de buscar fondos en otro sitio. Una importante fuente fue Gran Bretaña, donde los banqueros apoyaron los regímenes con préstamos, en particular a Argentina, Chile, Perú y México. Así, los nuevos gobiernos elevaron de inmediato sus deudas con prestamistas extranjeros. La administración de la deuda externa sigue siendo, hasta nuestros días, un importante problema para los gobiernos latinoamericanos.

Otro ámbito en el que se invirtió capital extranjero fue el tráfico de esclavos africanos, que continuó en gran escala hacia Brasil (hasta 1850) y Cuba (hasta 1865). Ambos tenían una agricultura orientada a la exportación que hacía rentable esta mano de obra en una época en que se estaba aboliendo en el hemisferio occidental.

Durante los años 1830 a 1850 se contempló un aumento de las exportaciones latinoamericanas hacia la economía del Atlántico Norte. Los productos clave primarios eran el trigo y los nitratos de Chile, el tabaco de Colombia, los cueros, la carne en salazón y la lana de Argentina, el guano de Perú, el azúcar de Cuba, el café de Brasil y el cacao de Venezuela. Estos mismos países eran grandes importadores de textiles y consumidores de bienes, con lo que a menudo dejaban sin trabajo a los artesanos nacionales. Eran los productores industriales de Europa Occidental (en especial de Gran Bretaña) compitiendo con los productores a pequeña escala latinoamericanos que habían sobrevivido de la etapa colonial. El resultado era inevitable.

Todo esto formaba parte del libre comercio, el dogma que había llegado a América Latina con la filosofía de la Ilustración y el compromiso postindependiente con los principios del liberalismo. La aplicación de este dogma fue la decisión de política económica más significativa que se tomó en el siglo XIX latinoamericano. Junto con el rápido flujo de importaciones extranjeras (principalmente europeas), llegó un pequeño contingente de comerciantes extranjeros, casi todos británicos. Se convirtieron, a lo largo de todo el continente, en figuras clave para la importación de bienes y servicios, que incluían el embarque, el seguro y la financiación.

¿Debe sorprender que los bienes manufacturados de procedencia europea desplazaran sin interrupción a los productos internos? ¿No era inevitable que prevalecieran la mayor tecnología europea y las economías de escala? Los costes de transporte debían haber ayudado a proteger a los productores locales, pero la supuesta (o genuina) superioridad de los bienes externos

planteó un serio dilema poco después de la independencia, que ha continuado hasta nuestros días. Las economías latinoamericanas solieron fracasar al intentar hacer su industria verdaderamente competitiva, ¿Por qué? Sin duda, la falta de un mercado suficiente fue un factor, pero igual de importante fueron el sistema de valores y la jerarquía social que hizo posible a la élite perpetuar una sociedad basada en una economía orientada a la agricultura.

Así pues, el periodo de 1830 a 1850 se caracterizó, en cuanto a la economía, por una lenta adaptación a la mundial. América Latina estaba en los márgenes de la economía del Atlántico Norte, que se iba a expandir con rapidez en el siglo XIX. Los datos y la investigación sobre la historia económica de esta etapa son escasos, pero parece, por las pruebas disponibles, que las repúblicas latinoamericanas adoptaron una posición pasiva. El dinamismo llegó del exterior.

La creación y mantenimiento de grandes ejércitos en la mayoría de estas repúblicas también afectó de forma crucial el orden social, porque crearon un canal para hacer carrera basado en el talento. A medida que se intensificaba la lucha y aumentaba lo puesto en juego, los dirigentes rebeldes criollos hubieron de reclutar soldados y mandos por su habilidad y no por su color de piel o posición social. Así, José Antonio Páez, un mestizo poco desbastado, se convirtió en un valioso dirigente militar de Venezuela. En México, José María Morelos era mestizo. Los ejemplos abundan. La valentía militar se convirtió en un medio por el cual los miembros de grupos marginales podían obtener el reconocimiento social. Ninguno de los gobiernos independientes mantuvo restricciones legales para los mestizos u otras mezclas de sangre, hecho que ayudó a borrar las antiguas y rígidas líneas sociales.

Pero si la guerra abrió una brecha social para los ambiciosos mestizos y otros, la movilidad resultó limitada. Los recursos económicos, en particular la tierra, seguían en manos de las familias criollas tradicionales. El comercio era modesto en los años posteriores a la lucha y muchas familias de comerciantes retuvieron su control sobre éste. La industria apenas existía. Como resultado, sólo había un medio de salir adelante para los hombres de origen modesto: a través del ejército y de allí pasar a la política.

Esta dinámica social ayuda a explicar gran parte de la turbulencia política hispanoamericana entre la década de 1820 y 1850. Las nuevas repúblicas terminaron las guerras con grandes formaciones militares, a menudo comandadas por mestizos que no tenían carrera alternativa. Para salir adelante debían permanecer en el ejército o pasar al gobierno. En ese tiempo, los terratenientes criollos, en muchas partes del continente, no compitieron por el poder político. Se retiraron a sus haciendas, que podían funcionar como unidades autosuficientes, y trataron de incrementar sus posesiones. En la práctica dejaron el gobierno a los soldados y a los caudillos, quizás porque el poder político no parecía merecer la pena. Avanzado el siglo XIX, cuando la autoridad gubernativa se convirtió en un bien apreciado, los hacendados y estancieros vinieron de sus tierras y se apoderaron de él.

Así que los gobiernos eran derribados y dirigidos por los caudillos, a me-

nudo soldados (o ex soldados) que tomaban el poder por la fuerza. Una vez en el cargo presidencial, solían percatarse de que las precarias tesorerías ofrecían una pequeña recompensa a sus seguidores. Entonces las bandas se dispersaban y llegaban nuevos caudillos con nuevas bandas de seguidores. Los gobiernos no tenían unas finanzas fuertes y, como consecuencia, eran muy vulnerables a ser derrocados. Desde la década de 1820 hasta mediados de siglo, la autoridad política en la América española fue débil; el Estado, como institución central, no ejercía mucho poder autónomo.

Durante este periodo, surgió otra corriente, un movimiento para consolidar y centralizar el poder, habitualmente con intentos dictatoriales más que con el consenso popular. Así, las primeras dos décadas que siguieron a la independencia contemplaron la aparición de «hombres fuertes» reales o en potencia, como Diego Portales en Chile y Juan Manuel Rosas en Argentina, que impusieron su voluntad sobre sus países y, de este modo, fortalecieron el papel del Estado. La lucha entre el poder local y los centralizadores, ya fuesen militares o civiles, se convirtió en tema fundamental en la vida política de las nuevas naciones.

Aunque las guerras de independencia abrieron unos angostos canales para los mestizos y los grupos de estratos medios hispanoamericanos, hicieron muy poco por las masas indias. En general, los indios habían mantenido una posición ambigua ante la contienda: aunque se pusieron de parte de Hidalgo o permanecieron neutrales en México, apoyaron a los realistas en el sur de Chile, y en Perú y Colombia lucharon en ambos bandos. Por lo tanto, los dirigentes de las nuevas repúblicas no se sentían en deuda con ellos. Más importante aún, ahora los indios perdieron la protección especial de casta que habían disfrutado bajo la legislación colonial española. A pesar de sus desventajas, esa posición había constituido un refugio muy utilizado. También perdieron sus tierras comunales (que habían sido inalienables) y se los forzó de forma teórica a entrar en el mercado competitivo tan alabado por los liberales decimonónicos. De hecho, se los aisló aún más y se volvieron más pobres.

La independencia dejó un legado algo diferente en Brasil. En lugar de *desplazar* a la élite gobernante, como había ocurrido en la América española, Brasil se *hizo* con una élite gobernante: la corona portuguesa y su séquito. También se hizo con una monarquía que duraría hasta 1889. Pero estas tendencias políticas tuvieron poco efecto sobre los esclavos negros que trabajaban en las plantaciones de azúcar o en otras esferas de la economía. De hecho, la esclavitud no se abolió con la independencia o en la década de 1850 como en la América española (excepto en Cuba y Puerto Rico) y más tarde se convertiría en un asunto central en la política brasileña. Como en otras nuevas naciones, la independencia no cambió mucho la vida para los segmentos más pobres de la población.

El impulso de la economía internacional (1850-década de 1880)

Desde 1850 América Latina avanzó de la fase de consolidación postindependiente a comenzar a poner las bases para una integración mayor en la economía mundial, lo que, en términos políticos, requirió gobiernos dispuestos a crear la infraestructura precisa para exportar productos primarios clave, como el guano de Perú, el café de Brasil, los minerales de México y el azúcar del Caribe. Cuando la era de los caudillos cedió el paso a la de los administradores, la principal tarea fue la unificación nacional.

Las repúblicas independientes se propusieron fortalecer el uso de dos elementos de su economía: la tierra y el trabajo. La mayoría de los gobiernos trató de poner la tierra en manos de hombres de empresa que invirtieran y la hicieran dar frutos. En Brasil y México, esto significó presiones para vender las tierras estatales (anteriormente de la corona). Los perdedores en México y los Andes fueron los indios, pero tales acciones también podían afectar a propietarios blancos o mestizos que no hubieran logrado hacer productivas sus tierras.

Para contar con mano de obra, las élites latinoamericanas de varios países confiaron en la emigración europea. Esos años contemplaron repetidas propuestas para atraer inmigrantes europeos, que supuestamente contribuirían al desarrollo nacional con una pequeña inversión más. De hecho, la élite de países como Argentina y Brasil pronto descubrió que el asunto de la migración era delicado, tanto para el país receptor como para el que enviaba contingentes. Hasta 1880 la inmigración no constituyó en parte alguna un factor importante para el aumento de la fuerza laboral. Pero el fuerte impulso de la élite para recabar inmigrantes demostraba su creencia en que la salvación económica y social de sus países estaba en Europa. Como acabó haciéndose evidente, esto reflejaba las dudas de América Latina acerca de la viabilidad de sus países.

Mediado el siglo XIX, también se contempló un esfuerzo para mejorar la red de transportes. Se necesitaban ferrocarriles, canales, puertos y carreteras. Desde el siglo XVI, la carga (incluidas las personas) había viajado en mulas o burros. Sólo en muy pocas zonas los ríos o lagos navegables ofrecían una alternativa. A mediados de siglo, América Latina era el blanco de muchas propuestas para construir ferrocarriles. El impulso solió provenir de extranjeros, en especial británicos o estadounidenses, pero, en la práctica, pocos ferrocarriles llegaron a construirse antes de la década de 1880, así que la red de transportes permaneció casi tan precaria como lo era en vísperas de la independencia.

Sin embargo, el ritmo de la actividad económica se aceleró por toda América Latina a partir de 1850. El estímulo provino principalmente de las dinámicas económicas de Norteamérica y Europa Occidental, encabezada por Gran Bretaña. Cuanto más se sumergía Europa en la industrialización, más necesitaba aumentar las importaciones de alimentos como azúcar, carne, gra-

no, así como artículos primarios como guano y nitratos fertilizantes, lana y metales industriales. Fueron las décadas en las que los vínculos económicos —comercio, inversión, financiación, transferencia de tecnología, migración— se profundizaron entre Europa y México, Argentina, Perú, Chile, Brasil y Cuba (aunque seguía siendo una colonia española). En 1880 estaba preparado el escenario para una expansión económica aún mayor.

No obstante, la mejora económica iniciada en 1850 tuvo varias limitaciones importantes. En primer lugar, dio como resultado un escaso crecimiento de la industria interna. La creciente demanda latinoamericana de herramientas metálicas, maquinaria pequeña, instrumentos, equipo de construcción, armas y artículos industriales ligeros similares, era satisfecha principalmente por Europa y no por tiendas o fábricas del país. Esta tendencia no resultaba sorprendente. Los productos británicos, franceses o estadounidenses eran de mejor calidad que los de fabricación interna, aunque esa ventaja se habría reducido si los productores nacionales hubieran tenido tiempo y mercado suficientes para mejorar la suya. Pero se habría requerido la protección gubernamental ya fuera mediante una elevación de los aranceles o la prohibición directa de importaciones. Ningún gobierno latinoamericano estaba preparado o podía dar semejante paso en esas décadas.

Las razones eran varias. En primer lugar, los productos importados eran superiores, por lo que eran preferidos por los consumidores locales; en segundo lugar, la mayoría de los gobiernos vivían de los ingresos por aranceles que un proteccionismo duro habría eliminado; en tercer lugar, los grupos económicos poderosos, como los latifundistas y los ganaderos, se hallaban fuertemente comprometidos con el libre comercio, que sus clientes europeos elogiaban como la única vía cierta de prosperidad; por último, los comerciantes latinoamericanos, que se hallaban ubicados estratégicamente en las ciudades más grandes, tenían intereses obvios en combatir el proteccionismo, todavía más si se trataba de un comerciante extranjero (usualmente británico o francés), como era habitual a mediados de ese siglo. No resulta sorprendente que los que abogaban por el proteccionismo o la industria fomentada por el Estado pudieran avanzar tan poco.

Una segunda limitación a la expansión económica entre 1850 y 1880 fue el reforzamiento de la estructura socioeconómica altamente estratificada, heredada del periodo de la independencia: una pequeña élite en la parte superior, un grupo «medio» algo más amplio y el restante 90 por 100 más o menos en la parte inferior. La concentración continuada en la agroganadería y la minería significó que la mayoría de los trabajadores siguiera bajo las condiciones laborales y salarios que nunca les permitirían convertirse en los consumidores que una economía «desarrollada» produce y necesita a la vez.

A América Latina se la seguía empujando a la economía internacional de un modo que limitaría drásticamente su desarrollo económico. La naturaleza de ese vínculo económico ha continuado preocupando a los latinoamericanos durante el último siglo y será tema recurrente del resto de este libro.

La transformación de la América Latina contemporánea (década de 1880-década de 1990)

América Latina ha pasado por una serie de cambios económicos, sociales y políticos de largo alcance desde finales del siglo XIX. Las economías nacionales se han integrado en el sistema global centrado en Europa y Estados Unidos, han cambiado los agrupamientos y las relaciones sociales, las ciudades han florecido, y la política ha sido testigo de reformas y trastornos, y a veces de estancamiento. Estas variaciones han llevado a una gran diversidad de experiencias nacionales, por lo que tras este capítulo presentamos ocho casos prácticos: Argentina, Chile, Brasil, Perú, México, Cuba, el Caribe y Centroamérica. Como veremos, estos países ilustran la complejidad de la historia contemporánea latinoamericana.

No obstante, como ha habido importantes semejanzas y diferencias, el propósito de este capítulo es ofrecer un esbozo de los modelos y procesos del cambio. No refleja la historia de un solo país, sino que presenta un cuadro compuesto que puede proporcionar una base para entender el contexto en el que se desarrolló cada uno de ellos. También nos permitirá compararlos y obtener generalizaciones acerca de las fuerzas históricas que se dieron en todo el continente.

Si queremos comprender la América Latina contemporánea, debe situársela en el contexto de la expansión económica global, comenzando con la conquista del siglo XVI. Dentro de este sistema, ha ocupado una posición esencialmente subordinada o «dependiente» y ha seguido unos caminos económicos moldeados en gran medida por las potencias industriales europeas y estadounidense. Estos desarrollos económicos han originado transformaciones en el orden social y la estructura de clase, que, a su vez, han afectado de forma crucial los cambios políticos. Por ello, comenzamos con un conjunto de relaciones causales simplificadas: los cambios económicos producen cambios sociales que proporcionan el contexto para el cambio político.¹

1. Por esta razón, cada uno de los casos de estudio presentados en los capítulos siguientes contienen una sección general sobre «el crecimiento económico y el cambio social», con la excepción de México, donde la revolución de 1910 ejerció un impacto político tan fuerte sobre la historia del país, que nos obligó a utilizar un formato diferente.

Fase 1. Inicio del crecimiento basado en la exportación-importación (1880-1900)

La Revolución Industrial europea fue lo que precipitó el cambio en las economías decimonónicas latinoamericanas. Como se mostró en el primer capítulo, América Latina había visto reducirse sus vínculos con la economía mundial tras lograr la independencia de Portugal y España. Sus terratenientes convirtieron sus posesiones en entidades autónomas y autosuficientes, en vez de producir bienes para los mercados internos o exteriores. La minería se había detenido, en parte como resultado de la destrucción ocasionada por las guerras independentistas. La manufactura era modesta y estaba en su mayor parte en manos de artesanos dueños de pequeños establecimientos.

Sin embargo, a finales del siglo XIX la industrialización europea empezó a ocasionar una fuerte demanda de productos alimenticios y materias primas. Los trabajadores ingleses y europeos, que ahora vivían en las ciudades y trabajaban en fábricas, necesitaban comprar los alimentos que ya no cultivaban, y los dirigentes de la industria, ávidos por extender su producción y operaciones, buscaban materia prima, en particular minerales. Ambos incentivos llevaron a los gobiernos e inversores europeos a buscar fuera, en África, Asia y, por supuesto, América Latina.

Como resultado, los principales países latinoamericanos pasaron por una sorprendente transformación a finales del siglo XIX, especialmente desde 1880. Argentina, con sus vastas y fértiles pampas, se convirtió en un importante productor de bienes agrícolas y ganaderos: lana, trigo y sobre todo carne. Chile resucitó la producción de cobre, industria que había caído en decadencia tras los años de la independencia. Brasil se hizo famoso por su producción de café. Cuba cultivó café, además de azúcar y tabaco. México empezó a exportar una serie de materias primas, desde el henequén (fibra utilizada para hacer cuerda) y el azúcar, hasta minerales industriales, en particular cobre y zinc. Centroamérica exportó café y plátanos, mientras que de Perú salieron azúcar y plata.

El desarrollo de estas exportaciones fue acompañado de la importación de productos manufacturados, casi siempre de Europa. América Latina compraba textiles, maquinaria, bienes de lujo y otros artículos acabados en una cantidad relativamente grande, con lo que se dio un intercambio, aunque los precios de las exportaciones latinoamericanas eran mucho más inestables que los de las europeas.

A medida que progresaba el desarrollo, la inversión de las naciones industriales, en especial de Inglaterra, fluyó hacia América Latina. Entre 1870 y 1913, el valor de las inversiones británicas aumentó de 85 millones de libras esterlinas a 757 millones, una multiplicación casi por nueve en cuatro décadas. Hacia 1913, los inversores británicos poseían aproximadamente dos tercios del total de la inversión extranjera. Una de sus más firmes inversiones era la construcción de ferrocarriles, en especial en Argentina, México, Perú y Brasil. Los

inversores británicos, franceses y estadounidenses también pusieron capital en empresas mineras, sobre todo en México, Chile y Perú, lo que significó que los latinoamericanos no hubieran de invertir allí, pero también que el control de los sectores clave de sus economías pasara a manos extranjeras.

De este modo, a finales del siglo XIX, se había establecido una forma de crecimiento económico basado en la «exportación-importación» que estimuló el desarrollo de los sectores de materias primas de las economías latinoamericanas. El impulso y el capital provinieron en su mayoría del exterior. Con la adopción de esta alternativa, América Latina tomó un camino comercial de crecimiento económico «dependiente» de las decisiones y la prosperidad de otras partes del mundo.)

La rápida expansión de sus economías de exportación fue acompañada e incluso precedida por la victoria de una justificación intelectual para su integración en la economía mundial. Esta justificación fue el liberalismo, la fe en el progreso y la creencia en que llegaría a la economía sólo mediante el juego libre de las fuerzas comerciales y a la política mediante un gobierno limitado que maximizara la libertad individual. El liberalismo latinoamericano, al igual que la mayoría de sus ideologías, fue algo importado. Sus fuentes principales fueron Francia e Inglaterra. Sin embargo, a diferencia de estos países, América Latina no había pasado por una industrialización significativa a mediados del siglo XIX. Por ello, carecía de la estructura social que había madurado el liberalismo en Europa, hecho que sin duda iba a hacer algo diferente al liberalismo latinoamericano.

En la segunda mitad del siglo XVIII, la América española y Brasil pasaron por un experimento abortado de capitalismo estatal. Los trastornos causados por las guerras revolucionarias francesas habían quebrado el monopolio comercial español en América. La Habana había sido capturada por los ingleses y sus puertos, abiertos de par en par. El asombroso aumento del comercio impresionó a todos los observadores. La lógica era ineludible: puesto que el contrabando se había convertido en un alto porcentaje del comercio total en toda la América española y portuguesa, ¿por qué no legalizar el comercio libre y obtener impuestos del incremento en un comercio controlado por el gobierno?

Los apologistas del liberalismo económico citaban sin cortapisas a los teóricos europeos que justificaban el comercio libre y la división internacional del trabajo como algo «natural» y, sin duda, óptimo. Toda desviación de sus dictados sería una locura: reducir el comercio y con ello los ingresos. Es importante considerar que la mayoría de los críticos que atacaban las instituciones políticas de los gobiernos monárquicos (que consideraban «no liberales») no discrepaban de la ideología del liberalismo económico. En Brasil, por ejemplo, Tavares Bastos acusó al gobierno de extinguir la vida política local, pero ensalzó las virtudes del libre comercio y repitió fielmente las doctrinas europeas del *laissez-faire*.

Se podría decir que durante la última parte del siglo XIX el liberalismo económico permaneció firme en América Latina. Los intentos por implantar

aranceles proteccionistas fueron rechazados por los políticos, que sostenían no encontrarse en condiciones, ya fuera por sus recursos o por su capacidad de hacer tratos, de violar los principios del libre comercio.

Los debates clave acerca de la política económica se restringían en gran medida a las élites, definidas aquí como ese pequeño estrato (menos del 5 por 100 de la población) con poder y riqueza para controlar las decisiones políticas y económicas de ámbito local, regional y nacional.

El compromiso de éstas con el liberalismo se veía reforzado por su profunda preocupación acerca de la supuesta inferioridad racial de sus poblaciones nativas. De modo implícito aceptaban las teorías racistas al propugnar constantemente fuertes inmigraciones europeas como solución a su falta de mano de obra cualificada. Preferían inmigrantes del norte de Europa (aunque en realidad la gran mayoría vino de Portugal, España e Italia) con la esperanza de que los hábitos de la confianza en uno mismo y la capacidad emprendedora —sellos distintivos del ideal liberal— se reforzaran en su continente.

Añadido a las dudas racistas, había un sentimiento generalizado de su propia inferioridad. Hasta la primera guerra mundial, las élites latinoamericanas se solían describir como poco más que imitadoras de la cultura europea. Muchos dudaban de que sus países pudieran siquiera lograr una civilización característica. En los países tropicales, las preocupaciones acerca del determinismo racial se reforzaban con dudas sobre su clima, del que los teóricos europeos decían constantemente que nunca sustentaría una civilización superior. Así pues, el determinismo medioambiental reforzaba el racial y su combinación parecía descalificar a las tierras tropicales como escenario en el que pudiera realizarse el sueño liberal.

Dentro de América Latina, el rápido crecimiento de las economías de exportación llevó a transformaciones sociales sutiles pero importantes. La primera de todas y la más valiosa fue la modernización de la élite de clase alta. Debido a estos nuevos incentivos económicos, los latifundistas y propietarios dejaron de contentarse con realizar operaciones de subsistencia en sus haciendas; en su lugar, buscaron oportunidades y maximizaron los beneficios, lo cual condujo al surgimiento de un espíritu empresarial que marcó un cambio significativo en la apariencia y conducta de los grupos de élite. Los ganaderos de Argentina, los cultivadores de café de Brasil, los plantadores de azúcar de Cuba y México, todos buscaban eficiencia y éxito comercial. Ya no eran una élite semifeudal que vivía parcialmente encerrada, sino que se convirtieron en empresarios decididos.

Surgieron nuevos grupos profesionales o de «servicios» para desempeñar funciones económicas adicionales. Particularmente importante fue el crecimiento y cambio habido en el sector comercial. Los comerciantes cumplieron una función esencial en esta transformación, al igual que en la etapa colonial, pero ahora muchos eran extranjeros y vincularon las economías latinoamericanas con los mercados ultramarinos, en particular con Europa. También se contempló una evolución entre los profesionales, abogados y demás repre-

sentantes de los grupos extranjeros y nacionales en sus transacciones comerciales. Los abogados siempre habían sido importantes, pero durante la fase de exportación-importación asumieron nuevas funciones cruciales al ayudar a determinar el marco institucional de la nueva era.

Estas transformaciones económicas y sociales también condujeron al cambio político. Al poner tanto en juego, las élites latinoamericanas —en especial los terratenientes— comenzaron a interesarse por la política nacional. Ya no se contentaban con permanecer en sus haciendas feudales y comenzaron a perseguir el poder político. La era del caudillo tradicional estaba llegando a su fin.

Su búsqueda de autoridad política a finales del siglo XIX tomó dos formas básicas. En una versión, los terratenientes y otras élites económicas tomaron el control del gobierno de forma directa, como en Argentina y Chile. Querían construir regímenes fuertes y selectivos, por lo habitual con apoyo militar, y solían proclamar su legitimidad mediante la adhesión a unas constituciones que se parecían mucho a los modelos europeos y estadounidense. En Argentina y Chile hubo una tenue competencia entre partidos que tendían, al menos en esta fase inicial, a representar facciones rivales de la aristocracia. Pero había mucho acuerdo acerca de los temas políticos básicos y escasa oposición seria a la cordura de perseguir el crecimiento económico mediante la exportación. La rivalidad era restringida y la votación solía ser una farsa. Se podría pensar en tales regímenes como expresiones de la «democracia oligárquica».

Un segundo modelo conllevaba la imposición de dictadores fuertes, a menudo con cargos militares, para asegurar la ley y el orden; de nuevo, en beneficio último de las élites terratenientes. Porfirio Díaz en México, que tomó el poder en 1876, es el ejemplo más notable, pero el modelo también apareció en Venezuela, Perú y otros países. En contraste con la democracia oligárquica, donde las élites ejercían el poder político directo, aquí se trataba de la aplicación indirecta de su autoridad mediante dictadores que no solían provenir de los estratos más altos de la sociedad.

En cualquier caso, lo importante era la estabilidad y el control social. Se suprimieron los grupos disidentes y se contuvo la lucha por el poder dentro de círculos restringidos. Sin duda, una de las metas básicas de estos regímenes era centralizar el poder, si era necesario quitándoselo a los caudillos regionales, y crear estados-nación poderosos y dominantes. No era fácil lograrlo debido a la fragmentación residual de la sociedad y a su misma estructura, pero se hicieron progresos en los países más grandes. En Argentina, por ejemplo, triunfó el centralismo con el establecimiento de la ciudad de Buenos Aires como distrito federal en 1880 (al igual que Washington D.C. está bajo la jurisdicción directa del gobierno federal en Estados Unidos). En México, la política efectiva y a menudo despiadada de Porfirio Díaz llevó al aumento del poder nacional a expensas de las plazas fuertes locales y, en Brasil, el gobierno imperial de Dom Pedro II avanzó de forma significativa hacia el establecimiento de un estado-nación efectivo (pero también provocó un retroceso regional que contribuyó al derrocamiento del imperio en 1889).

La intención de los centralistas era promover un mayor desarrollo económico mediante el crecimiento de las líneas de exportación-importación. La estabilidad política se consideraba algo esencial para atraer la inversión extranjera que, a su vez, estimularía el crecimiento económico. Y cuando llegaba la inversión, ayudaba a fortalecer las fuerzas de la ley y el orden. Los ferrocarriles son un ejemplo: los inversores extranjeros se resistirían a colocar sus fondos en un país amenazado por el desorden político; pero una vez que se construían los ferrocarriles, como en el caso de México, se convertían en instrumentos importantes para consolidar la autoridad central, ya que podían usarse (y lo fueron) para despachar tropas federales a sofocar levantamientos en casi cualquier parte de la nación.

Fase 2. Expansión del crecimiento basado en la exportación-importación (1900-1930)

El éxito de esta política se hizo evidente a finales del siglo XIX y comienzos del XX, cuando las economías latinoamericanas orientadas a la exportación iniciaron períodos de prosperidad notable. Argentina se volvió tan rica por su economía basada en la carne y el trigo, que la figura del playboy argentino se convirtió en un distintivo de la sociedad de moda europea: un joven latino gastador que perseguía con gallardía la elegancia. En México, aparecieron y se extendieron las plantaciones que producían henequén en Yucatán y azúcar en las zonas centrales, en especial al sur de la capital; la minería era también rentable y la naciente industria petrolera comenzaba a convertirse en una actividad significativa. Seguían creciendo las exportaciones de cobre procedente de Chile, que también cultivaba algunas frutas y trigo para los mercados internacionales. Las mejoras tecnológicas llevaron al aumento de la producción azucarera en el Caribe, especialmente en Cuba, cuando los propietarios estadounidenses aceleraron sus inversiones en trapiches de azúcar modernos. Brasil vivía de las exportaciones de café y caucho natural. La United Fruit Company extendió sus inmensas plantaciones de plátanos en Centroamérica. En todos estos países, la economía monetaria se había vuelto más sensible a las tendencias de la economía mundial, donde las exportaciones conseguían divisas para comprar a duras penas las importaciones necesarias. Todo impacto importante en la economía mundial producía efectos rápidos y espectaculares en los sectores mercantilizados. Aunque la industrialización seguía siendo incipiente, ya había fábricas en sectores como el textil, artículos de cuero, bebidas, procesamiento de alimentos y materiales de construcción. Los sectores de servicios más dinámicos eran el transporte, la burocracia estatal, el comercio y las finanzas.

La consolidación del modelo de crecimiento por importación-exportación impulsó dos cambios fundamentales en la estructura social. Uno fue la aparición y el aumento de los estratos sociales medios. Por la ocupación desempeñada, a ellos pertenecían profesionales, comerciantes, tenderos y em-

presarios pequeños que se beneficiaban de la economía de exportación-importación, pero que no se encontraban entre los estratos superiores en cuanto a propiedades o liderazgo. Los portavoces del sector medio solían hallarse en las ciudades, tenían una educación bastante buena y buscaban un lugar reconocido en su sociedad.

El segundo cambio importante tuvo que ver con la clase trabajadora. Para sustentar la expansión de las economías de exportación, las élites trataron de importar fuerza de trabajo externa (como señaló una vez el argentino Juan Bautista Alberdi, «gobernar es poblar»). Como resultado, en la década de 1880, Argentina comenzó una política dinámica para alentar la inmigración desde Europa: la marea de llegadas durante las tres décadas siguientes fue tan grande que, incluso descontando los retornos, ha sido denominada por uno de los historiadores del país la «era aluvial». Brasil también reclutó inmigrantes, principalmente para trabajar en los cafetales de São Paulo. Los recibidos por Perú y Chile fueron numerosos, pero muchos menos en términos absolutos y relativos que los de Argentina. Cuba siguió siendo un caso especial, ya que la importación de esclavos negros africanos había determinado mucho la composición de su clase trabajadora (esto es igual en ciertas partes de Brasil, en particular en el noreste, donde las plantaciones de azúcar prosperaron con el trabajo esclavo). México presenta una excepción interesante a este modelo. Fue el único entre los países mayores que no buscó una inmigración externa considerable. Hay una razón obvia para ello: el país continuaba teniendo una gran población campesina india, por lo que resultaba innecesario importar fuerza laboral.

La aparición de las clases trabajadoras incipientes llevó a la aparición de nuevas organizaciones, con importantes implicaciones para el futuro. Los trabajadores solían establecer sociedades de ayuda mutua y, en algunos países, emergieron los sindicatos. La naturaleza de la economía latinoamericana estableció el contexto del activismo obrero. En primer lugar, como las exportaciones eran cruciales, los trabajadores de la infraestructura que las hacían posibles —en especial los ferrocarriles y muelles— tenían una posición vital. Toda parada laboral suponía una amenaza inmediata para la viabilidad económica del país y, de ese modo, para su capacidad de importar. En segundo lugar, el estado relativamente primitivo de la industrialización significó que la mayoría de los trabajadores estuvieran empleados en firmas muy pequeñas, habitualmente de menos de 25 empleados. Sólo unas cuantas industrias, como las textiles, se adecuaban a la imagen moderna de enormes fábricas con técnicas de producción masivas. Los sindicatos en cuestión se solían organizar por oficios y no por industrias. La excepción eran los trabajadores de los ferrocarriles, las minas y los muelles, que no por coincidencia se hallaban entre los militantes más activos.

De 1914 a 1927 se contempló el surgimiento de la movilización obrera. Fue el punto más alto de la influencia anarquista, anarcosindicalista y sindicalista, cuando las capitales de toda nación importante de América Latina se vieron torpedeadas por huelgas generales. De repente, pareció que esta re-

gión se unía a las confrontaciones de clase que estremecían a Alemania y Rusia, así como a Estados Unidos y gran parte del resto de Europa. En estos momentos críticos —protestas masivas, huelgas generales, intensificación de lazos entre sindicalizados y no sindicalizados—, se puede ver con claridad la naturaleza de la clase trabajadora, su organización y el modo en que las élites dominantes deciden responder.

Lo que necesitaremos comparar, a medida que se desarrollen los estudios por países, son las similitudes y las diferencias de los modelos de interacción entre patronos, trabajadores y políticos, junto con terratenientes, profesionales y militares. Aunque existen semejanzas en las movilizaciones laborales urbanas durante la década posterior a la gran protesta que comenzó con el fin de la primera guerra mundial, hubo sorprendentes diferencias en las respuestas de la élite. En particular, veremos que el marco legal de las relaciones laborales recibió mucha más atención en Chile que en Argentina y Brasil.

Otro cambió importante durante el periodo de 1900 a 1930 afectó al equilibrio entre los sectores rural y urbano de la sociedad. Se combinaron la importación del trabajo y la migración campesina para producir el crecimiento a gran escala de las ciudades. En 1900 Buenos Aires se había establecido como «el París de Suramérica» y era una ciudad grande y cosmopolita con unos 750.000 habitantes. En total, casi un cuarto de la población argentina vivía en las ciudades con más de 20.000 habitantes al terminar el siglo; lo mismo ocurría en Cuba. Cerca del 20 por 100 de la población chilena residía en asentamientos similares, mientras que las cifras correspondientes a Brasil y México (el último con una población indígena sustancial) bajaban al 10 por 100. En Centroamérica las cifras también se hallaban por debajo del 10 por 100 y en Perú caía al 6 por 100. El hecho generalizado es que la expansión de las economías de exportación-importación ocasionó la urbanización de la sociedad latinoamericana.

Sin embargo, debido al origen nacional o étnico, las clases trabajadoras no consiguieron mucho poder político a comienzos del siglo xx. Los inmigrantes de Argentina y Brasil no tenían derecho a votar si no habían conseguido la naturalización, por lo que los políticos podían permitirse no tenerlos en cuenta. En México, los trabajadores de origen campesino tenían pocas posibilidades de influir en la dictadura de Porfirio Díaz. Y en Cuba, por supuesto, la historia de la esclavitud había dejado su doloroso legado.

Esto significó, al menos a breve plazo, que las élites latinoamericanas, mientras promovían la expansión orientada a la exportación, pudieran contar con una fuerza laboral que respondía sin que existiera una amenaza efectiva de participación política (aunque las huelgas habían resultado preocupantes). Desde entonces hasta los años veinte o treinta a algunos les pareció contar con lo mejor de ambos mundos.

Y, como resultado, las élites de varios países permitieron una reforma política que posibilitó a los miembros y representantes de los sectores medios acercarse al poder. La idea era conseguir la lealtad de los sectores medios para fortalecer de este modo la estructura de control y poder de la

elite. Por consiguiente, el inicio del siglo XX fue un periodo de reforma política en algunos de los países mayores: en Argentina, una ley electoral de 1912 abrió el sufragio a grandes sectores de población y permitió al partido de la clase media, el denominado Partido Radical, conseguir la presidencia en 1916. En Chile, los cambios comenzaron en realidad a partir de 1890 y supusieron la imposición del gobierno parlamentario sobre el sistema presidencialista anterior. En Brasil, la caída de la monarquía en 1889 inauguró un periodo de política electoral limitada. Cuba, tras conseguir la independencia de España en 1898 (y, como muchos dirían, cederla después a Estados Unidos), siguió siendo un caso especial. E incluso para México, donde estalló una revolución a gran escala en 1910, es válida la generalización: el objetivo original del movimiento revolucionario no era transformar la sociedad mexicana, sino solamente conseguir el acceso al sistema político de los segmentos excluidos de la clase media.

Los movimientos reformistas produjeron a menudo una «democracia cooptada», en la que la participación efectiva se extendía de la clase alta a la media y seguía excluyendo a la más baja. Tales transformaciones solían reflejar los intentos de las élites socioeconómicas gobernantes por cooptar a los sectores medios en apoyo del sistema, aunque a veces tuvieron consecuencias imprevistas, como en el caso de México, donde los acontecimientos trascendieron hasta ocasionar una revolución completa. Los objetivos de la mayoría fueron limitados.

Un efecto colateral significativo fue la creación de un cuadro de políticos profesionales en varios países. Los partidos políticos crearon carreras para los hombres (las mujeres latinoamericanas ni siquiera tuvieron voto hasta 1929) que pudieran dedicar toda su vida adulta a conseguir el poder político. Muy a menudo solían representar los intereses de la aristocracia reinante, pero además formaban un grupo social separado e identificable. Como actores prominentes de la escena política civil, también se convirtieron en blancos del desdén y la ira del estamento militar.

En la mayor parte de los países latinoamericanos, la fórmula reformista funcionó bastante bien, al menos para las élites. La demanda europea de materias primas durante la primera guerra mundial y varios años después condujo a una prosperidad continuada y sostenida. El modelo de crecimiento basado en la exportación-importación parecía ofrecer medios funcionales y provechosos para la integración de América Latina en el sistema global del capitalismo. Las adaptaciones políticas parecían asegurar la hegemonía a largo plazo de las élites nacionales.

En realidad, pronto se descubrió que el liberalismo —tanto político como económico— tenía deficiencias. Su fracaso ilustra el fenómeno tan conocido en toda la América Latina contemporánea: el préstamo cultural desafortunado o «alienación», según lo han descrito los nacionalistas de tiempos recientes. Al copiar las instituciones legales y las frases filosóficas del liberalismo clásico, los latinoamericanos descubrieron que su realidad no se prestaba a la simple aplicación del dogma. No supieron entender que, en su origen, el

liberalismo europeo fue la ideología de una clase social en alza, cuyo poder económico emergente le proporcionó los medios para llevarla a la práctica.

¿Significa esto algo más que América Latina carecía de una clase media importante? Sólo en parte. Resulta más fundamental el hecho de que había seguido siendo una economía agraria cuyo sector exportador se correspondía, en la mayoría de los países, con un enorme sector de subsistencia. El liberalismo tuvo fortuna sólo porque, desde 1850, un pequeño pero creciente sector de la sociedad *pensó* que éste consideraba diferentes sus intereses de los propios de los sectores tradicionales.

De forma específica, todos los profesionales —abogados, médicos, militares de carrera, funcionarios civiles y comerciantes— constituían un interés urbano. Absorbieron con rapidez las ideas liberales europeas sin conseguir el poder económico relativo de sus semejantes en Francia e Inglaterra. Así, aunque no hubieran considerado que sus intereses económicos eran antagónicos de los del sector agrario tradicional, se hubieran hallado en una posición débil. Pero a menudo no fue así. Sus vidas solían estar ligadas al sector agrario aunque vivieran en las ciudades. Los ingresos de sus clientes, usuarios y patronos dependían en gran medida de la agricultura comercial. A su vez, la prosperidad de esta agricultura dependía del comercio exterior.

En este punto, el liberalismo económico ponía en un callejón sin salida a los liberales latinoamericanos. Como creían en sus principios abstractos y se daban buena cuenta de su patente debilidad frente a sus principales acreedores y socios de intercambios —Estados Unidos e Inglaterra—, no podían pensar en un camino que pasara por soluciones económicas no liberales. Además, lo último les habría resultado caro *en sus personas* a corto plazo. Por ejemplo, los aranceles proteccionistas para la industria sin duda habrían cargado a los consumidores urbanos con bienes más caros y de peor calidad. La protección también habría hecho peligrar los beneficios de los comerciantes dedicados a la exportación-importación, que eran un poderoso grupo de presión. Así pues, los liberales fueron renuentes a apoyar la industrialización, que por sí sola podría haber aumentado su número lo suficiente como para otorgarles el poder político, que quizás habría hecho posible la realización de los ideales políticos liberales.

El liberalismo económico y el político se sesgaban de otro modo más. Las ideas no liberales en economía tales como los aranceles proteccionistas y los controles sobre las inversiones extranjeras a menudo se asociaban en la práctica con ideas políticas antiliberales. Así, la conexión se estableció con facilidad: la desviación de los principios económicos liberales significaba un gobierno autoritario, por lo que se la tenía en poco aprecio.

Un argumento más utilizado contra los que abogaban por la heterodoxia económica (es decir, por medidas no liberales) era difícil de rebatir desde la política. Ante cualquier propuesta de apoyo gubernamental a la industria nacional, sus oponentes lanzaban la acusación, a menudo con buenos resultados, de que un pequeño grupo de inversores egoístas querían beneficiarse a expensas del público. Además, los empresarios locales casi siempre carecían de fondos y

experiencia. Como en el resto del mundo en vías de desarrollo, se enfrentaban a la competencia formidable de los bienes importados desde las economías industrializadas. Sin protección ni subsidios tenían pocas esperanzas.

A los liberales latinoamericanos también los debilitaba otra razón. Se trataba de su incertidumbre acerca de una premisa subyacente en el liberalismo: la fe en la racionalidad y el carácter emprendedor de los individuos del país. En Brasil, por ejemplo, los políticos se habían pasado años justificando la esclavitud sobre la base de que era un mal necesario para su economía tropical agraria. Sólo podían hacer ese trabajo los esclavos africanos. Ahora el argumento volvía para perseguir a los liberales. El legado de la esclavitud era una fuerza laboral que quedaba muy lejos del mundo racional concebido por Bentham y Mill. El acontecimiento que transformó esta atmósfera fue el derrumbamiento espectacular de la economía capitalista mundial en 1929 y 1930.

Fase 3. Industrialización en lugar de importación (1930-década de 1960)

La Gran Depresión tuvo en su inicio efectos catastróficos sobre las economías latinoamericanas. El precipitado declive económico de Europa y Estados Unidos redujo de improviso el mercado para sus exportaciones. La demanda internacional de café, azúcar, metales y carne pasó por una aguda reducción y no se pudieron hallar salidas alternativas para estos productos. Cayeron el precio unitario y el volumen de exportación, por lo que el valor total durante los años 1930-1934 fue un 48 por 100 más bajo que el de 1925-1929. Una vez más, los acontecimientos sucedidos en el centro industrializado del sistema mundial tuvo efectos decisivos (y limitadores) sobre América Latina y otras sociedades del Tercer Mundo.

La depresión mundial que siguió causó una gran presión en los sistemas políticos de los países latinoamericanos, muchos de los cuales sufrieron golpes militares (o intentos de golpes). Más o menos en el año siguiente a la quiebra de la bolsa en Nueva York, los militares habían buscado el poder o lo habían tomado en Argentina, Brasil, Chile, Perú, Guatemala, El Salvador y Honduras. México soportaba su propia crisis constitucional y Cuba sucumbió a un golpe militar en 1933. Sería una exageración afirmar que los efectos económicos de la Depresión causaron estos resultados políticos, pero pusieron en duda la viabilidad del modelo de crecimiento basado en la exportación-importación, ayudaron a desacreditar a las élites políticas gobernantes e hicieron que las masas estuvieran más preparadas para aceptar los regímenes militares. A partir de la década de 1930, el ejército reafirmó su papel tradicional como fuerza principal en la política latinoamericana.

Los gobernantes de la región tenían dos opciones para responder a la crisis económica global. Una era forjar vínculos comerciales aún más estrechos con las naciones industrializadas para asegurarse compartir equitativamente el mercado sin que importase su tamaño y desajustes. Por ejemplo, Argenti-



Un dibujante estadounidense representa a los militares latinoamericanos como una amenaza constante para las instituciones democráticas. (Roy B. Justus, *Minneapolis Star*, 1963. Reproducido con la autorización de Minneapolis Star and Tribune Company.)

na tomó esta vía al luchar por preservar su acceso al mercado británico de carne. En 1933 firmó el Pacto Roca-Runciman, mediante el cual retendría cuotas aceptables del mercado inglés a cambio de garantizar la compra de bienes británicos y asegurar las ganancias de los negocios británicos en Argentina. De este modo, algunos países trataron de mantener el funcionamiento del modelo, basado en la exportación-importación, a pesar de la reducción en la demanda ocasionada por la Depresión.

Una vía alternativa, que no contradecía necesariamente a la primera, era embarcarse en la industrialización. Una de las metas de esta política, a menudo apoyada por el ejército, sería conseguir una mayor independencia económica. La idea era que, al levantar su propia industria, América Latina dependería menos de Europa y Estados Unidos en cuanto a artículos manufacturados. Para los militares esto significaba armas. Al producir bienes industriales, agrícolas y minerales, las economías latinoamericanas se integrarían más y se harían más autosuficientes. Y, como resultado, serían menos vulnerables a los choques causados por la depresión mundial.

Un objetivo adicional era crear puestos de trabajo para las clases trabajadoras que habían seguido aumentando su tamaño e importancia desde comienzos del siglo XX. El proletariado latinoamericano se concentraba casi totalmente en las ciudades y seguía luchando por organizar y sostener movimientos sindicales. Y en contraste con la generación anterior, ahora trataba de ejercer poder como fuerza social. En algunos países como Chile, los movimientos sindicales se vieron relativamente libres de la participación arbitraria del gobierno. En otras partes, como en México y Brasil, los políticos reconocieron el trabajo como un recurso político potencial y tomaron parte directa en estimular (y controlar) las organizaciones laborales. Ya se percibiera como aliada o amenaza, la clase trabajadora urbana buscaba un empleo seguro y los dirigentes latinoamericanos vieron la industrialización como un medio de responder.

Pero la *forma* más razonable de desarrollo industrial no era copiar simplemente los senderos trazados, por ejemplo, por la Inglaterra del siglo XIX. En su lugar, las economías latinoamericanas comenzaron a producir artículos manufacturados que antes importaban de Europa y Estados Unidos. De aquí proviene el nombre para este tipo de desarrollo: «sustitución de importaciones».

Desde finales de los años treinta hasta los años sesenta, las políticas de este tipo tuvieron un éxito relativo, al menos en los países grandes. Argentina, Brasil y México pusieron en marcha importantes plantas industriales que ayudaron a generar crecimiento económico. Hubo limitaciones e impedimentos a esta forma de desarrollo (que se explican más adelante), pero el resultado inmediato fue generar impulso para las economías nacionales.

Las consecuencias sociales de la industrialización fueron complejas. Un resultado, por supuesto, fue la formación de una clase capitalista empresarial o, de forma más específica, de una burguesía industrial. En Chile, los miembros de este grupo provinieron sobre todo de las familias de la élite latifundista. En México y Argentina comprendieron diferentes tipos sociales, por lo que representaron un reto potencial a la hegemonía de las élites gobernantes tradicionales. Pero permanece invariable el punto básico: la industrialización, aunque fuera de este tipo, creó un nuevo grupo de poder en la sociedad latinoamericana. Su papel iba a ser muy debatido a medida que avanzaba el siglo.

De una importancia particular fue el papel del Estado en la estimulación del crecimiento industrial basado en la sustitución de importaciones. En contraste con las políticas de *laissez-faire* de Inglaterra y Estados Unidos durante el siglo XIX, los gobiernos latinoamericanos promovieron de forma activa el crecimiento industrial. Lo hicieron de varios modos: erigiendo barreras arancelarias y elevando el precio de los bienes importados hasta el punto en que las compañías industriales nacionales pudieran competir con éxito en el mercado; creando demanda al favorecer a los productores locales en los contratos gubernamentales (por ejemplo, en compras para el ejército), y, lo más importante, estableciendo empresas estatales e invirtiendo directamente en compañías industriales. Mediante la protección

y la participación, el Estado proporcionó el ímpetu decisivo para el crecimiento industrial de la región.

A medida que progresaba la industria, las clases obreras también se hicieron más fuertes e importantes. Ya fueran autónomos o dirigidos por el gobierno, los movimientos sindicales crecieron con rapidez y el apoyo (o control) del trabajo se convirtió en algo crucial para la continuación de la expansión industrial. Se necesitaba que los obreros proporcionaran trabajo en condiciones que fueran rentables para sus patronos. El trabajo organizado emergía como un importante actor en la escena latinoamericana.

La expresión política de estos cambios socioeconómicos tomó dos formas. Una fue seguir con la democracia de elección, mediante la cual los industriales y trabajadores obtenían acceso (por lo usual limitado) al poder a través de la contienda electoral o de otro tipo. Un ejemplo fue Chile, donde los partidos políticos se reorganizaron para representar los intereses de nuevos grupos y estratos de la sociedad. Los partidos pro trabajo y pro industriales entraron en el proceso electoral chileno y acabaron llevando a la trágica confrontación de los años setenta. Bajo este sistema, se los cooptó en la estructura gubernamental, y mientras duró este acuerdo, su participación prestó un valioso apoyo al régimen.

La respuesta más común conllevó la creación de alianzas «populistas» multiclassistas. El surgimiento de una élite industrial y la vitalización de los movimientos obreros hicieron posible una nueva alianza pro industria que mezclaba los intereses de empresarios y trabajadores; en algunos casos, desafiando de forma directa el predominio secular de los intereses agrícolas y terratenientes. Cada una de estas alianzas la forjó un dirigente nacional que utilizó el poder estatal para su objetivo. De este modo, como veremos más adelante, Juan Perón construyó una coalición de clases populista y urbana en Argentina durante los años cuarenta; en Brasil, Getúlio Vargas comenzó a hacer lo mismo a finales de los años treinta; y, en circunstancias algo más complicadas, Lázaro Cárdenas se inclinó por soluciones populistas para México durante este mismo periodo.

La mayoría de los regímenes populistas tenían dos características clave. Por un lado, eran al menos semiautoritarios: solían representar coaliciones contra algún otro conjunto de intereses (como los de los terratenientes) a los que por definición se impedía la participación, lo que conllevaba cierto grado de exclusión y represión. Por otro lado, como el tiempo demostraría, representaban intereses de clases —trabajadores e industriales— destinadas al conflicto. Así pues, el mantenimiento de estos regímenes dependía en gran medida del poder personal y carisma de los dirigentes individuales (como Perón en Argentina y Vargas en Brasil). También significaba que, con un dirigente carismático o sin él, sería difícil sostenerlos en tiempos de adversidad económica.

Fase 4. Estancamiento del crecimiento basado en la sustitución de importaciones (década de 1960-década de 1980)

Los años sesenta presagiaron una era de crisis para América Latina. La estrategia política que surgió de las políticas de industrialización posteriores a 1929 había comenzado a tropezar con serios problemas, tanto económicos como políticos. En el frente económico, surgieron en parte por la misma naturaleza del desarrollo basado en la industrialización para sustituir a la importación.

En primer lugar, la estructura de esta industrialización era incompleta. Para producir géneros manufacturados, las empresas latinoamericanas tenían que contar con bienes de producción importados (como la maquinaria) de Europa, Estados Unidos y luego de Japón. Si no podían importarse, o eran demasiado caros, se ponían en peligro las empresas locales. Poco a poco los latinoamericanos se dieron cuenta de que el crecimiento basado en este tipo de industrialización no ponía fin a su dependencia de las naciones industrializadas. Sólo alteraba su forma.

Esta dificultad inherente se agudizó por los términos desiguales del intercambio. Con el paso del tiempo, los precios de las principales exportaciones latinoamericanas (café, trigo, cobre) en el mercado mundial sufrieron un descenso sostenido de poder adquisitivo. Es decir, por la misma cantidad de exportaciones, los países latinoamericanos podían comprar cada vez menores cantidades de bienes de producción. Así pues, el crecimiento económico se enfrentaba a un atolladero. Y la respuesta no consistía en aumentar el volumen de sus exportaciones tradicionales, ya que esto solamente hacía caer el precio.

En segundo lugar, la demanda interna de productos manufacturados era limitada. Las industrias tropezaban contra la falta de compradores, al menos a los precios y condiciones de crédito que ofrecían. Los brasileños sólo podían comprar unos cuantos frigoríficos (debido en particular a la distribución del ingreso tan desigual, que hacía que las masas populares ni siquiera pudieran considerar tales compras). Quizás podría haberse hecho frente a este problema de mercados limitados con la formación de asociaciones comerciales multinacionales o regionales o algo semejante a un mercado común latinoamericano; hubo esfuerzos en esta dirección, pero no se resolvió el tema. Las industrias de los países más grandes tendían a ser más competitivas que complementarias y tales rivalidades supusieron serios obstáculos políticos para la formación de las asociaciones. Según pasó el tiempo, las empresas industriales de la región continuaron enfrentándose al problema de los mercados limitados.

En tercer lugar, y muy relacionado, estaba el grado relativamente elevado de la tecnología presente en la industria latinoamericana. Esto significaba que sólo podía crear un número de puestos de trabajo limitado para los obreros. En otras palabras, el desarrollo industrial latinoamericano de este perio-

do había elegido la tecnología con uso de capital intensivo típica de las economías industriales avanzadas; en comparación con los modelos de crecimiento del siglo XIX, ocasionaba más inversiones en maquinaria y menos en trabajo manual. Las compañías lo consideraban necesario para sobrevivir en la competencia económica. Sin embargo, uno de sus resultados involuntarios fue poner un techo al tamaño del mercado interno de bienes de consumo, ya que eran relativamente pocos los asalariados que podían permitirse comprarlos. Un segundo resultado fue la imposibilidad de contrarrestar el creciente desempleo que, en los años sesenta, comenzó a plantearse como una seria amenaza al orden social establecido.

A medida que aumentaba la presión, las élites gobernantes de varios países imponían regímenes más represivos, con frecuencia mediante golpes militares, como sucedió en Brasil (1964), Argentina (1966) y Chile (1973). En todos los casos, las decisiones más importantes las tomaron (o estuvieron sujetas al voto de) los altos cargos militares. En vista del estancamiento económico, los militares y las élites pensaron que debían estimular la inversión y, para lograrlo, razonaron, habían de desmantelar, quizás incluso aplastar, el poder colectivo de la clase obrera. Cuanto más organizada estaba, más difícil resultó la tarea.

Cada uno de estos gobiernos dominados por los militares asumió el poder de controlar las decisiones concernientes a los intereses obreros más vitales: salarios, condiciones laborales, beneficios complementarios y el derecho a organizarse. La clase obrera tuvo que resignarse a las medidas aprobadas por las burocracias de los gobiernos militares que establecieron la política laboral. Entre 1973 y 1979 prácticamente no hubo huelgas en Chile; lo mismo puede decirse para Brasil de 1968 a 1978. Los intentos de organizar huelgas en esos países durante los años mencionados invitaban a una dura represión, aunque se dio cierta relajación en Brasil a comienzos de 1978. Resultó difícil suprimir la fuerte tradición sindicalista argentina, pero allí también se obligó a los dirigentes obreros a mostrar gran prudencia. Los tres regímenes militares crearon el «imperativo económico» para tratar de las relaciones laborales.

¿Por qué esta dureza contra la clase obrera? Considerados a corto plazo, los tres casos pueden explicarse por la necesidad de acometer políticas antiinflacionistas impopulares. Estos regímenes llegaron al poder cuando la inflación y la balanza de pagos deficitaria habían vuelto sus economías peligrosamente vulnerables. En los tres casos, casi se había agotado el crédito internacional, público o privado, del mundo capitalista. Se había requerido de los tres que pusieran en marcha programas de estabilización. Como ningún país no capitalista había logrado en los años recientes conseguir la estabilización económica sin provocar una caída de los salarios reales (por lo general muy grande) y como Argentina, Brasil y Chile tenían mucha experiencia en organizar la resistencia obrera ante los programas de estabilización, no era una sorpresa que estos gobiernos militares quisieran controlar estrechamente a esta clase.

Sin embargo, los tres casos de políticas antiobreras tenían causas más profundas. Estos gobiernos proclamaron ser «antipolíticos». Culpaban del infortunio de sus países a la supuesta incompetencia, deshonestidad o traición de los políticos y se mostraron más agresivos hacia los políticos izquierdistas radicales y los líderes obreros. Se dejaron abiertos pocos canales de oposición política. Del mismo modo que Chile fue una vez el sistema más democrático, su régimen militar se convirtió en el más draconiano, al abolir todos los partidos políticos y quemar las listas electorales. Los generales repudiaron la competición política abierta y pluralista por la que el país se había hecho famoso. Chile iba a entrar en una era «libre» de política.

El gobierno militar argentino tomó medidas severas en 1976; suspendió el Congreso y todos los partidos políticos, lo que significó un hiato en la competición política. Los guardianes militares de Brasil, aunque llegaron al poder en una atmósfera política menos radicalizada que los otros dos gobiernos, también se vieron impulsados en su segundo año (1965) a abolir los antiguos partidos políticos (reemplazados por dos nuevos sancionados por el gobierno). A una fase más represiva (aunque con menos muertes que en Argentina o Chile) iniciada en 1968, le siguió una «apertura» gradual a partir de 1978.

Los regímenes que avanzaron por este camino acabaron conociéndose como estados «burocrático-autoritarios» y presentaron varias características comunes. Una fue el nombramiento para cargos públicos de gente con carreras altamente burocráticas: miembros del ejército, el funcionariado civil o corporaciones importantes. La segunda consistió en la exclusión política y económica de la clase trabajadora y el control de los sectores populares. La tercera fue la reducción o casi eliminación de la actividad política, en especial en las primeras fases del régimen: se definían los problemas como técnicos, no políticos, y se buscaban soluciones administrativas en lugar de llegar a acuerdos políticos negociados.

Por último, los gobiernos burocráticos-autoritarios trataron de reavivar el crecimiento económico mediante la consolidación de vínculos con las fuerzas económicas internacionales, revisando, una vez más, los términos de la dependencia del sistema mundial global. De forma específica, los dirigentes de estos regímenes forjaron con frecuencia alianzas con corporaciones multinacionales (vastas compañías internacionales como IBM, Philips, Volkswagen). Para conseguir crédito y ganar tiempo, también necesitaban llegar a acuerdos con sus acreedores, como los bancos estadounidenses y europeos y los organismos de préstamo internacionales (como el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo Interamericano). Este tipo de tareas se delegaron por lo común en los miembros más internacionales de la coalición original, con frecuencia jóvenes economistas preparados en instituciones estadounidenses, que solían identificarse con apodos irónicos, como los «Chicago boys» de Chile.

México, como veremos en el capítulo 7, representa una situación diferente, ya que el Estado había adquirido un control efectivo sobre los sectores populares antes de la caída económica de los años sesenta, por lo que

pudo hacer la transición del autoritarismo «populista» a una versión modificada del autoritarismo «burocrático» sin un brutal golpe militar. Ese control sobre los sectores populares se probó de nuevo durante la larga crisis económica que siguió a 1982. Centroamérica demuestra la volatilidad de las condiciones sociales donde el desarrollo económico se dio bajo la dictadura tradicional, sin dar lugar a una reforma creciente. Y Cuba, con su revolución social, ofrece un modelo más de transición y cambio.

Fase 5. Crisis, deuda y democracia (década de 1980-década de 1990)

El crecimiento económico durante los años setenta dependió del préstamo externo. En 1973 y 1974 y de nuevo en 1978 y 1979, la acción concertada de los países exportadores de petróleo llevó a unos aumentos abruptos en el precio mundial del crudo. Como no podían gastar todos sus inesperados beneficios (conocidos técnicamente como «rentas») en sus propios países, los potentados del Oriente Próximo hicieron depósitos masivos en bancos internacionales. Resultaba bastante lógico que estos bancos quisieran prestar este dinero a clientes faltos de capital pero merecedores de crédito, a unas tasas de interés provechosas. Los banqueros prominentes de Europa y Estados Unidos decidieron que los países latinoamericanos parecían buenos clientes potenciales, en especial si sus gobiernos se comprometían a mantener la ley y el orden.

Así comenzó un ciclo frenético de préstamos. Entre 1970 y 1980, América Latina incrementó su deuda externa de 27.000 millones de dólares a 231.000 millones, con unos pagos anuales (intereses más amortizaciones) de 18.000 millones. En seguida aparecieron las complicaciones. Bajó el precio de las mercancías, subieron las tasas de interés real y los banqueros se mostraron reacios a seguir concediendo créditos. Los países de la región experimentaron crecientes dificultades para cumplir con sus obligaciones de la deuda y en agosto de 1982 México declaró su imposibilidad de pagar. El gobierno estadounidense reunió frenéticamente un paquete de rescate para ese país, pero sólo proporcionó un respiro a breve plazo. Para cubrir los intereses únicamente, los principales deudores latinoamericanos —Argentina, Brasil y México— tenían que pagar por año el equivalente del 5 por 100 de su producto interior bruto (PIB). Atrapada en la disyuntiva de reducir sus ingresos por exportación y aumentar sus obligaciones de servicio de la deuda, América Latina se sumó en una crisis económica de una década.

A lo largo de los años ochenta, las autoridades internacionales —el gobierno estadounidense, los banqueros privados y especialmente el Fondo Monetario Internacional (FMI)— impusieron estrictos términos a los deudores latinoamericanos. Si los gobiernos emprendían reformas económicas profundas, podían hacerse merecedores de la exoneración de sus cargas con la deuda. Estas reformas casi siempre incluían la apertura de las economías al

mercado y la inversión exteriores, la reducción del papel del gobierno, el impulso a nuevas exportaciones y la toma de medidas contra la inflación. Este conjunto de ideas «neoliberales» requería «ajustes estructurales» en la política económica y significó casi el repudio total de las estrategias basadas en la industrialización en lugar de la importación antes tan alabadas.

 Casi sin elección, la mayoría de los gobiernos latinoamericanos aceptaron las condiciones patrocinadas por el FMI, al menos formalmente. Los países más pequeños, como Chile y Bolivia, lograron llevarlas a la práctica. México hizo progresos importantes hacia finales de la década de 1980, como Argentina, Brasil y Perú a principios de los años noventa. Brasil, el mayor país de todos, resistiría las fórmulas del FMI hasta mediados de los noventa.

En 1990, cuando se habían concedido más préstamos para cubrir el pago de los intereses, la deuda total latinoamericana subió a 417.500 millones de dólares. Desde 1982 hasta 1989, América Latina transfirió más de 200.000 millones de dólares a las naciones industrializadas, equivalentes a varias veces el Plan Marshall. El producto interior bruto per cápita descendió en 1981, 1982, 1983, 1988 y 1989, y mostró un descenso acumulativo de casi el 10 por 100 en esa década.

En este contexto de crisis económica, América Latina salió del autoritarismo, en muchos casos hacia la democracia. Las coaliciones que se hallaban tras los regímenes burocrático-autoritarios resultaron ser relativamente frágiles. Los industriales locales se sintieron amenazados por las corporaciones multinacionales y el instinto militar de aniquilar toda oposición militante levantó protestas de intelectuales, artistas y representantes del sector medio. Bajo el peso de la crisis de la deuda, también, algunos dirigentes militares decidieron volver a los cuarteles y dejar que los civiles se hicieran cargo de lo que parecía ser «un problema insoluble».

También brotó presión desde abajo. Un hecho notable de la política latinoamericana durante los años ochenta fue el surgimiento de la participación civil, cuando los ciudadanos comunes comenzaron a insistir en sus derechos y pidieron cuentas a los gobiernos. En parte fue el resultado de la unión entre las fuerzas de oposición producida por la brutalidad de la represión militar. En segundo lugar, existió un compromiso creciente con el proceso electoral, al clamar el pueblo por elecciones libres y justas. Por último, como consecuencia de todos estos procesos, apareció un nuevo cuadro de presidentes civiles, de clase media y con una buena preparación. Esto se vio claramente en Brasil, Argentina y Chile.

La mayoría de estos regímenes no fueron democracias completas. En muchos países, el ejército seguía manteniendo un poder considerable tras la escena y podía ejercer el voto sobre la política importante. Tras años de represión (incluida la eliminación física) a manos de dictadores militares, en la década de los noventa, la izquierda marxista estaba muy dividida, desmoralizada y desacreditada por el derrumbamiento del comunismo en la Europa del Este y la Unión Soviética, y en algunos países todavía se le negaba la participación efectiva en política. Los temas clave, como la reforma agraria, no tenían posibili-

dad de ser considerados con seriedad. Los derechos humanos sufrían violaciones constantes. Y muchas decisiones cruciales, en especial sobre la política económica, se tomaron en las altas esferas y de forma autoritaria.

Hacia inicios de los años noventa, América Latina había comenzado por fin a cosechar los frutos de haber aceptado rigurosas políticas de reforma. Con exclusión de Brasil (que pospuso sus reformas hasta 1994), la inflación promedio en toda la región cayó del 130 por 100 en 1989 al 14 por 100 en 1994. Parcialmente en respuesta a ello, los inversores internacionales miraron favorablemente a América Latina. La entrada de fondos privados del extranjero —principalmente de Europa, Japón y Estados Unidos— aumentó de sólo 13.400 millones de dólares en 1990 a la imponente suma de 57.000 millones en 1994. (En 1993 solamente, los inversores estadounidenses compraron más valores extranjeros en todo el mundo — cerca de 68.000 millones— que durante toda la década de los ochenta.) Y como resultado, el crecimiento promedio en América Latina creció de apenas el 1,5 por 100 en 1985-1990 al respetable nivel del 3,5 por 100 a inicios de los años noventa.

Los problemas no obstante persistieron. La mayoría de esta nueva inversión privada venía en la forma de inversiones de cartera (esto es, compras en bonos o acciones) antes que en inversiones «directas» (tales como plantas o fábricas). Las inversiones de cartera tienden a ser sumamente móviles y notablemente volátiles, y pueden dejar los países anfitriones casi instantáneamente. De ese modo cuando la Reserva Federal de Estados Unidos empezó a aumentar sus tipos de interés a comienzos de 1994, los inversores comenzaron a prever mejores ganancias en el mercado estadounidense. Esta expectativa llevó a una caída del 14 por 100 en la entrada de capital a América Latina en 1994. Y cuando México quebró en diciembre de 1994, los inversores extranjeros abandonaron los mercados en toda la región en lo que se llamó el «efecto tequila». La conclusión es dolorosamente clara: pese a los esfuerzos impresionantes y a menudo valientes por la reforma económica, América Latina todavía era vulnerable a los caprichos del mercado financiero mundial.

Había problemas estructurales también. Uno era la persistencia de la pobreza. Según los patrones internacionales, casi la mitad de la población de América Latina (46 por 100) es considerada «pobre» a comienzos de los años noventa. Un segundo problema de larga duración era la desigualdad. Desde que en los años cincuenta hubo datos accesibles sobre esta cuestión, América Latina ha exhibido la distribución del ingreso más desigual existente en el mundo —mayor que en África, el Sureste asiático y el Oriente Próximo— y esta situación estaba empeorando progresivamente. Hacia comienzos de los años noventa, el 10 por 100 más rico de las familias en América Latina recibía el 40 por 100 de la renta total; mientras que el 20 por 100 más pobre recibía menos del 4 por 100. De forma que la equidad social planteaba un desafío muy importante para la región.

Hacia mediados de los años noventa, América Latina presentaba un amplio espectro político (siempre al margen de la Cuba socialista). En un polo

CUADRO 2.1. Modelos de cambio en América Latina

	<i>Desarrollo económico</i>	<i>Cambio social</i>	<i>Resultado político típico</i>
Fase 1 (1880-1900)	Iniciación del crecimiento basado en la exportación-importación	Modernización de la élite, aparición del sector comercial y nuevos profesionales	Democracia oligárquica o dictadura integradora
Fase 2 (1900-1930)	Expansión de la exportación-importación	Aparición de los estratos medios, comienzos del proletariado	Democracia cooptada
Fase 3 (1930-principios de la década de 1960)	Industrialización en lugar de importación	Formación de la élite empresarial, fortalecimiento de la clase trabajadora	Populismo o democracia cooptada
Fase 4 (1960-principios de la década de 1980)	Estancamiento del crecimiento basado en la sustitución de importaciones; cierto crecimiento basado en la exportación en los años setenta	Agudización del conflicto, a menudo de clases	Régimen burocrático-autoritario
Fase 5 (principios de la década de 1980)	Escasez de divisas (acuciada por la deuda externa) conduce al estancamiento o recesión	Aumento de la movilización de los grupos de clase medios y bajos	Democracia electoral incompleta (con voto militar)

estaba lo que se podría llamar «autoritarismo electoral», que tenía su forma más dura en Guatemala; en el otro, la «democracia incompleta»; muchos casos se situaban entre ambos polos. Después de una larga lucha contra la tiranía, Chile recuperó otra vez su lugar, junto a Costa Rica, como el país más democrático de la región quizás —pese a la continuada autonomía de las fuerzas armadas. Mostrando un grado considerable de apertura política, Argentina y Brasil transfirieron el poder presidencial mediante elecciones libres y limpias. Aunque, debido particularmente a las dictaduras militares, las instituciones políticas (especialmente la justicia, la legislatura y la burocracia, así como los ministerios e institutos gubernamentales) se hallaban muy debilitadas en estos y otros países. Perú afrontó quizás el vacío institucional más ex-

tremo en toda la región. A mediados de los años noventa, se planteó una pregunta clave: ¿Tendrían las frágiles democracias latinoamericanas la fuerza y la competencia para gobernar? ¿Podrían desarrollar la capacidad institucional necesaria para consolidar las reformas recientes y para combatir los problemas de la pobreza y la desigualdad?

En resumen, la evolución de las sociedades principales de América Latina ha seguido un modelo en el que los desarrollos económico, social y político están vinculados. La adhesión a un modelo general ha variado de un país a otro, pero, con todo, resulta posible discernir las líneas generales de una experiencia histórica común desde finales del siglo xix. (El cuadro 2.1 presenta un resumen simplificado.) Se debe recordar que este conjunto de modelos se deriva de la historia de las naciones mayores y con más desarrollo económico de América Latina. Algunas de las regiones menos desarrolladas, como Centroamérica y Paraguay, han pasado sólo por algunas de estas transformaciones y su trayectoria se ha visto muy afectada por la oportunidad de su inicio. Del mismo modo que los factores globales han condicionado la experiencia histórica de los países mayores, condicionarán el futuro desarrollo de los países menos avanzados. En otras palabras, no hay garantías de que la historia de Argentina o Brasil anuncie el futuro de Honduras y Paraguay, como tampoco de que el conocimiento de la historia estadounidense del siglo xix nos permita predecir la evolución de Chile o México.

Mujeres y sociedad

Si juzgamos por los criterios convencionales, las mujeres han desempeñado sólo papeles menores en la transformación económica y política de América Latina. Una mirada a los cargos públicos importantes parece confirmar esta impresión. ¿Por qué ha sido así? Para responder, necesitamos primero examinar la cultura latinoamericana. Una norma central de ésta la constituyen las nociones de machismo, celebración de las expresiones sexuales y sociales de la potencia y virilidad masculinas. Durante siglos, esta idea ha proporcionado precepto y justificación para formas variadas de agresión y dogmatismo, que a su vez se han vinculado a la protección del honor. Parece que el machismo tuvo su origen en las concepciones medievales de la caballería y se adaptó firmemente al cambio social. En todo caso, sigue vigente.

La otra cara de este estereotipo de orientación masculina ha sido, para las mujeres, el culto mariano. Este mito recibe el nombre de la Virgen María y exalta las virtudes asociadas a la feminidad: semidivinidad, superioridad moral y fortaleza espiritual. Porque son las mujeres, según la concepción latinoamericana, las guardianas de la virtud y la propiedad. Se las describe con una capacidad infinita para la humildad y el sacrificio y, como figuras maternas, demuestran una tolerancia inquebrantable hacia las travesuras impulsivas (a menudo infantiles) de los hombres machos. Así, la típica imagen femenina es la de santidad y tristeza, a menudo identificada con los rituales de duelo: una

figura melancólica, vestida de negro y tocada con mantilla, arrodillada ante el altar y rezando por la redención de los hombres pecadores de su mundo protegido.

Por supuesto, la realidad no siempre se ha ajustado a las mitologías del machismo y del marijanismo. Pero ambos cultos han sido partes integrantes de la sociedad latinoamericana y han sido utilizados y explotados sin cesar por miembros de los dos性s.

El papel social de las mujeres se ha confinado en general a la esfera privada, en particular la familia, donde han reinado. Fundamentalmente entre las clases inferiores, han sido, desde los tiempos de la colonia, cabezas de familia, debido al abandono o la muerte del esposo. Y entre la élite de clases superiores, las familias extendidas han sido dominadas con frecuencia por matronas energéticas, figuras de abuela que mantenían una autoridad incontestable sobre asuntos familiares como el matrimonio, el lugar de residencia y la herencia.

Con el tiempo, los márgenes de la conducta femenina aceptable se han ensanchado mucho. En el siglo XIX, las mujeres de cultura solían ser anfitrionas de tertulias en las que los invitados se enzarzaban en discusiones sobre novelas y literatura. Algunas, como Clorinda Matto de Turner y Mercedes Cabello de Carbonero, de Perú, se convirtieron en escritoras distinguidas (tradición establecida por la monja mexicana del siglo XVII Sor Juana Inés de la Cruz). Pero persistieron las restricciones, como denunciaba Mariquita Sánchez, anfitriona de un famoso salón de Buenos Aires, que describía la condición femenina en versos irónicos.

Durante el siglo XX, el proceso de cambio se aceleró. Dentro de los estratos de clase media en especial, las jóvenes dejaron de ir acompañadas a los actos sociales (en parte porque la familia ponía menos en juego en caso de un matrimonio poco conveniente). Las mujeres han entrado en el mercado laboral y se han distinguido como maestras, profesoras, dentistas, médicas e incluso abogadas. En las grandes ciudades metropolitanas, su estilo de vida apenas puede distinguirse del de las mujeres que viven en París o Nueva York.

Sin embargo, las mujeres latinoamericanas han entrado muy lentamente en la arena pública (cuando no se les ha prohibido entrar). Como revela el cuadro 2.2, obtuvieron muy tarde el derecho al voto en muchos países, en la mayoría en los años treinta o cuarenta (y hasta 1961 en Paraguay). Los estudios indican que muchas mujeres interpretan este derecho como un deber cívico más que como una inclinación partidista. En muchas ocasiones, parecen haber votado por deferencia a las preferencias de sus esposos.

Pero no siempre. En 1958, por ejemplo, las mujeres chilenas inclinaron la balanza en favor del candidato presidencial conservador (cuando los hombres habían otorgado la mayoría al oponente radical). Y en 1970, en el mismo país, las mujeres de clases bajas proporcionaron una importante base de apoyo electoral para la izquierda victoriosa. Es necesaria una mayor investigación sobre el tema (era fácil en Chile, donde por ley mujeres y hombres vota-

CUADRO 2.2. Sufragio femenino en América

	Año en el que se reconoció el sufragio nacional femenino
Estados Unidos	1920
Ecuador	1929
Brasil	1932
Uruguay	1932
Cuba	1934
El Salvador	1939
República Dominicana	1942
Guatemala	1945
Panamá	1945
Argentina	1947
Venezuela	1947
Chile	1949
Costa Rica	1949
Haití	1950
Bolivia	1952
México	1953
Honduras	1955
Nicaragua	1955
Perú	1955
Colombia	1957
Paraguay	1961

Fuente: Elsa M. Chaney, *Supermadre: Women in Politics in Latin America*, University of Texas Press, Austin, 1979, p. 169.

tan en casillas separadas), pero todo indica que las mujeres están afirmando cada vez más posiciones independientes en las elecciones clave.

También han mostrado su influencia de otros modos. En Argentina, formaron un bloque impresionante en el movimiento peronista de los años cuarenta y cincuenta. Son activas en los rituales de la política mexicana. Han participado en manifestaciones clave: una fue la protesta de las cacerolas contra el gobierno de Salvador Allende en Chile; otra, que comenzó a finales de los años setenta, fue la vigilia semanal de las «madres de la Plaza de Mayo», en busca de información sobre sus familiares y seres queridos que habían «desaparecido» en Argentina. Han tomado parte en los movimientos revolucionarios de México, Cuba y Nicaragua, y asumieron cargos de importancia y liderazgo en muchas organizaciones de base que surgieron en los años ochenta y noventa.

Aun después de décadas de progreso, han conseguido relativamente pocos cargos políticos importantes, entre el 8-10 por 100 de cargos legislativos y ministeriales a mediados de los noventa. La primera mujer presidenta (Isabel



Inferna y demacrada pero cautidora, Eva Perón saluda a la multitud durante el desfile en coche con ocasión de la segunda investidura de su esposo como presidente en junio de 1952; murió al mes siguiente. (United Press International.)

lartínez de Perón, 1974-1976) llegó al cargo por la muerte de su esposo. Y cuando han ocupado un puesto, las mujeres latinoamericanas suelen proyectar en sus tareas un claro enfoque femenino. Escuchemos por ejemplo a Evita Perón, quizá la mujer más poderosa en la historia del hemisferio occidental: de este modo, Evita, voluntaria y con ambición política, atendía los temas del mariánismo.

En este gran hogar de la patria, yo soy como cualquier otra mujer en cualquiera de los innumerables hogares de mi pueblo. Igual que todas ellas, pienso primero en mi esposo y mis hijos ... Es que me siento verdaderamente la madre de mi pueblo.

En el contexto de los constreñimientos (y ventajas) proporcionados por la cultura, las mujeres latinoamericanas no han desarrollado un movimiento feminista importante, aunque se ha iniciado en Brasil y otros países. En la mayoría de ellos, han operado dentro de las categorías socioeconómicas y políticas prevalecientes. Como Elsa M. Chaney predijo en 1979, «las mujeres la-

tinoamericanas probablemente no repetirán los modelos de liberación femenina estadounidense o de Europa Occidental. Tienen su realidad propia. Cualquier cosa que hagan, las mujeres latinoamericanas decidirán su curso de acción en el contexto de su cultura y aspiraciones».

Un marco para establecer comparaciones

Uno de los propósitos de este libro es proporcionar una base para el análisis comparativo de América Latina contemporánea, lo que conlleva tres pasos: primero, identificar los modelos y procesos compartidos por las sociedades latinoamericanas; segundo, identificar las diferencias entre sus experiencias históricas individuales; y, tercero, y lo más difícil, averiguar las razones de esas diferencias.

Hasta ahora hemos presentado un esquema general para describir la transición socioeconómica y política de América Latina. Para comprender las similitudes y diferencias entre varios países, necesitamos responder un conjunto común de cuestiones fundamentales. De acuerdo con ello, hemos enfocado los casos prácticos que siguen con varias preguntas en mente:

1. ¿Cómo ha evolucionado la estructura de clase? ¿Cuáles son las clases sociales más importantes? ¿Faltan algunas? En algunos casos, los cambios económicos han conspirado para crear ciertos agrupamientos y para evitar la formación de otros. No toda sociedad latinoamericana ha tenido una élite rural o industrial, por ejemplo, y la ausencia de un agrupamiento social puede tener un efecto tan importante sobre el orden social como la presencia de otros.

2. ¿Qué clases sociales tienen mayor poder? ¿Quién controla la economía y quién domina la escena política? ¿Cuánta competencia efectiva existe entre los grupos?

3. ¿Qué agrupamientos forman alianzas? ¿Existe alguna coalición social? ¿En qué intereses se basan? ¿Se encuentran los trabajadores industriales más dispuestos a formar una alianza con los dirigentes empresariales que, por ejemplo, con los campesinos que comparten su posición social de clase baja?

4. ¿Qué autonomía tiene el Estado? ¿Representa el gobierno los intereses de una sola clase social (o coalición) o se mantiene al margen de tales lealtades? Si es militar, por ejemplo, ¿sus dirigentes procuran permanecer por encima y más allá de los conflictos de la sociedad civil?

Los factores internacionales han desempeñado papeles clave en la historia latinoamericana, en particular con respecto a los asuntos económicos. Esta dimensión da lugar a preguntas adicionales:

5. En un momento dado, ¿qué clase de actividad se desarrolla en el centro de la economía internacional? ¿Cuál es la apariencia y la forma de la in-

dustrialización en Europa y los Estados Unidos y qué tipo de limitaciones e incentivos plantea para los países latinoamericanos?

6. ¿Cómo afecta la relación entre las economías del centro y la periferia del sistema la composición y disposición de las clases sociales dentro de las sociedades latinoamericanas? Un país exportador de carne (Argentina), por ejemplo, ¿podría tener una estructura de clases diferente de un país exportador de cobre (Chile)? ¿Qué implicaciones tendría?

7. ¿Cómo se han arreglado los países latinoamericanos para aprovecharse de su lugar en la economía global? La experiencia reciente ha sugerido que la posesión de petróleo, por ejemplo, puede proporcionar a países como México, Venezuela e incluso Ecuador una oportunidad económica e influencia internacional (y dificultades a largo plazo también). ¿Ha habido casos similares en el pasado?

8. ¿Cuáles son los factores políticos predominantes en la escena internacional? La presencia (o ausencia) de una guerra fría Oriente-Occidente, por poner un ejemplo obvio, podría ayudar a determinar la gama posible de elecciones para los políticos latinoamericanos. También, en momentos concretos, esta preocupación puede trasladarse a otro factor: la proximidad geográfica con Estados Unidos. Debido a consideraciones de naturaleza geopolítica acerca de la supuesta «seguridad nacional», Estados Unidos muy bien puede otorgar un margen de acción mayor a un país como Argentina que, digamos, a las naciones de la cuenca del Caribe.

Ofreceremos un análisis comparativo de los países clave en el epílogo. Nuestra tarea inmediata es pasar a los casos prácticos.

Argentina: prosperidad, estancamiento y cambio

La actual Argentina fue en un principio un lugar desatendido dentro del imperio colonial hispanoamericano. A diferencia de México y Perú, la región del Río de la Plata carecía de metales preciosos, a pesar de su nombre. Tampoco tenía una población nativa estable. Los indios eran escasos y nómadas, por lo cual los españoles no dispusieron de una fuente de trabajo abundante. Su mayor recurso era la fertilidad de su tierra, una de las más ricas del mundo, ya que hay marga a menos de medio metro de profundidad en ciertas zonas. Otra ventaja era la situación de Buenos Aires, que le permitiría convertirse en un gran puerto si se realizaba el dragado necesario. No obstante, estas condiciones no produjeron una economía dinámica en el periodo colonial, pues no se contaba con tecnología ni con mercado para explotar las fértiles pampas. El puerto sirvió en gran medida para canalizar el rentable mercado de contrabando por la Suramérica española.

A pesar de que su economía colonial fuera modesta, sus características geográficas son importantes para entender el desarrollo posterior de la región. El centro más próspero lo constituía el noroeste de la actual Argentina y se hallaba vinculado a Perú, ya que hasta 1776 formó parte de ese virreinato y su desarrollo económico estuvo estrechamente ligado a los embarques rumbo al norte de algodón, arroz, trigo y artículos de cuero. La región costera de Buenos Aires era menos activa. Su mayor industria consistía en el contrabando, pues los altos aranceles aduaneros de Lima hacía atractivo utilizar la ruta del Río de la Plata para evitar los pagos. Sólo en 1776, año en que se convirtió en la sede del nuevo virreinato, Buenos Aires alcanzó a tener importancia. Desde entonces, el poder empezó a desplazarse del noroeste a la costa meridional, al convertirse el puerto de Buenos Aires en la entrada de las importaciones europeas, algunas de las cuales competían de forma directa con la producción del noroeste.

Las guerras de independencia supusieron un golpe para el virreinato de La Plata, pero no ocasionaron el daño a la propiedad que soportó México (y Uruguay). El sentimiento antiespañol unió a la élite local y produjo lo que se convertiría en un duradero mito de la valentía militar, cuando el general José de San Martín venció a las tropas leales a la corona española. En la década

de 1820 habían conseguido la independencia y la aristocracia latifundista contemplaba sus dominios con satisfacción. Continuaban existiendo industrias a pequeña escala y comunidades comerciales en la zona central y norte-oeste del interior. En la costa no había esa base artesana, pero los estancieros cercanos producían cueros y carne en salazón para exportar y la ciudad de Buenos Aires se fue convirtiendo en un puerto marítimo de gran actividad. Y, lo que es más importante, Buenos Aires y la región interior del norte al oeste se fueron separando cada vez más.

La lucha por la nación

Las décadas siguientes a la independencia contemplaron una batalla entre argentinos por la dirección que debía tomar el desarrollo económico de su nuevo país. Una facción la constituyan los «unitarios», principalmente de la provincia (y ciudad) de Buenos Aires. Querían nacionalizar su ciudad portuaria: despojarla de su autonomía y luego convertirla en una base desde la cual se redujeran las barreras provinciales al comercio para abrir todo el país al tráfico internacional.

El segundo grupo era el «federalista», formado por gente del interior. Estaban de acuerdo con la necesidad de nacionalizar la ciudad de Buenos Aires porque querían repartir su recaudación por aduanas entre todas las provincias. Al mismo tiempo, deseaban mantener la autonomía provincial, en especial la facultad de imponer aranceles interprovinciales para proteger las industrias locales.

Al tercer grupo también lo llamaban «federalista», pero era diferente: sus miembros eran de la provincia de Buenos Aires y se oponían a la nacionalización de la ciudad portuaria, porque significaba la pérdida del monopolio provincial sobre sus ingresos aduaneros. También eran partidarios del libre comercio. En realidad, este tercer grupo abogaba porque todo continuara igual.

El conflicto entre los tres grupos continuó durante las décadas de 1830 y 1840. Al final, el asunto lo decidió uno de los famosos dictadores de América Latina: Juan Manuel de Rosas, ganadero de la provincia de Buenos Aires con ambiciones políticas. Poseía una presencia física imponente, capaz de intimidar a los rudos gauchos, y obtuvo el gobierno de su provincia en 1829. Su ambición no se detuvo ahí. Quería gobernar toda Argentina y para ello puso en práctica una política que favorecía a los estancieros y propiciaba la consolidación de una aristocracia latifundista. Era un ardiente federalista de Buenos Aires y, lo que es más importante, poseía el carisma militar y los seguidores para lograr su objetivo de someter a los caudillos rivales «para que nadie de esta raza de monstruos quede entre nosotros», según declaró. A medida que consolidó su autoridad personal, extendió el poder de la provincia de Buenos Aires sobre el país y edificó una nación sobre el principio del federalismo. Al mismo tiempo, organizó una poderosa maquinaria gubernamental.

mental que completó con una especie de escuadrón coercitivo (Mazorca) para aterrorizar a todo aquel que osara oponerse al dictador, incluso sólo por no lucir el color rojo oficial.

Además de sus habilidades militares y políticas, Rosas era un nacionalista tan ardiente, que muchos extranjeros lo consideraban xenófobo. Quiso aplicar en su política exterior las tácticas que habían resultado tan bien en la interna. «Nutrido por las máximas monopolistas de la legislación colonial española —señalaba un diplomático francés de visita en 1850—, no entiende ni permite el comercio a no ser que esté escudado por aranceles proteccionistas y reglamentaciones rigurosas.» Para su mala fortuna, había logrado suscitar una poderosa alianza opositora en la que se incluían Brasil y Uruguay, así como el general Justo José de Urquiza, que estaba al mando de las fuerzas que lo vencieron en 1852. De inmediato, Rosas se exilió en Inglaterra. A pesar de su caída ignominiosa, había conseguido crear la unidad de Argentina con unas provincias tan dispares. Desde el momento de su derrota se convirtió en una figura legendaria. Los nacionalistas lo adoptaron como prototipo del patriota argentino que buscaba el desarrollo nacional contra las fuerzas extranjeras, deseosas de evitar que el país se convirtiera en una nación plena. Recuerda a Diego Portales de Chile y Agustín de Iturbide de México, que también se convirtieron en gobernantes autocráticos de mano dura durante la década que siguió a la independencia. Pero Rosas gobernó mucho más que los otros dos.

Durante su etapa, muchos intelectuales argentinos, como Domingo Sarmiento y Esteban Echeverría, huyeron del régimen represivo. Detestaban el éxito político del caudillo gaucho de mano dura. Sarmiento lo describió como el hombre «que aplicó el cuchillo gaucho a la cultura de Buenos Aires y destruyó el trabajo de siglos de civilización, derecho y libertad». Estos intelectuales soñaban con el día en que pudieran hacerse con el control de Argentina y conducirla hacia el camino del gobierno representativo liberal. Con la caída de Rosas en 1852 llegó su oportunidad.

Se hizo con el poder Justo José de Urquiza, federalista del interior. Comenzó convocando una asamblea constituyente, que promulgó una constitución en 1853, seguidora fiel del ejemplo estadounidense. Iba a haber un sistema federal, con un presidente elegido por un colegio electoral, cuyos miembros serían designados a través del voto popular. El congreso federal tenía dos cámaras: la de los diputados, elegida por voto directo, y la de los senadores, elegida por los poderes legislativos provinciales. Las provincias iban a retener todos los poderes que no estuvieran otorgados de forma específica al gobierno nacional, aunque había una disposición que autorizaba a éste a intervenir en ellas cuando lo considerara necesario.

No obstante, la controversia acerca de la posición de Buenos Aires distaba mucho de haber concluido. La provincia de Buenos Aires, en protesta por la nacionalización de la ciudad en la nueva constitución, rehusó unirse a la nueva confederación. Al ser vencida en una breve guerra civil en 1859, se la forzó a capitular. Dos años después, volvió a alzarse con Bartolomé Mitre a la cabeza y se hizo con el control de la confederación.

En 1862 Mitre tomó posesión como presidente y lanzó una nueva campaña para unificar Argentina. Durante las dos décadas siguientes, los liberales continuaron en el poder. Le siguió en la presidencia Domingo Sarmiento, autor de *Facundo* (1845), el ataque literario más famoso contra los caudillos gauchos. Su objetivo real era Rosas, cuyo gobierno Sarmiento había pasado exiliado en Chile. Creía ardientemente en la educación pública al modo estadounidense e instaba a los argentinos a seguir su modelo. Una desviación en el camino fue la dilatada guerra contra Paraguay (1865-1870), en la que ese diminuto país mantuvo a raya a Argentina, Brasil y Uruguay durante cinco años. El motivo fue el desatinado intento del dictador paraguayo, Francisco Solano López, de ejercer un control monopólico sobre el acceso a la cuenca del río Paraná, tan importante para todos.

El tercer presidente liberal fue Nicolás Avellaneda. Durante su mandato (1874-1880), Argentina emprendió su última conquista territorial importante, las «guerras indias». Las provincias del sur y el oeste de Buenos Aires hacían mucho tiempo que padecían incursiones indias. Entonces, una fuerza militar al mando del general Julio Roca sometió o exterminó a todas las bandas. El año 1880 también trajo la solución al asunto problemático de la posición de la ciudad de Buenos Aires. Se la separó de la provincia, a semejanza del distrito de Columbia en Estados Unidos, pero se otorgó a sus ciudadanos derechos de voto plenos en las elecciones nacionales.

Hacia 1880 Argentina entró en un periodo notable de crecimiento económico sostenido. Desde la expulsión de Rosas, los liberales habían disfrutado del poder el tiempo suficiente para establecer las bases de la rápida integración del país en la economía mundial. Ahora su dirigente era el general Roca, héroe de la «Conquista del Desierto». El simbolismo difícilmente podía mejorarse: el combatidor de los indios presidiendo la europeización de una república suramericana.

La élite política tenía pocas dudas acerca de su misión. Como sus semejantes de Brasil y México, los políticos e intelectuales argentinos consideraban que aplicaban los verdaderos principios de la ciencia y la filosofía europeas. Creían en el liberalismo económico y en el político. Citaban la pseudociencia de Herbert Spencer, sosteniendo que si gobernaba Argentina una aristocracia, era el resultado de la selección natural. Como tenían a los gauchos y los indios sometidos, la élite esperaba confiada enriquecerse y, por lógica liberal, enriquecer de ese modo al país.

Visión general: crecimiento económico y cambio social

El éxito económico argentino del periodo 1880-1914 se basó en su capacidad para proporcionar los bienes agrícolas que necesitaba el mundo industrial del Atlántico Norte. Con la Revolución Industrial, Europa Occidental, en especial Inglaterra, se estaba convirtiendo en un importador neto de productos alimenticios. Argentina tenía una ventaja comparativa al producir dos artícu-

los clave: carne y trigo. Los importantes avances tecnológicos habían hecho práctico embarcar los productos alimenticios para los muchos miles de millas marítimas que separaban Buenos Aires de Londres y Amberes. Uno de estos avances fue el barco de vapor, mucho más rápido y con un ritmo más regular que el barco de vela. Otro fue el proceso para refrigerar la carne (las plantas argentinas se llamaban frigoríficos), que posibilitaba obtener un producto más sabroso y sustancioso que la carne conservada mediante el secado (cecina).

Gracias a un recurso natural, Argentina estaba muy bien dotada para proveer de productos alimenticios: sus pampas se contaban entre las tierras más fértiles del mundo. Pero carecía de otros dos factores esenciales, capital y fuerza de trabajo. Inglaterra, su principal cliente, envió pronto el primero en forma de inversión en el ferrocarril, los muelles, los almacenes de embalaje y los servicios públicos. También llegó en forma de compañías inglesas que se ocuparon de los embarques, los seguros y la banca. Casi toda la infraestructura del sector de exportación estaba financiada por los británicos. Esta afluencia de capital era exactamente lo que la élite política argentina consideraba esencial para el desarrollo de su país.

El otro factor económico que faltaba era la fuerza de trabajo. Su solución también vino de Europa, pero no de Inglaterra. Los tan necesitados trabajadores llegaron del sur de Europa, sobre todo de Italia. Entre 1857 y 1930 Argentina recibió una inmigración neta (inmigrantes menos emigrantes) de 3,5 millones, lo que significó que durante ese tiempo cerca de un 60 por 100 del aumento de la población total se pudiera atribuir a ella. De estos inmigrantes, alrededor de un 46 por 100 eran italianos y un 32 por 100 españoles. Su efecto demográfico fue mayor que en los demás países importantes del hemisferio occidental. En 1914, en torno al 30 por 100 de la población había nacido fuera del país. (En ese mismo momento, en Estados Unidos, otro puerto para los emigrantes europeos, sólo un 13 por 100 de la población había nacido fuera.) Como resultado, Argentina iba a contar con un carácter inequívocamente europeo, lo que provocaría tensión entre los argentinos en cuanto a su identidad nacional real.

La movilidad de esta fuerza de trabajo inmigrante fue un ejemplo de manual. Se contrataba y despedía a los trabajadores por estrictos motivos económicos, lo que generó un considerable movimiento de obreros de ida y vuelta entre Italia y las pampas argentinas (que les ganó el nombre de «golondrinas»). También había un flujo constante entre la ciudad y el campo, y Buenos Aires solía atraer una gran parte de los extranjeros.

En este periodo también surgió una pequeña industrialización, que no supuso una amenaza para la orientación básica hacia la agricultura de exportación de la economía. La mayor parte de la industria se dedicaba a procesar productos del campo, como lana y carne de vaca, lo que llevaba a sus dueños a identificar sus intereses con los de la agricultura.

El rápido crecimiento económico del periodo 1880-1914 tuvo profundas implicaciones sociales. Al principio había una élite latifundista en la cúspide y

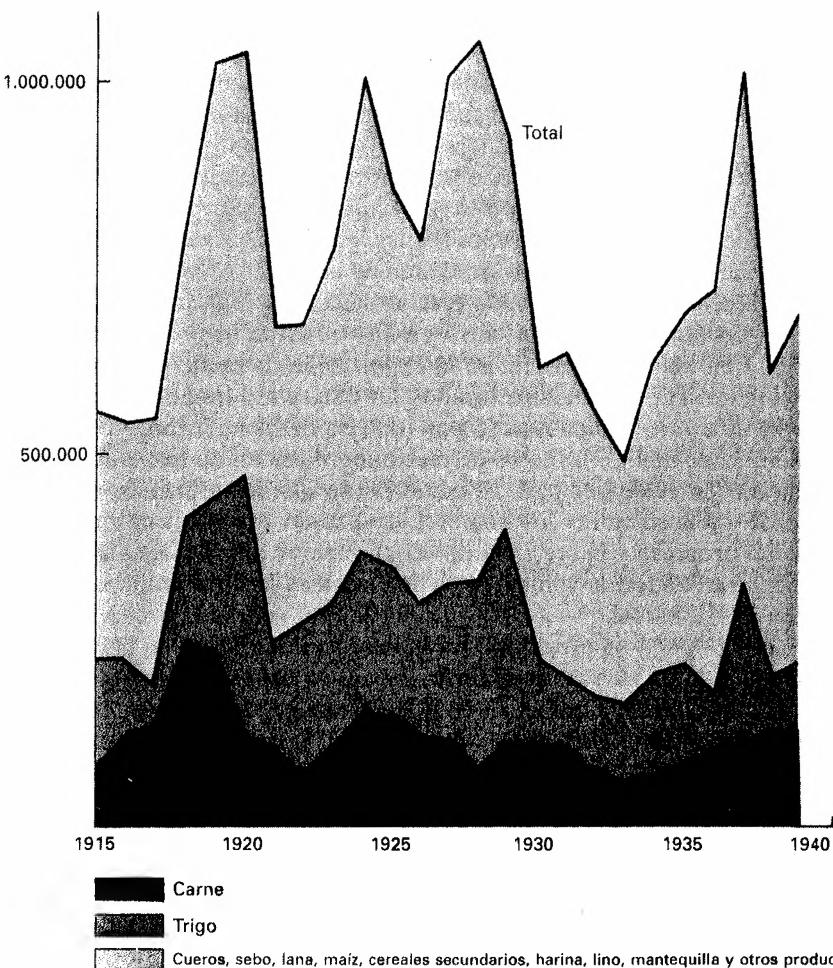
gauchos y obreros asalariados en la parte inferior. Con la marea épica de la inmigración, la población nacional aumentó de 1,7 millones de habitantes en 1869 a 7,9 millones en 1914. A medida que mejoraba la economía, aparecieron nuevos nichos. Los inmigrantes llegaron primero a las estancias, pero luego se trasladaron a las ciudades. Italianos y españoles llegaron para convertirse en colonos, arrendatarios de granjas y obreros rurales. En el sector urbano aparecieron otros trabajos: en el transporte (especialmente el ferrocarril), las industrias de procesamiento y de servicios (banca, gobierno). La explotación de la riqueza agrícola produjo una intrincada red de intereses económicos y contribuyó a la creación de una economía rural-urbana compleja.

Así, la economía argentina entró en su «edad de oro», un periodo de prosperidad en aumento, basada en la exportación de carne y trigo, y en la importación de artículos manufacturados. De 1860 a 1914, su PIB subió a una tasa media anual de al menos un 5 por 100 (los datos anteriores a 1900 son incompletos). Es una de las tasas de crecimiento sostenido más altas que se ha registrado en cualquier país. El comercio se incrementó de forma constante desde 1880, mientras los hombres de Estado exponían optimistas las virtudes del progreso y el crecimiento económico. A muchos les parecía que Argentina, tan bendecida con recursos naturales, se hallaba en la vía de una expansión interminable.

Pero el país pagó un precio por este éxito. Su integración en la economía mundial significó que las intensas fluctuaciones externas tuvieran severas repercusiones internas. Un descenso de la demanda europea de productos alimenticios produjo una disminución de las exportaciones, que pudo provocar una depresión en toda la economía argentina, destino compartido con Australia, otra exportadora de productos agrícolas de zona templada. Y como muestra la figura 3.1, el valor en pesos de las exportaciones argentinas varió considerablemente durante el periodo de 1915 a 1939: subió durante la primera guerra mundial, bajó a comienzos de la década de 1920, luego subió y bajó, y volvió a subir y bajar cuando llegó la Gran Depresión de los años treinta. Fue uno de los modos por los que Argentina, como otros países exportadores latinoamericanos, hizo su economía dependiente del centro industrializado del sistema mundial. Al estar supeditada al comercio, su condición económica se veía muy determinada por tendencias y decisiones externas al país.

Pero el mercado internacional para la carne y el trigo era relativamente estable, al menos comparado con la demanda de mercancías como azúcar y café (como veremos más adelante). El comercio cárnico, en particular, se mantuvo bastante firme durante la década de 1930. Tras recuperarse de la sequía y otras demoras, la demanda de trigo y otros cereales también se recuperó. Por lo tanto, la Depresión golpeó con fuerza a Argentina, pero no con tanta rapidez —o de forma tan completa— como lo hizo con otros países de América Latina.

Otra forma de dependencia económica apareció en el ámbito financiero, ya que el sistema bancario argentino se vinculó de forma periódica con el pa-



3.1. Exportaciones argentinas, 1915-1939 (en miles de pesos). *Fuente:* Vicente Vázquez-Presedo, *Estadísticas históricas argentinas (comparadas)*, vol. II, Buenos Aires, Ediciones Macchi, 1976, pp. 190-193.

trón oro. Las fluctuaciones comerciales a corto plazo causaron cambios agudos en sus reservas de oro, que contrajeron o aumentaron sus reservas internas de dinero e hicieron de la economía argentina un rehén de los movimientos de divisas internacionales.

Existía, además, otro vínculo con la economía mundial que planteaba más problemas: el importante papel desempeñado por el capital y los hombres de negocios extranjeros. El auge económico argentino, junto con las garantías gubernamentales, atrajeron el capital del exterior. De 1900 a 1929, el

35 por 100 de la inversión en activo fijo total provino de extranjeros. Gran Bretaña era la principal inversora, seguida por Francia y Alemania. Este alto grado de participación económica extranjera se convirtió más tarde en el objetivo principal de los que abogaban por la nacionalización de la economía. Tal dependencia de los recursos exteriores también contribuyó a que Argentina siguiera dudando de sí misma: existía una renuencia recurrente a creer que los argentinos pudieran siquiera esperar lograr una economía autosuficiente, especialmente en la industria.

El crecimiento de la exportación-importación también creó desigualdades internas, en especial entre las distintas regiones geográficas. Mientras que la prosperidad bendecía a las pampas y Buenos Aires, las partes del interior se estancaban. Las provincias centrales y noroccidentales como Jujuy, La Rioja, Santiago del Estero y Salta padecían el declive económico y la decadencia social. Sólo Mendoza, Tucumán y Córdoba se escapaban de este destino gracias a su producción de vino y azúcar. Durante todo el siglo xix, el interior había luchado para evitar su muerte a manos de Buenos Aires. Perdió y el precio de su derrota fue la pobreza.

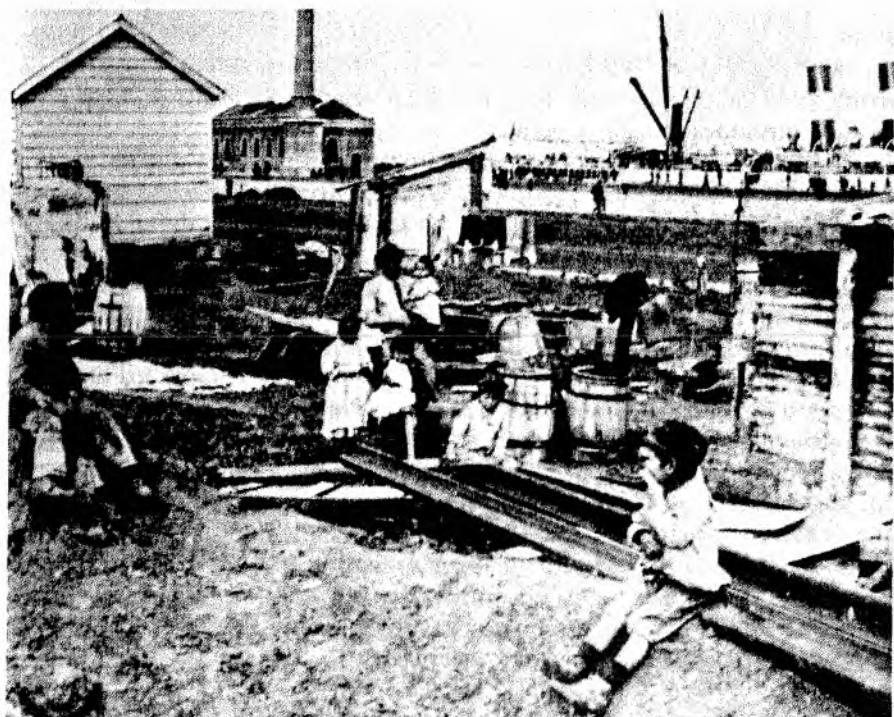
Por supuesto, también había desigualdades dentro de las regiones prósperas. En el sector rural, los ricos estancieros construían elegantes chalets, mientras que los arrendadores de granjas nacidos fuera del país y los trabajadores nativos desplazados arrastraban una existencia magra. En las ciudades, en Buenos Aires en particular, los aristócratas, elegantemente ataviados, se reunían en clubs de estilo europeo, mientras que los trabajadores luchaban por proteger a sus familias de la inflación que parecía siempre ir por delante de sus salarios. El «boom» argentino, al igual que el de otros muchos países capitalistas del momento, facilitó una considerable movilidad social hacia arriba, pero también fomentó enormes diferencias de ingresos, que acabaron creando tensiones sociales y políticas.

También hubo tensiones en el ámbito cultural. Cuando el país experimentó su impresionante explosión de crecimiento económico, se hizo cada vez más obvio que los argentinos aún no tenían un sentido definido de nacionalidad. Esto se debía a que el flujo de inmigrantes, la mayoría concentrado en Buenos Aires, había acentuado el antiguo contraste que se daba entre la capital cosmopolita, densamente poblada y europeizada, y la sociedad tosca, orientada hacia la ganadería, del vasto interior escasamente poblado. Había agudizado este contraste la agria batalla mantenida entre los liberales y Rosas, a quien consideraban la encarnación del gaucho primitivo que nunca podría levantar una nación civilizada, sino sólo destruirla.

A comienzos del siglo xx, este dogma liberal fue puesto en tela de juicio por una nueva generación de escritores nacionalistas como Ricardo Rojas que, según sus palabras, quería «despertar a Argentina de su coma». Para él, las verdaderas fuentes de la nacionalidad argentina eran los indios y la tierra. Al igual que otros nacionalistas, consideraba el *Martín Fierro*, poema clásico sobre la figura del gaucho (que apareció en 1872), un importante documento para la creación de la conciencia nacional.



Esta diferencia en las condiciones de vida refleja la desigualdad social que acompañó la expansión económica argentina desde la década de 1880. *Arriba*, lujosas residencias de las familias aristocráticas de Buenos Aires; *abajo*, casetas temporales para los obreros en la zona portuaria de la ciudad en torno a 1910. (Cortesía del Archivo General de la Nación, Buenos Aires.)



Una de las obras más famosas dentro de la tradición del nacionalismo de Rojas fue *Radiografía de la Pampa* (1933), de Ezequiel Martínez Estrada, una extensa denuncia de la élite argentina por haber tratado de disfrazar la realidad de su país con los aderezos de la civilización europea. Para él, el hipódromo y el campo de fútbol eran dos partidos políticos: el primero sostenía la aventura, la inestabilidad, la ambición, el centralismo y la monarquía; el último representaba el trabajo, la lucha apasionada, las disputas comprometidas, el caos y la democracia. El Jockey Club y las asociaciones deportivas apoyaban tendencias opuestas y agrupaban fuerzas antagónicas.

Mientras tanto, la capital iba desarrollando su cultura propia. La principal influencia extranjera era la italiana y en la zona de los muelles surgió un dialecto único, el *lunfardo*, mezcla de español e italiano. Fue un fenómeno estrechamente de la clase trabajadora, al igual que el tango, el famoso y sensual baile y la música que lo acompañaba, originado en los arrabales (algunos dicen que fue en los burdeles) y que sólo se volvió respetable en Argentina tras tomar París por asalto en vísperas de la primera guerra mundial. En la década de 1920, ya se había adoptado en los círculos argentinos más de moda y Carlos Gardel, el inmortal compositor y cantante de tangos, había convertido su música en un arte elevado. Su muerte en accidente de aviación en 1935 causó la mayor efusión de duelo que jamás había visto Buenos Aires. A medida que avanzaban los años treinta, la cultura popular estadounidense penetraba en la Argentina urbana a buen ritmo, para ira de los intelectuales nacionalistas.

Uno de los efectos sociales más cruciales de la expansión argentina resultó ser algo que no sucedió: *el país nunca desarrolló un campesinado*, al menos no lo desarrolló en las zonas de pastoreo de la pampa y en las cruciales provincias costeras. La Conquista del Desierto de la década de 1870 casi eliminó a la población india y la tierra se distribuyó en seguida en grandes extensiones que se dedicaron a la cría de ganado y la siembra de grano. En contraste con la política aplicada en la zona de las Praderas estadounidenses, Argentina no dio su tierra a familias de granjeros o a colonos individuales. Las explotaciones ganaderas no requerían mucha mano de obra, ya que el alambre con púas era suficiente para contener los rebaños; y aunque era frecuente que el trigo lo cultivaran colonos extranjeros que arrendaban la tierra, no constituyeron un grupo social influyente. Como resultado, no existió en Argentina un campesinado clásico como el de México, Chile o el noreste de Brasil.

Este hecho tendría implicaciones de largo alcance. Significó, por ejemplo, que la reforma agraria nunca se convirtiera en un asunto vital y simbólico como lo fue en países tales como México. No era que la tierra estuviera mejor distribuida en Argentina, sino simplemente que allí no había habitantes antiguos para presentar una reclamación histórica sobre ella.

Además, la ausencia de un campesinado significó que no pudiera formar una base de poder y, lo que quizás sea más crucial, que no estableciera coaliciones con otros grupos sociales. Cuando los latifundistas se sintieron desa-

fiados, no pudieron recurrir a la alianza consolidada por el tiempo (aunque paradójica) con el campesinado que se dio con frecuencia en otros países, y los trabajadores urbanos no pudieron unirlo a sus filas en una guerra de base amplia entre las «clases populares» y el sistema social en general.

Sin embargo, en las grandes ciudades los trabajadores asalariados eran numerosos e inclinados a la organización. Según un cálculo, los obreros manuales suponían cerca del 60 por 100 de la población de la ciudad de Buenos Aires a comienzos del siglo XX. A su vez, alrededor de tres quintos de la clase trabajadora estaba formada por inmigrantes que mantenían su ciudadanía de origen, generalmente italiana y española.

Los primeros esfuerzos por organizar la fuerza laboral argentina se vieron influidos por los precedentes europeos. En las décadas de 1870 y 1880, anarquistas y socialistas europeos exiliados comenzaron una organización vigorosa y en 1895 se fundó el Partido Socialista. Los socialistas siguieron el modelo europeo: un partido parlamentario, comprometido con una estrategia electoral y evolucionista. En 1900, era de esperar que el Partido Socialista se convirtiera en una importante voz política para la clase trabajadora argentina, pero no fue capaz de atraer a los trabajadores inmigrantes. Las peticiones socialistas de reforma a través del sistema político cayeron en oídos sordos.

La clase trabajadora urbana resultó más receptiva a otro mensaje, proveniente de los anarquistas. Su Federación Obrera Regional Argentina (FORA) cautivó la imaginación de los trabajadores con sus llamamientos a la acción directa. Las huelgas locales y generales apoyadas por la FORA tenían el efecto suficiente para preocupar al gobierno, que asumía que todo problema laboral debía ser obra de agitadores extranjeros. Por ello, el Congreso aprobó la Ley de Residencia en 1902, que capacitaba al gobierno para deportar a todo extranjero cuya conducta «comprometiera la seguridad nacional o perturbara el orden público», al participar en huelgas, por ejemplo. Fue una reacción instintiva de los legisladores, que se negaban a creer que pudieran surgir conflictos de clase entre argentinos verdaderamente patriotas.

Unos cuantos políticos en boga decidieron intentar un planteamiento diferente. En 1904 Joaquín V. González propuso un código general que incluyera y controlara todas las relaciones laborales. Los conservadores atacaron la propuesta sin demora, pues se oponían en principio a que el proletariado tuviera derecho a organizarse, mientras que el movimiento sindical, encabezado por los anarquistas, se opuso porque temían que cualquier sistema gubernamental pudiera manipularse contra ellos. Esta combinación acabó con el proyecto de ley e impidió la creación de un sistema oficial de relaciones laborales.

Los dirigentes políticos continuaron sus esfuerzos por hacerse con el control del trabajo. En 1907 el Congreso creó un Departamento de Trabajo e invitó a las confederaciones de trabajadores punteras, incluida la FORA, a participar en un tribunal creado para fallar los conflictos laborales. Pero las organizaciones de trabajadores se negaron a apoyar al «corrupto gobierno burgués» en este esfuerzo. Una vez más, el movimiento obrero argentino evitó incorporarse a un sistema de relaciones laborales dominado por el gobierno.

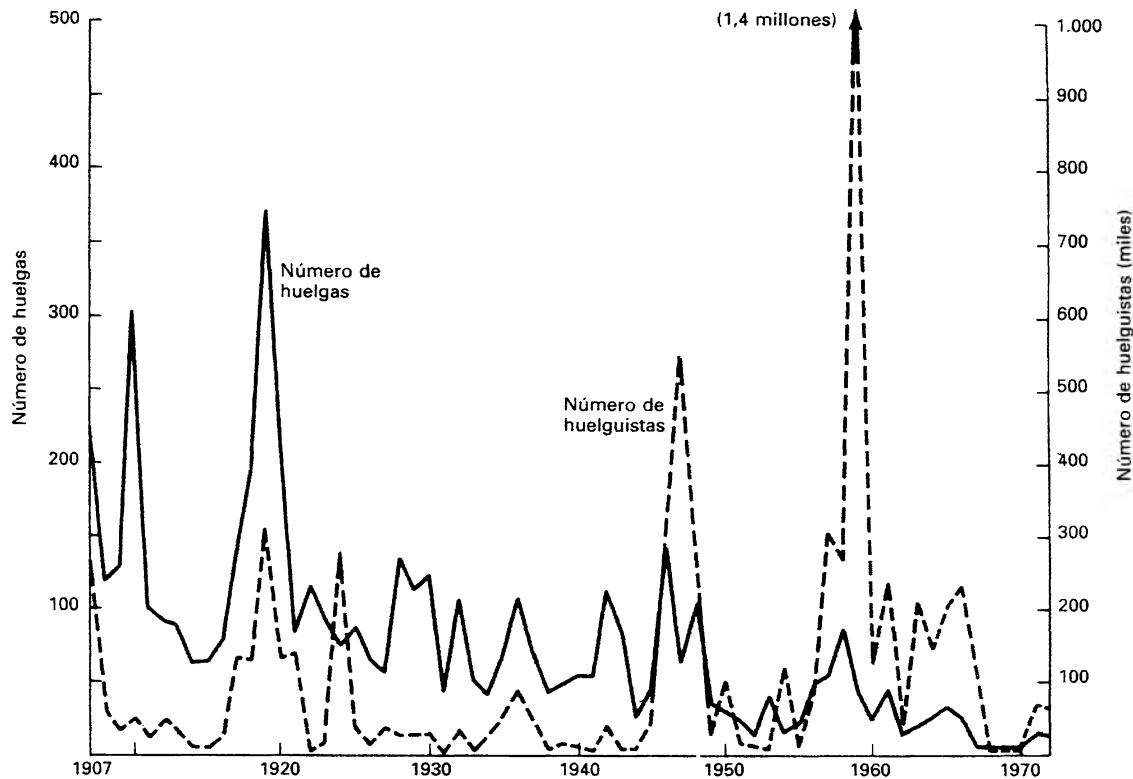
Mientras tanto, los anarquistas continuaron organizándose. Sus esfuerzos alcanzaron el clímax en 1910, centenario de la declaración de independencia argentina, cuando se planeaba una gran celebración pública para glorificar su progreso. Pero los dirigentes anarquistas tenían en mente algo diferente. Como adversarios de la élite liberal, querían elevar su protesta contra la farisa del modelo de progreso de orientación europea. La oligarquía y la clase media se indignaron por la amenazadora interrupción del ritual patriótico. Los que protestaban llenaron las calles y plazas, pero fueron aplastados y dispersados por una numerosa policía. Se había respondido con creces al reto encabezado por los anarquistas. La represión gubernamental fue la protagonista del día. La reacción contra los que protestaban se volcó en el Congreso, que aprobó una nueva ley (Ley de Defensa Social) haciendo aún más fácil la detención y procesamiento de los organizadores obreros. Comenzó la caza de los dirigentes de la protesta urbana.

Fue el toque a muerto para el anarquismo argentino, pero no para la protesta urbana. La actividad huelguística en Buenos Aires alcanzó otra cima en 1918-1919 y desde entonces oscilaría de tiempo en tiempo (véase la figura 3.2). Aún más significativa fue la persistencia y continuidad de la agitación laboral durante los años cincuenta. La organización obrera surgió como un actor clave en la sociedad argentina casi al empezar este siglo.

El sistema político: consenso y reforma

Los políticos liberales conocidos después como la «Generación de 1880» (debido a su surgimiento en ese año) obtuvieron su poder político de varias fuentes. En primer lugar, pertenecían o estaban muy próximos a la clase latifundista que producía la riqueza argentina. En segundo lugar, consiguieron monopolizar los instrumentos del poder estatal: controlaban el ejército y las elecciones, recurriendo al fraude electoral cuando era necesario. También controlaban al único partido político auténtico, el Partido Autonomista Nacional (PAN). Las decisiones nacionales más importantes se tomaban por acuerdo, un compromiso informal entre los cargos del ejecutivo. A este respecto, los liberales argentinos no tuvieron en cuenta un aspecto clave del ejemplo británico y estadounidense: el papel central del poder legislativo, al que en Argentina habían vuelto intrascendente en este periodo.

A primera vista, este sistema político parece haber servido de forma admirable a los intereses agroexportadores que sacaron beneficios de la expansión posterior a 1880. Pero los aristócratas que disfrutaban el control tuvieron sus adversarios. La expansión de la prosperidad, que creó nuevos ricos tanto en el campo como en la ciudad, ayudó a alimentar el descontento político entre tres grupos: 1) los latifundistas ahora prósperos de la parte superior del Litoral; 2) las viejas familias aristocráticas a menudo del interior alejado que no habían podido aprovecharse del auge de la agroexportación; y 3) los miembros de la clase media acomodada excluidos del poder político.



3.2. Huelgas y huelguistas en Buenos Aires, 1907-1972. Fuentes: Departamento Nacional de Trabajo, *Estadística de las huelgas*, Buenos Aires, 1940, p. 20; Dirección Nacional de Investigaciones, Estadística y Censos, *Síntesis estadística mensual de la República Argentina*, 1, núm. 1, enero de 1947, p. 7; Vicente Vázquez-Presedo, *Estadísticas históricas argentinas (comparadas)*, vol. II, Buenos Aires, Ediciones Macchi, 1976, p. 47; Guido di Tella y Manuel Zymelman, *Las etapas del desarrollo económico argentino*, Buenos Aires, Paidós, 1967, pp. 537-538; International Labor Office, *Year Book of Labour Statistics*, 11 (1949-1950), p. 379; 16 (1956), p. 456; 25 (1965), p. 692; 33 (1973), p. 752.

Estos tres grupos unieron sus fuerzas para crear el Partido Radical, destinado a desempeñar un importante papel en la política del siglo xx. En 1890, justo cuando el país entraba en una breve pero severa crisis económica, intentaron una revuelta armada. Un acuerdo acabó con la rebelión, pero algunos líderes intransigentes fundaron la Unión Cívica Radical (UCR) dos años después. Al no poder lograr un progreso electoral debido al fraude practicado de forma rutinaria por los políticos del gobierno, recurrieron a la revuelta armada dos veces más, pero ambos intentos fracasaron. Sin embargo, los radicales, encabezados primero por Leandro Alem y luego por Hipólito Yrigoyen, se mantuvieron en la tercera persecución del poder político. En cuanto a los objetivos económicos, participaban en gran medida y con éxito en la economía de agroexportación y estaban muy comprometidos con ella. Querían simplemente tomar parte en la dirección política de su sociedad.

No todos los oligarcas apoyaron la posición gubernamental de excluir a los radicales del poder. Un ala más ilustrada ganó en 1911, cuando el presidente Roque Sáenz Peña propuso una reforma electoral. Aprobada en 1912, la nueva ley declaraba el sufragio universal masculino y el voto secreto y obligatorio, lo que aumentaría de forma significativa el electorado, especialmente en las ciudades. En la práctica, era un sabio intento de cooptación por parte de la oligarquía. Sáenz Peña y sus colaboradores consideraban que la clase obrera y los dirigentes sindicales eran la amenaza real; y no las clases medias, que cooperarían una vez incorporadas al sistema. Los políticos gobernantes actuaban de modo muy semejante a como lo habían hecho sus iguales británicos en el siglo XIX, que habían aprobado tres veces proyectos de reforma electoral para ampliar el sufragio e incorporar así nuevos sectores sociales al juego político establecido.

De este modo, la reforma electoral de Sáenz Peña extendió el voto a los ciudadanos frustrados del sector medio. De inmediato, los radicales bien organizados capitalizaron las nuevas reglas y consiguieron que su veterano dirigente, Hipólito Yrigoyen, fuera elegido presidente en 1916. ¿Iba a haber una nueva era?

La primera prueba consistió en la conducta gubernamental hacia los trabajadores. Los radicales comenzaron con una actitud diferente a la de sus predecesores. Mostraron una preocupación genuina por la suerte de la clase trabajadora, en parte porque esperaban ganar votos en su batalla con los conservadores. Cuando surgieron conflictos laborales, el gobierno de Yrigoyen mantuvo una postura que parecía favorecer a los trabajadores en sus intervenciones. Los organizadores obreros lo consideraron una mejora, pero que dependía de la acción del gobierno caso por caso.

La crisis sobrevino en 1918-1919, cuando todo el mundo occidental fue sacudido por oleadas de huelgas. Las acciones, que con frecuencia incluyeron huelgas generales, se dirigían normalmente tanto contra los empresarios como contra el Estado. Había una confluencia de agravios específicos y hostilidad generalizada. En Argentina, los obreros se levantaron por el reducido poder adquisitivo de sus salarios, causado por la inflación de la primera gue-

rra mundial. Los precios de los alimentos subieron de forma pronunciada, estimulados por la demanda europea, pero los incrementos salariales se detuvieron. Como consecuencia, los trabajadores de Buenos Aires se vieron golpeados con dureza. Los dirigentes sindicales convocaron una serie de huelgas a finales de 1918, y a comienzos del año siguiente decidieron que era el tiempo oportuno para una huelga general, el instrumento sindical para derribar el Estado burgués.

Su idea tuvo consecuencias trágicas. El gobierno de Yrigoyen decidió que había de actuar con firmeza y los resultados fueron la reposición de 1910. Un movimiento civil paramilitar ultraderechista, la Liga Patriótica Argentina, propició la histeria antibreriana, explotando de forma efectiva el miedo de las clases media y alta al desafío popular. Los miembros de la Liga tomaron las calles para atacar a los trabajadores; era una lucha de clases revanchista. Se disparó a cientos de manifestantes. Se volvió a reprimir a los dirigentes laborales, esta vez por los radicales, y cayeron los golpes más duros sobre los sindicalistas y los últimos restos del cuadro dirigente anarquista.

El movimiento obrero no desapareció. Aunque se batíó a los anarquistas y se debilitó a los sindicalistas, dos corrientes ideológicas más aparecieron entre los trabajadores argentinos: el socialismo y el comunismo. El primero hacía hincapié en la acción política y apostaba por el Partido Socialista como esperanza para cambiar el capitalismo argentino. Los comunistas, por su parte, ponían énfasis en los movimientos sindicales en lugar de las urnas y pronto hicieron modestos progresos en conseguir posiciones en los sindicatos clave.

Los años veinte no trajeron mucho éxito a los organizadores obreros. Las tasas salariales reales aumentaron de forma constante durante la década, pero no debido a la presión sindical. Por el contrario, quizá estas subidas socavaran la sindicalización. La ausencia relativa de conflicto (véase la figura 3.2) también significó que el gobierno no se esforzara por crear un nuevo marco para las relaciones laborales. En 1930 el movimiento obrero se había convertido en un actor relativamente sometido del escenario argentino.

En el otro extremo del espectro político estaban los conservadores. Habían esperado que la reforma electoral de Sáenz Peña permitiera cooptar a los radicales, pero pronto se desengañaron, ya que en lugar de seguir con la tradición del acuerdo, llevó a cambios básicos en el sistema político.

En primer lugar, el electorado aumentó de forma constante. Todos los varones argentinos mayores de dieciocho años tenían ahora derecho a votar, casi un millón de personas en 1912. Como este incremento pronunciado continuó, el electorado alcanzó ya en 1946 un total de 3,4 millones de personas. La participación era elevada al ser el voto obligatorio y se minimizó el fraude. Entre un 70 y un 80 por 100 de los posibles votantes depositaron su papeleta en las elecciones presidenciales. Éstas también resultaban muy reñidas. Los ganadores rara vez surgían con más de un 60 por 100 de los votos. Este alto porcentaje relativo de participación ciudadana (sólo de varones) distinguía a Argentina de otros países latinoamericanos importantes como

Méjico y Brasil, cuyos electorados mucho más restringidos reflejaban tasas de alfabetización más bajas y sistemas políticos más cerrados.

Una consecuencia más del incremento de la participación electoral fue la importancia que lograron los partidos políticos. Casi inexistentes bajo la generación de 1880, después de 1912 se convirtieron en el principal vehículo para la persecución organizada del poder. A su vez, los partidos generaron un tipo nuevo de élite política: profesionales de clase media que hacían carrera en la política. Su foro favorito era el Congreso nacional.

A pesar de lo innovadora que resultó la reforma electoral de Sáenz Peña para su tiempo en América Latina, siguió dejando algunas limitaciones básicas del sistema político. Restringir el sufragio a los ciudadanos varones no sólo excluía a todas las mujeres; también dejaba fuera al menos a la mitad de los varones adultos debido a que muchos eran aún ciudadanos extranjeros. Pocos inmigrantes pasaban por la naturalización, pues la mayoría no pretendía establecerse de forma permanente en Argentina y por ello ni lo intentaban. Los que sí lo hacían solían verse vencidos por el laberíntico procedimiento y el obstruccionismo deliberado de las autoridades argentinas. Como los trabajadores no naturalizados abundaban más entre la clase obrera, la reforma tenía a ayudar a la clase media a expensas de la más baja.

El resultado práctico de todos estos cambios fue apartar a los conservadores del poder. Los radicales, contando con su base popular y empleando tácticas mecánicas, mostraron una supremacía electoral continuada: Marcelo T. de Alvear se convirtió en presidente en 1922, Yrigoyen fue reelegido en 1928 y los radicales dominaron ambas cámaras del Congreso. Intensas luchas partidistas reemplazaron las fluidas alianzas de partidos. El surgimiento de los políticos de clase media amagaba con poner fin a los discretos manejos intraclasistas. El sistema político pasó a representar una amenaza autónoma para el sistema sociopolítico, incluso cuando no había desacuerdos importantes sobre la política, tanto por la hegemonía de los políticos profesionales como por la acumulación de poder político dentro de un Estado cada vez más autónomo. Para los conservadores y sus aliados, el experimento argentino de democracia limitada se estaba volviendo desgradable y arriesgado.

La tensión en la esfera política se vio exacerbada por la quiebra económica mundial de 1929, aunque a Argentina no la golpeó con tanta dureza o tan pronto como a otros países. Los precios y el valor de las exportaciones de carne se mantuvieron hasta 1931. El mercado de trigo estaba sufriendo mucho, pero fundamentalmente a causa de la sequía; además, los granjeros ejercían escasa influencia política, en parte porque muchos eran inmigrantes no naturalizados (cerca de un 70 por 100 en 1914). En 1930, los salarios reales sufrieron un breve descenso y comenzó a extenderse el desempleo, pero la agitación obrera seguía en un nivel muy moderado (véase la figura 3.2). Sin duda, la Depresión expuso la debilidad del sistema político, pero no fue suficiente por sí sola para causar un golpe de Estado.

Los militares atrasan el reloj

El 6 de septiembre de 1930, una coalición de mandos militares y aristócratas civiles expulsaron al presidente Yrigoyen basándose en que su gobierno era ilegítimo. Luego establecieron un régimen provisional. ¿Quiénes eran estos soldados? ¿Cómo habían llegado a intervenir en lo que parecía ser un orden constitucional que funcionaba bien?

La respuesta debe buscarse en parte en la historia de las fuerzas armadas. Los liberales que llegaron al poder en 1852 creyeron que un ejército profesional era indispensable para el desarrollo argentino. Querían militares bien entrenados para aplastar a los caudillos provinciales y proporcionar el orden necesario para el crecimiento económico.

Las escuelas que se establecieron para el entrenamiento profesional fueron el Colegio Militar (1870) y la Escuela Naval (1872), que iban a seguir siendo los centros básicos de aprendizaje para los oficiales argentinos. Al igual que otros ejércitos latinoamericanos, el argentino buscó modelos en Europa. En 1899 el general Roca y sus colegas negociaron la visita de una misión alemana para adiestrar al estamento de oficiales en la tecnología militar moderna. La colaboración con Alemania iba a durar cuarenta años.

El aumento de la profesionalización militar condujo a un cambio en las perspectivas de los cuerpos de oficiales argentinos. En 1910 ya había una modificación de criterios para el ascenso: ahora se convirtió en antigüedad y dominio de la nueva tecnología, en lugar de favoritismo político. Al mismo tiempo, hubo un cambio en el control de los ascensos: de la presidencia, a un consejo de militares formado por comandantes de división del ejército y presidido por el general de más alta graduación. Así, el ejército pudo desarrollar un nuevo sentido de su eficiencia, mientras adquiría un grado mayor de autonomía institucional.

El énfasis creciente en el mérito abrió la carrera militar a aspirantes pertenecientes a la clase media. No resultaba sorprendente que entre ellos se encontraran hijos de inmigrantes, especialmente de Italia, ya que el ejército ofrecía un camino que invitaba a la escalada social. Los reclutas que lograron abrirse camino hasta la jerarquía forjaron una fuerte alianza con el ejército como institución y un celoso respeto a su independencia, honor y reputación profesional. El lado opuesto de esta lealtad era la sospecha profunda hacia los de fuera, en especial los políticos. Los soldados contemplaban con frecuencia a las autoridades civiles con una mezcla de desdén y aprensión. En 1930, los mandos militares llegaron a la conclusión de que el único modo de acabar con el desastre político era revisar las reglas del juego.

Aunque estaban de acuerdo en este punto, discrepaban en lo demás. Una facción, encabezada por el general Agustín P. Justo, quería el retorno del sistema oligárquico de los días anteriores a la reforma de Sáenz Peña. Pensaban que sólo Yrigoyen y los radicales habían abusado del sistema electoral. Si se



A pesar de su importancia histórica, el golpe militar de 1930 fue un asunto relativamente decoroso. Una bandera blanca de rendición ondea desde el palacio presidencial (véase la flecha), mientras los curiosos se agolpan en la Plaza de Mayo. (Colección privada.)

los alejaba de la política, el poder revertiría a los aristócratas y desaparecería el espectro de la lucha de clases.

Otra facción, encabezada por el general José F. Uriburu, sugería una solución más arrasadora: el establecimiento de un Estado corporativo semifascista. Consideraban que el problema no era Yrigoyen o los radicales, sino el mismo intento de ensayar la democracia en Argentina. Uriburu reflejaba las doctrinas antidemocráticas ya rampantes en Europa, en especial en Italia, España y Portugal. En esencia, Uriburu y sus simpatizantes querían un orden jerárquico basado en la función social. La votación estaría en manos de los miembros más cultivados de la sociedad y el Congreso dejaría de estar en las de los políticos profesionales, —«agentes de los comités políticos», como desdeñosamente los describía. Imaginaba una «democracia funcional» en la que los legisladores electos representarían intereses funcionales (o «corporativos»), como los de los estancieros, obreros, comerciantes e industriales. Era el modelo corporativista en boga en la Europa mediterránea. La teoría consistía en que una estructura vertical reintegraría el sistema político al sistema

económico, de modo que el ámbito político volvería a reflejar la distribución del poder en el ámbito económico. Resulta bastante obvio que también era una fórmula para detener la política orientada a las clases sociales. La respuesta corporativista a los males del sistema de congreso iba a redefinir de forma radical las bases de la representación.

Aunque Uriburu dirigió el gobierno provisional en 1930, el grupo de Justo acabó ganando. Se celebraron elecciones, pero, como en los días previos a Sáenz Peña, se practicó el fraude sin cortapisas. Una vez que Justo se convirtió en presidente en 1932, creó una coalición de partidos pro gubernamentales denominada la Concordancia y, en un esfuerzo por ganarse el apoyo civil, reemplazó varios militares de puestos sensibles con políticos conocidos. Es evidente que esperaba formar un gobierno nacional amplio, que le otorgara la autoridad para responder a los efectos socioeconómicos de la depresión mundial.

Pero resultó imposible. Una razón para su fracaso fue la expansión de una clase obrera urbana que, mediante huelgas y otras tácticas, hizo demandas repetidas al gobierno. Y en el ámbito de la élite, los políticos profesionales —comprometidos con intereses partidistas— se negaron a jugar con las antiguas reglas. Resultó claro cuando el dirigente del Partido Radical, Roberto Ortiz, elegido sucesor de Justo en 1937 mediante la manipulación de Concordancia, paró el fraude electoral y de este modo permitió que los radicales consiguieran el control del Congreso.

Su salud le obligó a dejar el cargo en 1940. Su sucesor, Ramón Castillo, recurrió a la técnica de la oligarquía sitiada cuando se enfrentó a las elecciones: poner votos falsos en las urnas. Por supuesto, nadie creía el fraude; sólo dramatizaba la ilegitimidad del gobierno civil que sostenía.

Las autoridades militares observaban el drama con impaciencia creciente. Veían cómo sus colegas de Alemania e Italia habían desempeñado papeles clave en el desplazamiento de los gobiernos civiles tambaleantes. A medida que se extendió la guerra por Europa a comienzos de los años cuarenta y el Eje —que incluía a Alemania, Italia y Japón desde 1940— parecía triunfar, los altos mandos militares argentinos consideraron la necesidad de ejercer un liderazgo firme y seguro en su tierra. El obstáculo era la camarilla de políticos civiles a quienes los militares no habían purgado lo suficiente del poder desde 1930 y que habían continuado persiguiendo sus intereses mezquinos y así haciendo vulnerable a su país.

La política argentina estaba tomando un camino que no aparecía en ningún otro país importante de América Latina. Las causas eran varias. Primero estaba su fuerte antipatía por los aliados, en especial los estadounidenses y británicos. En contraste con Brasil, cuyo gobierno, tras un breve flirteo con la Alemania nazi, había decidido unir su suerte a la de Estados Unidos en 1942, Argentina quería preservar su «neutralidad». En la práctica esto significaba que continuaría vendiendo productos alimenticios esenciales a Gran Bretaña sitiada mientras se negaba a unirse al esfuerzo militar estadounidense. Esto reflejaba un sólido sentimiento entre la élite argentina, tanto ci-

vil como militar, de que su país tenía mucho que ganar rehusando su alianza política y militar en el conflicto mundial.

Tras este tosco consenso continuaba la impaciencia militar con los políticos civiles. Los oficiales disidentes organizaron un complot para hacerse con el poder. El grupo triunfador recibió el nombre de GOU (Grupo Obra de Unificación o Grupo de Oficiales Unidos) y justificaron su postura como una respuesta a la demanda popular: «Apoyamos nuestras instituciones y nuestras leyes, persuadidos de que no son ellas sino los hombres [es decir, los políticos profesionales] quienes han sido delincuentes en su aplicación».

De hecho, los ambiciosos oficiales querían reformar toda la estructura política. Comenzaron, en 1943, disolviendo el Congreso, blanco de su tan a menudo expresado desdén. Los militares en ascenso, acaudillados por su primer presidente provisional, el general Arturo Rawson, anunciaron solemnemente: «Ahora no hay partidos políticos, sino sólo argentinos». Se propusieron librar a Argentina de política, así como de políticos. En 1944 decretaron el fin de los partidos políticos y excluyeron del gabinete a todos los políticos profesionales, menos a unos cuantos radicales «colaboracionistas».

Mientras los militares se iban haciendo con el control del sistema político, aumentaba la conciencia de clase entre los trabajadores. En los años cuarenta, la clase obrera urbana, especialmente en Buenos Aires, había cambiado desde los días de la reforma electoral de Sáenz Peña en 1912. Ahora estaba alfabetizada casi en un 90 por 100 y tenía movilidad, pues muchos de sus miembros habían llegado hacia poco del campo. En contraste con el periodo del gran auge de la exportación (1880-1914), la mayoría de los trabajadores urbanos eran nacidos en Argentina y no inmigrantes europeos. Buenos Aires albergaba un proletariado que no era diferente del que había aterrorizado a la burguesía y el ejército europeos y los había inclinado hacia soluciones corporativistas y fascistas. En realidad, los comentaristas políticos de Estados Unidos y Europa Occidental consideraban a Argentina un importante caso para probar la habilidad de una república del Nuevo Mundo para ajustarse a los conflictos sociales inherentes a la industrialización y el desarrollo.

A medida que iba teniendo lugar el drama, los principales actores de la política argentina resultaron ser el ejército y el movimiento obrero. Los militares tenían su propia base institucional, pero la grande y creciente clase trabajadora urbana carecía de representación política efectiva. ¿Por qué? En parte debido al fraude electoral. Pero era más importante el modo como funcionaba el sistema de partidos existente. Todos los partidos importantes, incluidos los radicales y los socialistas, se adaptaron al sistema electoral según la modificación de la ley de Sáenz Peña de 1912, cuando más de la mitad de la población adulta masculina seguía excluida del voto. Por ello, ninguno, con la excepción parcial de los socialistas, creó una auténtica base de clase obrera. Como resultado, su política no ofrecía una salida significativa para los trabajadores urbanos.

Entra en escena Juan Perón. Nacido en la clase media, había alcanzado el grado de coronel en el ejército argentino. Ambicioso y comunicativo, con

casi cincuenta años había tomado parte activa en el movimiento del GOU que expulsó de la presidencia a Ramón Castillo en 1943. En reconocimiento por su cooperación se convirtió en secretario de Trabajo, un puesto de poca importancia que transformó en un bastión de fortaleza. Utilizando tanto el palo como la zanahoria, Perón engatusó a los trabajadores industriales; a los grupos de trabajadores veteranos así como a los nuevos; a los residentes urbanos de toda la vida y a los emigrados recientes del campo. De este modo, hizo del movimiento sindical un recurso propio y en parte por esta influencia se convirtió después en ministro de la Guerra y vicepresidente de la nación. Héroe para los desposeídos, ganó las elecciones presidenciales de 1946 con una sólida mayoría del 54 por 100, a pesar de la indiscreta resistencia del Departamento de Estado estadounidense, que le denunció por sus simpatías pro fascistas, y a pesar de la oposición combinada de todos los partidos políticos nacionales. El Partido Comunista Argentino fue especialmente vehemente en denunciarlo como un demagogo fascista.

Durante este periodo, Perón empezó a depender del instinto político de su amante y después esposa, Eva Duarte. Antigua actriz de radio llegada del interior no hacía mucho, estaba determinada a tener éxito en el mundo de Buenos Aires.

El peronismo y Perón

Una vez instalado como presidente, Perón procedió a poner en práctica los principios corporativistas adoptados por los oficiales del GOU. Ahora se organizaría Argentina según los grupos de ocupación: industriales, agricultores, trabajadores. En la cima de esta jerarquía estaría el Estado. El gobierno actuaría como el árbitro final en caso de conflicto entre los grupos. El nuevo gobierno expidió con rapidez un sinnúmero de estatutos reguladores de las organizaciones ocupacionales y Perón afirmó de inmediato para el Estado un papel intervencionista en la economía. Se dictó un Plan Económico de Cinco Años y se otorgó a un poderoso y nuevo instituto de comercio exterior (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio o IAPI) el monopolio estatal sobre las exportaciones de los cultivos agrícolas clave. Argentina se hallaba ahora en posición de soportar la política económica más estatal de las vistas hasta entonces en ese siglo en América Latina.

Perón estaba llevando a la práctica la visión corporativista de los años treinta del general Uriburu, pero con una diferencia vital: hizo de los trabajadores urbanos sus aliados políticos más importantes, flanqueados por los industriales y las fuerzas armadas. Uriburu habría reducido el trabajo a una fuerza menor. Perón creó una alianza política sin precedentes en la historia argentina: un sindicato de trabajadores, empresarios y militares.

Había hecho la campaña para la presidencia con una nota nacionalista y populista: «Argentina era un país de toros gordos y peones desnutridos», así describió su país en 1946. Prometió promocionar soluciones verdaderamente

argentinas mientras canalizaba a los trabajadores la recompensa psicológica y material que se les había negado injustamente. Su gobierno no perdió tiempo en recompensarlos. Perón continuó las tácticas que había estado perfeccionando desde que ocupó la secretaría de Trabajo en 1943: la estimulación de huelgas que luego el gobierno resolvía en favor de los trabajadores. (Adviértase el repunte en el número de huelgas a finales de los años cuarenta en la figura 3.2, aunque su número no sea especialmente grande: bajo Perón, también subió el tamaño medio de las huelgas.) Las tarifas salariales por hora se incrementaron un 25 por 100 en 1947 y un 24 en 1948. La participación del trabajo en la renta nacional aumentó cerca de un 25 por 100 entre 1946 y 1950. Los trabajadores urbanos argentinos experimentaron una mejora pronunciada en su nivel de vida. Los perdedores en este drama populista fueron los propietarios de capital, de forma especial los terratenientes, ya que el monopolio del comercio gubernamental (IAPI) compraba la mayoría de sus productos a bajos precios fijos.

Al principio, esta intrépida estrategia pareció funcionar bien. El PIB creció un 8,6 en 1946 y un sorprendente 12,6 por 100 en 1947. Hasta el índice inferior del 5,1 por 100 en 1948 seguía siendo muy respetable según los parámetros mundiales. Este crecimiento fue incentivado en parte por el auge exportador argentino, que produjo saludables excedentes comerciales de 1946 a 1948.

Perón también hizo buena su promesa de reducir la influencia extranjera en la economía. En 1946, el banco central fue reorganizado para aumentar el control sobre los activos monetarios de propiedad extranjera. En 1948, Argentina nacionalizó el ferrocarril de propiedad británica, que seguía siendo el corazón del sistema de transportes nacional. También fueron nacionalizadas la compañía de teléfonos (controlada por la ITT estadounidense) y las instalaciones del muelle que pertenecían a los franceses. En cada caso, los argentinos compensaron a los propietarios a unos precios que después los nacionalistas declararon que habían sido demasiado elevados. Y en julio de 1947, Perón saldó toda la deuda exterior argentina, señalando la ocasión con una grandiosa ceremonia donde emitió una «Declaración de Independencia Económica».

Eva Perón también surgió como una fuerza política por derecho propio. Rechazada por las matronas de la sociedad (señoras gordas) que siempre habían monopolizado las carreras políticas de las primeras damas anteriores, «Evita» constituyó su propia fundación en 1948. Desde su monumental edificio de mármol distribuía dinero y ayudas en persona y rápidamente formó un cortejo fanático y leal. Su carisma complementaba al de su marido y juntos lograron levantar una maquinaria política imponente. Presidían un gobierno electo que sofocaba con firmeza cualquier disensión política abierta.

En 1948 parecía que los peronistas tenían un camino fácil. Se estaba alcanzando con rapidez la justicia social y pronto el régimen pronunciaría su doctrina «justicialista», la etiqueta utilizada para describir las medidas de bienestar social dirigidas a ayudar a la clase trabajadora urbana. La economía

continuaba en plena actividad. La oposición política había sido desmoralizada y humillada. Las calles se llenaban continuamente de fieles. Era la realización de la «Nueva Argentina» que Perón había prometido.

Este éxito fue pronto ensombrecido por problemas económicos. El año 1949 trajo el primer déficit del comercio exterior desde la guerra y redujo las reservas de divisas a un peligroso nivel. Igualmente importante fue el repentino salto de la inflación a un 31 por 100, doble que la del año anterior. Una severa sequía disminuyó la producción de artículos exportables.

Perón se topó con las realidades económicas que habían permanecido ocultas durante los primeros años de la posguerra. En 1946 parecía muy simple beneficiarse de la economía mundial, pero ahora se había vuelto problemático. Los precios mundiales para las exportaciones argentinas estaban cayendo; los de las importaciones, especialmente los de los artículos manufacturados, subían. Además, la política peronista agravaba el problema. El IAPI había establecido para los artículos agrícolas unos precios reducidos irreales con el fin de mantenerlos bajos en las ciudades, pero el efecto fue también desanimar la producción, con lo que se dañaron las exportaciones.

Perón reaccionó ante la crisis económica de 1949 aportando un nuevo ministro de Finanzas, que lanzó un programa de estabilización ortodoxo: crédito ajustado, reducción del gasto público y límites estrictos en los aumentos de salarios y precios. Perón estaba determinado a controlar la economía y reanudar lo antes posible su ambiciosa política social.

El comienzo de la crisis económica coincidió con su decisión de estrechar su control político. Su primer problema era la Constitución argentina de 1853, que prohibía la reelección del presidente. ¿Podía dudarse de que Perón quería otros seis años de mandato? Los peronistas hallaron el modo. Enmendaron la Constitución no sólo para permitir la reelección del presidente, sino también para reiterar una ley de 1947 que daba el voto a las mujeres. En 1951 Perón fue reelegido con el 67 por 100 de los 6,9 millones de votos emitidos, con un fuerte porcentaje de las mujeres votantes. Entonces se fundó un Partido Peronista, que contó como uno de sus órganos centrales con un Tribunal Disciplinario del Partido. Desde entonces el gobierno recurrió con más frecuencia a medidas autoritarias, tales como la expropiación en 1951 de *La Prensa*, el principal periódico de la oposición.

Sin embargo, Perón fue vencido en un frente político. Al hacer la campaña para la reelección en 1951, quiso que Evita fuera su candidata a la vicepresidencia. Su influencia política había aumentado considerablemente, ya que muchos trabajadores la habían identificado como el corazón del peronismo. Fue brillante en la promoción de su imagen, ayudada por inmensos (y en su mayoría no explicados) fondos gubernamentales. Pero los militares no cedieron: se negaron a aceptar la posibilidad de que una mujer pudiera acceder a la presidencia y convertirse en su comandante en jefe. A Evita le amargó la decisión, pero sugirió que había límites en el poder peronista.

El voto militar a su candidatura presagió un golpe mayor. Evita cayó enferma y finalmente no pudo ocultar el hecho de que estaba muriendo de cáncer.

cer. Fue adelgazando de forma persistente, pero luchó contra la enfermedad con ahínco y continuó su agotadora vigilia en la fundación, ante las filas infinitas de desafortunados que pedían ayuda. Murió en julio de 1952, privando a Perón de una compañera política que se había convertido en alguien tan importante como él.

Una vez muerta, se hizo más grande que lo había sido nunca durante su vida. El gobierno suspendió todas sus funciones durante dos días y la Confederación General del Trabajo (CGT) ordenó a sus miembros observar un mes de duelo. La manifestación de pesar fue asombrosa. El solo traslado de su cuerpo desde la residencia presidencial hasta el Ministerio de Trabajo, donde iba a yacer en capilla ardiente, provocó tal afluencia de visitantes que ocho de ellos murieron aplastados. Más de 2.000 personas fueron atendidas por heridas en las siguientes veinticuatro horas. De inmediato se hicieron planes para edificar un mausoleo 45 metros más alto que la Estatua de la Libertad. Muerta a los treinta y tres años, Evita se convirtió en un mito poderoso que unió a los fieles peronistas.

Mientras tanto, el severo plan de austeridad del ministro de Finanzas Alfredo Gómez Morales comenzaba a producir resultados en 1952. Perón y sus consejeros optaron entonces por un segundo Plan de Cinco Años, mucho menos populista y nacionalista que la política de finales de los años cuarenta. Había una apelación directa al capital extranjero, que dio como resultado un contrato con la Standard Oil de California en 1954. Se dieron nuevos incentivos a la agricultura, cuya explotación ya era antes un objetivo importante bajo la estrategia de alimentos baratos. Se pidió a los trabajadores que aceptaran una congelación salarial de dos años, sacrificio dedicado a la financiación de la tan necesitada inversión.

Las implicaciones políticas de este cambio de estrategia económica eran obvias. Para recuperar el crecimiento económico, Perón pensaba que tenía que invertir, al menos en parte, algunas de sus medidas nacionalistas y redistribucionistas. Cuando la economía estaba en expansión, era fácil favorecer a un sector social; pero cuando se estancaba, los trabajadores sólo podían salir ganando a expensas de los sectores medios y altos. Los conflictos de clase amenazaban con desgarrar la coalición populista construida cuidadosamente por Perón.

Quizá por esta razón, la estrategia política peronista parecía volverse más radical. Desde 1949, los escasos aristócratas que una vez estuvieran en las filas peronistas desaparecieron. Perón se propuso controlar el ejército y para ello dio preferencia en los ascensos a los favoritos políticos. También estableció un nuevo programa para adoctrinar a los cadetes con las enseñanzas del peronismo y para vestir a los grados inferiores con uniformes vistosos. Perón sabía que tenía adversarios dentro del ejército y en 1951 intentaron un golpe contra él. Los suprimió con facilidad, pero el germen del descontento permaneció vivo.

Tras la muerte de Evita en 1952, su atención se desvió del ejército a los sindicatos, dirigidos por sus leales. A medida que la política económica se ha-

cía más ortodoxa, la retórica peronista se volvía más estridente. Se hizo evidente un tono militarista justicialista de la clase trabajadora. En 1953, una muchedumbre callejera peronista saqueó el Jockey Club, bastión de la aristocracia argentina.

En 1954, los radicales peronistas tomaron otro pilar del orden tradicional: la Iglesia. Se legalizó el divorcio y todos los colegios parroquiales se pusieron bajo el control del Ministerio de Educación. El año de 1955 trajo consigo manifestaciones masivas contra la Iglesia, orquestadas por los peronistas. Sus multitudes quemaron varias iglesias famosas de Buenos Aires. El Vaticano se desquitó excomulgando a todo el gabinete del gobierno, incluido Perón. El presidente prometió solemnemente movilizar sus masas contra los «conspiradores» que ponían en peligro la independencia argentina, amenazando con vengar con cinco adversarios cada peronista que cayera en combate político.

De hecho, el gobierno peronista estaba fuera de control. La cruzada anticlerical no podía proporcionar bastante fruto político para justificar el efecto destructor en el público, incluidos algunos fieles peronistas. Y lo que es más importante, la repulsiva batalla con la Iglesia había proporcionado una oportunidad a los enemigos de Perón dentro del ejército. Muchos oficiales que se habían sentido molestos por diversos aspectos del peronismo se convencieron entonces de que estaba dispuesto a destruir el país. En septiembre de 1955, los conspiradores militares movilizaron sus fuerzas y presentaron a sus antiguos compañeros un ultimátum: rendirse o enfrentarse a la guerra civil. Perón, dado tan a menudo a la retórica extremista, no tuvo estómago para un baño de sangre. A diferencia de Evita, nunca había querido armar a los trabajadores y ahora era demasiado tarde. Aceptó el ultimátum y se retiró, refugiándose en una cañonera paraguaya que lo condujo a un ignominioso exilio.

La administración militar

Cuando el general Perón huía por el ancho río, cambió el talante de Argentina. ¿Dónde estaban los trabajadores ansiosos por proteger a su dirigente? ¿Qué había sido de la enorme maquinaria política? ¿Cómo pudo un puñado de militares bloquear tan fácilmente a la clase trabajadora?

En realidad, Perón no había sido derrotado. Se había marchado. Partió bajo coacción, pero no hizo ningún esfuerzo por movilizar a sus seguidores contra los hombres de uniforme. El vacío repentino creado por su partida era indicativo: ni Perón ni el peronismo habían terminado.

El general que se convirtió entonces en presidente fue Eduardo Lonardi, un moderado que quería evitar una política revanchista que mantuviera unidos a los peronistas. Pero los militares de línea dura se impacientaron con su planteamiento conciliatorio: demandaban medidas más severas. En noviembre, depusieron a Lonardi e instalaron al general Pedro Aramburu como presidente provisional. Los celosos antiperonistas tuvieron entonces la oportu-

nidad de depurar todo lo peronista. El partido fue proscrito, los funcionarios peronistas, despedidos, y todo fragmento de propaganda peronista se convirtió en ilegal.

Los militares de línea dura parecían creer que el peronismo podía erradicarse en un intervalo relativamente breve de gobierno militar. Los pilares conocidos de la Argentina preperonista se restauraron con rapidez. *La Prensa*, antiperonista vehemente, se devolvió a sus dueños, la familia Gainza Paz. Los propietarios azotados por las expropiaciones recobraron sus posesiones. El gobierno de Aramburu impulsó medidas enérgicas contra los dirigentes peronistas, en especial en los sindicatos, pensando que la represión invertiría su influencia. En junio de 1956, los peronistas devolvieron el golpe. En varias provincias se desencadenó una revuelta de militares pro Perón y el gobierno respondió con fuerza. Como consecuencia, unos cuarenta dirigentes, incluidos algunos oficiales del ejército, fueron ejecutados. El derramamiento de sangre era ominoso; por muy autoritario que hubiera sido el gobierno de Perón, nunca había recurrido a matar oficiales.

Los estrategas políticos de Aramburu creían que podían remodelar el sistema político para pasar a una era posperonista. En octubre de 1956 crearon una Junta para la Defensa de la Democracia, que iba a inspeccionar a todos los partidos y movimientos «antidemocráticos». Se pidió a todos los partidos que se comprometieran con la democracia. Tener que establecer tal requerimiento era de por sí una prueba dramática de la fragilidad democrática. A comienzos de 1957 hubo un recrudecimiento de violencia peronista, combatida mediante la represión gubernamental. A pesar de este conflicto, los militares seguían pensando en transferir el poder a un gobierno civil capaz de manejar a los peronistas.

En el frente económico, los gobiernos militares de 1955 a 1958 se encontraron con una economía inactiva que se hallaba muy lejos de poder extraer ganancias del comercio exterior. De hecho, los economistas políticos sumados a los militares tomaron pocas medidas arriesgadas. Hubo una devaluación y la renegociación de las muchas deudas externas bilaterales de Argentina. Los años 1955-1957 contemplaron una tasa de crecimiento del PIB buena, aunque la producción agrícola se detuvo. Los gobiernos militares no habían hallado el modo de crear incentivos convincentes para los latifundistas, aún traumatizados por las políticas discriminatorias peronistas. A pesar de su retórica, los militares siguieron una política salarial que dio como resultado unas tasas salariales reales por hora que no variaron en 1955 y 1956, y subieron un 7,2 por 100 en 1957. Todo ataque a los principales problemas económicos esperaba a un gobierno con mayor legitimidad.

Por desgracia para Argentina, los políticos civiles antiperonistas estaban profundamente divididos. El mayor partido seguía siendo el de los radicales, el venerable partido de Yrigoyen y sus acólitos. En su convención de 1956, los radicales (UCR) se dividieron en dos. Una facción fue los «radicales populares» (UCR del pueblo: UCRP), encabezada por Ricardo Balbín, el hombre de Estado más veterano del partido, que había hecho campaña por la presidencia en

1951. La otra fue la de los «radicales intransigentes» (UCRI), encabezada por Arturo Frondizi, profesor de economía. La facción de Balbín era antiperonista fanática, mientras que la de Frondizi abogaba por la flexibilidad en el trato con los peronistas. Entre los militares había una división de opinión semejante.

En julio de 1957, Argentina celebró sus primeras elecciones desde la caída de Perón. Las dos facciones radicales consiguieron un número casi igual de escaños en la asamblea constituyente, que de inmediato restauró la Constitución de 1853. Pero los diputados se peleaban y se marchaban tan a menudo que la asamblea fue finalmente disuelta.

No obstante, los militares estaban resueltos a pasar a un gobierno civil. Celebraron una elección presidencial en febrero de 1958 y el vencedor fue Frondizi, que había montado una campaña abiertamente nacionalista. Su ala radical, la UCRI, seguía manteniendo como adversaria la de Balbín (UCRP), por lo que necesitaba votos de otras partes. Para lograrlos, hizo un trato con los peronistas, prometiéndoles algunas medidas de corte peronista y la disposición a trabajar para que su partido recobrara la legalidad. El ala de Frondizi obtuvo no sólo la presidencia y el Congreso Nacional, sino también la mayoría de los gobiernos provinciales. Parecía como si Argentina tuviera ahora un gobierno central fuerte que pudiera acometer la difícil tarea dejada por Perón y el poco concluyente gobierno militar de 1955-1958. El mayor nubarrón que se cernía sobre Frondizi era el alcance de su deuda con los peronistas y el modo de saldarla.

El fracaso del reformismo desarrollista

El gobierno de Frondizi (1958-1962) fue una prueba muy importante de la capacidad argentina para volver a las filas de los regímenes civiles electos. El nuevo presidente parecía ser del mismo molde que otros reformistas democráticos que entonces triunfaban en América Latina, tales como Eduardo Frei de Chile y Juscelino Kubitschek de Brasil. Tanto en el frente económico como en el político, Frondizi decidió apostar fuerte. El riesgo era grande, pero también las posibles recompensas.

Tenía un ambicioso programa económico que pretendía acelerar la industrialización a la vez que estimular la producción agrícola para fomentar las ganancias por exportación. Gran parte de la financiación de la nueva industria había de llegar del exterior, mientras que la extensa intervención estatal en la economía iba a reducirse, comenzando por el reconocimiento de la negociación colectiva libre en la esfera laboral. Había un desafortunado caballo suelto en este plan: sólo podía tener éxito si se producía el cambio del consumo a la inversión, lo que significaba que los consumidores, a los que tanto había favorecido Perón, debían prepararse para hacer sacrificios inmediatos en favor del desarrollo nacional a largo plazo.

Frondizi decepcionó a los nacionalistas con una de sus primeras decisiones de inversión: la firma de contratos de exploración y producción de pe-

tróleo con compañías extranjeras en un esfuerzo por corregir la dependencia argentina del 50 por 100 en la importación de petróleo. En potencia, podía ser autosuficiente y necesitaba mucho ahorrar las divisas gastadas en el petróleo importado. Sin embargo, los nacionalistas lo atacaron con acritud por haberse «vendido» al imperialismo, especialmente por la nota tan nacionalista que había imprimido a su campaña electoral.

El resto del plan económico del nuevo presidente figuró pronto bajo una sombra más ominosa. A sólo unos meses de hallarse en la presidencia, se enfrentó con una aguda crisis en la balanza de pagos. Desde 1955, el gobierno militar se había movido en unos déficits consistentes en cuenta de capital y dejó al nuevo régimen civil en 1958 las reservas de divisas más bajas que había tenido ningún gobierno desde la guerra. Perón había enfrentado un problema similar en 1949 y de nuevo en 1952, emprendiendo un programa severo de estabilización sin ningún compromiso con acreedores extranjeros. De forma más específica, había evitado al Fondo Monetario Internacional (FMI), al que la Argentina peronista había decidido no unirse. Pero Frondizi eligió un rumbo diferente. Quería impresionar a sus acreedores externos, de los que esperaba una nueva inversión. Con Argentina en el FMI (el gobierno militar había hecho hincapié en su unión a él), decidió aceptar su medicina para casos extremos: una enorme devaluación, controles estrictos sobre el crédito, recortes en el gasto público, severos límites salariales, eliminación de los subsidios sobre los servicios públicos y despido de los empleados públicos sobrantes.

Frondizi se vio ahora atrapado en una contradicción: estaba tratando de impulsar un programa de desarrollo económico importante a la vez que hacía recortes para satisfacer a los acreedores externos. Su presidencia truncada se convirtió en un ejemplo clásico de los costes políticos que conlleva la estabilización económica.

La contradicción de su política económica se emparejaba con la existente en su estrategia política. Debía su elección al apoyo peronista y esperaba sin duda tener de su lado a sus votantes. No obstante, los militares, cuya aprobación era esencial para todo gobierno, se mostraban muy suspicaces acerca de esta política conciliatoria. Antes de un año le obligaron a despedir a su equipo económico y reemplazarlo con un grupo de libre empresa dogmático, encabezado por Álvaro Alsogaray, un rígido defensor del monetarismo al estilo del FMI.

Frondizi estaba comprometido ahora a poner en práctica el tratamiento de choque prescrito por el FMI, que comenzó con una devaluación del 200 por 100 y la retirada repentina de los controles de precios y los subsidios. El objetivo era hacer que la economía ajustara los precios internos a los internacionales. Los defensores del tratamiento de choque sostenían que este proceso sería doloroso de todos modos, así que era mejor hacerlo rápido. Un importante objetivo sectorial era aumentar el precio de los productos agrícolas y de este modo promover el aumento de la producción para satisfacer tanto la demanda externa como el mercado interior.

El efecto inevitable de esta política fue una aguda división en el ingreso. El ingreso real (o poder adquisitivo) de los trabajadores industriales cayó un 25,8 por 100 en 1959, mientras que el ingreso real por el aumento en la producción de carne alcanzó un 97 por 100 ese mismo año. Había una inversión exacta del justicialismo de Perón. Ya antes de que sus salarios reales hubieran descendido de forma significativa, los trabajadores urbanos comenzaron a batallar con el nuevo gobierno. Hubo huelgas generales en abril, mayo y septiembre de 1959, y una extensa huelga de ferrocarriles en noviembre. La última fue la más perniciosa, ya que las hinchadas listas de empleados del ferrocarril nacionalizado y deficitario era un blanco importante en la campaña gubernamental para reducir su déficit. Gracias al aparente apoyo público a los huelguistas, Frondizi se vio obligado a aceptar un acuerdo de compromiso en el que el movimiento obrero fue el vencedor efectivo.

La política de estabilización también fue atacada por los hombres de empresa argentinos, en especial por los de firmas pequeñas. Denunciaban las restricciones crediticias y el tremendo aumento de los precios de importación por la devaluación masiva. Los empresarios de las firmas mayores, en particular los vinculados a capital extranjero, se sentían más felices, ya que la política gubernamental los favorecía. Los agricultores resultaron ser una de las decepciones mayores de Frondizi. Al haberseles garantizado precios más elevados, se esperaba que aumentaran la producción, pero eran suspicaces y se negaron a suscribir el compromiso a largo plazo necesario para conseguirlo.

A pesar de la feroz oposición pública, algunas de las medidas presidenciales comenzaron a dar frutos. Al estancamiento de 1958-1959 le siguieron unas tasas de crecimiento del 8 por 100 en 1960 y del 7,1 por 100 en 1961. La tasa de inflación, que se había disparado hasta un 113,7 por 100 en 1959, descendió al 27,3 por 100 en 1960 y a sólo el 13,5 por 100 en 1961. La producción industrial iba claramente en aumento y dos sectores claves mostraban éxito: el primer complejo de acero integrado se terminó en 1960 y la producción interna de petróleo se había triplicado, alcanzando casi la autosuficiencia.

No obstante, el destino de la presidencia de Frondizi no dependería de los indicadores económicos, sino de la fortaleza de su apoyo político. Aquí las desigualdades le eran desfavorables. Los sindicatos y la izquierda nacionalista nunca le perdonaron su política de estabilización ortodoxa, con sus recortes en el salario real y su aceptación del capital extranjero. Las elecciones al Congreso celebradas en marzo de 1960 hicieron resaltar el problema. Los radicales de Frondizi obtuvieron menos votos que la facción de Balbín; los peronistas votaron en blanco siguiendo instrucciones de su líder exiliado. Frondizi ya no era capaz de engatusarlos para que permanecieran a su lado y esta debilidad cada vez más evidente levantó a los militares.

El clímax llegó en las elecciones locales y al Congreso de marzo de 1962. Entonces se permitió que los peronistas presentaran candidatos bajo su propia bandera (por vez primera desde 1955), al cumplir Frondizi su compromiso de devolver a la legalidad al Partido Peronista. El resultado fue un desastre para

el gobierno. Los peronistas encabezaron a todos los partidos con un 35 por 100 del total de votos. Obtuvieron una serie de gobiernos provinciales y un gran bloque de escaños en el Congreso. Los radicales de Frondizi lograron el 28 por 100 y los de Balbín el 22 por 100; el resto fue a partidos menores.

De inmediato, los militares enfurecidos obligaron al presidente a anular las victorias electorales peronistas en las provincias. Entonces los radicales de Frondizi intentaron formar una coalición con los de Balbín, lo que resultaba una salida obvia. Juntos, representaban la mitad del electorado. Pero los seguidores de Balbín rechazaron las ofertas de Frondizi, desecharlo al debilitado presidente por su política económica «antinacionalista». Una vez más, el partido de la clase media, los radicales, resultó ser incapaz de gobernar Argentina, el país con la mayor clase media de América Latina.

Los militares consideraron entonces que Frondizi estaba desacreditado. Había apostado por cambiar el peronismo y había perdido; no obstante, se negó tercamente a dimitir. El 29 de marzo de 1962, los tanques del ejército rodaron por las calles y lo desalojaron de la Casa Rosada. Llegó a la presidencia su sucesor constitucional, el presidente del Senado José María Guido.

Guido fue presidente en funciones durante un año y medio, pero el poder real lo ostentaron los militares, aún profundamente divididos acerca de cómo tratar con los políticos civiles. Esta situación condujo a revueltas intra-militares y a repetidos derramamientos de sangre a pequeña escala entre los hombres de uniforme. El hecho era que los militares no estaban nada unidos acerca de si era aconsejable o posible tratar de «reintegrar» las masas peronistas en el sistema político. Y lo complicaba el propio Perón en el exilio, al mandar constantemente instrucciones a sus lugartenientes en Argentina.

Los militares acabaron decidiendo anular por completo los resultados de las elecciones de 1962 y celebrar una nueva ronda electoral en julio de 1963. El voto siguió un patrón conocido, aunque esta vez los radicales de Balbín obtuvieron el total mayor, con un 27 por 100 de los votos. El nuevo presidente fue Arturo Illia, un médico gris de provincias que iba a encabezar el segundo intento radical de gobernar la Argentina posperonista.

Su estilo político era decididamente moderado, lo cual parecía apropiado pues había obtenido sólo algo más de un cuarto del voto popular y se enfrentaría a un Congreso en el que la oposición ocupaba casi dos tercios de los escaños. A diferencia de Frondizi, no había hecho ofertas a los peronistas. Sin embargo, los militares de línea dura no dejaban de vigilar para sorprender cualquier signo de debilidad hacia el peronismo o la izquierda.

Illia fue bastante afortunado con la situación económica que encontró. El año 1962 había contemplado una recesión, pero las buenas cosechas agrícolas mejorarían pronto la balanza comercial y aumentarían las reservas de divisas. Su gobierno comenzó a ocuparse de la economía de forma muy cautelosa y no anunció un programa general. Sin embargo, pronto fue evidente que sus políticos se basaban en la expansión, otorgando aumentos salariales generosos e imponiendo controles a los precios. Estas medidas ayudaron a catapultar a Argentina a la fase de «avance» del modelo económico de

«detención y avance» (estimulando y contrayendo la economía de forma alternativa) que había exhibido desde la guerra. El PIB mostró pequeñas disminuciones en 1962 y 1963, pero apretó el paso para ganar un 10,4 por 100 en 1964 y un 9,1 por 100 en 1965.

En el frente agrícola, el gobierno de Illia sufrió una tendencia decreciente en el «ciclo de la carne», cuando se retuvieron los rebaños agotados para su reproducción. La escasez resultante irritó a los consumidores urbanos —siempre carnívoros voraces— y redujo la producción disponible para la exportación. Los ganaderos estaban airados porque el gobierno no permitía que los precios subieran a los niveles indicados por la demanda del mercado. Illia, como casi todos los demás presidentes desde 1945, descubrió que era virtualmente imposible aprovechar el sector rural en beneficio de la nación.

Los sindicatos peronistas se opusieron a Illia desde el momento en que ocupó el cargo, en parte debido a que se los excluyó de las elecciones de 1963. A pesar de todos los acuerdos salariales, la CGT dominada por los peronistas estableció un «plan de lucha», que incluía huelgas y ocupaciones. Como Frondizi, Illia esperaba que su política atrajera algunos votos peronistas. Esta ilusión se hizo añicos en las elecciones para el Congreso de marzo de 1965, cuando el Partido Peronista legalizado obtuvo el 30,3 por 100 de los votos, contra el 28,9 por 100 de los radicales. Como en 1962, se hizo evidente su habilidad para conseguir los votos en una demostración de lealtad al movimiento.

Perón, en su exilio español, se sintió animado por los resultados y mandó a su tercera esposa, Isabel, a Argentina para negociar de forma directa con los grupos peronistas en disputa. La preocupación de los militares de línea dura aumentó por la aparente vuelta de los peronistas. Illia había hecho la misma apuesta política que Frondizi y había obtenido resultados similares. La escena económica también había dado un giro inquietante. La inflación había brotado de nuevo, el déficit público estaba fuera de control y la confianza de los inversores caía en picado, con lo cual la Bolsa de valores casi tuvo que ser clausurada. En junio de 1966, los militares volvieron a intervenir. Illia fue expulsado de la Casa Rosada sin ceremonias. Una vez más, los oficiales se habían deshecho de un gobierno radical incapaz tanto de encandilar como de reprimir a las masas peronistas.

La solución burocrático-autoritaria

El golpe militar de 1966 pareció marcar una ruptura más aguda con el pasado que cualquiera de los anteriores desde 1943. Cuando menos, fue el más represivo, siquiera en los estadios iniciales. Con la proclamación del advenimiento de la «Revolución argentina», el general Juan Carlos Onganía pretendió implantar un nuevo tipo de régimen: un Estado burocrático-autoritario. El objetivo era atacar de raíz las causas de los problemas argentinos, en lugar de tratar con los síntomas: la sociedad debía ser transformada. El go-

bierno de Onganía cerró el Congreso recalcitrante, expulsó a sus adversarios de la universidad y se propuso controlar (y supuestamente elevar) el tono de la vida social. Los líderes militares echaron a los políticos de los puestos de autoridad y forjaron alianzas con los tecnócratas e inversores extranjeros, cuyo capital buscaban como un medio de espoliar el crecimiento económico. Una parte clave del plan general requería la supresión del movimiento sindical, ya que el aumento de inversión iba a ser proporcionado parcialmente por un descenso de los salarios reales.

El gobierno de Onganía intentó además otro programa de estabilización económica. Perón se había visto forzado a adoptar uno en 1949 y de nuevo en 1952; controló la inflación y mejoró la balanza de pagos, pero el coste fue el estancamiento económico. Frondizi lo intentó en 1958 y obtuvo un éxito limitado con la inflación y la balanza de pagos, pero sólo con el coste de deprimir la inversión y sacrificar su plan desarrollista de largo plazo. Illia sólo se había dejado llevar por la fase expansionista del ciclo económico, imponiendo políticas salariales y de precios casi peronistas. Ninguno de estos gobiernos había logrado llegar a la raíz de los problemas argentinos: la falta de un crecimiento sostenido, basado en un sector rural productivo capaz de satisfacer tanto la demanda de exportación como la interna. Frondizi había adelantado la visión más coherente, pero se vio comprometido de inmediato por la necesidad de penosas medidas estabilizadoras a corto plazo.

El gobierno de Onganía estaba determinado a realizar un programa económico más profundo. Tras una pausa inicial, el ministro de Economía, Adalberto Krieger Vasena, anunció un plan de amplio alcance que un experto analista extranjero denominó más tarde «el programa antiinflacionista más equilibrado del periodo de posguerra», programa que «combinaba la expansión de la producción, la estabilidad de los precios y la mejora de la balanza de pagos con un esfuerzo por aumentar el nivel de consumo agregado, aunque de forma muy gradual». Un rasgo clave fue la congelación salarial durante dos años en 1967, que pudo hacerse cumplir debido a los métodos autoritarios y al éxito relativo en mantener los precios bastante bajos. (Debe advertirse también la abrupta reducción de las huelgas que muestra la figura 3.2.)

El gobierno tenía a su favor otro factor más. Un ala significativa del movimiento sindical, encabezada por el directivo de la CGT Augusto Vandor, acogió con satisfacción el golpe contra Illia y quiso colaborar con el nuevo gobierno militar. A su vez, los oficiales encabezados por Onganía paladearon la perspectiva de dividir los sindicatos y romper así la opresión peronista. Esta táctica tuvo un éxito parcial en 1967 y 1968, pero en 1969 fue absorbida por la explosiva oposición sindical.

En ese año, se desarrolló un movimiento de oposición en la ciudad de Córdoba, corazón de la industria automovilística argentina de nueva creación. Había habido una serie de protestas contra el gobierno y paradas laborales. El comandante del ejército local se puso nervioso, sus tropas se asustaron y durante una protesta callejera abrieron fuego, matando a algunas decenas de manifestantes y espectadores. Se levantó en el país un alarido de

protesta, a pesar del autoritario control gubernamental de los medios de comunicación. Los numerosos enemigos del programa económico del gobierno, incluidos algunos militares que se oponían a la congelación salarial, aprovecharon la ocasión para procurar la salida de Krieger Vasena. Onganía vacilaba, aumentaba la presión y por fin se obligó a Krieger Vasena a marcharse en junio de 1969. El gobierno de Onganía duró un año más, pero su credibilidad se había destruido.

No fue sólo la oposición sindical la que perdió al régimen de Onganía. También hubo un aumento impactante de la violencia política en forma de tortura clandestina y ejecución por parte del gobierno militar y rapto y asesinato por parte de la izquierda revolucionaria. El golpe de Onganía empezó con violencia y los militares victoriosos aclararon de inmediato que se suspendían todas las garantías legales habituales. La política laboral, teñida de un aspecto conciliatorio en su exterior, pronto pasó a depender de la coerción. Ya había ocurrido antes, en el mandato de Aramburu e incluso en el de Illia, pero ahora había una diferencia. La izquierda decidió responder con su propia violencia. Brotaron grupos revolucionarios escindidos que secuestraron a hombres de empresa prominentes y los liberaron por sumas enormes. Los ejecutivos de las multinacionales extranjeras se convirtieron en blancos. Las firmas contestaron trasladando a su personal a Montevideo, al otro lado del río, desde donde viajaban a diario bajo vigilancia armada. En 1970, los terroristas de izquierdas secuestraron al ex presidente Aramburu, que había ordenado la ejecución de los conspiradores peronistas en 1956. Más tarde se le encontró asesinado.

Una toxina mortal había entrado en el cuerpo político argentino. Ahora existía una izquierda revolucionaria, comprometida a traumatizar la nación mediante la violencia contra aquellos que identificaba como opresores: los militares y la policía, junto con sus colaboradores, los ejecutivos bien trajeados de las multinacionales. Y el gobierno devolvió el golpe con su propia violencia. Había estallado la guerra civil.

El gobierno de Onganía fue un fracaso político desde todos los criterios. Aunque introdujo el plan de estabilización económica de más éxito desde la posguerra, no consiguió un reto más difícil: crear una coalición política de base amplia que pudiera proporcionar continuidad a la política y hacer posible una planificación genuina para el futuro. El régimen militar de Onganía nunca podría haber conseguido esa coalición porque se hizo con el poder teniendo en contra a los radicales, principal voz de la clase media, y a los peronistas, que seguían siendo la voz más fuerte de la clase obrera. Al contrario de los generales brasileños, cuyo éxito aparente envidiaban los argentinos, los oficiales de Onganía no pudieron forjar una alianza entre militares y civiles capaz de mantener el poder el tiempo suficiente para poner en práctica una política que proporcionara un crecimiento económico sostenido. Y no menos importante, la escena política argentina se había polarizado más que la brasileña. El fracaso de Onganía dejó a Argentina pocas alternativas.

El nuevo presidente fue otro general, Roberto Levingston, un inteligen-

te militar poco conocido, destinado en Washington, D.C., desde 1968. De vuelta en Buenos Aires, Levingston se enfrentó a un problema económico traicionero: la inflación, que Krieger Vasena había hecho bajar al 7,6 por 100 en 1969, iba en aumento y alcanzó el 34,7 por 100 en 1971. Levingston siguió un rumbo expansionista moderado, que pronto fracasó por la tendencia descendente del ciclo de la carne, que causó escasez y altos precios. Al carecer de prestigio militar, se encontró aislado. Las revueltas recurrentes de Córdoba en marzo de 1971 sellaron su destino y otro golpe militar lo expulsó e instaló en su lugar al general Alejandro Lanusse, que había sido el cerebro tras la deposición de Onganía ocho meses antes.

Lanusse siguió una dirección nacionalista moderada en política económica. Poco inclinado a tomar decisiones arriesgadas, decidió funcionar con un déficit presupuestario en aumento. Como era predecible, aumentó la inflación hasta un 58,5 por 100 en 1972. Su gobierno no pretendía tener una respuesta para la economía.

Su ambición real era lograr un nuevo acuerdo político. Lanusse optó por la legalización del peronismo, junto con un nuevo sistema electoral que esperaba que favorecería a los partidos pro gubernamentales. Hizo una apuesta aún mayor: decidió permitir el regreso de Perón. Se anunciaron elecciones para marzo de 1973. Perón regresó por breve tiempo a Argentina a finales de 1972 y presionó intensamente en apoyo de su sustituto, el doctor Héctor Cámpora, como candidato presidencial. Mientras tanto, continuaba la violencia, con secuestros de ejecutivos, cobros de rescates y asesinatos. Las guerrillas se volvieron más audaces y atacaban de forma directa a altos cargos militares, así como prisiones y cuarteles.

Cámpora recibió el 49 por 100 de los votos populares, no la mayoría absoluta, pero muy por delante del 22 por 100 de Balbín. El presidente y los militares de ideas cercanas comenzaron a ver a Perón como la única esperanza contra la izquierda. Le consideraban una figura esencialmente conservadora que no tenía nada en común con las guerrillas izquierdistas, algunas de las cuales declaraban combatir en su nombre. Cuando Héctor Cámpora fue investido en mayo de 1973, más de algún oficial pensó que quizás fuera el primer paso hacia una solución a la amenaza izquierdista.

Vuelta al poder de los peronistas

Cámpora no había dejado dudas acerca de que sólo era un sustituto hasta que Perón pudiera regresar y participar en unas nuevas elecciones. A pesar de su débil personalidad, su gobierno emprendió una política económica nueva y atrevida. Había sido diseñada en esencia por la CGE (Confederación General Económica), una asociación empresarial argentina, y su primer objetivo era estabilizar los precios para luego incrementar los salarios de los trabajadores hasta que supusieran la parte de la renta nacional que habían alcanzado en el primer período peronista. Se iba a hacer mediante 1) una su-

bida salarial única; 2) una congelación de precios pactada por el gobierno, los sindicatos y la industria; 3) una congelación salarial de dos años; y luego 4) un conjunto de medidas destinadas a mejorar los ingresos reales de los trabajadores. Obviamente, esto requería una cooperación extraordinaria de todos los grupos de presión. El gobierno de Cámpora parecía haber negociado el acuerdo en el Pacto Social que proponía y que fue formalmente ratificado tanto por la CGT como por la CGE. Estableció un pacto paralelo con los productores rurales (excepto con los ganaderos, rabiosamente antiperonistas) que ofrecía incentivos en precios, impuestos y créditos a cambio de la promesa de doblar la producción agrícola para 1980. Sorprende que el nuevo régimen peronista hubiera creado una coalición que incluía casi a todos los grupos de presión de la sociedad argentina. ¿Cómo fue posible? En parte, debido a que se había afianzado en los argentinos el agotamiento y el realismo. De hecho, más de un antiguo antiperonista contemplaba el nuevo gobierno de Perón quizás como la última oportunidad para el país de resolver sus problemas mediante algo menos que la fuerza desnuda.

Como todo argentino y observador extranjero podía comprobar, las posibilidades de éxito no eran elevadas. La violencia política aumentaba sin cesar pues las guerrillas rechazaron con desdén el nuevo régimen peronista y mediante los secuestros y asesinatos trataban de desestabilizar el frágil equilibrio político. Otra desventaja más eran la edad y salud de la antigua figura carismática a cuyo alrededor debía edificarse el nuevo consenso social: Perón tenía sesenta y siete años y una salud menguada.

Las nuevas elecciones presidenciales se programaron para el mes de septiembre. Ahora Perón tuvo éxito con una táctica política que había fracasado en 1951: consiguió que su esposa Isabel fuera nombrada para la vicepresidencia. Ambos barrieron en las elecciones con un 62 por 100 de los votos. Entonces Perón comenzó a ocuparse de la izquierda revolucionaria, a la que había animado a menudo en sus declaraciones desde el exilio. El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) fue proscrito, en buena parte debido al asesinato repetido de mandos militares. Dio su bendición a las medidas energéticas tomadas contra las reuniones y publicaciones izquierdistas. Parecía justificado el juicio de Lanusse: Perón estaba demostrando ser el garanteprofector para presidir una ofensiva militar y civil contra la izquierda revolucionaria.

En el frente económico, el ingenioso programa emprendido por Cámpora parecía funcionar bien. A comienzos de 1973, hubo un auge económico alimentado por las altas ganancias de la exportación, ya que los precios mundiales de la carne subieron y la producción de grano aumentó. Durante ese año, la inflación cayó de forma considerable y los salarios reales crecieron un 13,3 por 100 en la segunda mitad. Pero 1974 trajo problemas. El incremento del precio del petróleo de la OPEP desequilibró la balanza de pagos, aunque sólo importaba el 16 por 100 de su petróleo. Además, algunos sindicatos no pertenecientes a la CGT consiguieron nuevos acuerdos salariales, en violación del «pacto social». Varios sindicatos de la CGT siguieron su ejemplo.

Entonces, sometido a una presión creciente por parte de sus dirigentes, Perón accedió a conceder cuantiosas bonificaciones de fin de año a todos los sindicatos de la CGT, con lo que socavó su programa antiinflacionista.

No se sabe si su magia podría haberle valido de nuevo con los trabajadores, ya que murió en julio de 1974. La presidenta era ahora Isabel. Perón la conoció cuando era bailarina de un cabaré en Panamá, durante el viaje de recreo que emprendió tras su destitución en 1955. Isabel no era Evita, como su inseguridad e indecisión ya habían hecho patente. *La Presidente* asumió el cargo mientras los peronistas disputaban agriamente.¹ Querían conseguir influencia sobre la aterrorizada mujer que había accedido a los deberes presidenciales.

El consejero con mayor influjo fue su ministro de Bienestar Social, José López Rega, una figura ambiciosa y atrevida, tan conocida por su fascinación por la astrología como por sus ideas peronistas de derechas. López Rega ayudó primero a convencer a Isabel para que retirara de su gabinete a los ministros más moderados en octubre de 1974; luego la persuadió para que tomara medidas enérgicas contra la izquierda, incluidos los peronistas de esa tendencia. Esto se convirtió en el rumbo de la política de 1975, mientras los sindicatos comenzaron a negociar nuevos contratos con incrementos salariales del 100 por 100 o más. Isabel organizó una contracampaña, anulando los pactos salariales y después, tras una serie de huelgas masivas, los restableció. Esta involución dramática, además de la cada vez más sangrienta batalla entre las guerrillas de izquierda y el ejército, llevó a la dimisión de López Rega. La presidenta también perdió su mayoría en el Congreso al escindirse la delegación peronista.

La economía corría sin control. La inflación se disparó al 335 por 100 en 1975, mientras la espiral salarios-precios cogía velocidad. Ese año también resultó desastroso para las exportaciones, ya que la cosecha fue desilusionante y se complicó con una nueva traba del Mercado Común Europeo sobre la carne importada. Las reservas de divisas cayeron más de un 50 por 100. A comienzos de marzo de 1976, el gobierno de Isabel ya no tuvo más remedio que adoptar un plan de estabilización riguroso para volver a pedir ayuda al FMI.

El deterioro de la economía se vio acompañado por el aumento de la violencia en la política. Las guerrillas continuaban sus deliberados ataques provocadores a la policía y el ejército, cometiendo algunos asesinatos dramáticos. La derecha respondía a través de organizaciones igualmente violentas, como la Alianza Anticomunista Argentina. El «gran pacto» en el que iba a basarse la nueva era peronista parecía ahora una paradoja cruel. El valor del dinero menguaba a diario, casi por horas. El miedo a los terroristas, fueran

1. Lo normal hubiera sido referirse a Isabel en forma femenina como *la presidenta*, pero la Constitución argentina sólo hablaba del *presidente* y sus seguidores no querían correr ningún riesgo. Así que la legalidad triunfó sobre la lógica gramatical y se la vino a conocer como *La Presidente*.

de izquierdas o derechas, arraigó en la población, en especial en la clase media urbana. La presidenta estaba aterrorizada, era totalmente incapaz de ejercer el poder y cada vez se sentía más confusa. Había una pregunta en el aire: ¿cuándo la expulsarían los militares?

Su mandato concluía en 1977 y parecía que el ejército estaba determinado a dejarle concluirlo. Si tomaban el poder, adquirirían la responsabilidad formal de encargarse del desorden económico. Era mejor que siguiera en su puesto, ya que además había dado carta blanca a las fuerzas de seguridad en su guerra contra las guerrillas. Al retenerla como presidenta, tenían la apariencia de la legitimidad civil. Y quizás hubiera otra motivación más. Puede que el ejército hubiera decidido dejar que la situación nacional se volviera tan violenta y la economía tan caótica que nadie dudara de la necesidad de que el ejército lo solucionara. Si era así, para marzo de 1976 ya lo habían conseguido. En el golpe mejor predecido de Argentina, los hombres de uniforme pusieron a *La Presidente* en detención domiciliaria (se la investigaría por corrupción) y una vez más un gobierno elegido desapareció de la Casa Rosada.

El regreso de los militares

Cuando las fuerzas armadas decidieron movilizarse contra Isabel, estaban determinadas a imponer una solución burocrático-autoritaria que durase. Bajo el general Jorge Rafael Videla, el régimen emprendió una perversa campaña contra la oposición, conocida de forma alternativa como «guerra sucia» o «guerra santa». El gobierno comenzó a detener a los «subversivos» a discreción, reconociendo en un momento dado que mantenía cerca de 3.500 prisioneros. Y luego estaban los *desaparecidos*, aquellos que simplemente «desaparecían», quizás 10.000 o 20.000 en total. Estas personas eran secuestradas por hombres bien armados que se negaban a identificarse, pero que sin duda pertenecían a las fuerzas de seguridad y estaban «fuera de servicio», o se trataba de paramilitares que operaban con el conocimiento del gobierno militar. No se volvió a saber nada de casi ninguno de los secuestrados. El secreto otorgado a esta espantosa matanza quizás provenga del estudio efectuado por el ejército argentino acerca de las tremendas críticas que cayeron sobre las fuerzas de seguridad brasileñas a comienzos de los años setenta por malos tratos a los prisioneros. El error brasileño, según los argentinos, fue detener a los sospechosos de forma oficial, con lo que se dejaban rastros legales.

Nunca sabremos cuántos de los «desaparecidos» eran totalmente inocentes y cuántos apoyaron activamente a los movimientos guerrilleros. Miles de argentinos estuvieron sin duda involucrados de una forma u otra, si contamos a los mensajeros, pistoleros, infiltrados, contrabandistas de armas y espías, a la vez que amplios sectores de la población compartían la antipatía de los rebeldes hacia la dominación derechista. Con los asaltos a bancos y los cobros de rescates las guerrillas acumularon un fondo de guerra de por lo menos 150

mientos para una «democracia» final que sería, en palabras escogidas cuidadosamente, «acorde con la realidad, las necesidades y el progreso del pueblo argentino».

En la persecución de estas ideas, los militares no sólo se embarcaron en una guerra enérgica contra la oposición, sino que también penetraron en la sociedad argentina mucho más profundamente que nunca antes: además de abolir la Confederación General del Trabajo, acabaron con otras instituciones, como organizaciones deportivas o de caridad.

En 1978 los generales obtuvieron una propaganda caída del cielo cuando se eligió al país como sede de la Copa Mundial de fútbol. Argentina fue la ganadora, para el éxtasis de las multitudes y el obvio placer de los generales de línea dura. Al menos durante unas cuantas semanas los argentinos comunes pudieron sentirse orgullosos de su país. Pero la euforia se disipó pronto por la realidad de su difícil situación.

Entre las preocupaciones más graves estaba la economía. El ministro de esta cartera, José Martínez de Hoz, franco representante de las ideas neoliberales, impuso de inmediato un plan de estabilización para reducir la inflación y devolver la confianza a los acreedores extranjeros. La clase obrera se enfrentó a salarios reales en declive, mientras que a los empresarios cada vez les resultó más difícil obtener crédito. El sector más favorecido fueron los bancos y las instituciones financieras, que obtuvieron elevados beneficios debido a las altas tasas de interés real (con frecuencia del 20 al 40 por 100). El flujo de capital exterior aumentó de forma espectacular, pero en gran parte era especulativo. Martínez de Hoz también pasó a nacionalizar una serie de empresas estatales, mientras que redujo drásticamente los aranceles de casi todos los artículos industriales.

Estas medidas lograron disminuir la inflación a un 88 por 100 en 1980 y obtener una balanza de pagos excedentaria durante cuatro años sucesivos (1976-1979). Sin embargo, en 1981 se había oscurecido el panorama. Una ola de quiebras bancarias provocó una enorme salida de fondos. De nuevo la inflación excedió el 100 por 100 y se instaló la recesión. En 1981 la industria operaba sólo a la mitad de su capacidad y la renta real era más baja que la de 1970.

A pesar de estos problemas económicos, las fuerzas armadas demostraron un grado notable de coherencia y unidad. Era un régimen institucional, no un asunto de un solo hombre, y cuando Videla pasó la presidencia al general Roberto Viola en marzo de 1981, sólo fue la confirmación de este hecho. Viola carecía del vigor necesario para soportar la presión de ese puesto, por lo que lo cedió a comienzos de 1982 al general Leopoldo Galtieri, comandante en jefe del ejército.

En marzo, Galtieri decidió jugarse el destino de su gobierno en las islas Malvinas, controladas por Gran Bretaña, pero reclamadas desde hacía mucho tiempo por Argentina. Durante su mandato de 1946 a 1955, Perón reavivó la pasión argentina sobre las islas, pero Gran Bretaña no le hizo caso. En 1965, las Naciones Unidas invitaron a ambos países a iniciar conversacio-



La ocupación de las islas Malvinas en 1982 llevó a un ingente desbordamiento de orgullo y provocación nacionales. (C. Carrión/SYGMA.)

nes para encontrar una solución pacífica a la disputa. El tema de la soberanía no se discutió formalmente hasta 1977, el mismo año en que el servicio de espionaje británico advirtió de una invasión inminente. Gran Bretaña envió una pequeña flota de guerra, sin hacer publicidad, y la amenaza se desvaneció.

En 1982, los argentinos pensaron que los británicos habían cambiado de contraseña y que no se molestarían en defender las desoladas islas a más de 12.000 km de Inglaterra, pobladas por sólo 1.800 británicos y 600.000 ovejas. El 2 de abril, una gran fuerza argentina invadió las islas y aplastaron rápidamente a la guarnición de la marina real que contaba con pocas armas.

La primera ministra conservadora inglesa, Margaret Thatcher, no estaba dispuesta a ver secuestrados la soberanía y los ciudadanos británicos por una dictadura militar latinoamericana. Los británicos denunciaron la invasión y movilizaron una importante fuerza operativa. Justificaron su intervención militar por la necesidad de evitar que el agresor usurpara el derecho a la autodeterminación de los isleños. A finales de mayo, desembarcaron miles de soldados en las cabezas de playa de las Malvinas. Todos los países latinoamericanos menos tres respaldaron a Argentina en una votación de la Organización de Estados Americanos y condenaron a Gran Bretaña como agresora.

¿Por qué había decidido la invasión el gobierno de Galtieri? Resultaba evidente que la economía argentina estaba de nuevo arruinada, con la inflación y la deuda externa disparadas. Unos días antes de la invasión del 2 de abril, había tenido lugar la mayor manifestación contra el gobierno desde que los militares tomaron el poder en 1976. Galtieri y los pocos seguidores a los que consultó consideraron sin lugar a dudas el aliciente de una rápida victoria militar en las islas Malvinas como un impulso a su popularidad en declive. Además, Galtieri creyó que contaría al menos con el apoyo tácito de la administración Reagan, con la que los generales argentinos habían desarrollado una cálida relación.

A corto plazo, Galtieri estaba en lo cierto acerca de la reacción de los argentinos. La invasión produjo un desbordamiento de sentimiento patriótico, que se debió en parte a los reportajes hiperbólicos, controlados por el gobierno, que sólo hablaban de las victorias argentinas. ¿Había encontrado Argentina, fragmentada desde hacía tanto tiempo, una vía para unirse?

Pero la población del país pronto sufrió un rudo retorno a la realidad. Las tropas británicas mejor entrenadas y con más experiencia barrieron las islas y sitiaron a los 7.500 soldados argentinos atrapados en la capital, Port Stanley. Tras consultas nerviosas con Buenos Aires y una resistencia esporádica, el comandante argentino se rindió de inmediato, la única opción sensata dada la pobre moral, condición y posición de sus tropas. Pero esta rendición repentina golpeó con dureza a Buenos Aires. La propaganda del gobierno se volvía ahora cenizas. Gran Bretaña, supuestamente debilitada e incapaz de defender esas islas distantes, había derrotado de forma decisiva a las tropas argentinas, muy superiores en número. Sólo las fuerzas aéreas argentinas parecieron haber contado con la habilidad y el valor necesarios para combatir de modo efectivo.

La transición a la democracia

La junta presidida por Galtieri había cometido un error mortal: como gobierno castrense, comenzó una aventura militar que no logró ganar. La reacción pública fue inevitable: ¿qué tienen de buenos los generales si ni siquiera pueden ganar una guerra pequeña? El fervor patriótico se tornó en peligrosas manifestaciones a las puertas de la Casa Rosada. Galtieri se convirtió en blanco de sus compañeros oficiales y renunció cuando la unidad militar comenzaba a resquebrajarse. Las fuerzas navales y aéreas abandonaron la junta y dejaron solo en el poder al ejército de tierra. El nuevo presidente fue un oscuro general retirado, Reynaldo Bignone, del cuerpo de ingenieros. Al asumir el cargo en julio de 1982, repitió valientemente la reclamación argentina sobre las islas Malvinas. Prometió elecciones en 1983 y el regreso del gobierno civil antes de 1984. Era como si los generales argentinos, por su incompetencia, hubieran restaurado la legitimidad a los políticos civiles.

La economía pasó de mala a peor en 1982. La inflación se disparó hasta un

200 por 100, los trabajadores perdieron cerca de un cuarto de su renta real y el país entró *de facto* en el incumplimiento de su deuda exterior privada. A comienzos de 1983, el valor nominal neto del salario mínimo era de un millón de pesos a la semana, que equivalían sólo a unos 19 dólares. A los brasileños (su tasa de inflación era sólo del 100 por 100) les resultó divertido cuando los argentinos imprimieron su primer billete de un millón de pesos. Los mismos argentinos se sintieron más frustrados. La moneda de cien pesos —que valía mucho menos de un centavo de dólar— se retiró de la circulación y sólo resultó útil a los airados forofos del fútbol, que se las tiraban a los árbitros, y a los manifestantes contra el gobierno, que hacían lo propio con la policía.

Para obtener la financiación externa que se necesitaba con desesperación, el gobierno aceptó un austero plan esbozado en colaboración con el FMI. Pero existían dudas reales acerca de si sería capaz de organizar la transición a un gobierno civil. En diciembre de 1982, la oposición preparó la mayor protesta antigubernamental en siete años de mandato militar.

Para sorpresa de casi todos, el líder del Partido Radical, Raúl Alfonsín, obtuvo un 52 por 100 de los votos en las elecciones presidenciales de 1983. Los radicales también lograron la mayoría en la Cámara de Diputados. Los peronistas, que no habían perdido una elección presidencial libre desde 1945, sólo alcanzaron el 42 por 100. Alfonsín había sido un valiente luchador por los derechos humanos durante el mandato militar. Además, su partido era el único grupo no peronista capaz de formar un gobierno viable.

El nuevo gobierno se enfrentaba a problemas formidables. En primer lugar estaba el compromiso de perseguir al personal militar y la policía que habían matado o «desaparecido» a más de 10.000 sospechosos. La revulsión pública contra los perpetradores era profunda y había ayudado a Alfonsín a conseguir votos. Sin embargo, Argentina sería el primer país que procesara a su propio ejército por crímenes internos (los juicios de Nuremberg contra los nazis fueron impuestos después por todas las potencias extranjeras victoriosas). Era tierra virgen. ¿Cuántos debían juzgarse? ¿Dónde terminaba la responsabilidad criminal? ¿Y cómo afectaría este enjuiciamiento al esfuerzo de construir un nuevo ejército democrático?

El segundo problema en importancia era la economía. La inflación había alcanzado el 400 por 100 en 1983 y Argentina no podía realizar los pagos de su enorme deuda exterior. Tampoco había logrado modernizar su economía para sobrevivir en el comercio mundial. Por último, Alfonsín se enfrentaba a la perenne lucha por la renta entre las clases y sectores competidores, con los grandes sindicatos de trabajadores ensangrentados pero no vencidos por la represión militar.

El tercer problema era encontrar una base política viable. ¿Podían los radicales, partido minoritario desde 1945, retener la mayoría que había obtenido Alfonsín? En caso de no lograrlo, ¿era factible una coalición efectiva?

Alfonsín batalló valientemente con todos estos retos. El procesamiento de los torturadores resultó una situación casi sin ganadores. Una comisión nombrada por el presidente documentó la muerte o desaparición de 8.906 ar-

gentinos. El gobierno presentó acusaciones contra los nueve comandantes en jefe del ejército por crímenes que iban del asesinato a la violación. Cinco fueron hallados culpables y condenados a prisión, mientras que tres de los cuatro absueltos fueron después procesados por la justicia militar y sentenciados a prisión. ¿Pero hasta dónde debía llegar el procesamiento? Una revuelta militar en 1987 protestando contra los enjuiciamientos inminentes forzó al Congreso a exonerar a todos los oficiales por debajo del rango de general. Hasta los procesamientos en curso se empantanaron, lo cual espolió a los defensores de los derechos humanos y a los familiares de los «desaparecidos» a denunciar que no se juzgaran los cientos, si no miles, de otros casos. Los seguidores de Alfonsín replicaron que ningún otro gobierno de América Latina se había atrevido nunca a procesar a sus oficiales por crímenes cometidos durante un gobierno militar. Mientras tanto, el cuerpo de oficiales estaba más bien poco arrepentido. Era evidente que la represión y la subsiguiente búsqueda de justicia dejarían una profunda cicatriz en la sociedad argentina.

Cubrir los pagos de los 50.000 millones de dólares de la deuda exterior era un problema económico inmediato para el gobierno. Como las exportaciones no obtenían un excedente suficiente para el servicio de la deuda, Alfonsín tuvo que buscar nuevos préstamos. El precio de este dinero fue una política de austeridad interna diseñada por el FMI. Sin embargo, la inflación corrió hasta el 627 por 100 en 1984 y se acercó al 700 por 100 en 1985. Con la espalda contra la pared, el gobierno de Alfonsín develó el Plan Austral, una congelación de salarios y precios que creó una nueva moneda (el austral) con la esperanza de romper la psicología inflacionaria. La inflación cayó a menos de un 100 por 100 (una victoria para los parámetros latinoamericanos), pero también se produjo una recesión y una aguda bajada en los salarios reales. Sólo las medidas provisionales permitieron al gobierno evitar incumplir el pago de la deuda exterior, pero pocos creían que Argentina pudiera continuar sus pagos, que alcanzaban el 6 por 100 de su PIB.

En la escena política, Alfonsín supo cómo mantener su terreno contra las desavenencias en ascenso. En las elecciones al Congreso de 1985, los radicales retuvieron su mayoría en la cámara baja, ya que los divididos peronistas continuaron perdiendo el apoyo de la clase media. Los sindicatos de trabajadores también estaban a la defensiva. Sin embargo, en las elecciones de 1987, los candidatos peronistas al Congreso aventajaron a los radicales con un 41 por 100 frente a su 37 por 100 y extendieron su dominio en los gobiernos provinciales de 16 a 22.

Luego el Plan Austral se resquebrajó, en parte como resultado de la propensión negociadora de Alfonsín. La inflación subió y el tipo de cambio perdió el control. A comienzos de 1989, los precios subían más de un 30 por 100 al mes y alcanzarían más de un 100 por 100 al mes a mitad de año. La producción cayó en picado y disminuyó la renta. El producto interior bruto menguó un 3 por 100 en 1988 y un 6 por 100 en 1989 (en conjunto, la renta per cápita de los argentinos descendió cerca de un 25 por 100 durante la década de los ochenta).

Los peronistas aprovecharon la oportunidad. En las elecciones presidenciales de mayo de 1989, el candidato del partido, Carlos Saúl Menem, gobernador de la provincia interior de La Rioja, obtuvo aproximadamente un 47 por 100 del voto popular —y una clara mayoría en el colegio electoral—, sobrepasando diestramente al candidato de UCR, Eduardo Angeloz, y a otros dos más. Esto marcó una divisoria potencial en la política argentina: era la primera vez que un partido de la oposición había triunfado en unas elecciones presidenciales en más de setenta años, y la primera vez también que los peronistas llegarían al poder sin el espectro de Perón. Si el país podía dar estos pasos, razonaban algunos analistas, quizás tuviera una oportunidad realista de alcanzar una democracia genuina.

No sería una tarea fácil. La crisis económica se intensificó. Los saqueos hicieron erupción en mayo de 1989, el mes de las elecciones. Argentina, el proverbial granero del continente, sufrió la humillación de contemplar disturbios en busca de alimentos. Un aturdido presidente Alfonsín declaró el estado de *sitio* y luego anunció que renunciaría a su cargo seis meses antes de lo previsto. «Ningún presidente tiene el derecho a demandar sin cesar el sacrificio de su pueblo si su conciencia le dice que puede disminuirlo con el propio.» Castigado y desalentado, abandonó su ambición de ser el primer presidente argentino libremente elegido que completara todo un mandato desde la década de 1920.

Al tomar el poder en medio de estas sombrías circunstancias, Menem tenía las manos llenas. La inflación alcanzaba un 150 por 100 al mes. El país debía casi 4.000 millones de dólares en atrasos del pago de la deuda exterior, que por entonces había aumentado a 64.000 millones de dólares. Casi al acabar el año, Menem nombró a un nuevo ministro de Economía, Antonio Errán González, que de inmediato impuso un estricto programa de austeridad: levantó el control de precios, permitió que el tipo de cambio flotara libre, redujo radicalmente los impuestos sobre las exportaciones y las importaciones, y suprimió un sinnúmero de restricciones sobre el comercio exterior. En enero de 1990, sorprendió a la población al transferir certificados bancarios con intereses a títulos a diez años, en la práctica, confiscando los ahorros de la clase media. Esta y otras medidas enérgicas acabaron provocando una recesión que puso fin a la hiperinflación.

Violando apreciados principios del peronismo, Menem y sus ministros se embarcaron en un programa de «privatización» de compañías estatales, vendiéndoselas a inversores privados. En junio de 1990, el gobierno subastó Entel, la compañía telefónica nacional, a un consorcio de inversores españoles, italianos y franceses. En julio de 1990, vendió las líneas aéreas nacionales, Aerolíneas Argentinas, a Iberia de España. No contento con estas atrevidas jugadas, Menem anunció su intención de proceder a la privatización de la electricidad, el carbón y el gas natural, el metro y la flota. La doctrina económica neoliberal parecía salir triunfante.

A comienzos de 1991 Menem nombró ministro de Economía a Domingo Cavallo, una fuerte personalidad y firme creyente en las reformas estricta-

mente orientadas al mercado. Cavallo amplió la campaña de privatización, que representó más de 9.000 millones de dólares para el gobierno en 1994, y centró su programa en una «ley de convertibilidad», que reducía el gasto público de acuerdo al ingreso, prohibía la emisión de más billetes, y, más importante, establecía un tipo de cambio de uno por uno entre el peso argentino y el dólar norteamericano. La adhesión a este tipo de cambio se convirtió en la clave de la credibilidad económica, y estimuló una entrada sustancial de capital privado. Cavallo también ideó una reestructuración de la deuda externa argentina en 1993, mientras que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional continuaban apoyando sus políticas drásticas. La inflación descendió del 4.900 por 100 en 1989 a menos del 4 por 100 en 1994, y el crecimiento económico alcanzó cerca del 6 por 100 anual. Los sorprendidos observadores dentro y fuera del país aclamaron el logro de un «milagro económico».

Había también aspectos negativos. Uno era la sobrevaluación del peso, que alentaba las importaciones y desalentaba las exportaciones, lo que llevó a un déficit comercial de más de 6.000 millones de dólares en 1994. Otro era el desempleo y el empobrecimiento de la clase media. Según un estudio, casi la mitad de la clase media del país descendió a la clase inferior a comienzos de los años noventa. A su vez, el desempleo declarado creció del 6,5 por 100 en 1991 al 12,2 por 100 en 1994.

No es sorprendente que las iniciativas de Menem causaran rupturas y discordia en el movimiento obrero. La CGT se dividió en dos alas, una presidida por Saúl Ubaldini, un firme crítico de la política de Menem, la otra encabezada por su seguidor, Guerino Andreoni. En septiembre de 1990 el gobierno derrotó un movimiento huelguístico de los trabajadores de la compañía telefónica en Buenos Aires que deseaban un incremento salarial que fue considerado como inflacionario. El creciente desempleo y los despidos gubernamentales también desataron protestas en las provincias del interior, especialmente en La Rioja y Santiago del Estero en 1993, y los disidentes organizaron una gran manifestación en Buenos Aires a mediados de 1994. Muchos encontraban irónico, y algunos, ofensivo, que un gobierno peronista frustrara huelgas de las organizaciones obreras y que hiciera frente a las protestas de la clase obrera.

Las fuerzas armadas presentaron al comienzo a Menem un enojoso desafío. Varios meses después de asumir el poder, promulgó una amnistía general para —entre otros— los participantes en las revueltas militares en 1987 y 1989 cuyo propósito fue más bien la protesta política que la toma del poder. En diciembre de 1990 aún estalló otra rebelión militar realizada por los «carapintadas» en nombre del estridente nacionalista coronel Mohamed Ali Seineldín unos días antes de la llegada prevista a Buenos Aires del presidente de Estados Unidos, George Bush. La sublevación fue finalmente sofocada, pero representó un serio desafío a la autoridad de Menem. Pretendiendo que no había negociado con los rebeldes, Menem emitió —el 29 de diciembre en plenas fiestas navideñas— una nueva serie de indultos en favor de los anti-

guos líderes del gobierno militar y su campaña de represión política. La decisión provocó manifestaciones de protesta y algunas renuncias de principio, pero los militares ganaron el pleito: no habría sentencias o juicios subsiguientes por delitos contra los derechos humanos cometidos en la guerra sucia.

Cuando las fuerzas armadas continuaron mostrando signos de inquietud, especialmente en torno a modestos recortes, Menem trató aparentemente de aplacar a los generales a fines de 1994 expresando gratitud por su espeluznante campaña: «Triunfamos en la guerra sucia, que había colocado a nuestra sociedad al borde de la disolución». Los defensores de los derechos humanos denunciaron enérgicamente la declaración de Menem, quien quedaría después en una incómoda posición por las confesiones públicas de antiguos militares que relataron la práctica rutinaria de lanzar al mar a los prisioneros políticos durante los vuelos navales en los años setenta. El legado de la guerra sucia persistió tercamente.

En 1994, el gobierno obtuvo la aprobación del Congreso para la reforma de la Constitución del país, redactada hacia 140 años. Siguiendo el acuerdo entre Menem y Raúl Alfonsín, ahora líder del Partido Radical, las reformas reducirían el periodo presidencial de seis a cuatro años, pero permitirían una reelección; reducirían la autoridad del presidente para gobernar por medio de decretos de emergencia; crearían el cargo de jefe del gabinete, quien podría ser destituido con el voto de la mayoría en el Congreso (con esto se introducía una dosis de autoridad parlamentaria); se fortalecería el poder judicial; y se daría un grado de autonomía a la ciudad de Buenos Aires, promulgada en 1994. Los defensores insistían en que las reformas mejorarían la responsabilidad gubernamental, descentralizarían el poder, e institucionalizarían un sistema de equilibrio y control del mismo. Los opositores, entre los que había muchos radicales, veían la reforma como una maniobra de Menem para perpetuarse en el poder.

Menem se apresuró a proclamarse candidato para las elecciones presidenciales de 1995. Pese a los persistentes rumores de corrupción de alto nivel y el amplio resentimiento hacia el estilo autoritario del presidente, Menem obtuvo una sólida victoria con el 49,8 por 100 del voto (con la nueva Constitución necesitaba sólo el 45 por 100 para evitar una segunda vuelta). Dividida, desmoralizada, representada por un candidato sin brillo, la antigüamente orgullosa UCR obtuvo sólo el 17,1 por 100. La oposición más fuerte provino de José Bordón, un peronista disidente que encabezada una coalición de centro-izquierda conocida como Frepaso (Frente País Solidario) que consiguió el 29,2 por 100 de los votos. Consideraban algunos que la larga tradición argentina de política bipartidista estaba llegando a su fin. Parecía igualmente improbable que Bordón fuera capaz de convertir Frepaso en un partido duradero.

En el campo internacional, Argentina dio dos pasos nuevos y decisivos. Uno fue promover el desarrollo constante de MERCOSUR (el Mercado Común del Sur), una asociación cuatripartita que incluye Argentina, Brasil,

Uruguay y Paraguay. Fundada por el Acuerdo de Asunción de 1991, el esquema prevé la creación de una zona de libre comercio que podría finalmente convertirse en una unión aduanera, y en un «mercado común» pleno según el modelo de la Unión Europea. Pese a las tensiones ocasionales entre sus miembros, el volumen de comercio e inversión en MERCOSUR creció rápidamente durante los inicios de la década de 1990. Su éxito aparente reforzó los deseos argentinos de liderazgo en América del Sur, aunque Brasil también reclamaría esta condición.

En segundo lugar, Argentina bajo Menem adoptó una política exterior coincidente con la de Estados Unidos (se informó que el ministro de Relaciones Exteriores había bromado que Buenos Aires estaba buscando «relaciones carnales» con Washington). Menem apoyó activamente las operaciones militares estadounidenses en la guerra del Golfo Pérsico en 1991, y en Haití en 1994. Normalizó las relaciones con el Reino Unido, proclamando su dedicación a un arreglo pacífico del contencioso de las islas Malvinas, y trató de fortalecer sus contactos con la Unión Europea. También se convirtió en un ruidoso crítico de la Cuba de Fidel Castro, y abandonó las relaciones políticas con los países en vías de desarrollo en Asia y África. «No deseo pertenecer al Tercer Mundo —dijo en una ocasión—. Argentina tiene que estar en el Primer Mundo, que es el único mundo que debería existir.»

Chile: socialismo, represión y democracia

El territorio que ahora conocemos como Chile fue uno de los dominios más distantes del imperio español en América, que se convirtió en un centro secundario muy valioso por su producción agrícola y minera. Los españoles encontraron una población india nativa, pero gran parte de ella perdió por el violento ataque de las enfermedades llegadas de Europa. Del periodo colonial, surgió una población relativamente homogénea, mestiza, aunque pocos de los habitantes «europeos» deseaban admitir el hecho de que sus antepasados españoles se hubieran mezclado con los indios.

→ Cuando Napoleón invadió España, los habitantes de Chile reaccionaron como los de las demás colonias y mostraron una lealtad firme a la corona. Les indignó el arrogante trato que Napoleón otorgó a España y sus colonias al pasarlas a su hermano José. Cuando el control francés se prolongó tras la conquista de 1808, los chilenos tomaron cartas en el asunto y celebraron un congreso en 1811. Parecían dirigirse hacia la independencia, pero las fuerzas realistas recobraron la iniciativa y a finales de 1814 se hicieron con el control de Chile. Contra esta «reconquista» realista, Bernardo O'Higgins ayudó a dirigir un ejército revolucionario desde Mendoza. Los rebeldes consiguieron la independencia chilena en 1818. Como director supremo de la nueva república, O'Higgins resultó un dirigente decisivo pero autocrático. Creó una fuerza naval (que sería una de las mejores de América Latina), fomentó la educación y obtuvo el reconocimiento de la independencia de su país por parte de Estados Unidos, Brasil y México. Sin embargo, el Congreso constitucional que había prometido fue manipulado y en 1823 la aristocracia descontenta le obligó a dimitir.

Los años siguientes fueron de inestabilidad política, debido a las luchas de liberales y conservadores por hacerse con el control. Los últimos ganaron en 1830 y comenzaron las tres décadas de la «República Conservadora». La figura clave fue Diego Portales, que se convirtió en el hombre fuerte del régimen, aunque nunca ocupó la presidencia. Se celebró una Asamblea Constituyente en 1831, que dio como resultado una constitución en 1833. Creó un gobierno central fuerte, que dejaba el poder económico en manos de los terratenientes. Portales gobernó sin oposición porque el gobierno controlaba la

maquinaria electoral y los latifundistas dejaban felices que éste ejerciera el poder (incluida la represión cuando resultaba necesario) en su beneficio.

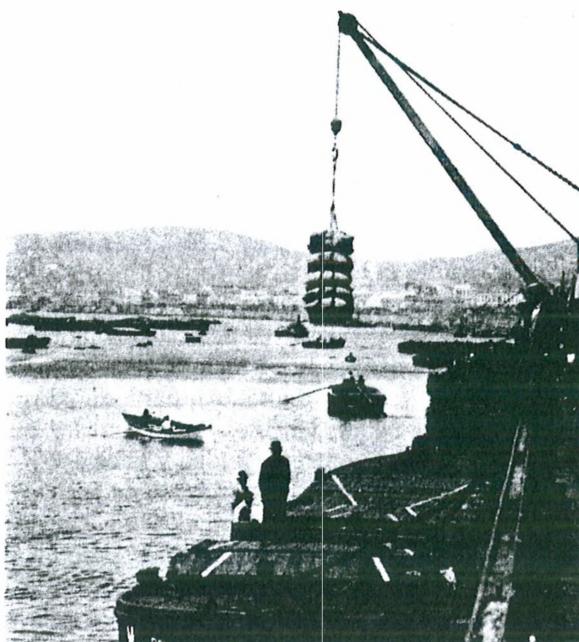
La ruina de Portales fue una guerra contra Perú (1836-1839), que provocó una rebelión militar interna y ocasionó su asesinato. Luego Chile continuó hasta vencer a los peruanos. Su principal héroe de guerra fue el general Manuel Bulnes, que ocupó la presidencia desde 1841, durante una década de fermento y creatividad. La vida cultural se reavivó por la presencia de exiliados procedentes de otros países latinoamericanos, en especial de Argentina, que se hallaba bajo el dictador Rosas. En política exterior, el gobierno de Bulnes tomó posesión del estrecho de Magallanes, con lo que se inició una batalla territorial con Argentina que no se solucionaría hasta 1984.

La década de 1850 también supuso una fructífera consolidación para la nueva nación. La posición de la Iglesia se convirtió en una cuestión política clave. De todos los legados del periodo colonial español, ninguno iba a causar tanta controversia como éste. Un ala de la élite latifundista quería que el Estado ejerciera un control mayor sobre la Iglesia, especialmente en la educación y las finanzas. Sus oponentes defendían todos los privilegios eclesiásticos. Cuando el Partido Liberal anticlerical suavizó su postura a finales de la década, sus disidentes fundaron el Partido Radical, organización que llegaría a desempeñar un papel persistente en la vida política de la nación.

Visión general: crecimiento económico y cambio social

Para Chile, como para muchos países de América Latina, el siglo XIX marcó un periodo de transformaciones económicas y sociales de largo alcance. Durante la etapa colonial, había desempeñado un papel relativamente secundario en la economía hispanoamericana. La tierra del fértil valle central se concentraba en las manos de un pequeño número de poderosos latifundistas. Sus vastas posesiones proporcionaban productos agrícolas, sobre todo fruta y grano, en parte destinados a ciudades como Santiago o Valparaíso, pero en su mayoría se exportaban a Lima y otros mercados urbanos de Perú. Así, el comercio marítimo por la costa occidental de Suramérica conectaba a Chile con los centros del imperio español.

Las guerras de independencia interrumpieron este tráfico costero y la agricultura chilena entró en un periodo de estancamiento relativo. La situación se vio, además, afectada por las medidas proteccionistas de Perú, que pretendía fomentar su propio desarrollo agrario mediante la imposición de severas restricciones a las importaciones de Chile. En la década de 1840, la afluencia de oro californiano propició un estímulo pasajero para las exportaciones agrícolas, que saltaron de 6,1 millones de dólares en 1844 a 12,4 millones en 1850 y alcanzaron los 25 millones de dólares en 1860. Pero ahí se nivelaron y luego empezaron a caer de nuevo. La finalización del ferrocarril transcontinental estadounidense ayudó a que se perdiera el mercado californiano, aunque las exportaciones a Inglaterra continuaron. Con su ventajosa situación y sus fértiles



Aunque la minería se convirtió en el sector más dinámico de la economía chilena, la agricultura continuó desempeñando un papel primordial. En la fotografía, se cargan sacos de judías para la exportación en el puerto de Valparaíso algo después de 1900. (Cortesía de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.)

les pampas, Argentina tenía un acceso mejor a Europa. Por supuesto, la producción agrícola y el comercio continuaron en Chile, pero no se convirtieron en las fuerzas conductoras del crecimiento económico.

La minería desempeñó ese papel. Entre mediados de la década de 1840 y mediados de la de 1850, la producción de plata se cuadruplicó o quintuplicó. Se aceleró la producción de cobre, y en 1870 Chile ya controlaba alrededor de un cuarto del mercado mundial de este producto. Entonces sobrevino un agudo descenso y no recuperaría su posición preeminente hasta el cambio de siglo.

Mientras tanto, fueron los nitratos, utilizados como fertilizantes y explosivos, los que se convirtieron en la primera exportación del país. Su desarrollo fue posible al quedarse con el territorio norte que antes pertenecía a Perú como resultado de la guerra del Pacífico (1879-1883). Los inversores extranjeros (en particular británicos) afluyeron de inmediato y, de este modo, los europeos poseían ya cerca de dos tercios de los campos de nitrato en 1884. Pero los inversores chilenos retuvieron cierto dominio en esta zona, obteniendo la mitad de las ganancias totales en 1920. Sin embargo, el mercado del nitrato acabó disminuyendo. Un aumento de las exportaciones durante la primera guerra mundial fue seguido por un recorte a comienzos de los años

veinte, luego hubo una recuperación breve y después una escarpada reducción final en la década de 1930. Más tarde, ocuparon su lugar los nitratos sintéticos.

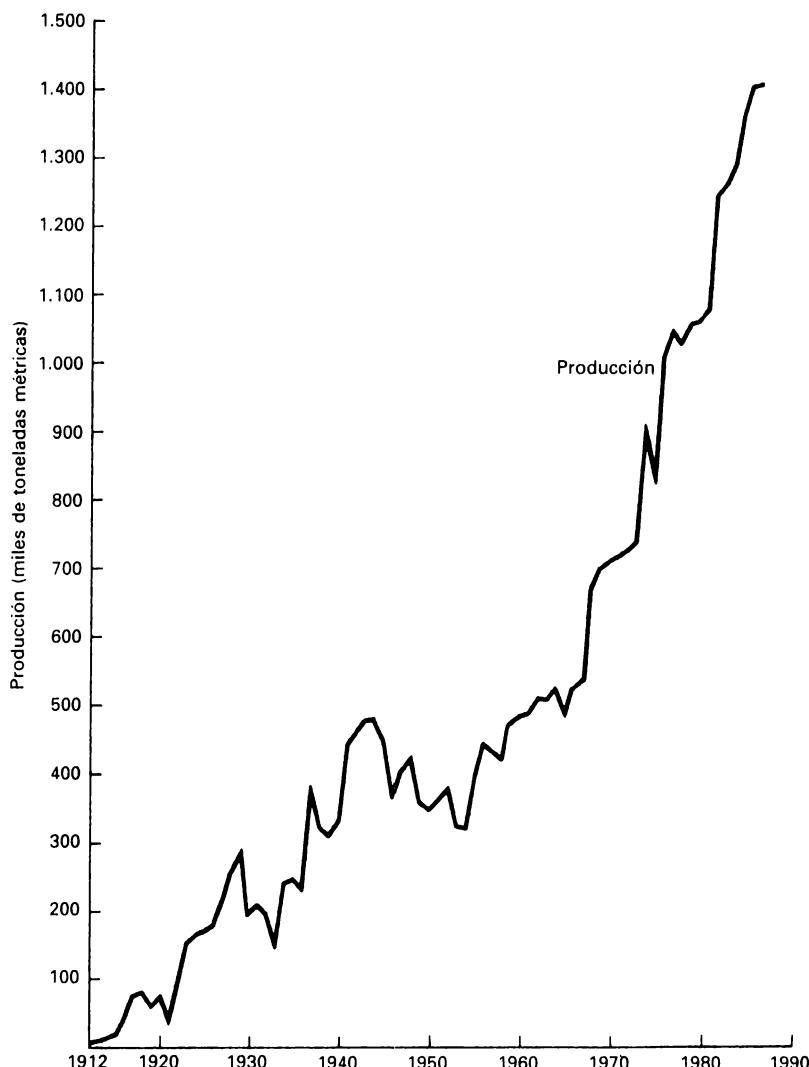
El desarrollo de la minería chilena —en plata, cobre y nitratos— durante el siglo XIX condujo a importantes cambios en la estructura social del país. Uno de ellos fue la aparición de nuevos elementos dentro de la élite, consistentes en propietarios de minas del norte y comerciantes de los pueblos y las ciudades en crecimiento. No obstante, no mantuvieron una rivalidad real con los terratenientes tradicionales, porque en Chile, más que en la mayoría de los países latinoamericanos, la élite latifundista no permaneció aislada y separada de las élites manufactureras y mineras. Por el contrario, se dio una cierta mezcla, a menudo lograda a través de vínculos familiares, por lo cual era frecuente que los terratenientes tuvieran familiares en los estratos más altos de los otros sectores, si es que no tomaban parte en ellos. Hermanos, sobrinos y cuñados proporcionaban vínculos importantes y estas conexiones tendían a minimizar el conflicto entre la ciudad y el campo.

El crecimiento de pueblos y ciudades propició un grado de urbanización más elevado que en la mayor parte de América Latina. En 1850, sólo el 6 por 100 de la población chilena vivía en zonas urbanas, pero en 1900 la cifra ya ascendía al 20 por 100. Permanecería en este nivel, entre un 25 y un 30 por 100, hasta los años treinta. (En 1970, la proporción excedía el 60 por 100 y era superada sólo por Argentina y quizás Uruguay.) Santiago retuvo su posición como la ciudad más importante del país y los puertos bulliciosos como Valparaíso se convirtieron en centros vitales de actividad comercial.

También hizo su aparición una clase obrera, que se sindicalizó por primera vez en los campos de nitratos del norte. Sin embargo, el desarrollo económico chileno de finales del siglo XIX y comienzos del XX no requirió una importación masiva de mano de obra, hecho que apunta a un rasgo central de la clase obrera del país: había nacido allí. Esto supone un claro contraste con Argentina, donde el 25 por 100 de la población había nacido fuera en 1895; para Chile, esta proporción era inferior al 3 por 100. Desde el principio, los trabajadores chilenos tuvieron acceso directo a la escena política.

La producción de cobre sufrió una revolución tecnológica justo después de 1900, debido a la invención de un nuevo proceso de fundido, lo que llevó a una importante transformación en Chile. Las inversiones requirieron sumas muy grandes de capital, que llegó del extranjero. En 1904, la Braden Copper Company comenzó a explotar la mina El Teniente, próxima a Santiago. Los intereses británicos fueron pronto asumidos por los Guggenheim, y en 1920 la industria ya estaba dominada por tres compañías sólo, conocidas por sus iniciales como «las ABC»: Andes Copper, Braden Copper y la Chile Exploration Company-Chuquicamata. La primera y la tercera pertenecían a Anaconda, mientras que Braden era una filial de la Kennecott.

Así, en menos de veinte años, la industria del cobre chilena adquirió características que afectarían a la configuración de la vida nacional por algún tiempo. Estaba concentrada en unas pocas manos, que eran estadounidenses. Pasó a constituir un enclave extranjero, que proporcionaría un estímulo rela-



4.1. Producción de cobre chileno, 1912-1987 (compañías principales). *Fuentes:* Markos Mamalakis y Clark W. Reynolds, *Essays on the Chilean Economy*, Homewood, Ill., Richard D. Irwin, 1965, pp. 371 - 372; Ricardo Ffrench-Davis, «La importancia del cobre en la economía chilena», en Ffrench-Davis y Ernesto Tironi, eds., *El cobre en el desarrollo nacional*, Santiago, Universidad Católica de Chile, 1974, cuadros 2 y 7; Manual Lasaga, *The Copper Industry in the Chilean Economy: An Econometric Analysis*, Lexington, Mass., D. C. Heath, 1981, p. 10; Fondo Monetario Internacional, *International Financial Statistics*, varios años.

tivamente pequeño al resto de la economía. Su fuerte dependencia del capital y la tecnología significaba unos modestos niveles de empleo para los trabajadores chilenos. La importación de equipos y accesorios no ofrecía mucho negocio a los fabricantes del país. Y la mayor parte de los beneficios, a menudo abundantes, volvían a las compañías centrales de Estados Unidos, en lugar de invertirse en Chile. No es raro que creciera el resentimiento.

Un problema adicional provenía de la gran inestabilidad de los precios del cobre en el mercado mundial. De hecho, podían fluctuar hasta un 500 o 1.000 por 100 en un mismo año. Esto hacía muy difícil para Chile prever qué cantidad de dólares alcanzarían sus ingresos en divisas, lo cual constituyía un serio problema para hacer la planificación económica. Los giros impredecibles en el mercado mundial del cobre podían desencadenar estragos en los planes más cuidadosamente establecidos. Pero debido a su gran dependencia de este mineral, no le quedaba más remedio que aceptar las consecuencias.

Y el cobre acabó dominando la economía chilena (véase la figura 4.1). En 1956, su producción ya suponía la mitad de todas las exportaciones del país y los impuestos sobre los beneficios de las compañías proporcionaban un quinto de los ingresos totales del gobierno. A menudo se decía que según fuera el cobre, así iba la economía chilena.

En suma, estos hechos configuraron una estructura social compleja. El sector rural abarcaba una élite latifundista tradicional, un campesinado atado a las obligaciones laborales de las haciendas donde vivía y una fuerza de trabajo pequeña pero dinámica que proporcionaba mano de obra asalariada a las grandes fincas comerciales. Había una élite minera e industrial, muchos de cuyos miembros tenían lazos familiares con la aristocracia terrateniente. También había clase media y una clase obrera urbana, nacida en el país, creciente. Los inversores extranjeros fueron notables desde la independencia, pero en el siglo XX su presencia ya se había reducido por la relevancia de las compañías estadounidenses dedicadas al cobre.

Surgirían tensiones entre estos grupos distintos, pero Chile no ha tenido que enfrentarse a un problema de otros países de América Latina: el crecimiento excesivo de la población. De hecho, ha presentado de forma reiterada una de las tasas anuales de crecimiento poblacional más bajas del hemisferio: en 1900-1910 fue sólo del 1,2 por 100 y en 1970-1980, del 2,1 por 100 (comparado con el 2,8 por 100 de América Latina en su conjunto). El control de la natalidad y la planificación familiar han mantenido el tamaño de la población dentro de unos límites manejables, unos 12,1 millones de personas en 1985, aunque nunca ha habido trabajo suficiente ni siquiera para esta población limitada.

Como causa o efecto de esta situación, las mujeres han disfrutado de más oportunidades que en otros muchos países. Entraron en la fuerza laboral con una facilidad relativa y ya en 1970, por ejemplo, cerca del 16 por 100 de las mujeres con empleo ocupaban puestos profesionales o técnicos (más alta que la tasa estadounidense del 14,7 por 100). Las costumbres sociales también reflejaban unos parámetros bastante abiertos e igualitarios en lo relativo al tratoamiento de los sexos.

Política y parlamento

Cuando en el siglo XIX Chile comenzaba a consolidar su posición en la economía internacional, sobrevino una crisis política. La guerra civil de 1859 había convencido a la élite de que era tiempo de una consolidación tranquila. La lograron con José Joaquín Pérez, que comenzó un mandato presidencial de diez años.

Los dos temas políticos más importantes de este periodo fueron la estructura de la Constitución y la posición de la Iglesia. Acerca del segundo, los liberales continuaron su campaña por la igualdad de religión, mientras que los conservadores luchaban por proteger la posición favorecida por el Estado que disfrutaba la Iglesia católica. Lentamente, los liberales lograron concesiones, como el derecho que recibieron los no católicos a tener iglesias y escuelas religiosas. En la práctica, representaba una pequeña apertura de la élite que la hacía más pluralista.

En cuanto a la Constitución, la élite luchaba con el perenne problema de lograr un gobierno efectivo evitando el despotismo. En 1871, se enmendó la Constitución para prohibir a los presidentes estar en el poder durante más de dos mandatos. En 1874, otros cambios hicieron que los ministros tuvieran una responsabilidad mayor ante el Congreso, con lo que se fortaleció el poder legislativo. La disminución del poder de la Iglesia y del presidente llevó a denominar los años de 1861 a 1891 la «República Liberal».

A mediados de la década de 1870, hubo una severa depresión económica al descender la producción minera. También se desarrolló el conflicto exterior más famoso de Chile: la guerra del Pacífico (1879-1883), cuando luchó contra Perú y Bolivia. Su causa manifiesta fue el tratamiento otorgado a los inversores chilenos en los territorios desiertos gobernados por Perú. Tras prolongadas batallas, los chilenos obtuvieron un triunfo militar aplastante. Como vencedores, tomaron el control de la franja costera rica en minerales que había pertenecido a Bolivia y Perú, justificando la guerra como la única respuesta honorable al mal trato recibido por sus campesinos a manos de Perú y Bolivia. Esta conclusión tuvo dos importantes efectos: aumentar la autoestima de los chilenos y hacer surgir un profundo resentimiento entre peruanos y bolivianos. También condujo a Chile al auge de los nitratos.

La década de 1880 contempló mucha actividad acerca del tema Iglesia-Estado. Los reformadores liberales obtuvieron nuevos logros. Se hizo obligatorio el registro civil de matrimonios, nacimientos y defunciones, con lo que se erosionó más el control de la Iglesia sobre la vida diaria. En esos mismos años, el Congreso extendió el voto a todos los varones que supieran leer y escribir de más de veinticinco años, eliminando la comprobación de ingresos anterior.

La segunda mitad de esta década trajo consigo la presidencia de José Balmaceda (1886-1891), el dirigente más controvertido del Chile de finales del siglo XIX. Aunque era liberal, las líneas políticas estaban tan fragmenta-

das que peligraba la actividad política disciplinada. El nuevo presidente se vio pronto envuelto en una agria batalla sobre la política alimentaria.

El tema surgió cuando los ganaderos chilenos propusieron un arancel sobre la carne argentina, que habría significado menos cantidad y precios más altos para los chilenos. Se les opuso el nuevo partido de la clase media, el Partido Demócrata (fundado en 1887), que ayudó a movilizar a los artesanos, pequeños comerciantes y trabajadores cualificados de Santiago contra el arancel. Y salieron triunfantes. Balmaceda convenció a los que habían propuesto el proyecto de que lo retiraran.

Este primer triunfo del Partido Demócrata señaló el comienzo de una tendencia. Fue un precursor de las políticas populistas, es decir, una apelación directa a las cuestiones económicas de los sectores medios y bajos de las ciudades. En busca de un amplio electorado, los demócratas propugnaban leyes que ayudarían a los obreros, mientras que a la vez presentaban las clásicas demandas liberales por asuntos como la educación obligatoria y gratuita, y procedimientos democráticos en las elecciones gubernamentales. Su articulación de las demandas de las masas mostraba lo lejos que ya había llegado Chile en el camino hacia la política moderna.

El destino de la presidencia de Balmaceda fue sellado por la guerra civil de 1891. Hasta hoy, los chilenos discuten apasionadamente sobre ella, sus causas y su significado. Sus orígenes hay que buscarlos en los esfuerzos presidenciales por impulsar el desarrollo económico más de prisa de lo que la mayor parte de la oligarquía estaba dispuesta a conceder. Balmaceda quería aumentar la intervención estatal en la economía. Para pagar la construcción del ferrocarril, las carreteras y la infraestructura urbana nuevas (agua y saneamiento), necesitaba aumentar los ingresos impositivos de la industria de nitratos situada en la provincia norteña de Tarapacá. El obstáculo era la importante presencia extranjera como propietaria, en especial en los ferrocarriles, donde Balmaceda propuso romper el monopolio externo.

Sus planes se encontraron con una inflexible oposición en el Congreso. En realidad, la audacia presidencial enmascaraba una batalla constitucional más profunda, la autoridad del Congreso contra la del presidente. El Congreso venía luchando por establecer su supremacía en la estructura constitucional, pero Balmaceda estaba determinado a imponer su voluntad. El resultado fue una inestabilidad ministerial extrema. Entre 1886 y 1890, Balmaceda cargó con trece gabinetes diferentes y la batalla entre las dos ramas del gobierno llevó a un callejón sin salida.

En 1890, el Congreso no logró elaborar un presupuesto, por lo cual el presidente determinó que se aplicarían las asignaciones del año anterior. Antes ya se había aventurado en una área que siempre había resultado sensible: la elección de un sucesor presidencial, a quien intentaba nombrar él mismo. El Congreso aprobó una ley que prohibía un nombramiento semejante, que luego Balmaceda se negó a firmar.

La oposición del Congreso estaba ahora dispuesta a hallar un remedio por la fuerza de las armas. Sus dirigentes buscaron posibles conspiradores mi-

litares sin éxito. El conflicto emergente tenía implicaciones complejas. En primer lugar, Balmaceda había alarmado los intereses conservadores chilenos con sus planes económicos. Quería un banco nacional, una clara amenaza para los intereses de la oligarquía establecida, que dominaba el sistema bancario privado. Sobre todo, estaba afirmando el poder de la presidencia frente al sistema parlamentario. Dadas sus ideas económicas poco ortodoxas, esto ponía en peligro la red de los latifundistas-comerciantes prevaleciente.

Los contrarios a Balmaceda contaban con el apoyo de las fuerzas navales, pero no del ejército, que seguía al presidente acosado. La región minera del norte resultó ser un bastión rebelde, en el que los propietarios de las minas apoyaron gustosamente una fuerza que prometía depone al presidente que amenazaba con atacar sus intereses económicos. También cortaron los ingresos tributarios por exportación, que eran vitales para el gobierno de Santiago. Un ejército rebelde norteño se movilizó para navegar hacia el sur y depone al presidente.

El combate resultante en Con Con y La Placilla produjo las batallas más sangrientas de la historia chilena, y las tropas de Balmaceda se retiraron derrotadas. El presidente se refugió en la embajada argentina, donde se suicidó un día después de que su mandato presidencial terminara.

En menos de un mes, se eligió un nuevo presidente: Jorge Montt. Pero ahora su poder estaba seriamente circunscrito, puesto que Chile abrazó el sistema parlamentario.

Uno de los asuntos clave de la guerra, la posición de los inversores extranjeros, se había resuelto. Se había acabado con la nacionalización, pero los parlamentarios victoriosos continuaron presionando sobre ellos. El sentimiento nacionalista había penetrado en todos los sectores de la élite chilena.

El trauma de la guerra civil de 1891 puede parecer en principio un momento crucial de la historia chilena, pero, en realidad, sólo subrayó la relativa estabilidad del sistema político. La élite capeó la crisis del desafío presidencial de un modo que prometía una estabilidad al menos igual que la de la vecina Argentina. Chile se hallaba preparado para participar en el auge de la exportación que estaba conduciendo a América Latina aún más dentro de la economía del Atlántico Norte.

La caída de Balmaceda a manos de los congresistas rebeldes cambió la estructura constitucional de Chile. El presidencialismo fuerte cedió el paso a un sistema parlamentario, pero resultó imposible que cualquier ministro durara mucho. Los gabinetes iban y venían a una media de cuatro cada año entre 1895 y 1925. Esta inestabilidad se vio reforzada por la fragmentación de los partidos mayores, que proliferaron hasta cinco en 1900.

El control político continuó en manos de una oligarquía que representaba fundamentalmente los intereses agrícolas. Se la denominó «la fronda aristocrática» en el libro clásico de Alberto Edward (1928) del mismo nombre. De forma ocasional fueron desafiados por grupos urbanos, como el de los comerciantes. Los obreros, aunque aún no estaban organizados en partidos políticos, comenzaban a hacer sentir su peso. El asunto que los levantó fue la

subida de los precios. En 1905 organizaron una serie de protestas que llevaron a la confrontación directa con miembros armados de la oligarquía y, de forma similar, una huelga minera en 1907, en la ciudad norteña de Iquique, hizo erupción con violencia y derramamiento de sangre.

Desde 1910 los obreros se volvieron aún más militantes. Los organizadores más importantes eran los anarcosindicalistas, activistas infatigables que sobresalieron en la organización de las numerosas empresas pequeñas. Aunque su objetivo a largo plazo era la abolición de todo gobierno, se concentraron a corto plazo en conseguir concesiones inmediatas para sus seguidores. Ubicados en Santiago, los sindicatos anarcosindicalistas consiguieron importantes mejoras en los salarios y las condiciones laborales. Pero eran vulnerables a las represalias contra sus dirigentes, que estaban sujetos al despido, a la detención o al encarcelamiento.

Sin embargo, estos sindicatos no representaron una amenaza básica para el sistema político. En sus demandas salariales, los trabajadores buscaban mantener lo suyo frente a la inflación. En cuanto a las condiciones laborales y los beneficios adicionales, los patronos podían socavar gran parte de la militancia concediendo bienestar social. Fue lo que hizo precisamente el Congreso, al legislar sobre las indemnizaciones para los trabajadores en 1916, la responsabilidad empresarial en 1917 y un sistema de jubilación para los trabajadores ferroviarios en 1919.

Tras un descenso de la actividad huelguística y una pérdida de la capacidad negociadora, el movimiento obrero comenzó a revivir en 1917. La recuperación económica fortaleció su autoridad, ya que la primera guerra mundial había estimulado mucho la demanda de nitratos, ingrediente clave en los explosivos. Pero la inflación volvía a comerse los salarios y hacía receptivos a los trabajadores ante los llamamientos de los organizadores. Durante los tres años siguientes, los sindicatos crecieron de modo uniforme, a pesar de que la ley chilena no los reconociera.

Este aumento de la fuerza laboral organizada preocupó a la oligarquía política, así como a los sectores medios. Como en Argentina y Brasil, la élite presumía que el descontento era obra de agitadores extranjeros. En 1918, el Congreso aprobó una ley de residencia, semejante a la argentina y brasileña, diseñada para facilitar la deportación de los extranjeros que fueran organizadores sindicales activos. Pero ni los políticos ni la élite habían dado en el clavo, porque Chile carecía de semejantes extranjeros. Como la inmigración europea había sido mínima, la estrategia de deportación no pudo funcionar.

El año de 1919 marcó la cima de la movilización obrera. En enero y febrero, los dirigentes sindicales convocaron enormes congregaciones en Santiago para protestar por los altos precios de la inflación debida a la guerra. En agosto hubo otra manifestación gigante, en la que 100.000 participantes desfilaron ante el palacio presidencial. Sin embargo, al mes siguiente fracasó en Santiago una huelga general y sacudió la moral de los trabajadores. A partir de entonces, descendió el índice de huelgas.

Por sorprendente que resulte, la respuesta del gobierno a los huelguistas

había sido moderada desde que comenzó el rápido ascenso del movimiento obrero en 1917. En diciembre, un edicto general (el decreto Yáñez) hizo del gobierno el mediador en los conflictos laborales sin salida. Aunque fue rechazado por anarquistas y sindicalistas, se utilizó mucho y con frecuencia en beneficio de los trabajadores durante 1918 y 1919. Este modelo continuó en 1920, debido en parte a que al gobierno le preocupaban las elecciones programadas para junio.

Chile, como Argentina, había abierto la puerta a la participación política del sector medio, proceso mucho menos avanzado en Brasil. El número de votantes de la clase obrera, aunque aún pequeño, había comenzado a atraer la atención de los políticos burgueses, sobre todo en Santiago. Su apoyo podía ser crucial, en especial cuando el voto se dividía entre muchos partidos, como ocurría en Chile. El dirigente político que lo vio con mayor claridad fue Arturo Alessandri, que hizo la campaña para la presidencia lanzando un apasionado llamamiento a los votantes urbanos, incluidos los obreros. Representaba las ideas de un sector medio «ilustrado», que aceptaba la participación de la clase obrera, a la vez que esperaba canalizarla a líneas de acción controlables. Proponía la legalización de los sindicatos, pero también los situaba en un intrincado marco legal determinado por el gobierno.

Alessandri ganó las elecciones, aunque por estrecho margen. Una vez terminado su ejercicio democrático, el presidente saliente Sanfuentes se sintió libre en los pocos días que le quedaban para responder al desafío del movimiento obrero. En julio de 1920, los trabajadores fueron acosados por las Ligas Patrióticas, activistas callejeros paramilitares pertenecientes a familias de derechas de clase media y alta. Siguió una represión sistemática del gobierno. Casi todos los dirigentes anarcosindicalistas y demás que no decidieron exiliarse o pasar a la clandestinidad fueron detenidos y encarcelados. Los trabajadores sin dirigentes se sintieron aún más desmoralizados por una ola de despidos, durante la cual los empresarios revocaron muchas de las concesiones efectuadas entre 1917 y 1920.

Había esperanzas de que la política antiobrera cambiara cuando Alessandri asumió el cargo, y así fue. Durante la primera mitad de 1921, su gobierno intervino (bajo la autoridad del decreto Yáñez) en varias huelgas y favoreció a los obreros con su mediación. Pero el conflicto se agravó y Alessandri recibió el ataque desde todos los flancos: de la derecha por ser tan blando con los trabajadores y de la izquierda por hacer la vista gorda ante las agresivas prácticas de los empresarios. En julio de 1921, acabó optando por los empresarios. Intervino en una agria huelga de tranvías en Santiago, ayudando a la compañía a romperla. Se siguió una ola de despidos. A finales de ese mismo año, el gobierno había pasado a reprimir de forma sistemática el movimiento obrero.

Mientras las organizaciones laborales luchaban contra las condiciones económicas y políticas adversas, el presidente Alessandri impulsó sus propuestas acerca de un código laboral y un paquete de medidas de bienestar social, introducidos en el Congreso en 1921. Los conservadores se opusieron a esas

ideas, ya que preferían el estado en que estaban las cosas: los obreros carecían de condición legal y por ello se enfrentaban a asaltos continuos tanto de los empresarios como del gobierno. Algunos conservadores también temían que los liberales pudieran obtener nuevos votantes entre los trabajadores urbanos. El callejón sin salida entre el presidente liberal y el Congreso conservador continuó hasta 1924. Entonces intervinieron los militares.

De la inestabilidad al Frente Popular

Una junta militar tomó el control parcial del gobierno a comienzos de septiembre de 1924 y tres días después emitió un manifiesto con la lista de las demandas legislativas, que el Congreso cumplidamente aprobó una por una. Incluía un paquete de medidas laborales, la más importante de las cuales era un detallado código laboral que sometía a los sindicatos a una estrecha supervisión gubernamental.

Chile seguía el sistema de Bismarck sobre las prestaciones de bienestar social creado en el imperio alemán durante la década de 1880. Como en el caso germano, este avance social no era el producto de un proceso político en el que los trabajadores desempeñaran un papel directo. Más bien se trataba de un paso preventivo del gobierno, bajo la presión militar, para atajar la movilización más independiente de las organizaciones obreras. En Chile, este paso de apariencia progresista fue el resultado de la presión de un sector del gobierno que tenía mucho que temer de la movilización obrera: el cuerpo de oficiales del ejército.⁴

Alessandri, mientras tanto, perdía terreno en su lucha contra el ejército y se retiró a Italia. Fue vuelto a llamar tras un segundo golpe militar en enero de 1925. En este momento, irónicamente, los oficiales que detentaban el control pensaron que necesitaban a Alessandri y el apoyo de los trabajadores urbanos para reforzar su legitimidad. El nuevo gobierno militar intervino con frecuencia en las huelgas, por lo general de parte de los trabajadores. Parecía que el movimiento obrero estaba a punto de conseguir el poder; algunos llegaron a pensar que la revolución estaba al caer. El miedo se extendió entre la élite, que podía ver cómo el poder se les escapaba de las manos.

La revolución no era inminente. Alessandri regresó de su retiro en marzo de 1925 y de inmediato dio otra lección al movimiento obrero sobre su vulnerabilidad. En un enfrentamiento con los trabajadores del nitrato en junio de 1925, el gobierno actuó con dureza. Durante los dos años siguientes, los obreros batallaron no sólo contra la hostilidad gubernamental, sino también contra la recesión económica y el desempleo. En enero de 1927, algunos líderes sindicales mal aconsejados intentaron una huelga general. Sus divisiones se hicieron demasiado evidentes y la huelga fracasó.

El coronel Carlos Ibáñez surgió como el hombre fuerte de la inestabilidad política que siguió a la renuncia de Alessandri en 1925. En mayo de 1927, fue formalmente elegido presidente por el Congreso y procedió a con-

solidar una dictadura que duró hasta 1931. Fue un golpe para los chilenos, orgullosos de su democracia relativa y su competición política libre. El general presidente encarceló a los opositores, en especial a los dirigentes sindicales, y suspendió las libertades civiles.

Ibáñez tenía ideas económicas activas, que corrían parejas con su política autoritaria. El gobierno aumentó su papel en la economía, lo que significó acelerar la construcción de ferrocarriles, carreteras e instalaciones eléctricas. Y, como no es de sorprender, también incrementó el gasto militar. Gran parte de la financiación vino de fuera, en forma de préstamos y, de modo especial, inversión estadounidense en la minería. La expansión económica mundial de los años veinte hizo todo ello posible.

La quiebra de Wall Street en 1929 puso un fin abrupto a este periodo, en Chile y en otros lugares. Las exportaciones de minerales cayeron desastrosamente y la financiación extranjera se secó. Fracasó un desesperado intento de crear un cártel nacional para la venta de nitratos en el exterior. Aumentaron las protestas contra el gobierno y un espectro cada vez más amplio de la sociedad, que ahora incluía a profesionales con los trabajadores, se unió al ataque contra el dictador. Ibáñez acabó por rendirse. En julio de 1931 dimitió, uniéndose a las filas de los demás jefes de gobierno latinoamericanos que habían tenido la mala fortuna de hallarse gobernando cuando golpeó la Gran Depresión.

Durante el año siguiente, Chile careció de un gobierno estable. Los regímenes de este intervalo incluyeron el interludio de trece días de una «República socialista», en la que el coronel Marmaduke Grove se convirtió en la figura más conocida. Aunque fue un gobierno ineficaz, este régimen propició el surgimiento de una nueva institución, el Partido Socialista, fundado formalmente un año después. Al fin, se celebraron otras elecciones presidenciales y el ganador fue una figura conocida: Arturo Alessandri.

El Alessandri fogoso de antes estaba ahora más interesado en el orden que en el cambio. Su gobierno actuó con dureza contra la oposición, en especial la de izquierdas. En 1936, cuando se levantó una ola de huelgas, tomó medidas severas. Proclamó el estado de sitio, clausuró el Congreso y envió al exilio a los dirigentes sindicales. El ejército tomó los ferrocarriles, siempre un foco de conflicto laboral.

En la política económica, la presidencia de Alessandri obtuvo un éxito considerable. Un ministro de Economía ultraortodoxo, Gustavo Ross, redujo de forma drástica los gastos del sector público y desmanteló algunas de las entidades gubernamentales clave que Ibáñez había creado. Gracias a la recuperación de la demanda mundial de las exportaciones chilenas, en especial la de los minerales, la balanza de comercio exterior mejoró considerablemente. La cifra oficial de desempleo, de 262.000 personas en 1932, descendió a menos de 16.000 en 1937. Sin embargo, la inflación se mantuvo como problema, mientras que los incrementos salariales apenas llegaban a alcanzar las subidas de los precios.

Chile se acercaba a las elecciones presidenciales de 1939 con aprensión.

En 1935, el movimiento comunista mundial, dominado por el Comintern de dirección soviética, había pedido una estrategia de coalición para combatir el fascismo, animando en la práctica a los partidos comunistas a buscar alianzas con los partidos de izquierdas y de centro (como rápidamente pasó en Francia y en España). En 1936 la idea dio frutos en Chile, cuando comunistas y radicales unieron sus fuerzas en un «Frente Popular», que en 1938 ya incluía un amplio espectro de partidos: radicales, socialistas, comunistas, demócratas, además de una nueva Confederación de Trabajadores Chilenos. Después de que el socialista Marmaduke Grove retirara su candidatura, la designación recayó en Pedro Aguirre Cerda, un potentado radical conocido por sus ideas reformistas sobre la cuestión agraria.

La alianza política que ocupaba el cargo presentó como candidato al ministro de Economía de Alessandri, Gustavo Ross. Era una elección destinada a enfurecer a la clase media. Ross presentaba una imagen inflexible y del pasado, a pesar de la relativa prosperidad que trajo su política. La campaña fue muy disputada y Aguirre Cerda ganó por el más estrecho de los márgenes: sólo consiguió 4.000 de los 241.000 votos emitidos.

A pesar de ello, o quizás debido a ello, estas elecciones establecieron el contexto político para los años venideros. Los votantes centristas habían inclinado la balanza al optar por la izquierda. Sin embargo, al mismo tiempo estaban votando por un reformista, por lo que el resultado parecía ambiguo. ¿Qué tipo de mandato sería el del gobierno resultante?

El gobierno del Frente Popular sufrió pronto las tensiones de una coalición tan heterogénea. Los radicales eran el elemento dominante y los de ideología menos extremista. Se centraron en el desarrollo económico y no en el bienestar social, por lo que algunos los acusaron de explotar el poder en virtud de las influencias políticas al viejo estilo.

Los otros elementos del Frente tampoco estaban nada unidos. Los comunistas y socialistas eran antagonistas naturales, ya que muchos de los últimos eran ex comunistas que se habían negado a someterse a la disciplina del partido. Ambos trataban de movilizar a los trabajadores rurales, por lo que alarmaron a los poderosos latifundistas y se colocaron en competencia mutua.

El Congreso estaba controlado por la oposición derechista, pero el apoyo popular hacia la izquierda iba en aumento. En las elecciones al Congreso de 1941, los comunistas recibieron el 12 por 100 de los votos, por encima del 4 por 100 de 1937. Los socialistas (y grupos afines) lograron un 20 por 100. A pesar de que los partidos de derechas, combinados con los radicales, tenían la mayoría, los conservadores vieron una amenaza creciente de la izquierda.

Las medidas del Frente Popular no podían ser menos amenazadoras. La política económica se concentró en aumentar el papel del gobierno nacional en la economía. En 1939 se creó una nueva corporación estatal: la CORFO (Corporación de Fomento), que iba a estimular el desarrollo económico mediante inversiones estratégicas en el sector público y privado.

El Frente Popular perdió hasta a su dirigente cuando su precaria salud forzó al presidente Aguirre Cerda a renunciar en 1941. El nuevo presidente

fue otro radical, Juan Antonio Ríos (1942-1946), que tuvo que enfrentarse a las incertidumbres de tiempos de guerra. Luchó por mantener a Chile neutral en el conflicto mundial. Sometido a la presión estadounidense para unirse a los Aliados, temía la reacción de la colonia alemana del sur de Chile. También temía el posible ataque japonés a las extensas e indefensas costas del país. En enero de 1943, rompió finalmente relaciones con el Eje. Chile se había enfrentado a un dilema muy semejante al de Argentina, que retrasó su ruptura con Alemania e Italia hasta comienzos de 1945.

El presidente que siguió, Gabriel González Videla (1946-1952), era una vez más radical. Aceptó el apoyo del Partido Comunista a su campaña y lo recompensó con tres carteras en su gabinete. Este modesto retroceso del Frente Popular no duró mucho. En 1946 hubo una serie de huelgas violentas. La protesta se centró en los campos mineros del norte, pero pronto se extendió a todo el país. La convocatoria de una huelga general provocó fuertes medidas policiales y sobrevinieron disturbios. Se cernía un conflicto social a gran escala. El gobierno declaró el estado de sitio y suspendió las libertades civiles. Las huelgas continuaron hasta 1947.

Para entonces, González ya había purgado su gabinete de comunistas. Las huelgas dieron la oportunidad a la derecha de organizar una ofensiva, pues se había alarmado por el aumento constante del voto comunista, que llegó al 18 por 100 en las elecciones municipales de 1947 (por encima del 12 por 100 de las elecciones al Congreso de 1941). El gobierno chileno decidió entonces actuar contra la izquierda, para lo cual tenía pleno apoyo exterior, ya que Estados Unidos estaba lanzando una gran campaña en América Latina para aislarla, en especial a los partidos comunistas, y su embajada alentó mucho a los conservadores chilenos. La izquierda se defendió atacando al gobierno de González y a Estados Unidos. Se llegó al clímax en 1948: por una ley del Congreso, en el que la izquierda era una clara minoría, el Partido Comunista fue proscrito y se prohibió a sus miembros presentar candidaturas u ocupar cargos públicos. Siguió una cacería de brujas. Los radicales mostraron sus colores verdaderos. Junto con los derechistas, los radicales de centro habían vuelto a demostrar que se encontraban preparados para usar los medios «legales» con el fin de eliminar del juego político a sus adversarios más peligrosos. Para la izquierda, el Frente Popular se convirtió en una lección y desfogaron su cólera sobre González Videla.

La etapa de la política de partidos

La defunción final del Frente Popular llevó al país a un periodo de intensa rivalidad política basada en las organizaciones partidistas. Durante esta etapa, el sistema político chileno mostró varias características identificatorias.

En primer lugar, las elecciones fueron extremadamente reñidas. Había muchos partidos diferentes, por lo que era raro que uno de ellos recibiera más de un cuarto de la votación total. Este hecho explicaba un segundo ras-

go: en busca de mayorías gobernantes, los partidos tenían que tomar parte en coaliciones. Sin embargo, las alianzas eran frágiles y los dirigentes políticos estaban siempre a la caza de nuevos acuerdos y dedicados a fortalecer su posición mediante la negociación. Por debajo de todo esto, había una tendencia en aumento hacia la polarización ideológica. En un sondeo de opinión, el 31 por 100 de la población chilena se definía como de derechas, el 24 por 100 se describía como de izquierdas y el resto eran de centro o indecisos. Debido a esta fragmentación, los partidos de centro, mediante negociación y hábiles maniobras, podían tener una gran influencia en las coaliciones y los resultados electorales.

En tercer lugar, el sistema era altamente democrático. En contraste con Argentina, donde los sindicatos mantenían relaciones precarias con los partidos políticos, el movimiento obrero chileno estaba identificado de forma muy estrecha con varios partidos, la mayoría de izquierdas, por lo que no formaba un centro de poder separado. Medido como porcentaje de los votantes censados, la participación electoral era elevada (cerca de un 80 por 100, comparado con el 50-60 por 100 estadounidense), y el censo aumentó con rapidez a comienzos de los años sesenta. Los resultados electorales eran aceptados como vinculantes por la mayoría de los chilenos.

Las elecciones presidenciales de 1952 devolvieron otra figura del pasado: el general Carlos Ibáñez. El antiguo dictador, ahora mediados los setenta años, se proclamó la única respuesta a los muchos problemas de Chile. Este caudillo se presentó como un auténtico nacionalista, pero su llamamiento se dirigía en realidad a la derecha y al centro, que de nuevo estaban preocupados con la izquierda. Socialistas y comunistas formaron otra alianza electoral, aunque los últimos se enfrentaban a su ilegalidad. Los resultados electorales fueron indicativos del camino que iba a seguir Chile durante décadas: un voto profundamente dividido, que no otorgó una clara mayoría a ningún candidato o partido. Ibáñez ocupó el cargo con una pluralidad del 47 por 100.

Ibáñez había declarado ser el hombre apolítico capaz de resolver todos los problemas políticos, pero, como era de esperar, no pudo cumplir sus promesas. Su principal problema económico era la inflación, que había golpeado a Chile antes y de forma más dura que a la mayor parte de América Latina. Como se enfrentaba a un importante déficit en la balanza de pagos, tuvo que buscar ayuda exterior. La fuente lógica era el Fondo Monetario Internacional (FMI), creado para asistir a los países miembros con problemas temporales en la balanza de pagos. Desafortunadamente para los chilenos, no se trataba sólo de concertar un préstamo externo. Sus estatutos obligaban al FMI a requerir pruebas de que el país que obtenía ayuda contaba con un plan convincente para corregir las causas que habían originado el déficit. Según se aplicaba a mediados de los años cincuenta, esta medida significaba que el FMI debía supervisar la política económica del país solicitante. Como resultado, la mayoría de los chilenos (y la mayor parte del resto de los latinoamericanos) acabaron considerándolo una extensión del poder económico y político estadounidense.

De este modo, Ibáñez se vio atrapado en el típico dilema político producido por la inflación. Su gobierno tenía que actuar porque había agotado las divisas y no podía importar los tan necesitados productos del exterior. No obstante, las fuentes de financiación externas sólo le ofrecían ayuda con la condición de obtener el voto sobre la planificación de las medidas básicas. La presión financiera estaba conduciendo a Chile a comprometer su autonomía nacional. Ibáñez sabía que la izquierda le perseguiría despiadadamente si accedía a las condiciones del FMI, pero decidió aventurarse.

Su gobierno no tardó en pagar el precio. Las medidas iniciales fueron de austeridad. Un primer objetivo fueron los servicios públicos, que de forma invariable cobraban tarifas muy bajas en tiempos de rápida inflación, ya que sus responsables dudaban en cargar los costes crecientes a los consumidores para evitar la protesta pública. Un incremento en el billete de autobús, por ejemplo, provocó una respuesta furiosa. Los disturbios comenzaron en Santiago y se extendieron a otras ciudades. Dada la fortaleza de los sindicatos y los partidos de izquierda, Chile era un lugar difícil para las medidas antiinflacionistas. Al final Ibáñez no fue capaz de cumplir sus grandes propósitos. Había demostrado ser un viejo general cansado con poca base política y aún menos ideas políticas.

Las elecciones de 1958 dieron como resultado un nuevo presidente con un apellido conocido: Alessandri. Era Jorge, el hijo de Arturo Alessandri. Aunque se consideraba independiente, se había presentado como el dirigente de la derecha, en un programa conservador y liberal combinado. Sus oponentes fueron Salvador Allende, doctor en medicina y veterano político que representaba a la alianza socialista-comunista (FRAP), y Eduardo Frei, joven idealista y ambicioso que encabezaba a los demócratas cristianos (PDC), un partido relativamente nuevo en la escena nacional. Alessandri obtuvo la mayoría de los votos (31,6 por 100), contra el 28,9 por 100 de Allende y el 20,7 por 100 de Frei; el restante 18,8 por 100 se dividió entre el candidato radical y un sacerdote independiente. El Congreso confirmó sin demora la elección de Alessandri, como establecía la Constitución cuando ningún candidato obtenía la mayoría absoluta. Las elecciones habían demostrado una vez más que el electorado chileno estaba profundamente dividido.

No era fácil que Alessandri fuera a establecer un puente sobre esas divisiones, aunque disfrutaba de popularidad personal. Era una figura austera, justamente la opuesta a los caracteres de personalidad rebosante que creó el estilo político «populista» en América Latina.

El nuevo presidente era un representante auténtico del pensamiento político y económico conservador de Chile. Creía con firmeza en la economía de libre empresa, que incluía la ortodoxia monetaria y la puerta abierta a las inversiones extranjeras. Su gobierno atacó la seria inflación con una política de estabilización ortodoxa al estilo del FMI: recortes presupuestarios, devaluación (a un tipo de cambio fijo) y la solicitud de nuevas inversiones extranjeras.

Sus esfuerzos estabilizadores fueron socavados por una agria batalla

acerca de la política sobre el cobre. El gobierno trató de convencer a las compañías mineras estadounidenses para que aumentaran su inversión. La idea era conseguir que se hiciera en Chile la mayor parte del procesamiento de este mineral, lo cual aumentaría los rendimientos económicos chilenos y además le haría más autosuficiente para comerciar con el producto final. Pero los nacionalistas estaban inflamados: querían expropiar las compañías, no sólo alentar su inversión. La política gubernamental salió airosa, pero las inversiones no aumentaron y Chile no mejoró la comercialización de su único bien importante en el mercado mundial.

Otras medidas económicas ortodoxas mostraron cierto éxito a corto plazo. En 1957 y 1958 la inflación había rondado entre el 25 y el 30 por 100. En 1959 subió al 39 por 100, pero luego descendió al 12 por 100 en 1960 y a sólo el 8 por 100 en 1961. Sin embargo, los ingresos por exportación no lograron aumentar de forma significativa y la liberación de los controles de importación llevó a un considerable déficit comercial. Se había supuesto que un tipo de interés fijo iba a restablecer la confianza, pero como el déficit comercial se elevaba, sólo sirvió para que los especuladores abandonaran la moneda chilena cuando aún estaban a tiempo.

Alessandri también había esperado que su política ortodoxa hiciera algún progreso frente a los crecientes problemas sociales creados por el lento y desigual crecimiento económico chileno. Se lanzaron proyectos de obras públicas a gran escala, financiados en su mayor parte con fondos extranjeros. Una fuente importante fue Estados Unidos, donde la preocupación sobre la amenaza cubana había llevado a formular sin demora la Alianza por el Progreso. Alessandri se atrevió incluso a abordar la cuestión agraria, durante mucho tiempo un tema prohibido en sus filas políticas. Aunque la ley aprobada en 1962 fue tachada de ridículamente inadecuada por toda la izquierda, proporcionó en la práctica la base para un programa de expropiaciones agresivo.

No resulta sorprendente que ninguna de las medidas de Alessandri fueran de mucha utilidad para resolver los graves problemas socioeconómicos a los que se enfrentaba Chile. El continuo éxodo de los pobres del campo a las ciudades, en especial a Santiago, no se detuvo. Allí vivían y comían mal, y carecían de educación. Además, había poco trabajo. Estos «marginados» eran el lado oculto de la urbanización capitalista de un país del Tercer Mundo. En los años sesenta, alrededor del 60 por 100 de la población vivía en áreas urbanas.

A Alessandri le habría gustado gobernar un país tranquilo, pero los acontecimientos pronto acabaron con ese sueño. A comienzos de los años sesenta, la escena política chilena comenzó a cambiar de modo significativo. En primer lugar, estaba el gran crecimiento del electorado: apenas más de 500.000 personas en 1938 y ya en 1963 había alcanzado 2.500.000, lo que suponía que se había quintuplicado en veinticinco años. En segundo lugar, se dio un realineamiento de las fuerzas políticas. Ahora había cuatro agrupaciones importantes: 1) la derecha, que incluía los partidos liberal y conserva-

dor; 2) los radicales centristas, durante mucho tiempo maestros del oportunismo; 3) la izquierda marxista, compuesta fundamentalmente por comunistas y socialistas; y 4) los demócratas cristianos, situados en el centro, un partido orientado a la reforma que comenzaba a conformar su electorado. En las elecciones municipales de 1963, cada uno de estos cuatro grupos consiguió porcentajes de votos prácticamente iguales. Los mayores ganadores netos fueron los demócratas cristianos, que estaban atrayendo votos de la izquierda y de la derecha.

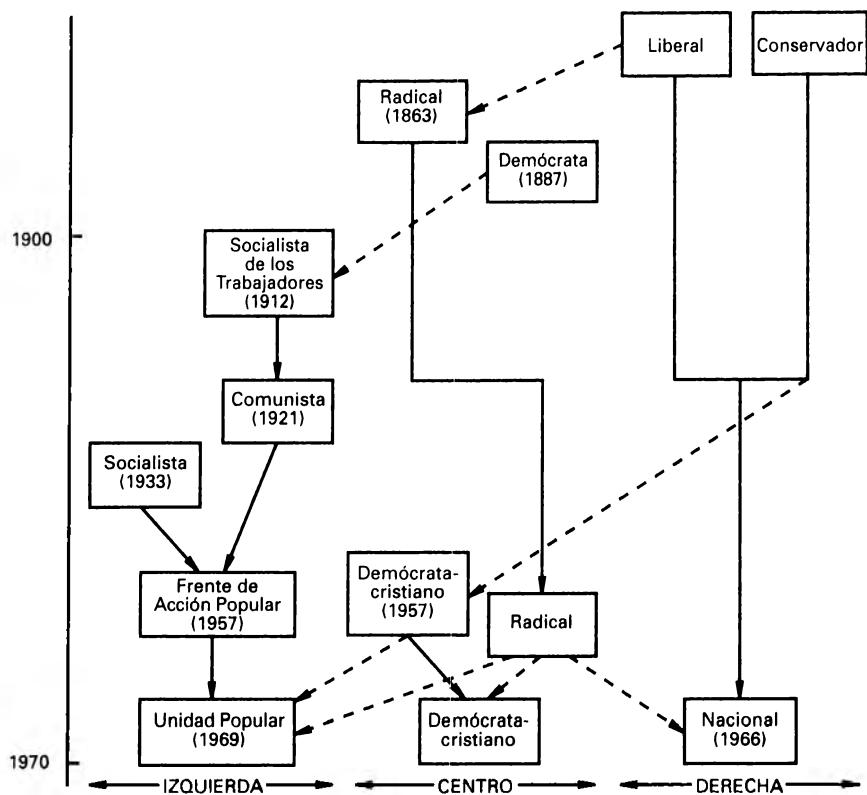
A medida que se acercaban las elecciones presidenciales de 1964, se agudizaba la polarización. Un indicador ampliamente discutido fueron unas elecciones especiales celebradas en marzo de 1964 para ocupar un escaño del Congreso en la provincia de Curicó. Aunque antes había sido un bastión del Partido Conservador, sus votantes rurales mayoritarios otorgaron al candidato del FRAP el 39 por 100, mientras que el candidato de centro-izquierda sólo obtuvo un 33 por 100 y los demócratas cristianos, un 28 por 100. Considerando que estos resultados representaban los de toda la nación, los liberales y conservadores decidieron de inmediato que su única salvación estaba en una alianza con los demócratas cristianos. Disolvieron su Frente Democrático y comenzaron a cortejar al PDC. El aislamiento político del campo chileno pareció haber terminado. Los latifundistas y sus agentes ya no podían dar por supuestos los votos de los pobres rurales.

Las elecciones presidenciales de 1964 parecían cruciales tanto para Chile como para América Latina. La izquierda presentaba una vez más a Salvador Allende. Las críticas estridentes del FRAP al capitalismo parecían de la mayor importancia ahora que hacía tan poco que un gobierno conservador de corte clásico había fracasado.

Iban a ser muy diferentes de las celebradas en 1958. Un partido relativamente nuevo, el de los demócratas cristianos, había hecho su aparición en escena. Cuando los partidos de derechas decidieron apoyar al candidato del PDC, Eduardo Frei, éste obtuvo un enorme empuje. Era una decisión pragmática por miedo a que el FRAP obtuviera una victoria mayoritaria, como casi sucedió en 1958. Los de derechas lo decidieron a pesar de sus recelos acerca de las ideas reformistas del PDC, que muchos conservadores consideraban peligrosamente próximas a las fórmulas de la izquierda.

La campaña fue reñida y levantó un gran interés en todo el continente americano. El FRAP pedía el repudio sin cortapisas del capitalismo y el imperialismo. Los latifundistas chilenos y las compañías estadounidenses dedicadas al cobre eran presentados como los villanos. Allende pedía nada menos que una transformación completa de la sociedad chilena para conducir el país al socialismo.

La campaña del PDC era una operación de gran potencia, elaborada para convencer al electorado de que Frei podía proporcionar un cambio significativo sin violar las libertades tradicionales de Chile. Iba a ser una «Revolución en Libertad». Sin embargo, en la práctica los demócratas cristianos prometían reformas, no revolución. Las reformas se sumaban a una econo-



4.2. Genealogía de los principales partidos políticos chilenos. Las flechas discontinuas indican grupos escindidos o coaliciones temporales.

mía capitalista más eficaz, que se lograría mediante una intervención limitada del gobierno para llevar a cabo medidas tales como la reforma agraria (a través de la expropiación de las tierras inactivas), el aumento de las viviendas públicas y un mayor control sobre las compañías estadounidenses del cobre (a través de la adquisición chilena de parte de la propiedad).

Frei y el PDC no perdieron tiempo en etiquetar al FRAP como una extensión de Moscú. En inteligentes caricaturas y anuncios radiofónicos jugaron con el temor a «otra Cuba» en Chile, que se sabía muy explotable. El gobierno estadounidense, así como los democristianos de Europa Occidental, también se mostraron muy interesados en esta contienda entre reformismo y marxismo. La Agencia Central de Inteligencia reconocería más tarde haber contribuido a sufragar más del 50 por 100 de los gastos de la campaña de Frei. De este y otros modos, que probablemente incluyeron dinero y apoyo por parte de empresas comerciales estadounidenses, los votantes chilenos sintieron los efectos de la fuerte presión estadounidense.

Quizá haya sido un caso de superabundancia. Frei ganó las elecciones con mayor facilidad de la que nadie había esperado, con un 56 por 100 de los votos. Allende obtuvo el 39 por 100, muy por encima de su cuota de 1958. La diferencia, por supuesto, era que esta vez se trataba de una carrera de dos pistas. Un tercer candidato, Julio Durán, de los radicales, fue abandonado por muchos de su propio partido y terminó con sólo un 5 por 100. El triunfo pertenecía a Frei, pero la Revolución en Libertad debía su nacimiento mucho más a la ausencia de un candidato de derechas que a cualquier cambio repentino de los votantes chilenos.

El gobierno de Frei comenzó con una alta expectación. La izquierda había sido derrotada de forma decisiva. Los votantes habían elegido el cambio. Ahora los demócratas cristianos debían moverse con rapidez y decisión.

Sin duda, su plato estaba lleno. Se dio prioridad a la política económica. Uno de los temas más candentes era el cobre: cómo mejorar la cuota de explotación chilena de su exportación más valiosa. Aquí, como en todo lo demás, los estrategas de Frei buscaron un camino intermedio. La nacionalización abierta (con indemnización) sería demasiado cara, razonaron, ya que Chile debería enfrentarse a copiosos pagos en dólares. Resultaba igualmente inaceptable pedir a las compañías estadounidenses que aumentaran su inversión bajo los antiguos términos, ya que sería un paso atrás en el camino hacia un mayor control estatal. Su solución fue centrista: el gobierno chileno compraría parte de la propiedad de las compañías y los ingresos serían reinvertidos por éstas en aumentar las instalaciones, en particular las de procesamiento. La meta era doblar la producción de cobre para 1970. Si tenía éxito, el plan aumentaría tanto el control nacional como los ingresos por exportación.

La izquierda atacó con fuerza la propuesta, que etiquetaron de «entre-guismo». Los demócratas cristianos decidieron convertirlo en tema fundamental de las elecciones para el Congreso de marzo de 1965, en las que obtuvieron una victoria aplastante. De inmediato, utilizaron a sus nuevos congresistas para votar el plan sobre el cobre («chilenización») en noviembre de 1965. La oposición de la izquierda y de muchos mineros permaneció inquebrantable. Frei llegó a acuerdos con Anaconda (de la que un 25 por 100 pasó a ser propiedad estatal) y Kennecott (ahora con un 51 por 100 propiedad del gobierno), las dos compañías más importantes, pero durante los cinco años siguientes la producción de cobre aumentó sólo un 10 por 100. Los ingresos por exportación se duplicaron, pero fue debido a una subida del precio mundial de este mineral, no a la producción. Además, una gran parte de estas ganancias se fue a las compañías, debido a los términos de los nuevos contratos. Los abogados de éstas habían pensado en el futuro de forma más hábil que los tecnócratas de Frei, lo que no dejó de recalcar la izquierda.

El sector agrario también era clave. Chile había padecido durante mucho tiempo una de las estructuras rurales más arcaicas de América Latina, que hacía que las masas rurales marginadas cada vez se desesperaran más. Los demócratas cristianos impulsaron una ley de reforma agraria en 1967, otro de sus compromisos. Se establecieron elaboradas disposiciones para identificar

las tierras que debían expropiarse, las indemnizaciones que se pagarían y la distribución de la tierra a 100.000 campesinos antes de 1970. Los estadistas de Frei esperaban que las cooperativas —siempre un soporte importante en el pensamiento demócrata cristiano— proporcionarían las instalaciones necesarias para que las nuevas granjas fueran rentables. El programa marchó más lentamente de lo previsto y al final del mandato de Frei sólo había 28.000 nuevas propiedades de granjas, un número que vio oscurecido su significado por las altas expectaciones que había levantado.

Estados Unidos continuó interesándose mucho por la fortuna del gobierno de Frei, ya que presentaba todos los rasgos del régimen reformista que la Alianza para el Progreso debía apoyar. Por ello, al igual que las entidades multinacionales como el Banco de Desarrollo Interamericano y el Banco Mundial, concedió a Chile una financiación muy generosa. A corto plazo, esto ayudó a su balanza de pagos anual, pero, a la larga, se añadió a su deuda externa.

En la esfera política, los demócratas cristianos intentaron cumplir su promesa sobre una nueva forma de participación popular. Rechazando el papel preponderante del Estado que las soluciones de izquierda traerían de forma inevitable, impulsaron la *promoción popular*, que parecía ser una nueva clase de actividad política popular. En la práctica suponía una mezcla de comunianismo, autoayuda y cooperativas. Sobre todo, significaba atajar a la izquierda, que a través de sus sindicatos y estructuras de partido (tanto los comunistas como los socialistas) habían llevado la delantera en la organización popular. El efecto neto fue la lucha encarnizada a través de la sociedad para ganar las elecciones: en sindicatos, asociaciones estudiantiles, cooperativas, colegios de abogados y toda clase de grupos profesionales. La política penetraba cada vez más dentro de la sociedad chilena.

La victoria en las elecciones al Congreso de 1965 resultaron ser la cúspide de la fortuna política democristiana. En las elecciones municipales de 1967 y 1969 perdieron terreno. En 1969 perdieron la mayoría en la Cámara de Diputados. Los esfuerzos por lograr un cambio socioeconómico reformista resultaron difíciles y las posibilidades de su Revolución en Libertad se alejaron.

La izquierda, tan próxima a la victoria en las elecciones presidenciales de 1958, luchaba por crear otra coalición para la campaña de 1970. La derecha, que había apoyado a Frei por un claro oportunismo, se abandonó ahora a sus viejas preferencias. Las voces conservadoras sugirieron que podían ganar con su propio candidato, especialmente si era el siempre popular Jorge Alessandri.

Se había acabado el tiempo para la Revolución en Libertad. Los logros reformistas habían sido sustanciales si se medían con los parámetros del pasado chileno, pero ya no resultaban suficientes. Como la Constitución prohibía la reelección consecutiva de un presidente, los demócratas cristianos debían buscar un nuevo candidato. Frei había sido una figura dominante, pero no había carecido de detractores dentro del partido. De hecho, su ala izquierda se había dirigido claramente hacia el cambio radical. A medida que se aproximaban las elecciones presidenciales de 1970, parecía como si el electorado

hubiera returnedo al patrón de voto tan profundamente dividido que era común antes de 1964.

Las elecciones presidenciales de 1970 recordaron en cierto sentido a las de 1964. Pero esta vez la derecha decidió presentar su propio candidato, Jorge Alessandri, el nombre mágico de la política chilena del siglo xx. Los divididos demócratas cristianos eligieron a Radomiro Tomic, cuya posición izquierdista cerraba toda posible alianza electoral con la derecha. Comunistas y socialistas, ahora unidos bajo Unidad Popular, nombraron una vez más a Allende y se dedicaron a atacar sin descanso al gobierno de Frei, acusándole de haberse vendido al imperialismo y a los oligarcas del país. Alessandri ofrecía una añeja receta conservadora, sin pensar apenas en la agria disputa ideológica desencadenada a su alrededor. Tomic sonaba muy parecido a Allende. Estaba a favor del cambio radical, que incluía la nacionalización completa de las compañías mineras.

Cuando se hizo el recuento de votos, los resultados se parecieron un poco a los de 1958. Allende había logrado la mayoría, pero estaba muy lejos de ser decisiva. Había obtenido un 36,3 por 100 de los votos. Alessandri, de quien el embajador norteamericano había predicho la victoria en privado, consiguió el 34,9 por 100 y Tomic sólo el 27,8 por 100. La izquierda estaba jubilosa, pero a sus dirigentes más sensatos no se les pasaba por alto la fragilidad del mandato de Allende.

Su primer problema fue la confirmación de rigor por parte del Congreso. La derecha veía la inminente presidencia de Allende como una grave amenaza y algunos militantes, especialmente dentro del ejército, comenzaron a conspirar para bloquearlo. Un complot militar, apoyado en su inicio por el gobierno estadounidense, abortó cuando el general René Schneider, comandante en jefe del ejército, fue asesinado en un torpe intento de secuestro. Finalmente, Allende fue confirmado por el Congreso tres días después y la democracia chilena pareció haber sobrevivido a su primer desafío tras la elección de un marxista.

¿Socialismo vía democracia?

Los tres años de presidencia de Allende tuvieron una gran significación, tanto para la historia de Chile, como para la de América Latina, aunque su naturaleza sigue discutiéndose con acritud. El presidente y sus consejeros decidieron que, a pesar del estrecho margen de su victoria electoral, buscarían el cambio radical, pero por medios legales. ¿Era posible una acción semejante? ¿Cómo, se preguntaban los militantes más radicales de la UP, podía introducirse el socialismo de un modo limpio?

La estrategia económica inicial de Allende fue similar a la empleada por Perón en 1946 y por Castro en 1959: congelación de precios y subida de salarios. El resultado fue el auge inmediato de las compras de los consumidores, lo que causó a corto plazo una redistribución significativa de la renta. Las

existencias de los comerciantes se agotaron con rapidez, mientras que los productores retuvieron todos los pedidos de producción hasta ver en qué medida los controles de precios les impedirían recobrar los costes inflacionarios a los que se enfrentaban al producir nuevos artículos para el mercado minorista. Allende había seguido una estrategia esencialmente populista para aumentar su apoyo político.

Sus otras medidas económicas fluyeron de sus promesas durante la campaña. Se dio prioridad a la nacionalización completa de las compañías dedicadas al cobre y resulta significativo que la votación del Congreso sobre esta cuestión fue unánime. Esto desciende mucho acerca del aumento del sentimiento nacionalista en Chile y de que se percibía como un fallo la política de chilenización de Frei. Después, el gobierno de Allende sostuvo que no se debía indemnizar a las compañías debido a sus altos beneficios anteriores, que el presidente acusó de ilegales. Esta postura agresiva provocó la oposición de los demócratas cristianos y proporcionó a la línea dura del gobierno estadounidense pruebas de que Chile había declarado la guerra a la propiedad privada en el hemisferio.

El gobierno de la UP también extendió el control estatal a otros muchos sectores de la economía. Se nacionalizaron el carbón y el acero, junto con un 60 por 100 de los bancos privados. A medida que continuaba la «transición al socialismo», se nacionalizaron más y más firmas, muy a menudo obligado Allende por los trabajadores que ocupaban las oficinas administrativas y se negaban a dejarlas hasta que se anunciaría la expropiación. Las empresas extranjeras eran el blanco favorito y de ellas fueron víctimas nombres tan conocidos como ITT y Ford.

Este ataque contra el capital extranjero estaba destinado a agravar las tensiones con Estados Unidos. El gobierno chileno no podía esperar contar con las divisas necesarias para indemnizar a los propietarios. La negativa (o imposibilidad) a indemnizar dio a la administración Nixon el pretexto legal para organizar un «bloqueo invisible» contra Chile en la economía internacional, aunque ya antes de la nacionalización había adelantado pasos al respecto, que incluyeron la retención (con excepciones menores) de todo préstamo del Banco Mundial o del Banco de Desarrollo Interamericano, por no hablar del Export-Import Bank estadounidense. La inversión privada extranjera también se detuvo, con lo cual Allende se enfrentó a una severa escasez de financiación externa. En su último año (1972-1973), Europa Occidental y los países del bloque socialista comenzaron a abrir líneas de crédito para Chile, pero su efecto todavía estaba por sentirse.

En el sector rural, el gobierno de Allende se movió con rapidez. Las expropiaciones llegaron antes de que pudiera asegurar los servicios (crédito, acceso a suministros, equipamiento) que necesitaban los nuevos pequeños propietarios o las cooperativas de control estatal. Además, era desbordado cada vez más por los campesinos, organizados con frecuencia por radicales izquierdistas, que tomaban la tierra por su cuenta. En 1973, el Instituto de Reforma Agraria había perdido el control de la situación en muchas zonas. Los latifundistas contrataron guardias armados, trataron de defenderse mediante

la ley o simplemente huyeron del campo. El antiguo problema agrario se estaba acometiendo por medios radicales, ya que el Estado desplazaba con rapidez a los hacendados.

En su gestión general de la economía, el gobierno de Allende quiso desde un principio arriesgarse. Como se enfrentaba a una oposición mayoritaria en el Congreso, sus estrategas políticos decidieron impulsar una enmienda constitucional que crearía una asamblea popular en sustitución de éste. Las medidas populistas de 1970-1971 (congelación de precios, subida de salarios) iban encaminadas en parte a conseguir apoyo para su gestión, pero constituyan un riesgo debido a que iban a resultar inflacionarias sin remedio. Se juzgaba mucho al tratar de aumentar su poder constitucional, ya que el Congreso podía bloquear gran parte del programa que quería llevar a cabo.

Como no es de sorprender, el Congreso rechazó la enmienda en 1972. En este punto, Allende y sus consejeros decidieron hacer una pausa para consolidar sus logros políticos. Planeaban acabar sometiendo la enmienda a plebiscito popular, saltándose de este modo la oposición del Congreso, pero el momento adecuado no llegó, o al menos no supieron identificarlo. A medida que avanzaba 1972, el gobierno se fue preocupando por el enorme tras-torno que sufría la economía. En primer lugar, estaban las distorsiones provocadas por el intento de hacer cumplir los controles de precios. Cada vez más productos desaparecían de los mercados legales y se abrían paso en los mercados negros. Como se trataba de un gobierno legal en un sistema de poderes constitucionales limitados, el régimen de Allende no resultaba efectivo para combatir la floreciente economía sumergida. En segundo lugar, estaba el extendido sabotaje o diversión de productores, latifundistas y comerciantes, que querían que el experimento de la UP fracasase u obtener beneficios rápidos, o ambas cosas. Por último, estaba la ineficiencia de un gobierno sin experiencia que trataba de controlar y gestionar sectores enormes de la economía. Los nuevos burócratas, a menudo carentes de preparación y nombrados más por motivos políticos que técnicos, a duras penas podían dominar tareas que seguían desesperando a sus homólogos de sociedades socialistas con un control más estrecho.

El resultado fue que a comienzos de 1973, Chile se hallaba preso de una inflación galopante. La tasa anual excedía el 150 por 100 (subiría aún más) y el gobierno lo observaba impotente. Las autoridades monetarias simplemente agotaban todo el dinero disponible para cubrir el enorme déficit presupuestario. El tipo de cambio sobrevalorado animaba las importaciones, mientras que los bajos precios del cobre deprimían las ganancias por exportación. Los déficits en la balanza de pagos de 1971 y 1972 pudieron cubrirse mediante las reservas de divisas dejadas por el gobierno de Frei, pero este recurso ya no existía en 1973. Los nuevos créditos del bloque socialista y Euro-pa Occidental todavía habían de materializarse, por lo cual las cuentas con el exterior se habían convertido en una importante preocupación económica.

Las extensas nacionalizaciones habían desmoralizado al sector privado, mientras que la desorganización impedía la inversión y expansión rápidas en

el sector público, que había aumentado su tamaño de forma tan considerable. La economía estaba hecha un mar de confusiones.

¿Pero cómo podía hacerse con suavidad la transición a una economía socialista? En Cuba (véase el capítulo 8) hubo sin duda dislocación durante los primeros años, y Chile se enfrentaba a obstáculos mucho mayores. Allende no tenía el poder que disfrutaba Fidel en Cuba. Chile seguía siendo una democracia pluralista; la oposición seguía controlando el Congreso y la economía continuaba abierta al chantaje internacional.

Añadida a todas estas dificultades inherentes, estaba la intransigencia de la oposición. Debe recordarse que el gobierno de Allende no contó nunca con más de la mitad de los votos. Alcanzó la presidencia en 1970 con un porcentaje de votos menor que el que había recibido cuando perdió en 1964 (36,3 por 100, comparado con el 38,9 por 100). En las elecciones locales de abril de 1971, los partidos de la UP recibieron el 49,7 por 100, su cota más elevada. Los meses siguientes contemplaron furiosas batallas en todos los foros políticos: elecciones en los sindicatos, grupos estudiantiles y asociaciones profesionales.

La UP se vio debilitada por escisiones dentro de sus propias filas. La extrema izquierda, liderada por el MIR (Movimiento de la Izquierda Revolucionaria), presionaba para que se emprendiera una acción más radical. Querían agilizar las nacionalizaciones, endurecer la acción policial contra la oposición y gobernar mediante decreto. Los moderados dentro de la UP, incluidos los comunistas, exhortaban a la precaución, pues sostenían que la acción precipitada los pondría en manos de la derecha, que podía manipular al ejército y a las clases populares.

Para mediados de 1972, el clima político se había sobrecaelentado. Se convirtieron en rutina las movilizaciones callejeras masivas, ya fuera en favor o en contra de Allende. En agosto, los tenderos organizaron un boicot de un día para protestar contra las medidas económicas del gobierno. En octubre, una serie de protestas comenzaron a barrer el país. Se iniciaron con la suspensión de envíos de mercancías por parte de los propietarios de camiones. Pequeños empresarios, granjeros privados y pilotos se unieron en huelgas. Aunque estaban orquestadas a menudo por los políticos de la oposición, estos brotes mostraban que amplios sectores de la población chilena se enfrentarían al gobierno en las calles. Casi todos tenían algo que perder si se lograba una sociedad socialista, así que estaban determinados a no empeorar sin luchar.

El gobierno poseía su propio apoyo popular. En especial en las grandes ciudades, la UP podía convocar varios cientos de miles de manifestantes disciplinados. En sus filas se incluían los numerosos chilenos que habían comenzado a experimentar cambios significativos: salarios reales más elevados, leche fresca subsidiada, un papel en la administración de su comunidad o lugar de trabajo. También respondían al nuevo nacionalismo: la apropiación de las compañías del cobre, la postura severa hacia todas las empresas extranjeras, la sonada bienvenida a Fidel Castro cuando llegó a Chile en 1971.

Marzo de 1973 trajo también otra prueba política. Estaba en juego la composición del Congreso. Era un momento crucial, ya que la oposición esperaba obtener una mayoría de dos tercios para ser capaz de inhabilitar a Allende o al menos imponer su ventaja legal sobre él. Las elecciones fueron muy concurridas. Cuando se contaron los votos, el gobierno había salido mejor parado de lo que nunca se habría atrevido a predecir: la UP alcanzó el 43 por 100, con lo que redujo la mayoría de la oposición de 32 a 30 (de 50) en el Senado y de 93 a 87 (de 150) en la Cámara Baja. Sus dirigentes señalaron jubilosos el incremento del voto de izquierdas sobre 1970 y destacaron que ningún presidente chileno anterior había sido capaz de aumentar su apoyo en unas elecciones al Congreso a mediados del mandato. La oposición resaltó su 55,7 por 100 de votos como equivalente a la victoria aplastante de Frei en las elecciones de 1964. También recordaron a la UP que su 43 por 100 estaba por debajo del 49,7 por 100 obtenido en las elecciones municipales de 1971.

Los resultados podían usarse para sostener casi cualquier posición política. Una cosa era cierta: la oposición no había logrado el gran impulso electoral que había buscado. Y como carecía de una mayoría de dos tercios del Congreso, estaba excluido cualquier intento de inhabilitación. Quizás Allende no contara con una mayoría absoluta, pero tenía un apoyo inquebrantable entre los trabajadores y un número en aumento de obreros rurales.

Nunca había habido escasez de complot para derrocar al gobierno marxista electo. La derechista Patria y Libertad ya había participado en ataques terroristas contra cargos del gobierno e instalaciones económicas vitales. Sin embargo, en 1973 cada vez más gente de la clase media había concluido que no había solución democrática a la crisis. Consideraban que Allende (o la izquierda más radical, que no controlaba o no podía controlar) era una amenaza para las bases mismas de la propiedad privada en Chile.

En abril, comenzó una huelga de trabajadores del cobre, que proporcionó a la oposición el terreno ideal para proclamar la resistencia multicasista a Allende. En julio, los propietarios de camiones volvieron a golpear, desatando una ola de huelgas protagonizadas por asociaciones de la clase media como las de los abogados, médicos y arquitectos. Las organizaciones de trabajadores populares pro Allende organizaron enormes contraprotestas, con cientos de miles de participantes. Chile se hallaba inmerso en una batalla política febril. Se hicieron frecuentes los incidentes terroristas. Pocos pensaban que pudiera mantenerse la paz hasta 1976, cuando se elegiría al nuevo presidente.

Allende lo sabía. Había rechazado hacia mucho los consejos de su extrema izquierda de acudir a medios extralegales y sabía que los demócratas cristianos eran la única fuerza política con la fortaleza y disposición suficientes para llegar a un acuerdo que redujera los niveles de conflicto y posibilitara, de este modo, mantener intacto el sistema democrático del país. Allende negoció con Frei y sus compañeros dirigentes, pero tras una prolongada deliberación rehusaron. No querían verse arrastrados a compartir la responsabilidad de un gobierno que se desmoronaba, a menos que Allende les

prometiera más de lo que estaba preparado para otorgar; no menos importante, sospechaban que tenían mucho que ganar si la UP seguía desacreditándose. Quizá creyeran incluso que un golpe militar los devolvería al poder.

Allende pensó que no tenía otro camino que aumentar la participación militar en su gobierno. Aunque podría proporcionarle estabilidad a corto plazo, ya que las fuerzas armadas estaban obligadas a obedecer y a mantener el orden, también quizás abriera paso a la intriga militar y a que la oposición le acusara de politizar al ejército. Intuía el peligro y en agosto intentó entremezclar sus mandos militares, pero era demasiado tarde.

A comienzos de septiembre, la conspiración militar para derrocar al gobierno de la UP estaba muy engranada. Santiago hervía de rumores acerca de dinero brasileño y llovían sobre Chile expertos en «desestabilización». Las huelgas y las contramanifestaciones habían retrasado aún más una economía que ya estaba golpeada por la hiperinflación y la huida de capital. Entonces supo Allende que el destino del experimento socialista chileno se encontraba en manos de los militares. El general Carlos Prats, comandante en jefe del ejército y ministro de Defensa, era una figura clave. Desafortunadamente para Allende y la UP, su prestigio militar se esfumaba por momentos. A finales de agosto se le sometió a la indignidad (desde la perspectiva militar) de una ruidosa manifestación frente a su residencia efectuada por las esposas de los oficiales que pedían su dimisión. Al no lograr los votos de un consejo de generales celebrado al día siguiente, renunció a sus cargos en el ejército y en el gabinete. Su sucesor como jefe del ejército fue el general Augusto Pinochet, del que se creía que era tan constitucionalista como Prats.

Entonces los militares no perdieron más tiempo. El 11 de septiembre de 1973 comenzó un golpe de Estado bien coordinado. Esa mañana temprano, los carabineros, de los que siempre se había pensado que eran quienes mejor encarnaban la tradición chilena de policía no política, seguían guardando el palacio presidencial contra un posible ataque. Pero se retiraron de forma ominosa cuando se les informó de que su comandante se había unido al golpe que se estaba desarrollando. A las seis de la mañana le dijeron a Allende que la marina había tomado Valparaíso y decidió desplazarse de inmediato de su residencia a La Moneda, el memorable palacio presidencial situado en el corazón de Santiago.

Durante el resto de la mañana se observó una actividad frenética en el palacio, que preparaba la defensa. Allende comenzó a recibir ofertas para marcharse sano y salvo al exilio. A la de un general de las fuerzas aéreas, se dice que replicó: «Dígale al general Von Schouwen que el presidente de Chile no huye en un avión. Al igual que él sabe cómo debe actuar un soldado, yo sabré cómo cumplir mi deber como presidente de la república».

Allende no había vivido como un revolucionario. Había pasado tres décadas como político parlamentario, negociando sin cesar para crear y mantener coaliciones. No pocos cínicos (tanto de la izquierda como de la derecha) habían sugerido que le gustaba demasiado la buena vida como para hacer de revolucionario. Pero ahora decidió quedarse y luchar. Justo antes del medio-



El palacio presidencial, situado en el centro de Santiago, estalló en llamas por los ataques con bombas incendiarias de las fuerzas armadas chilenas durante el golpe del 11 de septiembre de 1973. (United Press International.)

día, los cazas Hawker de las fuerzas aéreas atacaron el palacio con bombas incendiarias, que extendieron las llamas por el edificio que había visto tantas transferencias de poder pacíficas. Cuando las tropas del ejército se preparaban para asaltar el palacio, Allende se suicidó. En una de sus primeras alocuciones presidenciales, había señalado: «Nuestro escudo de armas dice "Por la razón o por la fuerza", pero pone la razón primero». Ese orden se invirtió entonces.

Los mandos militares esperaban resistencia, en especial en las zonas habitadas por los obreros industriales, pero los seguidores del gobierno tenían pocas armas. La resistencia fue dispersa, pero la represión fue rápida y brutal. Nunca sabremos cuántos murieron, pero al menos 2.000 personas. Fue el golpe militar más violento de la historia latinoamericana del siglo XX y ocurrió en un país que se enorgullecía de sus tradiciones democráticas tan profundamente arraigadas. La «transición al socialismo» que tantos de la izquierda pensaron que era «irreversible» estaba a punto de ser invertida.

Considerado desde la perspectiva actual, parece que la caída de Allende fue ocasionada por la interacción de las clases sociales y los partidos políticos que caracterizaban al Chile contemporáneo. La izquierda obtenía su apo-

yo principalmente de la clase obrera urbana. Se encontró con la oposición de una clase alta cohesionada, cuyos componentes del sector agrario y de la industria estaban unidos por lazos familiares e intereses comunes, y esta élite unificada fue capaz de obtener el apoyo de los grupos de los sectores medios (y de algunos campesinos tradicionales) y, lo que es más importante de todo, de los activistas militantes de las clases medias y bajas, como tenderos y camioneros, en una postura común contra el orden socialista. Entre 1970 y 1973, el movimiento de Allende de base obrera fue incapaz de formar una coalición duradera con los otros estratos de la sociedad trabajadora. Esto explica que no lograra conseguir una clara mayoría en las urnas y de ahí su extrema vulnerabilidad.

/ Con esto no deben despreciarse los efectos de la oposición estadounidense, que trabajó persistentemente para «desestabilizar» (esto es, derrocar) el régimen de Allende enviando dólares (que alcanzaban un elevado valor en el mercado negro) a los grupos conservadores y subvencionando las huelgas contra el gobierno. Pero su intervención no fue el factor decisivo para su caída, ya que la administración de Allende tenía su propio cúmulo de problemas. Sin embargo, una vez más Estados Unidos se colocó firmemente al lado de los contrarrevolucionarios. /

El régimen de Pinochet

El nuevo gobierno militar decidió en seguida imponer sobre Chile un régimen burocrático-autoritario. Proclamando que su objetivo era «la reconstrucción nacional», la junta se propuso destruir —no sólo reformar— el sistema político del país. Se disolvió el Congreso, se suspendió la Constitución y se declararon ilegales los partidos o se situaron «en descanso»: no iba a haber más altercados políticos, no más politiquería. Además, la junta impuso el estado de sitio, el toque de queda a las nueve de la noche y estableció límites estrictos sobre los medios de comunicación. En octubre de 1973, un mes después del golpe, los militares tomaron también las orgullosas universidades.

Las fuerzas armadas querían reformar las antiguas relaciones entre el Estado y la sociedad en el Chile moderno. Un componente crítico de este plan era la unidad de los militares, acaudillados por el general del ejército de tierra Augusto Pinochet. Otro era la desorganización de la sociedad civil, que hizo posible al régimen desmantelar (o al menos reprimir) instituciones intermedias como partidos políticos y sindicatos, y establecer la autoridad directa. Se suspendió la actividad política en su sentido tradicional. En enero de 1974, el general Pinochet anunció que los militares permanecerían en el poder no menos de cinco años.

Mientras los generales consolidaban su poder político, un grupo de tecnócratas civiles introducían cambios de largo alcance en la política económica. Conocidos como los *Chicago boys* debido a que muchos se habían formado en la Universidad de Chicago, estos economistas creían con firmeza en

la eficiencia y equidad de la competencia de mercado. Lo que había restringido el crecimiento chileno, razonaban, había sido la intervención gubernamental en la economía, que redujo la competencia, aumentó de forma artificial los salarios y llevó a la inflación. Para hacer que las leyes de la oferta y la demanda funcionaran de nuevo, determinaron reducir el papel del Estado y también atajar la inflación. Pinochet dijo una vez que el objetivo último era «hacer de Chile no una nación de proletarios, sino una nación de empresarios».

Los programas del régimen tuvieron un efecto claro sobre la inflación, que presentaba una tasa anual cercana al 500 por 100 en el momento del golpe. En 1976 ya había bajado al 180 por 100, en 1978 rondaba el 30-35 por 100 y en 1982 ya había caído al 10 por 100. De 1983 a 1987, la inflación fluctuó entre el 20 y el 31 por 100. Era un comportamiento mucho mejor que el de Argentina, Brasil o México, y sin duda la junta podía proclamar su éxito. Podían decir lo mismo acerca de la diversificación de exportaciones (el cobre ahora suponía menos de la mitad del valor de exportación) y del crecimiento, que alcanzó un promedio superior al 7 por 100 de 1976 a 1981. Pero se lo gró a costa de reducir los salarios reales y los servicios sociales.

La meta de los tecnócratas formados en Chicago era abrir Chile a la economía mundial, reduciendo de forma drástica los aranceles proteccionistas, los subsidios gubernamentales y el tamaño del sector público. A finales de 1973, el Estado poseía cerca de 500 compañías. La junta devolvió alrededor de la mitad a sus dueños originales y admitió ofertas para gran parte del resto. La falta de competencia verdadera determinó precios de venta bajos, lo que benefició a los conglomerados empresariales locales y a corporaciones multinacionales como la ITT.

Los responsables de la política económica también redujeron las barreras para la importación, basándose en que las cuotas y aranceles protegían industrias ineficientes y mantenían los precios altos de forma artificial. El resultado fue que muchas empresas locales desaparecieron frente a las corporaciones multinacionales. La comunidad empresarial chilena, que había respaldado con fuerza el golpe de 1973, se vio muy afectada. Se puso el énfasis en la promoción de la exportación y la atracción de préstamos extranjeros, tanto públicos como privados. Irónicamente, Chile intentaba crear una economía de mercado libre con la asistencia principal de organizaciones internacionales y otros gobiernos, no de bancos y compañías privados.

La quiebra comercial de 1982, desatada por el incumplimiento del pago de su deuda externa por parte de México y la contracción de la economía mundial provocada por la recesión estadounidense, golpeó a Chile con mayor fuerza que al resto de América Latina. El producto interior bruto se hundió al 14 por 100 ese año, mientras que el desempleo (incluidos los programas gubernamentales de creación de empleo) aumentó hasta abarcar una tercera parte de la fuerza laboral a mediados de 1983. Pinochet instaló a un nuevo equipo de tecnócratas conservadores, que emprendieron una reestructuración económica aún más radical. Estimularon la inversión, aumentaron mucho las exportaciones y redujeron de forma drástica el desempleo. Tam-

bién disminuyeron considerablemente la deuda externa mediante esquemas innovadores como la conversión parcial en inversión del capital interno. Pero los salarios permanecieron bajos de forma crónica y la privatización sistemática de los servicios sociales dejó a muchos chilenos pobres sin lo esencial para la vida.

En el frente político, el régimen de Pinochet nunca vaciló en usar la represión, en especial a la menor seña de desorden laboral o protesta popular. Sus tácticas brutales se ganaron una condena extendida, a medida que los críticos denunciaban las repetidas y persistentes violaciones de los derechos humanos. En septiembre de 1976, un coche-bomba mató en Washington D.C. a Orlando Letelier, antiguo embajador de Allende en Estados Unidos, que por entonces se dedicaba a conseguir apoyo efectivo para que el gobierno estadounidense retirara su ayuda al régimen de Pinochet. El vínculo de los asesinos con los servicios secretos chilenos era evidente, pero Chile rechazó desdenosamente el intento del gobierno de Carter de obtener la extradición de los miembros del ejército chileno acusados. La elección de Ronald Reagan sirvió de gran alivio al gobierno de Pinochet, que pronto encontró a Washington dispuesto a estrechar las relaciones. Desde 1985, hasta la administración Reagan presionó a Pinochet para que se liberalizara, pero sin efectos, al menos por el momento.

Mediante una hábil maniobra política, Pinochet consiguió la autoridad suprema y lo que en principio había sido un régimen militar institucionalizado se convirtió en otro de carácter personalista, en el que Pinochet aparecía como única autoridad. Un plebiscito celebrado en 1978 proporcionó un apoyo extendido a su «defensa de la dignidad de Chile». Otro más, celebrado en 1980, aprobó una Constitución que confirmaba el mantenimiento de Pinochet en su cargo hasta 1990.

Los políticos de la oposición no marxistas, que una vez se habían beneficiado de la democracia más estable de Suramérica, se encontraban profundamente divididos. Sus intentos por incluir a los Partidos Socialista y Comunista (o al menos no repudiarlos) en una oposición unida facilitaban el juego de Pinochet, que explotaba los temores de las clases medias y bajas a la vuelta al caos de 1973.

El Partido Comunista organizó un ala armada que intentó asesinar a Pinochet en 1986. El presidente escapó a duras penas. Las batidas del gobierno que siguieron descubrieron enormes escondites de armas, mientras la policía y los militares devastaban los barrios obreros, deteniendo a los activistas de la oposición de cualquier ideología. El intento de asesinato dio más fuerza a la demanda de Pinochet de que Chile debía escoger entre él y la izquierda revolucionaria.

Pero 1988 trajo una sensacional apuesta que el dictador perdió. Como reacción a la presión internacional para la liberalización y confiando en una economía en recuperación, se arriesgó a celebrar otro plebiscito sobre su gobierno personalista. Ahora la oposición se unió para montar una campaña de televisión muy efectiva (con una ligera ayuda de consultores de los medios

de comunicación estadounidenses) para conseguir el «no», que triunfó por un decisivo 55 por 100 frente a un 43 por 100. Todo estaba listo para volver a un gobierno elegido.

Tras un tenso intervalo, Pinochet aceptó el resultado, ya que sabía que la Constitución aseguraba su continuación como comandante en jefe del ejército hasta 1998. El paso siguiente fueron las elecciones presidenciales de 1989, ganadas por el veterano dirigente de los demócratas cristianos (y enemigo implacable de Allende) Patricio Aylwin, a quien respaldaba una coalición de diecisiete partidos de centro y centro-izquierda. La extrema izquierda no logró un solo escaño en el Congreso, ya que el antes poderoso Partido Comunista se disolvió en una agria lucha entre reformistas y marxistas-leninistas de línea dura.

Vuelta a la democratización

Aylwin asumió el poder en 1990 y se comprometió a restaurar las instituciones democráticas chilenas, a investigar las pasadas violaciones de los derechos humanos y a la rápida mejora de las condiciones de vida de los pobres. Su gabinete fuertemente tecnocrático (es notable que no se repartiera según la fortaleza del partido) también se comprometió a mantener lo que resultaba esencial en la historia del éxito económico en América Latina (al menos según los parámetros ortodoxos): estabilidad relativa de los precios, aumento de las exportaciones (animado por los precios elevados del cobre), registro de la inversión extrajera, reducción significativa de la deuda exterior y un avance notable en la privatización de gran parte del sector público ineficiente.

La democracia restaurada de Chile también se enfrentaba a obstáculos formidables: un ejército siempre alerta que seguía encabezado por un Pinochet incontrito (aunque ahora se veía empañado por escándalos financieros familiares), una judicatura pro ejército, un Senado dominado por la derecha, terrorismo esporádico de izquierda y derecha, y el tema explosivo de qué hacer acerca de las pasadas violaciones de los derechos humanos, con su peligro de inflamar el conflicto entre militares y civiles.

La coalición gobernante (la «Concertación») se mantuvo unida para las elecciones presidenciales de 1993. Una vez más los demócratas cristianos proporcionaron el presidente. Era Eduardo Frei, hijo del presidente de Chile entre 1964 y 1970. Su margen de ventaja era del 58 por 100, 3 puntos por encima de Aylwin en 1989. La campaña fue notable tanto por su falta de pasión como por la alta participación. El poco carismático Frei, cuya ventaja más grande era su apellido, prometió «progreso con justicia». El alguna vez poderoso Partido Comunista continuó completamente marginado, mientras que la mayor parte de la izquierda se mantuvo leal a la coalición. Más importante, hubo una aceptación general de las reglas del juego democrático, aunque éstas sufrieron algunas restricciones que quedaban de la época de Pinochet.

El notable logro chileno continuó siendo su rápido crecimiento sin inflación. Entre 1986 y 1993, el crecimiento había promediado el 6,3 por 100, con mucho el más alto en América Latina. La deuda externa se redujo considerablemente y se atrajo prestamente nuevo capital extranjero. Cuando la privatización prácticamente había llegado al máximo, los inversores chilenos se dirigieron a Argentina a adquirir nuevas instalaciones privatizadas. Lo más impresionante era la alta tasa de ahorro e inversión. Chile se semejaba ahora a los «tigres» de Asia Oriental en su capacidad para sacrificar el consumo para una productividad futura. El gobierno chileno predijo confiadamente que sería el próximo miembro del área del Tratado de Libre Comercio (TLC, o NAFTA) que abarcaba México, Canadá y Estados Unidos.

¿Cuán bien se distribuyeron los beneficios de este crecimiento? Los datos de la distribución de la renta mostraban que Chile apenas se diferenciaba de la extrema desigualdad típica de América Latina. La tasa del salario real, aunque creciente hacia 1993, no había llegado al nivel de 1970 y muchos de los nuevos empleos eran a tiempo parcial y/o de baja remuneración. Por otra parte, se reconoce que los niveles de salud pública y de educación primaria son elevados. Evidentemente, Chile continuará siendo observado estrechamente como un importante ensayo del desarrollo capitalista en América Latina. En palabras de un economista y experimentado observador de Chile: «La economía chilena es un tigre — pero, es un tigre joven, novedoso y tímido, que trata todavía de adaptarse. Queda mucho por hacer».

Brasil: ¿desarrollo para quién?

Con una extensión de más de ocho millones y medio de kilómetros cuadrados, Brasil ocupa cerca de la mitad de Suramérica. El río Amazonas, con sus 6.500 km de longitud, llega a la costa atlántica desde las húmedas selvas del interior. La tierra varía desde el noreste semiárido, asolado por sequías recurrentes, hasta los ricos bosques y las mesetas fértiles del centro y del sur. El país abunda en recursos naturales, incluidos hierro y otros minerales industriales, y se le ha considerado desde hace mucho una posible potencia mundial, el «gigante dormido» de América Latina. Quizá debido a esta anticipación o quizás por otras razones, los brasileños tienden a tener una visión de la vida optimista y entusiasta. Un dicho lo resume bien: «Dios es brasileño».

Su independencia de Portugal en 1822 casi sin violencia dio al país un comienzo con buenos augurios. La ausencia de un conflicto a gran escala significó que la destrucción física y económica fuera mínima, en especial si se compara con la devastación sufrida en la región del Río de la Plata, en Venezuela y en México central. Tampoco tuvo que afrontar los problemas de desmovilizar un aparato militar imponente en el periodo de posguerra. Y lo que es más importante, el paso de la monarquía portuguesa a Brasil proporcionó una estructura política consistente dotada con la autoridad de una tradición secular. Sin duda, hubo luchas y Brasil afrontaría una crisis de legitimidad política antes de que terminara el siglo. Pero no se encontró con la misma clase de inestabilidad política que otros países latinoamericanos tuvieron que afrontar al inicio de la independencia.

La economía era predominantemente agrícola y el azúcar, el cultivo comercial por excelencia. En 1822, la población alcanzaba unos cuatro millones de habitantes, casi la mitad esclavos nacidos en África o descendientes de éstos. El orden social estaba formado en esencia por dos filas, la aristocracia terrateniente y los esclavos que proporcionaban la mano de obra, una dicotomía que sería muy bien descrita por Gilberto Freyre en su clásico libro *Casa grande y senzala*. Había algunos comerciantes y abogados, además de otros profesionales, fundamentalmente en las ciudades y de forma especial en Río de Janeiro, pero la sociedad estaba dominada por las fuerzas del campo.

Dom Pedro I (1822-1831)

Solemos definir con demasiada frecuencia los períodos históricos por la subida o caída de los jefes de Estado o gobierno. No obstante, a veces tiene sentido. Pocos pondrían objeciones a la etiqueta de «victoriano» para el periodo del reinado de la reina Victoria de 1837 a 1901. Y en el Brasil del siglo XIX muchos temas sociales básicos estaban ligados al destino de la corona. El más evidente fue la consolidación de la independencia brasileña, con asuntos conexos como la centralización o descentralización de la autoridad y el poder ejecutivo contra el poder legislativo. Estas cuestiones tuvieron que acometerse de inmediato tras la independencia, pues tanto la élite como el emperador querían redactar una Constitución brasileña.

Dom Pedro I se había convertido en el primer emperador de un Brasil independiente en 1822, cuando la aristocracia brasileña forzó a una ruptura con Portugal. Un año antes, el padre de Dom Pedro, Dom João VI, había dejado Brasil para volver al trono de Portugal, después de aconsejar a su hijo que permaneciera allí (pues la familia real se sentía muy ligada a esos dominios), aunque ello supusiera la creación de una monarquía separada. Dom Pedro I convocó una Asamblea Constituyente y las elecciones resultantes en 1823 revelaron varias divisiones políticas. La más básica era la escisión entre el Partido Brasileño y el Partido Portugués, formado el último por quienes se habían opuesto a la independencia y querían volver a subordinar Río de Janeiro a Lisboa. Sus dirigentes eran fundamentalmente nacidos en Portugal, la mayor parte oficiales del ejército, burócratas y comerciantes. El Partido Brasileño estaba dirigido por José Bonifácio Andrada e Silva, latifundista de São Paulo, principal portavoz del liberalismo brasileño y el ministro más importante del gobierno de Dom Pedro.

A pesar del apoyo mayoritario en la Asamblea, el gabinete de José Bonifácio tuvo que dimitir pasados tres meses debido a que el emperador respaldaba de forma continua la protesta del Partido Portugués por las medidas gubernamentales antiportuguesas. Continuaron caldeándose las polémicas y brotaron peleas callejeras, cuando una facción extremista del Partido Brasileño clamó por un gobierno descentralizado y exageró los abusos de la corona. En medio del furioso debate, el emperador disolvió la Asamblea en noviembre de 1824. Poco después, decretó de forma unilateral una Constitución para Brasil, que incluía muchos rasgos del borrador preparado por Antonio Carlos Andrada e Silva, hermano de José Bonifácio, pero reservaba grandes poderes para el Poder Moderador, que iba a ser el monarca mismo. Más importante era el poder de disolver la Cámara de Diputados y nombrar y cesar ministros. El voto ciudadano estaba ligado a la prueba de un mínimo de propiedad, por lo que se limitaba la participación pública de modo severo en un gobierno imperial que iba a ser muy centralizado. Irónicamente, esta Constitución decretada de forma unilateral incluía pasajes de la Declaración de Derechos Humanos francesa de 1789.

La historia de esta Constitución demostraba varias cosas acerca de la nueva nación brasileña: 1) el monarca parecía haber preservado su iniciativa absolutista mediante la disolución de la Asamblea electa y la imposición de su propia Constitución; pero 2) la Constitución, aunque favorecía a la corona en la división de poderes, era más liberal que absolutista, más semejante al sistema parlamentario inglés contemporáneo que al francés, y 3) el compromiso con los derechos humanos, aunque restringido por las intenciones reales de Dom Pedro y sus consejeros, se convirtió a partir de entonces en un norte de la historia brasileña, un ideal al que recurrirían de forma continua libertarios y reformistas. La lucha sobre la estructura política del nuevo país terminó de modo ambiguo: una carta constitucional impuesta por un emperador que de este modo establecía los límites de todos los gobiernos futuros.

Los aspectos absolutistas de los hechos de Río produjeron preocupación en el noreste, la región que había sido más receptiva a las ideas liberales sobre la abolición de la esclavitud, el federalismo y el republicanismo. En 1817 los conspiradores republicanos de la provincia de Pernambuco habían resistido tercamente la disciplina de Río. La imposición de la Constitución de Dom Pedro en 1824 provocó una nueva rebelión, que escenificó los temas clave del centro de la política brasileña para el resto del imperio.

Los pernambucanos volvieron a declarar su independencia en un manifiesto que proclamaba de forma poética la «Confederación del Ecuador». Era la culminación de la reacción violenta ante el intento de Río de deponer una junta local muy popular e imponer otra menos radical. Tras obtener el apoyo de otras provincias del noreste, los rebeldes convocaron su propia Asamblea Constituyente. Sin embargo, el movimiento se dividió respecto al tema de la esclavitud, cuando un dirigente escandalizó a sus colegas al pedir el fin del tráfico de esclavos por el puerto nororiental de Recife. La mayoría de los organizadores rebeldes temían una movilización de los órdenes inferiores, y no sin razón. El descontento entre las personas libres marginadas, muchas de color, amenazaba con convertir la agitación antiportuguesa y anticentralista en una revolución social.

Las divisiones internas de los rebeldes de Pernambuco se produjeron cuando la presión militar exterior fue aumentando. El emperador había contratado barcos y mercenarios ingleses y franceses, y dio a los insurgentes una sangrienta lección política. La mayoría de los líderes rebeldes fueron ejecutados. Había límites para el alcance de la protesta social permisible en Brasil.

La dominación de Río se obtuvo mediante la ayuda inglesa, que tuvo su precio. Desde 1810, Gran Bretaña había conseguido un lugar firme en la economía brasileña y ahora se hallaba asegurando la transición a la independencia.

Los británicos podían ayudar a consolidar el gobierno independiente de Río, facilitando el reconocimiento diplomático por parte de las principales potencias del mundo. Ese objetivo se logró mediante una serie de acuerdos que Gran Bretaña negoció con Portugal y Brasil en 1825. Propiciaron que el rey portugués, Dom João VI, reconociera a Brasil como un reino separado;

que las exportaciones británicas a Brasil continuaran recibiendo un tipo arancelario preferencial; y, no menos importante, que Brasil pagara a Portugal una indemnización de dos millones de libras esterlinas por los daños sufridos en la lucha por la independencia. (Era exactamente la deuda contraída por Portugal con Gran Bretaña; los negociadores mantuvieron en secreto esta cláusula.)

El año siguiente, 1826, Gran Bretaña consiguió de Brasil el compromiso mediante tratado de concluir el comercio de esclavos antes de 1830. Lo quería por varias razones. Una, en la que suelen hacer hincapié los historiadores económicos actuales, era que los británicos temían que el azúcar producido con mano de obra esclava de Brasil resultaría más barato en el mercado mundial que el azúcar de las Indias Occidentales, donde se acababa de abolir la esclavitud. Otra razón, también importante, era la presión ejercida sobre el gobierno británico por los abolicionistas. El nuevo gobierno brasileño, con poco entusiasmo y menos compromiso auténtico, otorgó a los ingleses la cláusula que demandaban. En el tratado sobre el comercio de 1827, se les hicieron más concesiones, que colocaron a las exportaciones brasileñas a Inglaterra en desventaja con las procedentes de las colonias inglesas. Gran parte de la élite brasileña las consideró excesivas y sólo explicables por el aparente deseo de Dom Pedro de retener la buena voluntad británica hacia Portugal, que necesitaba de forma desesperada su ayuda económica. Las críticas habrían sido aún más estridentes si se hubiera hecho público el pago de los dos millones de libras.

Al final, la lealtad de Dom Pedro hacia Portugal provocó su ruina en Brasil. Su imposición de la nueva Constitución no había terminado de ninguna manera con la lucha sobre la división de los poderes gubernamentales. En 1826 el emperador se convirtió en el blanco de una nueva oleada de ataques, cuyos autores iban de los «moderados», deseosos de más poder para el legislativo y revisiones a los tratados con Gran Bretaña, a los «extremistas», que demandaban la descentralización del poder y la autonomía de las provincias. Las críticas al emperador dominaban la prensa en expansión con su fuego graneado de invectivas.

En este mismo periodo, Dom Pedro sufrió un serio revés en la política exterior. Lo que ahora es Uruguay se había anexionado a la América portuguesa en 1821 como la «Provincia Cisplatina». Pero en 1825 la guerrilla local se hizo con el poder y proclamó la unión con las Provincias Unidas del Río de la Plata (la actual Argentina). La guerra resultante entre Brasil y estas últimas terminó en 1828 con un tratado que creaba un estado independiente, Uruguay. Los ingleses, de nuevo intermediarios para concertar el tratado, abrigaban esperanzas en un estado que sirviera de valla entre Argentina y Brasil. Este revés para las ambiciones brasileñas en la cuenca del Río de la Plata resultó caro al emperador desde el punto de vista financiero y político. Pero pronto quedó en la sombra en comparación con el cencel de la sucesión real portuguesa al que se vio arrastrado Dom Pedro desde 1826.

Cuando murió Dom João VI en 1826, Dom Pedro, su sucesor legal, supo

que los brasileños nunca aceptarían una reunificación con Portugal. Pero al emperador cada vez le absorbía más tratar de proteger los derechos sucesorios de su hija en Portugal. Este desgaste de energía le hizo menos capaz de manejar las agresivas fuerzas políticas antiabsolutistas de Brasil. Su posición se hizo cada vez más insostenible, a medida que sus oponentes movilizaron a las multitudes para protestar por su preferencia por un ministro absolutista. El 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicó y partió de la tierra cuya independencia había ayudado a lograr menos de una década antes.

Su abdicación fue una victoria para el Partido Brasileño y una derrota para los absolutistas acosados. También creó un vacío de poder, ya que su hijo, que después se convertiría en Dom Pedro II, sólo tenía cinco años. Su padre le había dejado deliberadamente al cuidado de otros miembros de la familia real para mantener los derechos de los Braganza al trono brasileño. ¿Quién ejercería el poder en su nombre? ¿Permanecerían unidas las inmensas y poco pobladas tierras de la América portuguesa? ¿O seguirían el ejemplo de la América española, que de inmediato se disgregaron en el conjunto de naciones que vemos hoy día?

Durante nueve años, desde la abdicación de Dom Pedro I, ejerció el poder ejecutivo una regencia, que varió de estructura y de miembros. En 1834, se enmendó la Constitución (mediante la «Ley Adicional») para aumentar los poderes de las provincias, en parte como respuesta a los sentimientos separatistas que estremecían zonas clave del imperio. El movimiento separatista más violento fue el de la provincia de Pará, en el valle del Amazonas; la más peligrosa por su ubicación en una provincia fronteriza con Argentina fue la *Guerra dos Farrapos*, en Rio Grande do Sul.

Dom Pedro II (1840-1889)

El acceso al trono de Dom Pedro II en 1840 unificó a la élite dividida. Brasil había sobrevivido a los desafíos separatistas y parado la inercia hacia la revolución social. Se descartó la descentralización cuando el emperador asumió el amplio poder (el «Poder Moderador») que su padre había escrito en la Constitución de 1824. El joven emperador y los políticos entraron en una era de política parlamentaria relativamente armoniosa.

Mediado el siglo, las dos décadas posteriores fueron los años dorados del imperio. El poder ejecutivo era ejercido por el emperador y su ministro, que debía retener la confianza de la Cámara Baja. No obstante, el poder efectivo del legislativo era más aparente que real, ya que el emperador podía disolver la Cámara a voluntad y necesitarse nuevas elecciones. Sin embargo, hasta finales de la década de 1860, Dom Pedro II ejerció su poder con discreción y el sistema parecía funcionar bien.

En 1850 ya habían aparecido dos partidos políticos distintos, que debían su origen al Partido Brasileño de la década de 1820. Eran el Partido Conservador y el Partido Liberal, aunque los historiadores han advertido desde

hace mucho tiempo que no deben tomarse estas etiquetas demasiado en serio. En 1853, los dos partidos colaboraron para formar un «gabinete de conciliación», que mantuvo el poder hasta 1868, excepto en el intervalo de 1858-1862.

La prueba más importante para la política exterior del imperio apareció en la cuenca del Río de la Plata, lugar de una antigua rivalidad entre Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil. El gobierno brasileño se alarmó por la fortaleza y las intenciones de Juan Manuel de Rosas, el gobernante autocrático de Argentina, que exigía el derecho a controlar todo el tráfico del Río de la Plata. Era una grave amenaza para Brasil, ya que la economía de sus provincias sureñas dependía en gran medida del acceso al sistema fluvial de la cuenca del Plata.

Al mismo tiempo, estaban arrastrando a Brasil a una peligrosa batalla política en Uruguay, donde los brasileños habían logrado ocupar un lugar firme en las finanzas y el comercio. Se enviaron tropas brasileñas a las batallas internas uruguayas del lado de la facción colorada, que prevaleció. Luego regresaron para enfrentarse a Rosas. Los animaban franceses e ingleses, que estaban irritados por los severos términos impuestos por Rosas para el acceso económico a Argentina. La coalición antiargentina salió vencedora. Las tropas extranjeras, asistidas por rebeldes argentinos (representantes de los liberales que pronto serían dominantes), derrotaron a las fuerzas de Rosas en 1852, enviándolo al exilio permanente en Inglaterra.

Pero esto no supuso el fin de todos los combates. A pesar de contar con el apoyo brasileño, los colorados perdieron el control de Uruguay. Como los blancos victoriosos ya no podían dirigirse a Rosas en busca de ayuda, lo hicieron a Francisco Solano López, el dictador de Paraguay. Argentina, controlada ahora por los liberales, se unió a Brasil en apoyo de los colorados de Uruguay. Esta profunda participación extranjera condujo pronto a una confrontación militar directa entre brasileños y paraguayos. Solano López quería extender su gobierno aliándose con los blancos uruguayos para conquistar la provincia brasileña de Rio Grande do Sul. Invadió Argentina y Brasil en 1865, impulsándolos, junto con el gobierno colorado de Uruguay, a una alianza militar.

La guerra que siguió duró cinco años. El ejército paraguayo resultó estar bien entrenado, tener una disciplina magnífica y ser extraordinariamente valiente. Los brasileños soportaron el peso del combate en el otro lado. Al principio sufrieron derrotas humillantes, pero luego triunfaron después de ampliar mucho su ejército.

La guerra paraguaya tuvo importantes consecuencias: 1) se garantizó el acceso a la red fluvial del Río de la Plata, con lo que se complació a los comerciantes europeos, los liberales argentinos y los militares brasileños; 2) las dos principales potencias, Argentina y Brasil, cimentaron relaciones estrechas; 3) Brasil consolidó su posición —tanto política como financiera— en Uruguay; y 4) Paraguay perdió la mitad de su población (según se cree) y el país quedó en ruinas.

La guerra también tuvo un efecto profundo en la política interior de Brasil. El prolongado combate le obligó a aumentar su ejército, cuyos oficiales pronto se convirtieron en actores importantes de la política brasileña. También provocó que el emperador diera unos pasos sin precedentes para afirmar su autoridad. Pedro II exigió la rendición incondicional de Paraguay, mientras que los liberales, que eran mayoría en la Cámara, querían negociar en 1868. Despidió al gabinete liberal, que contaba con un fuerte apoyo en la Cámara, y convocó nuevas elecciones. Algunos liberales radicales reaccionaron airadamente formando un grupo escindido que en 1870 se convirtió en el Partido Republicano. Y la guerra arrojó una nueva luz sobre la más nacional de las instituciones, la esclavitud. Los esclavos reclutados por el ejército brasileño actuaron bien en la batalla y se les concedió la libertad como premio. Su efectividad en el combate debió hacer vacilar a más de un oficial blanco del que después se solicitara salir a cazar a los esclavos fugitivos brasileños.

El fin del imperio

Las dos décadas finales del imperio estuvieron dominadas por el debate sobre la legitimidad de dos instituciones: la esclavitud y la monarquía. Ambas cayeron bajo escrutinio durante la guerra paraguaya.

Aunque el tráfico de esclavos terminó de forma efectiva en 1850, la esclavitud no estaba abolida de ningún modo veinte años después. El rápido crecimiento de las plantaciones de café requería mano de obra y los plantadores se dirigieron a una fuente obvia: los esclavos del noreste en decadencia económica. Sus dueños se alarmaron por esta pérdida de «capital» y lograron obtener leyes provinciales que prohibían la exportación de esclavos a otras provincias. Sin embargo, tales medidas llegaron tarde, pero aunque todos los esclavos del noreste se hubieran trasladado al sur, no podrían haber proporcionado la mano de obra necesaria en la economía del café de finales de la década de 1880.

La única solución, según los plantadores, era aumentar la inmigración. En 1886, la provincia de São Paulo inició un importante esfuerzo por atraer a los inmigrantes europeos, pero los paulistas no fueron capaces de lograr la cantidad necesaria de mano de obra barata. ¿Por qué? En parte debido a la persistencia de la esclavitud. Esta conclusión llevó a cierta élite a volverse pro abolicionista basándose en que nunca se atraería a suficientes inmigrantes si no se transformaba la imagen retrógrada de Brasil en Europa. La abolición sería el paso más evidente.

El modo como Brasil llevó a cabo la abolición fue único en América. Constituía una institución extendida por todo el país, con lo que se evitó el conflicto regional que se dio en Estados Unidos. Además, los esclavos brasileños habían trabajado en casi todas las categorías laborales, incluidas muchas «cualificadas». No menos importante, un gran número de personas libres de color ya se habían establecido económicamente y proporcionaban

ejemplo a los recién liberados. Brasil también había escapado a la perspectiva extremadamente racista de declarar a todas las personas de color inferiores sin remedio. Algunos de los pertenecientes a la gran población de raza mixta habían alcanzado posiciones nacionales relevantes ya en 1889 (como el novelista Machado de Assis y el ingeniero abolicionista André Rebouças) y demostraban que era posible cierta movilidad.

La abolición fue un proceso de diecisésis años, marcado por tres leyes. La primera apareció en 1871, cuando el Congreso aprobó «la ley del útero libre», que proporcionó libertad desde entonces a todos los niños nacidos de madres esclavas. Pero se otorgó a los dueños la opción de retener los derechos laborales sobre esos niños hasta la edad de veintiún años.

Hasta la década de 1880, el movimiento abolicionista no volvió a ser capaz de forzar a la esclavitud al centro de la arena política. Encabezaban a los abolicionistas profesionales urbanos, especialmente abogados, entre los que destacaba Joaquim Nabuco, diputado de Pernambuco de impecables orígenes sociales. Guiados por oradores como él, los abolicionistas se convirtieron en el primer movimiento político nacional, organizando clubs, periódicos y reuniones públicas en las ciudades principales. Juntaron importantes sumas de dinero para financiar su propaganda y comprar la libertad de los esclavos locales.

Esta movilización tuvo su impacto en el Parlamento, que en 1885 aprobó la segunda ley abolicionista: otorgaba la libertad a todos los esclavos de sesenta años o mayores sin indemnización para el dueño. Los cínicos ridiculizaron la medida, señalando que muy pocos esclavos sobrevivían hasta esa edad y si lo hacían, sus dueños estarían encantados de liberarse de su cuidado. La nueva ley hizo poco para calmar la agitación de los abolicionistas, algunos de los cuales comenzaron a incitar a los esclavos a huir o a rebelarse contra sus amos. En 1887 la esclavitud ya se estaba desintegrando de forma visible. Los soldados del ejército, a quienes se mandaba atrapar y devolver a los esclavos fugitivos, encontraban su trabajo cada vez más repugnante. En 1887 los oficiales se negaron formalmente a seguir llevando a cabo esta misión.

En 1888, los propietarios de esclavos ya habían tenido tiempo suficiente para prepararse para la transición al trabajo libre. El paso final fue la «ley dorada», aprobada en mayo de ese mismo año, que liberaba a todos los esclavos que quedaran sin indemnización. La ley fue aprobada por una votación aplastante tanto en la Cámara de los Diputados como en el Senado. La élite política se las había arreglado para preservar el consenso mientras trataba de un tema socioeconómico explosivo. Este éxito en la reforma gradual ayudó a perpetuar la imagen conciliatoria de la élite brasileña. Resulta bastante notable que esta imagen haya llegado a ser compartida por muchos no pertenecientes a esa élite, lo que demuestra cómo sus gobernantes actuales han manipulado la comprensión que los brasileños tienen de su propio pasado.

El otro drama importante de finales del imperio fue el surgimiento del republicanismo. Había hecho erupción antes durante ese mismo siglo, casi siempre vinculado a demandas de autonomía regional. El Partido Republi-

cano, fundado en 1871, también tenía una vena nacionalista fuerte, en especial en São Paulo. El nacimiento de este partido puede seguirse hasta la reacción de los diputados liberales a la imposición de Dom Pedro II, en 1868, de un ministro conservador frente a la mayoría liberal de la Cámara. En 1870, un grupo de indignados ex liberales fundaron el Partido Republicano.

En un principio, los republicanos parecieron inofensivos. Hasta 1889 nunca controlaron la Cámara de Diputados y tenían un apoyo muy desigual. Eran más fuertes en São Paulo, Rio Grande do Sul y Minas Gerais; más débiles en el noreste. Querían reemplazar el imperio por una república encabezada por un presidente de elección directa, gobernada por un poder legislativo bicameral (con elecciones directas para ambas) y organizada según los principios federalistas. En la práctica, los republicanos querían cambiar la monarquía constitucional al estilo inglés por una república federal al estilo estadounidense.

Durante la década de 1880, el republicanismo se extendió mucho entre las generaciones más jóvenes: los hijos de los plantadores, comerciantes y profesionales que habían recibido educación universitaria. Solían combinar el republicanismo con el abolicionismo, ambos sentimientos reforzados por las enseñanzas de los positivistas brasileños, grupo con mucha dedicación que había penetrado en las facultades de educación superior, y de forma especial en las academias militares. De este modo, esta década contempló la convergencia de movimientos intelectuales y políticos que se unían para erosionar el apoyo a la monarquía y la esclavitud.

Sin embargo, no fue un debate noble el que selló el destino del imperio, sino el descontento de una institución que el emperador venía descuidando desde hacía mucho tiempo: el ejército. A finales de la década de 1880, aumentó la fricción recurrente que existía entre oficiales del ejército y políticos civiles, con frecuencia sobre los derechos a expresar en público sus ideas políticas. Debido a la guerra paraguaya, Brasil había creado un estamento militar mucho mayor que el deseado por los políticos de Dom Pedro II, que proporcionó una magra financiación para su modernización. Existía una desproporción elevada entre oficiales y tropa, lo que llevó a la frustración por los retrasos en los ascensos a las promociones jóvenes y los oficiales de rango medio, que se volvieron especialmente receptivos a los sentimientos republicanos y abolicionistas tan influyentes entre sus iguales civiles.

La agonía final del imperio sobrevino en 1889. El emperador había insistido en tratar de gobernar con un ministro conservador, a pesar de su posición minoritaria en la cámara. En junio, invitó al vizconde de Ouro Preto a formar un gabinete, lo que consiguió, y formuló un ambicioso programa reformista que incluía la descentralización administrativa. Pero era demasiado tarde. En noviembre se desarrolló un complot militar. Liderados por el mariscal Deodoro da Fonseca, los conspiradores demandaron la dimisión de Ouro Preto. Se dio un ultimátum al emperador: era su fin y debía marcharse. Dom Pedro II y su familia partieron tranquilos al exilio en Portugal. Al día siguiente se proclamó la república, el 16 de noviembre de 1889.

El imperio había caído con pocos trastornos. Aunque desde hacía tiempo los plantadores venían temiendo que la abolición perdiera las exportaciones agrícolas, pronto volvieron a sus cabales. Ahora se dieron cuenta de que podían conservar su dominio económico (y, por ello, político) en un mundo sin monarcas ni esclavos. Ni la abolición de la esclavitud ni el derrocamiento del imperio trajeron cambios estructurales a Brasil.

Visión general: crecimiento económico y cambio social

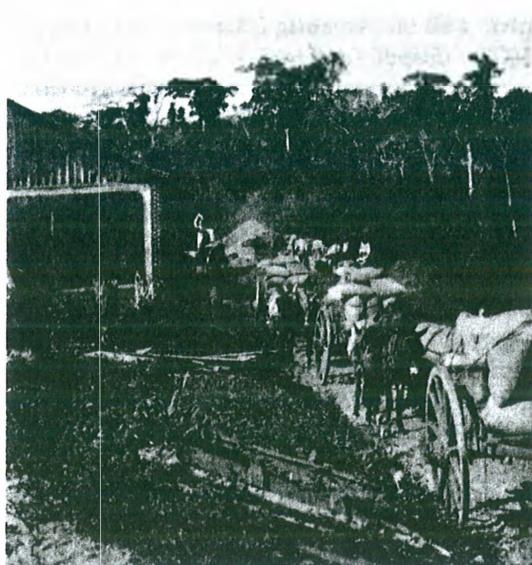
A mediados del siglo XIX, la economía brasileña comenzó una transición fundamental, que no se vinculó a ningún cambio legal o constitucional y que ha continuado hasta bien entrado el siglo XX. También ha tenido un profundo impacto sobre la sociedad brasileña y sobre las relaciones entre las clases sociales.

Al igual que la mayor parte de América Latina, Brasil ha exportado unos cuantos productos primarios a las economías del Atlántico Norte del centro del sistema mundial. Pero en contraste con muchos otros países del continente, ha pasado por una secuencia cronológica de dependencia de las exportaciones de productos diferentes en momentos distintos. El modelo repetido de auge y quiebra ha hecho difícil lograr un crecimiento sostenido. Y como los varios productos provienen de zonas diferentes del país, estos ciclos han creado bolsas regionales de prosperidad y declive.

Una vez lograda la independencia, el azúcar continuó siendo la exportación más lucrativa, al igual que durante el siglo XVIII. Producido en general en grandes plantaciones del noreste, donde la mano de obra era esclava, el azúcar suponía el 30 por 100 de las exportaciones brasileñas de 1821 a 1830. Luego comenzó un largo declive, a medida que aumentó la competencia caribeña, y en 1900 ya sólo contribuía con un 5 por 100 del total general de exportaciones (aunque el consumo interno era sustancial, y lo sigue siendo).

La producción de caucho se inició a comienzos del siglo XIX, principalmente en el Amazonas, y aumentó de forma constante. En 1853, el puerto de Belém exportaba más de 2.500 toneladas de caucho natural. La demanda del mundo industrial creció mucho una vez que Charles Goodyear descubriera el proceso de vulcanización, que evitaba que el caucho se volviera pegajoso en agua caliente y quebradizo en agua fría. De 1900 a 1913 hubo un auge espectacular, cuando su exportación llegó a suponer cerca de un tercio de la total del país. Entonces los ingleses sacaron provecho a las plantaciones de caucho más eficientes que habían desarrollado en las Indias Orientales y el precio mundial inició un agudo descenso. Los brasileños no pudieron soportar la competencia y el auge del caucho llegó a un final repentino y permanente.

Fue el café el que proporcionó el estímulo más constante para el cambio económico en el periodo postindependiente. Su producción empezó a desarrollarse en el Caribe a comienzos del siglo XIX y luego pasó a Brasil, donde disfrutaba de condiciones naturales excelentes. El volumen de sus expon-



A finales del siglo xix, los sacos de café dejan las plantaciones de São Paulo en caravanas de mulas para acabar en destinos de ultramar. (Cortesía de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.)

taciones se mantuvo bastante constante hasta la década de 1890, luego entró en un periodo de crecimiento espectacular. En 1901, Brasil exportaba cerca de 15 millones de sacos de café (de sesenta kilos cada uno) y producía aproximadamente tres cuartos del total del consumo mundial. A comienzos de siglo, el café rendía cerca de la mitad de las divisas del país.

De este modo, el café se convirtió en un rasgo central de la vida brasileña. El estado de la economía se relacionaba de forma directa con el mercado internacional: cuando los precios del café eran elevados, las perspectivas eran positivas; si caían, lo mismo pasaba con éstas. Y el consumo interno ha sido desde hace mucho tiempo un aspecto esencial de la vida social, ya que los brasileños mantienen reuniones y discusiones con una taza tras otra de café humeante, que a menudo se toma con una gran cantidad de azúcar. Un refrán proporciona su receta: «Tan fuerte como el demonio, tan negro como la tinta, tan caliente como el infierno y tan dulce como el amor».

La producción del café floreció en el centro y sur de Brasil, en especial en el estado de São Paulo. Requiere tierras espaciosas, bastante inversión y mucho trabajo. Los árboles del café llegan a su producción total a los seis años y necesitan un cuidado constante. Deben recolectarse los frutos, lavarse y descascararse. Los granos deben secarse, tamizarse, seleccionarse, ensacarse y almacenarse, lo cual requiere mano de obra.

Al igual que Argentina, Brasil dirigió sus ojos a Europa. Primero el estado de São Paulo y luego el gobierno de la nación iniciaron programas que atrajeron millones de inmigrantes europeos, en especial en el último cuarto del siglo xix. La mayor cantidad, quizás un tercio del total, provino de Italia. Pero el tamaño relativo de la población inmigrante nunca alcanzó el mismo

nivel que en Argentina. La cota más alta para Brasil fue un 6,4 por 100 en 1900 y después descendió.

Volviendo la vista atrás, resulta irónico darse cuenta de que esta oleada de europeos recién llegados probablemente ayudó a distorsionar, al menos regionalmente, el desarrollo económico brasileño a largo plazo. Aunque se disponía de abundante mano de obra en el centro y noreste del país, donde el número de puestos de trabajo había caído mucho tras el aumento de trabajadores, los profetas de la inmigración optaron por los europeos, que probablemente serían mejores trabajadores y futuros ciudadanos de más confianza. Así que el gobierno brasileño pagó el pasaje de barco a millones de europeos, mientras millones de brasileños en Minas Gerais, Río de Janeiro y el noreste no podían pagarse el desplazamiento al sur. Los europeos y japoneses transplantados hicieron grandes contribuciones; pero cada uno de esos puestos de trabajo podía haber sido ocupado por un brasileño al que se habría rescatado de las regiones de economía moribunda.

Más difícil resultaba obtener tecnología. No había, como sigue sin haber, un sustituto rápido para ésta, que constituye uno de los rasgos más esenciales de las economías modernas. En el mundo capitalista ha resultado extremadamente difícil comprar tecnología. Los brasileños, como otras poblaciones no pertenecientes al dinámico complejo industrial del Atlántico Norte, se vieron obligados a aceptar la inversión directa de compañías extranjeras para obtenerla. El sistema de telégrafos, por ejemplo, llegó con empresas inglesas y estadounidenses, que instalaban y manejaban su propio equipo. Lo mismo puede decirse de los ferrocarriles, las instalaciones eléctricas y el embarque, la mayor parte de la infraestructura necesaria para sostener la creciente economía agroexportadora. Eran inversiones muy visibles que después se convirtieron en blancos adecuados para los ataques nacionalistas.

También el capital se buscó fuera. Gran parte llegó con la tecnología que se acaba de describir; también llegó en forma de préstamos a un estado o a la nación brasileña. En 1907, por ejemplo, los estados de São Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro firmaron un acuerdo para que la comercialización del café fuera financiada por acreedores extranjeros. Los gobiernos de los estados planeaban devolver los créditos con los ingresos tributarios por la exportación de este producto. Este acuerdo obligaba a Brasil no sólo a devolver el préstamo, sino también a financiar la remisión de los beneficios (y finalmente del capital) sobre inversiones directas efectuadas por extranjeros. La cuestión crucial eran los *términos* en los que todas estas transacciones se efectuaban. Los datos disponibles sugieren que la tasa de beneficio sobre los ferrocarriles de propiedad extranjera, por tomar un ejemplo evidente, no superaba las de inversiones semejantes en Gran Bretaña. Pero este tema aún debe investigarse de forma sistemática.

De 1889 a 1930, el centro de la economía brasileña se trasladó al sur y al suroeste. El primer impulso provino de la «marcha» del café, cuando los plantadores descubrieron que era más barato roturar un nuevo terreno que reciclar los suelos de las plantaciones que disminuían su producción. El re-

sultado fue un sendero de plantaciones abandonadas, que se extendían desde Río de Janeiro y Minas Gerais hasta São Paulo y su vasto interior.

La dependencia del café suponía riesgos de gran escala. Uno de ellos era la superproducción. Era difícil predecir la demanda con seis años de antelación para saber cuándo debían plantarse árboles. Además, la cosecha dependía del clima y de otros factores imprevisibles. En 1906, por ejemplo, Brasil produjo 20 millones de sacos de café para un mercado mundial que sólo podía absorber 12 o 13 millones. Pronto surgió una cuestión política: ¿qué debía hacerse con los excedentes?

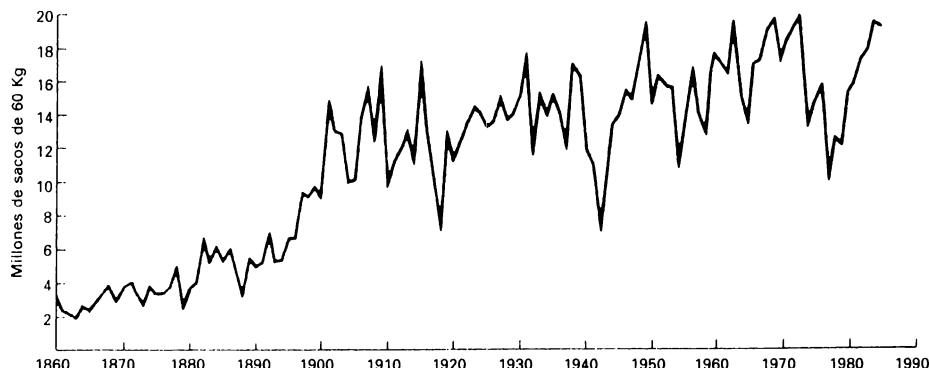
El riesgo de la competencia extranjera, en especial de África y otros lugares de América Latina, trajo una incertidumbre relacionada. La cuota brasileña del mercado mundial descendió del 75 por 100 en 1900 al 67 por 100 en 1930, a sólo el 32 por 100 en 1970 y al 18 por 100 en 1978. Con el tiempo, el país perdió de forma gradual su casi monopolio del abastecimiento.

Una tercera vía de vulnerabilidad provenía de las amplias fluctuaciones que sufría el precio mundial, que reflejaba no sólo los efectos de la competencia, sino también cambios en la demanda. El café es en esencia un lujo, aunque crea hábito, y su consumo puede reducirse en tiempos de penuria. Entre 1929 y 1931, tras el golpe de la Gran Depresión, su precio cayó en picado de 22,5 centavos la libra a sólo 8 centavos. Las oscilaciones frecuentes produjeron una gran variación en los ingresos en divisas de un año a otro, y en los del gobierno, que provenían principalmente de los derechos de exportación.

Para ilustrar el crecimiento y la incertidumbre del sector cafetalero brasileño, la figura 5.1 muestra el volumen de las exportaciones del país durante el periodo de 1860 a 1960. Se aprecia con claridad el aumento en la producción y el comercio, al igual que las fluctuaciones, que reflejan en general la inestabilidad de la demanda mundial.

Un riesgo final se derivaba del pequeño número de compradores. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, Brasil vendió entre tres quintos y tres cuartos de sus exportaciones sólo a tres países: Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania. Estados Unidos era el mayor comprador individual y también se convirtió en la mayor fuente de inversión extranjera (suponía casi la mitad del total en 1960). La dependencia de dos o tres clientes creaba no sólo vínculos estrechos, sino también muy impredecibles con las economías exteriores, como descubrió Brasil tras la quiebra de 1929. También podía llevar a problemas políticos.

Políticos y economistas prominentes consideraban esta vulnerabilidad un resultado inevitable de la «vocación agraria» de Brasil. Sostenían que la única elección que tenían era comprar los productos manufacturados extranjeros que necesitaban con los fondos conseguidos por la exportación, acrecentados por las inversiones o los créditos directos extranjeros. Cualquier intento importante de industrializarse, razonaban, produciría artículos inferiores y pondría en peligro las relaciones con los compradores y acreedores extranjeros. Además, Brasil no podía esperar tomar Estados Unidos como un modelo para la industrialización «porque no tenemos las aptitudes superiores de su



5.1. Exportaciones brasileñas de café, 1860-1985. *Fuentes:* Werner Baer, *Industrialization and Economic Development in Brazil*, Homewood, Ill., Richard D. Irwin, 1965, pp. 266-267; James W. Wilkie, Enrique C. Ochoa y David E. Lorey, eds., *Statistical Abstract of Latin America*, vol. 28, 1990, Los Ángeles, UCLA, Latin American Center, 1990, cuadro 2.426, p. 584.

raza», según las palabras de un ministro del gobierno de la década de 1890. Brasil debía vivir, y se vería forzado a ello, con lo que Dios le dio: una ventaja comparativa en unas cuantas exportaciones agrícolas.

Sin embargo, desde finales del imperio, un puñado de intelectuales y empresarios comenzaron a disputar esta lógica. Sostenían que Brasil debía estimular la industria interna y controlar con cuidado los vínculos con los países extranjeros, en especial Gran Bretaña y, después, Estados Unidos. Estos críticos tenían poca influencia en áreas políticas clave como los aranceles o los tipos de cambio. No obstante, lograron crear una crítica «nacionalista» que iba a resultar importante desde 1930.

El impulso oficial a la industrialización hizo su aparición en 1890, cuando una revisión arancelaria proporcionó una ligera protección para la manufactura local frente a la competencia extranjera (y también rebajó las tasas de los bienes de equipo requeridos para la producción). Brotaron escuelas de ingeniería en Recife, São Paulo, Pôrto Alegre y Bahia. Para 1907, el país tenía unos 3.000 establecimientos industriales, la mayoría de ellos pequeños, que producían principalmente textiles y artículos alimenticios. En 1920 el número de empresas ya había aumentado a más de 13.000.

El sector industrial brasileño sufrió una expansión a gran escala en los años treinta y cuarenta, cuando la Gran Depresión y la segunda guerra mundial redujeron el aprovisionamiento de artículos manufacturados del exterior (como también ocurrió en el resto de América Latina). Como en el caso del café, el centro del crecimiento industrial estaba en el estado de São Paulo, donde el 15 por 100 de la población nacional producía cerca del 50 por 100 de los artículos manufacturados del país en 1940.

Desde entonces continuó el ascenso rápido y Brasil pasó a industrias pesadas como la del acero y la producción de automóviles. Entre 1947 y 1961

la producción manufacturera aumentó a una tasa anual del 9,6 por 100, comparada con el 4,6 por 100 del sector agrícola. En 1960, la producción industrial ya sumaba más del 25 por 100 del producto interior bruto y en 1975 se acercaba al 30 por 100. Esta diversificación de la economía ayudó a reducir su dependencia del mundo exterior y prestó credibilidad a las declaraciones de que el país algún día se uniría a las filas de las superpotencias.

Estas transformaciones económicas produjeron cambios de largo alcance en la estructura social. Un resultado fue la urbanización. En 1920, alrededor de un 25 por 100 de la población vivía en zonas urbanas y en 1992 casi tres cuartos de la población ya vivía en ciudades. Pero existen dos rasgos poco comunes en esta tendencia. El primero es que su urbanización ha sido *posterior y más lenta* que la de muchos otros países de América Latina. El segundo es que Brasil no tiene una sola ciudad predominante (como Buenos Aires o Montevideo, por ejemplo). São Paulo y Río de Janeiro se han convertido en megalópolis, con millones de habitantes y las comodidades y complicaciones de la vida urbana, pero entre ambas contienen sólo alrededor de un 10 por 100 de la población nacional de 154 millones. Aunque ha habido urbanización, las ciudades coexisten con un campo grande y poblado.

En consecuencia, Brasil ha desarrollado un sistema social intrincado. La élite de la clase superior incluye a los latifundistas, con frecuencia divididos entre ellos, como cuando los plantadores paulistas se alzaron en el siglo XIX para desafiar a los magnates del azúcar del noreste. En el curso del siglo XX apareció también una élite industrial, un grupo nuevo y vigoroso que lucharía por conseguir posición y riqueza, utilizando a veces el poder del Estado para conseguir su prosperidad.

Las masas populares también eran variadas. Ha habido y sigue habiendo un campesinado numeroso, formado por aquellos que se ganan la vida a duras penas con la tierra. Existe un proletariado rural, en los cafetales y otros lugares, que realiza un trabajo asalariado en el campo. Y en el interior hay grupos indígenas y otros que tienen poco contacto con la sociedad nacional, marginados la mayor parte de ellos.

Una clase obrera organizada de un considerable tamaño (al menos cuatro millones de personas en 1970 y seis millones en 1980), surgió en las ciudades brasileñas. Su lucha con los empresarios y su manipulación constante por parte del Estado proporciona uno de los temas centrales de la vida brasileña del siglo XX. También existe un gran estrato de personas que viven en las ciudades en desempleo crónico, a menudo inmigrantes del interior que hallaron cobijo en los barrios marginales de las grandes ciudades.

Entre las clases altas y bajas, fueron apareciendo gradualmente sectores medios. Es difícil estimar su tamaño: quizás ahora incluya hasta un 30 por 100 de la población en algunas ciudades, aunque su dimensión en la población nacional es menor (del 10 al 15 por 100). Desempeñan papeles importantes en el comercio y las profesiones, y tienen una relación particularmente íntima con una importante institución: el ejército.

La posición social no depende sólo de la función u ocupación o riqueza;

también tiene que ver con la raza. La importación masiva de mano de obra esclava de África proporcionó una dimensión étnica adicional a la sociedad brasileña, que a su vez ha afectado a las costumbres y actitudes.

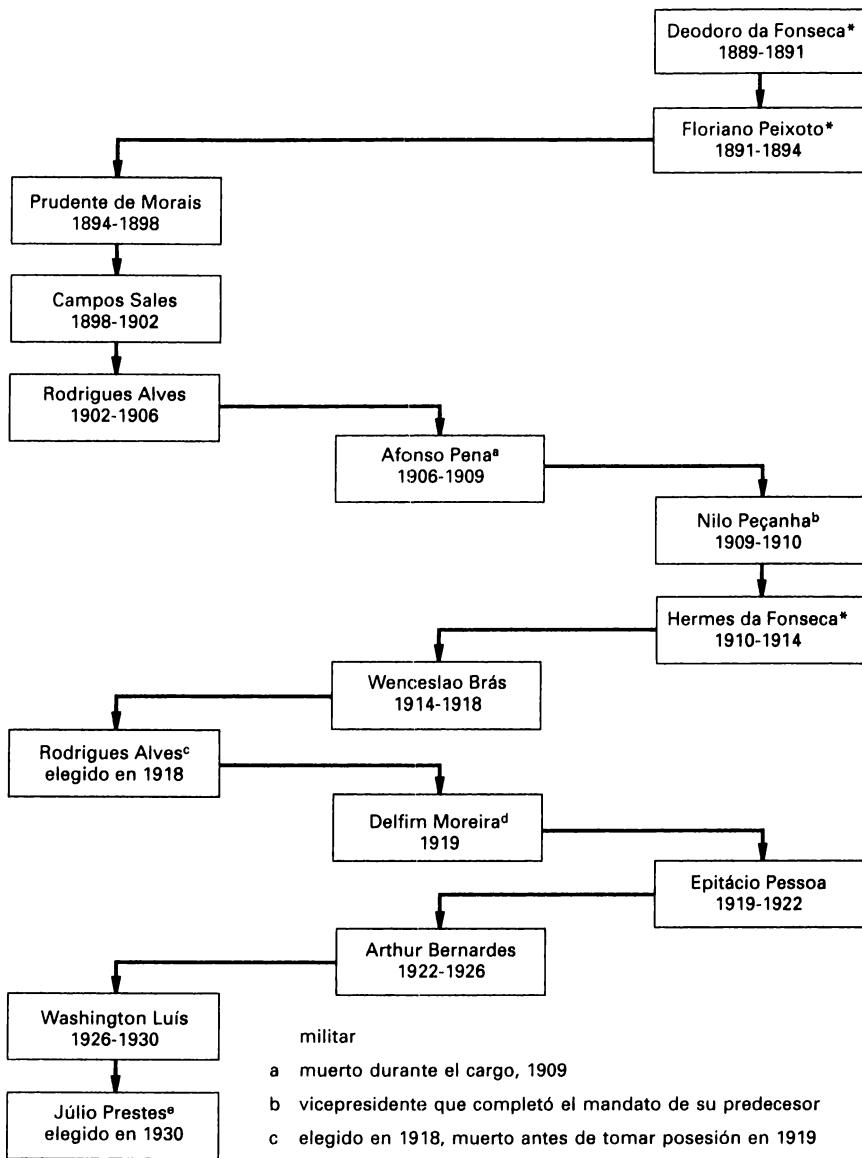
Tiende a haber una fuerte correlación entre raza y posición social: la mayoría de la clase alta es blanca, mientras que la mayoría de los negros se encuentran en el estrato más bajo y las mezclas de sangre suelen hallarse en medio. Algunas instituciones, como la oficialidad naval o el cuerpo diplomático, fueron durante mucho tiempo blancas. Pero la raza no se define sólo con base en la biología. Es un concepto social, abierto a la interpretación. Para ser «negro» se tiene que serlo totalmente (en contraste con Estados Unidos, donde tener parte negra en los orígenes étnicos significa ser negro). Los mulatos tienen una oportunidad considerable de subir en la escala social y por esta razón el mestizaje ha sido considerado por un estudioso como una especie de «escotilla de escape».

Pero no quiere decir que Brasil constituya un paraíso racial. Ha existido prejuicio y predilección. Durante el último siglo, la mayor parte de la élite brasileña ha colocado su fe en el *branqueamento*, supuestamente el resultado inevitable del mestizaje, con la intención inequívocamente racista de purgar a Brasil de la supuesta influencia de la sangre negra. La relación general entre posición y raza continúa existiendo, a pesar de la negación de los brasileños acomodados. Varios estudios recientes efectuados por demógrafos brasileños muestran diferencias significativas en la renta por la raza (determinantes para todos los demás factores), basadas en datos oficiales de 1976 y 1980. La conclusión que puede extraerse es que la raza es una variable separada y significativa en el sistema socioeconómico brasileño. Pero existe movilidad, el matrimonio que cruza líneas de color es común y las actitudes son más abiertas que las que han existido en la historia estadounidense.

La diferenciación racial ha supuesto un obstáculo, aunque modesto, para la formación de coaliciones duraderas entre estratos y grupos sociales. Otro obstáculo es el inmenso tamaño geográfico de Brasil. La distancia (y las pobres comunicaciones) hizo imposible imaginar durante mucho tiempo una alianza duradera entre los obreros urbanos de São Paulo, por ejemplo, y los campesinos sin tierras del noreste. Estas divisiones naturales permitieron que Brasil intentara soluciones políticas que hubieran sido imposibles en países más densamente poblados e integrados como Cuba.

La Primera República (1889-1930)

Aunque los militares derrocaron el imperio, los políticos civiles dieron forma a la nueva república (véase la figura 5.2). Se eligió una Asamblea Constituyente, que elaboró una nueva Constitución en 1891. Era casi una copia de la estadounidense, como había pretendido su autor principal, el delegado de Bahia, Rui Barbosa. Brasil se convirtió en una federación de veinte estados y su presidente iba a elegirse directamente y tendría poder para intervenir en los estados en caso de amenaza de separación, invasión extranjera o conflic-



5.2. *Café com leite*: presidentes brasileños por estado, 1889-1930. El poder de dos estados importantes —São Paulo, región productora de café, y Minas Gerais, zona lechera— condujo a una serie de pactos presidenciales durante la Antigua República (1889-1930) a los que los brasileños han apodado «la política del café con leche» (*café com leite*). Rio Grande do Sul era otro estado significativo y los militares desempeñaron un importante papel como intermediarios y supervisores.

to con otros estados. El sufragio se restringía a los ciudadanos varones alfabetizados, lo que supuso menos de un 3,5 por 100 de población votante en las elecciones presidenciales anteriores a 1930 y sólo el 5,7 en 1930.

Tras elegir presidente a Deodoro da Fonseca y a otro oficial, Floriano Peixoto, vicepresidente, la Asamblea chocó con Deodoro por su política financiera y sus intervenciones en los gobiernos de los nuevos estados. En noviembre de 1891, atormentado por su mala salud, Deodoro dimitió, pasando el poder a Floriano Peixoto, el llamado Mariscal de Hierro. Pronto se enfrentó con una proliferación de revueltas que hacían erupción por todo Brasil. En Rio Grande do Sul, la revuelta formaba parte del conflicto a muerte entre las facciones locales; en Río de Janeiro, era una revuelta naval encabezada por oficiales monárquicos. Ambas fueron aplastadas, ya que la nueva república hizo uso de la censura, la ley marcial y las ejecuciones. Cuando Prudente de Moraes, de São Paulo, fue elegido primer presidente civil en 1894, el nuevo régimen había ganado estabilidad. Pero llegó al precio de tener que reconocer la legitimidad del régimen oligárquico atrincherado en cada estado.

¿Quiénes eran esos oligarcas y cómo consiguieron el poder? En cada estado surgió un aparato político muy bien organizado, que se dedicó a monopolizar el poder. En estados como São Paulo y Minas Gerais, donde el Partido Republicano había sido fuerte antes de 1889, los «republicanos históricos» controlaban el gobierno estatal. En Bahia y el noreste, que contaban con pocos republicanos hasta 1889, el poder fue a aquellos políticos que más rápidamente establecieron credenciales como nuevos republicanos. La estructura de poder resultante fue una «política de gobernadores» en el ámbito nacional y un «coronelismo» en el ámbito local. Los coroneles eran en realidad caudillos rurales o de ciudades pequeñas que podían conseguir votaciones en bloque en cualquier elección. En recompensa, obtenían el control sobre los fondos estatales y nacionales gastados en su zona de influencia. Los políticos estatales utilizaban sus tratos con los coroneles para negociar en el ámbito nacional con los dirigentes de otros estados.

El premio mayor de tales negociaciones era la presidencia. Como era de esperar, los estados disfrutaban de una influencia muy desigual en este proceso. São Paulo y Minas Gerais eran los más importantes, y Rio Grande do Sul tenía capacidad para inclinar la balanza cuando los dos estados mayores quedaban en tablas. Bahia, Río de Janeiro y Pernambuco eran estados secundarios, que a menudo servían como bases de poder para candidatos presidenciales disidentes, aunque ninguno fue elegido durante la Antigua República (1889-1930).

La descentralización constitucional creada por la república permitió a varios estados que contaban con economías dinámicas, especialmente a São Paulo, conseguir una autonomía virtual sobre su desarrollo. Entre 1890 y 1920, el estado de São Paulo más que triplicó su población. Había contraído una deuda externa mayor que la del gobierno nacional y suponía de un 30 a un 40 por 100 de la producción nacional brasileña. Con capacidad para gravar por sí mismo el comercio interestatal, había logrado, desde la perspecti-

va del gobierno federal, una notable autosuficiencia. Sólo una estructura federal holgada podía haber permitido la extraordinaria explosión del desarrollo económico paulista («la locomotora que empuja a los veinte vagones vacíos», decía un natural chauvinista), que impulsó la posterior preeminencia mundial de Brasil a mediados del siglo XX.

La maquinaria política brasileña bastante bien engrasada encontró problemas poco después de la primera guerra mundial. El sistema político creado por los republicanos en la década de 1890 no había sobrevivido mucho tiempo en su forma original. La primera crisis importante surgió en las preparaciones para las elecciones de 1910. El candidato «oficial» para la presidencia era el gobernador João Pinheiro, de Minas Gerais, que murió de forma repentina en 1908. La crisis se agudizó cuando el presidente, Affonso Pena, murió en 1909, dieciocho meses antes de terminar su mandato. Siguió una agria batalla y el mariscal Hermes da Fonseca, hijo del primer jefe ejecutivo de la república, se convirtió en el candidato «oficial». Ganó, pero por vez primera había un movimiento de oposición significativo, que respaldaba a Rui Barbosa, el cruzado liberal de Bahía.

Durante la presidencia de Hermes da Fonseca (1910-1915), muchos estados pequeños experimentaron agrias batallas dentro de la élite política, por lo general entre el aparato en función y los disidentes. Las líneas del conflicto solían seguir modelos prerrepublicanos de luchas de clase y familias. Estas batallas hicieron imposible volver al buen funcionamiento de la «política de los gobernadores», no menos porque el presidente Hermes solía mandar tropas federales en ayuda de los inconformistas. Formalmente, al menos, el sistema continuó funcionando hasta octubre de 1930. Los candidatos presidenciales «oficiales» eran elegidos invariablemente y el Congreso federal permaneció bajo el control de los aparatos estatales.

No obstante, la estructura constitucional y la cultura política de la Antigua República se habían convertido en blancos de la crítica y el ridículo provenientes de todos los sectores. Entre los críticos, era notable una nueva generación de la élite, nacidos en la república, muchos de cuyos miembros eran abogados. Denunciaban como corrupto el modo como manejaban los políticos la república. La mayoría lo retrotraía a sus fundadores, a quienes acusaban de haber impuesto sobre el país un liberalismo para el que no se encontraba preparado. Sólo podían determinarse los cambios necesarios tras un cuidadoso análisis sobre la posición de Brasil: económica, social, política e intelectual. En una palabra, los problemas brasileños necesitaban diagnósticos brasileños y soluciones brasileñas. Se describían como «brasileños que piensan como tales: americanos, latinos y tropicales». Entre los dirigentes de este grupo se encontraban Oliveira Vianna, sociólogo y abogado; Alceu Amoroso Lima, crítico literario y ensayista; y Gilberto Amado, ensayista y político. Su mentor era Alberto Tórres, un republicano incansable de la generación anterior que se había desilusionado durante sus años como gobernador del estado de Río de Janeiro y después como magistrado del Tribunal Supremo federal.

Las críticas de los intelectuales corrían parejas con un ambiente sedicioso entre los oficiales del ejército más jóvenes. Hubo una serie de revueltas cuateleras en 1922 y 1924, conducidas por tenientes. Las revueltas de 1924, que comenzaron en São Paulo y Pôrto Alegre, fueron las más serias, pero los oficiales rebeldes huyeron y se mantuvieron durante dos años y medio como guerrillas en una marcha de 25.000 km por el interior del país. Se los conoció como la «Columna de Prestes», por Luís Carlos Prestes, un teniente rebelde que más tarde lideraría el Partido Comunista Brasileño durante más de treinta años.

Los manifiestos formales de los rebeldes eran vagos y hacían énfasis en la necesidad de elecciones justas y un gobierno honesto, además de prestar atención a las necesidades sociales de la nación. Una queja más inmediata se centraba en problemas profesionales: entrenamiento anacrónico, armas obsoletas, indiferencia de los gobiernos civiles y pobres perspectivas de ascenso. Esta frustración era una reminiscencia de finales del imperio, cuando la oficialidad contó con razones profesionales e intelectuales para apoyar un golpe contra la corona.

Otra poderosa corriente política de los años veinte era el Partido Democrático, fundado en São Paulo en 1926. Sus dirigentes, tipificados por el magnate del café Antonio Prado, estaban de acuerdo en que la Antigua República era un fraude, no debido a un exceso de liberalismo, sino precisamente por lo contrario. Muchos de sus votantes provenían de los profesionales urbanos, defraudados al ver sus votos neutralizados por los votos rurales movilizados por el aparato del gobierno federal. Querían lo que las clases medias europeas habían conseguido en el siglo XIX: el poder político mediante un sistema electoral que les otorgase un papel importante en el gobierno. No fue accidental que esta corriente de «constitucionalismo liberal» se mostrara con más fuerza en São Paulo, el centro del crecimiento económico y el proceso de urbanización más rápidos. Era la voz del Brasil «moderno» que se pronunciaba contra la influencia desproporcionada de las regiones «atrasadas» del país.

El desarrollo económico de finales del siglo XIX había creado una clase obrera en tres o cuatro ciudades grandes. Las primeras organizaciones obreras fueron «sociedades de ayuda mutua», que tuvieron poco que hacer. Fueron reemplazadas a comienzos del siglo XX por los organizadores anarquistas y anarcosindicalistas, mucho más militantes. En la década de 1910, sus sindicatos organizaron diferentes huelgas, incluidos varios intentos de huelga general. Antes o después, se encontraron con una fuerte represión. Los dirigentes nacidos en España o Italia fueron deportados, mientras que los brasileños acabaron en la cárcel, fueron golpeados y hostigados. En 1921, el movimiento urbano organizado era una ruina.

En los años siguientes, se aprobaron leyes de bienestar social, como zanahoria tardía para acompañar el palo omnipresente. Pero los trabajadores brasileños tenían menos derechos de organización y medidas de bienestar que, por ejemplo, los chilenos durante el mismo periodo. Una razón era el

excedente constante de mano de obra, en especial para trabajos no cualificados o con escasa cualificación. Frente a ello, a los obreros brasileños les resultó difícil organizarse.

Una consecuencia de la represión fue el declive del liderazgo anarquista y anarcosindicalista y su sustitución, en muchos casos, por comunistas, cuyo partido brasileño se fundó en 1922. Su presencia proporcionó un nuevo blanco para los civiles y militares autoritarios. En 1930, el movimiento obrero urbano era un huérfano político, aunque aumentaba de forma sostenida su importancia económica. Mientras tanto, los empresarios no veían razones para cambiar el modo autocrático con el que habían tratado desde hacía mucho tiempo con sus trabajadores.

Getúlio Vargas y el *Estado Nôvo*

La quiebra económica mundial de 1929 golpeó a Brasil, al igual que al resto de América Latina, con mucha fuerza. Como el mercado mundial se contraíó, los exportadores de café sufrieron un enorme descenso en sus ingresos de divisas. A pesar de la crisis, el presidente Washington Luís persistió en una política de divisa fuerte, lo que en la práctica significaba garantizar la convertibilidad de la moneda brasileña (*mil reis*) en oro o libras esterlinas inglesas. Las reservas de oro y libras esterlinas se agotaron rápidamente forzando al gobierno a suspender la convertibilidad del *mil reis*. Se dejó al gobierno en una crisis agudizada de la balanza de pagos y los cafetaleros fueron golpeados por una cosecha invendible.

Dada la gran importancia del café para la economía brasileña, se podría haber esperado que el gobierno se apresurara a ofrecer ayuda. Pero no lo hizo. Por el contrario, trató de complacer a los acreedores extranjeros manteniendo la convertibilidad. Eran los principios monetarios predicados por los banqueros y economistas extranjeros los que establecían los términos de las relaciones brasileñas con la economía mundial. En un momento crítico, el gobierno decidió adoptar una medida económica que no contaba con el apoyo de ningún sector importante de la sociedad brasileña.

No resulta sorprendente que Washington Luís no llegara a terminar su mandato. Como en 1889, fueron los militares los que tomaron la iniciativa. Un movimiento de oposición se había aglutinado alrededor de Getúlio Vargas, político riograndense que ya había sido candidato a la presidencia en 1930 y había sido derrotado por Júlio Prestes, el candidato «oficial» apoyado por Washington Luís. En su campaña, Vargas *no* desafió al sistema político; se presentó estrictamente desde dentro de la élite. Sus seguidores eran facciones disidentes de varios estados, deseosas de tener ocasión de llegar al poder. Después de las elecciones, que Vargas esperaba perder, fue cuando surgió una conspiración entre los políticos y oficiales descontentos.

El golpe de octubre de 1930 no constituyó una «revolución». La alta jerarquía militar depuso a Washington Luís y luego pasó el poder a Vargas

como presidente de un gobierno provisional. El gabinete invocó el poder revolucionario para emprender pasos arbitrarios y específicos que consideró necesarios. No obstante, 1930 constituye una línea divisoria en la historia contemporánea de Brasil, aunque no sea comparable con la revolución mexicana de 1910-1920 o con la transformación de Cuba desde 1959.

Cuando Getúlio Vargas se trasladó al palacio presidencial en noviembre de 1930, pocos se figuraron que se convertiría en un líder tan importante. Sólo se encontraba allí porque el conflicto existente dentro de la élite nacional se estaba convirtiendo en una guerra armada. Nunca llegó a su clímax debido a la intervención militar. Una vez que los mandos militares depusieron a Washington Luís, algunos oficiales quisieron retener el poder, pero la presión ejercida por la movilización de la Alianza Liberal era demasiado grande: tras pasar sólo cuatro días en el poder, los tres comandantes lo traspasaron a Vargas, que se convirtió en presidente provisional. Se mantuvo en el puesto durante cuatro años. Como no había poder legislativo, el presidente gobernaba por decreto. Mientras tanto, estaban ocurriendo importantes cambios en las fuerzas políticas nacionales.

En primer lugar, Vargas se movió con rapidez para reemplazar a los gobernadores de todos los estados menos uno, Minas Gerais. Los nuevos «interventores» despachaban directamente con el presidente. Era un preludio de las batallas posteriores sobre la autonomía de los estados y la campaña presidencial para reducir el tamaño de las milicias estatales. Este activismo del gobierno central desequilibró con frecuencia el equilibrio de los aparatos estatales y benefició a las facciones disidentes, muchas de las cuales habían apoyado a Vargas en las elecciones de 1930. Al igual que durante la presidencia de Hermes da Fonseca, las rivalidades políticas dentro de un estado se saldaban mediante decisiones tomadas en Río de Janeiro.

Un segundo hecho importante fue el reagrupamiento de las fuerzas políticas de São Paulo. El interventor de Vargas (João Alberto) había resultado una persona inepta y carente de tacto para tratar a los quisquillosos paulistas. Su elevado sentido de lealtad al estado y su ira hacia João Alberto unió a São Paulo contra Vargas. Sus dirigentes demandaban que éste cumpliera su promesa de convocar una Asamblea Constituyente que redactara una nueva Constitución. En 1932, la frustración paulista acabó haciendo erupción en una rebelión armada. Las milicias estatales, ayudadas por voluntarios entusiastas, detuvieron a las fuerzas federales durante cuatro meses, en la Revolución Constitucionalista. Los rebeldes tuvieron que rendirse al ser atrapados por el movimiento envolvente efectuado por las fuerzas federales sobre la ciudad de São Paulo. Con su intento separatista armado, los paulistas desacreditaron más la causa del gobierno descentralizado y fortalecieron a los centralistas de Río.

Un tercer acontecimiento político significativo fue la desintegración del movimiento de los *tenentes*. Estos jóvenes oficiales del ejército nunca habían logrado una organización coherente. Algunos acompañaron a Vargas al poder en 1930. Otros fundaron el Club del Tres de Octubre para concentrar los

esfuerzos por lograr más cambios sociales radicales que los propuestos en los años veinte, pero su movimiento estaba aislado y era vulnerable. Antes de que pasara mucho tiempo, la policía ocupó las instalaciones del club y el grupo se desintegró.

Mientras tanto, Vargas fortalecía su red de aliados y colaboradores políticos. Su éxito fue evidente durante la Asamblea Constituyente de 1933 y 1934. La nueva Constitución, la segunda del Brasil republicano, no era demasiado diferente de la primera (1891). Se había reducido la autonomía del estado: ya no podían gravar impuestos al comercio interestatal. Seguía la legislatura bicameral, que se elegiría de forma directa, al igual que el presidente (excepto el primero). Aparecían por primera vez algunas medidas nacionalistas, que ponían restricciones a la propiedad extranjera de la tierra y a su participación en algunas profesiones (como la abogacía y la medicina). La naturaleza modesta de estos cambios constitucionales venía a confirmar que la Revolución de 1930 había excedido los márgenes de una pelea intraelitista y que existía una tensión continua entre centralización y autonomía estatal. El acto más importante de la Asamblea Constituyente fue la elección de Vargas como primer presidente por un mandato de cuatro años bajo la nueva Constitución.

En 1934, Brasil entró en uno de los períodos más agitados de su historia política. La atención se centró en dos movimientos nacionales muy ideologizados, ambos comprometidos con la movilización popular. Uno era el integrismo, movimiento derechista de rápido crecimiento que presentaba afinidades con los partidos fascistas europeos. Fundado a finales de 1932 y liderados por Plínio Salgado, una ambiciosa figura literaria, aunque poco importante, los integristas declaraban un rápido crecimiento por todo el país en 1935. Su dogma era cristiano, nacionalista y tradicionalista, y su estilo paramilitar: filas uniformadas, manifestaciones callejeras muy disciplinadas, vistosas camisas verdes y retórica agresiva. En general pertenecían a las clases medias y tenían apoyo de la oficialidad militar, en especial de la marina. Aunque no era público, las ambiciosas actividades integristas estaban financiadas en parte por la embajada italiana.

En el otro extremo del espectro se encontraba un movimiento de frente popular, la Alianza Libertadora Nacional (ALN), creada en 1935. Era una coalición de socialistas, comunistas y radicales de varias clases, manejada en la práctica por el Partido Comunista Brasileño, que estaba llevando a cabo la estrategia para América Latina formulada en la reunión de la Komintern celebrada en Moscú en 1935. El primer paso de esta estrategia en Brasil sería una movilización abierta según las líneas convencionales: reuniones, apertura de oficinas, recaudación de fondos para forjar una amplia coalición de izquierdas en oposición al nuevo gobierno de Vargas, los integristas y los constitucionalistas liberales.

A mediados de 1935, la política brasileña había alcanzado un tono febril. Los integristas y la ALN se nutrían mutuamente mientras aumentaba el terrorismo y los alborotos callejeros. Las principales ciudades de Brasil co-

menzaron a recordar las batallas entre nazis y comunistas de Berlín durante 1932 y 1933. Pero la ALN era mucho más vulnerable que los integristas. Había pocas dudas acerca de dónde descansaban las preferencias del gobierno. En julio de 1935, decidió actuar contra ella y las tropas ocuparon las oficinas, confiscaron la propaganda, se hicieron con los archivos y encarcelaron a los dirigentes.

Entonces los comunistas pasaron al segundo estadio de su estrategia: un levantamiento revolucionario, que iba a ser provocado por una revuelta cuartelera encabezada por miembros del partido o simpatizantes de la oficialidad. La insurrección comenzó en noviembre de 1935 en Natal, capital del estado nororiental, y se extendió en pocos días a Recife y Río. Desde la perspectiva rebelde, fue un desastre. Aunque los rebeldes de Natal controlaron la ciudad durante varios días, sus camaradas de Recife y Río, que no contaban con la ventaja de la sorpresa, fueron contenidos en sus plazas fuertes y se los obligó a rendirse de inmediato.

Vargas y el ejército tenían ahora una oportunidad inmejorable para demandar el estado de sitio, que revocaría las garantías constitucionales normales. El Congreso lo votó sin demora. Investido con sus nuevos poderes de urgencia, el gobierno federal impuso duras medidas a toda la izquierda, con detenciones, torturas y juicios sumarios. Los integristas estaban regocijados. Con su principal rival eliminado, comenzaron a oler el poder. ¿Qué podía resultar más lógico para Vargas que volverse hacia el único movimiento nacional coherente de la derecha?

Se necesitaron dos años para que esa ilusión se destruyera. Plínio Salgado y sus colaboradores estaban cada vez más convencidos de que llegarían al poder en las elecciones presidenciales de 1938, si no era por otros medios. Pero Vargas tenía otras ideas. El 10 de noviembre de 1937, se dirigió a la radio y leyó el texto de otra Constitución a una nación que acababa de ser testigo de otra intervención militar. Esa mañana, había sido disuelto el Congreso y sus edificios fueron ocupados por los soldados. De este modo, Brasil entraba en el *Estado Nôvo*, un híbrido legal que combinaba elementos del Portugal de Salazar y la Italia de Mussolini. Todas las esperanzas y promesas democráticas que habían surgido desde 1930 habían desaparecido. Brasil había sucumbido a un autoritarismo de marca propia.

Sin duda, el abandono del país a la dictadura en 1937 iba con el periodo. ¿Pero había algo más que una semejanza superficial entre el *Estado Nôvo* y el fascismo europeo? ¿Dónde estaba, por ejemplo, la movilización de masas tan típica de la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini? ¿Iban a desempeñar ese papel los integristas? Muchos, tanto de dentro como de fuera del integrismo, lo pensaron sin duda.

Al igual que los nazis en 1932, los integristas debatían en 1937 no si debían entrar en el gobierno, sino *en qué términos*. Salgado, su dirigente, rechazó la tentadora oferta de Vargas de un puesto en su gabinete. Pensaba que podía aspirar a más. En la práctica, Vargas y el ejército jugaban su propio juego.

A comienzos de 1938, los camisas verdes ya estaban muy frustrados. Poco

después del golpe, el gobierno había prohibido todas las organizaciones paramilitares. El blanco evidente eran los integristas, algunos de los cuales decidieron tomar el asunto en sus propias manos. En febrero, organizaron un asalto armado a la residencia presidencial. Fue una exhibición de incompetencia militar, pero las fuerzas de seguridad presidenciales resultaron ineptas por igual. A primeras horas de la madrugada, hubo un tiroteo equilibrado en las puertas del palacio. La farsa terminó al amanecer, cuando las unidades del ejército detuvieron a los sitiadores integristas que quedaban. El gobierno endureció las medidas y el movimiento integrista desapareció cuando Salgado huyó al exilio.

Vargas podía contemplar ahora una escena política que ya no ofrecía ninguna oposición organizada. En el golpe se había elegido a sí mismo para otro mandato presidencial, que duraría hasta las elecciones programadas para 1943. Pocos se tomaron este compromiso en serio, dada la facilidad con que Vargas había abortado las que debían celebrarse en 1938. Este escepticismo estaba bien fundado. Cuando llegó 1943, Vargas anunció que la situación de guerra las hacían imposibles y siguió siendo presidente hasta octubre de 1945.

¿Cuál fue el significado de su gobierno autoritario de 1937 a 1945? En primer lugar, Vargas y sus colaboradores políticos y tecnócratas tuvieron mano libre para maniobrar con vistas a maximizar la ventaja de Brasil en un sistema mundial capitalista que se desplazaba hacia la guerra. Estaban en juego dos cuestiones centrales y relacionadas acerca de su papel internacional. ¿Quién podía ayudar mejor a los brasileños a modernizar y equipar sus fuerzas armadas? ¿Y quién podía ofrecer las condiciones más favorables para el comercio exterior?

Antes del golpe de 1937, la Alemania nazi había ofrecido condiciones atractivas en ambos supuestos. Los generales brasileños como Pedro Góes Monteiro y Eurico Dutra admiraban la maquinaria de guerra alemana y les parecían sus armas muy tentadoras. Por la misma razón, los responsables de la política económica se sentían atraídos por los términos comerciales del esquema de «divisas bloqueadas» alemán, que era una forma de trueque. Cuando Brasil vendía a los alemanes tenía que estar de acuerdo en aceptar sólo artículos alemanes como pago.

En estas negociaciones también estaban en juego estrategia e ideología. La facción proalemana de Brasil, más fuerte entre los militares, se enfrentaba a una facción pro Estados Unidos. La última sostenía que Brasil había optado por los Aliados en la primera guerra mundial y tenía más que ganar si se unía a Estados Unidos. Por ello, gran parte de la élite brasileña consideraba el flirteo con la Alemania nazi peligroso y miope.

Mientras tanto, el ejército estadounidense y el Departamento de Estado no ahorraban esfuerzos para empujar a Brasil de nuevo a la órbita hemisférica dominada por ellos. Lo lograron, pero sólo después de un tremendo esfuerzo estadounidense y de que los alemanes no le ofrecieran los armamentos que querían. A partir de entonces, Brasil se convirtió en una pieza vital

de la maquinaria de guerra aliada, al proporcionar materias primas esenciales (como cuarzo y caucho) y bases navales y aéreas que resultaron críticas en la Batalla del Atlántico. Hasta envió una división de combate a Italia en 1944, donde lucharon al lado del Quinto Ejército estadounidense.

Vargas había negociado de forma inteligente con Estados Unidos. Como pago por sus materias primas y bases, Brasil consiguió la construcción de una red de instalaciones aéreas y navales a lo largo de la costa norte y noreste. Estados Unidos también prometió ayudar a financiar la construcción de la primera acería brasileña a gran escala en Volta Redonda. Era la primera vez que un gobierno estadounidense comprometía fondos públicos para la industrialización del «mundo en vías de desarrollo».

El *Estado Nôvo* proporcionó un aparato centralizado a través del cual Vargas y sus ayudantes podían perseguir el desarrollo económico y el cambio organizativo. El gobierno federal asumió un papel emprendedor en la economía, organizando y fortaleciendo monopolios comerciales (con el cacao, café, azúcar y té) y creando nuevas empresas estatales, como la National Motor Factory (para producir camiones y motores de avión). Vargas también reacondicionó la burocracia federal, creando un sistema orientado al mérito para reemplazar la estructura de padrinazgo. Por último, una de las medidas más importantes fue un nuevo código laboral (1943) que establecía reglas para las relaciones industriales y que iba a durar hasta los años ochenta. La ley permitía que se organizasen sindicatos por planta e industria, aunque sólo de carácter local. Se prohibieron los sindicatos de ámbito estatal o nacional. Sólo se permitía uno por planta, bajo la supervisión del ministro de Trabajo, que controlaba sus finanzas y elecciones. En la práctica, los sindicatos estaban ligados al gobierno, pero los dirigentes que «cooperaban» podían salir beneficiados. Esta estructura sindical semicorporativista tenía su paralelo en otra estructura semicorporativista de empresarios. Ello proporcionaba al ejecutivo federal un mecanismo para controlar la economía. Pero el Brasil de comienzos de los años cuarenta *no* era una sociedad moderna, industrializada y urbanizada. Fuera de unas cuantas ciudades clave, la estructura corporativista dejó intacta la mayor parte del país, que era una vasta extensión desconectada y rural.

El *Estado Nôvo* también tenía su lado más oscuro. Las fuerzas de seguridad tenían casi mano libre. La tortura era rutinaria y se ejercía no sólo contra los «subversivos» sospechosos, sino también contra agentes extranjeros (los hombres de negocios alemanes eran especialmente vulnerables). La censura cubría todos los medios de comunicación y la agencia de noticias gubernamental (Departamento de Imprensa e Propaganda o DIP) proporcionaba la versión «oficial» de los hechos. Recordaba a Alemania e Italia, pero los brasileños se detuvieron muy cerca de esos extremos.

La historia económica de Brasil de 1930 a 1945 no es fácil de resumir. El café continuó siendo el principal proveedor de divisas, aunque durante la guerra le ayudó el auge de otras materias primas enviadas a Estados Unidos. El crecimiento industrial continuó en São Paulo y, en menor grado, en Río.

La guerra cortó el comercio con Europa y la mayor parte de él se dirigió ahora a Estados Unidos, cuya alianza de guerra con Brasil también dio como resultado una misión técnica a este país que recomendó programas para su desarrollo económico. De nuevo, el gobierno estadounidense apoyó el desarrollo básico brasileño como pago por la cooperación del gobierno de Vargas durante la guerra.

En 1943 Vargas había prometido elecciones, a las que no podría presentarse. A medida que continuaba la guerra, el presidente se dio cuenta de que se estaba formando una ola de opinión democrática y se anticipó a los hechos adoptando una nueva postura populista desde entonces. La clase obrera urbana fue ahora objeto de la atención del gobierno a través de medios como el programa nacionalista de radio emitido por las noches («La Hora de Brasil») y se dieron pasos para fundar un Partido de los Trabajadores. Vargas intentaba crear una nueva imagen electoral, algo que había podido descuidar en el *Estado Nôvo*.

Los hechos se sucedieron con rapidez en 1945. Vargas esperaba restar importancia al contraste entre la derrota del fascismo en Europa y la continuación del autoritarismo en el país. De inmediato desmovilizó a la fuerza expedicionaria brasileña que estaba de regreso y tenía fresco su encuentro con la Wehrmacht en Italia. En mayo de 1945, con la victoria sobre el Eje como conclusión inevitable, el gobierno de Vargas emitió un severo decreto antimonopolio con el fin de restringir el papel de las compañías extranjeras en la economía brasileña. Era parte del giro hacia el populismo iniciado en 1943. El gobierno estadounidense se molestó y puso a Vargas, y después a Juan Perón de Argentina, en su lista de presidentes latinoamericanos que debían marcharse. Había muchos brasileños que compartían esta opinión. Los constitucionalistas liberales pensaban que el capital extranjero debía ser bienvenido en Brasil y consideraban que esta cuestión podía ayudarlos a obtener el poder que pensaban haber tenido al alcance en 1937.

Había otros signos del giro hacia la izquierda de Vargas. A comienzos de 1945, decidió liberar a los presos políticos de izquierda. El más prominente era Luís Carlos Prestes, líder del Partido Comunista Brasileño que llevaba en la cárcel desde 1938. La relajación del control policial sirvió de gran ayuda al Partido Comunista, la fuerza mejor organizada de la izquierda.

La polarización se aceleró a medida que avanzaba el año. Las fuerzas contra Vargas incluían a los constitucionalistas liberales, muchos oficiales del ejército y la mayoría de las autoridades políticas de los estados. En el otro lado se encontraban populistas diversos, algunos dirigentes sindicales y la izquierda ideológica que incluía a socialistas y trotskistas, aunque los más fuertes eran los comunistas. La confrontación llegó a su clímax en octubre de 1945, cuando el ejército dio a Vargas un ultimátum: dimitir o ser depuesto. Se negó a retirarse, por lo que los militares le declararon depuesto. Entonces accedió y huyó a un exilio autoimpuesto en su rancho de Rio Grande do Sul.

La Segunda República (1946-1964)

En 1945 surgieron tres importantes partidos políticos: La UDN (União Democrática Nacional), el PSD (Partido Social Democrático) y el PTB (Partido Trabalhista Brasileiro). La UDN era una coalición de fuerzas anti-Vargas dominada por los constitucionalistas liberales. El PSD era más heterogéneo: incluía a muchas autoridades políticas y burócratas y a algunos industriales prominentes. El PBT, el menor de los tres, fue creado por Vargas en 1945, cuando seguía tratando de modelar las elecciones próximas. Se dirigía al trabajador urbano con una posición política supuestamente inspirada por el Partido Laboralista inglés. Estos tres partidos siguieron siendo los principales de Brasil hasta 1965. A menudo se los describió como carentes de ideología, personalistas y oportunistas; en resumen, no se los consideró partidos políticos modernos. Sin embargo, como sabemos por la historia estadounidense, los partidos no necesitan tener una ideología precisa para buscar y obtener el poder según modelos consecuentes.

Se habían convocado elecciones para una Asamblea Constituyente antes de la caída de Vargas y, cuando se celebraron en diciembre de 1945, resultaron ser de las más libres de la historia brasileña. El nuevo presidente electo, con un 55 por 100 de los votos, fue el general Eurico Dutra, un cercano colaborador de Vargas en el *Estado Nôvo*. El principal candidato de la oposición fue el brigadier de las fuerzas aéreas Eduardo Gomes, una vuelta atrás al constitucionalismo liberal. Obtuvo el 35 por 100 de los votos. El candidato comunista recibió el 10 por 100 de los votos, lo que animó mucho a la izquierda. El presidente Dutra y sus consejeros comenzaron a observar con detenimiento el aumento de la izquierda y sus vínculos con el movimiento obrero urbano.

En 1946, la Asamblea Constituyente elaboró otra Constitución, que recordaba a la de 1934. Hablaba de descentralización y de la vuelta a las garantías clásicas de la libertad individual. Las elecciones que designaron la Asamblea Constituyente habían sacado a la luz algunas otras tendencias. Mostraron que las maquinarias políticas tradicionales podían seguir predominando en el voto nacional. Esto resultaba poco sorprendente, ya que Brasil seguía siendo una sociedad esencialmente rural y la manipulación electoral era muy fácil en el campo. No obstante, el elevado voto comunista mostró que había otras fuerzas funcionando en la escena urbana.

Poco después de la guerra, Brasil comenzó a batallar con la cuestión de cómo financiar su desarrollo económico. La dependencia total del capital interior nunca había sido tomada muy en serio por quienes asumían las decisiones. Un resultado de su participación en la guerra había sido impulsar al gobierno hacia la planificación económica. Durante la guerra, el objetivo era maximizar la movilización, pero la misma consideración podía aplicarse al desarrollo económico en tiempos de paz. En lugar de ello, el gobierno de Dutra (1946-1951) desecharon la planificación y volvió a la dependencia de las ex-

portaciones de café, invalidando la mayoría de las medidas tomadas por Vargas para estimular la industrialización. Esta política hizo a Brasil de nuevo vulnerable a los cambios en la demanda mundial de café.

En el frente político, el régimen de Dutra decidió pronto reprimir a la izquierda. El Partido Comunista, legalizado en 1946, había mostrado una fortaleza sorprendente en São Paulo y Río de Janeiro. Los sindicatos de trabajadores, a pesar de la estructura legal corporativista, en la práctica estaban logrando autonomía, para preocupación de empresarios y políticos conservadores. Washington estaba siguiendo muy de cerca estos acontecimientos, que tenían paralelos en otras partes de América Latina. Como ocurriría un año más tarde en Chile, el Congreso brasileño, a comienzos de 1947, votó para revocar la legalidad del Partido Comunista. La policía ocupó sus oficinas y se incautó de sus publicaciones. El Ministerio de Trabajo intervino en cientos de sindicatos obreros y detuvo o despidió a sus cargos, nombrando a paniaguados del gobierno en su lugar. Los años de 1945 a 1947 resultaron ser una reposición de 1930-1935: apertura política, luego una explosión de activismo de izquierdas, que llegó al clímax mediante la represión policial. Desde entonces, la izquierda fue proscrita y los candidatos del Partido Comunista tuvieron que recurrir a disfraces electorales.

Vargas no había aceptado su salida en octubre de 1945 como el fin de su carrera. Sólo dos meses después, fue elegido senador por dos estados y eligió representar a Rio Grande do Sul. Durante la presidencia de Dutra, Vargas trabajó constantemente para mantener su visibilidad nacional y no perder sus contactos políticos. Pronto sus amigos y aliados le incitarían a que se presentara como candidato a la presidencia. No se necesitó mucho para convencerlo.

En la campaña presidencial de 1950, Vargas fue apoyado por la mayoría del PSD y el PTB. Su principal oponente fue el antiguo *teniente* Juarez Távora, que se presentaba bajo la bandera de la UDN. También había un candidato escindido del PSD. Vargas desarrolló una campaña inteligente y atacó al régimen de Dutra por descuidar el crecimiento económico y favorecer a los ricos. No obstante, su posición era lo suficientemente moderada como para atraer a los terratenientes cuyos votos controlaba en estados como Minas Gerais. Ganó por mayoría (48,7 por 100) y comenzó su tercera presidencia, la única que obtuvo por elección popular.

Al regresar al poder por votación popular, Vargas invirtió la victoria que sus rivales, en especial los constitucionalistas liberales, habían obtenido en 1945. Los había vencido en el juego que pensaban suyo y explotaron, algunos incluso pidieron que el ejército impidiera el regreso del dictador. Pero no tuvo ningún efecto.

Vargas hizo de la política económica su mayor prioridad y de inmediato reunió un equipo de jóvenes tecnócratas: ingenieros, economistas y proyectistas. Formularon una estrategia ecléctica diseñada para maximizar la entrada de capital y tecnología de fuentes públicas y privadas exteriores. Las perspectivas parecían favorables. En 1949, los gobiernos brasileño y estadounidense habían emprendido un estudio conjunto sobre la economía brasile-

ña. Su informe de 1953 destacaba la energía inadecuada y el transporte deficiente como los principales obstáculos para un desarrollo económico rápido. El gobierno estadounidense manifestó interés en canalizar fondos públicos para invertir en esas áreas, y el gobierno brasileño creó nuevos organismos federales para que se ocuparan de los proyectos de inversión en perspectiva.

La estrategia económica de Vargas también tenía su lado nacionalista. Las remisiones de beneficios de las empresas de titularidad extranjera eran un blanco frecuente para el ataque nacionalista. En 1951, las remisiones eran elevadas, impulsadas por la creciente revalorización de la moneda brasileña (que aumentaba de forma progresiva el valor de los ingresos de las compañías en dólares estadounidenses). En 1952, Vargas denunció a las empresas extranjeras y amenazó con nuevos controles. Pero la medida se aminoró y retiró su intento de imponer controles generales.

Otro blanco de los nacionalistas era el petróleo. Desde finales de los años treinta, Brasil venía trabajando en una política petrolera nacional. Argentina y México ya habían optado por el monopolio estatal. En ambos casos, el sentimiento nacionalista era una potente fuerza política. Por toda América Latina se miraba a las compañías petroleras internacionales con una gran sospecha y Brasil no era diferente. En 1951, Vargas propuso una corporación mixta pública y privada (que se llamaría Petrobras) para monopolizar la exploración y la producción de petróleo.

La propuesta desató el debate político más candente desde 1945. El nacionalismo resultó ser muy fuerte, en especial entre los oficiales del ejército. Surgieron agrias controversias, en las que los defensores del monopolio estatal cuestionaban el patriotismo de los que abogaban por la empresa libre, y viceversa. En 1953, el Congreso creó un monopolio aún más fuerte que el propuesto por Vargas. Como el debate había polarizado hasta tal punto la opinión, se había reducido el espacio para la maniobra política.

Vargas había sido elegido en 1950 sobre una plataforma moderada y la alineación del partido en el Congreso le requería mantener esa trayectoria. Pero la presión económica le forzaba a tomar duras decisiones. En primer lugar, la tasa de inflación subió de un 11 por 100 en 1951 a un 20 por 100 en 1952. En segundo lugar, el balance comercial externo se colocó en números rojos. Por último, el presidente estadounidense elegido en 1952, Dwight Eisenhower, puso en tela de juicio los acuerdos crediticios que, según los brasileños, Estados Unidos había establecido con el Comité Conjunto para apoyar las inversiones en infraestructura.

Todos estos contratiempos proporcionaron municiones a los enemigos de Vargas, tanto de la izquierda como de la derecha. La primera le acusó de venderse a los imperialistas, que querían que Brasil mantuviera su papel de exportador de materias primas. La derecha, por su parte, le acusó de estarse deshaciendo de los asociados comerciales y acreedores extranjeros de los que debían depender. Los brasileños más conscientes se hallaban entre ambos extremos. No obstante, las presiones económica y política dificultaban la moderación y preveían peligro para Vargas y su gobierno.

En 1953, Vargas reorganizó su gabinete para hacer frente a la crisis económica. La inflación y el déficit en la balanza de pagos eran problemas relacionados porque Brasil había mantenido un tipo de interés sobrevalorado que, combinado con su inflación, había hecho que las importaciones fueran más baratas y las exportaciones más caras. Se necesitaba con urgencia un programa de estabilización económica, lo que, a corto plazo, significaría la reducción de los salarios reales y un control estricto de los créditos y el gasto público. Esta política estaba condenada a ser impopular.

Para dirigir este esfuerzo, Vargas llamó a Oswaldo de Aranha, su antiguo lugarteniente político, como ministro de Economía. Éste siguió las medidas clásicas de estabilización, que obtuvieron un éxito aparente en 1953. Sin embargo, según se fue acercando 1954, se vislumbró una dura pelea sobre las medidas salariales. Bajo el *Estado Nôvo*, el Ministerio de Trabajo fijaba el salario mínimo, que no había aumentado durante varios años, a pesar de la inflación acelerada. El objetivo de Aranha era evitar un aumento tan grande que hundiera el programa antiinflacionista, para lo cual tenía que negociar con el ministro de Trabajo, João Goulart, un joven político del PTB y protegido de Vargas de Rio Grande do Sul, que estaba muy identificado con la izquierda de su partido y los dirigentes sindicales.

En 1954 Aranha y Goulart empujaban en direcciones diferentes: el primero hacia la austeridad y el segundo hacia una senda populista y redistribucionista. Vargas tenía que tomar la decisión final. En febrero, pareció optar por la austeridad de Aranha y cesó a Goulart. La izquierda, fortalecida por su éxito en la lucha por la política petrolera, atacó a Vargas por complacer a los imperialistas con su programa de estabilización. Éste aclaró el ambiente el primero de mayo de 1945, cuando anunció un incremento del 100 por 100 en el salario mínimo, más incluso de lo que Goulart había recomendado.

Esta batalla se unió a una crisis política mayor. Los enemigos más acérrimos de Vargas habían encontrado un asunto con el que pensaron vencerlo: la corrupción. Empezaron a emerger pruebas de escándalos financieros. Los propagandistas anti-Vargas cerraron filas contra el desgastado presidente. Sin su conocimiento, el jefe de seguridad de su palacio había concertado un intento de asesinato de Carlos Lacerda, periodista sensacionalista que estaba a la cabeza del ataque contra Vargas. La bala que le destinaban mató a un oficial de las fuerzas aéreas que se había ofrecido como guardaespaldas voluntario del periodista, que sólo sufrió una herida menor. Esta muerte hizo que el estamento militar entrara en la crisis. Cuando su investigación apuntó al palacio presidencial, los mandos militares pidieron la renuncia de Vargas. Al darse cuenta de que estaba atrapado y solo, se disparó al corazón el 24 de agosto, dejando una carta incendiaria en la que culpaba de su fracaso a fuerzas siniestras, internas y extranjeras, y proclamaba su postura nacionalista. Con esta salida sensacional, Vargas exigía venganza de quienes le habían atormentado. Lacerda tuvo que huir de Brasil y los contrarios a Vargas, en especial los de la UDN y el ejército, se pusieron a la defensiva.

Brasil tuvo gobiernos interinos hasta que en 1956 asumió el cargo Jusce-

lino Kubitschek, elegido para un mandato presidencial pleno en 1955. Para la sorpresa de sus seguidores y adversarios, logró llegar a término. Era un político entusiasta del PSD que anteriormente había sido gobernador de Minas Gerais y tenía fama de hacer muy buenas campañas políticas. Aunque obtuvo la presidencia con sólo el 36 por 100 de los votos, de inmediato trató de ganar un apoyo más amplio.

Sin perder de vista la frecuencia con que los militares habían intervenido en política, los apaciguó con importantes compras de armas. También tuvo la fortuna de tener como ministro de Guerra al general Henrique Teixeira Lott, que disfrutaba de gran prestigio entre los oficiales y que resultó ser muy leal al presidente. En el Congreso tenía una coalición efectiva del PSB y el PTB. Por último, el programa de desarrollo económico, más la audaz idea de construir una nueva capital, Brasilia, en el interior, se combinaron para generar un entusiasmo que amortiguaron los agrios conflictos políticos de mediados de los cincuenta.

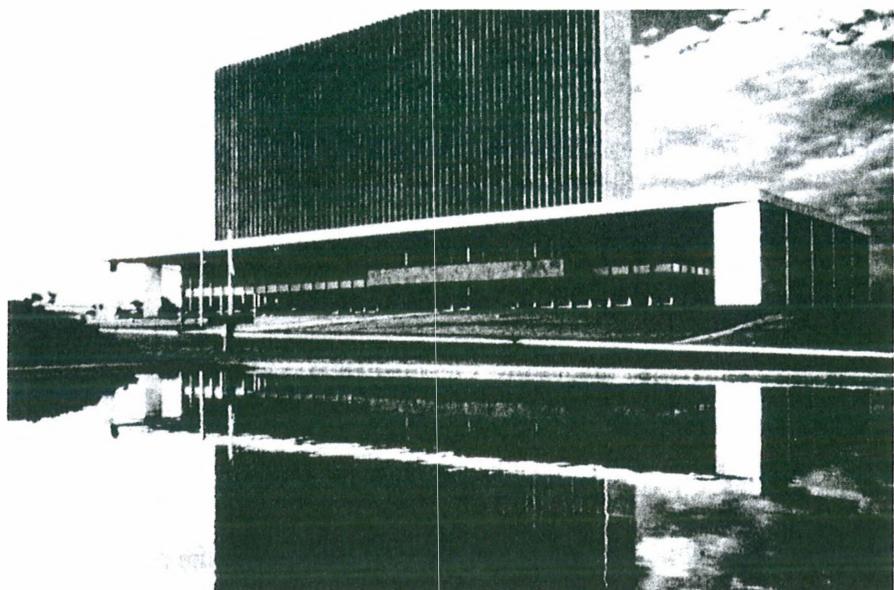
(La ciudad futurista de Brasilia, levantada de la nada en cuatro años sobre la meseta sin ningún desarrollo situada a 940 km de Río de Janeiro, la antigua capital, también cautivó la imaginación del mundo exterior. André Malraux la llamó «la capital de la esperanza». El presidente Eisenhower fue uno de los muchos jefes de Estado que asistieron a su inauguración en 1960. Brasil era conocido ahora en el mapa mundial por la atrevida, y a veces controvertida, planificación urbana y el desarrollo arquitectónico de Brasilia.)

El éxito político de Kubitschek se debió en no poca medida a su talento. Demostró gran habilidad política para orquestar la coalición que sostenía su Gobierno. Su lema había sido «cincuenta años de progreso en cinco» y el salto económico hacia adelante fue impresionante.

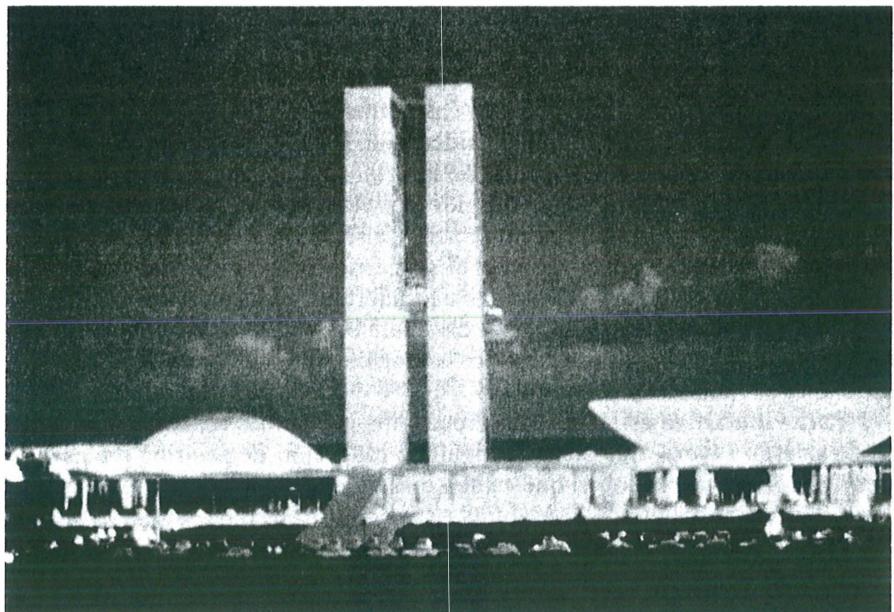
No obstante, hubiera sido demasiado esperar que su estrategia política durara para siempre. La alianza PSD-PTB en el Congreso se estaba deshaciendo, la discordia creciente entre el estamento militar impidió que el general Lott repitiera su función y la economía volvió a ser inflacionaria y a presentar déficit en la balanza de pagos. Kubitschek trató de conseguir la estabilidad económica durante 1958-1959, pero la desecharó cuando el FMI demandó medidas de austeridad que habrían impedido a Brasil alcanzar sus «objetivos» económicos. Siguió presionando con el programa económico, lo cual creó problemas mayúsculos a su sucesor. Cuando dejó el cargo en enero de 1961, nadie dudaba de que tenían encima un arreglo de cuentas con los acreedores extranjeros.

El presidente que heredó este desafío fue Jânio Quadros, uno de los políticos brasileños más inteligentes pero más quebradizos. Después de haber obtenido un éxito arrollador como gobernador de São Paulo, ganó con fuerza en las elecciones presidenciales de 1960, a las que se había presentado con el apoyo de la UDN. Su campaña eligió la escoba como símbolo de su lucha contra la corrupción. Este discurso animó a los constitucionalistas liberales, que creyeron que al fin tenían cerca el poder.

Quadros comenzó abrazando un programa de estabilización severo,



La deslumbrante capital de Brasilia exhibe una arquitectura modernista extraordinaria. *Arriba*, la sede del gobierno federal; *abajo*, el palacio legislativo, cuyas torres gemelas y edificios albergan las dos cámaras del Congreso nacional. (Cortesía del Consulado General de Brasil, Nueva York.)



mientras que al mismo tiempo lanzaba una «política exterior independiente», que intentaba abrir nuevas oportunidades en el campo socialista. Sin embargo, tras siete meses de mandato idiosincrásico, presentó una renuncia inesperada en agosto de 1961. Sus razones nunca se han explicado por completo, pero parece que esperaba que el Congreso la rechazara y le ofreciera mayores poderes. Estaba equivocado, ya que la aceptó de inmediato. Quadros, el político populista más carismático de Brasil, se desvaneció en el retiro, interrumpido por ocasionales declaraciones proféticas.

Ante ello, se sintieron desmoralizadas las facciones opuestas a Vargas y otros brasileños que habían creído que sus promesas moralistas y su éxito administrativo en São Paulo presentaban buenos augurios para el nuevo gobierno federal. Desde la perspectiva de la UDN, lo peor de todo era que su salida significaba que ahora el poder pasaría al vicepresidente electo, el antiguo ministro de Trabajo de Vargas, João Goulart, epítome del populismo y anatema para los militares conservadores.

El ejército no aceptó de buen grado la sucesión de Goulart a la presidencia, pero los oficiales «legalistas» apoyaron que se observara la Constitución y se llegó a un compromiso. El Congreso creó un sistema parlamentario en el que Goulart era presidente, pero estaba obligado a gobernar mediante un gabinete que rendía cuentas ante aquél. Era un híbrido que no podía funcionar y cuya única misión era reducir el poder presidencial. El nuevo presidente asumió sus poderes disminuidos en septiembre de 1961 e inició de inmediato una campaña para conseguir la revocación de la innovación parlamentaria. Enero de 1963 le brindó el éxito, cuando un plebiscito restauró el sistema presidencialista pleno. Para entonces, a Goulart le restaba un tiempo precioso de su mandato presidencial de 1961-1966.

Su presidencia resultó no tener buena estrella desde el comienzo. Las condiciones le eran desfavorables en casi todos los ámbitos, pero las empeoró con su inexperiencia, debilidad e indecisión. En 1963 resultaba aún más difícil manejar la inflación y el déficit de la balanza de pagos. Goulart eligió su propio equipo de estabilización, dirigido por el brillante intelectual y político Santiago Dantas y el notable economista Celso Furtado. Dantas elaboró un plan detallado, que se negoció con el gobierno estadounidense y el Fondo Monetario Internacional. Demandaba lo habitual: reducción del déficit público, severos controles salariales y disminuciones de crédito. Era la misma medicina que se había utilizado en los esfuerzos estabilizadores de 1953-1954, 1955-1956, 1958-1959 y 1961.

Para Goulart, la estabilización presentaba problemas especiales. Una política salarial severa, que siempre significa reducción de salarios reales, golpearía al grupo social con el que estaba más comprometido. Además, cumplir los duros términos de los acreedores externos invitaría al ataque de los nacionalistas, que también se hallaban entre sus principales seguidores. ¿A qué extremo debía sacrificar su magro capital político? Aunque pudiera lograr la estabilización, su mandato terminaría probablemente antes de que Brasil pudiera reanudar el crecimiento económico.

A pesar de las sombrías perspectivas, Goulart decidió apoyar el plan de Dantas-Furtado, pero no por mucho tiempo. En pocos meses, el coste político se había vuelto demasiado evidente. Dantas renunció en silencio, Furtado ya había abandonado Brasilia y a partir de entonces cualquier otro esfuerzo serio de estabilización fue imposible.

La estabilización no era la única preocupación de Goulart. Desde 1961, la escena política brasileña estaba caldeada por las opiniones apasionadas de izquierda y derecha. El ejército, como siempre, era un factor clave. Algunos de los oficiales que habían luchado contra el acceso al poder de Goulart en 1961 seguían activos y habían iniciado una conspiración para derrocarlo. Muchas de las ideas y de las personas inmersas en la conspiración provenían de la intriga militar contra Vargas de 1954. Lo que aumentó firmemente la fuerza de los conspiradores fue el tono cada vez más radical de los contendientes políticos.

La izquierda del espectro político estaba muy llena. Un sentido de confianza emergente había prendido en los nacionalistas radicales, que incluían a maestros de alfabetización católicos, militantes de sindicatos obreros, organizadores estudiantiles trotskistas y artistas idealistas, todos ellos extendiendo un mensaje revolucionario por la cultura popular y por las formas de arte «elevadas». A comienzos de 1964, la izquierda radical había obtenido la bendición del gobierno y a menudo su financiación y apoyo logístico.

Los progresos del nacionalismo exasperaban a los conservadores de dos grupos. Uno de ellos era el ejército. Era tradicional que los soldados brasileños disfrutaran sólo de derechos políticos restringidos y el voto no estaba entre ellos. Los radicales comenzaron a organizarse entre estas filas «descuidadas» hasta el punto de abogar por su sindicalización. Esto escandalizó a la oficialidad, que no estaba dispuesta a aprender sobre negociación colectiva. Hasta los oficiales centristas podían darse cuenta de esta amenaza.

El otro ámbito de movilización nuevo era el campo. En 1963, se legalizó la sindicalización rural y distintos grupos, que incluían varios de izquierda, compitieron por lograr el apoyo de los sindicatos locales. No obstante, el sector rural era una arena poco prometedora para que la izquierda brasileña probara su poder. Siempre había exceso de mano de obra y los latifundistas tenían mano de hierro. Esta campaña de sindicalización rural, combinada con algunas invasiones de tierras, provocó a los terratenientes para realizar acciones decisivas, así que presionaron a los políticos en su favor, que eran muchos en un Congreso federal que infrarrepresentaba a los distritos rurales.

Aunque la oposición de Goulart había hecho impacto en el Congreso a mediados de 1964, no tuvieron los votos suficientes para inhabilitarlo, ya que seguía operando la antigua alianza entre el PSD y el PTB. No apoyaría un programa de estabilización, pero tampoco estaba dispuesta a ser utilizada por los conspiradores. A éstos sólo les quedaba un camino: un golpe militar.

Los consejeros militares del presidente le habían alertado sobre la conspiración, pero le aseguraron que sólo participaba una parte minoritaria de la oficialidad, lo que quizás fuese verdad, pero estaba cambiando con rapidez.

En ese momento, hasta los oficiales centristas se sentían inclinados al golpe. El principal factor que los empujaba era el paso radical hacia la izquierda del presidente o de los que lo controlaban.

El gobierno estadounidense estaba muy interesado por la confrontación política que surgía en Brasil. Tanto su embajador, Lincoln Gordon, como el agregado militar, general Vernon Walters, estaban en contacto estrecho con los conspiradores, fueran civiles o militares. Estados Unidos tenía un plan de contingencia para apoyar a los rebeldes con combustible y armas si era necesario, pero no lo fue. El 31 de marzo, terminaron las especulaciones cuando una revuelta militar, que estalló primero en Minas Gerais, se extendió por todo el país. En veinticuatro horas João Goulart había huido al exilio en Uruguay.

El primero de abril, el presidente del Congreso, en ausencia de Goulart, declaró vacante la presidencia. Aunque este acto carecía de toda base legal, el Congreso lo confirmó. A ese vacío de poder accedieron los conspiradores militares y sus aliados civiles. Brasil optaba una vez más por el camino autoritario hacia el desarrollo.

Visto con perspectiva, el fracaso de la democracia brasileña (tal como fue) mantuvo una estrecha conexión con la interacción de las relaciones de las clases sociales. Las medidas populistas de Getúlio Vargas construyeron un orden jerárquico mediante el cual el Estado creaba y controlaba las instituciones para organizar a los trabajadores urbanos. Esto supuso un reto significativo pero que acabaron aceptando las clases altas y medias, la última representada en gran medida por el ejército. Pero en 1964 Goulart presentó o pareció presentar una amenaza más fundamental. Al movilizar a los campesinos y a los obreros, y utilizar una retórica radical, parecía estar creando las condiciones para una amplia alianza de clase entre éstos contra el orden socio-económico establecido. El carácter repentino y la simultaneidad de estos movimientos asombraron y alarmaron a las élites y los observadores, que rechazaron las perspectivas de unas alteraciones de carácter comunista de tan largo alcance en la estructura política del país. No resultaba aceptable una coalición de clases amplia. El ejército utilizó su antiguo poder de voto y volvió a crear un régimen burocrático-autoritario.

El gobierno militar

Los conspiradores de 1964 se quedaron sorprendidos de la celeridad con la que se derrumbó el gobierno de Goulart. Los nacionalistas radicales, tan confiados en su movilización, se encontraron sin seguidores. El ministro de Justicia convocó una huelga general el primero de abril, pero la respuesta fue mínima. El zigzagueo del presidente y las divisiones internas de la izquierda habían socavado todo apoyo popular efectivo. Los rebeldes encontraron poca o ninguna resistencia cuando sus tropas se hicieron con el mando del gobierno.

De 1964 a 1985 Brasil fue gobernado por una sucesión de regímenes autoritarios, cada uno de ellos con un general de cuatro estrellas a la cabeza.

A pesar de las variaciones de estructura y personal, todas fueron coaliciones de mandos militares, administradores tecnócratas y políticos de línea antigua.

El grupo más importante era el de los militares. Los oficiales de las fuerzas armadas habían contado con una larga historia de intervenciones en la política desde la caída del imperio. Estaba el régimen militar de Floriano Peixoto (1891-1894) y después las intervenciones militares en política de 1910-1914, seguidas por las revueltas de los oficiales jóvenes en 1922 y 1924. En 1930, el ejército puso fin a la Antigua República entregando el poder a Vargas, a quien mantuvieron en él con el golpe de 1937, sólo para deponerlo en 1945. Fue un manifiesto popular el que lo llevó al suicidio en 1954 y fue un golpe «preventivo» en 1955 el que aseguró la sucesión de Kubitschek a la presidencia. Por último, el ejército lideró la lucha contra la sucesión de Goulart a la presidencia en 1961 y luego conspiró para derrocarlo en 1964. Todos consideraban a la oficialidad del ejército como actores vitales de la política brasileña.

En los años siguientes a 1945, el cuerpo de oficiales había sido amortiguado por corrientes políticas en conflicto. Los años cincuenta llevaron a una polarización entre las posiciones nacionalistas y anticomunistas. Los primeros favorecían las soluciones estatistas en sectores económicos clave (como el petróleo) y una independencia relativa en política exterior (muy en contra, por ejemplo, de enviar tropas para combatir en Corea junto con Estados Unidos). Como su etiqueta indicaría, los anticomunistas se identificaban con Estados Unidos en la agudización de la guerra fría y consideraban a la izquierda nacionalista un disfraz para los pro castristas o comunistas.

La opinión de la oficialidad giró de forma decisiva contra los populistas, de quien Goulart era el ejemplo principal. La falta de capacidad de su gobierno para controlar la economía (Brasil estuvo a punto de incumplir sus compromisos con los acreedores extranjeros en marzo de 1964); la movilización de los sectores bajos y la amenaza directa a la jerarquía militar empujaron a los militares centristas a apoyar el golpe. A comienzos de 1964, la conspiración estaba dirigida por el general Humberto Castello Branco, el jefe militar firmemente legalista que había apoyado la sucesión de Goulart a la presidencia en 1961.

Una vez que el ejército hubo depuesto a Goulart, los conspiradores se enfrentaron con una nueva cuestión: la forma y dirección del nuevo gobierno. Los de línea dura sostenían que la democracia brasileña había sido corrompida por políticos aprovechados y subversivos. El país necesitaba una larga recuperación, que requeriría medidas tales como purgar a los legisladores, suprimir las elecciones directas y despedir a los funcionarios civiles. Sus ideas económicas eran menos fáciles de discernir. Sin duda, detestaban el nacionalismo radical y el populismo.

Los militares moderados componían otro grupo. Creían que un intervalo relativamente breve de reorganización administrativa y económica podría devolver a Brasil a la democracia electoral puesta en peligro por los políticos irresponsables. Les inquietaba la violación de los principios democráticos y constitucionales, y esperaban un rápido retorno a la normalidad legal.

El general Castello Branco fue elegido sin demora por el Congreso (expurgado) como nuevo presidente y ocupó el puesto hasta 1967. Consideró la estabilización económica como la prioridad principal de su gobierno. La necesidad inmediata era controlar la inflación y mejorar la balanza de pagos. Roberto Campos, diplomático y economista conocido, fue nombrado ministro de Planificación y se convirtió en la figura dominante de la política económica. Se redujo la inflación, pero mucho menos de lo que se había esperado, y se logró un superávit en las cuentas con el exterior, debido fundamentalmente a que la recesión inducida por el gobierno redujo en gran medida la demanda de importaciones. El equipo de Campos también intentó reorganizar y actualizar las principales instituciones económicas brasileñas. Se reacondicionó el sistema bancario (se creó por fin un banco central propiamente dicho), se institucionalizaron por primera vez un mercado de valores y un mercado de valores públicos, se revisaron los reglamentos laborales para facilitar el despido y se simplificaron los reglamentos de la exportación. Campos venía sosteniendo desde hacía mucho tiempo que el capitalismo no había fracasado en Brasil puesto que ni siquiera se había intentado. Y ahora era su oportunidad. Los resultados a corto plazo fueron desalentadores, pero Castello Branco y Campos no desesperaron; sus esfuerzos resultaban impopulares, pero indispensables para lograr un crecimiento firme en el futuro.

El tan ansiado repunte económico no ocurrió en 1965-1966, por lo que Castello Branco se dejó persuadir para extender su mandato presidencial un año más, con la esperanza de que la economía mejorase. De hecho, los problemas económicos del país no se resolverían ni siquiera en dos años y medio más.

El segundo gobierno militar, el del presidente Artur da Costa e Silva (1967-1969), dio un giro desagradable a la política. El presidente esperaba encabezar una liberalización, pero los hechos resultaron distintos. Hasta 1967, el gobierno autoritario había mostrado una tolerancia considerable con la oposición, al menos en comparación con los gobiernos militares de América Latina de los años sesenta y setenta. Pero la tolerancia invitó a la movilización. En 1967 y 1968 la oposición organizó una serie de protestas, que llegaron al punto máximo en las manifestaciones masivas de Río.

Los militares de línea dura, que ahora se oponían a cualquier compromiso entre la democracia y un gobierno «duro», sostuvieron la necesidad de aplicar medidas drásticas. En noviembre de 1968, una serie de huelgas industriales en Minas Gerais se extendieron al núcleo industrial de São Paulo. El gobierno de Costa e Silva vaciló y luego reaccionó reprimiendo con dureza a los huelguistas. Se estableció un modelo: un gobierno autoritario que recurría a medidas dictatoriales para poner en práctica su versión de crecimiento económico rápido. Era una estrategia de crecimiento basada en la represión de los sindicatos obreros, contratación ávida de inversión extranjera y altas recompensas para los responsables económicos.

En 1969 Brasil fue golpeado por nuevos brotes de violencia política. La oposición militante había desarrollado una red de guerrillas, principalmente

en las ciudades. En septiembre de 1969, el presidente Costa e Silva sufrió un golpe debilitador y las guerrillas aprovecharon la ocasión para secuestrar al embajador estadounidense, al que después liberaron cuando el gobierno accedió a excarcelar a quince prisioneros políticos y a publicar un manifiesto político en todos los medios de comunicación. Durante los cuatro años siguientes, Brasil experimentó la guerra de guerrillas. Un pequeño cuadro de activistas revolucionarios secuestraron a diplomáticos extranjeros y los mantuvieron como rehenes para canjearlos por otros revolucionarios que estaban en prisión. La guerrilla también quería arrastrar al gobierno a una represión más sistemática, para alejar más al pueblo de él.

En 1973 el movimiento guerrillero estaba vencido. Había agotado sus recursos humanos para lograr magros resultados. Rescató a varios camaradas revolucionarios de la prisión y la tortura, pero, al hacerlo, reforzó el aparato represivo e hizo creíbles los argumentos de los militares de mano dura acerca de que cualquier apertura política significaba la guerra civil.

Cuando el general Ernesto Geisel asumió la presidencia en 1974, repitió las esperanzas de los anteriores moderados acerca de un retorno a la democracia y la legalidad. Un obstáculo importante era el aparato de seguridad, formado por unidades militares y civiles, que habían logrado una gran influencia dentro del gobierno. Sus desagradables métodos, incluida la tortura, habían facilitado la liquidación de la oposición revolucionaria, pero les había otorgado un poderoso veto sobre la liberalización.

El compromiso para la redemocratización del presidente Geisel provenía de sus estrechos vínculos personales con la tradición legalista de Castello Branco. No consideraba este proceso una respuesta a la presión, sino el resultado de un compromiso democrático inherente en la intervención militar de 1964.

Su problema fundamental, y el de todos los gobiernos militares que le habían precedido, era la imposibilidad de ganar unas elecciones populares libres, lo cual habría carecido de importancia si el ejército no se hubiera tomado las reglas democráticas tan en serio. Pero lo hicieron y el resultado fue una serie interminable de improvisaciones democráticas para hacer que los resultados de las votaciones se adecuaran a sus preferencias. La profundidad del problema se mostró en octubre de 1974, cuando el nuevo gobierno, en contraste con su predecesor, permitió unas elecciones al Congreso relativamente libres. El resultado fue una victoria aplastante para el partido de la oposición. La lección estaba clara: si se le dejaba elegir, la población, en especial en los centros urbanos industrializados, votaría contra el gobierno.

Desde 1967, la economía brasileña volvió a la senda del crecimiento, duplicando el récord de los años cincuenta. De 1968 a 1974, la tasa de crecimiento medio fue del 10 por 100 y las exportaciones se cuadruplicaron. Como para marcar el final de un periodo, los productos manufacturados reemplazaron al café como exportación más importante del país. Los observadores extranjeros empezaron a hablar del «milagro brasileño». Se había conseguido mediante salarios bajos y crédito fácil para los compradores de bienes duraderos. F

Pero el «milagro» comenzó a desvanecerse a finales de la década. En 1980, la inflación era superior al 100 por 100 y Brasil se enfrentaba a un serio y creciente déficit en su balanza de pagos internacional. La deuda exterior aumentaba y la producción industrial se debilitaba. Además, los sindicatos de la industria estaban agitados en São Paulo y habían protagonizado una serie de huelgas en 1978, 1979 y 1980. La Iglesia, en la persona del cardenal Arns, apoyaba a los huelguistas y hacía hincapié en la desproporción de la cuota de sacrificio que habían soportado durante el «milagro». Debido a la crisis de la balanza de pagos, el gobierno se vio forzado a provocar una recesión en 1981, lo que naturalmente fue impopular, cuando el desempleo empezó a extenderse en el núcleo industrial de São Paulo. En 1982, el ministro de Planificación, Delfim Neto, y el resto de los responsables políticos esperaron impulsar una recuperación económica, sobre todo porque iba a ser un año de elecciones.

Sus esperanzas se vieron pronto frustradas por la recesión mundial, que deprimió el valor de las exportaciones brasileñas, mientras que las altas tasas de interés mantenían el coste del servicio de la deuda externa en unos niveles de inestabilidad. A finales de 1982, Brasil había logrado el dudoso honor de tener la mayor deuda externa del mundo (87.000 millones de dólares, aunque muchos observadores pensaban que sus obligaciones a corto plazo sumaban un total de más de 100.000 millones de dólares) y, al igual que Argentina y México, debía suspender los pagos del principal. Para obtener los «créditos puente» esenciales para cumplir las obligaciones inmediatas, Brasil aceptó un plan económico elaborado por el FMI que conllevaba una drástica reducción de importaciones para obtener un superávit comercial.

De la liberalización a la redemocratización

Estas desoladas perspectivas económicas significaban un problema para el proceso de «redemocratización» iniciado durante los años de la presidencia de Geisel (1974-1979). Tras varios comienzos fallidos, el presidente João Figueiredo (1979-1985) se esforzó mucho por cumplir la promesa de celebrar elecciones directas en 1982. Por primera vez desde 1965, Brasil elegía de forma directa todos los gobernadores estatales en noviembre de 1982. También fueron elegidos todos los diputados federales, un tercio de los senadores federales y casi todos los alcaldes, representantes estatales y concejales locales. La oposición, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), obtuvo una victoria aplastante en la mayoría de los estados desarrollados, logrando el gobierno de São Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais. El partido gubernamental, el PSD, perdió el control de la Cámara de Diputados, pero lo retuvo en el colegio electoral, que elegiría el nuevo presidente en 1985.

Esa elección se llevó a cabo de un modo muy brasileño. El candidato del partido de la oposición (PMDB) era Tancredo Neves, un hábil político de la vieja escuela de Minas Gerais, que comenzó reafirmando su moderación a los

militares. Mientras tanto, Paulo Maluf, el candidato del partido gubernamental (PDS) y antiguo gobernador de São Paulo, se alejaba a su partido por su dura campaña. Como consecuencia hubo suficientes delegados del colegio electoral que lo abandonaron para elegir a Tancredo.

Éste no vivió lo suficiente para cumplir las grandes esperanzas depositadas en él. La víspera de su toma de poder sufrió una operación intestinal de urgencia de la que nunca se recuperó. El antiguo senador José Sarney, vicepresidente electo, fue presidente. Irónicamente, el primer presidente civil brasileño en veintiún años era un antiguo líder del PSD y pilar del régimen militar. Él también había abandonado el partido para presentarse con Tancredo.

Si era elegido, Tancredo había prometido atacar los múltiples males sociales y económicos. Un paso en esa dirección sería terminar con la manipulación del movimiento obrero urbano mediante la estructura semicorporativista que Vargas había erigido. Los esfuerzos gubernamentales por reformularla se atascaron en el fuego cruzado de empresarios y los nuevos dirigentes sindicales más militantes. Mientras tanto, los huelguistas seguían enfrentándose a la policía represiva, que al menos era menos brutal que durante el periodo de los regímenes militares.

Otro problema socioeconómico clave era la gran desigualdad en la posesión de la tierra. El gobierno de Sarney anunció un objetivo ambicioso y poco realista de redistribuir millones de hectáreas a los desposeídos del campo. Éstos solían estar liderados por el clero católico que a veces organizaba invasiones de tierras. Los latifundistas respondieron con una campaña iracunda (y en algunos casos contrataron pistoleros) y el programa casi murió.

Lo mejor que podría decirse de la presidencia de Sarney es que los militares permanecieron al margen y que el presidente se comprometió con la redemocratización. La economía puso a los brasileños en una montaña rusa. La inflación había alcanzado el 227 por 100 en 1985 pero bajó drásticamente con la congelación salarial de 1986. Al arranque del crecimiento económico en 1985-1987 le siguió el estancamiento. El gobierno de Sarney había terminado con una orgía inflacionaria. La escena estaba lista para algún nuevo líder, capaz de aportar nuevas soluciones a los urgentes problemas de Brasil.

La nueva figura fue Fernando Collor de Mello, un joven y desconocido (ex gobernador del depauperado estado de Alagoas, en el noreste. Organizó una campaña televisiva dispendiosamente financiada dirigida a más de los tres cuartos de hogares brasileños con televisores. Su principal contrincante en la campaña de 1989 fue el antiguo líder sindical Luis Ignácio Lula da Silva («Lula»). Collor ganó en la segunda vuelta, aunque el porcentaje del voto para Lula (47 por 100) había alcanzado un nivel sin precedentes para la izquierda.

A mediados de 1991, después de quince meses de gobierno, Collor había resultado ser un amargo desengaño. Comenzó, a lo Jânio Quadros, con un estilo muy autocrático, y una arrogancia personal que no encajaba en la política brasileña. Hay que reconocer que su tarea se hacía más difícil porque afrontaba un parlamento extremadamente fraccionado.

Collor decidió apostar por la estabilización económica. Desafortunadamente, su programa se basaba en trucos de corto plazo tales como el congelamiento de activos financieros y la inmediata abolición de la indexación. Ambos mostraron su ineffectividad al cabo de unos pocos meses. Collor también ordenó el despido masivo de funcionarios públicos, con la esperanza de reducir el hinchado gasto gubernamental y obtener una mejora fiscal. Los despidos fueron rápidamente revocados con el fundamento de que la estabilidad laboral estaba respaldada constitucionalmente. Hacia inicios de 1991, el plan de estabilización se había desintegrado. La inflación llegó al nivel anual de 1.585 por 100, el control fiscal desapareció, y la indexación retornó. La economía había recaído en su deriva característica, desalentando tanto a los inversores extranjeros como a los nacionales.

Collor había iniciado también un ambicioso programa de reformas neoliberales, que incluía la privatización, la desregulación y la apertura de la economía con aranceles más bajos. Muchas de estas propuestas despertaron la enérgica oposición de los industriales y los nacionalistas en el Congreso. La única victoria del gobierno en este terreno fue la venta de una importante siderúrgica del Estado, la cual una vez en manos privadas aumentó sus ganancias y productividad en gran medida.

Collor no logró ver parte de su programa realizado. En poco menos de dos años perdió el gobierno. Su némesis resultó ser el espectro contra el que había luchado en 1989: la corrupción. Los periodistas investigadores, su hermano descontento y una investigación parlamentaria proporcionaron pruebas de que Collor estaba mezclado en una vasta red de sobornos orquestada por un traficante de influencias llamado P. C. Farias. Collor recurrió a la televisión como arma defensiva, pero su habilidad telegénica se había desgastado. La indignación pública llevó a una campaña ciudadana para lograr su impugnación y su destitución. En septiembre de 1992, la Cámara de Diputados votó abrumadoramente por destituirlo y Collor renunció apenas unas horas antes de que el Senado aprobara procesarlo con el cargo de conducta ilícita.

El vicepresidente que lo sucedió fue Itamar Franco, un ex senador y una nulidad política, cuya honestidad personal era su mejor carta de recomendación. Pero su gobierno, falto de una base partidaria, también careció de dirección política. La inflación se elevó a una tasa anual del 2.490 por 100 en 1993. En el consenso hemisférico, Brasil era considerado como el hombre enfermo de América del Sur.

El gobierno de Itamar encontró finalmente un ancla cuando Fernando Henrique Cardoso fue nombrado ministro de Economía a fines de 1993. Cardoso reunió a un grupo de talentosos tecnócratas con mucha experiencia en las políticas de estabilización. En julio de 1994 lanzaron aún otro programa antiinflacionario, pero éste, mejor diseñado que los precedentes, mostró resultados inmediatos.

Cardoso capitalizó este éxito y el resultante sentimiento de confianza para presentarse a la presidencia en octubre de 1994. Venciendo su antigua reputación de intelectual izquierdista, Cardoso, un ex senador del Partido So-

cialdemócrata Brasileño (PSDB), logró el respaldo del partido conservador. Sin un candidato importante de la derecha en liza, Cardoso ganó con el 54 por 100 de los votos, derrotando fácilmente a Lula, otra vez segundo en la competencia. Cuando el gobierno de Cardoso asumió el poder a inicios de 1995, su mayor desafío era continuar con el programa de estabilización. Esto requeriría, sobre todo, obtener la cooperación del Congreso en la política fiscal. El gobierno trató también de reanudar el programa de privatización, claramente estancado bajo Itamar. La opinión pública parecía lista para aceptar la privatización, pero ajustar el gasto parlamentario sería mucho más difícil.

Pese a la retórica del nuevo presidente, era improbable que su gobierno fuera capaz de lidiar con el problema social, por algunos años. La estabilización y la reestructuración económica preocuparían a Brasilia, y los presupuestos nacionales se mantendrían restringidos.

Brasil había pasado los inicios de los años noventa en una montaña rusa emocional. La década se inició con la deslumbrante promesa de Collor. Luego siguió su escabrosa caída en medio de celebraciones carnavalescas. Vino después la estrambótica conducta de Itamar, un viudo que cambiaba de política casi tan frecuentemente como de novia. Si 1994 trajo un inédito cuatricampeonato mundial en fútbol, también trajo la muerte violenta de Ayrton Senna, el mejor corredor automovilístico, cuyo funeral paralizó el país durante dos días. Hacia 1995 los traumatizados brasileños estaban preparados para que una mano fuerte tomase las riendas. Su opción, Cardoso, era un profesor de sociología que había sido el sumo sacerdote de la escuela de la *dependencia* de análisis social. Su tarea era ahora lograr que ese término deviniera obsoleto para Brasil.

Perú: soldados, oligarcas e indios

Para comprender el Perú contemporáneo, debe comenzarse examinando su geografía. Situado en la costa pacífica de Suramérica y con un tamaño de aproximadamente el doble de Texas, el país tiene tres regiones geográficas: la costa, la sierra y la montaña o selva. La zona costera, árida y seca, ha sido dominada durante siglos por la ciudad de Lima, cuya población en 1993 era de unos 4,2 millones de habitantes (casi un quinto del total nacional de 23 millones). La sierra es la cordillera andina, un mundo de picos nevados y valles gélidos que contiene ciudades de provincia tan antiguas como Cuzco y Ayacucho. Y la montaña, en la vertiente oriental de los Andes, es una región selvática cuyos bosques tropicales se extienden hasta el trecho superior del Amazonas, donde la ciudad de Iquitos es el puerto más importante. Debido a su inaccesibilidad, la montaña ha estado poco poblada hasta tiempos recientes, aunque la colonización actual la ha convertido en una región dinámica y en crecimiento.

Estos rasgos geográficos han ayudado a crear economías regionales desiguales. La costa ha dado origen a una agricultura comercial e industrias de productos acabados. La sierra ha sido una zona de minería, ganadería y agricultura de subsistencia. A pesar de sus recursos naturales, la montaña no ha disfrutado de un crecimiento sustancial; hubo un auge del caucho y, en años recientes, cultivos de hojas de coca (para el mercado internacional de estupefacientes), pero no ha habido una prosperidad sostenida. Sin embargo, más recientemente, el cultivo de café, azúcar y fruta (para el mercado limeño) ha dado energía a la economía regional.

Las variaciones étnicas forman parte de estas diferencias. En el centro del imperio inca, Perú continúa manterriendo una gran población india. El censo de 1940, el último en usar categorías raciales, clasificaba a un 46 por 100 de la población como india. Probablemente, en términos étnicos, se trata de un recuento a la baja, ya que la definición de «indio» depende más de la apariencia física que de la herencia étnica. La cifra actual es con toda probabilidad de alrededor de un 35 por 100. Se ha estimado que hay alrededor de tres millones de hablantes de quechua en Perú, y también un número considerable de hablantes de aymara. Los indios viven (y han vivido) principal-

mente en la sierra, a menudo en comunidades tradicionales muy cerradas, perpetuando costumbres que retrotraen a los días de los incas.

Perú cuenta con una capa relativamente pequeña de blancos, un estrato que se originó con los conquistadores españoles y que ahora alcanza cerca de una décima parte de la población nacional. Dejando a un lado a negros y asiáticos, la mayor parte de la población restante la componen los mestizos, quizás un tercio o más del total. Como en otros países de América Latina, éstos ocupan una posición ambigua en la sociedad, al representar a la vez el peso de un pasado opresivo y, de forma ocasional, las perspectivas de una cultura radicalmente diferente. Con frecuencia se los conoce como cholos, un término usado con carácter peyorativo cuando se aplica a un indio que quiere pasar como mestizo.

Como no es de sorprender, esta mezcla étnica ha llevado a interpretaciones muy divergentes de la sociedad e historia peruanas. Algunos escritores han denunciado con violencia el legado español del país. Alberto Hidalgo, por ejemplo, proclamaba a comienzos del siglo XX, su odio a España, porque nunca había hecho nada bueno por la humanidad y porque los españoles eran brutos por naturaleza. Pero España también ha tenido apologistas. Bartolomé Herrera, sacerdote del siglo XIX, sólo tuvo alabanzas para la obra que realizaron los españoles, que según él, fue la más grande obra que el Todopoderoso haya realizado mediante las manos del hombre. La conquista de la naturaleza, la adquisición de una nueva parte del mundo para la civilización eran, para Bartolomé Herrera, logros inigualados de los españoles.

Las implicaciones estaban claras. Perú debía poner el poder y sus esperanzas sobre sus ciudadanos de descendencia europea.

Estos comentaristas también solían denunciar a los indios. Se los describía como indolentes, incapaces, adictos sin remedio a mascar hojas de coca. No tenían redención y constituían un duro obstáculo para el progreso nacional. Los problemas de Perú podían rastrearse hasta la terca sobrevivencia de los herederos de los incas.

Los mestizos también han recibido críticas. Justo cuando José Vasconcelos proponía sus ideas promestizas acerca de «la raza cósmica» en México, Alejandro O. Deústua ofrecía en 1931 una crítica mordaz de Perú, donde, según él, el problema del mestizo era mucho más grave que en otros países. Producto del indio en su periodo de disolución moral y del español en su era de decadencia, el mestizo había heredado todos los defectos de cada uno sin ser capaz de conservar los restos de la vida caballerosa del conquistador. La mezcla, según él, había sido desastrosa para la cultura nacional. El mestizaje, pues, no era para Deústua un signo de progreso social, sino un síntoma de retraso. Perú estaba condenado por la composición racial que había heredado.

Durante el siglo XX, los pensadores peruanos han intentado resolver el inquietante problema de la identidad nacional. Algunos han hallado inspiración en la herencia india. Un caso notable es el de José María Arguedas, el único novelista capaz de penetrar tanto en el mundo indígena como en el criollo de Perú. Era un mestizo que había vivido en comunidades indias de

pequeño y era bilingüe de español y quechua. En *Canto Kechwa* (1938) sostiene que el indígena no es inferior y confía en que algún día indios y mestizos serán considerados iguales y se valorarán sus capacidades creativas. Pero Arguedas encontraba demasiado pesada de soportar la carga de su propia herencia étnica y se suicidó en una desesperación absoluta.

Otros han investigado la fusión de los componentes españoles e indios, como hizo Víctor Andrés Belaúnde en un libro titulado *Peruanidad* (1957). Sin embargo, la cuestión básica persiste: ¿puede Perú convertirse en una nación unificada?

El periodo independentista

Durante la etapa colonial, Perú era una importante fuente de ingresos para España. Las minas de plata de Potosí en el Alto Perú (ahora Bolivia) producían grandes cantidades de riqueza, en particular durante los siglos XVI y XVII, y después se encontraron ricas venas en la sierra peruana. Pronto aparecieron los adornos de la civilización española. La Universidad de San Marcos fue fundada en 1551. La Inquisición estableció su tribunal en 1569, cuando la Iglesia se convirtió en una poderosa institución. Lima, una impresionante metrópoli para su lugar y su tiempo, era merecedora de su nombre: la Ciudad de los Reyes.

Perú sufrió una prolongada crisis económica durante finales del siglo XVIII. La producción de plata se desplomó, aunque hubo una breve recuperación en la década de 1790. Las medidas borbónicas de libre comercio redujeron su participación en el tráfico con el Alto Perú y Chile, ya que ahora los artículos llegaban por tierra desde Buenos Aires. La creación de un virreinato en la región de Río de la Plata disminuyó la actividad e importancia de la burocracia real de Lima. Túpac Amaru II (el mestizo José Gabriel Condorcanqui) encabezó una sangrienta revuelta india que fracasó en 1780-1781. Aunque no tenía relación con los cambios administrativos de la corona, gran parte de la élite pensó que el mensaje de la revuelta era claro: Perú estaba en decadencia.

Paradójicamente, la tendencia económica no produjo un movimiento independentista extendido. Los intelectuales limeños aprendieron de la Ilustración y lanzaron un periódico liberal, el *Mercurio Peruano*, en 1791. Pero no clamaban por la independencia de España, sino que, más bien, pedían concesiones dentro del marco colonial, medidas que devolvieran los privilegios y prosperidad de la era preborbónica. Hubo un breve movimiento separatista en la sierra encabezado por un mestizo (conocido socialmente como indio) llamado Mateo García Pumacahua, pero en seguida se extinguió. Mientras la causa de la independencia barría el resto de la América española, Perú seguía siendo una plaza fuerte leal a la corona.

La liberación llegó del exterior. A finales de 1820, habiendo comandado

sus tropas por los Andes, desde Argentina hasta Chile, José de San Martín alcanzó la costa sur de Perú. Varios meses después los españoles evacuaron Lima y el 28 de julio de 1821, San Martín proclamó la independencia. Reconocido como el «protector» por el pueblo, comenzó a hacer planes para establecer una monarquía y encargó a un agente que buscara un príncipe europeo conveniente. Esto desencadenó la oposición de los liberales, que querían una forma de gobierno republicana, y el proyecto desapareció tras la fatídica reunión de San Martín con Bolívar a finales de 1822 y su subsecuente salida de la escena.

Una asamblea especial aprobó una Constitución en 1823 y José de la Riva Agüero se convirtió en el jefe ejecutivo del país, pero todavía había que ganar la independencia. Al año siguiente, Bolívar obtuvo una resonante victoria militar sobre los españoles en la batalla de Junín y Andrés Santa Cruz dio el golpe de gracia en Ayacucho. A todos los efectos prácticos, Perú era libre, aunque España se negaba a reconocer la independencia de su colonia.

Entonces Bolívar propuso crear la confederación de Perú con el Alto Perú y la Gran Colombia (Ecuador, Colombia y Venezuela), bajo su mando, por supuesto, y se aseguró la aceptación de una tímida asamblea limeña en 1826. La oposición creció y Bolívar se desplazó al norte para reprimir las críticas después de haber aprobado a regañadientes un plan para separar Bolivia.

El caudillismo y la geopolítica se hicieron fuertes en Perú. Una serie de mandos militares combatieron por la presidencia, con golpes y contragolpes al orden del día entre 1828 y comienzos de la década de 1840. El general Agustín Gamarra, que se había hecho con la presidencia en 1839, intentó someter y anexar a Bolivia, pero encontró la muerte en el campo de batalla en 1841.

Los políticos peruanos de la etapa posindependiente presentaban una escena paradójica. Al haber vencido a España con la ayuda exterior, a Perú le resultaba difícil afirmar su autonomía de los estados fronterizos. Había contenido el conflicto abierto hasta la década de 1820, pero cayó bajo el dominio de los dictadores militares. Y una vez que se hubo desembarazado de las cargas del gobierno colonial, se encontró con que muchos afirmaban que su sociedad estaba en firme decadencia.

La economía era sumamente débil. Las luchas a comienzos de la década de 1820 habían dejado a El Callao, el puerto principal (cercano a Lima), en un estado ruinoso. Se habían asolado las tierras de la costa y la sierra. El comercio seguía deprimido. Las minas se encontraban en mal estado. La tesorería nacional estaba casi vacía y a partir de la década de 1820 el gobierno comenzó a acumular una serie de deudas externas (principalmente con acreedores ingleses) que más tarde resultarían casi ruinosas.

Tampoco habían mejorado las condiciones para los indios, que por entonces suponían cerca del 70 por 100 de la población total (entre un millón y millón y medio). El tributo tradicional, abolido formalmente con la expulsión de España, fue reemplazado por un impuesto de capitación, la denominada

contribución de indígenas. Y bajo las doctrinas «liberales» de la época, los indios se consideraron individuos, no comunidades, así que ya no disfrutaron de la protección especial previa. Algunos buscaron refugio como peones en las haciendas o como trabajadores en las minas. Otros trataron de pasar como mestizos y buscar empleo en las ciudades y pueblos.

El periodo del guano

La naturaleza vino al rescate de Perú. Durante siglos, las frías aguas marinas del país, debido a la corriente de Humboldt, habían atraído gran cantidad de peces. A su vez, éstos atraían a los pájaros, que dejaban sus excrementos en las islas cercanas a la costa. La sequedad atmosférica ayudaba a la conservación y calcinación de estos depósitos, conocidos como guano, que tenían una alta concentración de nitrógeno. El guano, como habían sabido los incas, era un fertilizante de primera calidad.

En 1841, el primer cargamento de guano peruano llegó al puerto de Liverpool. Así comenzó un crecimiento orientado a la exportación y un periodo de aparente prosperidad que duró medio siglo.

Fue una bonanza especial para el tan presionado gobierno. Las islas que tenían depósitos de guano eran de propiedad pública, no tierras privadas. Esto planteó una cuestión a la vez práctica y teórica para los responsables políticos liberales: ¿cómo podía un gobierno comprometido con los principios del *laissez-faire* aprovecharse de su monopolio virtual?

La respuesta se halló en el sistema de «consignación», mediante el cual el gobierno arrendaría (por lo usual en exclusiva) los derechos de explotación a una casa o sociedad comercial. En virtud de tales contratos, el gobierno obtendría una cuota fija del valor total de las ventas, quizás dos tercios, en lugar de un impuesto sobre los beneficios. El comerciante, por lo habitual un extranjero, recibiría el reembolso de los costes más un porcentaje de la venta. La estrategia parecía bastante acertada, ya que hacía participar al Estado liberal en una sociedad junto con una empresa privada para beneficio de ambos.

Pero el sistema de consignación tuvo algunas ramificaciones importantes. Una fue colocar al Estado en conflicto constante con las casas comerciales. Como tenía el control completo del suministro, el gobierno quería vender el guano al precio más alto posible, lo que podía significar retener los cargamentos para mantener los precios elevados. Sin embargo, debido a la comisión acordada, el comerciante estaba más interesado en el *volumen* total de las ventas que en el *precio* de un cargamento individual. Después de todo, el comerciante tenía un contrato por un periodo específico, durante el cual lo importante era vender la mayor cantidad de guano posible. Los precios elevados servían de ayuda, por supuesto, pero era más rentable desde la perspectiva del comerciante vender grandes cantidades de guano a precio moderado que vender cantidades muy pequeñas a altos precios. Como resultado,

el gobierno peruano y los arrendatarios discutieron constantemente durante toda la etapa del guano.

Un segundo factor se derivó del volumen de la inversión requerida. Aunque el guano resultaba accesible, apilado en montículos al aire libre, su explotación requería una considerable inversión de capital: en barcos, almacenes, transporte y salarios. Además, el gobierno demandaba sin cesar adelantos en metálico de sus arrendatarios. Esto restringía los posibles candidatos a aquellos comerciantes que contaban con fuertes reservas de capital y dados los aprietos de la economía local, pocos peruanos podían aprovechar la oportunidad.

Un tercer factor, relacionado con el segundo, se derivaba de la deuda externa. Ya en 1822 el gobierno peruano negoció un préstamo de 1,8 millones de libras esterlinas con un establecimiento banquero británico. Créditos posteriores e intereses acumulados llevaron a una deuda ingente y Perú empezó a quedar atrás en sus pagos. Los tenedores de bonos británicos se impacientaron y de inmediato consideraron que la bonanza del guano era su salvación.

Estaban en lo cierto. El comercio del guano acabó pasando en su mayor parte a manos inglesas. En 1849, mientras el legislativo peruano aprobaba una resolución concediendo preferencia a los nacionales en los arrendamientos, el gobierno negociaba un contrato con la firma londinense de Anthony Gibbs. El acuerdo autorizaba a Gibbs a comprar títulos de la deuda a sus propietarios ingleses al precio de mercado (un 40 por 100 menos del valor nominal) y luego a utilizarlos con su valor nominal para pagar los cargamentos de guano. De este modo, el gobierno tenía una pérdida considerable, mientras que Gibbs podía esperar obtener copiosos beneficios de la venta del guano en el mercado europeo.

Perú se volvió tan dependiente del guano que creó una economía de exportación de un solo producto. A comienzos de la década de 1860, el gobierno obtenía cerca del 80 por 100 de sus ingresos del guano, lo que testifica tanto la dependencia del Estado de sus arrendatarios como la relativa escasez de otras exportaciones. Al mismo tiempo, aproximadamente la *mitad* de lo recibido por este concepto se destinaba a los tenedores de bonos ingleses. Así pues, el auge del guano proporcionó poco estímulo para un crecimiento económico de largo alcance. Como Frederik Pike ha observado, «cuanto mayores son las ganancias llovidas del cielo, menos logra mantenerse la economía por sus propios recursos».

En 1845, cuando el mercado del guano se hallaba en expansión, Perú cayó bajo el poder del más fuerte de sus dirigentes del siglo xix: Ramón Castilla, de cuarenta y seis años, gran inteligencia y ojos negros, hijo de una madre mitad india y un padre hispano-italiano. Era un oficial del ejército que se había distinguido en Junín y Ayacucho, y trató de modernizar las fuerzas armadas peruanas. Una vez que alcanzó el cargo, envió al Congreso un presupuesto nacional, el primero de la historia del país. Promovió las obras públicas, que incluyeron la construcción del primer ferrocarril latinoamericano (de Lima a El Callao). En política exterior, revivió el sueño de Bolívar de unir

América Latina, en parte porque temía el desplazamiento hacia el sur de Estados Unidos, que estaba haciendo arrodillarse a México en 1846-1848.

A Castilla le sucedió en 1851 José Rufino Echenique, cuya principal contribución consistió en la consolidación de la deuda interna nacional. Bajo esta política, el gobierno de Echenique reconoció como válidas todas las reclamaciones de los ciudadanos, casi todos conocidos de las clases altas, que testificaron pérdidas sustanciosas durante las guerras de independencia y los conflictos siguientes. La administración de Echenique pagó cerca de 19 millones de pesos por esos conceptos y, según un cálculo, al menos 12 millones de pesos se dedicaron a reclamaciones sin fundamento. No necesita explicarse la fuente de esos pagos: la cuota gubernamental de la venta del guano. A pesar de la corrupción, la reorganización financiera llevó a algunas acumulaciones internas de capital importantes.

En 1854, Castilla, hastiado, echó a Echenique y volvió a asumir el control. Pronto emitió dos decretos de gran alcance: uno que abolía la contribución de indígenas y el otro que emancipaba a los esclavos negros. El mercado del guano también facilitó la legislación social, ya que el gobierno podía permitirse ahora perder el impuesto de capitación sobre los indios e indemnizar a los plantadores por sus esclavos. Perú comenzó en seguida a aprovechar otra fuente de mano de obra, los culís chinos, unos 100.000 de los cuales llegaron sujetos a un contrato desde mediados de 1850 a mediados de 1870 para trabajar primordialmente en la economía costera (guano, azúcar, algodón).

Durante este segundo mandato, que duró hasta 1862, Castilla continuó apoyando la profesionalización del ejército y la educación pública. Presidió las asambleas que redactaron dos constituciones, un documento federalista en 1856 y una carta constitucional centralizadora en 1860. Y continuó pressionando para la unificación continental. Según explicaba su razonamiento: «La relativa debilidad de las repúblicas de Suramérica, divididas y aisladas entre ellas, es a juicio de este gobierno la causa deplorable del hecho de que en muchas ocasiones hayamos sido tratadas con una falta grave de respeto, como si para las grandes potencias internacionales no existiera un derecho de naciones común».

Tras la salida de Castilla, aparecieron problemas con España, que nunca había reconocido de forma oficial la independencia peruana. España protestó por el supuesto maltrato otorgado a los inmigrantes españoles en Perú y en represalia ocupó algunas islas ricas en guano a unos 170 km al sur de El Callao. Su asentamiento provisional en ellas excitó protestas y una revuelta; llegó al poder Mariano Ignacio Prado y en 1866 declaró la guerra a España. El conflicto fue breve, pues en 1869 España extendió por fin un reconocimiento oficial de la independencia de Perú.

Los gobiernos continuaron haciendo frente a una deuda que seguía un curso espiral. El presidente José Balta (1868-1872) pasó el problema a Nicolás de Piérola, un niño prodigo de treinta años con algo de *dandy*, que negoció un acuerdo con la firma parisina de Adolph Dreyfus. Según el plan,

Dreyfus asumió toda la responsabilidad de la deuda exterior del gobierno y adelantó préstamos adicionales a cambio del monopolio sobre la compra y la venta del guano. Con el tiempo, el acuerdo se aclaró, cuando Dreyfus puso sus propias acciones en el mercado público, pero a corto plazo proporcionó cierta estabilidad a una situación cambiante y caótica. Piérola también estableció acuerdos con Henry Meiggs, empresario estadounidense aventurero y sin escrúpulos, para extender el ferrocarril por todo el país. Los contratos de Dreyfus y Meiggs fueron tachados de inmediato por los críticos nacionalistas como de saldo, pero de todos modos fueron aprobados.

La deuda exterior seguía creciendo. Manuel Pardo, candidato del primer partido político del país, el Civilista, ocupó el poder de 1872 a 1876. Era un reflexivo hombre de Estado, aristócrata de nacimiento y millonario por su esfuerzo propio, que luchó con la deuda, promovió la educación pública y nacionalizó los campos de nitratos. Sin duda, fue uno de los líderes más realistas y efectivos de su época. Cuando iba a terminar su mandato, apoyó a un general del ejército para la presidencia, con la esperanza de que fuera capaz de controlar las continuas insurrecciones. En 1878, a la edad de cuarenta y cuatro años, Pardo fue asesinado por un asaltante. Perú perdió a uno de sus mejores dirigentes.

Las cosas fueron a peor. El núcleo de la economía de exportación se cambió al sur. Los nitratos comenzaron a producir beneficios en lo que ahora es el sur de Perú y el norte de Chile, entonces parte de Bolivia, y los inversores chilenos se negaron a pagar los nuevos impuestos sobre los nitratos reclamados por el presidente de Bolivia, Hilarión Daza. En revancha, éste ordenó apoderarse de las labores de nitrato chilenas en Antofagasta. Chile envió tropas para ocupar la región. Tras cierta vacilación, el gobierno peruano de Mariano Ignacio Prado decidió respetar una alianza de 1873 con Bolivia.

Así comenzó la guerra del Pacífico (1879-1883), en la que se enfrentaron Perú y Bolivia a Chile. Fue un desastre total para Perú. Chile obtuvo una resonante victoria militar y ocupó Lima. En el tratado de paz que siguió en 1883, Chile obtuvo el control completo de la provincia de Tarapacá, rica en nitratos, incluida la ciudad de Iquique; e iba a mantener el control de Tacna y Arica durante diez años y después su destino se decidiría por plebiscito.

La guerra del Pacífico tuvo efectos de largo alcance sobre los tres países. Para Chile abrió paso al auge del nitrato y reforzó la confianza nacional. Para Bolivia supuso perder el acceso al mar. Para Perú fue una derrota humillante que aumentó el descrédito de los políticos. Además, acrecentó la deuda e interrumpió el comercio. Fue un fracaso en todos los sentidos.

Después de la derrota llegó el general Andrés Cáceres, que fraguó un golpe a finales de 1885 y gobernó de 1886 a 1890. Intentando recomponer las piezas en el interior y aplacar a los iracundos tenedores de bonos del exterior, el nuevo presidente, como muchos antes que él, buscó ayuda más allá de Perú. Cáceres inició conversaciones con los tenedores de bonos londinenses. Según su plan, que recibió el nombre de Michel Grace, el negociador británico, Perú satisfaría a sus acreedores cediéndoles el control de sus ferrocarriles.

les durante sesenta y seis años, entregándoles todo el guano que no fuera necesario para el uso interno y efectuando treinta y tres pagos anuales de 8.000 libras esterlinas. Los tenedores de bonos, por su parte, adelantaron un nuevo préstamo de 6 millones de libras esterlinas y prometieron invertir una buena proporción de las ganancias en los ferrocarriles. En medio de desacuerdo y controversia, el Contrato Grace fue finalmente aprobado en 1889. Como en el caso de Dreyfus, ha seguido siendo para los nacionalistas un símbolo del excesivo celo de su gobierno por complacer a los inversores extranjeros.

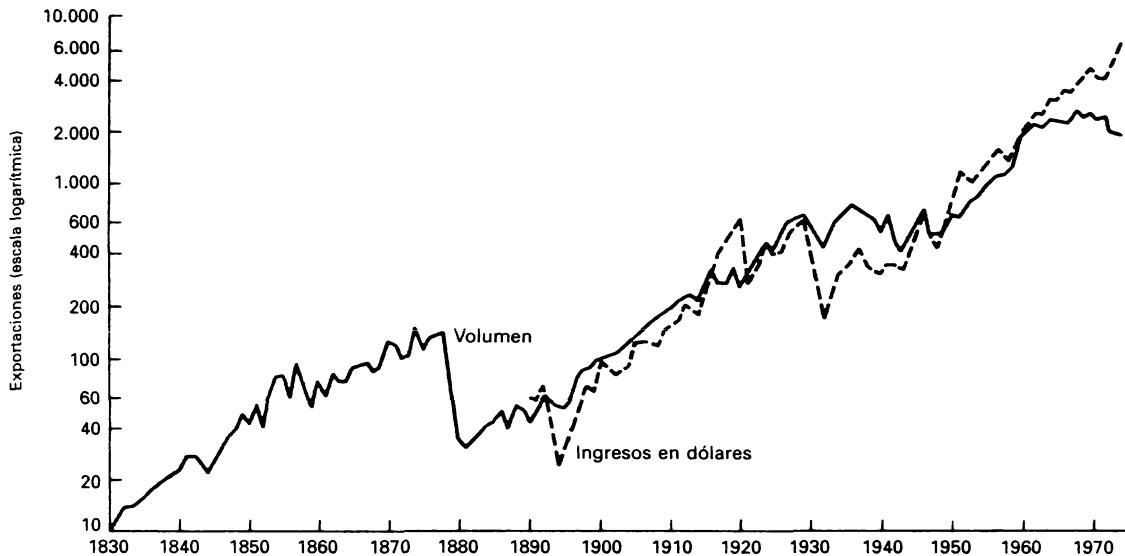
El Contrato Grace marcó el final de la etapa del guano. Los depósitos estaban casi exhaustos a comienzos de la década de 1880 y desde 1889 hubo pocos excedentes que exportar. El ciclo había terminado.

El auge del guano dejó una profunda impresión en la historia peruana. Proporcionó un cebo para los inversores extranjeros; condujo a extravagancias y corrupción al gobierno peruano, y alteró las perspectivas sociales de la élite, en particular entre los latifundistas de la costa. Un escritor recordaba que «la imaginación popular dotó de proporciones fantásticas a la improvisación de fortunas. Fue la primera vez que las antiguas formas de la vida social, más o menos estáticas incluso durante las revueltas políticas, sufrieron una severa sacudida. Por vez primera, el dinero surgió como valor social exclusivo». Tentados por las perspectivas, los latifundistas trataron de emular a los comerciantes, negociantes y financieros. Pero esto no supuso la creación de una clase media independiente o un estrato empresarial medio, sino la adopción de algunas cualidades empresariales por parte de la aristocracia costera peruana.

Visión general: crecimiento económico y cambio social

Desde comienzos del siglo XIX, Perú ha pasado por tres largos ciclos de crecimiento orientado a la exportación. La figura 6.1, que muestra el volumen y el valor de las exportaciones, ilustra el patrón general. La primera fase, correspondiente al periodo del guano, se extendió de la década de 1830 a finales de la de 1870. Tras un periodo de oscilación, la economía se recobró en 1890 y comenzó una fase de expansión que duró hasta la Gran Depresión de los años treinta. La conclusión de la segunda guerra mundial reabrió los mercados internacionales y precipitó otro ciclo de crecimiento que continuó hasta mediados de los años setenta, cuando los precios mundiales para los productos agrícolas y otros empezaron a declinar.

El modelo que presentan estas tendencias nos sirve para ilustrar varios hechos clave del desarrollo económico peruano. En primer lugar, el país ha seguido dependiendo de las exportaciones como un estímulo para el crecimiento. Los responsables políticos casi siempre se han centrado en el mercado internacional y no en la demanda interna. En segundo lugar y como consecuencia de lo anterior, Perú sigue siendo extremadamente vulnerable a las variaciones de precios del mercado internacional, es decir, a fuerzas que no



6.1. Exportaciones peruanas, 1830-1975: índices del volumen y valor en dólares (1900 = 100). *Fuente:* Rosemary Thorp y Geoffrey Bertram, *Peru 1890-1977: Growth and Policy in an Open Economy*, Nueva York, Columbia University Press, 1978, p. 5.

están bajo su control. En tercer lugar, como veremos, cada uno de los tres ciclos ha reflejado la subida (y caída) de un producto o más, hecho que ha llevado a ciclos de prosperidad repentina para diferentes regiones del país. En cuarto lugar, el Perú del siglo XX ha creado una economía en la que los vínculos entre los sectores «modernos» que utilizan capital de forma intensiva —dominan el proceso de exportación-importación, principalmente en la costa— y los sectores «tradicionales» que utilizan mano de obra intensiva —en especial de bajos ingresos y en las tierras altas— no han conducido a un aumento sistemático de los ingresos del último sector. Y, por último, en parte como resultado del impacto interno de esta economía orientada a la exportación, Perú presentaba en 1986 una pauta de distribución de la renta notable por su desigualdad. El 20 por 100 de la población perteneciente a las clases altas recibía el 51 por 100 de la renta, mientras que el 20 por 100 de la población de las clases inferiores recibía sólo el 5 por 100 de la misma.

→ Tras el declive del guano, fue la minería, junto con el azúcar y el algodón, dos productos agrícolas cultivados en la costa, los que alimentaron la expansión de 1890-1930. Al igual que en Cuba y otros lugares, el azúcar requería por entonces gran inversión de capital. La maquinaria para los trapiches modernos era cara y se necesitaban grandes extensiones de tierra para cultivar caña suficiente. A lo largo de la costa norte de Perú, donde se centró la mayor parte de la producción, constituía la actividad de todo un año (en contraste con la mayoría de las otras regiones, como Cuba, donde el ritmo de trabajo es de temporada). Como resultado, los plantadores, en general peruanos, desarrollaron una mano de obra estacionaria que se aproximaba a los 30.000 trabajadores a finales de los años veinte. Algunos eran descendientes de esclavos africanos; otros, chinos y el resto, indios de la sierra que llegaban en condiciones coercitivas como *enganchados*, es decir atrapados por los adelantos de dinero.

La producción azucarera y las exportaciones aumentaron de forma especialmente rápida a mediados de la década de 1890 y de nuevo durante la primera guerra mundial. En los años veinte, la capacidad productiva alcanzaba las 320.000 toneladas, casi el doble que antes de la guerra. Aunque el mercado se derrumbó a finales de la década, la mayoría de los plantadores pudieron sobrevivir. Sin embargo, como su mayor mercado de exportación era Estados Unidos, donde el proteccionismo dañaba las importaciones, el sector azucarero peruano sufrió un estancamiento durante los años treinta.

La otra fuente importante de crecimiento era el algodón, que podía cultivarse a lo largo de la costa. Hasta finales del siglo XIX, el algodón de hebra larga peruano no podía competir con la variedad de hebra corta estadounidense, pero las innovaciones técnicas de la década de 1880 permitieron mezclar el producto peruano con lana. La demanda mundial aumentó y los latifundistas respondieron. La producción saltó de unas 400 toneladas métricas en 1890 a más de 2.000 toneladas métricas en 1910, y a casi 6.000 toneladas métricas en 1930, y para entonces este artículo suponía el 18 por 100 de las exportaciones peruanas.

Su cultivo en Perú es una actividad de temporada, en contraste con el azúcar, lo que creó dos tipos de mano de obra: el yanaconaje, con diferencia el modo más importante; y la producción independiente, efectuada por campesinos a pequeña escala. En parte por esta razón, siguió en manos peruanas, ya que los inversores extranjeros eran reacios a participar en relaciones de producción neofeudales (es decir, no mercantiles). En los años veinte, la mano de obra dedicada al algodón abarcaba a más de 40.000 personas.

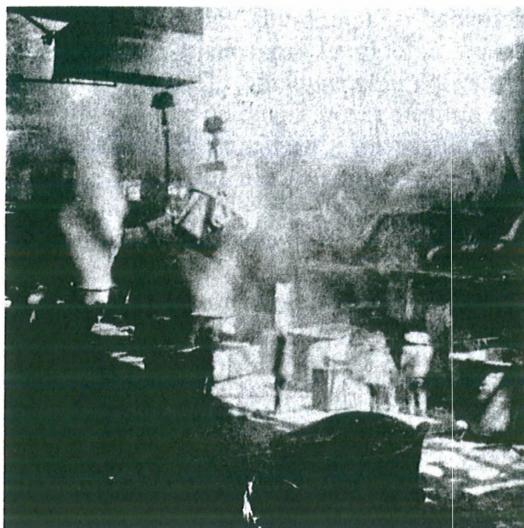
Los empresarios extranjeros no se distinguieron como latifundistas, sino como comerciantes, pues ocuparon posiciones importantes en el desmote, financiación y comercialización del algodón. Hasta los años veinte, también mantuvieron un monopolio virtual sobre el crédito, pues los plantadores solían necesitar préstamos a corto plazo de una temporada a otra. Pero la mayor parte de los beneficios fueron a parar a los productores peruanos. Además, este cultivo proporcionó un estímulo para la inversión interna en textiles y productos derivados (como jabón, velas y aceite de semillas de algodón), pero no generó una amplia escala de inversiones fuera del sector algodonero.

La sierra también tomó parte en la agricultura. Desde los pastos de los Andes llegaba una lana que supuso más del 10 por 100 de las exportaciones en la década de 1890, en 1903 y en 1918-1920. La variedad de mayor calidad procedente de la alpaca era producida en su mayor parte por campesinos tradicionales. La de oveja provenía de las haciendas a gran escala y los conflictos por la tierra llevaron a una ola de revueltas campesinas a comienzos de siglo. El derrumbamiento del mercado en los años veinte produjo una recepción, en particular para los criadores de ovejas, pero el gobierno central, orientado hacia la costa, no ofreció ningún auxilio.

La montaña peruana, al igual que la Amazonía brasileña, pasó por un breve auge del caucho. Empresarios nacionales enérgicos como Julio C. Araña amasaron inmensas fortunas y al terminar el siglo la ciudad de Iquitos había crecido hasta unos 20.000 habitantes. Pero esta prosperidad fue breve. Pronto, Perú, como Brasil, se vio arrojado del mercado por las plantaciones de caucho más eficientes del Lejano Oriente.

A partir de la década de 1890, la minería, que había dominado en otros tiempos la economía peruana, sufrió un cambio importante. A finales del siglo XIX, los operadores a pequeña escala se concentraban en los metales preciosos, primero en la plata y luego en el oro. Pero las minas peruanas, situadas por toda la sierra, son de una complejidad inusual y a menudo hay más de un metal en una misma mina. El desarrollo industrial estadounidense generó la demanda de metales no preciosos como el plomo, zinc, hierro y cobre.

Este último se convirtió en el producto mineral más importante hasta 1930. Los avances tecnológicos y la extensión del ferrocarril hicieron posible aprovechar las vetas peruanas. En 1901, llegó una inversión estadounidense a gran escala con la compra del complejo de Cerro de Pasco, y la producción se aceleró de inmediato. En 1930, casi la mitad del valor de toda la producción mineral provenía del cobre, con el oro y la plata ahora como productos secundarios. Los serranos proporcionaron la fuerza laboral y la propiedad



El refinado de la plata en Cerro de Pasco a comienzos de este siglo se caracterizaba por una tecnología de gran escala. (Cortesía de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.)

fue a parar casi por completo a manos extranjeras, especialmente a la Cerro de Pasco Copper Corporation y a la Northern Peru Mining, filial de la American Smelting and Refining Company.

También se extendieron en estos años la exploración y explotación del petróleo, en especial durante la primera guerra mundial. Los campos costeros contenían depósitos de una gran calidad, que eran muy apreciados en el mercado internacional, y los capitalistas estadounidenses tomaron parte en sus primeros estadios. En 1913, la International Petroleum Company (IPC, una filial canadiense de la Standard Oil) logró el acceso a los importantes campos de Negritos y La Brea-Paríñas bajo unas condiciones que después se convertirían en una fuente de controversia continua. Cerca de un 10 por 100 de la producción se vendía en el país (ya que Perú no tenía carbón); el resto iba al mercado de exportación, donde proporcionaba copiosos beneficios a los dueños. En 1930 el petróleo suponía el 30 por 100 de las exportaciones peruanas totales. Ese mismo año, un observador informado conjeturó que el 50 por 100 del precio al por mayor en el exterior constituía un claro beneficio para las compañías.

En comparación con estos productos de exportación —azúcar, algodón, lana, caucho, cobre, petróleo—, la actividad interna tuvo un papel menor en el ciclo de crecimiento de 1890-1930. La producción textil se extendió a comienzos de siglo y después se niveló. Algunos productos agrícolas se cultivaban para el consumo interno —carne, patatas, yuca, maíz—, pero una buena proporción de la producción y el intercambio se efectuaba dentro de economías de subsistencia y no en la economía monetaria.

La Gran Depresión y la segunda guerra mundial alteraron después el cuadro internacional y propiciaron una modesta reorientación de la econo-

mía peruana, pero —en contraste con los de Argentina, México y Brasil— los responsables políticos ni siquiera trataron de embarcarse en un programa sustancial de industrialización para sustituir a las importaciones. Cuando se presentó la oportunidad a finales de los años cuarenta, prefirieron una estrategia trillada: crecimiento orientado a la exportación con gran cabida para la inversión extranjera e integración de la economía peruana en la internacional, sobre todo en la economía estadounidense.

La mayoría de los sectores económicos se unieron al ciclo de posguerra, aunque con algunos cambios importantes. La producción azucarera se extendió en los años sesenta, cuando Perú aprovechó el aumento de su cuota de mercado estadounidense al retirarse Cuba, y los trabajadores peruanos de este sector comenzaron a organizar un movimiento sindical militante. La producción algodonera se incrementó de 182.000 toneladas al año en 1945-1949 a 381.000 en 1960-1964 y luego descendió, en parte debido a la saturación del mercado mundial y en parte por la competencia de los textiles sintéticos. Al yanaconaje se le unió el trabajo asalariado y el arrendamiento del proceso de producción, y los aparceros trataron de mejorar su posición negociadora. La lana de oveja casi desapareció de la lista de exportaciones, aunque el comercio de la alpaca de gran calidad continuó a escala modesta.

La minería pasó por su propia diversificación. El cobre siguió manteniendo su preeminencia. Las vetas de hierro recibieron atención y fueron desarrolladas por la Marcona Mining Company, un conglomerado de empresas cuyo participante principal era la Utah Construction Company. Aunque la minería se desplazó a otros metales, la inversión estadounidense siguió siendo predominante. Lo mismo puede aplicarse al petróleo, aunque su peso relativo entre las exportaciones descendió durante los años sesenta.

Un nuevo artículo contribuyó de manera importante a la balanza comercial exterior: la harina de pescado, que pasó a ser ampliamente utilizada por la industria de alimentación animal estadounidense (en especial para aves y cerdos). Desde una posición estable en los años cincuenta, Perú dio un salto adelante para convertirse en el primer país del mundo en volumen de pesca en 1964, con un 18 por 100 de las capturas mundiales y una producción de harina de pescado cercana al 40 por 100 del abastecimiento mundial. Los empresarios que se hallaban a la cabeza no pertenecían a la élite ni eran extranjeros: al igual que Luis Banchero Rossi, el legendario magnate de la anchoa, pertenecían a la clase media local. Entonces la naturaleza gastó una broma cruel. Los cambios ocurridos en las corrientes oceánicas, primero en 1965 y de nuevo en 1972, junto con la sobreexplotación de los recursos, llevaron a la desaparición de los bancos de pesca. Con la misma rapidez que habían encontrado una nueva fuente de riqueza, esta desapareció.

La manufactura añadió otra dimensión al cuadro económico del país. Hubo cierto crecimiento industrial en los años cincuenta, pero tendió a apoyar a la exportación en lugar de sustituir a las importaciones: se centró en productos derivados de los bienes exportados, a menudo para el mercado exterior, en lugar de dedicarse a reemplazar artículos importados en el merca-

do peruano. Este modelo empezó a cambiar en torno a 1960, cuando la producción industrial comenzó a incluir artículos como cemento, productos químicos y bienes duraderos. Debido a las disposiciones legales de carácter liberal, fue el sector extranjero, no los inversores locales, el que aprovechó esta oportunidad. Durante los años sesenta, al menos 164 importantes corporaciones extranjeras, muchas de ellas multinacionales, llegaron a Perú. En 1968, la manufactura ya suponía el 20 por 100 del producto nacional bruto (en comparación con el 15 por 100 de la agricultura, el 14 por 100 del comercio y el 6 por 100 de la minería), y en 1970 el sector industrial incluía el 14,5 por 100 de la fuerza laboral.

No obstante, las exportaciones continuaron siendo las soberanas, como se muestra en el cuadro 6.1, y, de ellas, el cobre ya era la principal a mediados de los años setenta. Los metales suponían el 44 por 100 del total. La harina de pescado, que se había recuperado algo de la caída de comienzos de los años setenta, representaba el 13 por 100. El azúcar y el algodón juntos sumaban el 13 por 100 y el café se unía a la lista con un 9 por 100.

Sin duda, el cuadro demuestra que Perú ha contado con una diversidad de productos para la exportación desde la década de 1890. La importancia relativa de éstos ha variado —a veces de forma espectacular, como en el caso del caucho y el petróleo—, pero el país no ha dependido de una economía de exportación basada en un solo producto desde el periodo del guano. En este aspecto, ha sido afortunado.

A mediados de los años sesenta, los procesos de cambio económico ya habían producido modificaciones fundamentales en la estructura social del país. En el vértice se encontraba la élite tradicional, las denominadas cuarenta y cuatro familias, que no era de ningún modo monolítica. El segmento costero de la aristocracia, desde la década de 1890, había participado en la agricultura comercial y en operaciones de importación-exportación. Era un grupo cosmopolita, inteligente y culto, que tenía su centro de acción en la ciudad de Lima. Eran flexibles y pragmáticos en su modo de abordar lo que se les presentaba y a menudo colaboraban con los inversores extranjeros; también solían permitir que los nuevos ricos y oficiales militares que ascendían se unieran a sus círculos sociales.

La élite serrana era en general más tradicional, tanto en sus actitudes como en su aislamiento. El patrón de provincia estaba atado a la tierra y mantenía una relación íntima (aunque jerárquica) con los peones que trabajaban para él. Al mismo tiempo, muchos de estos latifundistas habían llevado a cabo importantes innovaciones en la agricultura, que incluían granjas lecheras en el norte y cría de ganado en el centro y sur. Esto proporcionó a la sierra un nuevo impulso económico.

En términos de poder político, desde la década de 1890, la élite serrana había dependido del apoyo de la costera para reforzar su posición y ayudar a sofocar las rebeliones. En los años sesenta, la autoridad de la oligarquía serrana ya estaba muy erosionada, en primer lugar porque muchos peones habían abandonado las haciendas para buscar trabajo en las plantaciones de

CUADRO 6.1. Composición de las exportaciones peruanas (1890-1976)

Productos	Porcentaje de la cuota de exportación según valor*		
	1890	1930	1976
Azúcar	28	11	7
Algodón	9	18	6
Café	—	0,3	9
Harina de pescado	—	—	13
Plata	33	4	11
Cobre	1	10	17
Plomo	—	7	4
Zinc	—	—	11
Caucho	13	—	—
Petróleo	—	30	—

* Las columnas no suman 100 debido a la exclusión de algunos productos.

Fuentes: Rosemary Thorp y Geoffrey Bertram, *Perú 1890-1977: Growth and Policy in an Open Economy*, Nueva York, Columbia University Press, 1978, pp. 40, 153; James W. Wilkie y Peter Reich eds., *Statistical Abstract of Latin America*, 19, Los Ángeles, UCLA Latin American Center, 1978, cuadro 2.732.

azúcar o algodón de la costa o en los campamentos mineros de las montañas; en segundo lugar, porque la gendarmería rural fue reemplazada por la Guardia Civil nacional y, además, los indios y las comunidades indígenas adquirieron cada vez más protección legal durante el siglo xx. En los años sesenta, como si admitieran su derrota, algunos latifundistas frustrados decidieron no seguir tratando con los peones recalcitrantes y convirtieron sus haciendas en pastos.

La clase baja —probablemente el 80 por 100 de la población, si no más— era heterogénea. Incluía al proletariado rural de las plantaciones azucareras, arrendatarios de tierras y obreros contratados de los campos de algodón y a los campesinos y labradores de subsistencia de la sierra; a los pescadores a sueldo de los barcos pesqueros, los mineros de las montañas y los obreros organizados de las ciudades; al servicio doméstico de Lima, los peones del campo y los residentes en los asentamientos ilegales de las afueras de las ciudades. Incluía a los hablantes de quechua y aymara de los márgenes de la sociedad nacional, así como a los obreros que participaban en huelgas del centro. Era un estrato muy grande, dividido en tres dimensiones: obreros y campesinos; costa y sierra; y no indios e indios. No obstante, en la práctica, las redes y los lazos familiares hacían de puente sobre esas divisiones y la migración ayudaba a reducir los importantes vacíos geográficos.

Por supuesto, también había otra gente, sectores medios que aún no constituyían una clase media (en el sentido de clase social coherente y con conciencia de serlo, como la surgida en Europa Occidental en el siglo xix), que en su mayoría vivían en zonas urbanas. Resulta significativo que, según

una estimación de los años sesenta, cerca de la mitad de los asalariados de los sectores medios tuvieran cargos en el gobierno, incluido el ejército. Parece que la burocracia, así como el comercio, se había convertido en la ocupación fundamental del sector medio.

Mediante estas transformaciones, la sociedad peruana se hizo más urbana. La población nacional aumentó de 3 millones en 1900 a 17,7 millones en 1980, y la proporción urbana ascendió en el mismo periodo de un 6 por 100 a un 45 por 100 (en 1975). Lima conservó su posición dominante, con 4,5 millones de habitantes en el área metropolitana, pero otras ciudades también crecieron. Aunque no estaba tan urbanizado como Argentina o Chile, Perú presentaba el mismo grado que Brasil. Era una sociedad compleja y cambiante, que guardaba un potencial de conflicto político. Regresemos ahora a la historia política peruana para ver cómo surgió.

Gobierno oligárquico

Los militares continuaban dominando la política peruana a comienzos de la década de 1890. El general Andrés Cáceres y el coronel Remigio Morales Bermúdez se intercambiaron el poder entre 1885 y 1895, mientras que el Contrato Grace recibía la aprobación del Congreso, pero la política cambió bajo la influencia de ideas nuevas. Cuando en Argentina surgía la Generación de 1880 y México fomentaba a sus científicos, Perú produjo una clase similar de dirigentes civiles. De educación elevada, neopositivistas por formación y liberales por sus ideas, componían una especie curiosa: como no hay un término mejor, podrían clasificarse como tecnócratas aristocráticos.

Su representante inicial fue Nicolás de Piérola que, como joven e impulsivo ministro de Hacienda de José Balta, había negociado el cuestionable contrato Dreyfus de 1869. Ahora, con más experiencia y como católico místico y revolucionario científico, trataba de reconciliar idealismo y materialismo. Para mejorar su posición y conseguir seguidores creó el Partido Demócrata —el segundo partido político del país, ya que el primero había sido el Civilista— y en 1895 se convirtió en presidente.

Ávido por promover la expansión orientada a la exportación que comenzó en la década de 1890, Piérola pasó a fortalecer la clasificación crediticia de Perú. Ajustó la legislación impositiva y aumentó los impuestos sobre el comercio, lo que duplicó los ingresos del gobierno durante su mandato de cuatro años. La reanudación de los pagos de la deuda exterior restauró la reputación del país ante los comerciantes y acreedores extranjeros. También estableció un Ministerio de Fomento para asistir a los empresarios locales y contar con los medios para que el gobierno participara en el crecimiento económico.

En política, dio curso a una ley para el sufragio directo y fortaleció los gobiernos municipales. Quizá con la esperanza de desechar las perspectivas de intervención militar, decidió profesionalizar las fuerzas armadas y en 1898,

en el mismo momento en que Chile y Argentina recibían misiones alemanas, invitó a un equipo militar francés para que le asesorara en la modernización de las fuerzas peruanas. Político clarividente, empeñado en el gobierno civil y ágil para aprovechar las ventajas, Piérola se hizo acreedor de un sobrenombre ambiguo: «el caudillo democrático».

Tras su salida del gobierno, la política peruana entró en una era de caudillismo conocida como *gamonalismo*. La competencia efectiva por el poder se restringió a la élite de la clase alta. Se celebraban elecciones, pero las papeletas no eran secretas y los latifundistas podían llevar a sus obreros y peones a las urnas y asegurarse de que votaban lo correcto. Los hacendados de la sierra se habían elegido para el Congreso nacional, donde era tradicional que apoyaran al presidente, a cambio de poderes incontrolados en sus foros locales. Y la élite costera, consolidando su control sobre la política económica, seguía el camino del crecimiento orientado a la exportación. Las cuidadosas alianzas que Piérola había establecido con los latifundistas funcionaban bien.

La muerte imprevista del presidente Manuel Candamo en 1904 precipitó una breve crisis sucesoria que se resolvió con la elección de José Pardo. Durante su presidencia, para apoyar la educación, aumentó el porcentaje de gasto público que se le destinaba de un 9,6 a un 17,2 por 100, y presentó propuestas para una legislación social y laboral (que el Congreso recibió con escepticismo). Mediante su eficiente ministro de Hacienda, Augusto B. Leguía, estableció una serie de organismos públicos para definir y fortalecer el papel estatal en el fomento del desarrollo económico. El más prominente de todos fue la Compañía Peruana de Vapores.

Como para ratificar esta política económica, Leguía asumió la presidencia tras unas elecciones nada controvertidas, celebradas en 1908. Era un hombre de empresa de mucho éxito, que tenía intereses en los seguros y la exportación, y había ocupado el cargo de presidente del Banco Nacional de Perú. Una vez en la presidencia, estableció un organismo estatal para que se ocupara del guano, ahora canalizado por completo al consumo nacional. Encuentro a una revuelta fortuita en 1909, encarceló a sus adversarios. De hecho, a lo largo de su carrera, Leguía mostró mucha mayor preocupación por la sustancia de las medidas que por los procedimientos de consulta. Desdenando a los políticos y absorto en la administración, proclamó su demanda de ley y orden.

Resulta bastante irónico que le sucediera un populista errante, Guillermo Billinghurst, que ganó las elecciones de 1912. El movimiento obrero había hecho una tímida aparición en Perú en 1904, con huelgas en las fábricas textiles y otras, y en 1911 se presenciaron algunas protestas serias contra la inflación. Próspero hombre de empresa y periodista, nieto de un oficial naval inglés, Billinghurst hizo la campaña sobre una plataforma que incluía la promesa de una barra de pan mayor por cinco centavos. De ahí su apodo, «Pan Grande» Billinghurst.

Su esperanza era reconciliar los intereses de obreros y empresarios bajo el manto del capitalismo ilustrado. Tenía un toque de demagogo y en cierto modo

era comparable a Hipólito Yrigoyen de Argentina. Propuso la vivienda pública, proclamó su apoyo a la jornada de ocho horas diarias y en 1913 consiguió el apoyo del Congreso para una legislación laboral que garantizaba la negociación colectiva. Estudió las condiciones del campesinado pero, sensible a sus límites, no emprendió ninguna acción. Sus seguidores estaban en las ciudades, no en el campo, y empezó a fomentar manifestaciones callejeras en apoyo de sus medidas. Estupefacta ante tales acontecimientos, la élite cerró filas contra el presidente. En 1914, Billinghurst cayó víctima de un golpe militar.

Al año siguiente, el poder recayó en los tecnócratas civiles, y José Prado, que ya había sido presidente de 1904 a 1908, comenzó otro mandato de cuatro años. A pesar de su posición como católico practicante, supervisó la promulgación de una ley que establecía la tolerancia religiosa. Como la primera guerra mundial continuaba, acabó cortando relaciones con Alemania, en parte con la esperanza de obtener el apoyo estadounidense contra Chile, que era neutral desde el punto de vista técnico, pero pro alemán. Pardo dio curso a alguna legislación laboral, incluidas regulaciones para mujeres y niños. Billinghurst estaba en lo cierto al preocuparse por este sector, ya que fue en él donde Pardo se enfrentó al mayor desafío. En enero de 1919, mientras hacían erupción protestas obreras en Buenos Aires, Santiago y São Paulo, los obreros de Lima y El Callao proclamaron una huelga general de tres días. Apoyados por los estudiantes desplazados desde la Universidad de San Marcos, demandaban alimentos a precios más bajos, una jornada de ocho horas y la promulgación de otra legislación. Pardo tuvo que acudir al ejército para dispersar a los obreros y a raíz de la violencia accedió en parte a sus demandas.

Los choques de 1919 también llevaron a la formación de la organización obrera más importante de Perú, la Federación Obrera Regional Peruana (FORP). Su liderazgo era moderado y pretendía, de forma infructuosa, como después se vio, la negociación colectiva en toda la industria y que fuera de ámbito nacional. A mediados de 1919 también aparecieron un Partido Socialista y un Partido de los Obreros, de orientación más marxista, pero el movimiento obrero y el activismo estaban todavía en sus primeros estadios.

Leguía: el *Oncenio*

En medio de esta confusión, el antiguo presidente Augusto B. Leguía regresó del extranjero, reunió un amplio apoyo y ganó las elecciones de 1919. Luego ejecutó un programa maestro. Declarando que Pardo y el Congreso organizaban un complot para anular su victoria, obtuvo el apoyo militar para un golpe. El 4 de julio tomó con sus camaradas el palacio nacional, envió a Pardo al exilio, disolvió la legislatura y se instaló en el poder. Así comenzó su dictadura, acontecimiento recordado en el Perú como el *Oncenio*.

Tras un inicio acordado a la carrera, Leguía definió los objetivos de su régimen. «He venido no sólo a liquidar el antiguo Estado de las cosas —se informa que dijo—, sino también a detener el avance del comunismo que, debi-

do a que es prematuro entre nosotros, produciría unas consecuencias terribles.» Reaccionando a la alarma roja de 1919, propuso reducir de forma gradual el descontento de la clase obrera levantando una coalición entre capital y movimiento obrero, una alianza que anunciaría la fundación de una nueva patria. Resulta irónico que Leguía intentara completar la tarea iniciada por Billinghurst, el jefe del ejecutivo al que había enviado al exilio algún tiempo antes.

El primer paso fue ajustar el control del poder político. En 1920, una asamblea dócil redactó una nueva Constitución, un documento que legitimizaba el gobierno de Leguía y daba curso al papel del Estado en la economía. Se otorgaban al gobierno poderes explícitos para establecer precios, imponer impuestos y supervisar las relaciones entre empresarios y trabajadores. Iba a asumir la responsabilidad de la educación y asimilación de los indios e iba a formular sus medidas sin las enmarañadas relaciones ejecutivo-Congreso que habían desesperado a las administraciones anteriores: cada cinco años iba a haber elecciones simultáneas para la presidencia y para las dos cámaras legislativas, con lo que prácticamente se aseguraban mayorías efectivas para el jefe del ejecutivo.

Leguía pudo consolidar semejante poder en parte debido a la debilidad y decadencia de los partidos políticos de línea antigua: Civilista, Demócrata, Liberal y Constitucionalista. De hecho, nunca habían sido instituciones fuertes, sino vehículos personales, creaciones de caudillos individuales, organizaciones inestables que se autoperpetuaban. En 1920, eran incapaces de enfrentarse a los retos existentes, ya provinieran de las masas o de Leguía, y se retiraron en silencio. Realmente, con una sola excepción, descrita más adelante, la política peruana ha padecido una ausencia relativa de partidos fuertes y duraderos.

Leguía silenciaba sus críticas de forma agresiva. El ministro del Interior, Germán Leguía y Martínez, sobrino suyo conocido como «El Tigre», tenía mano libre para forzar a los oponentes a abandonar el país. El régimen exilió a Antonio Miró Quesada, editor de *El Comercio*, y tomó *La Prensa*, convirtiéndolo en un periódico progubernamental. El dictador echó de sus cátedras de la universidad a los profesores disidentes y también se volvió contra los estudiantes que en otros tiempos le aclamaron como su «mentor». En 1924, Leguía llegó a apropiarse de la religión, cuando consagró la República de Perú al Sagrado Corazón de Jesús. Las manifestaciones en contra fueron reprimidas con facilidad y utilizó la ocasión para detener y deportar al menos a treinta estudiantes universitarios, entre los que se encontraba un joven líder en alta llamado Víctor Raúl Haya de la Torre.

Otras formas de descontento fueron despachadas con igual eficiencia. En cumplimiento de la Constitución de 1920, Leguía creó una oficina de asuntos indios bajo la dirección activa de Hildebrando Castro Pozo. Sin embargo, cuando comenzó a investigar los títulos de tierras y otras delicadas cuestiones, los gamonales reaccionaron y Leguía entró en acción. En 1923, envió al ejército para aplastar un levantamiento indio en la sierra. A pesar de la retórica pública, los campesinos y los indios no tenían un lugar genuino en su coalición.

Para construir la nueva patria, emprendió un vigoroso programa de obras públicas. Con los ingresos procedentes de la exportación, invirtió en transportes e infraestructura, mejorando carreteras y puentes y construyendo más de 1.000 nuevos kilómetros de ferrocarril. Parte de la mano de obra provino de la infame conscripción vial, que obligaba a los varones pobres del campo a trabajar en la construcción de forma gratuita, y también fomentó la inversión extranjera. En 1925, las propiedades de la Cerro de Pasco Copper Corporation llegaban a los 50 millones de dólares y la IPC se estaba preparando para explotar los campos petrolíferos de La Brea-Pariñas.

La piedra angular de la política económica de Leguía era, por supuesto, el fomento del modelo de crecimiento orientado a la exportación-importación. El descenso de posguerra de los ingresos por comercio exterior aumentó la presión sobre el sistema, pero no hizo que se apoyara el desarrollo industrial. Ya antes de la primera guerra mundial Perú había comenzado a comprar la mayoría de sus importaciones a Estados Unidos y no a Europa, por lo que la escasez de suministros durante la guerra no fue tan severa como para otros países latinoamericanos. El retraso comercial de posguerra redujo el capital disponible para inversiones, por supuesto, y los empresarios colonizaron lo que tenían en operaciones que presentaran una seguridad relativa, es decir, en los ámbitos favorecidos por el programa de obras públicas de Leguía, tales como la construcción o bienes raíces. En consecuencia, todos los principales socios de la élite capitalista peruana —comerciantes, banqueros e importadores— expresaron su alarma cuando los términos del comercio comenzaron a apuntar hacia la depreciación de la moneda nacional. (Aunque la devaluación favorece las exportaciones y a menudo es recomendada por los productores, la élite peruana en esta ocasión estaba más interesada en retener su capacidad de importar artículos del exterior o de invertir en el mercado internacional.) La administración de Leguía los escuchó. En 1922, el banco central vendió una gran cantidad de oro y reservas de divisas, y a mediados de la década se consiguió un crédito importante con el propósito expreso de mantener un tipo de cambio alto para el sol peruano.

Leguía siguió una activa política exterior con los países vecinos. En 1927, su gobierno saldó una antigua disputa fronteriza con Colombia. Dos años después, en 1929, llegó a un acuerdo con Chile: la provincia norteña de Tacna pasaría a Perú y Arica seguiría bajo control de Chile. Con ello, por fin se puso término a la guerra del Pacífico, tan ignominiosa para Perú.

Dentro de este entorno político construido con tanto cuidado, no tuvo problemas para conseguir ser reelegido en 1924 y 1929. Parecía invencible. Sus seguidores controlaban el Congreso, mientras que sus adversarios estaban en el exilio o en la cárcel. Durante los años veinte fué considerado como la quintaesencia del tecnócrata aristocrático: como los científicos del México prerrevolucionario, Leguía y sus seguidores hicieron una política económica que cumpliera las prescripciones de la expansión capitalista orientada a la exportación. Pero, como en el caso de México, no pudo durar eternamente.

La crítica reformista

Los altibajos ocurridos en la historia peruana desde la independencia inspiraron varios tipos de críticas internas. Algunos culpaban a los indios y otros denunciaban a los españoles. Algunos querían elevar al país con nuevos ideales o nuevas incorporaciones de tradiciones espirituales, mientras que otros se centraban en la base material del progreso nacional. Entre estos intelectuales tres merecen una atención especial: Manuel González Prada, José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Haya de la Torre.

González Prada, nacido en 1848, de ascendencia aristocrática y española, deseaba reavivar el espíritu patriótico tras la guerra del Pacífico. Pensaba que Perú había perdido su valor moral y la falsa prosperidad del periodo del guano le había llevado a la degeneración. Según él, los ricos sirvieron como un elemento de corrupción, no de progreso material. Ningún medio de adquisición parecía ilícito. La gente se habría arrojado a una alcantarilla si hubiera avistado al fondo un sol de oro. Los esposos vendían a sus esposas, los padres a sus hijas, los hermanos a sus hermanas. Influido por el socialismo europeo de la década de 1890, vituperaba el capitalismo y el catolicismo. Perú debía buscar su renovación aunando fuerzas con sus indios para derribar, por la violencia si fuera necesario, el sistema prevaleciente. Era el momento de actuar. «Los viejos a la tumba —declaró en una famosa exclamación de ánimo—, los jóvenes a trabajar.»

Uno de los más agudos críticos de Leguía fue José Carlos Mariátegui, escritor y periodista de orígenes humildes. Socialista en el fondo, se convirtió en el representante del indigenismo. El socialismo predica solidaridad y la redención de las clases obreras, razonaba. Cuatro quintos de las clases obreras peruanas están compuestos por indios andinos. Así pues, socialismo significa la redención de esos indios. ¿De qué modo? La tierra era la respuesta. Según él, la cuestión india tenía sus raíces en el sistema de posesión de la tierra. Todo esfuerzo para resolverlo con medidas administrativas o protectoras, con métodos educativos o proyectos de carreteras, representaba una labor superficial mientras existiera el feudalismo de los grandes latifundistas. Y para quienes se atormentaban con la supuesta decadencia racial de Perú, tenía una respuesta cáustica: la degeneración del indio peruano es una invención barata de los parásitos de la mesa feudal. En suma, quería crear una sociedad utópica adaptando el colectivismo del imperio inca y en particular la forma de organización comunal del *ayllu*.

En 1926 Mariátegui lanzó un influyente periódico, *Amauta*, dedicado al arte y la política. Su colección más famosa de escritos apareció en forma de libro como *Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana*. En 1929 ayudó a fundar un Partido Socialista que pronto se afilió a la Internacional Comunista. En 1930, a la edad de treinta y cinco años, murió de una enfermedad crónica. Perú, y toda América Latina, perdieron a uno de sus pensadores políticos más creativos.

Compañero y rival suyo era Víctor Raúl Haya de la Torre, que de estudiante había sido exiliado por Leguía en 1924. Ese mismo año, en Ciudad de México, Haya de la Torre había fundado lo que denominó Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA). Compartía algunas ideas con Mariátegui e intentaba crear un instrumento práctico para la acción. El APRA, un proyecto bastante grandioso, proclamó un programa de cinco puntos para la redención de «Indoamérica»: resistencia al imperialismo yanqui, unidad política de América Latina (Indoamérica), nacionalización de la tierra y de la industria, internacionalización del canal de Panamá y, de modo más general, solidaridad con los oprimidos del mundo. Para Perú, por fin, declaraba un programa más específico: control estatal de la economía, nacionalización a largo plazo de los sectores clave y protección de las libertades políticas y los derechos humanos.

Haya de la Torre era un brillante organizador y un orador electrizante, que después fundó el Partido Aprista de Perú. Bajo su retórica populista yacía una preocupación por el bienestar de los sectores medios de la sociedad. Como una vez declaró: «Es este grupo medio al que el avance del imperialismo empuja a la ruina. Las grandes firmas extranjeras extraen nuestra riqueza y entonces la venden fuera de nuestro país. En consecuencia, no hay oportunidades para nuestra clase media. Ésta es entonces la clase oprimida que dirigirá la revolución».

Con revolución o sin ella, debido a su base del sector medio o a pesar de ella, el APRA iba a convertirse en el partido más duradero de la historia de Perú e iba a tener un impacto importante en el curso de la política nacional, hasta su ignominiosa defunción a finales de los años ochenta.

Coqueteo con las alternativas

La Gran Depresión supuso una pérdida inmediata para la economía peruana. Los ingresos por exportación cayeron en picado (como muestra la figura 6.1), los ingresos disminuyeron y aumentó el descontento. Frente a la crisis, la incompetencia y la decadencia del gobierno de Leguía suscitaron cólera y desprecio. En agosto de 1930, un joven oficial del ejército, Luis M. Sánchez Cerro, encabezó un alzamiento en Arequipa, que terminó con el derrocamiento del presidente Augusto B. Leguía (que más tarde murió en la cárcel).

Sánchez Cerro se puso al frente de una junta militar y Perú se embarcó en una nueva era política. De orígenes modestos, cholo sin lugar a dudas, dio un toque distinto al cargo ejecutivo. Mientras hacía campaña por todo el país para obtener la legitimidad de la junta y para adelantar sus ambiciones personales, consiguió una fuerte adhesión popular. No ofrecía una ideología coherente, pero era evidente que intentaba forjar una coalición populista entre elementos escogidos de la aristocracia y las masas trabajadoras. En marzo de 1931,

en un acceso de frustración, renunció a su cargo y se embarcó rumbo a Europa. Regresó unos meses después, esta vez como candidato presidencial de la Unión Revolucionaria. Su principal rival era Haya de la Torre y el Partido Aprista.

La campaña de 1931 resultó ser uno de los acontecimientos más fatídicos y controvertidos de la historia peruana. Sánchez Cerro pedía la reforma agraria, programas de extensión agraria y la asimilación de los indios: «Hasta que no consideremos a todo nuestro pueblo, indios y no indios, peruanos, con los mismos derechos y deberes, nunca surgirá la unidad que es el elemento indispensable de la nación». Haya de la Torre replicaba haciendo hincapié en la perversidad del imperialismo y la existencia de desigualdades sociales. Fue una campaña intensa, marcada por la violencia y las acusaciones mutuas. El aprismo (así se conocía al movimiento del APRA) reveló fortaleza electoral en la región costera del norte, en particular en las zonas azucareras que rodeaban Trujillo, donde la modernización económica había llevado al desplazamiento social y a la frustración popular acerca de la destrucción de la sociedad tradicional; el partido también recibió un amplio apoyo en Lima y otros lugares. Pero al final fue Sánchez Cerro quien ganó con un recuento oficial de 152.062 votos contra los 106.007 de Haya de la Torre.

A continuación vino la polarización. El movimiento aprista, con sus premisas marxistas, ofrecía una crítica de izquierdas sobre la sociedad peruana. También había un movimiento formidable de derechas. Como en Argentina, algunos conservadores simpatizaban a las claras con el fascismo. José de la Riva Agüero era elocuente sobre el tema: «Arriba el catolicismo —declaraba—, arriba el Estado corporativo y el fascismo, con orden, jerarquía y autoritarismo». Era tiempo de una acción decisiva:

No puede haber término medio. O a la derecha o a la izquierda. Democracia, capitalismo, la tradición liberal, todos representan un término medio que en realidad están disfrazando el comunismo o el camino cierto hacia él. La única solución es regresar a la tradición medieval, católica e hispánica encarnada ahora en el fascismo.

No resulta sorprendente que el movimiento de derechas de Francisco Franco en España tuviera numerosos simpatizantes en Perú durante la guerra civil española.

La tensión continuó aumentando. A comienzos de 1932, un joven aprista trató de asesinar a Sánchez Cerro. El presidente estaba ahora determinado a aplastar a los apristas, pero éstos tenían sus propios planes de insurrección en la ciudad de Trujillo. Los rebeldes lograron tomar toda la ciudad, incluida la guarnición militar. Una poderosa columna del ejército rodeó pronto a los apristas, que decidieron huir. En el pánico que siguió, y quizás por órdenes superiores, los insurgentes ejecutaron a unos diez oficiales del ejército, a quince policías y a veinticinco civiles, todos rehenes. Cuando las



Un cartel electoral aprista expresa la perspectiva del partido y la intensidad de la campaña de 1931. (Colección privada.)

tropas gubernamentales descubrieron esta atrocidad, ejecutaron sumariamente al menos a 1.000 (las estimaciones llegan hasta 6.000) residentes de la ciudad sospechosos de haber concedido apoyo armado a los apristas. Este desagradable intercambio de asesinatos estableció el tono de las relaciones entre el APRA y el ejército a partir de entonces. Para los militares tomó el carácter de una lucha encarnizada y convenció a muchos oficiales de que nunca debían dejar que el APRA llegara al poder.

Mientras tanto, Sánchez Cerro intentaba consolidar su poder e impulsó una nueva Constitución. En abril de 1933, otro pistolero aprista logró asesinarlo. Acosado por una nueva crisis, el Congreso eligió al general Óscar R. Benavides para ocupar el cargo hasta que terminara el mandato.

Cuando éste ocupó la presidencia, Perú entró en una fase de transición

económica, un periodo que presentaba la oportunidad de reducir la dependencia del país de los mercados e inversiones internacionales. Con el algodón a la cabeza, las exportaciones comenzaron a recuperarse a partir de 1933. Pero debido a la Gran Depresión y después a la segunda guerra mundial, el capital extranjero se batió en firme retirada: la proporción de exportaciones producidas por empresas extranjeras cayó cerca de un 60 por 100 a finales de los años veinte y a un 30 por 100 o menos a finales de los años cuarenta. (En 1967, subiría hasta un 50 por 100.) Los empresarios nacionales, a veces con ayuda gubernamental, obtuvieron cada vez más control sobre el plomo y el zinc, y también sobre parte de la plata y el oro. La producción petrolera aumentó durante los años treinta. La capacidad industrial era modesta, pero de todos modos parecía que Perú se estaba volviendo capaz de reorientar su economía si así lo decidía.

Benavides mostró cierto deseo de aprovechar la oportunidad. En 1934, su gobierno comenzó a ocuparse del desarrollo del petróleo bajo dirección estatal. El comercio se duplicó de 1933 a 1936 y el sol permaneció estable frente al dólar. Utilizó una buena parte de los ingresos gubernamentales para obras públicas y proyectos sociales, que incluían la construcción de carreteras, viviendas para la clase obrera y un sistema de seguridad social obligatorio. Apoyó al banco agrícola fundado en 1931 para proporcionar créditos a los plantadores de algodón y otros latifundistas, con lo que se redujo el papel de las empresas mercantiles extranjeras.

En la arena política, Benavides trató de reducir la polarización y de lograr el consenso nacional. La solución de una disputa fronteriza con Colombia le ganaron aprobación y tiempo, pero el camino resultó accidentado. En un primer momento, ofreció la amnistía a los apristas encarcelados, pero luego, a medida que se intensificaba el conflicto, nombró como primer ministro al pro fascista Riva Agüero. Siguieron severas medidas. En 1936, Benavides anuló las elecciones ganadas por un candidato apoyado por los apristas y se mantuvo en el poder durante tres años más.

En 1939 la presidencia pasó a Manuel Prado, un civil moderado que adoptó una postura conciliatoria hacia los apristas. Todos los partidos importantes expresaron su apoyo por la posición de Prado en favor de los Aliados durante la segunda guerra mundial. Perú también salió victorioso de un breve enfrentamiento militar y obtuvo un triunfo diplomático en un conflicto fronterizo con Ecuador. Los asuntos exteriores parecían estar teniendo un efecto curativo.

En 1945 el triunfo electoral fue para José Luis Bustamante y Rivero, que se presentó como candidato del Frente Democrático Nacional, con el apoyo del APRA. Pronto se enfrentó a una serie de batallas políticas, cuando los delegados apristas en el Congreso intentaron recortar la autoridad del ejecutivo. La inflación y la escasez de alimentos plantearon graves retos socioeconómicos. Y en medio de la controversia pública, Bustamante aprobó un contrato que otorgaba a la IPC el permiso para buscar petróleo en el desierto de Sechura.

Prado y Bustamante juntos promovieron la modesta reorientación de la economía peruana. Aumentaron de forma considerable el gasto gubernamental (que Benavides había intentado mantener controlado). Introdujeron un sistema de tipo de cambio fijo y establecieron controles a la importación junto con el racionamiento de las divisas. También lanzaron un plan para el control estatal del hierro y la planta de acero. En resumen, modificaron la senda del desarrollo económico peruano al menos en dos aspectos cruciales: fortalecieron el papel del Estado y redujeron la dependencia de las importaciones y exportaciones. Todo ello suscitó la ira de los productores dedicados a la exportación, en particular de los plantadores de azúcar.

Un eje central de la política de Prado y Bustamante era la diversificación de la agricultura, lo que llevó a una serie de medidas que los magnates azucareros consideraron amenazadoras y con razón: aumento de los impuestos a la exportación, racionamiento del guano, presión para cultivar productos alimenticios y, en 1941, la insistencia de que los productores de azúcar satisficieran las cuotas de los mercados internos antes de exportar a los exteriores. Aprovechando el alboroto ocasionado por el contrato Sechura, que levantó un fuerte sentimiento nacionalista, la élite costera apoyó un movimiento militar contra el gobierno de Bustamante. En 1948 tomó el poder el general Manuel A. Odría.

Liberalismo económico y vacilación política

El golpe de Odría de 1948 constituye otra línea divisoria del Perú contemporáneo. En economía, llevó a la restauración del modelo de crecimiento abierto, orientado a la exportación. En política, inició una era de incertidumbre, de gobierno dictatorial y de confusión electoral. Las contradicciones del sistema acabarían apareciendo con una claridad meridiana.

Bajo la mirada vigilante de la élite, el régimen de Odría adoptó medidas en favor de los plantadores. Se liberó el tipo de cambio, se levantaron las restricciones a la importación, se fomentó la inversión extranjera en la minería y el petróleo y se buscó el consejo de expertos estadounidenses acerca de la estabilización de la moneda. Sobre todo, como observan Rosemary Thorp y Geoffrey Bertram, el gobierno de Odría trató de llevar a cabo «ese sueño de desarrollo ortodoxo de los economistas», algo que se persiguió hasta 1968: «un sistema orientado a la exportación en el que las dificultades cíclicas de la balanza de pagos se solventaban con la restricción de la demanda interna y la devaluación de la divisa, en el que la entrada de capital extranjero y la repatriación de beneficios apenas tenían restricciones y en el que la intervención y participación del gobierno se mantenían al mínimo». En este último aspecto en particular, Perú parecía estar en desacuerdo con el resto de América Latina. Otro economista, Shane Hunt, señala: «En un continente que presenciaba una intervención cada vez mayor del Estado en la vida económica en un país tras otro, Perú se dio la vuelta y empezó a caminar en dirección contraria».

Para fortalecer su autoridad, Odría se ocupó de inmediato de sus adversarios, en especial de los apristas. Haya de la Torre consiguió escapar de la cárcel buscando refugio en la embajada colombiana, donde permaneció durante más de cinco años, en espera de un salvoconducto militar. La disidencia se dispersó y las libertades civiles se volvieron precarias.

Odría consolidó su posición al ganar las elecciones de 1950 —no hubo oposición— y procedió a imponer su régimen. De forma bastante consciente, comenzó a emular el estilo y los modales de Juan Perón, de Argentina. Cortejó a las masas obreras, más en las ciudades costeras que en la sierra rural. Derrochó fondos en obras públicas ostentosas, de forma más notable en Lima. Creó un séquito de seguidores personalista y, con la ayuda de su esposa, María Delgado de Odría, trató de movilizar a las mujeres en apoyo del régimen, extendiéndoles el sufragio en 1955.

Un descenso de los ingresos por exportación tras el fin de la guerra de Corea en 1953 puso término al auge odrísta. Aumentó el desempleo, subió la inflación y los trabajadores fueron a la huelga. Los oligarcas civiles expresaron su aprensión sobre la forma caprichosa de gobernar que tenía el presidente y, sometido a presión, no tuvo más remedio que permitir elecciones libres en 1956.

Los principales contendientes ese año fueron el antiguo presidente Manuel Prado, apoyado por los apristas, y alguien nuevo en política llamado Fernando Belaúnde Terry, candidato del Frente Nacional de la Juventud Democrática. Belaúnde era un arquitecto formado en la Universidad de Texas, de una familia prominente, que comenzó a articular las esperanzas y frustraciones de los sectores medios cultos del país. Pero aún no había llegado su momento. El ganador fue Prado, con 568.000 votos; Belaúnde, con 458.000 quedó en un respetable segundo puesto.

Prado trajo un periodo de estabilización política, permitió la organización de sindicatos y la actuación libre de comunistas y apristas. A finales de su mandato, las organizaciones obreras pudieron declarar unos 330.000 miembros. Mediante su ministro de Economía, el aristócrata Pedro Beltrán, continuó la política de Odría, poniendo énfasis en las exportaciones y la empresa extranjera. Se anunció un programa de «Techo y tierra» en favor de los campesinos, pero se hizo poco con él.

Las siguientes elecciones presidenciales, en 1962, ofrecieron un cuadro claro de las fuerzas políticas peruanas. Los candidatos presidenciales fueron Haya de la Torre, que por fin podía presentarse por la plataforma aprista; Belaúnde, que había creado una nueva organización llamada Acción Popular; y el siempre esperanzado Odría, a la cabeza de la Unión Nacional Odrísta. El único partido genuinamente institucional era el APRA; los otros eran vehículos personales de sus líderes respectivos. En parte por esta razón, Haya obtuvo el mayor número de votos (557.000), pero su escasa mayoría del 33 por 100 significó que el resultado tuviera que ser decidido por el Congreso. Siempre oportunista, Haya procedió a llegar a un acuerdo con Odría. Sin embargo, las fuerzas armadas, que nunca habían perdonado el asesinato de sus

compañeros en Trujillo el año 1932, de inspiración aprista, se negaron a aceptar la perspectiva de un presidente aprista y suspendieron el Congreso, anunciendo que serían convocadas nuevas elecciones.

Éstas llegaron en 1963. Con el apoyo de los demócratas cristianos, Belaúnde salió vencedor con un 39 por 100. El APRA le seguía con el 34 por 100 y los odríistas consiguieron un 26 por 100. Al haber sido derrotados los apristas, los militares aceptaron los resultados y dejaron que Belaúnde ocupara la presidencia.

Belaúnde se reveló como un político atrayente, a veces hasta carismático. Gozando del papel de visionario, propuso construir una autopista transamazónica que abriría al desarrollo la exuberante región de la selva peruana. Invocó el recuerdo de los incas y alentó a sus compatriotas a aspirar de nuevo a la grandeza. Viajó por todo el país y habló con campesinos y trabajadores, así como con plantadores y empresarios, tratando sin descanso de generar el consenso nacional.

A un nivel más práctico, Belaúnde reconoció la necesidad de ajustes en el modelo económico peruano. En particular, comenzó a aumentar el papel del Estado y a extender los servicios sociales. Empezó a conceder incentivos para la manufactura e insistió en la necesidad de la reforma agraria.

No obstante, sus esfuerzos fracasaron. Cuando su proyecto de ley para la reforma agraria salió del Congreso, había sido desvirtuado casi por completo. Hacía hincapié en la mejora técnica y no en la distribución de la tierra, con la esperanza aparente de que los hacendados aumentaran la producción. Y debido a las objeciones de apristas y odríistas, exoneraba las posesiones azucareras de la costa, donde los apristas habían levantado sólidos sindicatos y donde los odríistas tenían su apoyo de derechas.

Así que la reforma agraria fue más una promesa que un hecho, y los campesinos de la sierra acabaron reaccionando con ira. Comenzaron a invadir las haciendas, apoderándose tanto de las tierras cultivadas como de los campos en barbecho, y el conflicto bramó por todos los Andes. Coincidiendo con la protesta campesina, había un movimiento de guerrilla al estilo cubano dispuesto a establecer un foco o núcleo rural. Che Guevara y el joven intelectual francés Régis Debray habían sostenido que si un foco tenía éxito, podía ser la chispa que prendiera una revolución nacional.

Al año más o menos, Belaúnde decidió que debía suprimir las guerrillas campesinas y mandó al ejército regular con esta misión. En 1966, el movimiento había sido aplastado. Según una estimación, la represión causó la muerte de 8.000 campesinos, dejó sin hogar a 19.000, encarceló a 3.500 y se destruyeron 14.000 hectáreas de tierra por el fuego y el napalm. Fue una experiencia traumática para los 300.000 campesinos que se habían alzado y para los soldados que tuvieron que reprimirlos.

Otra de las promesas de Belaúnde era resolver la antigua disputa con la IPC y aquí también afrontó una situación sin ganadores. Tras cinco años de prolijas negociaciones, durante las que Estados Unidos reveló una hostilidad continua hacia las inclinaciones nacionalistas de Perú, el gobierno de Be-

laúnde se rindió. La IPC renunció a reclamar los campos petrolíferos de La Brea-Pariñas, que de todos modos ya estaban agotados, mientras que Perú aceptaba no reclamar los impuestos atrasados; la IPC logró el acceso a nuevos campos en el Amazonas; y el gobierno accedió a venderle crudo a un precio fijo para que se refinara en el complejo que la compañía poseía en Talara. En medio de un coro de denuncias, la administración de Belaúnde publicó todo el acuerdo, menos la página en la que aparecía el precio del crudo producido por el Estado. El escándalo creó una conmoción, mientras los adversarios acusaban al gobierno de vender el crudo demasiado barato a la compañía extranjera.

La economía fue rechinando hasta pararse. En agosto de 1967, el gobierno devaluó el sol un 47 por 100. Los controles sobre la importación y los impuestos a la exportación mejoraron la balanza de pagos. Como descendió la inflación, también lo hizo el crecimiento. La optimista visión de Belaúnde, el sueño de un Perú próspero y unido, estaba resultando una ilusión. En octubre de 1968, los militares decidieron de nuevo mandar sus tanques al palacio presidencial. Sin embargo, esta vez no instalarían un gobierno provisional.

La revolución militar

El golpe militar pavimentó el camino para uno de los gobiernos militares más ambiciosos de América Latina. Encabezada por el general Juan Velasco Alvarado, la junta declaró de inmediato su intención de efectuar cambios de largo alcance en la estructura de la sociedad peruana. Un comunicado emitido el día del golpe acusaba el «injusto orden social y económico que pone el usufructo de la riqueza nacional sólo al alcance de los privilegiados, mientras la mayoría sufre las consecuencias de una marginación injuriosa de la dignidad humana». Los oficiales proclamaban que lo que Perú necesitaba era un nuevo orden económico, «ni capitalista ni comunista», un sistema que aboliera las desigualdades prevalecientes y creara los fundamentos materiales para la armonía, la justicia y la dignidad.

La combinación de tres cualidades separó a este régimen de los gobiernos militares que habían existido antes en Perú y en el resto de América Latina. Una era la autonomía social y política. Esta vez las fuerzas armadas habían actuado solas y no en colusión con grupos de poder civiles; los militares de clase media no tenían obligaciones hacia nadie, lo que les dejaba las manos excepcionalmente libres. La segunda era que los dirigentes del régimen adoptaron de forma implícita las perspectivas y premisas de la escuela de análisis de la «dependencia». Así pues, uno de sus objetivos principales era terminar con lo que llamaban «la subordinación de la economía peruana a los centros de decisión donde se originan las acciones que afectan fundamentalmente a la vida económica de la nación e impide un proceso de desarrollo autónomo dirigido al logro de los objetivos nacionales». Y la tercera,

en gran parte resultado de su campaña contra la guerrilla en la sierra, era que los militares peruanos sentían una simpatía genuina hacia la situación del campesinado oprimido durante tanto tiempo.

El fruto fue un régimen militar revolucionario. Las perspectivas parecían asombrosas, si no contradictorias; en frase de Fidel Castro, «como si se hubiera iniciado un fuego en el hogar».

Una clave del programa estatal era la reforma agraria. A mediados de 1969, el gobierno de Velasco anunció la promulgación del programa de reforma agraria más vasto de América Latina desde la Revolución Cubana. «Campesinos —declaró el general Velasco—, los latifundistas ya no comerán más de vuestra pobreza.» Todos los grandes latifundios, sin tener en cuenta su productividad, estaban sujetos a la expropiación. El hacha se sintió primero en las plantaciones de azúcar de la costa muy mecanizadas, que se colocaron bajo la administración de cooperativas de trabajadores llamadas CAPS (Cooperativas Agrícolas de Producción). Para la sierra la idea era crear granjas pequeñas o medianas, pero pronto el gobierno cedió a las demandas campesinas de formas de organización en cooperativas. La principal fue la SAIS (Sociedad Agrícola para el Interés Social), la unidad reconocida por el gobierno que podía combinar peones de las haciendas con aldeanos de las comunidades circundantes. A mediados de los años setenta, se estimó que tres cuartas partes de la tierra productiva del país estaban gestionadas por distintas clases de cooperativas. Un observador informaba en 1974: «La élite agraria prácticamente ha desaparecido como grupo de poder». En 1979 la mitad de los 21 millones de hectáreas de agricultura y pasto de la costa y las tierras altas habían sido expropiadas a los terratenientes y entregadas a los campesinos. No quedaba tierra en los inmensos latifundios que habían dominado el sector agrario peruano.

El régimen de Velasco dio firmes pasos para institucionalizar estos cambios fundamentales. La asociación tradicional de la élite de plantadores, la Sociedad Nacional Agraria, fue abolida por decreto en 1972. En su lugar, apareció la Confederación Nacional Agraria (CNA), una organización superior para los colectivos regionales.

En 1971, el régimen de Velasco creó una de sus instituciones más características, el Sistema Nacional en Apoyo de la Movilización Social (SINAMOS). A veces escrita en dos palabras —*sin amos*— iba a servir como institución integradora para grupos campesinos y de la clase obrera. De este modo, vincularía al régimen con las masas e identificaría al gobierno con los grupos que lo constituyan, y promovería un juego de relaciones armoniosas entre el dirigente y sus seguidores.

Este deseo de organizar y movilizar a los campesinos se convirtió en uno de los sellos del nuevo gobierno militar. Reflejaba el grado hasta el que los nuevos gobernantes de Perú pretendían reestructurar la distribución del poder, no sólo en los altos tramos de la autoridad, sino también en las bases de la sociedad.

Una segunda área que atrajo la atención de Velasco fueron las barriadas marginales que se extendían alrededor de Lima y otras ciudades. A finales de

los años sesenta, se estimaba que sólo en los alrededores de Lima vivían 750.000 migrantes recién llegados. Los militares concluyeron que era una situación explosiva, así que determinaron reorganizar los asentamientos, que ahora se llamaron *pueblos jóvenes*, y pidieron la ayuda de la Iglesia a sus esfuerzos. Parte de la solución era bastante simple: otorgar títulos de propiedad a los ocupantes migrantes.

La otra táctica fue poner a los pueblos jóvenes bajo la sombra protectora del SINAMOS. El objetivo era crear las condiciones para la estabilidad. Como declaró un oficial: «Queremos participación, pero debe ser participación organizada. Queremos hacer propietarios a la mayor cantidad de gente posible, luego ellos actuarán con responsabilidad hacia su comunidad y tendrán interés en ella». En 1974 la mayoría de los ocupantes urbanos ilegales habían sido reorganizados desde arriba en pueblos jóvenes estatales.

Este modelo de organización y movilización de arriba abajo ilustra un rasgo crucial del régimen de Velasco. No intentaba construir una sociedad socialista, como hicieron Allende en Chile o Castro en Cuba, ni pretendía excluir y reprimir los movimientos obreros ya organizados, como hicieron los gobiernos militares de Chile, Brasil y Argentina, sino integrar las masas urbanas y rurales marginadas en la sociedad nacional para establecer los cimientos de la industrialización y el desarrollo autónomo. La estrategia principal para ello era incorporar a tales grupos bajo la guía y el tutelaje del Estado, que a su vez regularía las disputas civiles. Esto permitiría el logro de un importante objetivo, que ha aparecido con frecuencia en los decorados latinoamericanos: la reducción del conflicto de clases.

En su esfuerzo por eliminar la lucha de clases y establecer la armonía social, el régimen peruano surgió como un Estado corporativo típico. Por su énfasis en organizar e integrar los grupos de clases inferiores, recordaba al gobierno de Cárdenas en México (1934-1940) y la primera parte del de Perón en Argentina (1946-1950).

El mismo principio básico se aplicó al sector fabril, para el que el gobierno promulgó una ley de «comunidad industrial». Según este esquema, los empleados de cada empresa de seis o más trabajadores —miembros de la «comunidad industrial»— iban a adquirir de forma gradual el 50 por 100 de las existencias de la compañía y a obtener representación en la junta de dirección. Los trabajadores se convertirían en copropietarios con los empresarios y, en principio al menos, el conflicto de clases desaparecería. Los patronos encontraron varios medios de esquivar esta legislación, pero a finales de 1974 ya había aproximadamente 3.500 comunidades industriales con 200.000 miembros que controlaban el 13 por 100 de todas las acciones de sus empresas.

Para acelerar este proceso, el gobierno creó el sector de la «propiedad social», mediante el cual las empresas podían ser controladas y dirigidas sólo por trabajadores, y los productos iban al sector en su conjunto. Parte de los ingresos se dedicaban a salarios, vivienda y servicios, y parte se reservaba para reinvertirlos en otras industrias de propiedad social.

Al mismo tiempo que otorgaba a los trabajadores participación en la in-

dustrialización peruana, el régimen militar emprendió una serie de medidas para reducir el papel del capital extranjero. En el momento de la toma de poder, en 1968, 242 empresas con una inversión extranjera significativa eran responsables del 44 por 100 de la producción industrial del país. Esto resultaba inaceptable para el gobierno. Velasco declaró en 1970: «Ha pasado ahora el momento en que juzgábamos el proceso de industrialización en abstracto como una panacea para todos nuestros problemas. Ahora es imperativo determinar el tipo de industrialización». Para recortar el papel del capital extranjero, el gobierno comenzó a requerir la aprobación de una nueva inversión por parte de una junta de regulación, a prohibir la compra de empresas viables locales y a excluir la participación extranjera en áreas delimitadas. Perú también asumió un papel notable en la promoción de la cooperación económica regional mediante el Pacto Andino.

Pero los pasos más decisivos conllevaron la expropiación. Poco después del golpe, el régimen anunció la nacionalización de la IPC, ante la delirante aprobación del público, y el establecimiento de PetroPerú con el apoyo estatal. Con el tiempo, el gobierno se hizo con otras importantes empresas extranjeras: ITT (1969), Chase Manhattan Bank (1970), Cerro de Pasco (1974) y Marcona Mining (1975), las dos últimas reemplazadas por MineroPerú. Estos actos se encontraron con la hostilidad de Estados Unidos, pero en febrero de 1974 ambos gobiernos alcanzaron un acuerdo mediante el cual Perú pagaría 150 millones de dólares para cancelar totalmente las reclamaciones de las empresas estadounidenses (incluida la IPC) y Washington dejaría de oponerse a la concesión de créditos internacionales a Perú.

A pesar de su posición populista, el gobierno de Velasco encontró una considerable resistencia interna. Los sindicatos de trabajadores existentes, como las organizaciones dominadas por los apristas del sector azucarero, se resintieron de las incursiones en su terreno. Los campesinos se encontraron con que las instituciones de arriba abajo no respondían a sus demandas y comenzaron a organizar protestas en las oficinas de SINAMOS. La élite tradicional no expresó nada más que horror ante las medidas del régimen, por supuesto; en respuesta, los generales se hicieron con el control de los medios de comunicación. En 1970 se tomaron cuatro periódicos, al año siguiente le tocó el turno a la televisión y a la radio, y otros seis diarios limeños se pusieron bajo dirección progubernamental en 1974. Esto sólo sirvió para aumentar los problemas del gobierno, cuando los periodistas y los representantes del sector medio denunciaron estas restricciones a la disidencia.

Sin duda, el gobierno militar era un régimen autoritario. Los adversarios fueron acosados, intimidados, exiliados y encarcelados. Además, contaba con un cuadro de tecnócratas empeñados en lograr el crecimiento y desarrollo económicos. Así que en cierto grado era un régimen «burocrático-autoritario», pero diferente de las formas prototípicas de Argentina y Brasil en tres aspectos al menos: primero, comenzó como un gobierno militar extremadamente autónomo que no conllevó una coalición con inversores extranjeros y capitalistas nacionales; segundo, intentaba lograr apoyo mediante la inclusión

de los grupos de clases inferiores; tercero, no se empeñó en las campañas de terror sistemático que tenían lugar en el cono sur.

Las condiciones económicas se añadieron a los infortunios de Velasco. Descendieron los ingresos por exportación, como se muestra en la figura 6.1. Desapareció la industria de harina de pescado, las exploraciones petroleras no descubrieron nuevos depósitos de crudo y cayeron los precios mundiales del azúcar y el cobre. La balanza de pagos se deterioró, la deuda externa se dilató y golpeó la inflación. Los trabajadores comenzaron a demostrar su descontento. En 1975 hubo 779 huelgas, en comparación con las 414 de 1967.

→ Cuando estos problemas comenzaban a cernirse en el horizonte, el mismo Velasco sucumbió a su mala salud en 1972: el diagnóstico fue serios problemas circulatorios. Su poder se debilitaba, aunque lentamente, y sus colegas acabaron concluyendo que debía marcharse. En agosto de 1975, la junta lo reemplazó por el general Francisco Morales Bermúdez (que dio la casualidad de ser descendiente de un presidente anterior). De este modo, llegaba a su fin un periodo.

En efecto, Morales Bermúdez presidió la modificación —si no el desmantelamiento— del experimento de 1968-1975. Se permitió que SINAMOS languideciera. Bajo la presión del FMI, el gobierno impuso un programa de austeridad económica que redujo la proporción de adultos con un empleo adecuado al 42 por 100. La renta real de la clase obrera urbana descendió un 40 por 100 entre 1973 y 1978. En febrero de 1977, Morales Bermúdez desveló el Plan Túpac Amaru, un programa destinado de forma retórica a «la democracia social de participación plena», pero que en realidad pretendía deshacer gran parte del esquema de Velasco. Pedía, entre otras cosas, la descentralización económica y austeridad, el fomento de la inversión extranjera y la transferencia de la prensa estatal a manos privadas. Y se oían doblar las campanas por el régimen. Iba a haber una asamblea constituyente en 1978 y elecciones generales en 1980. Los oficiales iban a irse.

Considerado de forma retrospectiva, reveló la incapacidad del régimen para obtener el apoyo firme de alguna clase social o agrupamiento que le permitiera establecer las bases institucionales de su autoridad. Al alcanzar tantos ámbitos de la sociedad peruana, el gobierno militar logró enajenarse a casi todos: ningún grupo se sentía a salvo de la intervención o el control, ningún estrato le ofreció su adhesión incondicional. Resulta irónico que el rasgo que había otorgado al gobierno militar revolucionario de Perú tanta libertad de acción —su autonomía— también le llevara a su desaparición final.

¿Vuelta a la normalidad?

Las elecciones de 1978 para la Asamblea Constituyente produjeron varias sorpresas. No lo fue el 35 por 100 de los votos logrado por el APRA, prueba del atractivo que seguía manteniendo el partido. Pero nadie había esperado que los cinco principales partidos de izquierdas obtuvieran el 33 por 100. Pa-

recía que la izquierda se estaba beneficiando de la oleada de movilización popular de 1976-1978. Había también un nuevo partido en la derecha, el Popular Cristiano (PPC), que consiguió el 24 por 100. ¿Podrían la izquierda y la derecha mantener estos logros en las elecciones presidenciales de 1980?

Los dos partidos principales eran el APRA, encabezado ahora por Armando Villanueva (al haber muerto Haya de la Torre), y Acción Popular, todavía bajo la dirección de Fernando Belaúnde Terry, que había boicoteado las elecciones de 1978. Tras una campaña ardua y abierta, Belaúnde, de sesenta y ocho años, obtuvo una mayoría dominante del 42 por 100 de los votos, en parte debido a la reafirmación de su imagen de estadista. El APRA logró sólo el 28 por 100, lo que suponía un revés sustancial; la derecha, representada por el Partido Popular Cristiano (PPC), recibió el 11 por 100; un conjunto variado de partidos de izquierda acumularon alrededor de un 16 por 100. Así, derecha e izquierda descendieron a menos de la mitad de su porcentaje de dos años antes. Era evidente que Belaúnde había recibido votos de ambas. Villanueva declinó la oferta de éste para tomar parte en un gobierno de coalición, pues prefería mantener su tradicional papel como oposición en el Congreso.

Así que Belaúnde se convirtió de nuevo en presidente. La escena tenía un aire familiar, pero también había algunos rasgos nuevos. En contraste con 1963-1968, ahora tenía casi el control de la legislatura, con una clara mayoría para Acción Popular en la Cámara de Diputados (95 escaños de 180) y espacio para maniobrar en el Senado (26 de 60 escaños). El APRA comenzó a deshacerse y ya no volvió a recurrir a tácticas puramente obstruccionistas. La derecha estaba en un aislamiento relativo y la izquierda parlamentaria, aunque aumentaba de fuerza, estaba dividida en múltiples facciones. Belaúnde podía reclamar el mandato casi por ausencia de los demás. Su reelección era también una reivindicación: los militares que le habían depuesto en 1968 ahora le escoltaban de vuelta a la presidencia.

Seguía siendo un político de la vieja escuela, que prometía progreso mediante nuevas obras públicas. Su sueño acariciado era construir una carretera que se adentrara en la selva amazónica peruana para abrir nuevas tierras al asentamiento. Al mismo tiempo, Belaúnde proponía reducir el papel estatal en la economía, fortalecer la empresa privada y fomentar la inversión extranjera, en especial en el sector petrolero.

Su equipo económico estaba encabezado por personas muy vinculadas a los círculos banqueros estadounidenses y europeos. Sus ideas a favor del mercado libre (y su disposición a adoptar un programa de estabilización del FMI) ayudaron a renegociar la deuda exterior y a atraer capital extranjero. En 1982, el régimen de Belaúnde parecía encontrarse ya bien encamulado hacia la diversificación de sus exportaciones (la mayoría productos) y la adopción de una postura más abierta hacia la economía mundial.

Pero no iba a ser así. Aunque el crecimiento del PIB fue de un respetable 3,1 por 100 en 1981, cayó a menos de un 1 por 100 en 1982. En 1983, se desplomó un asombroso 12 por 100. En parte responsable de este descenso

era la crisis de la deuda de ámbito mundial desatada por la situación de México en 1982, casi a punto de no poder hacer frente a sus compromisos. Este choque aumentó por la recesión mundial de 1981-1983. En diciembre de 1982, Belaúnde tuvo que recurrir a reunir financiación de distintos bancos extranjeros para mantener la solvencia de Perú. Aunque hubiera resultado bien, su programa poco podría haber hecho para reducir el abismo existente entre las tierras altas, de una pobreza desesperada, y las de la costa, mucho más prósperas. La preocupación por este desequilibrio como origen de conflicto social era lo que en parte había impulsado a los militares a deponer a Belaúnde en 1968. Ahora estaba de vuelta y seguía una política de austeridad que golpeaba con más fuerza a los que se encontraban abajo.

El gobierno de Belaúnde se enfrentó a otro desafío formidable: el surgimiento de Sendero Luminoso, movimiento guerrillero maoísta localizado en las comunidades campesinas de la provincia de Ayacucho. Saltaron a la escena al asesinar brutalmente a todo dirigente de los pueblos que se resistiera a su llamamiento para aplastar a la autoridad y establecer una utopía igualitaria. Muchos policías locales se acobardaban ante éste, que no emitía manifiestos y mantenía un absoluto silencio acerca de su estructura y jerarquías. El aumento de la violencia en las tierras altas obligó a Belaúnde a autorizar una ofensiva militar, que dejó su propia estela de represión brutal. Pero estas tácticas tampoco eliminaron a Sendero, sino que, por el contrario, el movimiento se extendió por otras provincias de la sierra hasta Lima.

El crecimiento económico se reavivó hasta alcanzar un 4,7 por 100 en 1984, mientras que la inflación, otro problema recurrente, llegó al 110 por 100 en 1983 y 1984. El servicio de la deuda exterior iba reduciendo al límite los recursos económicos en dólares de Perú. Desafortunadamente, no estaban a la altura de la situación ni el estilo político de Belaúnde ni sus medidas económicas. Pero al menos puede decirse que terminó su mandato de seis año, lo cual no es una hazaña pequeña en la historia contemporánea de su país.

En 1985 el electorado eligió como sucesor a un político reciente del APRA, Alan García, de treinta y seis años. Era un orador elocuente y energético, que electrizaba a las masas mientras prometía una dirección dinámica, reforma social y un nuevo nacionalismo económico. Había ascendido con rapidez en el partido, obteniendo el cargo que se le había escapado al fundador y candidato eterno a la presidencia, Haya de la Torre. Logró el 46 por 100 de los votos y derrotó de forma decisiva a los candidatos que representaban a Izquierda Unida, la derecha y Acción Popular de Belaúnde. El APRA también se hizo con el control de ambas cámaras del Congreso, con lo que García contó con una fuerte base política.

El nuevo presidente empezó por el frente económico. Aumentó los salarios reales, recortó las nóminas y los impuestos sobre las ventas, redujo los tipos de interés, congeló los precios y devaluó el sol. El efecto neto fue una mayor demanda, que el equipo económico de García esperaba que reactivaría la capacidad industrial peruana infrautilizada. El gobierno también anunció programas de inversión para ayudar al desarrollo agrícola a pequeña es-

cala de las tierras altas, descuidadas durante tanto tiempo. Estas medidas económicas «heterodoxas» produjeron un auge en 1986-1987, acompañado por programas especiales para los necesitados. Pero el retorno del populismo resultó de corta vida. Los responsables políticos peruanos habían olvidado que su país, al igual que el resto de América Latina, se enfrentaba a una economía mundial mucho más hostil. Desafiaron a sus acreedores extranjeros al no cumplir con los pagos de toda la deuda externa. Un creciente déficit comercial, atizado por el auge del consumo, agotó con rapidez las magras reservas de divisas.

En 1988, Perú se convirtió de repente en la pílula de América Latina. El producto interior bruto se desplomó un 30 por 100 en tres años, mientras la inflación remontaba el 3.000 por 100. El desempleo masivo arrojó a millones de personas a la «economía sumergida», donde no pagaban impuestos, con lo que se engrosó el déficit gubernamental. Perú se había convertido en el país más en bancarrota de un continente en bancarrota.

Más matanzas en la sierra y apagones (tras dinamitar las conducciones eléctricas) en el área metropolitana de Lima demostraron la fuerza creciente de Sendero Luminoso. Ahora algunos comparaban a los seguidores de Sendero con los Jemeres Rojos. Al considerar a García como un guiñol fascista más, Sendero forzó al gobierno a recurrir cada vez más a la policía y el ejército. Las fuerzas gubernamentales mataron de modo indiscriminado y obligaron a García a despedir a numerosos mandos por atrocidades cometidas en el campo y por la matanza de prisioneros que se habían rendido tras una extensa revuelta carcelaria. Sin embargo, al final al presidente no le quedó más elección que recurrir a los hombres de uniforme para luchar contra Sendero.

El nuevo salvador dispuesto a rescatar a Perú en las elecciones presidenciales de 1990 era el novelista Mario Vargas Llosa, aclamado internacionalmente. Pero el apuesto conservador, que prometía medidas económicas neoliberales para reducir el Estado y promover la empresa privada, perdió su inicial delantera en las urnas ante Alberto Fujimori, un economista agrario hasta entonces poco conocido, de padres inmigrantes japoneses.

Tras un año en el cargo, sus tecnócratas habían lanzado un programa radical de reestructuración (reducción radical de los aranceles, fomento de la inversión extranjera, debilitación de la legislación laboral) muy semejante al tratamiento de choque llevado a cabo por los *Chicago boys* de Pinochet en Chile quince años antes. Se controló la hiperinflación y se asumieron de nuevo los pagos de la deuda exterior. Pero este éxito económico fue pronto ensombrecido por la involución política. En abril de 1992, Fujimori clausuró el Congreso y anunció una reorganización radical del poder judicial. Era un autogolpe, sólo posible gracias al sólido respaldo militar. Perú se convirtió así en el primer país suramericano que recayó en el autoritarismo. Su frágil democracia se derrumbó bajo la presión del caos económico, las profundas divisiones sociales, la corrupción, el terrorismo y el descrédito de los partidos políticos tradicionales, especialmente el APRA. Para consternación de los críticos de Fujimori dentro y fuera, el golpe gozó de amplio apoyo popular.

Inicialmente, Sendero dio la bienvenida a las noticias del golpe, suponiendo que un régimen autoritario aceleraría la revolución. Todo lo contrario, resultó un desastre para las guerrillas. En septiembre de 1992, Abimael Guzmán, fundador y máximo líder del movimiento, fue capturado, encarcelado y exhibido teatralmente ante la prensa. Pronto cooperó con sus captores, exhortando a sus camaradas de la guerrilla a que se rindieran. Ocurrieron más arrestos de los principales líderes de Sendero. El movimiento comenzó a desintegrarse rápidamente, aunque senderistas intransigentes continuaron con ataques esporádicos.

Como García antes que él, Fujimori tenía que confiar en la policía y el ejército para combatir a Sendero. El resultado fue un estremecedor récord de violaciones de los derechos humanos, cuya revelación ocasionó el retardo en la ayuda internacional. El gobierno peruano convenció finalmente a los prestamistas extranjeros que éstas serían rápidamente corregidas y que la democracia volvería pronto. Los acreedores se mostraron menos interesados en esas promesas que en los programas de austeridad y privatización de Perú. Los créditos y nuevas inversiones llegaron de inmediato.

Fujimori confundió otra vez a sus oponentes al ganar la reelección de abril de 1995 con un margen electoral de 64 por 100. Se mantuvo especialmente fuerte en las barriadas limeñas y en la sierra. Su éxito, tanto económico como político, no podía disfrazar el hecho que Perú siguiera siendo una sociedad profundamente dividida y desigual. Las 22.000 vidas perdidas en la batalla contra Sendero no son la herida menos profunda.

México: domesticar una revolución

La historia de México ofrece un estudio de contrastes. Rico en recursos naturales, el país ha conocido la prosperidad (aunque sólo la élite) y la pobreza. Tras la independencia, durante varias décadas la vida de la nación fue un prototipo de inestabilidad política. Los gobiernos nacionales llegaban y se iban a punta de pistola, amenazando la integridad territorial de la nueva nación. A mediados del siglo xix, México se dirigía hacia un gobierno liberal, que habría reducido grandemente el poder de la Iglesia y las cargas correspondientes a su legado colonial. Sin embargo, el liberalismo político cedió el paso a la dictadura de Porfirio Díaz (1876-1880 y 1884-1911) y luego a la Revolución mexicana, la primera de las grandes revoluciones mundiales del siglo xx. Después de ella llegó un sistema político que produjo, desde los años treinta, una estabilidad política sin parangón en América Latina.

El surgimiento de México de su pasado colonial ha estado condicionado por un factor que ninguna otra nación latinoamericana comparte: una frontera de miles de kilómetros con Estados Unidos. Esta proximidad ha producido beneficios y perjuicios (como un presidente mexicano exclamó una vez, «¡Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos!»). Aunque ha probado la amarga derrota en el campo de batalla, el pueblo de México ha retenido su dignidad y su orgullo y ahora, al haber descubierto grandes depósitos de petróleo y enfrentarse a una repetida crisis económica, el país ha afrontado los riesgos que conlleva el convertirse en un miembro importante de la comunidad internacional. Su futuro, como su pasado, desperta emociones de ansiedad y esperanza.

México tras la independencia

Las guerras de independencia dejaron a México en desorden y decadencia. Las condiciones eran allí mucho peores que en Argentina o Brasil porque la pelea real había sido mucho más extensa y dilatada en el tiempo. La economía estaba en ruinas. Los españoles se habían llevado su capital del país. Las minas de oro y plata, en otro tiempo orgullo del imperio español de ultramar, necesita-

ban todo tipo de reparaciones. Los insurgentes y los realistas habían puesto un interés especial en matar a los técnicos, mientras miles de mineros se habían ido a la guerra; sin la supervisión necesaria, las minas se habían inundado y la maquinaria se había estropeado por completo. La producción se derrumbó a un tercio de su nivel previo a la guerra. Los centros mineros languidecieron: La Valenciana, por ejemplo, tenía 22.000 residentes en 1810 y sólo unos 4.000 en 1820. Llevaría una generación entera —y considerables sumas de inversión extranjera— hacer que las apreciadas minas recobraran su producción plena.

La industria textil también había caído en tiempos difíciles. Las cicatrices de la batalla eran visibles por todo el país, en especial en el valle central. Como recordaba un viajero, había «ruinas por todas partes: aquí un palacio virreinal sirviendo de taberna, donde las mulas paraban para descansar y los arrieros para beber pulque; allí todo un pueblo hecho pedazos; casas sin techo, paredes y arcos derribados, una vieja iglesia, los restos de un convento». Para señalar las pérdidas de la agricultura, otro observador describía cómo él y sus compañeros «vieron casas sin tejados y ruinas ennegrecidas por el fuego y habían cabalgado por las llanuras que todavía mostraban huellas tenues del arado; pero los rancheros que labraban la tierra habían sido asesinados con toda su familia durante la guerra».

También se habían descuidado las carreteras, por lo que el país carecía de un sistema de transportes y comunicación apropiado. Los españoles que habían gobernado 300 años sólo habían construido tres carreteras que merecieran ese nombre. Viajar en diligencia era difícil y peligroso, y el transporte —a menudo en alforjas— era lento y caro. Esto era un serio obstáculo para la integración económica.

El desorden económico significaba que hubiera muy pocos puestos de trabajo y mucho desempleo. Según un cálculo, unos 300.000 hombres, que en su mayoría habían combatido en las guerras, no tenían trabajo ni ingresos una vez terminadas éstas. Representaban de un 15 a un 30 por 100 de toda la población adulta masculina. Estaban impacientes, a menudo irritados, y casi siempre armados. Suponían no sólo un problema económico, sino también una amenaza social.

Algunos de estos veteranos encontraron trabajo. Otros se dedicaron a cometer delitos (el favorito era el robo en las carreteras) o permanecieron en el ejército. El resto pasó a formar parte de unidades no oficiales cuasimilitares que proporcionaban apoyo a los caudillo políticos locales, que pronto iban a desempeñar un papel importante en la escena política mexicana.

Las guerras también tuvieron un efecto directo en la estructura social. A finales de la década de 1820, el nuevo gobierno emitió un decreto que expulsaba a todos los españoles de México, lo que no sólo permitió a la población dar rienda suelta a su aversión por ellos, sino que privó a la economía de una fuente de capital importante. Y eliminaba de un solo golpe un importante segmento de la clase alta o aristocracia de la nación. Ahora los latifundistas criollos, no nacidos en España, se convirtieron en el escalón más elevado de la sociedad mexicana.

Las transformaciones económicas del periodo borbónico, junto con una recuperación gradual en las décadas de 1830 y 1840, hicieron posible que nuevos grupos adquirieran riqueza y posición social. Centrados principalmente en Ciudad de México, estos aspirantes, como la mayor parte de los nuevos ricos, eran muy ostentosos. Como Fanny Calderón de la Barca, la esposa de habla inglesa de un diplomático español recordaría después, los nuevos ricos no entendían todas las reglas de la corrección social: «Pero aunque hay vitrinas llenas de oro, buena pintura y cientos de cosas ricas y curiosas —observa en sus memorias—, a nuestros ojos europeos les chocan numerosas contradicciones en el vestido, los criados, etc., en todo lo cual hay una necesidad de armonía muy notable». En suma, el México de comienzos del siglo XIX tenía una clase superior criolla con dos partes: una estaba formada por las antiguas familias tradicionales que en su mayoría conservaron sus tierras; la otra era nueva y provenía del comercio y las profesiones liberales, así como de la tierra. Y fue el nuevo segmento, el recién llegado, el que tomó parte activa en la política.

La pobreza persistía entre la gran mayoría de la población. En especial en el centro y sur, había un campesinado clásico, es decir, grandes masas de campesinos que arañaban una magra subsistencia de la tierra. En su mayor parte de origen indio o a veces mestizos, proporcionaban mano de obra para el sector agrícola. Muchos trabajaban en las haciendas, donde vivían casi en la esclavitud, y algunos iban a mendigar a las ciudades.

La existencia de este campesinado subempleado también garantizaba a México un gran excedente de fuerza de trabajo. En parte por esta razón y en parte por el sentimiento antiextranjero, las autoridades mexicanas no fomentaron la inmigración externa. A diferencia de Argentina, nunca adquirió una clase obrera predominantemente europea, ni tampoco pasó por un rápido crecimiento de la población en el siglo XIX. Comenzó éste con cerca de 6 millones de residentes en 1800 y en 1850 tenía cerca de 7,6 millones; en 1900 el número había ascendido a 13,6 millones, pero aun así representa una tasa de crecimiento medio anual modesto de menos del 1,2 por 100 en un periodo de cincuenta años. La explosión demográfica no llegaría hasta el siglo XX.

Tras la independencia, había dos bases de poder institucional: la Iglesia y el ejército. La primera había atravesado las guerras independentistas sin perder su inmensa riqueza. Según un observador, puede que haya controlado cerca de la mitad de la tierra de la nación. La Iglesia tenía ingresos regulares por el alquiler de sus vastos bienes raíces, sus inversiones estaban por todas partes y era con mucho el operador bancario mayor de todo México. Sus generosos créditos a los grandes latifundistas no sólo garantizaban unos ingresos constantes, sino que también creaban una alianza firme con los escalones superiores de la sociedad mexicana. No es sorprendente que acabara convirtiéndose en un blanco de la oposición, en particular entre quienes no lograron beneficiarse de su largueza.

La segunda base de poder era el ejército, que dominaba la política nacional. Durante el periodo de cuarenta años que va de 1821 a 1860, México

tuvo al menos cincuenta presidencias distintas, cada una con una duración media menor a un año; treinta y cinco de estos malhadados regímenes estuvieron encabezados por oficiales del ejército. El medio básico para lograr el cargo presidencial era el golpe militar. Y durante todo este periodo se cernió sobre el país la figura tragicómica de Antonio López de Santa Anna, que ocupó la presidencia nueve veces distintas y puso en el cargo a hombres de paja las restantes ocasiones.

Santa Anna fue el más famoso de los caudillos mexicanos. Estos hombres fuertes reunían a sus seguidores armados —ejércitos en miniatura— que buscaban riquezas fundamentalmente. Sin embargo, una vez que lograban acceder al poder nacional, se encontraban con que las arcas del Estado estaban vacías (habitualmente debido a los gastos militares previos). Al final, la banda del caudillo reinante se desintegraba y un nuevo líder, con nuevos seguidores, tomaba el poder. Los caudillos no se molestaban por el arte de gobernar: esto lo dejaban a un cuadro de abogados y profesionales, la mayoría de Ciudad de México, que ocupaban los ministerios (allí reaparecían a menudo las mismas caras: hubo cerca de 600 nombramientos gubernamentales diferentes entre 1820 y 1860, pero sólo fueron a parar a 207 individuos). De este modo, la política caudillista se aseguraba la continuidad y el cambio.

La invasión estadounidense

Asolada por las guerras independentistas, México era una nación incipiente débil y vulnerable. Al norte se extendía otra nación nueva, que había arrojado a su dueño inglés cincuenta años antes. Entonces los inexpertos Estados Unidos corrían hacia el oeste y el sur, y se dirigían hacia el norte de los vastos dominios casi despoblados de lo que había constituido el virreinato de Nueva España.

Los españoles nunca habían encontrado los recursos para colonizar el norte, los inmensos territorios de California, todo el valle del río Colorado y Texas. Lo mejor que pudieron hacer fue crear una red de misiones religiosas a cargo sobre todo de los diestros y leales jesuitas. Estas tierras se convirtieron en un claro imán para los infatigables estadounidenses. En 1821, Stephen Austin y un grupo de colonos se desplazaron a Texas y luego a parte de México. Los texanos acabaron deseando zafarse del gobierno central de Ciudad de México y se alzaron en 1835 para declarar la independencia al año siguiente. Para tratar de sofocar la rebelión, Santa Anna envió tropas mexicanas contra El Álamo, matando hasta el último hombre de sus defensores, pero fue derrotado después en San Jacinto, y Texas permaneció independiente. En 1845, el Congreso estadounidense votó la anexión de Texas, que sus dirigentes aceptaron en seguida.

Los mexicanos consideraron esta anexión como un equivalente a un acto de guerra de Estados Unidos y las disputas sobre las reclamaciones financieras continuaron complicando las relaciones entre ambos países. El presiden-

te James K. Polk envió tropas a la zona fronteriza en disputa, paso que los mexicanos consideraron como una invasión. Cuando éstos contraatacaron, Polk lo llamó guerra. Con consentimiento del Congreso, pero con la oposición de legisladores tan prominentes como John C. Calhoun y Abraham Lincoln, Polk inició la guerra que él y sus seguidores buscaban.

Fue un enfrentamiento totalmente desigual. El desafortunado Santa Anna se encontraba al mando de las tropas mexicanas, que en un principio lograron resistir el empuje de las estadounidenses bajo las órdenes de Zachary Taylor, pero en 1847 Winfield Scott dirigió sus columnas directamente desde Veracruz hasta Ciudad de México. Los mexicanos comunes se unieron al esfuerzo de repeler las fuerzas estadounidenses y los cadetes militares de corta edad —desde entonces recordados como los «Niños Héroes de Chapultepec»— escogieron la muerte antes que rendir su bandera nacional. Pero no sirvió de nada. México perdió y el precio que pagó fue muy elevado.

El tratado de Guadalupe Hidalgo puso fin a la guerra en febrero de 1848. Establecía que Estados Unidos pagaría una modesta suma de 15 millones de dólares y adquiriría la posesión de todo el territorio comprendido entre Texas y California, cerca de la mitad de los dominios nacionales de México. Fue una derrota mortificante, cuyo doloroso recuerdo nunca ha muerto en México. Del mismo modo que se enseña a los estadounidenses a «recordar El Álamo», los mexicanos aprenden leyendas sobre valerosas peleas contra fuerzas más poderosas. El nombre oficial de la disputa ofrece una pista sobre las sensibilidades que suscita: en Estados Unidos se llama la «guerra Mexicano-Americana», pero en México recibe el nombre de «guerra de la Invasión Norteamericana».

La pérdida sacudió profundamente a la élite criolla mexicana. Su frustración hizo erupción en un acerbo ataque de los conservadores a los liberales, facción predominante en el gobierno desde la independencia. Los conservadores, encabezados por Lucas Alamán, mantenían que México había sido humillado debido a que había tratado tontamente de adoptar los valores de los anglosajones del norte. Sostenían que lo que su nación necesitaba era un retorno a su tradición hispana. De forma específica, precisaba promover los ideales aristocráticos, proteger los privilegios legales de los militares y la Iglesia, y crear una monarquía constitucional (quizás importando un principio europeo).

Los liberales, que continuaban disfrutando la ventaja del poder, contraatacaron: a mediados de la década de 1850, una ráfaga de nuevas reformas, que hicieron que el periodo fuera denominado La Reforma, desnudaron de su poder al ejército y la Iglesia, y culminaron en una Constitución nueva, muy liberal. Desafortunadamente, la controversia no se restringía a discursos y leyes. En 1858, los conservadores volvieron a atacar, iniciando casi veinte años de una guerra civil destructora. Esos años incluyeron el desgraciado imperio (1863-1867) de Maximiliano de Habsburgo, de Austria, que puso en práctica de forma literal la fórmula conservadora. No es sorprendente que la

importación de un monarca extranjero levantara sentimientos nacionalistas que los liberales capitalizaron de inmediato. Benito Juárez, el dirigente liberal, estuvo al frente del derrocamiento del imperio y ordenó la ejecución del desafortunado Maximiliano. Los liberales consolidaron su poder bajo el presidente Juárez hasta su muerte en 1872. El intervalo de inestabilidad que siguió acabó con la llegada al poder de uno de los antiguos asociados del presidente: el general Porfirio Díaz.

El periodo de Díaz: progreso a un precio

Durante los años que van de 1876 a 1911, Díaz demostró ser un genio de la política. Comenzó con sus compañeros y seguidores militares y desde allí creó una amplia coalición. Otorgó a los caudillos regionales espacio para maniobrar y los alentó para que lucharan entre ellos. A medida que maduraba su presidencia, fue fortaleciendo el ejército. Para mantener el control sobre el campo, donde vivía la vasta mayoría de los mexicanos, se sirvió de los temidos guardias rurales. En pocas palabras, formó con paciencia el poder del gobierno federal donde contaba: en el ejército y la policía.

Al principio, no parecía representar nada nuevo en política. Después de todo, era un producto del movimiento liberal. Pero según pasaba el tiempo, se hizo evidente que era un liberal con algunas diferencias. Cultivaba la neutralidad en la cuestión crucial de la Iglesia, sin atacarla (al igual que la mayoría de los liberales) ni defenderla. Permitió que su devota segunda esposa sirviera como un símbolo notable de reconciliación hacia la institución que los liberales habían puesto en la picota.

En otros respectos, siguió fiel a los principios liberales. En una de sus medidas más importantes y de largo alcance, determinó que la prohibición de poseer tierras de forma corporativa, una medida liberal de la década de 1850 dirigida principalmente a la Iglesia, se aplicara también a los pueblos indios. Esto abrió vastas extensiones nuevas a los especuladores, rancheros y favoritos políticos. En 1894 ayudó a los latifundistas aún más, decretando que los terrenos baldíos pudieran tomarse para la explotación privada. La fuente crucial del nuevo capital iba a ser exterior. Díaz y sus ministros buscaron inversores extranjeros, en especial estadounidenses e ingleses, y les ofrecieron generosas concesiones. Todo ello era una aplicación clara de los principios del liberalismo económico que habían arrojado a la mayoría de las élites latinoamericanas en las décadas finales del siglo XIX. En México, los escritores, tecnócratas y políticos con inclinaciones intelectuales que articularon estas doctrinas se ganaron la etiqueta de *científicos*, debido a su supuesta vinculación con la filosofía positivista.

Díaz demostró su maestría política del modo más fundamental: permaneció en el poder mucho más de lo que nadie se habría atrevido a predecir. Durante tres décadas y media, ocupó la presidencia con una única interrupción (Manuel González, 1880-1884). Creía que estaba dando a México el pre-

cioso regalo de la estabilidad política que consideraba indispensable para el crecimiento económico. Si se requería cierta represión para lograrla, era por una buena causa. Político perspicaz, evitó siempre presentarse como un dictador. Simplemente hacía enmendar la Constitución, una y otra vez, para poder ser reelegido presidente. Sabía cómo atraer a los sectores privilegiados, cómo conseguir su lealtad, cómo orquestar su apoyo para los esquemas económicos que elevarían a su país a un nivel «civilizado».

El desarrollo económico fue impresionante. Los ferrocarriles fueron un ejemplo asombroso. Díaz trató primero de construirlos con fondos públicos, pero a finales de 1880 otorgó las concesiones a inversores extranjeros. En sólo cuatro años, el tramo en funcionamiento aumentó de 1.074 km a 5.600 km y alcanzó los 13.500 km en 1900. (Por otro lado, el pago de intereses y dividendos por esta inversión extranjera constituyía una carga para la balanza de pagos.) Aunque la mayoría de los ferrocarriles fueron construidos por empresas extranjeras, el Estado se hizo cargo de ellos en 1907.

Como en otros lugares de América Latina, el comercio exterior se disparó: se multiplicó por nueve entre 1877 y 1910. Estados Unidos se convirtió en el principal socio comercial, mientras que las exportaciones de minerales se extendían al cobre y al zinc, además de la plata y el oro. Hubo una modesta industrialización, centrada en los textiles, el cemento, el hierro y bienes de consumo ligeros. Díaz dio una gran importancia a la necesidad de seguir políticas que mantuvieran el crédito de México ante Estados Unidos y Europa. En 1895, el gobierno federal presentó unos presupuestos excedentarios y durante todo el régimen de Díaz los presupuestos fueron equilibrados. Cuando se aproximaban las celebraciones del centenario de la independencia en 1910, pudo proclamar con sus lugartenientes que habían realizado en México el ideal positivista de «orden y progreso».

La actividad económica variaba de carácter de una región a otra, lo que llevó a estructuras sociales diferenciadas. El norte era una región minera y ranchera, donde había obreros contratados —por ejemplo, mineros— y vaqueros. El valle central, en contraste, producía trigo y grano en granjas medianas y de gran tamaño. El azúcar se cultivaba en la región surcentral, en particular en el estado de Morelos, donde las tierras de los campesinos tradicionales estaban siendo arrebatadas para su uso por los trapiches. En Yucatán prosperaban vastas plantaciones de henequén, en las que los nativos eran obligados a trabajar como peones.

Bajo Díaz, México no desarrolló una clase empresarial fuerte. Las concesiones y los favores provenían del Estado y el capital, del exterior: Inglaterra, Francia y, por supuesto, Estados Unidos. Los sectores medios eran extremadamente débiles.

Estos factores sociales tuvieron un profundo significado político. En otros lugares de América Latina, los profesionales de clase media proporcionaron la presión y el liderazgo de movimientos reformistas, como en Argentina, y en algunas ocasiones sirvieron de apoyo a los inexpertos industriales, como en Chile. Pero no fue así en México. Parecía que al terminar el siglo,

tenía los ingredientes sociales para una revolución, pero relativamente poco material para la reforma.

El progreso económico de los años de Díaz también tuvo su coste. Mientras que los ricos prosperaban y copiaban puntualmente a la aristocracia europea, la vasta mayoría de los mexicanos se enfrentaban a un pobreza agobiante. Dado su excedente en mano de obra, los salarios seguían muy bajos. De hecho, un cálculo (sin duda exagerado) muestra que el poder adquisitivo medio en 1910 era sólo un cuarto del de 1810. México exportaba productos agrícolas, mientras que el cultivo de la dieta básica de la mayoría de los mexicanos —maíz y frijoles— apenas se mantenía a la altura del crecimiento poblacional. No podía haber mejora en el ínfimo nivel de consumo per cápita prevaleciente al comienzo del periodo de Díaz. Las estadísticas de vida eran alarmantes. En 1900, el 29 por 100 de todos los niños varones morían antes de cumplir un año y muchos de los sobrevivientes acababan trabajando doce horas diarias en una empresa explotadora. Sólo un cuarto de la población sabía leer y escribir.

Este «progreso» económico tan desigual originó una protesta repetida de los trabajadores urbanos y rurales. Hubo huelgas, a menudo salvajes, en especial donde el trabajo asalariado se desempeñaba bajo condiciones de tipo industrial. Entre 1906 y 1908, por ejemplo, los trabajadores mexicanos de la Compañía de Cobre Cananea protestaron de forma repetida por los salarios más altos pagados a los obreros estadounidenses. También hubo huelgas destacadas entre los obreros del ferrocarril y en las fábricas textiles de Río Blanco. Esta protesta obrera se intensificó por la crisis financiera internacional de 1906-1908. En el sector rural, los campesinos de la zona de Morelos se tomaron muy a mal la pérdida de su tierra para el cultivo comercial de azúcar y otros productos de mercado. En el norte hubo una reacción similar por la pérdida de tierra para la construcción del ferrocarril.

Díaz y sus consejeros podían seguir una política económica coherente porque habían creado el gobierno centralizado más efectivo que había visto México desde la independencia. La toma de decisiones estaba centralizada en Ciudad de México, a expensas de los caudillos regionales o locales. Los puestos políticos, especialmente los de rango federal, eran codiciados por el sector más elevado de la sociedad. Los que los conseguían eran envidiados, ya que la prosperidad económica requería muy a menudo contactos con el gobierno. El mismo Díaz conocía plenamente bien la clase de sistema que había promovido. Casi al final de su régimen explicó: «Fuimos duros. A veces fuimos duros hasta la残酷. Pero era necesario entonces para la vida y el progreso de la nación. Si hubo残酷, los resultados la han justificado. La educación y la industria han realizado la tarea comenzada por el ejército». Muchos de sus adversarios estaban de acuerdo en la necesidad de un poder nacional, pero denunciaban el modo en que lo utilizaba. La presión aumentaba a medida que crecía la frustración entre la élite más joven, excluida de la camarilla de Díaz. El tiempo jugaba en su contra, pero ¿quién podría haber predicho el modo en que su casa, tan cuidadosamente construida, se vendría abajo?

La Revolución mexicana

Pocas revoluciones son precipitadas por los oprimidos. Mucho más a menudo comienzan con un cambio dentro de la élite dominante. Los disidentes descontentos, con frecuencia jóvenes, llegan a un punto de cólera tal que atan el sistema. Eso fue lo que pasó en México en 1910.

Uno de los principales críticos era Francisco I. Madero, vástago de una familia que había hecho fortuna en la ganadería y la minería. También estaba vinculado a la maquinaria política de Díaz. Evaristo Madero, su abuelo, había sido gobernador del estado de Coahuila de 1880 a 1884 y la familia Madero había cultivado una íntima relación con José Y. Limantour, ministro de Economía durante muchos años de Díaz. Francisco obtuvo lo mejor de una educación en el extranjero, ya que estudió en París y en la Universidad de California. Volvió para aplicar sus conocimientos en la agricultura comercial, en especial en las plantaciones de algodón familiares. Tenía fuertes convicciones liberales en cuanto a economía, apropiadas para el periodo de Díaz, pero también en política, que no lo eran tanto. Su creencia en la democracia política le distanció pronto de las rigideces de las postimerías del régimen porfiriano. Se convirtió en un adversario franco que sostenía que México estaba preparado para la democracia liberal y que si Díaz quería presentarse a la reelección en 1910 (como todos esperaban), el candidato a vicepresidente debía provenir de fuera de la camarilla presidencial.

Díaz era para entonces el cautivo de su éxito. ¿Por qué debía tomar en serio las lamentaciones de un joven oligarca ambicioso y mimado? Cuando el presidente desoyó su mensaje, Madero hizo lo impensable: entró en la campaña de 1910 como candidato del Partido Antirreelecciónista. Ahora el presidente se enfrentaba a una oposición mayor que nunca durante décadas. Su maquinaria produjo otra victoria, pero costó mucho trabajo. La policía tuvo que encarcelar a 5.000 opositores, incluido Madero. El joven rebelde, ahora envalentonado, se negó a reconocer la legitimidad de la reelección presidencial y, en vez de ello, emitió (mientras estaba en la cárcel, lo que sugiere que no había una represión dura) su famoso Plan de San Luis Potosí y llamó a la resistencia armada. El movimiento rebelde creció con rapidez, mientras sus tropas tomaban Ciudad Juárez (al otro lado de la frontera de El Paso). Entonces Díaz tiró la máscara del autócrata con recursos infinitos. En una demostración sorprendente de debilidad, capituló y abandonó el país en mayo de 1911. Se celebraron nuevas elecciones presidenciales y Madero triunfó. En 1912, se convirtió en el presidente de la nación ante una muchedumbre delirante en Ciudad de México. Parecía que la democracia se abría paso.

Puede que Francisco Madero y sus compañeros disidentes hayan iniciado la Revolución mexicana, pero no la controlaron por mucho tiempo. Otros rebeldes tenían objetivos mayores: Emiliano Zapata, por ejemplo, quien había surgido como el férreo dirigente de los campesinos sin tierra del estado de Morelos. Eran quienes habían visto desaparecer sus derechos tradicionales sobre



Emiliano Zapata proporcionó un liderazgo preciso al movimiento revolucionario campesino que comenzó en el estado de Morelos.

la tierra a manos de leguleyos y especuladores que utilizaban las nuevas leyes de inspiración «liberal». Estos zapatistas consideraron la revolución como una oportunidad para restaurar la justicia, lo que significaba recuperar sus tierras.

Los zapatistas se desilusionaron en seguida de Madero, y con razón. ¿Por qué debía este hijo de una familia latifundista simpatizar con su causa más que la pandilla porfirista? En noviembre de 1911, Zapata y sus seguidores de Morelos atacaron con acritud a Madero en su Plan de Ayala. «No teniendo otras miras que satisfacer sus ambiciones personales, sus desmedidos instintos de tirano y su profundo desacato al cumplimiento» de la Constitución de 1857, decían, Madero «no llevó a buen término la revolución que felizmente inició con el apoyo de Dios y del pueblo». En lugar de ello, dejó que continuara el aparato político porfirista, con lo que mostró su indiferencia hacia la situación del pueblo. Los campesinos sólo tenían ahora una opción: la acción directa. «Hacemos constar: que ... entrarán en posesión de esos bienes inmuebles, desde luego, los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos, correspondientes a esas propiedades, de las cuales han sido despojados por la mala fe de nuestros opresores, manteniendo a todo trance con las armas en la mano la mencionada posesión ...» Los zapatistas valían tanto como su palabra. Estos pequeños propietarios rurales habían creído que la revolución los ayudaría a recuperar sus tierras. Cuando vieron que Madero no se las entregaba, le abandonaron y declararon su propia revolución.

Era difícil que Madero fuera un revolucionario verdadero. Se trataba de un aspirante a parlamentario que había pensado que la abdicación de Díaz abriría el camino para la democracia verdadera. Madero pertenecía a Inglaterra o Escandinavia, no a México. Retrocedió ante el pensamiento —sugestionado por rebeldes menos remilgados que él— de que debía golpear a su oposición antes de que le golpearan a él. Este error le costó la vida en 1913. Su asesino fue su propio jefe castricense, Victoriano Huerta, general de alto rango con Díaz. Arrastró al indiscreto embajador estadounidense Henry Lane Wilson a su complot, con lo que se aseguraba de que Estados Unidos seguiría manteniendo un papel notable en la política mexicana.

Huerta era una figura grosera, que pensó que podría restablecer una versión del régimen porfirista. Trató de imponer su autoridad por todo el país alzado, pero pronto encontró resistencia. Muchos mexicanos que habían sido atrapados en la revuelta contra Díaz veían ahora a Huerta como el usurpador. Empezó a consolidarse la oposición, y cuando reunió fuerzas se aglutinó en la fase genuinamente «revolucionaria» de la Revolución mexicana.

Uno de los centros más poderosos de la resistencia a Huerta fue el estado norteño de Chihuahua, donde Pancho Villa se hizo con el control. Era un antiguo ladrón de ganado de rudos modales que había movilizado un pequeño ejército. A diferencia de Zapata, con quien se le ha comparado a menudo, no encabezó una rebelión campesina. Los seguidores de Villa, al menos al inicio, eran pequeños rancheros, trabajadores desempleados y vaqueros: hombres que querían trabajo, no pequeñas parcelas de tierra. Así que no fue sorprendente que cuando Villa promulgó una reforma agraria, en diciembre de 1913, proclamara la confiscación de las grandes haciendas, pero no su división en parcelas. El Estado las administraría y sus cultivos comerciales ayudarían a financiar la maquinaria militar de Villa.

Villa puso en práctica su idea rápidamente. Quizá haya creado problemas administrativos, pero logró su objetivo. Se produjo dinero y se obtuvieron ministros (en especial de Estados Unidos, que seguía siendo el mayor abastecedor de armas de todos los revolucionarios mexicanos). El ejército de Villa estaba bien alimentado y bien equipado. Sin duda, sus seguidores tenían ahora una fuente segura de empleo en él, que surgió como una tropa profesional mercenaria bien pagada.

Hubo otros desafíos al sangriento acceso al poder de Huerta. Uno fue en Coahuila, estado nativo de Madero, donde el gobernador Venustiano Carranza montó un fuerte movimiento de resistencia. Carranza, como Madero, era un miembro disidente de la élite que había llegado a senador durante el régimen de Díaz. Era un terrateniente rico que había ocupado el puesto de gobernador como interino. Mientras las fuerzas contrarias a Díaz se reunían lentamente en 1910, Carranza unió su suerte a Bernardo Reyes, otro candidato de la oposición para presidente. Sin embargo, durante la campaña se adhirió al grupo «antirreelecciónista». Una vez en el poder, Madero recompensó a Carranza nombrándolo gobernador de su estado, Coahuila.

Carranza contestó la usurpación de Huerta con poco más que una contra-



En el norte, Pancho Villa creó una poderosa fuerza militar, pero su ostentación personal le ganó una reputación dudosa en México y Estados Unidos. (Cortesía de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.)

demandó. Su Plan de Guadalupe (marzo de 1913) sólo declaraba que Huerta ocupaba el poder de forma ilegítima y que él, Carranza, debía ser reconocido como «Jefe Máximo del Ejército Constitucional». Una vez establecido, el nuevo presidente convocaría nuevas elecciones. El Plan no incluía un intento de discutir mayores cuestiones socioeconómicas o ideológicas. El movimiento carrrancista parecía semejante a cualquier otra algarabía caudillista. El apoyo era escaso, rural en su mayor parte y limitado, como es lógico, al norte.

Toda la atención ahora se centraba en Huerta: ¿podría mantenerse en el poder? La oposición seguía trabajando sin descanso en el suroeste (Zapata y los rebeldes campesinos) y el norte (Villa y su ejército errante). Sin embargo, el enemigo más peligroso era Carranza, el político de élite ultrarrrespetable. México se hallaba ahora sumergido en una sangrienta guerra civil que vio aumentar al ejército federal en más de diez veces de lo que era a finales del mandato de Díaz. Los zapatistas requirieron las fuerzas de Huerta por su tercera rebelión en Morelos, mientras que los constitucionalistas mantenían la presión en el norte. Finalmente, fue la intervención extranjera, no las armas mexicanas, la que sentenció a Huerta. El presidente estadounidense Woodrow Wilson decidió no reconocer su gobierno y envió a los marines para ocupar Veracruz tras un incidente en el que se arrestó a unos marineros estadounidenses. Para contrarrestar a los marines, Huerta tuvo que sacar tropas de la guerra civil. Pronto vio que su situación era desesperada. A comienzos de julio de 1914, dimitió, acusando a Estados Unidos de haberlo derrocado.

A mediados de 1914, la revolución se hallaba a disposición de todos. Todas las fuerzas que habían derrocado a Huerta se reunieron para discutir un posible gobierno de coalición. De inmediato, Carranza abrigó sospechas por los orígenes agrarios comunes de las fuerzas de Zapata y Villa. Abandonó las negociaciones, atacó la legitimidad de ese «gobierno» putativo y estableció su propio régimen en el puerto oriental de Veracruz.

Las fisuras sociales de la revolución comenzaban a resultar dolorosamente obvias. Villa, y en especial Zapata, representaban las reclamaciones de un cambio social radical. Carranza se dio cuenta de que había de ofrecer algo más que la retórica liberal que había sostenido a Madero. En una declaración de diciembre, comenzó a inclinarse hacia la izquierda. Prometió, sin detalles, «leyes para la mejora de la condición del peón rural, el obrero, el minero y en general las clases proletarias». Al mes siguiente se pronunció a favor de una reforma agraria, apeló a la restauración o la creación de comunidades agrícolas (ejidos), requirió procedimientos para restablecer los títulos legales y estableció una comisión agraria nacional. En febrero de 1915, se pronunció acerca del trabajo: consiguió que los anarcosindicalistas —el mejor organizado de los movimientos obreros urbanos— convinieran que a cambio de leyes laborales favorables, sus batallones rojos apoyarían la causa carrancista.

Durante 1915 entró en discusión el asunto. Villa, el más formidable de los enemigos militares de Carranza, arremetió para obtener una rápida victoria. Encontró la horma de su zapato en Álvaro Obregón, el brillante jefe del ejército carrancista del estado norteño de Sonora. A mediados de 1915, éste logró vencer de forma decisiva a Villa, que se retiró a los cerros de Chihuahua para continuar la guerra de guerrillas, pero ya no volvió a suponer una amenaza nacional. Los zapatistas no pudieron sostener un desafío a Ciudad de México y se marcharon a su Morelos natio para repeler las incursiones federales.

Con sus principales enemigos a raya, Carranza pudo permitirse convocar una convención constitucional a finales de 1916. En mayo de 1917 asumió formalmente la presidencia. Ahora estaba preparado el escenario para la redacción de la Constitución de 1917, un documento capital de la Revolución mexicana.

Carranza no tenía ideas radicales. Esbozó una pálida imitación de la Constitución de 1857, poco más que una nueva declaración de los principios del liberalismo clásico. Los delegados de la convención tenían otros pensamientos. De inmediato se hicieron con el control y redactaron una carta que resultó sorprendentemente radical para esta época anterior al bolchevismo. El artículo 27 daba poderes al gobierno para redistribuir la tierra. El artículo 123 anunciaría derechos del trabajador que nunca se había oído en Norteamérica. El artículo 3 sujetaba a la Iglesia a nuevas restricciones, que le imponían casi una camisa de fuerza. Los reflejos socialistas permeaban la Constitución. De improviso se hizo evidente que lo que se había iniciado como una simple revuelta de elitistas disidentes contra Díaz amenazaba con convertirse en una revolución social, con cambiar de forma significativa las

relaciones de poder y propiedad en México. Desde 1917, todo aspirante a líder político tenía que adoptar al menos una postura retórica en favor de los obreros y campesinos mexicanos.

Los rebeldes agraristas —Villa y Zapata— continuaron manteniendo sus plazas fuertes y representaban una posible amenaza para Carranza. De Zapata se ocuparon en 1919, al ser asesinado por las tropas carrancistas en una emboscada. Al año siguiente Carranza se enfrentó a su propio problema: quería imponer como sucesor suyo a un político poco conocido, Ignacio Bonillas. Demostró poca vista en ello, ya que el lema «no reelección» de la campaña de 1910 había sido su más poderosa convocatoria y había encontrado expresión explícita en la nueva Constitución. Ahora violaba el espíritu de esa regla al imponer un sucesor que sería su hombre de paja. La revolución volvió a su práctica sangrienta: el valiente Obregón, el arquitecto de la victoria sobre Villa, encabezó un levantamiento. Se obligó a huir a Carranza y en la marcha fue asesinado por uno de sus propios guardianes, que probablemente actuaba de parte de Obregón. El problema sucesorio, que había llevado a la caída de Díaz, seguía lejos de ser resuelto.

Institucionalización de la revolución

Obregón fue el sucesor al botín de la presidencia. Se necesitaba una reconstrucción tras años de guerra civil, pero la recesión mundial que siguió a la primera guerra mundial redujo abruptamente los ingresos por exportación y agudizó la depresión económica interna. Sin embargo, el gobierno lanzó una ambiciosa campaña de educación rural dirigida por el notable intelectual José Vasconcelos. En cuanto al ámbito laboral, el gobierno de Obregón apostó con fuerza por la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) de reciente creación, que pronto cooptó, mientras acosaba a los sindicatos anarquistas y comunistas. Respecto a la distribución de la tierra, Obregón fue cauteloso por miedo a una pérdida de producción. El último de los rebeldes populares originales, Pancho Villa, sucumbió a una descarga de fusilería en 1923 y, de momento, se dio por finalizada la etapa de las demandas efectivas de una reforma social fundamental. Obregón hizo dos contribuciones importantes a la estabilidad de la revolución. Primero, logró un entendimiento con Estados Unidos, que determinó el trato que se conferiría a sus empresas petroleras en pago al reconocimiento diplomático. En segundo lugar, fue capaz de transferir el poder a su sucesor de forma pacífica, algo que no había hecho un presidente mexicano desde 1880.

El nuevo presidente era otro general de Sonora, Plutarco Elías Calles. Este competente político-militar demostró en seguida que era el hombre que proporcionaría al sistema político revolucionario unos cimientos sólidos. Para él, sin embargo, la amenaza provenía de la derecha. Denominándose a sí mismos cristeros, los católicos militantes se presentaron ante los revolucionarios como los primeros adversarios de base amplia y compromiso ideológico a la

revolución secularizadora. Los cristeros no se limitaban a los defensores oponentes del antiguo orden económico, sino que incluían a muchos ciudadanos corrientes que consideraban la revolución como la obra del demonio que sólo podía detenerse con la espada. Esta creencia pía fue reforzada por el clero reaccionario, en especial en el estado de Jalisco, donde necesitaban con desesperación soldados de a pie para su cruzada contra la revolución anticlerical.

Cuando terminó el mandato presidencial de Calles en 1928, Obregón, que nunca fue reservado en política, se presentó para una nueva elección. No era una reelección, aseguró a México, porque no ocupaba el cargo. Ganó con facilidad pero no vivió para disfrutar su poder: antes de su nombramiento fue asesinado por un fanático religioso.

En el vacío se colocó Calles, que consiguió que los dirigentes políticos asintieran a la convocatoria de unas nuevas elecciones y a la creación de un nuevo partido, el Partido Nacional Revolucionario (PNR). Durante los cortos mandatos que siguieron de Emilio Portes Gil (1928-1930), Pascual Ortiz Rubio (1930-1932) y Abelardo L. Rodríguez (1932-1934), Calles continuó manejando el poder entre bastidores.

La mayoría de los observadores esperaban que éste continuara en ese papel durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, elegido en 1934. Era un oficial del ejército y político algo oscuro de Michoacán, que sorprendió a todos al enviar de inmediato al exilio al asombrado Calles. Era el primer movimiento que probaba que Cárdenas iba a valerse por sí mismo.

Muchos campesinos se habían vuelto cínicos acerca de los objetivos «revolucionarios» de sus gobernantes. ¿Dónde estaba la tierra que les habían prometido tan a menudo? Cárdenas decidió hacer buenas esas promesas. Durante su mandato (1934-1940), presidió la distribución de algo más de 18 millones de hectáreas a los desposeídos mexicanos, casi el doble de lo que habían repartido todos sus predecesores juntos. Conocía los peligros de distribuir tierra sin proporcionar los servicios de apoyo necesarios, que demasiado a menudo conducía a una agricultura de subsistencia en la que el campesino era capaz de alimentar a su familia pero no podía producir un excedente para el mercado. Esto crearía graves problemas para el abastecimiento de las ciudades, así como para los mercados de exportación.

Su solución fue recurrir al sistema comunal denominado ejido. Tenía las ventajas de ser genuinamente mexicano y no capitalista ni socialista. La distribución de la tierra se hizo al ejido, que desde entonces fue el propietario, aunque las parcelas se dividieran después para su uso individual. Estos ejidos podían incluir a cientos, incluso miles de familias. Los planes demandaban escuelas, hospitales y financiación, que iba a ser proporcionado por el Banco de Crédito Ejidal, de reciente fundación. Pero no toda la tierra se distribuyó a los ejidos, ya que también hubo campesinos particulares que recibieron parcelas.

La enorme distribución creó una euforia inicial, ya que más de 800.000 receptores vieron el sueño de toda una vida realizado. Pero los resultados a largo plazo no fueron felices para todos. La producción agrícola para el mer-

cado cayó en muchas zonas, como se había temido. Los servicios sociales y financieros prometidos por el gobierno no llegaron a materializarse en el volumen necesario, a pesar de algunos logros. El resultado fue la baja productividad y desorganización de muchas unidades comunales y una integración insuficiente en el mercado de muchas unidades más pequeñas. A pesar de esos problemas, Cárdenas ganó una enorme popularidad entre los campesinos por su valentía al distribuir tanta tierra. Había reforzado de forma profunda el carácter agrario de la revolución.

También reorganizó la estructura del partido. Calles había iniciado el camino al crear un aparato más fuerte que el que había encontrado al ocupar el puesto en 1924. En 1938, Cárdenas reorganizó el partido oficial y le cambió el nombre por el de Partido de la Revolución Mexicana (PRM). Ahora se iba a edificar alrededor de cuatro grupos funcionales: el sector campesino, el sector laboral, el sector militar y el sector «popular», categoría residual que incluía principalmente a la clase media. Cárdenas y sus consejeros políticos tomaron prestados conceptos del corporativismo, doctrina política en boga por entonces en la Europa mediterránea, en especial en Italia, España y Portugal.

De este modo, ideaba una estrategia para tratar a las clases inferiores: movilizar y organizar a obreros y campesinos, pero manteniéndolos separados. Así, creaba sectores separados (y competitivos) para cada grupo constituyente del partido oficial. De esta forma, el gobierno podía mantener el control sobre los movimientos populares y evitar la posible aparición de una coalición entre obreros y campesinos. (Hasta los años noventa, el régimen parece haber logrado su objetivo.)

Cárdenas también emprendió una línea más radical en relación con Estados Unidos. El asunto más arduo era el petróleo. A comienzos del siglo xx, México poseía un porcentaje importante de las reservas petroleras confirmadas del mundo. En 1930, ya había empresas petroleras extranjeras, la mayoría estadounidenses, pero también algunas inglesas, que tenían grandes inversiones en México. De forma inevitable, las compañías tuvieron una disputa salarial con sus empleados mexicanos, que al final llegó al Tribunal Supremo, donde se falló en favor de los últimos. Las compañías desecharon esta decisión al dar por sentado que, como pasaba con anterioridad, debía haber una vía para sortear tales problemas legales en el atrasado México. Para sorpresa de todos, el presidente intervino y anunció la expropiación de las compañías. El factor que precipitó tal decisión según Cárdenas fue la negativa de éstas a obedecer la decisión del Tribunal Supremo. La fundamentación legal para la expropiación fue el artículo 27 de la Constitución de 1917, que a su vez se basaba en el antiguo principio de la jurisprudencia española de que todos los derechos del subsuelo pertenecen al Estado (la corona) y no al propietario de los derechos de la superficie. Las compañías petroleras montaron en cólera. Las estadounidenses pidieron al presidente Franklin Roosevelt que interviera en su favor. Los propagandistas de derechas estadounidenses tuvieron mucha actividad a costa de los revolucionarios mexicanos «áteos» que primero habían atacado la religión y ahora atacaban la propiedad.

En México, la noticia de la expropiación provocó una respuesta exaltada. El sentimiento nacionalista mexicano, nunca muy sumergido, se desbordó; Cárdenas era ahora un auténtico héroe al plantarse ante los gringos.

En un primer momento, Roosevelt hizo algunas airadas demandas a los mexicanos, pero las cabezas más frías prevalecieron en Washington. Después de todo, su tan cacareada política de «buena vecindad» significaba, cuando menos, no más invasiones de América Latina. De hecho, el gobierno mexicano ya había dicho que indemnizaría a las compañías. Entonces la disputa se centró en el valor de las propiedades expropiadas. Las compañías llenaron reclamaciones immensas que incluían el valor futuro de todo el petróleo del suelo que poseían. La larga negociación que siguió favoreció al gobierno mexicano, ya que la administración Roosevelt decidió desde el principio no intervenir en favor de los inversores.

Se pagó a las compañías y los mexicanos crearon un monopolio estatal del petróleo, Petróleos Mexicanos (PEMEX). Desde entonces ha sido un alto símbolo del nacionalismo, sobre todo porque su blanco había sido Estados Unidos. Las compañías petroleras y sus amigos del gobierno estadounidense tampoco olvidaron. Durante treinta años pusieron en práctica un boicot mundial contra todo petróleo mexicano y obstruyeron de forma efectiva el desarrollo de las operaciones de refinación al ponerlo en la lista negra de todas las principales abastecedoras de equipamientos extranjeros. Las compañías y el gobierno estadounidense pensaron que una de las razones para castigar a los mexicanos por su valentía nacionalista era evitar que a otros gobiernos latinoamericanos les tentara la idea de emprender expropiaciones similares. México pagó un precio por plantar cara al tío Sam.

Para muchos mexicanos, Cárdenas logró dar nueva vida a la revolución. Por otro lado, el sector rico —latifundistas y grandes comerciantes— le odiaban, del mismo modo que sus pares odiaban en Estados Unidos a Franklin Roosevelt. En ambos países, la derecha consideró que estos reformadores caísmáticos preparaban el camino para el izquierdismo radical. Cárdenas proporcionó munición a sus enemigos con gestos a los que se dio mucha publicidad, como la concesión de asilo a Leon Trotsky en 1937 y la acogida de los republicanos españoles que huían de la persecución de Franco al término de la guerra civil. Pero eran gestos para el escenario mundial, no medidas para México.

Estabilidad, crecimiento... y rigidez

Habría sido difícil para todo político seguir a Cárdenas. El nombramiento de su sucesor siguió un modelo que se ha repetido al final de todo mandato presidencial de seis años desde 1940: especulación sin fin, con frecuencia mal informada, acerca del probable elegido. Los mecanismos electivos quizás hayan variado, pero sigue siendo esencialmente una negociación entre los dirigentes políticos más elevados que se efectúa en privado, con frecuentes globos

sonda para valorar la opinión pública. En pocas palabras, un material perfecto para las fábricas de rumores políticos.

En 1940, la elección descansó en Cárdenas, que había acumulado una influencia aplastante en el partido político. No escogió a ninguno de los principales candidatos discutidos (uno radical y otro conservador), sino que se inclinó por su ministro de Guerra, poco conocido, el general Manuel Ávila Camacho. Resulta claro que había un consenso para encauzar la revolución en una dirección moderada.

En su campaña, Ávila Camacho puso en claro que no era anticlerical y hasta se declaró creyente. En realidad, se enfrentaba a un rival: Juan Andreu Almazán, candidato del Partido de Acción Nacional (PAN), un inexperto partido de la derecha pro clerical. El candidato oficial del PRM prevaleció con facilidad.

En varios ámbitos políticos clave, Ávila Camacho se mostró de inmediato más moderado que Cárdenas. Uno fue la distribución de la tierra. Cárdenas se había hecho apreciar por el campesinado mexicano debido a sus concesiones de tierra, que recibieron mucha publicidad y que se destinaron casi de forma invariable a los grupos colectivos que iban a formar ejidos. Ávila Camacho dirigió la distribución a familias individuales y no a éstos, con lo que favoreció la propiedad a pequeña escala y unifamiliar. También se dio un contraste en la cantidad total de tierra utilizada. Ávila Camacho distribuyó cerca de 5 millones de hectáreas, mientras que Cárdenas había distribuido unos 18 millones de hectáreas.

En el campo laboral, Ávila Camacho hizo otro movimiento que no correspondía a la izquierda. Reemplazó al dirigente oficial del sector obrero del partido por Fidel Velázquez, que era abiertamente hostil a los dirigentes de los sindicatos más militantes y ayudó a dificultar las huelgas. Mientras se desalentaba la acción de los sindicatos autónomos, el gobierno avanzó en otro frente: creó el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), organismo que proporcionó a los trabajadores servicios médicos mediante una red de clínicas y hospitales. La cobertura se limitaba a unos cuantos cientos de miles de trabajadores a mediados de los años cuarenta, pero fue el precedente de un sistema de beneficios complementarios que se extendería firmemente a los elementos del movimiento obrero mejor organizados.

Además, Ávila Camacho se enfrentó al reto de una guerra mundial en expansión. Los mexicanos sentían una fuerte simpatía por la causa aliada, pero una suspicacia igual de fuerte por una alianza automática con Estados Unidos. Tras Pearl Harbor, el gobierno mexicano rompió las relaciones diplomáticas con Japón, Alemania e Italia, pero se paró antes de declarar la guerra. Sólo el repetido hundimiento de los barcos mexicanos a manos de los alemanes llevó al gobierno a obtener una declaración de guerra del congreso nacional en mayo de 1942.

México, junto con Brasil, fue uno de los dos países latinoamericanos que aportaron fuerzas de combate contra el Eje. La contribución mexicana fue un escuadrón de aviación, entrenado en Estados Unidos y después agregado a

la Quinta Unidad Aérea estadounidense en Filipinas. El escuadrón actuó con valentía y proporcionó honor a su país en el conflicto distante con Japón. México también suministró materias primas vitales a Estados Unidos a un bajo precio controlado por el Estado.

Otro paso tendría una gran importancia para el futuro. Tras un acuerdo explícito entre los presidentes Franklin Roosevelt y Ávila Camacho, México comenzó a enviar braceros al norte para cubrir el vacío dejado en los campos estadounidenses por el reclutamiento militar. Había existido una emigración espontánea sumergida hacia el norte desde hacía tiempo. Como la guerra continuaba, los braceros mexicanos comenzaron a desempeñar también funciones no agrícolas, lo que levantó la oposición del movimiento obrero estadounidense. La guerra terminó una vez que se había establecido un importante precedente: la aceptación oficial del movimiento hacia el norte de los obreros mexicanos con el fin de realizar trabajos para los que no se encontraran estadounidenses. No obstante, había problemas enormes. Los mexicanos, acostumbrados a sueldos mucho más bajos en su país, a menudo estaban dispuestos a dejarse engatusar (o eran forzados a) por condiciones de empleo inferiores a las que se habían acordado de forma oficial. Cuando terminó la guerra, cerca de 300.000 mexicanos habían pasado por la experiencia de trabajar en Estados Unidos. Aunque muchos habían encontrado prejuicios y discriminación, la mayoría había ganado salarios mucho más altos de los posibles en México. La promesa de ingresos más elevados al otro lado de la frontera, aunque deslustrada, siguió siendo una atracción constante para los mexicanos pobres después de la guerra.

Con el fin de la segunda guerra mundial, México consideró que la industrialización era una vía para salir de la pobreza persistente. El hombre para dirigir el camino fue Miguel Alemán, el primer presidente civil desde la revolución. Uno de sus primeros actos fue reorganizar y rebautizar el partido oficial, ahora denominado Partido Revolucionario Institucional (PRI). El añadido de «institucional» señaló un giro hacia el pragmatismo. El partido se compuso de tres sectores: campesino, obrero y popular, forma que ha retenido desde entonces. Surgió como un partido oficial totalmente dominante, diferente de cualquier otro de América Latina.

El sello del nuevo presidente iba a ser el desarrollo económico. Lo que más necesitaba México era infraestructura: carreteras, presas, comunicaciones, instalaciones portuarias. Así pues, Alemán lanzó un ambicioso programa de obras públicas que hacían hincapié en proyectos de irrigación e hidroeléctricos. También se construyeron autopistas y hoteles para facilitar el tráfico de turismo con Estados Unidos. Esta inversión dio sus frutos, ya que el turismo se convirtió en una importante fuente de divisas, aunque con unas implicaciones sociales y culturales que los nacionalistas mexicanos encontraron desagradables.

La economía mostró un crecimiento significativo. Se establecieron los cimientos mediante un agudo proteccionismo contra las importaciones. La justificación a corto plazo era equilibrar el severo déficit en la balanza de pagos,

pero el efecto neto fue garantizar el mercado a la producción interna, lo que tenía sentido en un mercado tan grande como el mexicano. La manufactura interna respondió con un esfuerzo de crecimiento que alcanzó la media de un 9,2 por 100 anual entre 1948 y 1951. La producción agrícola fue aún mejor en esos años, logrando una media del 10,4 por 100. La inflación y el déficit de la balanza de pagos disminuyeron la tasa de crecimiento en 1952. Una nube adicional sobre los logros económicos de Alemán fue la acusación constante de corrupción.

Los jefes del PRI sabían, cuando llegó el momento de elegir a su sucesor en 1952, que tenían un serio problema para mejorar la imagen del gobierno. El hombre escogido era al menos una respuesta parcial. Adolfo Ruiz Cortines había sido gobernador de Veracruz y después secretario de Interior en la presidencia de Alemán, pero había logrado ganarse la reputación de honesto. Una vez nombrado presidente, llevó a cabo la promesa electoral de cortar de raíz las malversaciones, despidiendo a una serie de cargos sospechosos.

Las medidas más importantes de Ruiz Cortines llegaron en la esfera económica. Desde la guerra, México había venido experimentando una tasa de inflación alta para América Latina. Los responsables de la política económica tomaron una decisión crucial. Optaron por una estrategia de divisa fuerte e inflación baja, que significaba establecer un tipo de cambio (peso/dólar) y luego organizar la economía (mediante una política fiscal y monetaria conservadora) para mantenerlo. El primer paso fue devaluar el peso de 8,65 a 12,5 por dólar en 1954. Esta devaluación fue mayor de lo que nadie esperaba y proporcionó un estímulo inmediato a las exportaciones mexicanas, ahora más baratas para los dólares estadounidenses, e hizo más barato el país para los turistas extranjeros. Pronto se le conoció como un destino prometedor para los inversores internacionales.

Cuando Ruiz Cortines dejó el cargo a la edad de sesenta y siete años, eligieron un sucesor dos décadas más joven. Era Adolfo López Mateos, secretario de Trabajo del gobierno anterior. Como tenía reputación de inclinarse hacia el movimiento obrero, algunos pensaron que el péndulo se desplazaría al centro o incluso a la izquierda moderada.

De forma algo críptica, el mismo López Mateos declaró que su administración sería «de extrema izquierda, dentro de la Constitución». En México no había una sindicalización elevada. La vasta mayoría de los ciudadanos de clase baja, en especial los campesinos, no contaban con medios organizados para protegerse o fomentar sus intereses. Los sindicatos existentes estaban estrechamente vinculados al régimen. Esto contrastaba de forma aguda con Argentina, donde los sindicatos peronistas habían representado una base de oposición política desde mediados de los años cincuenta, y con Chile, donde los movimientos obreros se identificaban con uno u otro partido político. En México, los sindicatos funcionaban como parte esencial del sistema político.

A pesar de este modelo, López Mateos se encontró pronto frente a una excepción. De inmediato se vio desafiado por los trabajadores del ferrocarril, que efectuaron una importante huelga en 1959. Su dirigente, Demetrio

Vallejo, disputaba la estructura de las relaciones laborales dominada por el gobierno, debido en gran medida a que los ferrocarriles eran estatales. Pedía el derecho a una acción sindical genuinamente independiente. Los trabajadores siguieron la orden de huelga y se prepararon para un largo asedio. López Mateos aplicó un remedio antiguo: detuvo a los dirigentes y ordenó a los obreros que volvieran al trabajo. La huelga se rompió y Vallejo permaneció en la cárcel durante años, una lección precisa para otros militantes en cierres.

El gobierno de López Mateos no recurrió sólo al palo en su trato con el sector obrero. También instituyó un plan de reparto de beneficios por el cual muchos trabajadores incrementaron la paga recibida de un 5 a un 10 por 100 al año. Pero esta medida era típica de la política social priista: un beneficio obtenido por iniciativa gubernamental, en lugar de haber sido concedido por la presión de los trabajadores. Dado el hecho de que México seguía contando con mano de obra excedentaria, los trabajadores podían ejercer poca acción económica. Si trataban de organizarse de modo independiente, el aparato gubernamental estaba cerca para cooptarlos o reprimirlos.

No obstante, López Mateos consideró la necesidad de cambiar el curso de la revolución. Con sus consejeros, intentó distanciar su presidencia de las administraciones inclinadas hacia los empresarios desde 1940. Sin duda, debía comenzarse por la propiedad de la tierra. La posibilidad de adquirir terreno seguía siendo el gran sueño de los campesinos más pobres. El presidente ordenó la distribución de unos 12 millones de hectáreas, con lo que alcanzó un récord de reforma agraria sólo superado por Cárdenas. Proporcionar los servicios básicos (y el crédito) para estos nuevos propietarios era mucho más difícil y rara vez se logró. Sin embargo, se había recuperado el impulso revolucionario en un ámbito crucial.

En política económica, López Mateos continuó las medidas de divisa fuerte implícitas en la devaluación de 1954. La inversión se mantuvo elevada y México comenzó a reunir capital en el extranjero, sobre todo en el mercado de bonos de Nueva York. La atracción era el alto tipo de interés, la garantía de convertibilidad (a dólares) y la aparente estabilidad política. El gobierno logró que la inflación fuera extraordinariamente baja, con lo que se hizo posible seguir con el tipo de cambio fijo a 12,5 pesos por dólar. Sin embargo, México no era en absoluto una economía de libre mercado en un cien por cien. De hecho, la intervención estatal en la economía aumentó en los años de López Mateos. Por ejemplo, se nacionalizaron las compañías eléctricas estadounidenses y canadienses, al igual que la industria cinematográfica, que había controlado en gran medida Estados Unidos.

Los años de López Mateos (1958-1964) aportaron algunos cambios significativos en otros ámbitos. En asuntos exteriores, el gobierno mexicano logró hallar una solución definitiva a la antigua disputa fronteriza de Chamizal con Estados Unidos. En 1964 un acuerdo formal entre López Mateos y el presidente estadounidense Lyndon Johnson otorgó a México la soberanía sobre el territorio de las orillas del río en la zona de El Paso. Al mismo tiempo, Ló-

pez Mateos conservó la independencia en otro asunto: la Cuba de Fidel Castro. Desde 1960, Estados Unidos promovió de forma incesante los votos contra Cuba en la Organización de Estados Americanos. México fue el único país latinoamericano que nunca rompió relaciones con ese país. Se enorgulleció de haber rehusado doblegarse al llamamiento estadounidense para lograr una respuesta uniforme de sus aliados latinoamericanos.

El candidato oficial para suceder a López Mateos en 1964 fue Gustavo Díaz Ordaz, de quien muchos pensaron que haría volver al PRI hacia la derecha. Era del estado de Puebla, plaza fuerte del catolicismo mexicano. Como secretario de Interior del gobierno saliente, había ordenado con anterioridad la detención de ciertos «radicales», incluido el artista de fama mundial David Alfaro Siqueiros.

Díaz Ordaz hizo frente a esta expectación plegándose a continuar las medidas de su predecesor, pero pronto fracasó en la primera prueba. López Mateos se había tomado en serio las críticas hacia el sistema unipartidista del PRI e impulsó una enmienda constitucional que garantizara a los partidos de la oposición un mínimo de escaños parlamentarios si lograban un mínimo del voto nacional. Con la aplicación de este principio en las elecciones de 1964, tanto el PAN (de orientación derechista) como el PPS (de izquierdas) habían obtenido escaños en el Congreso, aunque la representación del PRI seguía pesando de forma abrumadora.

Díaz Ordaz comenzó respetando este impulso reformista. Pero el PRI pronto hizo conocer su furia por el nombramiento del nuevo líder del partido, Carlos Madrazo, que intentaba abrir los procedimientos de nombramiento, siempre el vínculo crítico en un sistema electoral unipartidista. Respondiendo a las quejas del aparato del partido, Díaz Ordaz despidió a Madrazo. La nueva línea dura resultó aún más evidente cuando el gobierno federal anuló las elecciones municipales en dos ciudades del estado de Baja California Norte en las que habían ganado los candidatos del PAN. La democratización del sistema unipartidista había sobrepasado sus límites.

Díaz Ordaz habría estado de suerte si las elecciones municipales hubieran sido su única preocupación política. Pero fue su destino gobernar en el periodo de la protesta estudiantil que golpeó al mundo occidental a finales de los años sesenta. El factor desencadenante en México fue su elección como sede de los Juegos Olímpicos en el verano de 1968. El gobierno echó la casa por la ventana para «vender» México al mundo. A la izquierda mexicana, siempre fuerte entre los estudiantes de Ciudad de México, le molestaba la idea de que el gobierno tuviera éxito en esta aventura de relaciones públicas. Y así comenzó una prueba de esfuerzos. La policía antidisturbios actuó con una fuerza brutal en un conflicto desatado en una escuela secundaria de la capital durante el mes de julio. La protesta se extendió a la universidad nacional en el mes de agosto, y culminó en una huelga. El gobierno pensó que era una «conspiración subversiva» para interrumpir los Juegos Olímpicos. El presidente Díaz Ordaz respondió enviando tropas armadas al campus, con lo que violó su posición histórica



El movimiento estudiantil de 1968 comenzó como una protesta restringida con una ideología ecléctica, como sugiere la declaración de solidaridad con el Che Guevara durante su marcha pacífica por el paseo de la Reforma en Ciudad de México. Acabó convirtiéndose en una trágica crisis para el sistema político nacional. (United Press International.)

como lugar de asilo, y se trabó combate. ¿Podrían los estudiantes de izquierdas detener los Juegos Olímpicos?

El trágico ritmo de confrontación entre estudiantes y tropas continuó. El 2 de octubre de 1968, una reunión de estudiantes celebrada en Tlatelolco atrajo un contingente de fuerzas de seguridad mucho más grande de lo habitual. Se cree que no se respetó la orden de dispersarse y la policía y las fuerzas paramilitares actuaron. Después declararon que les habían disparado desde los edificios circundantes. Comenzaron a disparar y la multitud se vio atrapada en un fuego cruzado mortal, mientras cientos caían muertos y muchos más heridos. La matanza de Tlatelolco hizo temblar a México. No hubo investigación ni explicación convincente por parte de las autoridades militares o civiles responsables. Un coro de críticas dijo que había probado la ban-carrota del monopolio del poder priísta. Por lo mismo, la exhibición brutal de fuerza convenció a casi todos de que los desafíos de las masas a la autoridad sólo traerían más ambulancias ululantes. El efecto fue aterrador.

A pesar de la confusión en el frente político, continuaba el auge de la economía mexicana. El producto nacional bruto crecía a un 6 por 100 anual, aunque la distribución de la renta seguía siendo muy desigual. Entre 1950 y 1969, la parte de la renta destinada al 10 por 100 más pobre de la población bajó de un 2,4 por 100 al 2 por 100. Mientras tanto, el 10 por 100 más rico

aumentó la suya de un 49 por 100 a un 51 por 100. Las dos décimas partes de la población que se encontraban en el nivel más elevado aumentaron su renta a costa de los estratos inferiores. Según una medida estándar de la desigualdad general (el coeficiente Gini), el «milagroso» crecimiento de México sólo había aumentado la mala distribución de la renta.

Cuando llegó el momento de que los jefes del PRI nombraran al sucesor de Díaz Ordaz, acordaron que fuera Luis Echeverría, secretario de Interior responsable de las fuerzas de seguridad en Tlatelolco. Resultaba difícil que esta elección volviera a unir a los exacerbados mexicanos. Echeverría trató de mostrar una nueva cara en su energética campaña y, tras la arrolladora victoria usual, se sumergió en sus nuevas obligaciones. La esfera en la que decidió alcanzar sus mayores logros fue en la dirección de la economía, donde pronto fue muy criticado.

Echeverría y sus consejeros querían crecimiento económico, pero también una mejor distribución de sus beneficios. Un lugar obvio para comenzar, como siempre en México, era el sector rural. Los esfuerzos se centraron en la infraestructura: electrificación rural y sistema de carreteras. Para pacificar a los consumidores de las ciudades, el gobierno ajustó los controles de precios existentes para los productos alimenticios básicos. En la práctica, el gobierno federal se estaba comprometiendo a subsidiar de forma progresiva los alimentos a las masas urbanas. Su financiación sólo se podía lograr sacando fondos de la hacienda federal o pagando a los campesinos por sus bienes precios por debajo del costo. Lo último era inevitable que desalentara la producción y lo primero tendía a resultar inflacionario. Según avanzó el mandato de Echeverría, fue recurriendo cada vez más a medidas a corto plazo que canalizaran recursos (salarios, tierra, servicios sociales) a los pobres.

Al mismo tiempo, el Estado aumentaba su control general sobre la economía. Además del gasto directo a través de departamentos federales y secretarías, el gobierno distribuyó una gran parte del presupuesto —más de la mitad en años recientes— a una docena de organismos especiales y compañías apoyadas por el Estado. Las instituciones de préstamo importantes, la más sobresaliente la Nacional Financiera, eran manejadas por el gobierno, y su capacidad para establecer los reglamentos crediticios le proporcionaron una influencia considerable sobre la economía. Por ejemplo, en 1970 el gobierno controlaba las acciones del principal de 9 de las 10 firmas más importantes del país, de 13 de las 25 y de 16 de las 50 más importantes. La mayoría de las principales empresas dominadas por el Estado se dedicaban al crédito bancario, los servicios públicos (teléfono y electricidad) o a actividades de infraestructura caras (como el acero o el petróleo), por lo que no siempre competían de forma directa con el sector privado.

A la vez que el Estado mexicano tomaba parte activa en la economía capitalista del país, retenía una considerable independencia del sector privado. Gran parte de su autonomía provenía del hecho de que los dirigentes públicos mexicanos eran, en su mayoría, políticos profesionales. No pertenecían a las familias ricas y, una vez terminados sus estudios, pasaban de forma direc-

ta a la carrera política. En contraste con Estados Unidos, había muy poco cruce de personal entre las compañías privadas y los cargos públicos. En consecuencia, el Estado mexicano no era cautivo de ningún grupo social o de interés. Sin duda, tendía a colaborar con el sector privado, pero no siempre era el caso, situación que proporcionaba al gobierno una considerable libertad de acción.

Mientras continuaba este proceso, el gobierno mexicano se enfrentó a un nuevo problema: un movimiento guerrillero. Los políticos se habían reafirmado desde hacía mucho tiempo en que su país era «diferente» del resto de América Latina, donde las guerrillas eran corrientes. Después de todo, México ya había tenido su revolución. Pero no era inmune. Aparecieron las guerrillas e hicieron un llamamiento para la acción violenta contra el PRI y todas sus obras. Comenzaron en 1971, con una serie de robos a bancos y secuestros. Los últimos alcanzaron al cuerpo diplomático: sus víctimas incluyeron al cónsul general estadounidense en Guadalajara y a la hija del embajador belga. En 1974, se hicieron con el suegro del presidente y pidieron un rescate. En el estado de Guerrero, un antiguo maestro, Lucio Cabañas, encabezó un ejército guerrillero que comenzó a golpear a discreción. Secuestraron al candidato oficial (PRI) para gobernador y desafiaron al ejército con ataques directos a guarniciones aisladas. Fueron necesarios un ejército de 10.000 soldados y más de un año para dar caza y matar a los rebeldes y a su líder. A pesar de las predicciones de la izquierda, Cabañas no tuvo sucesor en Guerrero ni en otros lugares, así que la guerrilla dejó de ser una amenaza. ¿Por qué? ¿Fue por el genio del sistema de cooptación priista, o debido a la red represiva desarrollada durante décadas de forma paralela a la maquinaria electoral participativa del gobierno?

Pero el principal problema de Echeverría no fue ése, sino la economía. El punto débil de la estrategia económica mexicana era la inflación. En términos llanos, México no podía esperar garantizar la convertibilidad del peso a un tipo fijo a no ser que su inflación no sobrepasara la estadounidense. En 1973, la inflación mexicana llegaba al 20 por 100 y permaneció en ese nivel durante 1974. Los artículos mexicanos, basados en el tipo de cambio de 1954, eran cada vez menos competitivos en el mercado mundial. No obstante, el gobierno mantuvo el tipo fijo, que había sido el fundamento del desarrollo del país y un símbolo político poderoso.

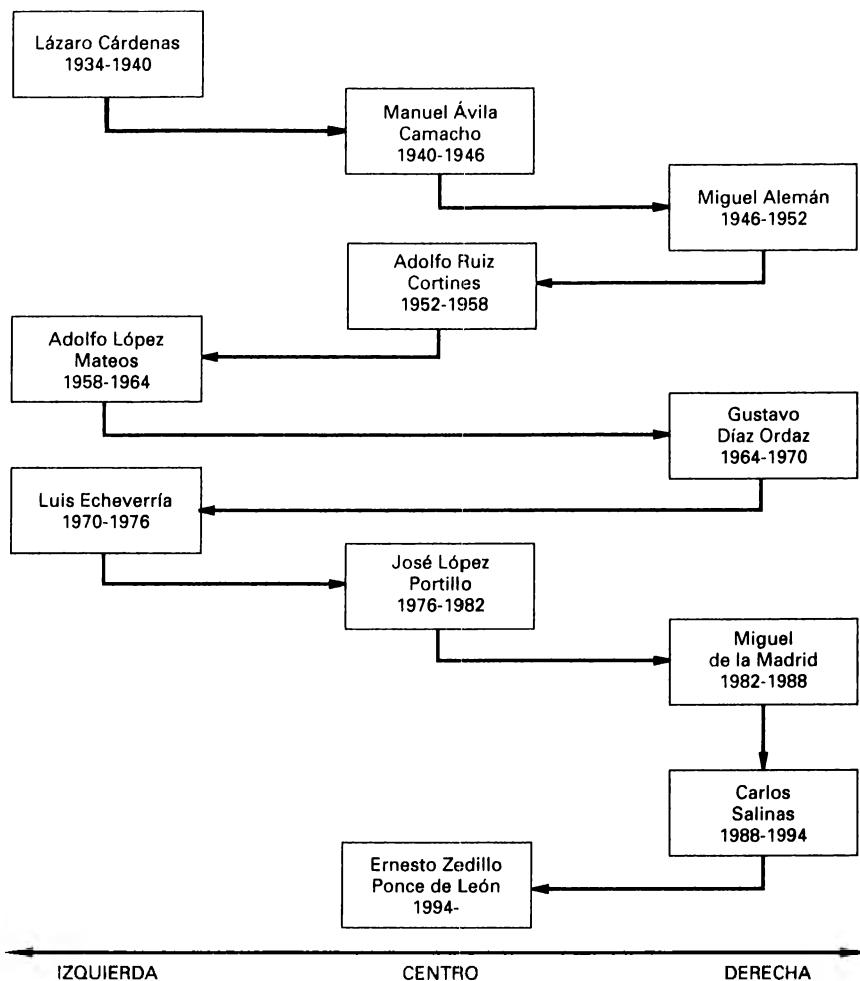
Sobre todo, México tenía que continuar atrayendo capital extranjero. Se había convertido en algo crucial para financiar su inversión y como ayuda a la balanza de pagos. Desde que comenzó la revolución, se había producido un cambio significativo en el volumen y la distribución de la inversión extranjera. El total de la inversión directa extranjera en 1911, en vísperas de la revolución, era de 1.500 millones de dólares (en valores de 1970); en 1940, fue menos de un tercio de esa cantidad. El declive podía justificarse por la conmoción revolucionaria, una política gubernamental deliberada y la Gran Depresión. Sin embargo, en la etapa de posguerra, el volumen aumentó a 2.800 millones de dólares, un 80 por 100 de ellos estadounidenses. Y en agu-

do contraste con los períodos anteriores, en los que la minería y los transportes eran las actividades predominantes de los extranjeros, cerca de tres cuartos (73,8 por 100) de esta inversión fue a parar al sector manufacturero, en su mayoría a industrias críticas: químicas, petroquímicas, de caucho, maquinaria y equipamiento industrial. De este modo, México obtuvo una considerable parte de los recursos financieros para el crecimiento económico del exterior, y los extranjeros, en especial los estadounidenses, asumieron una influencia sustancial aunque indirecta en la dirección de la política económica.

El comercio y el turismo proporcionaron un tipo de dependencia adicional de la economía estadounidense. Aproximadamente un 60 por 100 de las transacciones comerciales mexicanas —importaciones y exportaciones— se efectuaban con Estados Unidos. Cerca de un 85 por 100 de los ingresos por turismo, muy necesarios para compensar el déficit de la balanza de pagos, provenían de Estados Unidos. A pesar del gran deseo mexicano de alcanzar la soberanía económica, mantenían en la práctica íntimos lazos con su vecino del norte. Nada podía haberlo hecho más evidente que la crisis económica del fin de la presidencia de Echeverría.

¿Por qué la inflación importunaba a México? Muchos latinoamericanos quizás plantearan al revés la pregunta: ¿Cómo la había evitado durante tanto tiempo? La respuesta era que el gobierno mexicano, al tratar de complacer a tantos votantes, arrastraba grandes déficits, que financiaba de un modo inflacionario. También presionaba la balanza de pagos, que soportó un serio déficit a mediados del mandato de Echeverría. La continua industrialización del país requería fuertes bienes de capital. Pero una importación relativamente nueva era aún más preocupante: alimentos. El fallo de la economía estaba en la agricultura. Había aumentado la producción de alimentos selectos (tomates, fresas) para la exportación, en especial a Estados Unidos, pero la de los alimentos básicos, en particular cereales, había descendido. Las importaciones destinadas a satisfacer esta demanda supusieron un peso enorme en la balanza de pagos.

Las cuentas llegaron en el último año de la presidencia de Echeverría. El drama se centró en el peso sobrevaluado. Como el gobierno mantuvo con terquedad su tipo de cambio fijo a 12,5 pesos por dólar, todos los mexicanos con medios trataron de convertir sus pesos a la moneda estadounidense. Los desmentidos gubernamentales cada vez más frecuentes acerca de la devaluación sonaban a falsos. En septiembre de 1976, cuando la huida de capital había alcanzado proporciones de pánico, el gobierno le dio curso. El peso fue devaluado un 60 por 100. La credibilidad gubernamental estaba tan baja que se necesitó otra devaluación del 40 por 100 un mes después para asentar el mercado. ¿Podía esta devaluación tan mal dirigida convencer a los inversores (incluidos los mexicanos) para establecer nuevos compromisos en pesos? Aunque finalmente México contaba con un tipo de cambio realista, el gobierno de Echeverría no había logrado atajar el déficit creciente del sector público, un paso esencial si se quería evitar una futura sobrevaluación del peso y con ello futuras crisis en la balanza de pagos.



7.1. Presidentes y espectro político mexicano desde 1934.

Echeverría terminó su mandato con una ráfaga de gestos histrionicos. Sólo once días antes del final de su presidencia, expropió a los ricos terratenientes del norte para redistribuir la tierra a los campesinos pobres. Se extendió el pánico entre los primeros. Por primera vez durante años, los mexicanos hablaban en serio acerca de la posibilidad de un golpe militar.

Parece que a Echeverría le motivó en parte un deseo de ganarse la secretaría general de Naciones Unidas, cargo que entonces se decidía por elección. De repente, los políticos mexicanos se vieron rehenes de la ambición de un hombre. Pero el sistema —en Naciones Unidas y México— resultó más fuerte que él. Su mandato terminó de forma pacífica y según el calendario

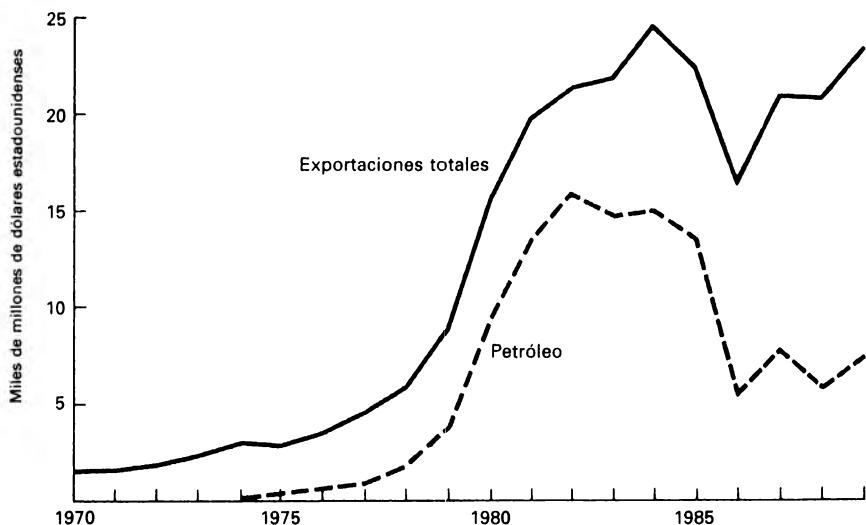
previsto. Contemplada desde la perspectiva actual, su presidencia parece simplemente otro golpe de péndulo. (Para una representación esquemática de las posiciones políticas de los presidentes desde 1934, véase la figura 7.1.)

El nuevo presidente fue José López Portillo, un moderado del gabinete de Echeverría, que dio los pasos esperados para hacer que la política gubernamental se dirigiera de nuevo al centro. Como secretario de Economía de Echeverría, había estado al frente de unas finanzas que parecían hallarse fuera de control. México presentaba déficits crecientes en el presupuesto federal y en la balanza de pagos. La inflación había alcanzado el 30 por 100. Aunque modesta para los patrones latinoamericanos, era suficiente para erosionar la confianza en el modelo de crecimiento mexicano, que se había basado en garantizar la convertibilidad del peso y el movimiento libre de capital. Así pues, López Portillo dio prioridad a la eterna tarea de restaurar la confianza extranjera en su economía. A las pocas semanas de su toma de posesión en diciembre de 1976, el nuevo presidente viajó a Washington para efectuar una visita muy publicitada al presidente saliente Gerald Ford y para pronunciar un discurso en una sesión conjunta del Congreso estadounidense. Fue un poderoso recordatorio de que la élite mexicana seguía considerando su destino estrechamente vinculado a la opinión del país vecino.

La presidencia de López Portillo acabó dominada por los temas económicos. Justo cuando ocupó el cargo, empezaron a descubrirse grandes cantidades de petróleo y en 1980 pudo anunciar que el país poseía unas reservas probadas de 70.000 millones de barriles y potenciales de más de 200.000 millones. En un mundo aparentemente acosado por la escasez crónica de energía y costes en aumento, México había adquirido de improviso un nuevo poder internacional. Un exaltado López Portillo declaró: «Hay dos clases de países en el mundo hoy: los que no tienen petróleo y los que lo tienen. Nosotros lo tenemos».

Por toda la nación surgieron optimismo y orgullo. Las autoridades gubernamentales declararon sus intenciones de aumentar la producción sólo de forma gradual, no con rapidez, para evitar la triste experiencia de Venezuela e Irán, donde el influjo de los petrodólares había estimulado la inflación y exacerbado las desigualdades sociales. Sin embargo, las exportaciones aumentaron y subieron los precios mundiales, por lo que sus ingresos por petróleo saltaron de 500 millones de dólares en 1976 a más de 13.000 millones en 1981. Como muestra la figura 7.2, el valor en dólares del resto de las exportaciones aumentó a un ritmo mucho menos rápido. A pesar de su reticencia moderada, México se estaba volviendo dependiente en exceso de sus ingresos por petróleo.

Los problemas económicos persistían. México se daba cuenta de que la estrategia de mantener la divisa fuerte, que tan bien había funcionado desde mediados de los años cincuenta hasta finales de los setenta, ya no era posible. El gobierno no pudo conseguir que la inflación se situara por debajo del 20 por 100 nada más que un año (1978) y en 1982 se disparó hasta casi el 60 por 100, una tasa sin precedentes en el México de posguerra. Se hizo inevi-



7.2. Exportaciones mexicanas, 1970-1989. *Fuentes:* Fondo Monetario Internacional, *International Financial Statistics*, abril de 1977, pp. 250-251; abril de 1980, pp. 268-269; abril de 1983, pp. 288-291; diciembre de 1990, pp. 78 y 366; Fondo Monetario Internacional, *1985 Yearbook*, vol. III, pp. 450-451; y Fondo Monetario Internacional, *1986 Yearbook*, vol. II, pp. 460-461.

table otra penosa devaluación a comienzos de 1982. Simplemente, el país no había adaptado su sistema financiero a la inflación (como, por ejemplo, habían logrado hacer los brasileños).

Se esperaba poder evitar todo esto con la venta de sus enormes reservas petroleras, pero la caída del precio mundial del crudo desde 1981 redujo de forma considerable los ingresos previstos en divisas. En consecuencia, el gobierno de López Portillo se vio arrastrado a un fuerte préstamo externo, que aumentó la deuda pública exterior a 57.000 millones de dólares a finales de 1981. Más preocupante era el hecho de que la economía siguiera sin crear empleos a un ritmo lo suficientemente rápido como para absorber a todos los mexicanos que se incorporaban a la fuerza laboral.

Cuando se enfrentaba a la oposición, la respuesta más frecuente del régimen era incluir a sus críticos en el sistema, ofreciéndoles una voz, un trabajo o una concesión política. Un observador resume en pocas palabras el planteamiento del gobierno: dos zanahorias, quizás tres o cuatro, luego un palo si era necesario. Al abarcar (y apaciguar) a la oposición, el Estado mexicano lograba fortalecer su apoyo.

Para mantener la tradición, López Portillo patrocinó un programa de reformas políticas, que incluía dos innovaciones de un largo alcance particular: la primera consistió en facilitar el registro de los partidos políticos, hasta tal punto que el Partido Comunista obtuvo el reconocimiento oficial; la segunda fue

que se garantizó a los partidos políticos un total mínimo de 100 escaños en una Cámara de Diputados ampliada a 400 miembros. Tales alteraciones no parecían conducir a un cambio fundamental en el centro del poder, pero al menos proporcionaron una salida —dentro del sistema— para la oposición. El candidato oficial a la presidencia fue Miguel de la Madrid, tecnócrata formado en Harvard y secretario de Programación y Presupuesto en el gabinete anterior, que obtuvo una victoria predecible en las elecciones de julio de 1982.

Sin embargo, antes de que pudiera ocupar el cargo el primero de diciembre, la economía mexicana fue sacudida por otra crisis financiera aún mayor. México carecía de dólares para pagar su deuda externa, ahora de más de 80.000 millones. Surgió el pánico en Washington, Nueva York, Frankfurt y Londres, donde se temió que otros deudores latinoamericanos siguieran este ejemplo y se declararan en mora. Si ese hubiera sido el caso, los bancos estadounidenses, europeos y japoneses se habrían enfrentado a pérdidas enormes y se habría planteado una amenaza formidable para los mercados financieros mundiales. Las causas de la crisis eran obvias. El precio de la principal exportación mexicana (el petróleo) había caído en picado, los tipos de interés habían volado hacia arriba y los mexicanos ricos habían sacado del país miles de millones de dólares. El gobierno estadounidense, el FMI y los bancos comerciales se apresuraron a ofrecer un paquete crediticio de «rescate» a México. Estos nuevos préstamos le permitieron continuar pagando intereses, pero no amortizar la deuda.

El rescate tuvo su precio: México tuvo que adoptar un plan de austeridad aprobado por el FMI. El objetivo clave era reducir el déficit público inflacionario, que suponía el peligroso porcentaje del 15 por 100 del PIB. Esto significó eliminar por fases los subsidios gubernamentales a los alimentos y los servicios públicos. También tuvo que reducir sus barreras arancelarias, con lo que se estimuló la eficiencia industrial y una mayor competitividad en los mercados de exportación mundiales.

El presidente De la Madrid siguió debidamente las prescripciones del FMI, pero al precio de inducir una profunda recesión. En 1985, los salarios reales habían caído un 40 por 100 con respecto a 1982; el nivel de vida descendió aún más una vez que finalizaron los subsidios sobre los alimentos de la dieta básica, como las tortillas de maíz. En septiembre de 1985, un severo terremoto en Ciudad de México incrementó el desastre económico. La caída de los precios del crudo de 1985-1986 deprimió los ingresos por exportación y debilitó aún más la economía.

En medio de estas dificultades, De la Madrid y sus consejeros decidieron adoptar un cambio dramático en la política económica, un nuevo énfasis que iba a ser caracterizado como «liberalización». El programa contaba con dos pilares fundamentales: uno era reducir y reformar el papel económico del Estado, lo que se iba a efectuar mediante recortes continuos en el gasto público y mediante un programa de «privatización» de las compañías estatales. De las 1.115 empresas públicas que heredó su gobierno a finales de 1982, De la Madrid había logrado vender cerca de 100 y cerrar 279 a finales de 1986.

El segundo componente de la nueva política era la liberalización comercial y la «apertura» de la economía, que se iba a demostrar de modo fehaciente por la entrada de México en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en septiembre de 1986, lo que significaba un compromiso a largo plazo para la reducción de barreras para las importaciones del exterior. Pronto comenzó a rebajar y eliminar de forma gradual sus aranceles y a fomentar sus exportaciones, especialmente las que no tenían que ver con el petróleo. En la práctica, estos cambios supusieron un abandono casi total de las medidas de posguerra de sustitución de las importaciones.

En julio de 1986, México necesitó otro paquete crediticio de urgencia de sus acreedores extranjeros. Una vez más, se le dijo que rebajara su déficit público (por debajo del 8 por 100 del PIB en 1984 pero cercano al 15 por 100 de nuevo en 1986) y que redujera más su protecciónismo. Los nacionalistas adujeron airados que esta reducción destruiría su base industrial y beneficiaría a los productores extranjeros.

A comienzos de 1988, el gobierno de De la Madrid podía ver pocas perspectivas de alivio. La inflación se había acelerado a una tasa anual del 143 por 100, el déficit del sector público se aproximaba al 19 por 100 del PIB y el mercado de capital interno había sido sacudido por una caída del 75 por 100 en el mercado de valores mexicano. No obstante, en diciembre de 1987 llegó otra infusión de capital organizada por Estados Unidos. Dentro de un esquema complejo, México compraría bonos estadounidenses para colocarlos como garantía contra los préstamos de bancos comerciales. El movimiento no ofrecía perspectivas de alivio de la gran deuda, que se había vuelto claramente impagable.

A pesar de estos acuerdos, habría una fricción continua con Estados Unidos. Un ejemplo dramático fue el caso en 1985 de un agente destinado en México del Departamento Antidroga (Drug Enforcement Agency) estadounidense. En apariencia, su investigación había ido demasiado bien, y por ello le secuestraron, torturaron y asesinaron, supuestamente por órdenes de uno de los multimillonarios reyes de la droga mexicanos. La lentitud de la justicia mexicana enfureció a las autoridades estadounidenses, que en consonancia ordenaron un ritmo lento en las aduanas con la frontera mexicana. Este hecho, a su vez, enfureció a los muchos miles de mexicanos que cruzaban la frontera de forma legal a diario. Una causa adicional para las tensiones entre ambos países ha sido la política estadounidense hacia los trabajadores mexicanos (legales o ilegales) en ese país. La Ley Simpson-Rodino, aprobada en 1986, estableció fuertes multas para los empresarios que contrataran «extranjeros indocumentados». La perspectiva de su puesta en práctica extendió escalofríos por el norte y el centro de México, cuyas generaciones más jóvenes consideraban desde hacía tiempo el trabajo en Estados Unidos (por lo general temporal) como su principal esperanza de una vida decente. En 1991 la ley parecía haber tenido sólo un impacto mínimo en los flujos migratorios reales, pero los mexicanos seguían cautelosos.

La crisis de la deuda y el estancamiento económico de finales de los años

ochenta intensificaron la desigualdad social y las tensiones populares. La inversión cayó en picado, aumentó el desempleo y la renta per cápita descendió más de un 9 por 100 durante esa década. En contraste con los países del cono sur en los años sesenta y setenta, sin embargo, México no recurrió a la represión autoritaria a gran escala. Los atributos clave de su sistema político —su competencia restringida, su control de los movimientos de las clases obreras, su autonomía de los intereses privados y su flexibilidad táctica— ayudan a explicar por qué logró evitar el trauma violento que ha afligido a Chile y Argentina.

Conscientes de su poca credibilidad, los dirigentes del PRI hicieron más manifiesto (aunque no genuinamente más abierto) el proceso de elección del candidato oficial para suceder a De la Madrid. El escogido fue otro economista formado en Estados Unidos, Carlos Salinas de Gortari, de sólo treinta y nueve años, que como secretario de Programación y Presupuesto del gobierno anterior era autor de las medidas de austeridad tan impopulares durante los años ochenta.

Las elecciones de 1988 causaron sorpresas y presagiaron posibles cambios significativos. Por primera vez en su historia, el PRI se enfrentó a una oposición seria de la izquierda y la derecha (ya que Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del reverenciado ex presidente, encabezaba una fracción disidente del PRI). El movimiento sindical también mostró su disconformidad con el candidato del PRI. Salinas de Gortari ganó con una escasa mayoría del 50,3 por 100, según los recuentos oficiales y al declarar su victoria afirmó el fin de una era en la «que prácticamente sólo había existido el gobierno de un partido [!]. No obstante, la oposición acusó al régimen de fraude electoral. El joven Salinas tomó posesión del cargo en diciembre de 1988 bajo unas condiciones extraordinariamente difíciles. ¿Sería capaz de vencer el reto?

Parece que sí. Su primera tarea fue demostrar autoridad política. Comenzó nombrando un gabinete dominado por sus colaboradores personales, en lugar de fortalecer su posición política mediante negociaciones. En enero de 1989 dirigió de forma magistral una incursión espectacular a las oficinas centrales del sindicato petrolero, cuyo líder fue de inmediato detenido (por posesión ilegal de armas de fuego). Poco después destituyó al antiguo dirigente del grande y poderoso sindicato de maestros. Poco dispuesto a tolerar la corrupción flagrante en los ámbitos gubernamentales más elevados, en 1990 cesó al secretario de Marina, paso no habitual en vistas del delicado equilibrio de las relaciones civiles y militares en México.

De acuerdo con sus promesas electorales, Salinas de Gortari fomentó una modesta apertura política. Ordenó a las autoridades priistas que reconocieran un triunfo gubernamental del PAN en el importante estado de Baja California (al sur de la frontera con California) y supervisó reformas del sistema electoral y el funcionamiento interno del PRI, pero había límites a esta apertura. El PRI proclamó victorias irreales en elecciones clave en el estado de México, cerca de la capital, una zona que ya se había mostrado como una plaza fuerte de la izquierda en las elecciones presidenciales de 1988. El go-

bierno también acosó e intimidó a Cuauhtémoc Cárdenas y sus seguidores, para los que fue extremadamente difícil organizar sus fuerzas en un partido político cohesionado y duradero. La apertura parecía desviarse hacia la derecha (y el PAN), pero no incluía a la izquierda.

Por primera vez en la historia, aparecieron los derechos humanos en la agenda nacional. Los críticos llamaron la atención sobre numerosos abusos cometidos por la policía nacional de México en una supuesta persecución de traficantes de drogas. Informaron del asesinato o «desaparición» de al menos sesenta simpatizantes de Cárdenas sólo durante 1990. Expresaron su indignación por el asesinato de un prominente activista en favor de los derechos humanos. Para mitigar las críticas, Salinas de Gortari nombró una Comisión Nacional de Derechos Humanos dirigida por el antiguo rector de la universidad José Carpizo, pero no le otorgó una autoridad real.

Fue en la arena económica donde Salinas obtuvo sus logros más persistentes. Con la esperanza de completar los ajustes estructurales de México, continuó y extendió la estrategia «liberalizadora» iniciada bajo De la Madrid y siguió reduciendo las barreras comerciales. Fomentó intensamente la privatización de las empresas de titularidad estatal, poniendo a la venta vacas sagradas tales como la compañía telefónica y la banca (nacionalizada por López Portillo en 1982). Con el apoyo del gobierno estadounidense, negoció un nuevo acuerdo para reestructurar la deuda, que prometía reducir la salida neta de fondos de 2.000 millones de dólares anuales hasta mediados de los años noventa. El gobierno también intentó ayudar al desarrollo local estableciendo un «programa de solidaridad nacional» para proporcionar dinero para semillas a proyectos de autosuficiencia diseminados por todo el país. Quizás en respuesta a estas medidas, la economía nacional mostró signos de recuperación: la inflación anual descendió a un 20-30 por 100, mientras que las tasas de crecimiento del PIB alcanzaron el 3,1 por 100 en 1989 y el 3,9 en 1990.

El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá

El supremo logro del sexenio de Salinas fue el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá. Incapaz de atraer inversión a gran escala de Europa o Japón, el gobierno de Salinas anunció en junio de 1990 su intención de negociar un tratado con Estados Unidos. La propuesta implicaba un repudio total de las estrategias protecciónistas de la industrialización de sustitución de importaciones, y abandonaba la tradición nacional de mantener una cauta distancia del «coloso del norte». Los pequeños industriales y los agricultores cerealeros expresaron temor ante la posibilidad de ser destruidos por la competencia de Estados Unidos, y algunos intelectuales lamentaron el fin inminente de la soberanía económica de la nación y de su orgullo cultural. Sin embargo, Salinas persistió.

Presentado en agosto de 1992, el Tratado de Libre Comercio preveía la creación de una asociación de tres naciones (que incluía Canadá así como a

México y Estados Unidos) que formaría uno de los más grandes bloques comerciales del mundo, con una población de 370 millones y la producción económica global de aproximadamente 6 billones de dólares. Promovería el libre flujo de bienes entre los países miembros eliminando gravámenes, aranceles y barreras comerciales durante un periodo de 15 años: el 65 por 100 de las mercancías estadounidenses quedaría exento de impuestos inmediatamente o dentro de cinco años; la mitad de los bienes agrícolas estadounidenses exportados a México estarían inmediatamente libres de impuestos. Había excepciones especiales para ciertos productos «de alta sensibilidad» en la agricultura, típicamente uno de los sectores más resistentes a la integración económica; la retirada progresiva de aranceles sobre el maíz y las legumbres en México y sobre el jugo de naranja y el azúcar en Estados Unidos se prolongaría hasta el año 2009. Los aranceles sobre todos los automóviles en América del Norte serían retirados en un periodo de diez años, pero las reglas sobre procedencia estipulaban que el contenido local debería ser al menos del 62,5 por 100 para que los vehículos fueran considerados. No es sorprendente que los portavoces de los gobiernos asiáticos vieran esta cláusula como un esfuerzo apenas encubierto de excluir a sus productos y a sus industrias del mercado norteamericano.

El TLC abrió México a la inversión estadounidense en varias formas. Según el tratado los bancos y compañías de seguros estadounidenses podían establecer sucursales en México y ciudadanos estadounidenses podían invertir en la banca y los seguros mexicanos. Mientras que México persistía en prohibir la propiedad extranjera de yacimientos petroleros, según su Constitución, las empresas estadounidenses tenían derecho a competir por contratos con Petróleos Mexicanos (PEMEX) y a operar, en general, bajo las mismas condiciones que las compañías mexicanas. Había un punto notable por su ausencia: fuera de una minuciosa cláusula sobre el desplazamiento de ejecutivos de corporaciones y profesionales seleccionados, el tratado no hacía referencia a la emigración masiva de trabajadores.

El TLC precipitó un ardiente debate en Estados Unidos. En el clímax de la campaña presidencial de 1992, el candidato demócrata Bill Clinton prometió apoyo para el TLC a condición de que hubiera garantías efectivas para la protección del medio ambiente y de los derechos laborales; hacia septiembre de 1993 el gobierno llegó a pactos suplementarios o adicionales sobre los trabajadores y el medio ambiente. Cuando el Congreso de Estados Unidos se preparaba para votar la ratificación, el billonario texano (y antes candidato presidencial) Ross Perot dirigió la carga contra el tratado, sosteniendo que el TLC atraería al empresariado con los bajos salarios de la mano de obra mexicana y así se perderían millones de empleos de trabajadores estadounidenses. Los defensores del TLC insistieron en que el tratado estimularía las exportaciones de Estados Unidos, lograría economías de escala y mejoraría la competitividad de Estados Unidos. Sin tomar en cuenta la ruidosa oposición de los trabajadores sindicalizados, un bastión histórico de apoyo a los demócratas, Clinton buscó sin descanso apoyo para el tratado. Y después de que

Perot tartamudeara durante un memorable debate televisado con el vicepresidente Al Gore, los diputados aprobaron finalmente el TLC por la sorprendente diferencia de 234 a 200; en el Senado el voto fue de 61 a 38.

En su versión final, el TLC tenía varias características sobresalientes. Una es el compromiso implícito con la integración económica regional. Pese a su nombre, el TLC no está principalmente dedicado al «libre comercio». Hacia 1990 los aranceles e incluso las barreras no arancelarias al comercio México-Estados Unidos ya eran bajas. El TLC está principalmente interesado en la inversión. Al obtener un acceso preferencial al mercado de Estados Unidos y un «sello de aprobación» formal por medio del TLC, México esperaba atraer considerables flujos de inversión extranjera directa, de Japón y Europa, así como de Estados Unidos. Al obtener un acceso sin trabas a los mal pagados (pero muy cualificados) trabajadores mexicanos, Estados Unidos esperaba crear una plataforma exportadora de bienes manufacturados y mejorar así su situación competitiva en la economía global. Es por estas razones que el TLC contiene extensos capítulos sobre inversión, competencia, telecomunicaciones y servicios financieros. Implícitamente, el TLC preveía una forma de integración sustancialmente más profunda que la que su nombre reconocía.

En segundo lugar, el TLC incluyó una cláusula explícita para la protección medioambiental. Tal como se había negociado inicialmente, el TLC sólo hacía referencias de pasada a las preocupaciones sobre el medio ambiente. Sin embargo, manteniendo su promesa de campaña, el presidente Clinton supervisó negociaciones sobre las cláusulas adicionales para la protección del medio ambiente; y en un tratado separado, la frontera entre Estados Unidos y México recibió atención especial en el Plan Bilateral Integrado. Mientras algunos observadores plantearon dudas sobre la significación práctica de estos acuerdos, el mero hecho de su negociación dejó clara una cuestión: el comercio y el medio ambiente se han unido inextricablemente. Como escribió un analista, estos desarrollos demuestran contundentemente «que el medio ambiente se ha convertido en un ingrediente de la política comercial en los años noventa, pues era políticamente imposible contemplar la culminación del TLC sin un convenio complementario sobre el medio ambiente».

Aún otra característica distintiva del TLC era su fundamento político subyacente. Estados Unidos buscaba varios objetivos. Uno era preservar la estabilidad de su frontera sur. La idea era que el TLC estimularía el crecimiento económico en México, aligerando la presión social y apoyando el régimen político. Un segundo objetivo era asegurar a Estados Unidos un creciente acceso al petróleo de México, uno de las cinco principales fuentes de las importaciones estadounidenses (los envíos mexicanos a finales de los años ochenta y comienzos de los noventa eran la mitad de los que provenían de la principal fuente, Arabia Saudita). Un tercer propósito era obtener una ficha importante para las negociaciones comerciales con Europa, Japón y el GATT. Y en cuarto lugar, Estados Unidos deseaba consolidar el apoyo diplomático de México en su política exterior en general. Como lo demostra-

ban los desacuerdos sobre América Central en los años ochenta, esta había sido una fuente de tensión bilateral. Pero vigente el TLC, era improbable que México expresase serios desacuerdos con Estados Unidos sobre cuestiones importantes de la diplomacia internacional.

Por su parte, México buscaba, primero y principalmente, el mantenimiento de la paz social. La esperanza era que el TLC atraería inversión, estimularía el empleo, daría una significativa oportunidad de ingresar en el mercado de trabajo a un millón de personas anualmente, y disminuiría así la tensión social. En segundo lugar, el TLC ofrecía a Salinas una oportunidad de institucionalizar sus reformas económicas, aislando las de los caprichos históricos de la sucesión presidencial al inscribirlas en un tratado internacional. En tercer lugar, México estaba buscando la bendición internacional para su poco democrático régimen político. Esto era especialmente importante porque, en comparación con Argentina, Chile, Brasil y otros países que atravesaban procesos de «democratización», México no era ya considerado como un modelo de cortesía política. Finalmente, México creía que el TLC proporcionaría al país una influencia diplomática en el resto de América Latina, y por extensión hacia el Tercer Mundo en su totalidad. La asociación con Canadá y Estados Unidos ligaría a México con democracias industriales avanzadas y con líderes del «primer mundo». En consecuencia, México podía servir como un «puente» entre el mundo en vías de desarrollo y el mundo desarrollado, como representante e interlocutor de los pueblos aspirantes del sur.

La tecnocracia en crisis

Todo el optimismo resultante de la firma del TLC rápidamente se vio cuestionado. El 1 de enero de 1994 —el día en que el TLC entró en vigencia— un movimiento guerrillero en el pobreísimo estado de Chiapas se alzó para denunciar el TLC, el modelo económico salinista y el carácter no democrático del régimen político. Con un liderazgo pintoresco y capaz, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) capturó la atención nacional e internacional durante el curso de negociaciones muy publicitadas con las autoridades gubernamentales. Pese a la variedad de respuestas gubernamentales (desde la presión militar hasta la negociación política), el movimiento zapatista continuaría siendo la espina en el costado del régimen.

Dos meses más tarde, cuando la atención del público se dirigía hacia la sucesión presidencial, una bala asesina acabó con Luis Donald Colosio, el sucesor designado por Salinas y candidato del PRI. Salinas proclamó rápidamente otro candidato, Ernesto Zedillo Ponce de León, de 42 años, que se apresuró a desarrollar una campaña digna de crédito para la próxima elección de agosto. Estos acontecimientos infligieron un golpe devastador a la imagen internacional de México, que ya no podía aparecer como un país que prometía unirse al Primer Mundo; parecía, en cambio, una sociedad tercermundista a punto de venirse abajo.

Serio e inteligente, Zedillo era el tecnócrata por excelencia. Economista doctorado en la Universidad de Yale, Zedillo había hecho la mayor parte de su carrera en el Banco Central y en el Ministerio de Planificación. En consecuencia, tenía muy pocos contactos con los políticos de carrera o funcionarios de los ministerios «políticos» del gobierno federal. Pese a su deslucida campaña, Zedillo ganó las elecciones de agosto de 1994, las más limpias en la historia mexicana según el decir general, con el 48,8 por 100 del voto (comparado con el 26 del derechista PAN y sólo el 16,6 del Partido de la Revolución Democrática de Cuahémoc Cárdenas, PRD), convirtiéndose así en el quinto hombre consecutivo que alcanzaba la presidencia sin haber ocupado alguna vez un cargo elegido.

Apenas asumió el poder en diciembre de 1994, Zedillo tuvo que hacer frente a la crisis. Temiendo la sobrevaluación del peso, los inversores retiraron más de 10.000 millones de dólares de México en una semana. En respuesta el gobierno de Zedillo tuvo que devaluar el peso, que finalmente perdió más de la mitad de su valor respecto al dólar estadounidense, y el gobierno se quedó insolvente durante algunos días. A inicios de 1995, el gobierno de Clinton organizó un paquete multilateral de casi 50.000 millones de dólares, incluidos 20.000 millones del gobierno de Estados Unidos. Un objetivo principal de esta medida era prevenir una posible mora de 30.000 millones en «tesobonos» (bonos a corto plazo emitidos por el tesoro mexicano, pagaderos en dólares), que habrían infligido un grave perjuicio a los fondos de pensiones, fondos mutuos y de otros inversores institucionales de Estados Unidos. Otro era sostener la credibilidad de la reforma económica y la propia viabilidad del TLC.

La crisis financiera provocó una crisis política también. Cuando las críticas arreciaron contra la insistencia de Salinas en mantener un tipo de cambio irreal durante todo 1994, el ex presidente criticó públicamente a Zedillo y a su gabinete por tratar erróneamente la devaluación de diciembre. Zedillo reaccionó enviando a Salinas a un exilio *de facto* en Estados Unidos, y luego autorizando el arresto de su hermano mayor por corrupción. La detención por las autoridades estadounidenses de un ex subprocurador de la república bajo Salinas llevó a más denuncias de corrupción, de nepotismo y de la implicación oficial en el asesinato de un importante líder del PRI en septiembre de 1994. Graves fisuras amenazaban con dividir a la élite política mexicana.

La opinión pública pronto mostró su desaprobación. Por primera vez en décadas comenzaron a circular rumores de que era posible que un presidente del PRI no pudiera concluir su periodo. Una encuesta a comienzos de 1995 mostraba que casi la mitad de los encuestados creía que era posible un golpe militar. Los votantes del estado de Jalisco, un antiguo bastión del PRI, eligieron al candidato del PAN, el partido opositor, como gobernador. Incluso donde el PRI se atribuyó victorias, como en las elecciones estatales de Tabasco y Yucatán, los resultados eran disputados con acritud. Claramente, el PRI estaba perdiendo su capacidad para conseguir y ganar votos.

A mediados de los años noventa, era evidente que Zedillo, y México, se enfrentaban al menos a tres desafíos de largo alcance. Uno estaba centrado en la economía, que se sumió en la recesión en la primera mitad de 1995. Era necesario no sólo recuperar la inversión y estimular el crecimiento, sino también aliviar los problemas de la pobreza y la desigualdad. Entre 1963 y 1981, según un estudio, la proporción de mexicanos por debajo del nivel de pobreza cayó del 77,5 por 100 al 48,5 por 100; pero entre 1982 y 1992, con las reformas de libre mercado, subió otra vez al 66 por 100. Y pese a su cooperación con los acreedores internacionales, México aún afrontaba una descomunal deuda externa de más de 120.000 millones de dólares, con intereses anuales que consumían cerca del 15 por 100 de los ingresos de las exportaciones. La crisis de la deuda de los años ochenta proyectaba una larga sombra.

Un segundo desafío era el orden público, especialmente en relación al surgimiento de nuevos y poderosos carteles de la droga. Poco después de asumir la presidencia, Zedillo recibió un informe oficial que advertía que «el poder de las organizaciones narcotraficantes podía llevar a situaciones de ingobernabilidad». Los carteles más peligrosos no estaban ocupados con la marihuana o la heroína, productos tradicionales de México, sino en el transporte de cocaína desde Colombia. Con una estimación de 7.000 millones de ingresos anuales, estos grupos podían gastar hasta 500.000 millones en sobornos, más del doble del presupuesto global de la oficina del fiscal general. Hacia mediados de los años noventa, México tenía cerca de media docena de organizaciones narcotraficantes de verdadero alcance internacional (en Tijuana, Sinaloa, Ciudad Juárez, Guadalajara y en el estado de Tamaulipas, donde los traficantes controlaban un floreciente viaducto para la cocaína en el golfo de México). Los carteles de la droga estaban implicados en una ola de violencia que azotó México, y que incluyó el asesinato de un cardenal católico en 1993. El ex fiscal Eduardo Valle Espinosa proclamó que el país había caído bajo el imperio de los narcotraficantes y que, como Colombia, se había convertido en una «narcodemocracia».

El tercer desafío, y quizá el más arduo, era la transición política. Estaba claro que el viejo sistema de la dominación del PRI estaba sufriendo un cambio. Entre 1964 y 1994, por ejemplo, la proporción de distritos electorales que mostraban una «fuerte» hegemonía priista decayó del 52,2 por 100 a sólo el 2,3 por 100; hacia 1994 casi el 26 por 100 mostraban competencia bipartidaria, el 55 por 100 revelaban competencia multipartidaria. Aunque parecía posible que México se encaminase a un tripartidismo *de facto*, lo que dominaba el sistema político era sobre todo la incertidumbre. Como observaba el novelista Carlos Fuentes: «La verdad evidente sobre México es que un sistema se derrumba sobre nosotros, pero no tenemos otro para poner en su lugar».

Cuba: última colonia, primer Estado socialista

El desarrollo histórico de Cuba se ha visto profundamente afectado por su situación geográfica, pues es una isla atravesada frente a una línea costera vital que alimenta la rica cuenca del Caribe y que se extiende desde Florida a la Guayana. Colón la descubrió en su primer viaje (1492) y pronto se convirtió en punto de partida de las numerosas expediciones españolas a tierra firme mexicana y norteamericana. Durante los siglos XVI y XVII, no atrajo mucha atención imperial, pero su importancia comercial y estratégica aumentó en el siglo XVIII con la expansión de las flotas regulares entre España y sus colonias americanas.

La población indígena, descendiente de inmigrantes de las Antillas Menores, apenas sobrevivió al primer siglo de colonización española. Aquí, como en otros lugares de América Latina, los conquistadores europeos acudieron a los negros africanos para que suministraran la mano de obra. Como consecuencia, Cuba se convirtió en una sociedad multirracial: según un cálculo, en el siglo XX, la población era un 40 por 100 negra, un 30 por 100 blanca y otro 30 por 100 mestiza (incluidos orientales e indios).

Su economía languideció bajo las rígidas medidas mercantilistas de la corona española, hasta que las reformas de Carlos III (1759-1788) proporcionaron el estímulo necesario para el crecimiento. El siglo XIX contempló el surgimiento de Cuba como fenómeno agrícola. Un breve auge cafetalero dio paso al cultivo del tabaco, que se volvió muy importante a mediados de siglo, posición que sigue manteniendo, ya que los puros de la isla continúan considerándose entre los mejores del mundo.

Pero la fuente de riqueza más importante, el producto que moldearía los contornos de la sociedad e historia cubanas, fue otro: la caña de azúcar. Su predominio comenzó en el siglo XVIII y continuó a lo largo del tiempo. En 1860, Cuba producía cerca de un tercio (500.000 toneladas) del suministro mundial de este producto. La fuerza humana que abasteció este auge provenía del espantoso tráfico de esclavos, que envió a más de 600.000 africanos encadenados a Cuba entre 1800 y 1865. La esclavitud se mantuvo hasta 1886, más tiempo que en cualquier otro lugar de América Latina, salvo Brasil.

Así pues, el desarrollo económico de la isla ha sido el típico de la América tropical: una sociedad agrícola orientada a la exportación de un solo cultivo, basado en la esclavitud. Sin embargo, en otro aspecto fue atípica. Cuando faltaba menos de una década para el siglo XX, seguía siendo una colonia. Un intento independentista anterior había fracasado en la amarga guerra de los Diez Años (1868-1878), cuando los nacionalistas cubanos —que se levantaron contra los españoles— no lograron reunir a la élite y fueron lentamente desalojados por las tropas españolas.

Sin embargo, el control político español de la isla se estaba quedando anacrónico, ya que en la década de 1880 el comercio y la inversión se efectuaban ya casi exclusivamente con Estados Unidos. Los intereses comerciales de este país sobre la isla llevaron a numerosas ofertas para comprarla. Los españoles se negaron una y otra vez, pero algunos cubanos prominentes estaban muy a favor de esta anexión. Mientras tanto, se la seguía atrayendo a la órbita estadounidense.

Un puñado de nacionalistas cubanos, que nunca habían aceptado su derrota en 1878, huyeron al exilio y tramaron una nueva rebelión. El más famoso de ellos era José Martí, un elocuente poeta y abogado revolucionario cuyo largo exilio en Nueva York produjo la más memorable retórica cubana antiestadounidense. Una nueva revuelta por la independencia estalló en 1895. Cuba se vio pronto envuelta en otra guerra feroz, en la que tanto los rebeldes como los españoles recurrieron a la táctica de abrasar la tierra. La guerra duró tres años. Los españoles apelaron a métodos brutales, como el uso de campos de concentración, para liquidar a los patriotas que participaban en guerrillas.

Dado su gran interés económico en Cuba, Estados Unidos no podía permanecer al margen de la batalla. La población estadounidense estaba excitada por los relatos de la prensa sensacionalista acerca de la brutalidad española, y los dirigentes empresariales y religiosos demandaron el reconocimiento de los rebeldes. Alimentaban el impulso expansionista tanto quienes se veían favorecidos desde el punto de vista económico como quienes predicaban la misión estadounidense de rescatar a los cubanos del desgobierno español.

Aunque el presidente McKinley resistió las presiones para intervenir, los acontecimientos le sobrepasaron. En abril de 1898, el navío estadounidense *Maine* hizo explosión misteriosamente en el puerto de La Habana. Este hecho, que nunca se ha explicado de forma satisfactoria, barrió los últimos vestigios antibelicistas y el Congreso declaró de inmediato la guerra a España. La «espléndida guerrita» (como la llamó Teddy Roosevelt) duró sólo siete meses. Los españoles mal pertrechados sufrieron una derrota humillante y no les quedó más remedio que otorgar la independencia a Cuba en diciembre de 1898.

Independencia dudosa

Cuba comenzó a disfrutar de su nueva posición bajo la ocupación militar estadounidense, lo que favorecía poco el desarrollo de un sentido sano de identidad nacional. Las autoridades estadounidenses licenciaron de inmediato al ejército rebelde, con lo que desaparecía la única posible oposición armada a su gobierno. La ocupación fue un ejemplo de manual de lo que se consideró una intervención «ilustrada». Los estadounidenses construyeron las tan necesitadas escuelas, carreteras, alcantarillas y líneas telegráficas. Pero todo era para integrar más a los cubanos ya «civilizados» en su órbita.

El gobierno estadounidense no consideraba contradictorio presidir el surgimiento de Cuba como una nación independiente. Para él, las responsabilidades económicas, morales y políticas iban mano a mano. Se permitió a los cubanos, e incluso se los alentó, para que eligieran una Asamblea Constitucional, que redactó una carta magna en 1901. Pero Estados Unidos abrigaba dudas acerca de la capacidad del nuevo país para autogobernarse, así que forzó a los cubanos, contra su voluntad, a incorporar una enmienda (la Enmienda Platt), que le otorgaba el derecho de supervisar su economía, de voto sobre los compromisos internacionales y de intervenir en la política interna a voluntad. Esta provisión permaneció vigente hasta 1934 e hizo de Cuba un protectorado estadounidense.

Su primer presidente, Tomás Estrada Palma (1902-1906), estaba a favor de la anexión completa por parte de Estados Unidos, lo que resultaba muy común entre gran parte de la élite cubana, que veía pocas ventajas y ningún futuro para una Cuba independiente. Su disposición a permitir la invasión yanqui despertó la amargura y la furia de los pocos nacionalistas que mantenían viva la llama del sueño de Martí acerca de una Cuba libre del dominio yanqui.

Estrada Palma obtuvo un segundo mandato mediante fraude electoral. La revuelta que siguió, encabezada por los liberales vencidos, propició una segunda ocupación militar estadounidense (1906-1909), en la que se impuso un presidente interino, Charles Magoon, para que supervisara unas nuevas elecciones. Sin embargo, volvió a haber fraude y se repitió la intervención militar estadounidense en 1917. Todas estas intervenciones representaban oportunidades para que los intereses económicos estadounidenses afianzaran su posición en la economía cubana. El gobierno de la isla se ganó una reputación bien merecida de venal y corrupto; el sistema político cubano estaba muy lejos de haber generado el espíritu democrático que los idealistas estadounidenses pensaron que resultaría de su ocupación.

Visión general: crecimiento económico y cambio social

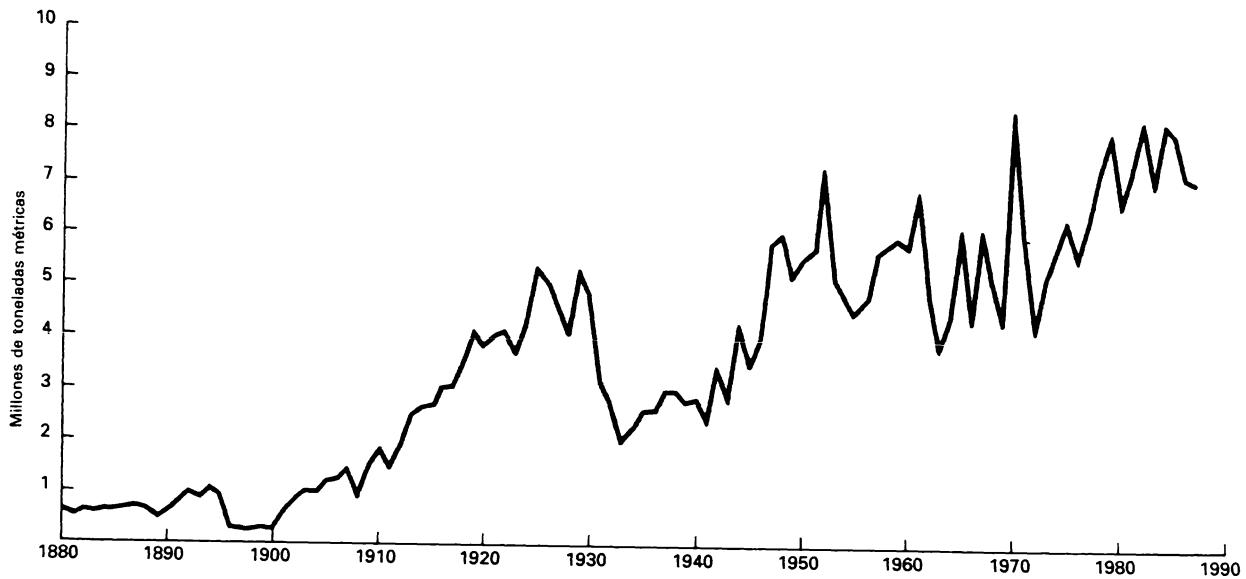
Durante sus años como protectorado, la isla pasó por un gran auge del azúcar. En el siglo XIX, había surgido rápidamente como una de las productoras de azúcar más eficientes del mundo, ayudada por los métodos de refinamiento al vacío modernos. A medida que aumentó la producción, el azúcar llegó a dominar la economía cubana y, finalmente, a tener un efecto duradero sobre la estructura de clases y las relaciones sociales.

A comienzos del siglo XX, como muestra la figura 8.1, Cuba producía varios millones de toneladas de azúcar anuales: cerca de un cuarto del suministro mundial hacia la primera guerra mundial, un 10 por 100 más o menos del total durante los años de la Gran Depresión y casi un 20 por 100 después de la segunda guerra mundial. Durante todo este periodo, las exportaciones de azúcar supusieron aproximadamente el 80 por 100 de las divisas de la isla. Tal dependencia de un solo producto situaba su economía en una posición muy vulnerable. Si la cosecha era pobre (como resultado del clima u otras condiciones) o la demanda era baja (como resultado de una recesión económica en otro lugar) o caían los precios (como resultado de un exceso de abastecimiento de otros exportadores), la economía cubana sufría. Las variaciones de la producción de 1920 a 1959, e incluso después, ilustran algunos de los peligros de esta situación.

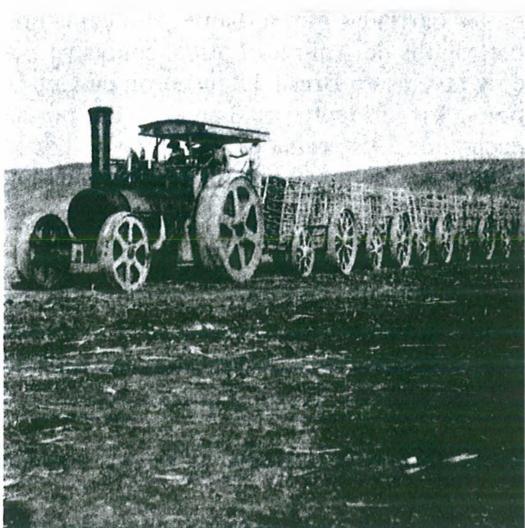
Otro rasgo del auge azucarero fue la concentración de la propiedad, en especial en manos de los inversores estadounidenses. Desde la década de 1870, la nueva tecnología, en particular el ferrocarril, estimuló una rápida reducción del número de trapiches (de 1.190 en 1877 a sólo 207 en 1899), a pesar del incremento de hectáreas de caña. Al mismo tiempo, comenzaron a extenderse las inmensas posesiones azucareras. Los cultivadores independientes, cuyos ingenios pequeños y medianos habían producido la mayoría de la caña hasta la década de 1870, empezaron a venderlos en número creciente a las grandes compañías del ramo. En 1912, éstas controlaban más del 10 por 100 de toda la tierra cubana. Hacia 1925, el número de trapiches había descendido a 184 sólo y controlaban el 17,7 por 100 de la tierra cubana.

Esta concentración de propiedad de trapiches y tierra era el resultado natural del modo en que se había producido el auge azucarero. Bajo el escudo del protectorado, los inversores estadounidenses aportaron su capital para la construcción de centrales modernas y la consolidación de las tierras productoras de caña. Las centrales de propiedad estadounidense producían sólo el 15 por 100 del azúcar cubano en 1906, pero en 1928 su cuota ya alcanzaba cerca del 75 por 100, gracias a que los propietarios cubanos no habían podido pagar los créditos concedidos; luego el número disminuyó y en 1950 se plantó en un 47 por 100.

La tecnología de la producción azucarera afectó a la fuerza laboral, así como a la propiedad y a la dirección. El cultivo requería gran cantidad de mano de obra, en especial en tiempos de cosecha. La caña necesita ser re-



8.1. Producción azucarera en Cuba, 1880-1988. *Fuentes:* Manuel Moreno Fraginals, *El ingenio: complejo económico social cubano del azúcar*, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1978, vol. III, cuadro 1, pp. 37-40; y Arthur MacEwan, *Revolution and Economic Development in Cuba*, Nueva York, St. Martin's Press, 1981, p. 188; James W. Wilkie, Enrique C. Ochoa y David E. Lorey, eds., *Statistical Abstract of Latin America*, vol. 28, Los Ángeles, UCLA, Latin American Center, 1990, cuadro 1.714, p. 455.



Una máquina de vapor arrastra vagonetas de caña de azúcar hasta el trapiche a finales del siglo pasado. (Cortesía de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.)

plantada sólo de forma periódica, a intervalos de cinco a veinticinco años. Así pues, cuando más se necesita mano de obra es durante la cosecha o zafra, un periodo de tres meses febriiles de actividad intensa, que se pasan en su mayor parte cortando caña con machetes. El resto del año se conocía en Cuba como *tiempo muerto*, en el que había un amplio desempleo y subempleo.

Pero los trabajadores no tenían dónde ir, ya que debido a las enormes plantaciones no podían arrendar o comprar pequeñas parcelas para su uso propio. Los encargados querían mantenerlos cerca de las centrales, disponibles para trabajar, para lo que ingenieraron varias tácticas. Una fue cultivar caña en la tierra de las centrales, habitualmente un 10 por 100 del total, y así contar con la presencia de cultivadores independientes cerca para compartir los problemas de la mano de obra con ellos. Otra fue dejar que los trabajadores se endeudaran para que permanecieran obligados al dueño. Una tercera fue fomentar la formación de modestos asentamientos urbanos, llamados bateyes, que crearían comunidades de la clase obrera.

Como resultado, Cuba fue testigo de la aparición de un proletariado rural, un grupo social que se diferenciaba mucho del campesinado clásico. Sin duda, había algunas comunidades campesinas aisladas y autosuficientes, en particular en las ásperas regiones montañosas, pero no eran una clase predominante. Quienes trabajaban en las centrales y las zafras no eran granjeros, sino obreros. Les preocupaban más los salarios y las condiciones laborales que la adquisición de tierra.

Además, los obreros rurales tenían un contacto íntimo con la clase obrera de las ciudades, de forma más notable en La Habana. A pesar de la falta de incentivos y las restricciones, solían emigrar a zonas urbanas, donde vivían

en las barriadas que se han vuelto características de muchas de las mayores metrópolis de América Latina: conocidas como colonias populares en México y favelas en Brasil, adquirieron en Cuba el adecuado nombre de «llega y pon». Sus residentes estaban acosados por la pobreza y las privaciones. En la década de 1950, cerca de un 40 por 100 de la población nacional vivía en las ciudades. Sólo un 40 por 100 de los residentes de clase baja tenía retrete dentro de la casa, sólo un 40 por 100 tenía algún tipo de refrigeración y más de una docena de personas vivían en una sola habitación.

El contacto y la comunicación entre los elementos rurales y urbanos de la clase obrera acabaría teniendo un efecto decisivo en el curso de la historia nacional, ya que permitió una especie de movimiento social de clase amplio y unificado, raro en América Latina. Es preciso señalar también que la Iglesia desempeñó sólo un papel secundario en la sociedad cubana y los sindicatos tuvieron una existencia precaria y esporádica. En otras palabras, las perspectivas y conductas de las clases trabajadoras cubanas no se vieron condicionadas o controladas por instituciones existentes. Con el tiempo, los trabajadores estarían dispuestos para la movilización.

Mientras tanto, Estados Unidos consiguió cada vez más control sobre su economía. No sólo el capital estadounidense se apropió de la mayor parte de las plantaciones y las centrales, sino que Estados Unidos se convirtió con mucho en el mayor cliente de las exportaciones de azúcar cubanas, al soler comprar de un 75 a un 80 por 100 del total. Esto aportó una dimensión política compleja a la dependencia económica cubana hacia Estados Unidos. Por un lado, los inversores estadounidenses de la isla estaban a favor de las medidas comerciales que ayudaran a lograr una posición competitiva a su azúcar en el mercado estadounidense. Pero, por otro, los productores de remolacha azucarrera estadounidenses, así como el resto de los inversores en la producción azucarrera exterior no cubana, se oponían al favoritismo hacia las importaciones de azúcar de la isla. Para complicar más las cosas, los refinadores habrían deseado que se favoreciera las importaciones de azúcar sin refinar, mientras que los dueños de refinerías cubanas querían ese favoritismo sólo para las importaciones de azúcar refinada. Por todo ello, Cuba dependía de las decisiones estadounidenses sobre el destino de su principal industria. Y la política importadora de azúcar era siempre un tema de debate prolongado en Washington.

Nada más lograr la independencia, Cuba había firmado en 1903 un tratado comercial recíproco que otorgaba a su azúcar una reducción del 20 por 100 de los aranceles estadounidenses. A cambio, concedía a las exportaciones estadounidenses reducciones del 20 al 40 por 100 de sus aranceles. Durante los treinta años siguientes, las relaciones comerciales entre ambos países se hicieron más estrechas, ya que, en la práctica, la economía cubana estaba integrada en la estadounidense y su moneda era intercambiable con el dólar. Era el Federal Reserve Bank de Atlanta el que realmente establecía la política monetaria de la isla, ya que las autoridades cubanas, en la práctica, habían entregado todo control sobre el movimiento de activos monetarios entre Cuba y Estados Unidos.

El diligente inversor estadounidense en la isla bien puede haber sonreído por su buena fortuna, al menos hasta el final de la primera guerra mundial. Su término había causado escasez de alimentos y todos los que se dedicaban a su producción, incluida Cuba, se encontraron sacando provecho de unas condiciones de compra de bienes cercanas al pánico. Luego sobrevino una quiebra en 1920. En pocos meses, los precios del azúcar cayeron a menos de un quinto de los niveles máximos alcanzados en mayo de 1920 y en los dos años siguientes su valor descendió a poco más de un cuarto del nivel de 1920. El declive continuó durante el resto de esa década y tuvo un efecto devastador sobre la economía, golpeando sobre todo a aquellos obreros rurales cuya existencia era precaria incluso en los buenos tiempos.

Con el derrumbamiento de la economía mundial en 1929-1930, Cuba se resintió de inmediato por su dependencia (en cierto modo involuntaria) de un socio comercial. El Congreso estadounidense, sometido a presión por los productores nacionales de remolacha azucarera, aprobó en 1930 el arancel Smoot-Hawley, que gravaba con nuevas obligaciones el azúcar cubano. Esto sólo aumentó la presión sobre la tambaleante economía azucarera, que se contrajo de forma abrupta. El único resquicio de luz llegó con la ascensión al poder de Franklin Roosevelt en 1933, quien, con el Congreso democrático, propició la bajada de los aranceles y, mediante el Acuerdo de Comercio Recíproco de 1934, recortó los correspondientes a las importaciones de azúcar cubano, a la vez que Cuba aumentaba sus favores a las importaciones estadounidenses. También en 1934, el Congreso estableció cuotas fijas para los proveedores nacionales y extranjeros del mercado azucarero estadounidense. La cuota cubana fue de un 28 por 100 y permaneció, con algunas modificaciones, hasta 1960, lo que proporcionó a Cuba un acceso privilegiado a este mercado. También convirtió a la isla en objeto constante de chantaje económico o político. Más importante aún, la sujetó a la voluntad del Congreso estadounidense, que podía cambiar la legislación en cualquier momento. La cuota era una bonificación económica y una responsabilidad política. Simbolizaba toda la vulnerabilidad que la «independencia» había llevado a Cuba en el periodo del dominio estadounidense.

En suma, la dependencia del azúcar produjo beneficios mezclados con desventajas para la economía y la sociedad cubanas. Brindó una considerable prosperidad a la isla, sobre todo durante los años de buena zafra, pero generó enormes desigualdades sociales y económicas. Atrajo la inversión exterior, pero colocó al país en una posición subordinada hacia la economía internacional y en especial la estadounidense. También creó una estructura social volátil en la que los elementos rurales y urbanos de una clase obrera despojada durante mucho tiempo mantenían una comunicación mutua. El vértice de la pirámide social no lo ocupaban los latifundistas residentes, como en las haciendas clásicas, sino empresarios extranjeros o propietarios nativos que solían vivir en La Habana: las clases altas estaban ausentes. Había una clase media considerable, al menos para los parámetros latinoamericanos, pero era un estrato amorfo que carecía de cohesión y conciencia. Como una vez ob-

servó el sociólogo Maurice Zeitlin, esta combinación de factores estaba destinada a tener su efecto: «La empresa a gran escala en el campo y la mezcla de obreros industriales y agrícolas en las centrales azucareras impregnó mucho al país de valores y normas de conducta capitalistas, nacionalistas, seculares y antiradicionales. En este sentido, el país estaba *preparado* para su desarrollo y lo único que le faltaba era la revolución

Política: corrupción y decadencia

Durante las décadas de 1920 y 1930, el gobierno cubano se contó entre los más corruptos y brutales de la historia de la república. Gerardo Machado obtuvo la presidencia mediante elecciones en 1925 y pronto utilizó sus poderes ejecutivos para hacerse invencible en las urnas. Sus medidas represivas y el crecimiento de la oposición nacionalista, en especial entre los estudiantes y los obreros urbanos, sacaron a relucir las realidades más desagradables del protectorado estadounidense. Cuando golpeó la depresión mundial, la economía cubana orientada a la exportación sufrió mucho. El precio del azúcar se deprimió de nuevo y la economía se contrajo aún más. La renta total cayó en picado y se extendió el desempleo.

No faltaba voluntad política para explotar los apuros económicos. La oposición a Machado incluía una coalición de estudiantes, dirigentes obreros, reformistas de clase media y políticos descontentos, a quienes mantenía juntos el aborrecimiento a Machado y una aspiración común por una Cuba más honrada y justa. Abundaban los complot armados. Los tiroteos irrumpían con regularidad en la noche habanera. La policía y el ejército de Machado abrumaban con más medidas represivas. Estados Unidos, tan atento a otros tipos de desviaciones de la democracia, permanecía impasible. La administración republicana de Herbert Hoover, debido a su supuesta identificación con la empresa, trataba de poner término a la era de gobernar el Caribe mediante los marines estadounidenses.

La victoria electoral de Franklin Roosevelt condujo a un activista a la Casa Blanca. Mientras Washington adoptaba una postura más crítica sobre Machado, los cubanos se hicieron cargo del asunto. La huelga general de agosto de 1933 ayudó a aguijonear al ejército para socavar al dictador, que huyó de La Habana. Entonces la opinión comenzó a polarizarse abruptamente. Los jóvenes radicales, dominantes en el gobierno provisional, se unieron al ejército, al mando del sargento Fulgencio Batista. Esta alianza tomó el gobierno y alarmó al enviado de Roosevelt, Sumner Welles. El nuevo líder civil era Ramón Grau San Martín, médico y profesor (el único miembro de la universidad que votó en contra de otorgar a Machado un grado honorario) y durante mucho tiempo héroe de la izquierda estudiantil, con quien se alió invariablemente. Se formaron «soviets» y después se ocuparon fábricas y granjas. El nuevo gobierno proclamó una revolución socialista.

A Washington le preocupó profundamente el pronunciado giro izquier-

dista que había tomado su protectorado. Frente a las costas cubanas se estacionaron barcos de la flota estadounidense; parecía cercana una intervención al viejo estilo. Pero un nuevo hombre fuerte, ávido por seguir la fórmula cubana para lograr poder y riqueza, ya estaba en escena. A una señal de Estados Unidos, Batista echó con facilidad a Grau y los radicales. Pronto se acordó un presidente que resultara aceptable para Washington, y los radicales, nacionalistas y reformistas observaron con amargura cómo la política cubana volvía a lo habitual. La hegemonía estadounidense era tan cierta que Washington no puso dificultades para consentir revocar la Enmienda Platt en 1934. La base naval en Guantánamo, por ejemplo, no resultó afectada.

Durante los siguientes veinticinco años, la política cubana fue dominada por Fulgencio Batista. Entre 1934 y 1940, rigió su país mediante presidentes de guiñol; gobernó de forma directa de 1940 a 1944 y luego se quedó tras el escenario, mientras el antiguo radical Grau San Martín volvía a la presidencia (1944-1948). Quedaba poco del Grau idealista y el espectáculo de su descenso al submundo de la corrupción política sólo agudizó el descontento y la furia moral que consumía a radicales y nacionalistas. Su sucesor, otro hombre de paja de Batista, fue Carlos Prío Socarrás (1948-1952). El mismo Batista retomó las riendas presidenciales con un golpe y desde entonces gobernó con poderes dictatoriales (1952-1959).

En realidad, la política cubana manifestó pocos cambios entre 1934 y 1959. Se demostró de forma repetida la inutilidad del sistema electoral, puesto que el hombre fuerte de turno (primero Machado y luego Batista) hacía su voluntad. La oposición honrada, mucho más débil que su grupo electoral, fue combatida y suprimida en vano. ¿Qué había sido del fervor revolucionario de 1933? ¿Dónde estaba la coalición que tanto había atemorizado a Washington? Había seguido el camino de todos los movimientos nacionalistas cubanos, impotentes por la alianza imbatible de las élites, sus sirvientes políticos y militares, y el tío Sam: Si se hubiera preguntado a la mayoría de los cubanos en 1959 si su pequeña isla tenía alguna posibilidad de lograr una independencia cierta, ¿cuántos se habrían atrevido a contestar que sí? ¿Cuántos pensaban realmente que Cuba podría afirmar con éxito su identidad frente al coloso del norte? Muy pocos. La mayoría de sus habitantes cultos pensaban sin duda alguna que lo mejor que podía esperar su país era conseguir unas cuantas ventajas marginales, maximizar los beneficios de su dependencia inevitable de Estados Unidos. ¿Qué más se podía esperar? Pronto surgió una respuesta sorprendente.

Fidel Castro y la construcción de la revolución

Nacido en 1927, Fidel Castro era hijo de un emigrante español que representaba una vieja tradición cubana: era el heredero de un peninsular que había «hecho las Américas», según lo expresaban los españoles desde el siglo xvi. Pero a este hijo de emigrante no le interesaba disfrutar de la vida con-

fortable que sus orígenes y formación le prometían. Quería hacer una América diferente.

Fidel había seguido el camino clásico: había ido al colegio de los jesuitas y luego había seguido la carrera de derecho. Se sumergió en el turbulento mundo de la política estudiantil, donde podían hallarse todas las ramas de pensamiento nacionalista, izquierdista y revolucionario. Demostró ser resuelto, elocuente y ambicioso, pero no se encontraba entre las filas de los más radicales. Nacionalista apasionado, evitaba a los comunistas, que eran los mejor organizados de los grupos estudiantiles.

Poco después de terminar la carrera, Fidel comenzó a viajar por América Latina, conoció a otros nacionalistas radicales y aprendió otras realidades políticas. Su experiencia más importante tuvo lugar en Bogotá en 1948, cuando la colossal revuelta urbana conocida como el *bogotazo* puso en un desorden total a la ciudad durante dos días. El hecho desencadenante había sido el asesinato del carismático político de izquierdas colombiano Jorge Eliécer Gaitán. El pueblo se levantó al unísono y tomó la ciudad, cuyas autoridades habían dimitido aterrorizadas. Fidel se vio arrastrado por la ola de furor popular y trató de convertirse (sin lograrlo) en combatiente. Esos días notables le hicieron saborear las posibilidades de la movilización popular.

Su primer asalto al Estado de Batista provino directamente de la tradición de los revolucionarios románticos latinoamericanos. Fue un ataque, el 26 de julio de 1953, contra el cuartel provincial de Moncada, en la ciudad suroriental de Santiago. Fidel encabezó una banda de 165 jóvenes que irrumpieron en la guarnición en lo que después sólo pudo ser considerado como un ataque suicida. Esperaban contar con la sorpresa, pero fracasaron. La mitad de los atacantes fueron muertos, heridos o detenidos. Fidel y su hermano Raúl se encontraron entre los pocos que pudieron huir. La reacción del gobierno fue rápida y despiadada. La policía comenzó a matar sospechosos. Fidel y su hermano fueron capturados, juzgados y sentenciados a quince años de prisión. Durante el juicio, Fidel pronunció un discurso largo, apasionado y divagador («La Historia me absolverá») que tuvo poco eco por entonces, pero que después se convirtió en un texto sagrado de la revolución.

Los hermanos Castro tuvieron suerte. Sólo pasaron en prisión once meses antes de que Batista concediera una amnistía en un intento de atraerse la opinión pública y mejorar su imagen política. De este modo, Fidel se benefició de una concesión táctica proveniente de un gobierno que estaba totalmente determinado a destruir. Como estaba libre, huyó de inmediato a México para empezar a organizar una nueva fuerza revolucionaria. En este momento no se distinguía mucho del resto innumerable de revolucionarios caribeños que conspiraban sin éxito contra los Trujillos, Somozas y Duvaliers, tiranos cortados por el mismo patrón que Batista.

En 1956 Fidel se embarcó con una nueva partida de revolucionarios en el *Granma*, un viejo yate cuyo nombre quedaría después inmortalizado como el título del periódico oficial revolucionario de Cuba. Con él se hallaba de nuevo su hermano Raúl, más radical en política. También estaba a bordo Er-

nesto («Che») Guevara, médico argentino de veintisiete años que había sido testigo presencial en 1954 del derrocamiento dirigido por la CIA del presidente guatemalteco Jacobo Arbenz, radicalmente antiestadounidense.

Fidel hizo coincidir su viaje con la movilización de fuerzas contrarias a Batista en la isla, que iban a alzarse en comunidades próximas al lugar de desembarco planeado. Pero la navegación perdió el rumbo previsto y el *Granma* encalló en una zona pantanosa. Los ochenta y dos hombres se las vieron y se las desearon para llegar a tierra. Los días siguientes fueron una pesadilla de sed, hambre y muerte a manos de las unidades militares a quienes los habían delatado los campesinos del lugar. Se perdieron setenta hombres, pero Fidel, Raúl y el Che no se encontraron entre ellos. Huyeron a las montañas de Sierra Maestra, al este de Cuba, siguiendo su plan de contingencia. Desde allí, Fidel reconstruyó su partida rebelde y una vez más se lanzaron en guerra contra Batista.

Durante los dos meses siguientes, hasta febrero de 1957, esta columna era casi desconocida para el mundo. La mayor parte de la prensa cubana pensaba, inducida por la propaganda de Batista, que Fidel había muerto. Lo que convirtió a los rebeldes en noticia no fue su actuación contra el gobierno, sino su descubrimiento por un famoso periodista estadounidense.

Fidel y sus compañeros sabían que para derrocar a Batista era imprescindible erosionar su apoyo externo, en especial el de Estados Unidos. Los contactos del primero encontraron el vehículo perfecto: Herbert Matthews, un veterano corresponsal en el extranjero del *New York Times* que había cubierto la guerra civil española y seguía siendo un partidario no resignado de la causa republicana. Le llevaron hasta el escondite de Fidel y desde allí escribió una serie de historias que irrumpieron en la primera plana del más prestigioso periódico estadounidense. Sus entregas dramáticas, que exaltaban la disciplina, el coraje y el compromiso de los rebeldes, dio una posición internacional a Fidel de la noche a la mañana. Los lectores de todo el mundo estaban admirados: ¿cómo había podido eludir un periodista extranjero de cincuenta y siete años el cordón militar y pasar unos días con unas guerrillas que se creía que no existían? De repente, Batista se encontraba a la defensiva en la opinión pública mundial. Estaba en el más peligrosos de los reinos, considerado a la vez brutal e impotente.

Al mes siguiente, marzo de 1957, Fidel recibió refuerzos. Cincuenta y ocho nuevos hombres se unieron a los rebeldes, conducidos hasta allí por el movimiento clandestino. A la mayoría de los guerrilleros de Sierra Maestra les resultaba nueva la vida salvaje, incluso el campo. La mayor parte era, como Fidel, de clase media y no se habían unido porque anhelaran una transformación de toda la sociedad cubana, sino porque odiaban la brutalidad, corrupción y antinacionalismo de los políticos, que parecían siempre servir a los dictadores. Sin embargo, cuando desertaron de las ciudades, se encontraron pronto con otra Cuba. A pesar que pensaban conocerla bien, no estaban preparados para la realidad de las montañas.

Descubrieron que los campesinos apenas sobrevivían en una existencia

miserable. Los rebeldes se interesaron mucho por el destino de estas gentes porque necesitaban su apoyo para sobrevivir en ese medio. Era el primer principio de la guerrilla: lograr la simpatía de los lugareños, no sólo por las provisiones, sino también para que no los delataran a las autoridades.

Sin embargo, la partida rebelde seguía siendo sobre todo de clase media. Se les unieron unos cuantos campesinos, pero nunca en gran número ni alcanzaron posiciones de mando. Esto no resulta sorprendente. La mayoría de las revoluciones de la historia han sido dirigidas por miembros de una contraelite, lo que no quiere decir que no fuera importante la participación y el apoyo de los campesinos. Pero los orígenes y mandos del movimiento castrense eran de la clase media. Las direcciones que tomó con posterioridad son otro asunto.

La guerra de guerrillas es solitaria y peligrosa. Mes tras mes, durante todo 1957, los rebeldes consiguieron lo esencial: sobrevivir. Pero no lograron enfrentarse de forma seria al enemigo. En diciembre, Fidel estaba desanimado. Su estrategia se había basado en esperar el alzamiento de las ciudades, pero tenía muy poco control sobre ese frente. ¿Cuánto tiempo podían esperar en las montañas?

A comienzos de 1958, hubo algunos signos alentadores. En febrero, el obispo de Cuba emitió una carta pastoral apelando por un gobierno de unidad nacional. En marzo, el gobierno estadounidense, sometido a presión por proporcionar armas al régimen represivo de Batista, estableció el embargo del envío de armas a ambos contendientes. Ello constituía un bofetón político para Batista, ya que significaba la pérdida parcial de legitimidad del gobierno establecido.

Una vez que no logró materializarse la huelga general programada para abril de 1958, Fidel decidió cambiar su estrategia. Las guerrillas debían volverse más agresivas. Este fracaso huelguístico también convenció a Batista de que debía dar un paso y el ejército lanzó una «campaña de liquidación» al mes siguiente. Fue un desastre. Todas las unidades del ejército fueron capturadas, junto con los códigos secretos y muchas municiones. Hacia agosto, el ejército había abandonado las montañas, vencido por carecer de mandos y entrenamiento adecuados, y por la inteligencia y empeño superiores del lado rebelde.

Durante todo el resto de 1958, bramó una guerra de guerrillas feroz. No hubo batallas formales ni oleadas de campesinos enfrentándose a los soldados de Batista. Era una guerra de atacar y esconderse, con bombardeos, sabotajes y acoso. Batista respondió con el terror. Como rara vez podía atrapar a las guerrillas, envió a sus secuaces contra los estudiantes y la clase media sospechosa de mantener vínculos con el Movimiento del Veintiséis de Julio. Al hacerlo, aumentaba con rapidez el apoyo a Fidel. Era la táctica clásica de la guerrilla: incitar al gobierno impopular a tomar medidas represivas, que luego servirían para reclutar nuevos rebeldes contra el gobierno.

Batista comenzó a perder su respaldo. Como dictador, su mejor carta había sido siempre su habilidad para mantener el orden, que ahora estaba desapareciendo. Añadido a la frustración y la furia del ejército y de la policía

estaba el hecho de que nunca podían prender al enemigo. No estaban preparados para esa clase de movimiento clandestino que podía eludir su red de informantes regulares. La tortura y ejecución sólo producían nuevas adhesiones rebeldes.

En noviembre, Batista llevó a cabo unas elecciones presidenciales, presentando un nuevo candidato con la esperanza de que su desaparición del escenario mejorara la situación. El resultado fue una señal dramática de que el gobierno había perdido el apoyo público: la mayoría de los votantes se abstuvieron. Era el acontecimiento político para el que habían estado trabajando los rebeldes. Batista maniobró a la desesperada para mantener el menguante apoyo de la administración Eisenhower. Pero Estados Unidos, al igual que en el caso del dictador Machado en 1933, consideraron ahora que sus enormes intereses cubanos estaban en peligro por los excesos del dictador raza y brutal. Batista había agotado su tiempo.

El dictador no deseaba pelear por una causa perdida hasta el final, ya que podía ver cómo se reducía su poder día tras día. Su ejército y policía eran odiados y escarnecidos. Había perdido todo apoyo de Washington y el país estaba tan convencido de su caída, que la economía cada vez se desorganizaba más, mientras empresarios y banqueros esperaban lo inevitable. De improviso, en Nochevieja, convocó una reunión de sus consejeros, designó un presidente que le sucediera y despegó en un avión cargado de familiares rumbo a la República Dominicana. El camino había quedado libre para la entrada triunfal de Fidel en La Habana.

La guerra de guerrillas había sido tan salvaje, la represión tan feroz, el desarrollo tan largo, que la salida repentina de Batista tomó por sorpresa a los rebeldes. Las multitudes corrían libres en las ciudades, sobre todo en La Habana. Las banderas blancas y rojas del Movimiento del Veintiséis de Julio ondeaban por todas partes.

La definición de la revolución

Euforia es la única palabra que puede describir el sentir de La Habana en los primeros días de 1959. Fidel se había convertido en un héroe genuino. La cuestión que ahora ocupaba las mentes de la clase media cubana, de los obreros, campesinos e inversores extranjeros, del embajador estadounidense y de otros observadores era de qué clase de revolución se trataría.

Fidel entraba en un vacío político. La guerra civil no sólo había desacreditado a Batista, sino que había ensuciado a toda la clase política, a todos sus miembros, en mayor o menor grado, comprometida con el dictador. A pesar de la importancia de los conspiradores urbanos, que habían utilizado tácticas heroicas contra el ejército y la policía en la segunda mitad de 1958, el impulso estaba ahora en manos de los hombres de Sierra Maestra, vestidos con sus uniformes verdes de faena. El poder visible era el ejército rebelde y desde entonces iba a continuar siendo una institución política clave.

El principal asidero de Fidel, aparte de su formidable don de liderazgo, era el deseo desesperado de cambio que existía entre sus conciudadanos cubanos. Los más desamparados, los pobres rurales, nunca habían contado para nada en el sistema electoral. Las clases obreras de las ciudades y los pueblos tenían algo más de peso. Pero el sector social más inquieto y más importante era la clase media, de donde había surgido el liderazgo del movimiento en figuras tales como Fidel y Raúl.

Esta clase estaba preparada para recibir un nuevo mensaje político. En primer lugar, estaba asqueada del antiguo cuadro político y sentía repulsa por los dictadores (Machado, Batista) que Cuba producía con regularidad. En segundo lugar, había sido impulsada por los llamamientos hacia una justicia social mayor. Y, por último, anhelaba una Cuba más independiente, es decir, más libre de Estados Unidos. ¿Podía haber una Cuba nacionalista que no fuera antiestadounidense? En teoría, quizás; pero en la práctica, toda afirmación de dignidad nacional cubana estaba predestinada a colisionar con la presencia yanqui.

Durante 1959 se escenificó la revolución. A pesar de todo su heroísmo, Fidel llegaba como un político desconocido. El gobierno comenzó como un triunvirato. Manuel Urrutia era el presidente, José Miró Cardona, el primer ministro y Fidel, comandante en jefe de las fuerzas armadas. La ilusión de un mando colegiado se derrumbó en febrero, cuando Miró Cardona renunció en protesta por su falta de poder real. Fidel asumió su puesto, anticipando lo que estaba por venir.

La primera crisis política importante surgió sobre qué hacer con los oficiales batistas capturados, responsables de lo peor de la represión. Los revolucionarios recurrieron a procedimientos arbitrarios en el trato de sus víctimas, apelando a los sentimientos de «justicia ordinaria» para legitimar sus ejecuciones. En los seis primeros meses de 1959, se condenó a muerte a unas 550 personas, tras ser juzgadas por varios tribunales revolucionarios. Estas ejecuciones, acentuadas por gritos de ¡al paredón!, preocuparon a los liberales cubanos y a sus simpatizantes del exterior, especialmente de Estados Unidos.

En abril de 1959, Fidel partió rumbo a Nueva York, donde iba a visitar la sede de Naciones Unidas. El viaje era de una importancia política extrema, ya que la opinión pública estadounidense era crucial para los acontecimientos cubanos. Desde el punto de vista de Fidel, probablemente la visita fue un éxito. Consiguió proyectar la imagen de un reformista nacionalista que se oponía con fuerza a la intervención extranjera, pero que tampoco era comunista. Tuvo mucho cuidado en mantener sólo un contacto distante con el gobierno estadounidense (el presidente Eisenhower rehusó toda reunión y fue el vicepresidente Richard Nixon quien tuvo que recibir al revolucionario barbudo), mientras cultivó con esmero los centros elitistas de opinión, haciendo, por ejemplo, una aparición triunfal en el Harvard Stadium. Recalcó la necesidad de una reforma radical en Cuba, en especial de una reforma agraria. ¿Quién que conociera la agricultura cubana podía estar en desacuerdo?

Regresó a la isla para poner en práctica su medida más radical hasta la

recha: la Ley de Reforma Agraria del 17 de mayo de 1959, que eliminaba las propiedades desmesuradas, al expropiar las posesiones con más de 400 hectáreas de tierra cultivable, cuya indemnización se pagaría en bonos de divisa cubana en proporción al valor declarado en los impuestos de 1958 (deliberadamente por debajo del valor real, como era la costumbre). Desde ese momento, no se permitiría a ningún extranjero poseer tierra agrícola. Las tierras expropiadas se repartirían entre los pequeños propietarios privados y las cooperativas. Se creó un Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA) para llevar a la práctica esas medidas de largo alcance. Las críticas dentro y fuera de Cuba comenzaron a hacer surgir la alarma. ¿No era un primer paso para el comunismo? ¿No había nombrado Fidel a un comunista, Núñez Jiménez, como director del INRA?

La polarización política se agudizó en junio de 1959. Fidel anunció el descubrimiento de una conspiración contra la revolución. Los no comunistas que habían apoyado el derrocamiento de Batista comenzaron a alarmarse de forma creciente. Un antiguo presidente del Senado atacó la reforma agraria y pidió las elecciones que Fidel había prometido. Ese mismo mes, más tarde, el jefe de las fuerzas aéreas, el comandante Pedro Díaz Lanz, renunció en protesta por la supuesta influencia comunista en el ejército. Luego huyó a Estados Unidos y apoyó la historia de que Fidel era comunista. Tales defeciones fortalecieron a los elementos anticastristas que crecían en Estados Unidos.

En julio, Fidel representó lo que iba a ser un drama habitual en la Cuba revolucionaria. Renunció a su cargo en medio de lo que describió como una crisis política ocasionada por la renuncia del presidente Urrutia, a quien Fidel había acusado de secundar a Díaz Lanz en una conspiración contra la revolución. A continuación hubo enormes reuniones en La Habana, en las que las multitudes aleccionadas con todo cuidado pidieron el regreso de Fidel, que se doblegó a su voluntad.

Ahora se encontraba en una posición con la fuerza suficiente como para hablar del delicado tema de las elecciones y prometió que no habría más al menos durante cuatro o cinco años.

Se estaba urdiendo un caso que para muchos se convertiría en la marca de la radicalización de la revolución. El comandante Huberto Matos, uno de los aliados políticos más antiguos de Fidel y revolucionario veterano, decidió romper con la línea castrista. Renunció a las fuerzas armadas y envió una carta atacando el aumento de la influencia comunista. La respuesta de Fidel fue inmediata. Lo encarceló y movilizó una enorme campaña propagandística contra él como traidor a la revolución. Durante la siguiente década y media, Matos permaneció en prisión, como el símbolo supremo del desviacionismo revolucionario para el régimen fidelista. Para muchos observadores extranjeros, Matos sirvió siendo la víctima más esencial de la represión de tipo estalinista.

En los meses que quedaban de 1959, la política cubana se hizo más aniestadounidense. A diario había acusaciones de conspiraciones para invadir la isla apoyadas por los yanquis con el propósito de restaurar a Batista. Sin ninguna duda no eran acusaciones caprichosas. Los exiliados habían comen-

zado a realizar misiones desde Florida, disparando a los campos de caña y lanzando panfletos antirrevolucionarios. Aunque la Casa Blanca y el Departamento de Estado no se habían puesto de acuerdo aún acerca de las intenciones de Fidel, la CIA y el Pentágono hacía mucho que no tenían dudas. Mientras tanto, Fidel tenía puesta la mirada en Washington, siempre el centro de decisión para la política cubana.

El año de 1960 resultó ser aún más decisivo para el curso de la Revolución cubana. Al final del segundo año en el poder de Fidel, se habían afirmado cuatro tendencias básicas: 1) la nacionalización de la economía; 2) un giro abrupto hacia el bloque soviético; 3) el establecimiento de un régimen autoritario; y 4) el lanzamiento de una política socioeconómica igualitaria.

A lo largo del tiempo, a todos los nacionalistas cubanos les había irritado el grado del control estadounidense sobre la economía cubana. Era inevitable que cualquier gobierno cubano que intentara reafirmar el control cubano sobre su economía entrara en colisión con Estados Unidos, tanto con los inversores como con el gobierno de Washington, que tan a menudo los había apoyado. El choque más importante surgió por el petróleo, siempre un asunto económico emotivo en el Tercer Mundo. Cuando Fidel había descubierto que podía comprarlo más barato de Rusia que de Venezuela, ordenó a las refinerías estadounidenses afincadas en Cuba que procesaran el crudo ruso. Aunque existía una antigua ley que las obligaba a acceder, se negaron. De inmediato, Fidel confiscó las compañías petroleras estadounidenses. En parte como represalia, el presidente Eisenhower suspendió la cuota azucarera cubana en Estados Unidos.

El gobierno cubano respondió tomando casi todo el resto de las propiedades estadounidenses, lo que incluyó las compañías eléctrica y telefónica (otro importante motivo de irritación para los nacionalistas), los trapiches y las minas de níquel. Washington se vengó embargando todo el comercio con Cuba, excepto medicinas y alimentos. También se nacionalizaron otras empresas extranjeras de Cuba.

La campaña nacionalizadora no se restringió a los extranjeros. En el curso de 1960, todas las empresas importantes de Cuba fueron nacionalizadas, incluidos textiles, tabaco, cemento, banca y grandes almacenes. La agricultura tardó más tiempo. El primer paso, en 1959, fue contra las plantaciones azucareras y las centrales propiedad de Batista o sus colaboradores más cercanos. Pero la política agrícola, siempre un severo problema para las economías autoritarias, no se moldeó hasta finales de 1960.

El giro hacia el bloque soviético no fue la causa ni el efecto del choque con Estados Unidos, sino parte integrante del mismo proceso. En su inicio, se trató de comprobar hasta qué punto estarían dispuestos los soviéticos a comprometerse con Cuba, tan lejos de Moscú y tan cerca de Estados Unidos. Los rusos resultaron más osados de lo que casi todos esperaban. En febrero de 1960, mucho antes de la ruptura económica total con Estados Unidos, los soviéticos firmaron un acuerdo comercial con Cuba que le concedía un crédito de 100 millones de dólares para adquirir equipamiento y le prometía la com-

pra de 4 millones de toneladas de azúcar por año durante los cuatro siguientes. Fidel estaba desarrollando ahora una fuente alternativa de tecnología y equipamiento, y los soviéticos parecían dispuestos a integrar a Cuba como aliada «socialista» en el Tercer Mundo.

A medida que transcurría 1960, los soviéticos añadieron armas militares al equipamiento destinado a Cuba. También llegaron misiones técnicas y artísticas para enseñar la lección de cómo construir una sociedad socialista. A finales de 1960, el giro cubano hacia el Este era decisivo. Pero Fidel no había anunciado aún la conversión total de Cuba a la rama soviética del socialismo y los observadores exteriores mantenían opiniones encontradas. Algunos, como el vicepresidente Nixon, estaban convencidos de que Castro era un comunista completo. Otros, más preocupados por la justicia social, esperaban que Fidel pudiera hallar un camino independiente entre ambas superpotencias; si no lo lograba, sostenían, sería debido a la intolerancia de Estados Unidos, que lo empujaba a los brazos rusos.

El Estado revolucionario cubano surgía de modo fragmentario y gradual. Fidel comenzó proclamando su compromiso con la antigua Constitución, que Batista había repudiado con su golpe de 1952. ¿Pero qué instituciones gobernarían la nueva Cuba? El problema era clásico y se lo encontraría más tarde Salvador Allende en Chile: ¿cómo se puede llevar a cabo un cambio económico y social fundamental cuando las instituciones gubernamentales existentes estaban establecidas para mantener el estado de las cosas?

Aunque el antiguo sistema permaneció en vigor, por ejemplo, nunca se hicieron intentos de elegir una nueva legislatura. Era difícil que el Movimiento del Veintiséis de Julio pudiera proporcionar una base institucional, ya que nunca había desarrollado una organización muy unida y estaba lejos de ser un partido político. Desde el comienzo, Fidel recurrió a la institución más sensible y popular: el ejército revolucionario.

En el otoño de 1960, el gobierno creó una importante institución nueva: los Comités para la Defensa de la Revolución (CDR). Eran grupos de ciudadanos de un lugar, organizados principalmente para la defensa civil. La amenaza constante de invasión —de los exiliados y de Estados Unidos— hacía necesaria una medida como ésa. Como la revolución también contaba con enemigos internos, los CDR también tenían la tarea de supervisar las opiniones o conducta contrarrevolucionarias de la población.

El mismo año Fidel pasó a eliminar o neutralizar las instituciones clave del antiguo orden «burgués». En diciembre se había llevado al orden a la prensa, a menudo mediante su toma por parte de sindicatos controlados por los comunistas. Cayó víctima hasta el satírico *Bohemia*, antiguo órgano mordaz antibatista. En diciembre Fidel había obtenido el poder de nombrar nuevos jueces a voluntad, una vez que el poder judicial fue eliminado por etapas. Las universidades y los sindicatos, una vez centros de oposición al gobierno, también cayeron bajo su control absoluto. Una nueva ley otorgó al ministro de Trabajo el poder de «intervenir», es decir, asumir el control legal sobre todo sindicato. Todos los clubes y asociaciones privados se subordinaron a la

dirección del gobierno. La Iglesia, aunque nunca había sido fuerte en el siglo XX, fue observada de cerca y los revolucionarios lanzaron frecuentes ataques sobre los «sacerdotes extranjeros reaccionarios». En 1961, el gobierno nacionalizó todas los colegios privados, con lo que suspendió uno de los papeles eclesiásticos más importantes antes de la revolución.

La revolución determinó la creación de nuevas instituciones en lugar de las antiguas. Fidel parecía estar en todas partes. La movilización era el tema inexorable: movilización contra los invasores, movilización contra los problemas sociales y económicos internos. Todos los cubanos se convertirían en guerrilleros. Para lograr este objetivo, se creó una milicia enorme: a finales de 1960 abarcaba 500.000 personas de una población total de 6,7 millones. Después de todo, era una vía evidente para organizar la nueva Cuba. Y nadie podía dudar de la identidad de su comandante en jefe.

El único partido político que sobrevivió a la transición revolucionaria fue el Comunista. Nunca había sido miembro y durante todo el año 1959 Fidel evitó cualquier identificación personal con él. Pero también dejó claro que el anticomunismo se consideraría antirrevolucionario. A medida que transcurría el año, se inclinó cada vez más hacia miembros del partido para que se ocuparan de ámbitos tales como la reforma agraria. Sin embargo, su participación creciente no amenazó el control efectivo de Fidel sobre éste.

Lo que preocupaba a la mayoría de los cubanos no era la estructura política, sino el modo en que la revolución cambiaría sus vidas. En este punto, Fidel y sus compañeros guerrilleros mantuvieron su mirada fija en los pobres, en especial los rurales. Los revolucionarios estaban determinados a atacar el legado de la Cuba corrupta y capitalista: analfabetismo, enfermedad, malnutrición y dilapidación de viviendas. Una cruzada de un año durante 1960 redujo los índices de analfabetismo a la mitad (su índice de analfabetismo de un 25 por 100 en 1959 ya era bajo para los parámetros latinoamericanos) y desde entonces casi ha desaparecido. Al notar la dirección que tomaba la revolución, los ricos (y muchos de la clase media) comenzaron a huir y el gobierno se quedó con unos bienes caídos del cielo: los que habían abandonado los refugiados —casas, oficinas, granjas— que el Estado pudo distribuir.

En un paso típicamente populista, Fidel comenzó su gobierno congelando los precios y ordenando unas importantes subidas salariales (medida también tomada por Perón en 1946 y Allende en 1970), lo que condujo a una borrachera de compras, pero pronto desaparecieron las existencias. Batista había dejado 500 millones de dólares en reservas de divisas, pero se gastaron en seguida, especialmente en petróleo. Así que la era de la aparente redistribución indolora había terminado a finales de 1959. En 1960 los cubanos descubrieron el coste de las medidas nacionalistas e igualitarias de la revolución. Sin embargo, por una vez en su historia se habían erradicado las enormes desigualdades del sacrificio.

Pero también aumentó el número de desertores. La mayoría atacaba a las guerrillas por haber traicionado la esperanza de elecciones rápidas. En su lugar, acusaban, Fidel y su camarilla estaban guiando a Cuba hacia el totali-

tarismo comunista. Probablemente la mayoría era sincera, pero quizás algunos pensaron que era la mejor táctica para estimular a Estados Unidos.

Algunas personas del gobierno estadounidense necesitaban pocos alientos. A finales de 1959, una facción de línea dura de la CIA y el servicio de información militar consideraron a Fidel un obstáculo soviético con el que había que tratar de forma directa. La CIA comenzó a formular una serie interminable de conspiraciones muchas veces grotescas, como hacerle llegar un puro explosivo. Todas se encaminaban a distorsionar o sabotear el nuevo gobierno. En todas participaban los exiliados cubanos, que inundaban Miami. En ello residía una de las mayores vulnerabilidades de la CIA: trabajar con exiliados hacía cuestionable la seguridad. El aparato de espionaje de Fidel, asistido pronto por el soviético que contaba con mayor experiencia, cultivó sus contactos de Miami y neutralizó gran parte de la laboriosa conspiración estadounidense.

La estrategia más obvia para Washington era apoyar una invasión a Cuba de los exiliados. De ese modo había arribado a la isla José Martí en 1895 y era la estrategia habitual de la política caribeña en el exilio. Desde finales de 1959, la CIA había estado organizando a los exiliados anticastristas. En julio de 1960, el propulsor de la invasión de exiliados, Richard Bissell (de la CIA), convenció al presidente Eisenhower para que aprobara el entrenamiento de una fuerza invasora. A partir de ese momento, Bissell, un intelecto formidable y un burocrata luchador, se convirtió en un excelente abogado de la invasión.

La «firmeza» de la política estadounidense hacia la Cuba revolucionaria se convirtió en el tema de la campaña presidencial de 1960 que ofrecieron el vicepresidente de Eisenhower, Richard Nixon, y un senador de Massachusetts poco conocido, John Fitzgerald Kennedy. En su primer debate televisado, Kennedy tomó una postura más agresiva hacia Cuba que Nixon, quien conocía el plan de invasión y no deseaba comprometerse.

Fue Kennedy, el candidato ostensiblemente más duro, quien ganó la presidencia y heredó el «problema cubano». Eisenhower rompió las relaciones diplomáticas en enero de 1961, en respuesta a la demanda de Fidel de que redujeran su embajada en La Habana de forma drástica. En abril, todavía cargante de experiencia en asuntos exteriores, Kennedy se vio presionado para aprobar una invasión de los exiliados de Cuba. Deseoso de cumplir con su deber anticomunista, pero temeroso del posible efecto en la opinión pública mundial, el nuevo presidente era un mar de dudas. Por fin, dio su visto bueno, pero pidió que no hubiera una participación estadounidense identificable: sobre todo, que no hubiera participación de las fuerzas estadounidenses en combates. Era una preocupación irónica, dado el papel decisivo de la CIA, que afectaría en los acontecimientos.

Como los rumores aumentaban, una fuerza invasora se dirigió a Cuba en abril de 1961. La operación resultó un fracaso desde el principio. Tras un debate interminable, el presidente Kennedy redujo la cobertura aérea a los exiliados y vetó el uso de cualquier avión estadounidense. Los invasores se encontraron en un punto mal escogido de la costa sur, en Bahía de Cochinos,

que dio la casualidad de que Fidel conocía bien. Los exiliados estaban muy desorganizados. Los esperados alzamientos, que supuestamente paralizarían a los defensores cubanos, nunca se produjeron. Las defensas de la isla resultaron más que adecuadas. Las brigadas invasoras fueron capturadas de inmediato. Nunca tuvieron la oportunidad de poner en práctica su táctica de retirada: dirigirse a las montañas y montar una operación de guerrillas.

Bahía de Cochinos no pudo haber sido un triunfo mayor para Fidel y los revolucionarios. Estados Unidos por fin había mostrado sus intenciones hacia lo que Fidel siempre había mantenido: un deseo de retrasar los relojes en Cuba. Aunque la CIA había tratado de desechar a los personajes batistas más ofensivos, entre los invasores se incluían más de unos cuantos que habían estado a su servicio. Fidel y sus seguidores se valieron de esos nombres para probar que Estados Unidos quería restaurar al dictador desacreditado.

La invasión fallida marcó una línea divisoria en las relaciones de Cuba y Estados Unidos. La estrategia más evidente de Washington había fracasado. Cuba no sería la Guatemala del Caribe. ¿Qué opciones le quedaban a Estados Unidos? Muy pocas. Ahora el asunto había trascendido al ámbito de las superpotencias. En julio de 1960, Kruschev había blandido los misiles soviéticos en defensa del socialismo cubano. En abril de 1961, Cuba no necesitó de la ayuda soviética para repeler a los protegidos de la CIA. ¿Pero pararían aquí los estadounidenses?

Los soviéticos acordaron que debían respaldar su amenaza colocando misiles en Cuba. La decisión tomó por sorpresa a casi todos. ¿Por qué querían colocar misiles de alcance medio a las puertas de Estados Unidos cuando los de largo alcance podían alcanzarlo con facilidad desde sus puestos de lanzamiento soviéticos? No obstante, los rusos siguieron adelante y en octubre de 1962 instalaban bases de misiles de alcance medio en Cuba. Era un desafío sin precedentes al equilibrio del poder militar. Estados Unidos pidió a la Unión Soviética que los retirara, bajo la sanción de una cuarentena naval a todos sus envíos militares a la isla. El mundo parecía inclinarse del lado de la guerra nuclear. Tras un intervalo fatídico, Kruschev accedió y los misiles se retiraron.

La confrontación entre superpotencias en el Caribe tuvo implicaciones fatales para Cuba. En primer lugar, no se consultó a Fidel en ningún momento, con lo que el resultado fue que Cuba se convirtió, a ojos de América Latina, en un satélite soviético en asuntos esenciales de seguridad. En segundo lugar, los soviéticos retiraron sus misiles sólo porque Washington prometió (en secreto) que no invadiría la isla. Este fue el resultado que pasó más inadvertido y que fue menos entendido de la crisis de los misiles: Rusia había forzado a Estados Unidos a permitir que continuara el experimento socialista cubano.

Cuando Fidel se declaró marxista-leninista en diciembre de 1961, sus palabras se consideraron como un anticlímax. No importaban sus confesiones ideológicas, continuaba siendo la personalidad más dominante con mucho de la revolución.

Una década de experimento

Tras rechazar la invasión de Bahía de Cochinos en 1961, los revolucionarios se concentrarían en las tareas económicas que afrontaba la nueva Cuba. El hecho central era que su economía giraba alrededor de la exportación de azúcar, en especial a Estados Unidos. Los revolucionarios estaban determinados a cambiar esa dependencia humillante. El principal factor fue Ernesto Che Guevara, el médico-guerrillero argentino y el teórico más creativo de los revolucionarios.

Guevara elaboró un Plan de Cuatro Años que abogaba por la diversificación agrícola (restando importancia al azúcar) y la industrialización (manufacturas de bienes de consumo ligeros). Cuba lanzó su ambicioso plan en medio de una gran fanfarria. La revolución rompería la opresión de una economía de exportación de un solo producto.

En 1962 los resultados ya habían sido desalentadores. En parte, Guevara y sus jóvenes planificadores cosechaban las tempestades de las miopes medidas de 1959-1960. Se habían agotado los suministros de bienes de consumo, no había reserva de divisas y había escasez por todas partes. Lo que era aún peor, la producción azucarera se había hundido. En 1961, los cubanos habían producido 6,8 millones de toneladas de azúcar, la segunda mayor cosecha en la historia cubana. Esta producción disimuló solamente el desentendimiento deliberado que el gobierno mostraba hacia este producto. Parecieron dar por hecho que debía ser así. Se dejaron sin arar los cañaverales, se retrasaron las plantaciones y se olvidaron las fertilizaciones. En 1962, la cosecha cayó a 4,8 millones de toneladas y en 1963 fue sólo de 3,8 millones de toneladas, la más pequeña desde 1945. Resultó desastroso para los ingresos por exportación.

El impulso industrializador tampoco iba bien. Cuba carecía de las materias primas y la experiencia necesarias para la industrialización, incluso en bienes ligeros. Desde 1960, Estados Unidos había puesto en vigor un embargo económico estricto contra la isla y había presionado a todas las empresas estadounidenses (y a sus filiales europeas y latinoamericanas) para que interrumpieran su comercio con ella. Este embargo la forzó a depender en gran medida de Rusia y el bloque del Este para el equipamiento. La dirección iba a provenir de las burocracias planificadoras altamente centralizadas, a semejanza de los modelos soviético y checo. El esfuerzo fue ineficaz y caro. Ni siquiera los rusos parecían capaces de suscribir una utopía socialista en el Caribe.

A mediados de 1963 los soviéticos se plantaron. Los cubanos debían amasar el impulso industrializador y mejorar su planificación. Tenían que reconocer la ventaja comparativa con que contaban: el azúcar. Los responsables políticos de la isla se desplazaron en esa dirección, no sólo debido a la presión soviética, sino porque consideraron que se necesitaba un cambio. Che Guevara renunció, confesando sus errores. Fidel, siempre tomando la iniciativa, se adhirió al azúcar que tan recientemente había desdeñado. En 1963 anunció que en 1970 (más tarde conocido como el «Año del Esfuerzo

Decisivo») Cuba batiría todos los récords de la producción azucarera: cosecharía 10 millones de toneladas. Así surgió la famosa meta de los 10 millones de toneladas.

Continuó el debate sobre las estrategias para lograr el desarrollo económico y la consolidación política. Todavía activo en el régimen, el Che Guevara sostuvo una estrategia «idealista», una postura maoísta que eliminaría totalmente el mercado y los incentivos materiales. Una autoridad central planificadora colectivizaría y dirigiría toda la economía. Una ruptura radical con el pasado capitalista requeriría un «hombre nuevo», un cubano que trabajara por recompensas morales (condecoraciones, reconocimiento público) y reflejara así una conciencia política nueva y más elevada. Mediante la dedicación y el sacrificio los «nuevos» cubanos podrían contribuir a la rápida construcción del socialismo. Los líderes cubanos atravesaban el conocido dilema de los regímenes comunistas: cómo conciliar el idealismo marxista con una política económica pragmática.

Los idealistas guevaristas sostenían, además, que la construcción del socialismo interno requería la promoción agresiva de la revolución en el exterior. Querían probar que una estrategia guerrillera podía funcionar en toda América Latina y quizás en todo el Tercer Mundo. Según su visión voluntarista, las instituciones pragmáticas y convencionales desempeñaban sólo un papel secundario; se necesitaba crear una revolución *ahora*.

El principal adversario de Guevara en este debate fue Carlos Rafael Rodríguez, economista y miembro veterano del Partido Comunista, que defendía una postura práctica. Favorecía un uso más comedido de la planificación centralizada, una dependencia parcial de los mecanismos de mercado y que se dejara autonomía a las empresas individuales. Pensaba que las empresas estatales debían rendir cuentas de sus gastos e ingresos. En pocas palabras, proponía un camino más convencional, basado en los incentivos materiales y no sólo en los morales. También estaba a favor de una política de partido fuerte y «flexible» hacia América Latina, lo que significaba la disposición a tratar con regímenes que Guevara veía sólo como blancos para la oposición revolucionaria.

Mientras proseguían las argumentaciones, Cuba regresaba al azúcar. Sin embargo, a pesar de haber dejado de concentrarse en la industrialización, la producción económica fue desalentadora. La tasa de crecimiento en la mayor parte de la economía durante 1964 fue del 9 por 100, lo que sólo suponía una puesta al día tras los descensos de 1961-1963. En 1965 la cifra disminuyó al 1,5 por 100, inferior al índice de crecimiento poblacional, y en 1966 volvió a ser negativa (-3,7 por 100). La indecisión a la hora de planificar la política básica no estaba construyendo un socialismo dinámico.

En 1966 Fidel dio por terminado el debate con su apoyo al idealismo guevarista. Cuba haría un esfuerzo colectivo gigantesco, acompañado por incentivos morales. Ello aumentó de inmediato el poder de Fidel, ya que se hizo cargo del nuevo aparato planificador centralizado, ahora fortalecido. Con sus lugartenientes de confianza, se sumergió en las menudencias de la organiza-



Fidel Castro se dirige a la multitud a comienzos de los años sesenta; las palomas, usadas con frecuencia como símbolo político, representan el ideal de una sociedad en paz. (Center for Cuban Studies, Nueva York.)

ción económica. Seleccionó y abandonó proyectos favoritos, guiado a menudo por los impulsos producidos por sus interminables visitas a los lugares de trabajo de toda la isla. La atmósfera recordaba los primeros días románticos de la revolución: retórica interminable, sueños eufóricos, celebración del «hombre nuevo» desprendido.

Junto a esta movilización idealista interna, se produjo un aumento del compromiso con la revolución en el exterior. Cuba buscó por América Latina movimientos guerrilleros para ofrecerles armas, entrenamiento y experiencia. Che Guevara encabezó el impulso. Siempre una figura heroica, se convirtió en el enemigo de la CIA y los ejércitos latinoamericanos. Sin embargo, desafortunadamente para él, eligió el altiplano de Bolivia para iniciar el despliegue de sus «muchos Vietnams» en Suramérica, y allí encontró la muerte en 1967, a manos de las tropas de asalto bolivianas entrenadas por Estados Unidos. Un problema importante fue su mala comunicación con el Partido Comunista Boliviano, que lo consideró un aventurero extranjero que no sabía nada de Bolivia. Reflejaba el distanciamiento surgido entre Rusia y

Cuba. La Habana se había descarrido considerablemente de la línea marcada por Moscú para exportar la revolución.

En 1968 Fidel se retractó de la línea guevarista. Ya había habido signos de que el Che no contaba con el apoyo pleno de La Habana durante su desafortunada campaña en Bolivia. Con su respaldo a la invasión soviética de Checoslovaquia en 1968, Fidel señalaba un retorno a la ortodoxia soviética. Luego comenzó a restar importancia a la exportación de la revolución. A pesar de la heroica muerte del Che, las nuevas medidas sugerían que quizás hubiera sido en vano.

Sin embargo, en el frente interno las medidas guevaristas continuaron intactas. La primavera de 1968 contempló la «ofensiva revolucionaria». Lo que quedaba del sector privado se nacionalizó, se subordinó el consumo a la inversión y se exhortó a los cubanos a darlo todo para alcanzar el objetivo omnipresente de los 10 millones de toneladas de azúcar en 1970.

Llegó el año mágico y toda Cuba se movilizó para cortar caña. Hasta los marineros soviéticos de visita, para el sobresalto de muchos, fueron arrebatados de los muelles para empuñar machetes. Todo se sacrificó para enviar mano de obra a los cañaverales. Al darse cuenta de que el objetivo estaba distante, las autoridades dejaron algo de la cosecha de 1969 en los campos con la esperanza de mejorar la cifra de 1970. Durante la recogida, trataron de cortar hasta la última brizna, pero no sirvió de nada: la zafra alcanzó sólo 8,5 millones de toneladas. Era un total prodigioso, el mayor de la historia cubana, pero también podía haber sido la mitad de esa cantidad. Demasiada propaganda, demasiadas promesas. Todo el destino de la revolución había parecido depender de la balanza en los molinos de azúcar. Fue un golpe mortal para la filosofía «voluntarista» del Che y el coste psicológico fue enorme. Pero Fidel, siempre inventivo, estaba a punto de volver a cambiar la política.

La consolidación del régimen

El fracaso del esfuerzo para lograr los diez millones de toneladas facilitó el cambio de Fidel. Todos pudieron ver que el modelo «idealista» había fallado. El 26 de julio de 1970, Fidel lo confesó todo. En un discurso maratónico, Castro puso sobre sus espaldas la responsabilidad de la cruzada quijotesca para conseguir una cosecha impresionante. Ofreció su renuncia, pero las multitudes gritaron que no. El fracaso económico fue borrado por el teatro revolucionario.

Entonces la política cubana se volvió más pragmática. En primer lugar, iba a haber unos nuevos sistemas de gerencia y planificación que suponían una mayor descentralización y utilización de los «beneficios» como una base para la toma de decisiones. En segundo lugar, se iba a dar al sector privado un papel mayor en la agricultura y los servicios. En tercer lugar, la paga se ligaría ahora a la producción, con recompensas por las habilidades necesarias. Por último se incrementaría la interacción económica con Occidente.

Esta política económica más convencional iba acompañada de un cambio en la institucional. Se fortalecía al Partido Comunista y se reestructuraban los sindicatos y otras organizaciones de masas, a las que se otorgaría un papel mayor. Este paso hacia una mayor «ortodoxia» (es decir, un parecido más estrecho con la práctica soviética) también afectó a la cultura. Los controles centralistas sobre la educación y los medios de comunicación se fortalecieron.

Fidel empezó a parecerse a Kruschev por su mayor oscurantismo. A comienzos de 1971 lanzó un ataque furioso contra «los antiguos amigos» de la revolución que le habían acusado de que su régimen personalista estaba conduciendo a Cuba hacia la destrucción económica. Uno era el agrónomo francés René Dumont, que atribuía los fracasos agrícolas cubanos a la egomanía de Fidel y a la militarización sin orden ni concierto de la economía cubana. Otro crítico, el húngaro K. S. Karol, era más devastador debido a que tenía un conocimiento más profundo del pensamiento marxista y experiencia comunista para medir las limitaciones de Fidel.

También a comienzos de 1971 Fidel aplicó medidas estrictas a la escena artística cubana, deteniendo al escritor de fama internacional Heberto Padilla. Parece que bajo coacción, se le obligó a confesar crímenes contra la revolución. Más tarde repitió su *mea culpa* ante una conferencia de escritores, que dio el tono para un modelo más severo de lealtad política, que desde entonces se esperó de todos los artistas de la Cuba revolucionaria.

Parte integrante de este cambio político fue una aproximación creciente a la Unión Soviética, lo que significó una mayor conformidad con sus modelos de toma de decisiones económicas y políticas. Era algo subyacente desde 1968, pero el giro en la política interna hizo la postura general de Cuba más consistente. La experimentación radical había terminado y llegaba la lógica inevitable: la enorme dependencia económica y militar cubana de los soviéticos. Fidel se había convertido en un aliado fiel de la URSS en el Tercer Mundo. Habían desaparecido los duros ataques a los partidos comunistas ortodoxos. Cuando comenzaron los años setenta, la Revolución cubana se aproximaba al modelo soviético mucho más que lo hubiera hecho nunca.

Cuando entraba en los años ochenta, no había ninguna duda de que las antiguas guerrillas habían creado una nueva sociedad. Habían contado con más de dos décadas para educar y entrenar a nuevas generaciones en el compromiso con un ideal igualitario y comunitario. Habían podido formar a sus propios técnicos, con la ayuda soviética y de la Europa del Este, para reemplazar a los cuadros que habían huido de la radicalización del régimen. Habían tenido tiempo para hacer de Cuba una formidable fuerza de combate. Ningún supuesto luchador por la libertad futuro sería capaz de repetir la proeza del *Granma*.

Cuba también había establecido una dependencia económica extrema de la URSS, que recordaba mucho a la que había mantenido en otro tiempo con Estados Unidos. Éste estimó la asistencia económica soviética a la isla en 1989 en 4.200 millones de dólares. Aunque era difícil calcular el total exacto, probablemente fue equivalente a un cuarto del producto nacional bruto cu-

bano. La integración del comercio, tanto de la importación como de la exportación, en el bloque del Este se aproximaba a la situación anterior respecto a Estados Unidos. ¿Había simplemente cambiado un estigma de dependencia por otro? En el sentido más aparente, la respuesta debía ser afirmativa. No obstante, los lazos con la Unión Soviética no ocasionaron la propiedad directa que había generado la reacción violenta contra la penetración económica estadounidense hasta 1959.

Sin embargo, por debajo de las estadísticas había más cuestiones apremiantes. ¿Cuáles eran las consecuencias de su nueva dependencia? Sabemos que Fidel se había hecho eco de la denuncia soviética contra Solidaridad en Polonia («los antisocialistas y contrarrevolucionarios») y elogiado la intervención soviética contra «los salvajes actos de provocación, subversión e interferencia contra la revolución» en Afganistán. Cuba envió más de 30.000 soldados y personal de servicio social para apoyar a regímenes pro soviéticos en países africanos como Angola y Etiopía. ¿Pero cuáles fueron las implicaciones más hondas para la sociedad cubana? La profunda revolución social había sido posible sólo gracias a la protección militar y la ayuda económica soviéticas. Sigue sin aclararse si los cubanos tuvieron más poder de negociación con Moscú que el disfrutado con Washington en otro tiempo, ya que las relaciones soviético-cubanas se dieron en un secreto mucho mayor que el de las anteriores con Estados Unidos.

La revolución ha producido muchos cambios en la isla. Para quienes habían vivido con pocas esperanzas en la Cuba capitalista, mejoró mucho el nivel de vida. Sus mayores triunfos han sido cubrir las necesidades humanas básicas. Se ha desterrado el analfabetismo y se ha creado un amplio sistema educativo, en cuyas enseñanzas hay un alto grado de ideología para inculcar los nuevos valores socialistas. Se ha extendido a los sectores más bajos la atención médica básica, en especial la medicina preventiva. La formación médica se ha adaptado a la salud pública. Se ha garantizado la distribución de alimentos, siempre uno de los reflejos impactantes de la desigualdad social, mediante el racionamiento. Se han establecido patrones nutricionales mínimos, que se han cumplido con creces para toda la población. El resultado es que la esperanza de vida aumentó de los sesenta y tres años en 1960 a setenta y seis en 1992, y la tasa de mortalidad infantil cayó más de dos tercios en ese mismo periodo. Gran parte de este progreso fue obviamente socavado por la crisis económica que se inició en 1990.

El papel de las mujeres ha sido otro ámbito de cambio significativo. La tradición del machismo era especialmente fuerte en la Cuba prerrevolucionaria y ha resultado un obstáculo importante para el movimiento feminista. Por tomar un ejemplo impactante, a mediados de 1980, sólo el 19 por 100 de los miembros del Partido Comunista y candidatos a serlo eran mujeres. Sin embargo, la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) ha recorrido un largo camino para cambiar la opinión y la conducta. El número de mujeres en la educación superior y las escuelas profesionales (en especial en medicina, donde las estudiantes hoy sobrepasan a los varones) ha aumentado de

forma pronunciada. La FMC fue el instrumento para conseguir en 1975 que se adoptara un código familiar igualitario, que obligaba a los esposos a efectuar la mitad de las tareas domésticas. Cualquiera que haya visto la película cubana *Retrato de Teresa* sabe que esta y otras metas feministas no fueron fáciles de alcanzar en Cuba. ¿Pero dónde no es así? A pesar del perceptible cambio en las actitudes cubanas, a las mujeres casadas, en especial a las que tenían hijos, les ha resultado difícil entrar en la fuerza laboral de tiempo completo. Una de las razones es el coste y los inconvenientes del cuidado de los niños. Otra es el hecho de que un ingreso adicional quizás proporcione pocos beneficios extras, ya que los bienes de consumo siguen siendo escasos.

La vivienda era otra necesidad básica, distribuida de una forma muy desigual hasta 1959. Aquí los revolucionarios tuvieron dificultades para avanzar con rapidez. Era bastante fácil expropiar las residencias de los ricos y darlas a grupos especiales (como los estudiantes). Pero la nueva construcción era más lenta y cara. A corto plazo, no se consideró que la inversión en nuevas viviendas fuera una prioridad. En ello los cubanos seguían, quizás sin darse cuenta, el ejemplo de los soviéticos, para quienes la escasez de vivienda había sido un problema social importante.

Resulta bastante irónico que uno de los mayores fracasos económicos de Cuba fuera en la agricultura. En los primeros años de la revolución podía entenderse. Las guerrillas estaban ávidas por repudiar la antigua dependencia de la isla a un solo cultivo de exportación. La gran esperanza de Guevara había sido diversificar la agricultura, así como la industrialización. Incluso antes del giro hacia el realismo económico efectuado en 1963, la producción de alimentos iba despacio. Según un estudio de Naciones Unidas, el rendimiento agrícola cubano durante 1961-1976 fue semejante al de Chile y se encontró entre los peores de América Latina. Desde 1976 la producción agrícola aumentó a una tasa considerable, pero una década después la isla seguía siendo muy dependiente de la importación de alimentos.

Cuando terminó la década de 1970, los gobiernos cubano y estadounidense trataron de mejorar sus relaciones. Fidel decidió permitir que los familiares estadounidenses de los cubanos pudieran visitar la isla, por primera vez desde comienzos de la revolución. Y llegaron 100.000 de ellos en 1979, cargados con aparatos electrónicos y otros bienes de consumo. Como esos bienes no existían o sólo podían adquirirse a precios elevados en el mercado negro, muchos cubanos se dieron cuenta de lo limitados que eran sus bienes de consumo tras dos décadas de revolución.

Sin duda, esta frustración contribuyó a lo que se convirtió en un dramático éxodo de Cuba en 1980. El desencadenante fue la decisión del gobierno cubano de retirar la guardia de la embajada peruana en respuesta a un incidente violento en el que participaron algunos cubanos, que atacaron su valla para conseguir asilo y un salvoconducto para salir de Cuba. De inmediato se corrió la voz de que la embajada no tenía vigilancia y en veinticuatro horas 10.800 cubanos se agolparon en su territorio, apiñados como ganado. El go-

bierno, desconcertado por la embarazosa oleada de disidentes, anunció que se permitiría emigrar a todos, junto con cualquier otro que comunicara su deseo a las autoridades. El total alcanzó la cifra de 125.000 personas. La mayoría salió del puerto de Mariel en pequeñas embarcaciones —muchas poco apropiadas para el mar— proporcionadas por la comunidad cubana de Florida.

Estas 125.000 personas siguieron las oleadas previas de los exiliados, incluidas las 160.000 que habían salido en el programa estadounidense-cubano coordinado por el gobierno entre 1965 y 1973. ¿Por qué este éxodo? En las primeras planas de los periódicos y en las pantallas de televisión de Estados Unidos, Europa Occidental y el resto de América Latina aparecían las imágenes de casi 11.000 cubanos desesperados, apiñados en las dependencias de la embajada peruana sin comida ni agua.

Para contrarrestar esa imagen, cientos de miles de cubanos efectuaron marchas enormes por toda La Habana. Pero los diplomáticos destinados allí estimaaron que, si Mariel hubiera permanecido abierto, quizás 1.000.000 de personas habrían optado por ir a Florida. Aun sin conocer el alcance exacto posible, era mayor de lo que cualquier diplomático extranjero hubiera podido aventurar antes del incidente de la embajada. Cabría explicar en parte el descontento por la frustración de los cubanos, que estaban cansados de esperar los niveles de vida más elevados que se habían prometido hacia tanto tiempo. El gobierno cubano se daba buena cuenta de este descontento y en la víspera de Mariel complementó el sistema de racionamiento de alimentos con «mercados de productos agrícolas libres». Pero el «Programa de Rectificación» que comenzó en 1986 abolió las empresas pequeñas y reinstituyó los incentivos morales con la intención de convertir en virtud la intensificación de la crisis económica, que se agudizó por la severa escasez de moneda fuerte, causada en parte por los bajos precios mundiales para el azúcar. Pero el proceso de la «rectificación» puso a Cuba en la dirección completamente opuesta a la *perestroika* que entonces estaban lanzando los mentores de Fidel en la Unión Soviética.

A pesar de los resultados económicos internos, si se miden por la producción (y no por la renta, como en las economías occidentales), habían aumentado mucho, con un crecimiento medio de un 7,3 por 100 de 1981 a 1985, pero cayó de forma aguda desde 1985 e incluso resultó negativo en algunos años. Sin embargo, a diferencia de la América Latina capitalista, el bajo crecimiento económico no iba a representar un riesgo para la población cubana, gracias al racionamiento de alimentos y los servicios médicos generales que habían proporcionado a Cuba unos índices de morbilidad y mortalidad iguales a los del mundo industrializado.

La lucha por sobrevivir

Aunque Cuba había llegado a mediados de 1991 sin los signos de descontento popular que sentenciaron al comunismo en Europa del Este, la tensión había comenzado a aparecer en años recientes. En mayo de 1987, el jefe de las

fuerzas aéreas cubanas y héroe de Bahía de Cochinos se subió a una avioneta y huyó a Florida. En junio de 1989, se sintió un golpe más fuerte. El dirigente más respetado del ejército, el general Arnaldo Ochoa Sánchez, artífice de brillantes victorias en el campo de batalla sobre las fuerzas surafricanas cuando Cuba luchaba por consolidar el régimen comunista de Angola, fue juzgado y ejecutado, junto con otros tres altos mandos. Se les acusó de tráfico de drogas y malversación de fondos. Su dramático juicio, desarrollado con gran prisa, despertó el recuerdo de las infames purgas de Stalin. Muchos se preguntaron cómo unos oficiales que habían disfrutado de la confianza más estrecha de Fidel podían haber organizado esa vasta conspiración sin el conocimiento de un dirigente que se caracterizaba por su gusto legendario hacia el detalle administrativo. ¿O era un modo de eliminar un rival en potencia para el poder máximo?

Una clave para la supervivencia de la revolución sería la habilidad para institucionalizar el proceso revolucionario. En los años sesenta Fidel se inclinó a confiar en los grupos que habían nacido en la insurrección o que se crearon para proteger el nuevo régimen: el ejército, las milicias y los Comités para la Defensa de la Revolución. Al Partido Comunista se le dio un papel de mayor o menor importancia por iniciativa de Fidel y el liderazgo revolucionario más elevado. Con el giro hacia la ortodoxia a comienzos de los años setenta, el partido asumió una nueva importancia.

El reto básico para los revolucionarios era transformar el liderazgo de una diminuta élite de guerrilleros veteranos y fieles al partido en una base creciente de seguidores leales. Los medios más obvios —y los que había utilizado el modelo soviético— era ampliar la base del Partido Comunista. Este proceso comenzó en 1975. Bajo la bandera de la «participación popular», se celebraron elecciones populares para las asambleas regionales. La idea era construir una estructura representativa de ámbito local. No obstante, a comienzos de la década de 1990, los cubanos seguían quejándose de la centralización, burocratización e inefficiencia del aparato del Estado. El poder seguía concentrado en el vértice de una estructura semejante a la que los europeos del Este y los rusos ya habían desmantelado.

En 1991-1992 Cuba sufrió una dolorosa confrontación con la realidad, a medida que el sustento exterior de su economía desapareció. El colapso de la URSS y del Comecon (el organismo regulador del comercio para la URSS y Europa Oriental) expuso brutalmente la vulnerabilidad económica de Cuba. Hacia 1992, toda la ayuda económica y militar rusa había desaparecido. Los envíos de petróleo cayeron un 86 por 100 desde 1989 a 1992, mientras que las importaciones de alimentos cayeron el 42 por 100 en casi el mismo periodo. Los bienes de equipo, tales como los autobuses, proporcionados otrora por Europa Oriental, ahora se deterioraban por falta de recambios. La actividad económica general cayó hasta un 29 por 100 entre 1989 y 1993. Otras estimaciones calculan la caída en el doble. Cuba había sufrido un golpe económico mayor que cualquiera (incluida la Gran Depresión de 1930) experimentado en América Latina en el siglo xx. |

¿Por qué? Porque Cuba había concentrado excesivamente su comercio y finanzas con un mercado (84 por 100 con Comecon). Amparada en la conexión soviética, veía poca necesidad de esforzarse significativamente en diversificar sus exportaciones y mercados. Se convirtió así en el máximo ejemplo de dependencia, aunque debe reconocerse también el papel central del embargo de Estados Unidos en forzar a Cuba a concentrarse en el Este. Con el colapso de la Unión Soviética, Cuba sufrió el equivalente a un «doble embargo».

Los efectos internos de la retirada soviética se sintieron pronto, cuando los cubanos sufrieron un drástico deterioro de su nivel de vida. Las cuotas de racionamiento mensual cubrían sólo una o dos semanas, y el resto sólo se podía obtener en el mercado negro. La Habana tenía electricidad sólo de cuatro a ocho horas por día. El servicio de autobuses desapareció prácticamente a causa de la escasez de combustible. Se les dijo a los cubanos que utilizaran bicicletas, rápidamente importadas de la República Popular de China. Fidel llamó a la caída de la URSS un «desastre» y proclamó que Cuba entraría ahora en «un periodo especial en tiempo de paz». La orden del día sería salvar el socialismo en un país: Cuba.

Para conseguir este objetivo, Cuba no puede seguir adelante sin comerciar con el Occidente capitalista. Castro necesita desesperadamente los bienes de capital y la tecnología que sólo Occidente puede proporcionar. Para comprar, necesita una divisa fuerte, el 70 por 100 de la cual la obtiene mediante las ventas de azúcar en el mercado libre. Cuba había acumulado una deuda corriente de 6.000 millones de dólares en 1990, y la decisión de Castro de suspender los pagos del principal y los intereses echó a perder los esfuerzos por conseguir una mayor financiación de fuentes capitalistas. Había algunas características de la economía mundial a las que Cuba no podía escaparse.

Muchos observadores externos predijeron que en estas circunstancias Fidel se vería forzado a virar hacia el mercado occidental. De hecho, tal movimiento ha sido modesto, fuera de un agresivo pero apenas exitoso esfuerzo por atraer la inversión extranjera del mundo capitalista. Fidel y sus lugartenientes continúan defendiendo la economía estatal planificada y el gobierno del partido único. Frecuentemente han discutido, pero no han adoptado aún, el modelo chino de liberalización económica con persistente autoritarismo político. Ha habido algunos tímidos movimientos de liberalización, tales como permitir un limitado autoempleo y la posesión de dólares. Pero en el esencial aunque improductivo sector rural, cualquier retorno a los mercados campesinos (un experimento abandonado en 1986) ha sido descartado.

La reacción de los cubanos comunes y corrientes ante la calamidad económica ha sido más estoica de lo que podría haberse predicho. En abril de 1994, por ejemplo, Jorge Mas Canosa, el líder conservador del exilio en Miami, aseguraba confiadamente que él y sus colegas pronto gobernarían Cuba. Sus expectativas no se han cumplido. La población está evidentemente descontenta en Cuba, como lo muestra el espectacular auge del número de balseros interceptados por los guardacostas estadounidenses (35.000 sólo en los

primeros ocho meses de 1994). Dentro de la isla, sin embargo, hay poca oposición organizada, fuera de los escasos disidentes valerosos que terminan periódicamente en prisión. El poder permanece sumamente concentrado bajo Fidel, que cada vez más parece un caudillo latinoamericano de viejo cuño. Irónicamente, se apoya mucho en la rígida postura de Estados Unidos, que el Congreso endureció más en 1992 y de nuevo en 1996. Sin el espectro del tío Sam, Fidel se quedaría sin una explicación de las desgracias de Cuba. Cuando Cuba fue el único país del hemisferio no invitado a la cumbre de las Américas de diciembre de 1994 en Miami, Castro dijo que era «un gran honor». Esta extraña distinción ofreció poco consuelo a los ciudadanos orgullosos y patriotas de Cuba.¹

El Caribe: colonias y miniestados

La pequeñez es un hecho básico de la vida en todo el Caribe, región que se extiende desde la punta de Florida hasta la costa de Venezuela (véase el mapa 3). Con la excepción de Cuba y La Española (comparable al estado de Maine), las islas tienden a tener un tamaño modesto; las Granadillas, las Bahamas y las islas Caimán son absolutamente minúsculas. La topografía varía de las llanuras de Barbados a las costas escarpadas de Martinica y Guadalupe. Unas cuantas islas, como Cuba y Jamaica, tienen ondulaciones montañosas e importantes cordilleras. En general, el clima es templado, las precipitaciones son abundantes y el suelo es fértil. Aquí el poder de la naturaleza se hace evidente de forma clara y constante, tanto en los hermosos paisajes como en las fuerzas destructivas: huracanes, volcanes, terremotos e inundaciones.

Las islas situadas más al norte y mayores: Cuba, Jamaica, Puerto Rico y La Española (compartida ahora por Haití y la República Dominicana) se conocen como las Antillas Mayores. Las menores, situadas al este, reciben el nombre de Antillas Menores; también llamadas islas de Sotavento e islas de Barlovento.

Aunque el Caribe estaba habitado mucho antes de la llegada de los europeos, el volumen de población indígena es todavía objeto de debate. Según la mayoría de las estimaciones, rondaba los 750.000 habitantes, cerca de dos tercios de los cuales se encontraban en La Española. Había tres grupos diferentes: ciboney o guanahuatebey, taíno arawak y caribe (del que la región toma el nombre). Estos pueblos precolombinos fueron las primeras víctimas de las crisis y transiciones resultantes de la conquista y colonización llevadas a cabo por las potencias europeas.

La llegada de Colón y sus tres carabelas en 1492 señaló el destino inexorable de los habitantes nativos y la inserción del Caribe en el ámbito mundial de la rivalidad europea. Pero esta entrada no fue abrupta. España ejerció el monopolio sobre la región durante más de un siglo, hasta que las potencias europeas rivales estuvieron preparadas para lanzar un desafío.



3. Centroamérica y el Caribe.

El periodo colonial: conquista y rivalidad

Colón desembarcó en la isla en diciembre de 1492 a la que bautizó como La Española. La intención original de este viaje había sido imitar el ventajoso vínculo comercial que los portugueses habían establecido con el Lejano Oriente. La expansión hacia el Nuevo Mundo produciría el intercambio de nuevos artículos y España se convertiría en una nación comerciante de primera magnitud. Sin embargo, la ausencia de grandes civilizaciones y las condiciones de producción existentes convencieron pronto a los recién llegados de que habían de cambiar su estrategia. Y, como Colón observó, los lugareños eran de una disposición generosa y estaban bien equipados para servir a la corona española.

Como no era posible desarrollar un comercio significativo, los españoles decidieron explotar la isla como un recurso de tierra y mano de obra mediante el sistema de encomienda. Se impusieron a la sociedad nativa instituciones semifeudales y se puso a trabajar a los indios en minas y campos. Las duras condiciones de trabajo y el contacto físico con los españoles llevó a su disminución: las enfermedades y la debilidad produjeron muchas pérdidas humanas. Al darse cuenta del destino que les aguardaba, muchos huyeron a las montañas en busca de libertad y salvación.

Fue en el Caribe donde el clero protestó por primera vez contra el abuso a que se sometía a los nativos. En 1511, Antonio de Montesinos asombró a los fieles de Santo Domingo al denunciar los malos tratos infligidos a la población india. Poco después, Bartolomé de las Casas comenzó su ferviente campaña para proteger a los indios de los aventureros y conquistadores. En respuesta a estas alegaciones, la corona acabó accediendo a regular el trato de la población nativa. Pero para proteger a los nativos americanos, Las Casas también hizo una sugerencia desafortunada: que España importara esclavos africanos como mano de obra necesaria.

Así comenzó la trágica historia de la migración forzada desde las costas occidentales de África. De los 10 a 15 millones de personas enviadas al Nuevo Mundo como esclavos, aproximadamente 2 millones se dirigieron al Caribe, donde trabajarían en las plantaciones de azúcar, alterarían la composición racial de la región y, por último, ayudarían a establecer los cimientos de la Revolución Industrial de la Europa del siglo XIX.

En ninguna otra región de América fue tan completa la destrucción de la población nativa como en el Caribe. Algunos indios lograron escapar a las montañas, como en Cuba, pero en la mayoría de los lugares la geografía era un impedimento. Las islas eran tan pequeñas que no había dónde esconderse. Como en Nueva Francia o en Nueva Inglaterra, la población nativa fue víctima de un eliminación casi total.

En los barcos llegó el modo de vida, la lengua, las creencias y las instituciones políticas de la Europa de entonces. Uno de los navíos traía algunos cortes de caña de azúcar procedentes de las islas Canarias (como otros ha-

bían traído animales domésticos y plantas) que alteraron el curso de la historia. La caña de azúcar creció de forma abundante, pero a medida que aumentaron las perspectivas de producción, la necesidad de mano de obra se hizo más evidente. La demanda de esclavos parecía casi infinita: como observó un testigo del siglo XVII, se necesitaban «al menos de ochenta a cien negros trabajando a la vez, e incluso ciento veinte o más». La caña de azúcar y los africanos se juntaron para romper la organización socioeconómica y transformar el Caribe en una nueva frontera de la Europa del siglo XVI.

El descubrimiento de minerales preciosos en México y Perú distrajo pronto la atención de España del Caribe, que se convirtió en poco más que una lugar de paso hacia la próspera tierra firme. La Española, Cuba y Puerto Rico sirvieron como puestos de aprovisionamiento y garniciones militares para el número creciente de barcos cargados de oro y plata procedentes de las minas mexicanas y peruanas. Estos ingresos inesperados del Nuevo Mundo crearon el mito de una España rica, pero la realidad a largo plazo fue que la debilitaron e incitaron las tentaciones de sus rivales europeos.

Aunque la corona española proclamó su dominio sobre todo el Caribe, era incapaz de sostener el monopolio comercial y político. La región era demasiado extensa, las fuerzas y asentamientos reales diminutos y dispersos, y las apuestas económicas demasiado elevadas. A finales del siglo XVI y durante todo el siglo XVII, el mar Caribe fue el blanco abierto y codiciado de corsarios y bucaneros, que arrasaban los asentamientos costeros y perseguían las flotas reales. Los rivales europeos de España, en especial Inglaterra, alentaban y a veces pertrechaban a estos piratas; Francis Drake, John Hawkins y Henry Morgan se convirtieron en caballeros del reino inglés.

Las potencias europeas también establecieron asentamientos. Los ingleses tomaron Jamaica en 1655. Los franceses hicieron lo propio con la parte occidental de La Española en 1679. Los holandeses ocuparon la zona nororiental de Brasil de 1630 a 1654 y luego pasaron a una serie de islas frente a la costa de Venezuela. Poco a poco, España cedió o aceptó de facto la pérdida de algunos de sus territorios coloniales. En las guerras europeas, las posesiones caribeñas se convirtieron en prendas que pasaban de perdedores a ganadores como si de un juego de póker se tratara.

Mientras tanto, la demanda de azúcar aumentaba de forma constante en Europa. Pronto su cultivo dominó no sólo el comercio caribeño (controlado en gran medida por ingleses, franceses y holandeses), sino que afectó profundamente a la composición agrícola y racial de las islas. Con el tiempo, acabarían pobladas de forma muy predominante por habitantes de descendencia africana, situación que persiste hasta nuestros días. Sólo en las islas españolas mayores de Puerto Rico y Cuba, donde la importancia otorgada al azúcar fue posterior, no se convirtieron en mayoría.

Otra consecuencia del cultivo de la caña de azúcar fue la transformación de los sistemas de producción diversificados en economías de un solo producto, al concentrarse en el azúcar para la exportación. La mayoría de sus necesidades de consumo tenían que importarse de otras islas, tierra firme o Es-

paña. Sólo en las islas más pequeñas, como Granada, había otros productos (en este caso el café) más importantes que el azúcar. Como la mayoría de la población autóctona había muerto y a los colonos españoles no les gustaba trabajar con sus manos, la demanda de esclavos continuó durante todo el siglo XVIII.

Por supuesto, el tráfico de esclavos se hizo muy rentable y el azúcar del Nuevo Mundo creó una demanda de productos europeos que más tarde ayudó a estimular la revolución industrial. El azúcar se convirtió en la reina del Caribe hasta que, al igual que otros productos primarios, se enfrentó con una competencia inflexible de otras partes del mundo (incluido el sur estadounidense). En la década de 1850, Cuba sola producía ya casi todo el azúcar necesario para exportar a Europa. La invención del molino moderno o ingenio a vapor y mecanizado disminuyó la necesidad de mano de obra esclava y acabó llevando a la abolición de la esclavitud (aunque los plantadores de Cuba y Puerto Rico fueron recalcitrantes hasta el final). A finales del siglo XIX, el azúcar ya no era la suprema gobernante. Con su caída, los estrategas imperialistas de la todopoderosa Europa se apartaron del Caribe para concentrarse en zonas de expansión más lucrativas, como la India y el Sureste asiático.

Los legados políticos de la conquista y la colonización serían complejos. Con tantos dueños europeos, las islas del Caribe tendrían unas tradiciones legales y culturales diversas. Lograrían la independencia en momentos diferentes y por varios medios. Como veremos, Haití se separaría de Francia en 1804; algunas de las posesiones británicas no adquirirían su soberanía hasta las décadas de 1960 y 1970. Algunas han estado luchando con los desafíos de la nacionalidad durante cerca de 200 años; otras se encuentran aún tras la generación de dirigentes que las llevaron a la independencia.

Dejando a un lado Cuba y Haití, ninguna de las posesiones caribeñas sostuvo una guerra de liberación larga. Debido a su pequeño tamaño y a su geografía, nunca han desarrollado establecimientos militares. Como colonias, podían depender del poder militar de sus madres patrias; como islas, el mar las protegía cuando menos parcialmente de las invasiones hostiles. Con la excepción de Haití y la República Dominicana, las naciones independientes del Caribe no han padecido una dominación militar tan frecuente en la tierra firme latinoamericana durante los siglos XIX y XX.

Por último, la pequeñez y pobreza de las islas caribeñas evitaría que sus gobiernos se hicieran fuertes: a diferencia de las poderosas maquinarias estatales existentes en Chile o México contemporáneos, mantendrían una debilidad crónica. Con recursos escasos y unas poblaciones modestas, en realidad constituirían «miniestados». Esa vulnerabilidad, a su vez, formularía retos imponentes para esta parte prometedora pero complicada del mundo.

Visión general: crecimiento económico y cambio social

La preeminencia del azúcar en el Caribe y sus requerimientos de mano de obra llevaron a que existiera la amenaza constante de escasez de trabajadores. Con el fin de definir una política demográfica adecuada para el Nuevo Mundo, la corona española probó varias alternativas. España envió convictos y esclavos blancos; permitió la emigración libre a las colonias; y esclavizó a los indios nativos, aunque esto condujo a su disminución. El tráfico de esclavos africanos fue lo que mantuvo al azúcar en su lugar privilegiado durante el periodo colonial.

Todos los demás cultivos se convirtieron en actividades secundarias. La diversificación económica que existía se debía en parte a la geografía con que contaban. En las islas más montañosas, como Guadalupe, el cultivo del azúcar era difícil, así que se dedicaron a los plátanos y otros productos. El tabaco apareció en pequeñas granjas situadas entre las colinas de Cuba y algunas otras islas. Pero la urgencia por beneficiarse de la producción de la caña de azúcar ocasionó la conversión de la mayor parte de las llanuras en vastas plantaciones, tendencia que alcanzó el punto más extravagante en Barbados, cuyos residentes tenían que importar casi todas las provisiones alimentarias.

La sociedad poco cohesionada del siglo XVI, dominada por los blancos y las pequeñas unidades de producción, cedió el paso a otra estrictamente organizada y jerárquica de amos y esclavos en el siglo XVII. La madre patria respectiva controlaba con firmeza la producción. Con la excepción de Inglaterra, cada país europeo formó su propia compañía comercial: además de la Casa de Contratación española, estaban la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales y la Compagnie des Isles d'Amérique francesa.

Quizás la principal consecuencia social de estas trasformaciones fue la creación de un rígido sistema de estratificación racial. Casi en todas partes existía una pirámide con tres divisiones: los blancos en el vértice, los pardos en el medio y los negros en la base. Como los blancos acabaron retirándose y los indios desaparecieron, la herencia africana se convirtió en la dominante.

La demanda europea de azúcar permitió a muchos de los colonos hacer grandes fortunas, que utilizaron para construir enormes casas solariegas y para comprar la aceptación en la vida social y política de la madre patria. Como en México y Perú, los colonos nunca se sintieron a gusto en las islas; la mayoría deseaba volver a su país y, de hecho, algunos lo hicieron para ocupar posiciones de poder y prestigio. Aunque en algunas partes del Caribe apareció una aristocracia de plantadores, no tenía raíces muy profundas.

La importancia concedida al azúcar no sólo destruyó las economías locales diversificadas, sino que además consolidó la dependencia de un mercado único. La mayor parte del comercio se mantuvo sólo con la madre patria. De este modo, la producción agrícola del Nuevo Mundo entró en contacto con los centros manufactureros que surgían en Europa. Hacia el siglo XX, la mayor parte del comercio caribeño se dirigiría a Estados Unidos.

La explotación llevó a rebeliones de esclavos esporádicas, algunos de los cuales huyeron a las montañas y crearon las comunidades de cimarrones pró-fugos. Desde allí hacían incursiones a las plantaciones en busca de alimentos, armas e incluso mujeres. Los plantadores blancos respondieron con una combinación de persuasión, negociación y fuerzas paramilitares.

A medida que la producción azucarera declinaba y aumentaba la población, los países caribeños comenzaron a hacer esfuerzos por diversificar sus bases económicas. Cocos, especias, plátanos, cítricos y piñas han cobrado una importancia creciente en la producción agrícola. (El azúcar sigue siendo un importante producto de exportación para Jamaica y la República Dominicana.) En países como Jamaica y Trinidad y Tobago, dos minerales —bauxita y petróleo— han ganado notoriedad. Otras islas poseen industrias viables de textiles, manufactura, servicios financieros, plantas de ensamblaje y turismo. Para algunas, estas actividades representan la principal fuente de divisas.

Sin embargo, estas industrias no proporcionan mucho empleo y, a excepción de Puerto Rico tras la guerra, la manufactura no ha desempeñado un papel importante en la región. La escasez de oportunidades laborales ha llevado a una emigración masiva a otras islas, Estados Unidos y partes de Europa. De hecho, algunos han afirmado que el Caribe exporta no sólo sus productos, sino también a su gente. Como resultado, las islas nunca han formado una clase obrera industrial. Aquí, en contraste con naciones como Argentina y Brasil, apenas existe proletariado.

Los miniestados caribeños también siguen siendo rurales en buena parte. No hay ciudades importantes; Santo Domingo, la mayor con mucho de todas, tenía unos 800.000 habitantes a comienzos de los años ochenta. La mayoría de la gente vive en el campo. Cerca de tres cuartos de la población de Haití y más de la mitad de la de Jamaica sigue residiendo en comunidades con menos de 2.000 habitantes. El Caribe no tiene los problemas ni las diversiones de la vida urbana moderna.

Como resultado de todo esto, las sociedades caribeñas son relativamente «desclasadas». Como los negros son el elemento cultural predominante y las economías están aún por desarrollar, las sociedades tienden a ser homogéneas. Hay diversos estratos sociales, que quizás resultan más evidentes en Haití y la República Dominicana, pero la aristocracia étnica que caracterizó al periodo colonial ya no existe. Este hecho se expresa en un chiste amargo: «Todos los caribeños tienen igual acceso a la cuota de pobreza que les corresponde».

En su enfrentamiento a los retos del desarrollo económico y social, los caribeños han sido testigos de dos experiencias o modelos dominantes: los de Puerto Rico y Cuba. Con el nombre de «operación Bootstrap», el modelo puertorriqueño comenzó a principios de los años sesenta como un ejemplo no sólo para el Caribe, sino para toda América Latina: sus pilares fueron una colaboración estrecha con Estados Unidos y la confianza en la inversión extranjera. Aunque hubo algunos logros estadísticos impresionantes, el modelo reveló una debilidad inherente cuando aumentó el desempleo y un número

creciente de puertorriqueños emigraron a Nueva York y otros lugares de Estados Unidos.

El modelo cubano, descrito en el capítulo 8, ocasionó la construcción de una economía «dirigida» socialista. A pesar de sus logros sociales, los costes económicos y políticos han desanimado su aceptación como ejemplo revolucionario por otros países de la región. En su lugar, ha habido esfuerzos por hallar una tercera alternativa: se hizo un intento en Jamaica y otro en la diminuta isla de Granada. Ambos fracasaron.

El desarrollo social y económico del Caribe sigue sometido a la influencia internacional desde el siglo XVI. La idea de una organización común para unificar la región y consolidar los logros del desarrollo tomó forma en la creación de la Comunidad Caribeña y el Mercado Común (CARICOM). Durante mucho tiempo sujeta a la fragmentación ideológica y política interna, CARICOM ha dado signos de revitalización en los años noventa. En una muestra adicional de solidaridad, las naciones insulares (incluida Cuba) se unieron a sus vecinos de América Central y América del Sur a mediados de los noventa para formar la Asociación de Estados Caribeños.

Haití: república esclavista, dictadura de vudú

Lo que ahora es Haití, en la isla de La Española, fue una de las posesiones ultramarinas más prósperas de Francia; hoy es uno de los países más pobres del mundo. Con una población de cerca de 6,7 millones, Haití tiene una renta per cápita de aproximadamente unos 370 dólares.

Los habitantes originales de la isla fueron reemplazados casi por completo por esclavos negros importados para trabajar en las haciendas azucareras. Durante la Revolución francesa, se garantizó a los residentes de Haití la ciudadanía plena, medida que agravó a los latifundistas blancos. Los conflictos resultantes llevaron a una oleada de rebeliones. Esta vez los esclavos no querían sólo su libertad personal, sino también la independencia nacional.

Bajo la dirección de Toussaint L’Ouverture, los negros de Haití se alzaron en 1791 y en 1804 declararon la soberanía nacional. Iba a ser la segunda nación libre de América y el primer país negro independiente del mundo. Aunque Toussaint encabezó la rebelión, le persuadieron para que fuera a Francia, donde acabó muriendo en una oscura mazmorra. Fue uno de sus lugartenientes, Jean Jacques Dessalines, quien proclamó que el país era libre del dominio colonial.

Las guerras de independencia dividieron y destruyeron las grandes posesiones azucareras. En un principio la tierra se trabajó de forma colectiva, según un sistema denominado el *corvée*, pero las elevadas tendencias individualistas del periodo de posguerra llevaron a la distribución de parcelas a propietarios individuales. Así, el legado de los grandes terratenientes oligárquicos, que prevaleció en otras partes de América Latina, no arraigó en el Haití independiente. En cambio, un gran número de pequeñas posesiones

reemplazó a los imperios azucareros y la producción disminuyó drásticamente. La moderna tecnología azucarera no resulta apropiada para las granjas pequeñas y como consecuencia Haití no imitó las innovaciones económicas efectuadas en Cuba a finales de siglo.

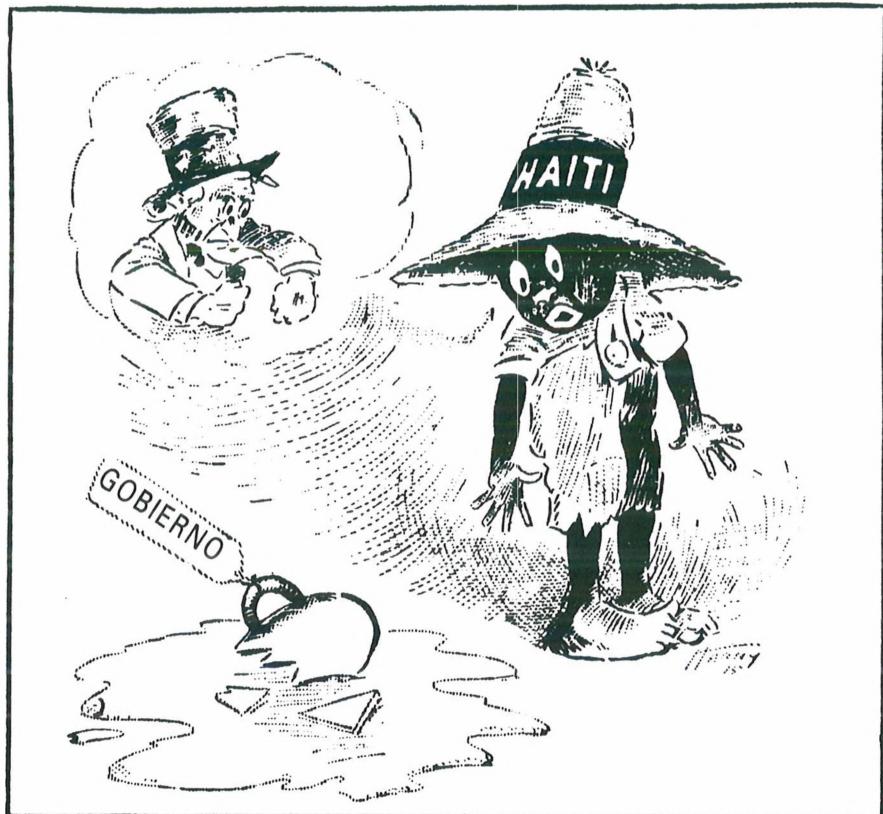
El país ha experimentado repetidas guerras civiles e intervenciones extranjeras. La independencia dio el poder a los negros, que ahora constituyen cerca del 90 por 100 de la población, hecho que desde el principio ha agravado a los mulatos de piel clara. De hecho, los mulatos constituyen una minoría próspera que sigue fiel a un ideal de civilización francesa y habla francés de forma regular. En contraste, la mayoría negra habla una lengua nativa, el criollo, y busca la inspiración espiritual en el vudú, una mezcla ecléctica de religiones dahomeyanas y catolicismo. Desde el periodo colonial, una especie de sistema de castas ha separado a los mulatos de los negros y los conflictos entre ambos elementos han sido un tema persistente en la historia haitiana.

Las tensiones internas produjeron una inestabilidad creciente. De 1804 a 1867 Haití sólo tuvo diez jefes ejecutivos. De 1867 a 1915 hubo dieciséis presidentes, con un mandato medio de tres años. Y de 1911 a 1915 Haití afrontó uno de sus periodos más caóticos, durante el cual seis presidentes fueron víctimas de una muerte violenta.

Inmerso en la primera guerra mundial y acostumbrado a la «diplomacia del dólar», Estados Unidos ocupó Haití en 1915 y permaneció allí hasta 1934. Las tropas invasoras se encargaron de la administración general de la isla. Una de sus primeras tareas fue la abolición del ejército, reemplazado por una fuerza de policía nacional. La administración financiera del país se encomendó a un cuadro de técnicos y burócratas que aseguraron el pago de todas las obligaciones de la deuda exterior (especialmente las que poseía Estados Unidos). Se iniciaron algunas obras públicas y se repararon las antiguas, pero la mayoría de la población observaba a los invasores con un resentimiento latente.

Una razón para este sentimiento era el desaliento por la pérdida de la soberanía, ya que Estados Unidos se había hecho cargo de la organización del país e incluso de la administración de las aduanas. (De hecho, la comisión financiera no dejaría Haití hasta 1941, años después de la partida de las garniciones militares.) Otra razón era la marcada preferencia de los oficiales estadounidenses por los mulatos, a quienes llevaron al poder de diferentes modos, incluida la elección y reelección superficial de Sténio Vincent como presidente durante los años treinta.

Con el tiempo, la población negra, apoyada por la Guardia Haitiana (nombre con el que se conocía a la fuerza policial), derrocó a otro presidente mulato e instaló a Dumarsais Estimé en 1946. Éste reemplazó a los cargos mulatos por negros y emprendió una serie de reformas con el fin de beneficiar a los trabajadores urbanos y a los productores del campo. Estimé exoneró al país de su deuda con Estados Unidos y firmó un acuerdo con el Banco de Exportación e Importación para el desarrollo del valle del Artibonite. En 1950 trató de enmendar la Constitución para permanecer en el poder, pero el ejército lo destituyó y lo envió al exilio.



La representación racista de Haití como un niño negro cándido e inepto formó y reflejó las actitudes estadounidenses acerca de la intervención militar. Motivada por la crisis política y económica de 1915, esta caricatura expresaba el desamparo de Haití —mediante la leyenda: «¡Me la voy a cargar!»— y la determinación del Tío Sam de tomar cartas en el asunto. (Hanny, *St. Joseph News-Press*, 1915. Cedida por *St. Joseph News-Press/Gazette*.)

El control pasó al coronel Paul E. Magloire, un dirigente negro que poseía influencias en el ejército y entre las masas populares. En su toma de posesión, prometió salvaguardar los derechos garantizados por la Constitución, continuar los proyectos de irrigación y otras obras públicas, y promover la mejora de la educación. En el ámbito internacional, intentó mantener buenas relaciones con Estados Unidos, mientras el aumento de los precios de la exportación producido por la guerra de Corea ayudaba a estimular el crecimiento económico. Fue derrocado por un grupo de rivales ambiciosos y resentidos en un golpe efectuado en 1956.

Tras meses de incertidumbre, surgió la figura de François Duvalier, que

se había autoelegido presidente en septiembre de 1957. Así comenzó uno de los períodos más retrógrados, desafortunados y tiránicos de la historia de este país.

Poco después de tomar el poder, Duvalier doblegó la nación a sus pies. El ejército, la policía y las fuerzas de seguridad sólo debían rendir cuentas ante él. Creó una fuerza especial de policía que acabó siendo conocida como los *Tontons Macoutes* (los hombres demonios), la fuerza más represiva y temida del país. Mediante el terror puro se deshizo de sus adversarios y manipuló las elecciones para convertirse en presidente de por vida (*président à vie*).

Defensor del *noirisme*, movimiento que se inspiraba en África, expulsó a los mulatos de la burocracia nacional. Asumió un control del Estado casi total y se dice que llegó a elegir él mismo a los miembros de la policía de seguridad. Obtuvo influencia sobre las masas asociándose astutamente con la figura del Baron Samedi, el guardián terrenal de las tumbas del vudú. Creó una especie de corte actual, cuyos favoritos obtenían riquezas mediante la dispensación de favores al Estado. Para institucionalizar un sistema de comisiones, estableció una organización de cobertura, el Movimiento para la Renovación Nacional, que recogía contribuciones de los empresarios y los altos cargos estatales con el propósito aparente de edificar instalaciones públicas. No es necesario decir que el dinero nunca se usó para tales fines.

Hasta su muerte en 1971, Duvalier se puso de parte de Estados Unidos en la mayoría de los ámbitos internacionales, incluidas Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. De vez en cuando, los votos pro estadounidenses llevarían a un aumento de la ayuda o los créditos para este régimen corrupto. Durante su mandato, Haití se aisló cada vez más, se convirtió en una especie de paria internacional, a pesar de su deseo personal de establecer lazos más fuertes con África.

Lo que en realidad quería era la oportunidad de gobernar Haití según sus designios propios. De vez en cuando hubo desafortunadas invasiones de fuerzas revolucionarias, que siempre fracasaron. Su principal fallo fue su falta de habilidad para cultivar el apoyo del campesinado, al que «Papa Doc» continuó dominando mediante una combinación de miedo y mistificación. Cada ataque del exterior llevaba a una represión más brutal y a la propagación del lema oficial: *Dieu, Duvalier et le frapeau, un et indivisible* (Dios, Duvalier y la bandera, uno e indivisible).

Cuando se aproximaba su muerte, convocó a la Asamblea Nacional para que disminuyera la edad mínima exigida a un presidente de cuarenta a dieciocho años y procedió a instaurar a su hijo como su sucesor y *président à vie*. Por qué eligió a su hijo y no a su hija Marie-Denise, con quien mantenía una relación más estrecha, sigue siendo una fuente de misterio y especulación.

El joven Jean-Claude Duvalier, o «Baby Doc», como a veces se le llama, heredó un país muy empobrecido. Aunque dio algunos pasos para promover el desarrollo y quizás fuera menos brutal que su padre, retuvo un grupo parásito de favoritos, una especie de «cleptocracia». El gobierno se convirtió en un medio para enriquecerse. Su matrimonio con una mulata rica

produjo cierta desafección entre los seguidores de su padre. El descontento popular y las luchas destructivas continuaron aumentando hasta que llevaron a su caída en febrero de 1986, cuando subió a bordo de un avión de las fuerzas aéreas estadounidenses y partió rumbo a Francia.

Dejó tras de sí una nación afligida. Entre 1980 y 1986 la economía se había reducido un 10 por 100. Tres de cada cuatro adultos no sabían leer, uno de cada cinco niños moría antes de los cinco años. La renta per cápita nacional apenas llegaba a los 300 dólares. En el campo no llegaba a la mitad de esta cantidad. Treinta años de gobierno de los Duvalier habían hecho de Haití el país más pobre del hemisferio occidental.

La recuperación económica fue vacilante. Durante décadas se había suprimido la oposición, controlado a los sindicatos y corrompido a los medios de comunicación. Cuando Baby Doc dejó el país, hubo gritos de libertad y llamamientos al *dechoukaj*, una «extirpación» del régimen de Duvalier: cayeron tumbas y estatuas, los policías sintieron la ira popular y los colaboradores de la dictadura huyeron de sus cargos. Se formó un gobierno de transición bajo el teniente general Henri Namphy, en apariencia un oficial apolítico que sin embargo había servido como jefe del Estado Mayor del ejército con Duvalier. Las elecciones programadas para finales de 1987 acabaron con un baño de sangre, ya que las fuerzas paramilitares asaltaron a los votantes y a los candidatos de la oposición. Un sufragio posterior acabó con la controvertida elección de Leslie Manigot, un científico social bien conocido, pero Namphy lo derrocó en la primavera de 1988. Él mismo fue pronto reemplazado por el general Prosper Avril, un joven y ambicioso militar que revivió a los *Tontons Macoutes* e impuso una ola de represión. Para muchos observadores parecía que Haití estaba padeciendo a «Duvalier sin Duvalier».

El cambio auténtico comenzó en 1990. A comienzos de año las manifestaciones de protesta y una huelga general convencieron al general Avril para abandonar el país. Se celebraron elecciones libres bajo la presidencia interina de una mujer, Ertha Pascal-Trouillot, en diciembre de 1990. Con dos tercios de los votos surgió Jean-Bertrand Aristide, sacerdote católico que adoptó la teología de la liberación y abogó por un cambio social y político de largo alcance. En enero de 1991, los duvalieristas descontentos intentaron un golpe militar para evitar que el «comunista» Aristide tomara posesión del cargo. Aunque fracasaron, hubo 74 muertos y 150 heridos. Como su partido no había logrado siquiera la mayoría en la legislatura, Aristide tuvo que formar una coalición de gobierno efectiva desde una posición débil. A finales de 1991, elementos indisciplinados del ejército le retiraron de su cargo. Estados Unidos y otras naciones condenaron de inmediato el golpe, y la OEA aplicó un embargo comercial, pero las negociaciones diplomáticas para hallar una solución pacífica a la crisis se prolongaron durante años.

La perspectiva de un enorme flujo de inmigrantes, generado por los haitianos que trataban de escapar de la represión impuesta por el nuevo régimen militar del general Raoul Cédras, modeló la política de Estados Unidos. Los guardacostas estadounidenses comenzaron a recoger miles de haitianos

que en balsas hechas por ellos mismos intentaban alcanzar las costas de Estados Unidos y los instalaron en un campamento en la base naval de Guantánamo (en Cuba). En mayo de 1992, el presidente George Bush ordenó a los guardacostas que devolvieran a los balseros haitianos a su país sin considerarlos como refugiados políticos. El candidato demócrata a la presidencia Bill Clinton denunció la política de Bush como una «respuesta cruel a una terrible tragedia humana», pero permitió su continuación después de ser elegido en noviembre de 1992. Una negociación auspiciada por la ONU estuvo a punto de solucionar la crisis en 1993, pero fracasó ante el desafío del régimen de Cédras. Hacia comienzos de 1994, los líderes de la comunidad afroamericana de Estados Unidos lanzaron una dura crítica a la inacción de Washington, y Clinton retrocedió anunciendo que las autoridades de Estados Unidos se ocuparían de los balseros y darían asilo a las víctimas de la represión política. Las noticias del cambio originaron una nueva ola de balseros. Pese al escepticismo general, Clinton comenzó a considerar el uso de la fuerza militar. A mediados de septiembre, Clinton denunció al gobierno de Cédras como «el régimen más violento de nuestro hemisferio» y resaltó los riesgos de la inacción: «En tanto Cédras gobierne, los haitianos continuarán buscando refugio en nuestro país. Trescientos mil haitianos más, el 5 por 100 de toda la población, están escondidos en su propio país. Si no actuamos, ellos formarán la siguiente ola de refugiados a nuestras puertas. Continuaremos afrontando la amenaza de un éxodo masivo de refugiados y su constante amenaza a la estabilidad de nuestra área y al control de nuestras fronteras».

Mientras la tensión crecía, Clinton envió una delegación de alto nivel presidida por el expresidente Jimmy Carter en un esfuerzo desesperado de negociación. A última hora, cuando las tropas de Estados Unidos ya estaban en camino para la invasión de Haití, Carter logró un acuerdo con el gobierno de Cédras. Clinton canceló la invasión, pero envió en cambio una fuerza de ocupación; en menos de una semana habían desembarcado más de 15.000 soldados. Aristide retomó el poder a mediados de octubre y la ocupación de Estados Unidos pasó a una fuerza internacional de paz a inicios de 1995. Queda por ver si Haití podrá, por fin, desarrollar y consolidar una democracia significativa.

República Dominicana: un experimento inacabado

La historia de la República Dominicana comparte algunos rasgos dramáticos con Haití. Ambas naciones se encuentran en la isla de La Española y han estado entrelazadas desde que llegaron los españoles por primera vez. En la República Dominicana es donde resulta más notable el fracaso de los invasores españoles para establecer un asentamiento fuerte; allí comenzó el conocido sistema de la encomienda.

Las decisiones exteriores han determinado en buena parte el destino de esta región, y de forma notable el Tratado de Ryswick de 1695, cuando toda

la isla fue cedida a Francia sin la más ligera consulta a los colonos. Durante el movimiento de independencia haitiano a finales del siglo XVIII, las fuerzas revolucionarias tomaron la República Dominicana, acto que todavía concita animosidad entre los dos países. Los colonos españoles acabaron recuperando el control y luego precipitaron un largo periodo de guerras de caudillos.

La posición estratégica de La Española la hizo importante para Estados Unidos, comprometido a comienzos del siglo XIX con evitar que las potencias europeas actuaran en el hemisferio. La anarquía y el caos han impulsado en varias ocasiones su intervención. De 1916 a 1922, los marines ocuparon la República Dominicana (así como su vecina Haití). Como en esta última, se creó una Guardia Nacional para combatir las partidas guerrilleras. Entre los discípulos más brillantes de las fuerzas de ocupación estadounidenses se encontraba Rafael Leónidas Trujillo, un ambicioso soldado que terminaría convirtiéndose en uno de los dictadores más despiadados del hemisferio.

Gracias a los estímulos económicos proporcionados por la primera guerra mundial, que subieron los precios del azúcar y del cacao, las condiciones económicas mejoraron durante la ocupación estadounidense. Como en Haití, sus tropas fortalecieron la infraestructura, mejoraron el sistema educativo e impusieron control en las finanzas públicas. Sin embargo, los críticos comenzaron a quejarse por la competencia desleal que representaban para el mercado interno los productos estadounidenses más baratos y por el desprecio general que mostraban los invasores hacia los ciudadanos del país.

Un acuerdo establecido entre Estados Unidos y los dirigentes dominicanos en 1922 llevó a la formación de un gobierno provisional. Dos años más tarde, las elecciones otorgaron el poder a Horacio Vázquez, político veterano, que terminó en paz un mandato completo. Los inversores extranjeros llegaron a la isla y compraron pequeñas empresas, bosques, plantaciones y tierras. La Guardia Nacional mantenía la ley y el orden. En 1929 Vázquez cometió el error tan frecuente en tantos líderes de la historia latinoamericana: trató de revisar la Constitución para poder presentarse de nuevo a la presidencia.

Hizo erupción una revolución y Trujillo se presentó como candidato en las elecciones de 1930. Blandiendo su base de poder (la Guardia Nacional), dejó claro que ganaría a toda costa y proclamó su victoria con un 95 por 100 de los votos. De inmediato comenzó a expulsar de la escena a los adversarios políticos. El futuro le pertenecía y goberaría la nación sin piedad hasta su muerte en 1961.

Al igual que tantos dictadores, Trujillo explotó los recursos del país para amasar una fortuna propia. Durante los años cincuenta, la tasa media de crecimiento anual fue del 8 por 100, lo que resultaba impresionante si no fuera porque los beneficios no alcanzaron a la población general. Gran parte de los ingresos nacionales eran desviados y escondidos en cuentas de bancos extranjeros. Las masas seguían tan pobres como sus vecinos de Haití. Las contradicciones entre Trujillo y su camarilla de admiradores crecían a medida que prosperaba la economía: cuanto más tomaba para sí mismo, más des-

contentos se volvían sus colaboradores. En 1961, sus antiguos amigos y compinches, no sus enemigos, organizaron un golpe contra él y tramaron asesinarlo.

En 1962, unas elecciones libres y justas llevaron al triunfo de Juan Bosch, antiguo periodista y reformista social que pretendía confiscar y redistribuir las posesiones de Trujillo como parte del programa de reforma agraria. Pero sus esfuerzos por mejorar la suerte de las masas generó incomodidad entre las élites tradicionales, que consideraban estas innovaciones peligrosamente similares a las emprendidas en la Cuba de Castro. Un golpe militar derrocó a Bosch en 1963. Luego hubo un contramovimiento que intentó reponerlo como presidente. El conflicto resultante llevó a una guerra civil entre las fuerzas armadas y los «constitucionalistas» partidarios de Bosch, en su mayoría trabajadores y estudiantes. Como la lucha se intensificaba, Estados Unidos empezó a temer el surgimiento de «otra Cuba» e invadió el país en abril de 1965. Envío una fuerza de 22.000 marines, un contingente que asombró hasta a las autoridades civiles estadounidenses ocupadas del caso.

El motivo de este despliegue sigue sujeto a debate. Los constitucionalistas recibieron el apoyo del diminuto Partido Comunista del país, pero no hay pruebas que sugieran que en su conjunto fuera un movimiento radicalmente de izquierdas. Más bien la insurrección era un intento de echar a Donald Reid Cabral (jefe de la junta gobernante y antiguo vendedor de automóviles) y restaurar a Bosch al puesto de poder que le correspondía.

A comienzos de 1965, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) de Bosch y su rival principal de la izquierda moderada, el Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC), habían alcanzado un acuerdo para colaborar en los esfuerzos por restaurar el gobierno constitucional. Los oficiales jóvenes, en concierto con los dirigentes del PRD, se hicieron con la plana mayor del ejército y se declararon adversarios de la junta. Pronto se les unieron intelectuales y profesionales, y los constitucionalistas comenzaron a repartir armas a miles de civiles (los cálculos van de 2.500 a 10.000). En este contexto, cuando la insurrección crecía, Estados Unidos decidió apoyar a las fuerzas contrarias a Bosch.

Para justificar esta acción, trató de conseguir la participación de otros países de América Latina mediante la Organización de Estados Americanos. Sólo obtuvo respuesta favorable de Paraguay y Brasil, ambos bajo gobiernos militares de derechas. El intento estadounidense de formar una «fuerza pacificadora interamericana» no sólo fue incapaz de legitimar la intervención, sino que también desacreditó a la OEA en su conjunto y contribuyó al fracaso de esa institución.

La intervención estadounidense llevó a la formación de un gobierno provisional y por último a la celebración de elecciones en junio de 1966. La victoria fue para Joaquín Balaguer, ex vicepresidente de Trujillo y favorito de Estados Unidos. Con la plena bendición de Washington, el gobierno de Balaguer puso en práctica diversos e importantes programas de desarrollo. Se construyeron viviendas y se distribuyó tierra; se fortaleció y se mejoró la edu-

cación. Los programas de austeridad redujeron los severos problemas de la balanza de pagos y, para contribuir a estos y otros retos, la ayuda estadounidense ascendió a más de 132 millones de dólares en 1968. Aumentó la producción agrícola y la inversión extranjera respondió. Como resultado de todos estos factores, el crecimiento económico fue sustancial.

Las fuerzas armadas dominicanas sufrieron una reforma moderada y sus elementos recalcitrantes fueron enviados al exterior, a menudo en misiones diplomáticas ficticias. Pero la perpetuación de la desigualdad y la pobreza condujo a una polarización política creciente, mostrada de forma más notable por la inclinación izquierdista del ex presidente Bosch y el PRD.

No obstante, continuó la transición tentativa y gradual hacia la democracia. Las elecciones libres sobrevivieron a pequeñas amenazas en 1970 y 1978, cuando las fuerzas armadas trataron de anular los resultados, pero en ambas ocasiones acabaron prevaleciendo. Los adversarios de Balaguer ganaron las elecciones de 1978 y 1982.

→ El deterioro en la balanza comercial y el aumento de la deuda exterior llevaron a una grave crisis interna a mediados de los años ochenta, justo cuando el país se preparaba para las elecciones de 1986. Se intensificó la polarización, pero en una campaña caldeada la victoria fue de nuevo para Joaquín Balaguer. En 1990, a los 83 años de edad, Balaguer ganó otra elección y declaró su voluntad de permanecer en la política por el resto de su vida. En 1994 volvió a ganar otra vez, para disgusto de Estados Unidos (al que molestaba su apoyo tácito al régimen de Cédras en el vecino Haití). Después de asumir la presidencia, Balaguer aceptó reducir su periodo a sólo dos años y prometió no presentarse en 1996. Es posible que este esfuerzo de conciliación haya sido muy poco y que haya llegado demasiado tarde. En una sociedad con divisiones de clase y de raza, Balaguer había recurrido al prejuicio racial sugiriendo que su opositor negro, Francisco Gómez Peña, deseaba unificar la República Dominicana con Haití.

Desde mediados de los años ochenta, la República Dominicana buscó de varias maneras imitar el modelo puertorriqueño de desarrollo y modificarlo con elementos del Asia contemporánea. Aprovechando los bajos salarios pagados a los trabajadores, la idea era transformar el país en una suerte de Singapur. Pese a algunos brotes de crecimiento económico, la pobreza persistió: hacia mediados de los años noventa cerca de un cuarto de la población adulta estaba desempleada, la mortalidad infantil presentaba una de las tasas más altas en el hemisferio. Las revueltas esporádicas mostraban el potencial para la violencia. «Estamos divididos —observaba un editor periodístico— y cualquier cosa podría hacer de esta división una guerra civil. Estados Unidos debería ser cuidadoso, porque tendría un problema más grande que el de Haití si este país estalla.»

Jamaica: fugitivos y socialismo revolucionario

Jamaica, «la tierra de los ríos», tiene una de las historias más fascinantes del Caribe. Los esclavos africanos de las plantaciones azucareras se rebelaron poco después de su llegada y huyeron a las montañas, donde crearon comunidades de cimarrones viables y autosuficientes. La base económica de esta sociedad alternativa era la agricultura de pequeños campesinos. El legado cimarrón ha desempeñado desde entonces un papel importante en las tradiciones culturales de Jamaica. Se dice, por ejemplo, que la legendaria «Nanny» de los cimarrones fue la madre de todos los jamaicanos libres.

Desde 1870 en particular, Jamaica comenzó a abandonar la dependencia de cultivar sólo azúcar y a desarrollar otros productos agrícolas. Su variedad climática permitía el cultivo de cacao, algodón y plátanos, que se convirtieron en los favoritos de los plantadores de la isla, tanto grandes como pequeños. Como consecuencia, la producción de plátanos no condujo al desplazamiento de los pequeños propietarios, como había hecho el azúcar siglos antes. Sólo el crecimiento poblacional resultó un reto para éstos, ya que la productividad no podía seguir el ritmo de las necesidades crecientes de una población mayor.

Como en el resto del Caribe, la Jamaica actual tomó forma a partir de los años treinta. Surgieron huelgas y manifestaciones contra el gobierno de la minoría blanca y dirigentes como Marcus Garvey expresaron las aspiraciones de las masas. Fundó el movimiento «Back to Africa» («Vuelta a África»), que tuvo fuertes repercusiones en Estados Unidos, y se convirtió en una figura importante del Harlem Renaissance (Renacimiento de Harlem) de ese periodo. Su propósito era fomentar la fraternidad y unidad entre los negros de muchas tierras, para mejorar las condiciones de las comunidades negras, ayudar a «civilizar» a las tribus africanas y, por último, fundar una o más naciones negras independientes, preferiblemente en África. Tras algunos encarcelamientos en Estados Unidos por sus actividades, Garvey regresó a Jamaica, donde fue elegido varias veces para formar parte de la corporación municipal de Kingston. Siguió siendo una figura prominente en los círculos artísticos e intelectuales negros de Estados Unidos, que incluían a celebridades como Langston Hughes, Duke Ellington, Lena Horne, James Baldwin y Richard Wright.

Jamaica obtuvo la independencia de Inglaterra en 1962. La lucha por la soberanía requirió y produjo dirigentes políticos de renombre. Dos de los más importantes fueron Norman Manley y Alexander Bustamante. Actuando desde extremos opuestos del espectro político, ayudaron a forjar uno de los sistemas políticos más dinámicos de la región.

Junto con Trinidad y Tobago, Jamaica constituye uno de los «gigantes de lengua inglesa», debido en gran medida a sus vastos recursos en bauxita y petróleo. Además, dos tercios de la isla están cubiertos por un manto de piedra caliza terciaria, lo que ha aliviado la dependencia de la agricultura, que es más variada allí que en la mayor parte del Caribe (el país todavía produ-

ce azúcar, por supuesto, utilizado parcialmente para hacer ron de alta calidad). En principio, esta combinación de materiales estratégicos y agricultura diversificada parecerían proporcionar las bases para un desarrollo económico continuado.

Sin embargo, en la práctica, Jamaica ha padecido mucho por las oscilaciones de la economía mundial. Tras la crisis petrolera inducida por la OPEP en 1973, el país careció de las divisas necesarias para cubrir su consumo creciente de crudo y, al igual que tantas otras naciones, comenzó a pedir fuertes préstamos al exterior. Hacia 1978 la deuda externa alcanzó 1.400 millones de dólares y en 1980 había ascendido a 1.900 millones de dólares.

Entre 1972 y 1980, el gobierno del primer ministro Michael Manley trató de establecer un Estado del bienestar dentro de un contexto democrático, que diferiría de forma significativa del desacreditado modelo puertorriqueño o del modelo cubano no comprobado. Según lo concebía Manley, «el socialismo democrático» no sería una fase de transición hacia el comunismo, sino un fin en sí mismo que respondería y respetaría las particularidades culturales de la sociedad jamaicana. El Estado controlaría las «directrices imperantes» de la economía para dirigir y asegurar el desarrollo, pero el sector privado desempeñaría un papel importante. Así describía el ministro de Economía el concepto:

En nuestra economía mixta, el énfasis principal, el ímpetu principal para el crecimiento económico proviene del sector privado. Él soporta el peso sustancial del crecimiento económico. Para que éste se produzca, el sector privado necesita varias cosas, en particular necesita capital y, por supuesto, necesita técnica. En cuanto al capital, el gobierno tiene a su disposición varias instituciones para asistir en el proceso de formación de capital y, lo que es igualmente importante, en la distribución de ese capital según se va acumulando en esas áreas de producción que parezcan las más beneficiosas para el crecimiento económico.

El socialismo democrático también sería un sistema competitivo multipartidista, que se esforzaría por prohibir todas las formas de explotación. Además, la afirmación de la autodeterminación nacional llevaría a una reducción de la dependencia hacia fuerzas y mercados externos.

La reacción a los ideales del socialismo democrático fue variada. La Cámara de Comercio denunció enérgicamente las «incursiones» propuestas por el Estado en el sector privado, y la comunidad empresarial en conjunto no se mostró entusiástica. Pero hubo apoyo entre los trabajadores y las masas, como demostró la fortaleza electoral del People's National Party (PNP, Partido Nacional del Pueblo) que estaba tras Manley y su programa. La estrategia pareció funcionar al menos durante un tiempo: las condiciones económicas de la clase obrera mejoraron entre 1972 y 1975, pero luego comenzaron a deteriorarse de nuevo. En abril de 1976 la tasa de desempleo sobrepasaba el 20,5 por 100.

Manley y Estados Unidos estaban en vías de colisionar. Como si sus me-

didas internas no fueran suficientes, el primero estableció relaciones diplomáticas y comerciales con Europa Oriental y otros países socialistas. Fue muy importante en la formación de la asociación de productores de bauxita. Viajó a Cuba y África, donde denunció el racismo y el imperialismo, y proclamó lealtad al movimiento de no alineación del Tercer Mundo.

La oposición exterior (especialmente en Estados Unidos) e interna aumentó. Las condiciones económicas debilitaron la base de apoyo del PNP, que cometió errores, por supuesto, pero quizás los habría podido rectificar con un pequeño apoyo económico de las organizaciones internacionales, del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional sobre todo. Un fallo técnico en el cálculo del potencial económico en divisas dio lugar a una campaña bien orquestada que acusaba al gobierno de mala administración y carencia de dirección. La tensión aumentó a medida que se acercaron las elecciones de 1980. En un país de apenas dos millones de habitantes, casi un millón estaba censado y, de éste, el 87 por 100 fue a las urnas. El ganador fue Edward Seaga, del Jamaica Labor Party (JLP, Partido Laborista de Jamaica, de tendencia moderada), que recibió el 58 por 100 de los votos; Manley obtuvo un 41 por 100.

Con una expresión palpable de alivio, la comunidad internacional ofreció a Seaga la ayuda que había negado a Manley. El FMI admitió términos liberales para refinanciar la deuda de Jamaica. México y Venezuela ayudaron a suministrar petróleo (como también estaban haciendo con Centroamérica). Aumentó la ayuda estadounidense y David Rockefeller presidió un comité especial para movilizar inversión privada. El presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, eligió a Seaga y su país para elogiarlos al lanzar su Iniciativa para la Cuenca del Caribe que a la postre nació muerta.

A pesar de esta ayuda (o debido a ella), la deuda exterior subió hasta los 4.500 millones a finales de la década, convirtiendo a Jamaica en uno de los mayores deudores per cápita del mundo en vías de desarrollo. Y mientras el crecimiento económico continuaba, Seaga permitía que los servicios sociales sufrieran un deterioro pronunciado. Durante los años ochenta, la renta per cápita descendió cerca de un 6 por 100, reduciéndose a menos de 1.300 dólares en 1989, cantidad inferior a la alcanzada en 1970.

En las elecciones de 1989, el PNP de Michael Manley regresó al poder con un decisivo margen de 57 a 43 por 100 sobre el JLP de Seaga. Como en los años setenta, Manley recibió un fuerte apoyo de los obreros manuales y los pobres. Esta vez, sin embargo, se presentó ante la comunidad internacional como un político moderado con extensos contactos en Europa y Estados Unidos. Se distanció de Fidel Castro para buscar una aproximación a Estados Unidos, procuró capital extranjero, entró en negociaciones con el FMI sobre la estrategia para pagar la deuda externa y anunció su intención de privatizar la industria estatal. Resulta irónico que fuera Seaga, su adversario conservador, quien denunciara la venta de la participación estatal en la industria de telecomunicaciones jamaicana como «una desgracia nacional».

En 1992 Manley dejó el cargo de primer ministro y traspasó el poder a

su heredero político de tantos años, P. J. Patterson, quien aceleró el viraje hacia las políticas económicas de libre mercado. En las elecciones de marzo de 1993, el PNP triunfó con el 55 por 100 de la mayoría sobre un debilitado y dividido JLP. Hacia 1995, la inflación estaba otra vez por debajo del 10 por 100, pero persistían graves problemas. Uno era la amenaza del narcotráfico con la violencia y corrupción que generaba. Otro era la perjudicial confianza en dos industrias exclusivamente: minería y turismo, para el crecimiento económico. Un constante flujo de jamaicanos continuó emigrando a Estados Unidos. En estas circunstancias, prevalecía la incertidumbre. Como P. J. Patterson señalaba: «El peligro mayor es que seamos olvidados. Tenemos que evitar el peligro de quedar marginados».

Puerto Rico: de colonia de asentamiento a escaparate del capitalismo

Puerto Rico se convirtió en parte de Estados Unidos como resultado de la guerra Hispano-Americana. En julio de 1898, en venganza por el hundimiento del navío *Maine*, las tropas estadounidenses desembarcaron en la bahía de Guánico e iniciaron el primer acto de expansión colonial de su país. Así, Puerto Rico se convirtió en una prenda en la guerra entre los patriotas cubanos y las guarniciones españolas. No se había previsto la ocupación.

Muy al contrario, España ya había accedido a conceder a Puerto Rico la autonomía el año anterior y se estaban haciendo los preparativos para diseñar alguna clase de «gobierno interno» para la isla. La invasión estadounidense lo cambió todo. De improviso, Puerto Rico se convirtió en un factor crucial para la estrategia global estadounidense, no sólo por su potencial de inversión y comercio, sino también por su papel geopolítico para consolidar el poderío naval estadounidense.

El deseo idealista de expulsar a España del hemisferio sin duda tuvo un papel importante en la decisión estadounidense de invadir Puerto Rico. Después de todo, España parecía representar a los elementos más reaccionarios de la sociedad europea. Era una monarquía colonial que parecía defender todo lo que Estados Unidos declaraba rechazar y representaba una continua violación de la Doctrina Monroe. La aceptación popular de la «leyenda negra» acerca de sus atrocidades en América contribuía más a mantener esta convicción.

Pero quedaba una cuestión básica: ¿por qué Estados Unidos tomaba Puerto Rico como colonia cuando estaba ayudando a Cuba a lograr su independencia? La diferencia puede muy bien residir en la historia de ambas islas. En la segunda existía un antiguo movimiento insurgente armado contra España y era una isla mucho más difícil de invadir. Sin embargo, Puerto Rico estaba en vías de negociar un acuerdo y podía presentar menos resistencia ante fuerzas exteriores. Cuando se hallaba en el curso de esas negociaciones, se vio atrapada en una lucha compleja entre potencias importantes y los insurgentes cubanos.

A finales de siglo, Puerto Rico presentaba claros signos de la dominación española. Durante el periodo colonial la isla se había utilizado como una importante guarnición militar y un centro comercial, papel que se intensificó cuando el tráfico de esclavos alcanzó su cima en el siglo XVIII. La producción de azúcar se convirtió en la principal empresa agrícola. También había pequeños campesinos, los *jíbaros*, individuos rústicos que cultivaban la dieta básica y ayudaban a mantener una economía diversificada. Debido a ellos, la población esclava siempre fue minoritaria. La destrucción de la economía campesina no se ocasionó por el énfasis otorgado al azúcar durante la colonia, como pasó en otras partes del Caribe, sino debido a la innovación tecnológica del siglo XX.

Desde la llegada de los marines, Puerto Rico ha mantenido una relación peculiar con Estados Unidos. A partir de 1898, los residentes de la isla no tuvieron una posición totalmente clara. En 1917 se les otorgó la ciudadanía estadounidense. En 1947, casi medio siglo después de la invasión, se le permitió intentar autogobernarse. En 1952 se le otorgó la categoría de «estado libre asociado» a Estados Unidos, que sigue siendo una situación ambigua: no es ni una colonia ni un estado, sino algo intermedio.

Para desarrollar la isla y proporcionar inspiración a América Latina, Estados Unidos colaboró con el dinámico gobernador Luis Muñoz Marín para llevar a cabo la «operación Bootstrap» durante los años cincuenta y sesenta. Con este plan, el gobierno federal estadounidense alentaría las inversiones en Puerto Rico mediante una serie de exenciones fiscales y otras concesiones, que estimularían la inversión en infraestructura básica y en la mejora de la fuerza laboral. El resultado fue atraer industrias relativamente pequeñas, en su mayoría de trabajo intensivo.

La «operación Bootstrap» produjo cambios tremendos en la vida social y económica. Las haciendas y pequeñas fincas azucareras fueron reemplazadas por fábricas; a medida que prosperaba la industrialización, los ciudadanos se unían a las filas de la clase obrera. Pero la inversión externa no proporcionó suficientes trabajos para absorber el crecimiento de la población en edad laboral y el resultado fue un desempleo masivo.

Una consecuencia de esta tendencia fue acelerar el flujo de emigrantes a Estados Unidos, donde ahora reside un 40 por 100 de puertorriqueños. La mitad de la población emigrante —es decir, el 20 por 100 del total— vive ahora en Nueva York. En cierto sentido, ahora existen dos Puerto Ricos: uno en la isla y otro en tierra firme. Por supuesto, hay movimiento y comunicación entre ambos, pero las dos comunidades están separadas por tensiones sociales y diferencias culturales. Como si se tratara de demostrar este hecho, a los puertorriqueños residentes en Nueva York se los conoce a veces como *neo-ricans* (neorriqueños).

La vida política de la isla es activa y ordenada. El primer responsable ejecutivo es el gobernador, que se elige cada cuatro años. El tema dominante ha sido la relación de la isla con Estados Unidos. En un plebiscito celebrado en 1967 sobre esta cuestión, un 60 por 100 estuvo a favor de la continuación y

perfeccionamiento de la categoría de estado libre asociado, y un 38 por 100 apoyó la conversión en un estado de la Unión. Quienes sostenían la independencia completa decidieron boicotear el plebiscito, pero esta facción ha sido clamorosa y notoria (en 1947, de hecho, un grupo pro independencia atentó contra la vida del presidente estadounidense Harry S. Truman).

Las fuerzas que abogaban por su conversión en un estado más de Estados Unidos, representados por el Partido Nuevo Progresista (PNP), ganaron las elecciones para gobernador en 1968, 1976 y 1980. Bajo la dirección de Carlos Romero Barceló, este grupo suscribe la creencia de que su conversión en un estado pleno proporcionaría una clase trabajadora puertorriqueña con mayor acceso a los programas federales de bienestar, estimularía el crecimiento económico y haría desaparecer el estigma de «ciudadanos de segunda clase» vinculado con la categoría de estado libre asociado. El apoyo popular a este movimiento provino en especial de las zonas urbanas. Romero Barceló era alcalde de San Juan antes de ser gobernador.

El partido que apoya la situación de estado libre asociado, el Partido Popular Democrático (PPD), ganó las elecciones en 1972, 1984 y 1988. Su dirigente más prominente era Rafael Hernández Colón, que creía que cierta medida de autonomía es necesaria para preservar la identidad histórica y cultural de la isla. Dentro de la relación de estado libre asociado, ha demandado también un mayor grado de autonomía significativa. Como gobernador, Hernández Colón promovió de forma activa relaciones de ámbito mundial para la isla y ha desempeñado un papel dirigente en el desarrollo del concepto de «planta doble»: dividir el proceso de producción en partes separadas, para que las fases iniciales se efectúen en otra región del Caribe y se haga el ensamblaje final en Puerto Rico. En gran medida, esta estrategia representa una respuesta a los cambios efectuados en el código fiscal estadounidense, que reducía las exenciones fiscales para las compañías estadounidenses afincadas en Puerto Rico. La idea de la planta doble permitiría a estas empresas extender sus operaciones a otras partes del Caribe y seguir manteniendo su posición fiscal privilegiada.

Hacia los años ochenta, las fuerzas proindependistas estaban divididas en tres partidos: el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), dirigido por el senador Rubén Barrios; el Partido Socialista Puertorriqueño, bajo el izquierdista Carlos Gallisá; y el Ejército Popular Boricua (EPB), también conocido como los *macheteros*, y sus colaboradores en tierra firme, las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN). Estos últimos grupos demandaban una resistencia armada contra la dominación colonial y patrocinaban actos esporádicos de violencia organizada.

La preocupación por las cuestiones económicas creció constantemente y, sobre todo por la recesión en Estados Unidos, Puerto Rico sufrió un bajón a comienzos de los años noventa. En esta atmósfera, la elección de gobernador de 1992 favoreció a Pedro Rosselló del PNP, que prometió presionar por convertir Puerto Rico en un estado de la Unión. Su primera medida como gobernador fue dar una ley otorgando al inglés un estatus igual al español como

idioma oficial. Y en noviembre de 1993, cumpliendo una promesa de su campaña, Rosselló convocó un nuevo plebiscito sobre el estatus de la isla. Para la sorpresa de muchos observadores, la posición que defendía el estado asociado ganó con 48,4 por 100 del voto; la unionista obtuvo el 46,2 por 100; los independentistas sólo consiguieron el 4,4 por 100. Este resultado parece haber resuelto la cuestión. En el futuro previsible, Puerto Rico continuará con su curiosa relación con Estados Unidos.

Antillas Menores: las luchas de los microestados

Las Antillas Menores son una serie de pequeñas islas situadas al noreste de Venezuela. Algunas han obtenido la independencia en las últimas tres décadas y otras permanecen bajo la tutela colonial o con una posición de estados libres asociados. Como en Puerto Rico, la cuestión de la independencia nacional continúa persistiendo.

Tal es el caso de las islas Turks y Caicos, las islas Vírgenes, las islas Caimán y Monserrat. Todas están ligadas a la corona inglesa. La economía de la mayoría de estas islas se basa fundamentalmente en la agricultura y el turismo, con pequeñas incursiones recientes en la manufactura. La mayor parte de la infraestructura está relacionada con el turismo, en especial la industria hotelera y de transportes (incluidos los aeropuertos). Los productos de exportación abarcan artículos de cuero, bolsas de plástico, textiles, fibra de vidrio y componentes electrónicos. La pesca también es una actividad importante y una fuente común de tensión entre las islas cuando se agotan las reservas.

El Caribe francés está formado por las islas de Martinica y Guadalupe. Ambas fueron colonizadas por los franceses en la década de 1630 y, junto con Haití y otras posesiones, formaron el núcleo de los intereses lucrativos en café y azúcar de la madre patria en América. («Hemos perdido Canadá —reconocería un ministro de Estado— tras los catastróficos resultados de la guerra de los Siete Años—, pero seguimos conservando Martinica».)

En 1946 los residentes de Martinica y Guadalupe votaron unirse a Francia como provincias de ultramar (*departement d'outre-mer*) y por ello recibieron todos los derechos de la ciudadanía francesa. La administración local está en manos de un consejo elegido de forma democrática. Las fuerzas proindependientes se encuentran en los márgenes políticos, aunque ha aparecido un movimiento importante en Guadalupe bajo la dirección de un médico formado en Francia, el doctor Claude Makouke. Por el momento, la mayoría parece preferir la estabilidad del dominio francés a las incertidumbres de la independencia.

Bajo el gobierno socialista de François Mitterrand en Francia, una reforma política otorgó pequeñas ventajas a los grupos de izquierdas. En Guadalupe la izquierda se hizo con veinticuatro de los cuarenta y dos escaños del Parlamento, con lo que se convirtió en mayoría; no fue así en Martinica, don-

de el Partido Progresista obtuvo sólo diez de los cuarenta y ocho escaños. Esto revela a la vez la diferencia existente entre las dos islas y la moderación general de la escena política.

Guadalupe y Martinica dependen básicamente de la agricultura, el turismo y la ayuda directa de Francia. Los sistemas educativos y de salud son de alta calidad. El sector público emplea del 33 al 35 por 100 de la fuerza laboral. Sin embargo, el desempleo se mantiene elevado, un 28-30 por 100, y muchos residentes emigran a Francia en busca de trabajo. El futuro de estas islas continuará dependiendo de París, aunque Estados Unidos ha comenzado a aumentar su presencia en la zona.

Las Antillas Holandesas son San Martín, San Eustaquio y el llamado grupo ABC —Aruba, Bonaire y Curaçao—, todas las cuales forman una federación administrativa que tiene su sede en la ciudad de Willemstad (Curaçao). El jefe de Estado oficial es la reina de Holanda, representada en la isla por un gobernador y un primer ministro. Las islas se autogobiernan, aunque Holanda retiene la responsabilidad sobre los asuntos exteriores y militares. Sin embargo, la federación ha comenzado a desmembrarse. Aruba ha venido buscando la soberanía nacional desde hace tiempo y la obtendrá en 1996.

Las islas presentan una fuerte dependencia del turismo, de las empresas bancarias asentadas en su paraíso fiscal y de las refinerías de petróleo. Sin embargo, a finales de los años ochenta, la compañía Exxon anunció su decisión de abandonar las islas debido a la disminución de la demanda de combustible en la región nororiental de Estados Unidos. Los cambios en las leyes estadounidenses amenazaban con poner en apuros al paraíso fiscal de la industria bancaria, lo que podía llevar a unas pérdidas del 25 al 40 por 100 de los ingresos para el gobierno local. Y el turismo de Venezuela se vio afectado en 1983 por la devaluación de su moneda, el bolívar, hecho que encareció las vacaciones en Aruba y otras partes para sus viajeros. Por ello, las perspectivas económicas y políticas de las Antillas Holandesas parecen algo inciertas.

La nación más grande de las Antillas Menores es Trinidad y Tobago, colonizada en principio por España y luego tomada por Inglaterra en 1797. La isla fue administrada como una colonia de la corona inglesa hasta 1962 y consiguió la independencia total como república en 1976. En un tiempo, la economía diversificada (que incluía la producción de petróleo) proporcionó a la isla una renta per cápita de casi 7.000 dólares. Era con diferencia la más elevada de la región, aunque el desempleo y la inflación eran problemas constantes. A mediados de los años ochenta, la renta per cápita había descendido a menos de 3.000 dólares.

El principal representante del movimiento independentista de Trinidad y Tobago, Eric Williams, se convirtió en uno de los más famosos políticos del Caribe. Bajo su dirección, el People's National Movement (PNM, Movimiento Nacional Popular) obtuvo todos los escaños de la asamblea local en 1971 y se convirtió en primer ministro sobre una cresta de popularidad. Sin embargo, pronto desafió su autoridad el conflicto con el movimiento obrero

y la persistencia del desempleo crónico ayudó a alentar la formación de nuevos partidos de izquierda. Williams murió en 1981 cuando aún era una figura reverenciada y le sucedió su ministro de Agricultura.

Las crecientes dificultades económicas de mediados de los años ochenta llevaron a una pérdida del control por parte del PNM y a la victoria de la National Alliance for the Reconstruction (Alianza Nacional para la Reconstrucción) bajo la dirección de A. N. Robinson. Se estaban efectuando planes para aumentar el turismo y la inversión extranjera. A pesar de ello, Trinidad y Tobago sigue determinada a salvaguardar la independencia política y económica ganada con tanto esfuerzo.

El acontecimiento más dramático de la vida política de las Antillas Menores ocurrió en la diminuta isla de Granada, en octubre de 1983: la invasión militar de Estados Unidos. Esta acción fue precipitada por una serie de hechos internos que culminaron con el asesinato de varios miembros del gobierno y el primer ministro, Maurice Bishop. La justificación pública que ofreció la administración Reagan para su intervención fue la necesidad de proteger a los ciudadanos estadounidenses de la isla, incluidos los estudiantes de una escuela médica local. Esta explicación se vio reforzada por una petición de ayuda decisiva efectuada por los gobiernos conservadores de los países vecinos, incluido el equipo de Seaga de Jamaica. Pero la razón real, según muchos observadores, era el giro izquierdista de la política granadina en los asuntos internos y en especial en los internacionales.

La historia comienza con la formación del People's Revolutionary Government (PRG; Gobierno Revolucionario Popular), movimiento populista que se desarrolló como reacción al liderazgo corrupto e irresponsable de Eric Gairy tras la consecución del autogobierno bajo el dominio inglés. Con la dirección carismática del popular Maurice Bishop, el PRG alcanzó el poder en 1979 y emprendió una serie de reformas. Nuevas instituciones reemplazaron al obsoleto y decrepito aparato del Estado; un código de trabajo estableció la legalidad de los sindicatos y llevó a un aumento masivo de afiliaciones; las organizaciones alentaban en todas partes la participación diaria en los asuntos públicos y locales. En un esfuerzo por diversificar la economía, dependiente en gran medida de la exportación de un único producto (nuez moscada), Bishop y sus consejeros trataron de fortalecer la infraestructura del país —mejorando las carreteras y las técnicas de cultivo— y también explorar nuevos métodos de mercado y embalaje. El PRG también extendió el papel del Estado en los asuntos económicos, cuadriplicando las inversiones del sector público en comparación con el régimen de Gairy. Como resultado aparente de esta estimulación, los salarios reales aumentaron, creció el empleo y la producción se elevó un 5,5 por 100 en 1982.

Granada también trató de desarrollar el turismo, que se convirtió en un hueso disputado. Un requerimiento clave sería la construcción de un nuevo aeropuerto que pudiera controlar el tráfico de las líneas comerciales de Europa y Estados Unidos. Pero cuando el proyecto comenzó, la administración Reagan decidió que el aeropuerto era una amenaza militar porque sería usado

por las fuerzas soviéticas u otras antiestadounidenses. La acusación nunca se probó pero se hizo dominante en la controversia regional sobre el asunto.

En asuntos exteriores fue donde el PRG dio los pasos más osados al alinearse con Cuba y declarar su solidaridad con los movimientos revolucionarios de todo el Tercer Mundo. Esto llevó al cultivo de vínculos bastante estrechos con la Unión Soviética y Europa Oriental. El gobierno de Estados Unidos reaccionó de forma negativa y comenzó a emitir pronunciamientos ominosos acerca de la significación económica y militar de las rutas marítimas caribeñas. Una vez más, la situación estratégica de la región la convertía en prenda en el foro global.

La administración Reagan intentó —sin éxito— disuadir a los aliados de Europa Occidental para que aportaran ayuda y apoyo a Granada. En una ocasión, Estados Unidos ofreció proporcionar fondos para el nuevo aeropuerto con la condición de que Estados Unidos pudiera alquilarlo durante noventa y nueve años. Bishop respondió airado que su país «no sería el patio trasero de nadie» y de inmediato concedió el contrato a una empresa inglesa.

Las luchas intestinas dentro del gobierno de Granada aumentaron en el otoño de 1983. A comienzos de octubre, un grupo de radicales de línea dura al mando de Bernard y Phyllis Coard arrebataron el poder a Bishop y lo condujeron a una brutal ejecución. Siguió el caos y se creó un vacío de poder. La administración Reagan consideró que era su oportunidad y decidió invadir la isla. El 25 de octubre, un contingente de tropas estadounidenses desembarcaron en Granada, aplastaron la modesta resistencia y sometieron la isla de inmediato.

El desafío real era la restauración de la legitimidad política. Aunque Gran Bretaña retenía una apariencia de autoridad formal, ya que Granada era miembro de la Commonwealth, Estados Unidos ejerció el poder de facto. Acabaron celebrándose nuevas elecciones en diciembre de 1984, justo un año después de la invasión, y la victoria recayó en un elemento moderado, conocido como el National Party (Partido Nacional). Las elecciones siguientes fueron asuntos vagos que no produjeron un hombre de Estado significativo.

El país sufrió una transición lenta y penosa hacia la economía de mercado durante los años ochenta e inicios de los noventa. Los ingresos de exportación descendieron a causa de plagas en las cosechas y la caída de los precios mundiales (de la nuez moscada, las bananas y el cacao). El desempleo aumentó al 40 por 100, y el número de personas por debajo del límite de pobreza incluso se duplicó. A comienzos de 1995 Nicholas Brathwaite finalmente dejó el cargo de primer ministro y las elecciones subsiguientes llevaron al poder a Keith Mitchell, un afable populista del New National Party (Nuevo Partido Nacional) de centro izquierda. Mientras los habitantes de esta diminuta isla esperan el cambio económico, parece que Granada continúa en una especie de limbo político: ni es independiente ni es una colonia.

Hacia los años noventa los pequeños países del Caribe, con frecuencia llamados «microestados» o «miniestados» a causa de su pequeño tamaño y escasos recursos, afrontaron sobrecojedores desafíos de gobernabilidad. Los

estados encontraron cada vez más difícil imponer una política económica y social y establecer una autoridad efectiva. Un ejemplo de este problema apareció en julio de 1990, cuando 113 miembros de un grupo musulmán periférico intentaron dar un golpe de Estado en Trinidad y Tobago, tomando como rehenes al primer ministro y gran parte del gabinete durante varios días. Aunque fueron finalmente reducidos, los conspiradores perpetraron su intento con sólo 130 armas, la mayoría compradas en armerías de Florida. Quizá más insidiosa a largo plazo es la llegada de narcotraficantes que buscan utilizar las islas caribeñas como un corredor para transportar marihuana, cocaína y heroína. «No sería difícil para los narcotraficantes copar un partido político, dirigirse a electores potenciales clave, y conseguir el poder —decía el primer ministro de Santa Lucía—. Luego uno tendría toda la parafernalia gubernamental sirviendo a los intereses del narcotráfico local o internacional.» Hasta este punto, la soberanía de estas islas-estados se ha convertido en una preocupación para todo el hemisferio.

Centroamérica: colonialismo, dictadura y revolución

Centroamérica ha recibido una escasa atención de los estudiosos estadounidenses. Este descuido se debe en parte a la pobreza relativa de los archivos, bibliotecas y centros de investigación sobre las naciones del istmo, que a su vez se justifica de forma parcial por la pequeñez de los países, que los hace parecer menos significativos que Argentina, Brasil o México. Y también se debe a la suposición común de que están atrasados: es la región menos desarrollada de un mundo en vías de desarrollo. Dominadas por dictadores, las «repúblicas bananeras» del istmo se consideraban adormecidas reliquias del pasado, los últimos lugares donde se alzaba una revuelta popular.

Los trastornos de Nicaragua y El Salvador han desafiado con fuerza esa imagen. Si desecharmos la teoría de la modernización y seguimos un enfoque que coloca a Centroamérica dentro del contexto de la economía capitalista mundial, la historia de la región comienza a adquirir un nuevo significado. Como veremos, Centroamérica llegó a desarrollar economías de plantación clásicas, hecho que tuvo un efecto decisivo en las relaciones de clase y los resultados políticos. Por ello, el istmo proporciona una variación más sobre la interrelación del cambio socioeconómico y la transición política.

Además, su historia ofrece la oportunidad de examinar y comprender las políticas de Estados Unidos, que mediante el comercio, la inversión, la invasión y la diplomacia obtuvo una extraordinaria influencia sobre las tendencias y acontecimientos de la región. El uso (y abuso) de este poder no sólo proporciona una perspectiva de la conducta estadounidense, sino que también enriquece nuestra comprensión de los modos como los latinoamericanos han interpretado los motivos y acciones del «coloso del norte».

Antecedentes coloniales

La naturaleza dotó a Centroamérica de una belleza singular. Desde Guatemala hasta Panamá, el istmo exhibe muchos contrastes: una cordillera espectacular, salpicada de volcanes de 3.000 metros o más; algunas zonas áridas y verdes junglas a lo largo de la costa. Gran parte del suelo es fértil y el clima

es templado durante todo el año, cálido durante las mañanas y fresco por las tardes. Existen lagos en las zonas montañosas pero no ríos navegables importantes (con la posible excepción del río San Juan en Nicaragua). Tampoco cuentan las costas con puertos naturales de una profundidad adecuada. La naturaleza también puede traer calamidades mediante lluvias torrenciales, huracanes y violentos terremotos.

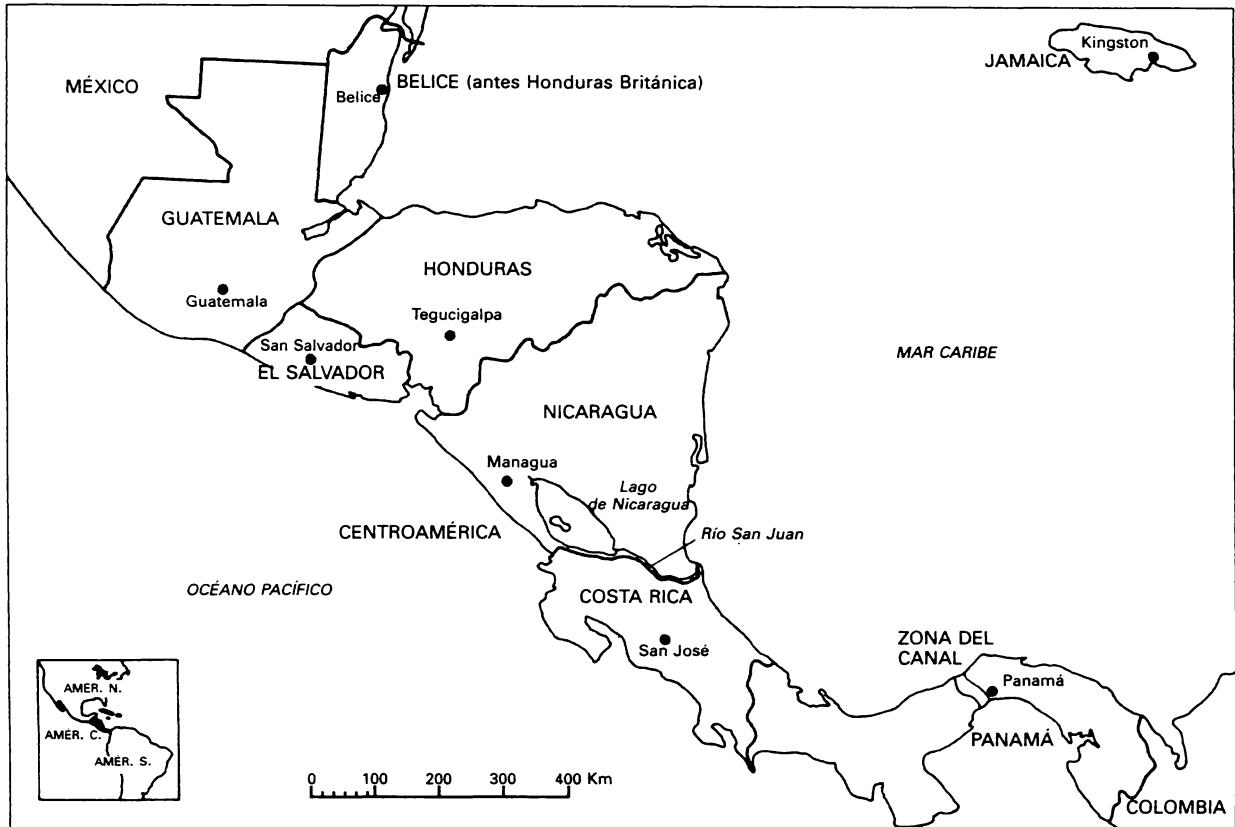
Durante los tiempos precoloniales, Centroamérica fue un punto de encuentro para las culturas mesoamericanas, suramericanas y caribeñas. En contraste con México y Perú, no hubo un imperio indio centralizado. Los pueblos indígenas vivían en comunidades autónomas y estables que comerciaban entre sí. Desde el año 500 a.C., apareció una civilización relativamente avanzada en las tierras altas de Guatemala y El Salvador, muy influida por la cultura olmeca de la costa mexicana de Veracruz-Tabasco. Siguieron después asentamientos nahuas y en las tierras bajas del norte de Guatemala apareció la cultura maya clásica. El periodo comprendido entre los años 600 y 900 d.C. marcó el punto culminante del Antiguo Imperio Maya, como se le denominó en otro tiempo a pesar de que no constituyó una unidad política con una organización elevada.

Los españoles llegaron por vez primera a la región en 1501. Vasco Núñez de Balboa avistó el océano Pacífico en 1513 y estableció su poder en lo que ahora es Panamá. En la década de 1520, ya bajo la presión de las autoridades de la corona española, Hernán Cortés avanzó hacia el sur hasta Honduras. Pedro de Alvarado emprendió una expedición desde Ciudad de México por la misma época y, como otros conquistadores, supo aprovecharse de las hostilidades existentes entre dos grupos indios, los quichés y los cakchiqueles (que se convirtieron en sus aliados). Como ocurrió también en otros lugares, los conquistadores comenzaron pronto a luchar entre ellos. La columna de Alvarado llegó a un punto muerto en su encuentro con las fuerzas de Pedro Arias de Ávila, más conocido como Pedrarias Dávila, que fundó la ciudad de Panamá en 1524.

A mediados del siglo XVI, la corona española estableció el reino de Guatemala como parte del virreinato de Nueva España. Incluía lo que después se convertiría en Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice (Honduras Británica) y el estado mexicano de Chiapas. Su capital era la ciudad serrana de Santiago de Guatemala, luego conocida como Antigua. Panamá cayó bajo la jurisdicción de Perú.

La diversidad de culturas indias hizo que los españoles penetraran en Centroamérica por etapas y no de una sola vez, y que cada conquista requiriera el establecimiento de un nuevo gobierno. El resultado fue la descentralización. Los municipios asumieron la autoridad cotidiana y los ayuntamientos se convirtieron en los cuerpos de gobierno más importantes. Aunque nominalmente se hallaban bajo el control de virreinatos distantes, los residentes españoles del istmo funcionaban en realidad bajo órdenes reales particulares.

La Iglesia siguió los talones a la conquista. El clero secular y regular, en



4. Centroamérica.

especial franciscanos y dominicos, tomó parte activa en los esfuerzos misioneros. A mediados del siglo XVII había ya 759 iglesias por toda la región, que tendrían un arzobispo en 1745. Pronto se convirtió en una poderosa fuente de autoridad.

La actividad económica era modesta. La minería fue una actividad poco importante desde los comienzos. El principal producto de exportación era el cacao, aunque Venezuela acaparó pronto este mercado. Luego el añaíl se impuso como principal exportación y hubo un abultado tráfico de contrabando de tabaco. En la década de 1660, los ingleses establecieron un asentamiento en la desembocadura del río Belice (más tarde Honduras Británica), que utilizaron como base para el comercio de palo de tinte y caoba, y para hacer incursiones como bucaneros. Pero, en general, Centroamérica no era una fuente de gran riqueza, por lo que recibió poca atención de la corona española.

El vértice de la estructura social lo controlaba una élite doble. Una parte estaba formada por los burócratas nacidos en España o peninsulares, cuya base política era la Audiencia de Guatemala; la otra incluía a los latifundistas nacidos en aquellos territorios o criollos, cuya fuerza residía en los cabildos municipales. En la parte inferior se encontraba la mano de obra, compuesta por indios y esclavos africanos. También surgió un estrato mestizo conocido como ladinos, que trabajaban como obreros asalariados o pequeños agricultores en el campo y como artesanos, comerciantes y buhoneros en las ciudades. Casi al final del periodo colonial, aproximadamente el 4 por 100 de la población de la región era blanca (ya fuera española o criolla), un 65 por 100 era india y un 31 por 100 ladina (incluida la de ascendencia negra).

Independencia: la lucha por la unificación

Durante el siglo XVIII, la monarquía borbónica intentó reafirmar el control real sobre la América española, paso que redujo la autonomía política de la clase criolla latifundista. En Centroamérica, el descenso continuado de la producción de cacao y la precipitada caída del comercio de añaíl entre las décadas de 1790 y 1810 llevó a un descontento mayor en las filas criollas. Estos factores aumentaron las antiguas diferencias existentes entre la burocracia imperial y la aristocracia local, entre la capital y las provincias.

Cuando florecían movimientos independentistas por todas partes, el capitán general José de Bustamante se las arregló para mantener el control español de Centroamérica, en gran medida porque forjó una alianza con los ladinos e indios contra los criollos advenedizos. Sin embargo, se le forzó a marcharse en 1818 y la adopción por parte de España de una Constitución liberal en 1820 tuvo repercusiones por toda la región. A mediados de 1821 la declaración de Agustín de Iturbide del Plan de Iguala en México forzó la situación. Temiendo en buena medida ser «liberados» por las tropas mexicanas, los latifundistas conservadores decidieron romper con la España ahora radical y en enero de 1822 proclamaron la anexión del istmo al México mo-

nárquico. La abdicación de Iturbide al año siguiente llevó a la independencia completa. Chiapas permaneció con México. Los otros estados, de Costa Rica a Guatemala (excluido Panamá), se convirtieron en las Provincias Unidas de Centroamérica.

A pesar de la discordia y el desacuerdo, Centroamérica logró separarse de España —y de México— de un modo relativamente pacífico. Los pueblos del istmo no padecieron la misma destrucción física que se dio en otras partes durante la década de 1810 y, como resultado, el orden social colonial sobrevivió casi intacto.

De este modo, el istmo logró la plena independencia como una república políticamente unificada. El ideal de la unificación había inspirado desde hacía tiempo a los patriotas locales y continuaría siendo un objetivo muy valorado en los años venideros. Pero también resultó muy difícil de sostener.

Como pasó en otras partes de América Latina, la élite política centroamericana se dividió en dos facciones: liberales y conservadores. Los primeros abogaban por continuar las reformas iniciadas por la monarquía borbónica. Defendían el aumento de las restricciones al poder eclesiástico, la abolición de la esclavitud, la eliminación de los impuestos opresivos y el fomento del desarrollo económico. Su apoyo provenía de las clases profesionales emergentes, blanca y ladina, y de los sectores de clase media alta excluidos de los círculos de la aristocracia latifundista criolla. También abrazaron la idea de la unificación y tuvieron una fuerza considerable en las provincias distantes.

Los conservadores defendían el orden, la moderación y la estabilidad. Apoyaban las instituciones españolas, especialmente la Iglesia, y expresaban su suspicacia por la reforma progresista. Encabezados por los latifundistas criollos, abogaron primero por el comercio libre y luego volvieron a una posición proteccionista cuando sintieron el impacto de la competencia comercial británica.

En la década de 1820 hizo erupción la violencia y los liberales parecieron obtener el dominio. La Constitución de 1824 se asemejaba tanto a la estadounidense como a la española de 1812. En 1829 las fuerzas liberales al mando de Francisco Morazán, de Honduras, vencieron al ejército conservador y comenzaron una campaña para eliminar a los conservadores de los puestos de poder. Después de mucho tiempo, cambiaría la suerte.

Rafael Carrera y la supremacía conservadora

El año 1837 trajo commociones para Centroamérica. En las regiones montañosas de Guatemala comenzó una rebelión generalizada, una revuelta campesina que desafió al Estado liberal. Los sacerdotes de los pueblos exhortaron a sus feligreses, agobiados por la pobreza, a que se unieran al alzamiento, proclamando que una epidemia de cólera —que había comenzado a finales del año anterior— era un signo de la ira divina. Los indios se incorporaron a la causa. La guerra de castas se extendió de Guatemala a las otras provincias.

El dirigente de este movimiento era José Rafael Carrera, un porquero ladrino sin estudios. A mediados de 1837 definió los objetivos de la revuelta como: 1) reinstitución de los procedimientos judiciales tradicionales; 2) recuperación de las órdenes religiosas y los privilegios eclesiásticos; 3) amnistía para todos los exiliados de 1829, y 4) obediencia a Carrera. Sus fuerzas pronto controlaron Guatemala y en 1840 derrotó a Morazán.

El triunfante Carrera surgió como la figura dominante de la vida política centroamericana, posición que mantendría hasta su muerte en 1865. Desde 1839, la legislatura guatemalteca procedió a desmantelar el programa liberal. Se restablecieron los gremios de comerciantes, se pidió al arzobispo que volviera y la educación regresó a la Iglesia. El catolicismo romano se convirtió en la religión oficial del Estado y los sacerdotes recobraron la protección del fuero eclesiástico. Carrera mantuvo su control del ejército y en 1851 asumió también la presidencia de Guatemala. Fue un periodo de tendencia conservadora.

Esta revuelta llevó a algunos cambios duraderos. Unos cuantos indios, y sobre todo ladinos, comenzaron a desempeñar papeles activos en la vida política. La élite blanca recobró su supremacía social pero perdió el monopolio sobre el Estado. Y bajo Carrera, el gobierno abandonó el objetivo de tratar de asimilar a las masas indias. En lugar de ello, adoptó una política encaminada a proteger a los indios, en buena parte como lo había hecho la corona española, que contribuyó a la segregación que ha persistido hasta nuestros días.

El periodo de Carrera también puso fin a la confederación centroamericana. En 1838 el Congreso declaró que cada uno de los estados era «un cuerpo político soberano, libre e independiente». El ideal de unificación había acabado identificándose con el periodo liberal de 1823-1837 y se consideraba un fracaso, así que Carrera desechó el sueño. Al mismo tiempo, trató de imponer a conservadores de su mismo parecer en los estados (cada vez más soberanos). En Nicaragua este impulso acabó culminando en uno de los episodios más extravagantes de la historia de las relaciones interamericanas: el asunto William Walker.

Las consideraciones geográficas y económicas habían estimulado desde hacía tiempo el interés por la idea de una ruta interoceánica a través de Centroamérica. Al no haber descubierto un sistema de lagos y ríos que conectaran el océano Pacífico y el mar Caribe, los planificadores y visionarios calibraron la posibilidad de construir un canal ístmico. Los franceses e ingleses dieron las primeras muestras de curiosidad. Estados Unidos se les unió tras tomar Oregon y California, en especial tras la fiebre del oro de 1849.

Debido a sus extensos lagos y al río San Juan, Nicaragua parecía el emplazamiento natural para el canal proyectado, y a finales de 1849 Cornelius Vanderbilt y sus socios consiguieron una concesión del gobierno liberal. La intriga se enredó rápidamente. Costa Rica reclamó la jurisdicción sobre el término propuesto para el extremo oriental de su ruta. Con la esperanza de bloquear a sus rivales estadounidenses, los ingleses la apoyaron. En 1853 los conservadores habían obtenido el poder en Nicaragua y, sin conceder derechos territoriales, decidieron ponerse de parte de los británicos.

Los liberales frustrados recurrieron a Estados Unidos en busca de ayuda y lograron a William Walker, hijo de una austera familia fundamentalista de Tennessee, locuaz y de gran intelecto. De joven había estudiado medicina en Estados Unidos y Europa, y luego se dedicó al derecho en Nueva Orleans. Bajo contrato de los liberales, pagó a un pequeño ejército e invadió Nicaragua en 1855. Se adueñó de uno de los navíos de pasajeros de Vanderbilt, obtuvo una rápida victoria, se nombró jefe de las fuerzas armadas y se estableció como gobernante dictatorial del país.

El gobierno estadounidense asistió a estos acontecimientos con permisividad, tolerando sin ambages la intervención de un ciudadano propio en los asuntos de otro Estado. Walker dotó a sus fuerzas con veteranos de la guerra de 1846-1848 con México, aceptó el apoyo de los adversarios comerciales de Vanderbilt e incitó la inmigración desde el sur de Estados Unidos, que llevó consigo la esclavitud. Sin embargo, como hizo que creciera la oposición de los ingleses y de los conservadores de otros estados, se le retiró del poder en 1857. En 1860 trató de regresar y encontró la muerte.

Así terminó la «Guerra Nacional», acontecimiento con implicaciones duraderas, que desacreditó tanto a los liberales como a Estados Unidos y ayuda a explicar por qué los conservadores permanecieron en el poder durante mucho más tiempo en Nicaragua que en otras partes de Centroamérica durante el siglo XIX.

La teoría liberal y las «dictaduras republicanas»

Tras la muerte de Carrera en 1865, los liberales comenzaron un resurgimiento. Se había iniciado a finales de la década de 1850, cuando Gerardo Barrios se convirtió en presidente de El Salvador, y pronto prendió en otros países. En 1870, Tomás Guardia, oficial del ejército, asumió la presidencia de Costa Rica. En 1873, Justo Rufino Barrios tomó el poder en Guatemala, lo mismo que Aurelio Soto en Honduras, en 1876. El legado de la expedición de Walker retrasó el retorno de los liberales en Nicaragua hasta 1893, cuando José Santos Zelaya se convirtió en el jefe ejecutivo.

Como otras élites latinoamericanas de finales del siglo XIX, los liberales centroamericanos creían en las nociones de progreso y desarrollo económico. Buscaron integrar sus países con el resto del mundo, adquirir los aderezos de la civilización y fomentar la mejora material. Compartían las ideas de la generación de 1880 argentina y, de forma más particular, de los *científicos* mexicanos. En política seguirían de cerca el ejemplo de Porfirio Díaz.

A pesar de sus compromisos liberales, estos dirigentes establecieron lo que acabaría conociéndose como «dictaduras republicanas». Centralizaron la autoridad, manipularon las elecciones, controlaron las instituciones y se mantuvieron en el poder durante extensos períodos. Su apoyo interno provenía de la aristocracia latifundista y de algunos sectores medios. Forjaron una estrecha alianza con los intereses extranjeros, ingleses, alemanes y norteamericanos.

canos. Modernizaron sus efectivos militares y las fuerzas de policía, que utilizaron a su albedrío para intimidar y suprimir a la oposición.

Este modelo produjo algunas alteraciones sociales. Donde las distinciones entre conservadores y liberales eran más claras (Guatemala y Costa Rica), llevaron a un eclipse casi total del poder de las familias conservadoras. Donde las líneas de partición eran borrosas (Honduras, El Salvador), algunas dinastías lograron imponerse. Nicaragua resultó ser una excepción, ya que las familias conservadoras habían conseguido consolidar su posición cuando Zelaya llegó al poder. En general, el ascendente liberal abrió oportunidades a los sectores profesionales de clase media y a los ladinos, y, como veremos, auspició medidas que llevaron a la formación de nuevas élites.

Además, despojó a la Iglesia de su poder y prestigio. Su papel económico disminuyó y se abolieron sus privilegios legales. Como un historiador escribiría más tarde, «el papel fundamental que había desempeñado la Iglesia en Centroamérica se volvió secundario. Fue uno de los cambios más importantes que ocurrieron en Centroamérica». Su caída dejó un vacío institucional en la sociedad centroamericana, que acabaría ocupado, al menos en parte, por una nueva clase de Iglesia católica y romana.

Visión general: crecimiento económico y cambio social

El programa económico de los liberales renacientes hacía énfasis en el fomento de las exportaciones, sobre todo de materias primas, a cambio de la importación de bienes manufacturados, lo que condujo a basarse en la producción agrícola y, en particular, en el cultivo de café y plátanos.

Durante el periodo colonial, Centroamérica cultivaba pequeñas cantidades de café. Costa Rica comenzó la producción en serio durante la década de 1830, enviando su exportación primero a Chile y luego a Europa. Guatemala la siguió pronto y en 1870 el café ya era la principal exportación del país, posición que ha mantenido desde entonces. El Salvador, Nicaragua y Honduras se unieron al mercado cafetalero en las décadas de 1870 y 1880. Las exportaciones centroamericanas de este producto no han alcanzado volúmenes enormes —nunca supusieron más del 15 por 100 de las existencias mundiales— pero siempre han sido de alta calidad.

El café tuvo consecuencias sociales importantes. Como se cultivaba en las tierras altas y frescas, a lo largo de las laderas de las montañas, no requirió en todas partes que se efectuaran grandes usurpaciones de tierra a los campesinos. Hubo ocupaciones sustanciales en Guatemala y El Salvador, aunque quizás menos dramáticas que las que ocurrieron en México durante el porfiriato. Sin embargo, en Honduras, Nicaragua y Costa Rica, la mayoría de los campesinos vivían en las tierras bajas, así que fueron menos frecuentes los trastornos. Además, muchas plantaciones de café tenían un tamaño modesto y pertenecían a centroamericanos. Los inversores extranjeros acabaron desempeñando un papel importante en la producción cafetalera en Nicaragua a

finales del siglo XIX y los alemanes adquirieron muchos cafetales en Guatemala, pero en general su producción siguió en manos centroamericanas.

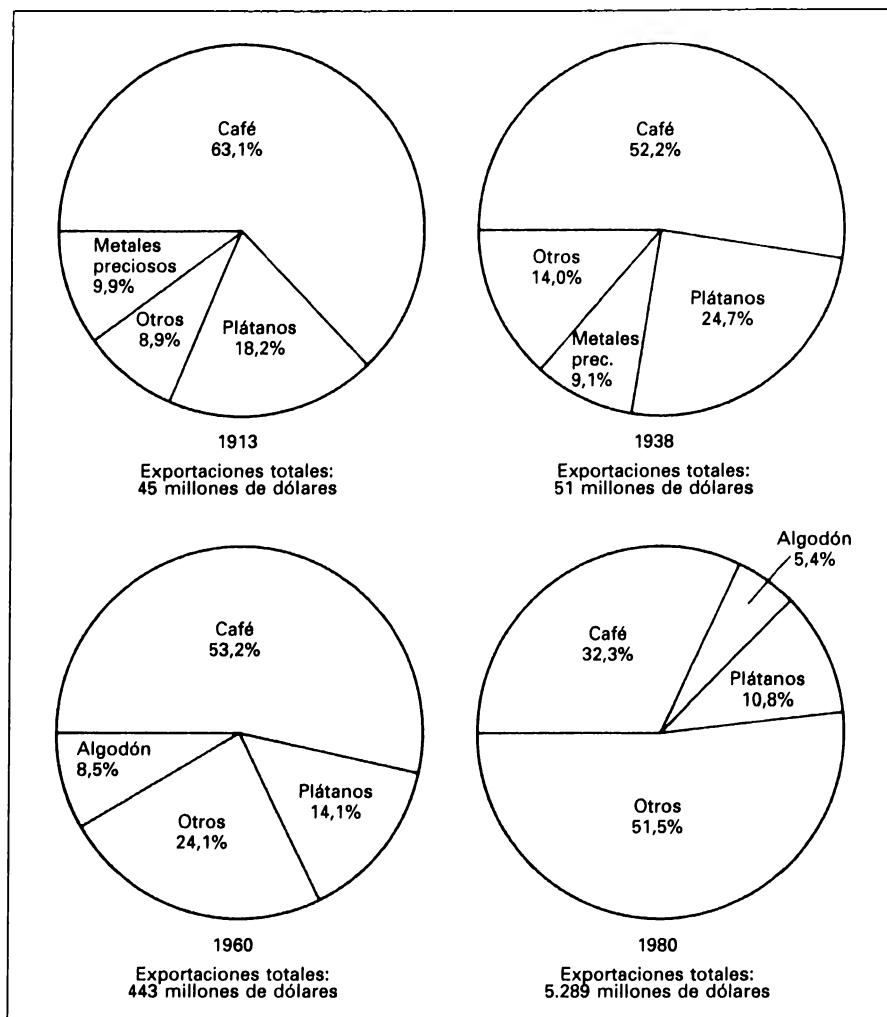
Aunque los dirigentes liberales trataron de fomentar la inmigración (más que los *científicos* de México), la región nunca recibió la impresionante afluencia de clase obrera llegada a Argentina, Brasil y Estados Unidos. La mano de obra para el cultivo del café provino más bien de los campesinos, indios y mestizos en su mayoría. Con el tiempo, se dividieron en dos grupos: los colonos, que vivían en las plantaciones y arrendaban pequeñas parcelas de tierra para realizar un cultivo de subsistencia, y los jornaleros, que trabajaban a sueldo y vivían en sus casas, donde retenían el control de algo de tierra. En ambos casos seguían manteniendo un contacto estrecho con la tierra y las perspectivas del campesinado tradicional, en lugar de forjarse una conciencia de clase como proletariado rural.

El comercio de plátanos acabaría siendo emblemático para la cultura centroamericana, pero en su comienzo fue reducido. En 1870, un capitán de barco llamado Lorenzo Baker empezó a mandar cargamentos de Jamaica a la costa oriental de Estados Unidos y en 1885 se unió con Andrew Preston para formar la Boston Fruit Company. Mientras tanto, Costa Rica había contratado al dinámico empresario ferrocarrilero Henry Meiggs para establecer la línea férrea a todo lo largo de la costa caribeña, a cambio de concesiones en tierras. Éste traspasó el contrato a dos de sus sobrinos, Minor Cooper Keith y Henry Meiggs Keith. En 1878, el primero comenzó a enviar plátanos a Nueva Orleans y pronto estableció la Tropical Trading and Transport Company.

Ambas compañías se fusionaron en 1899, nombrando a Preston presidente y a Minor Keith vicepresidente para formar una empresa singular: la United Fruit Company (UFCO). Aquí comenzó un capítulo notable de la historia de la inversión, penetración y control estadounidense en Centroamérica.

La UFCO, o la frutera, como la llamaron los centroamericanos, estableció casi un monopolio sobre la producción y distribución de plátanos. Mediante concesiones gubernamentales y otros medios, adquirió vastas extensiones de tierra en las tierras bajas caribeñas, húmedas y escasamente pobladas. Dominaba las redes de transportes mediante su conexión con Meiggs y era propietaria de una importante compañía, la International Railways of Central America. Construyó muelles e instalaciones portuarias. En 1913 creó la Tropical Radio and Telegraph Company. Poseía gran cantidad de barcos, conocidos como la «gran flota blanca», y tenía una influencia enorme sobre el mercado estadounidense. Toleró e incluso fomentó una competencia a pequeña escala, pero nunca se la desafió de forma seria en las décadas posteriores a la primera guerra mundial.

El comercio de plátanos creó economías de enclave por excelencia. Los supervisores y gerentes de la UFCO provenían de Estados Unidos, generalmente del sur, y se importaban trabajadores negros de Jamaica y las Indias Occidentales. Uno de los resultados fue alterar la composición poblacional



10.1. Principales exportaciones centroamericanas, 1913-1980. *Fuente:* Ralph Lee Woodward, Jr., *Central America: A Nation Divided*, 2.^a edición, Nueva York, Oxford University Press, 1985, pp. 277, 366. Copyright © 1985 de Oxford University Press, Inc. Publicado con permiso.

de las tierras bajas orientales; otro, crear divisiones raciales impuestas por la fuerza dentro de la frutera.

La industria se convirtió en una compañía extranjera gigantesca. Algunas tierras plataneras permanecieron en manos locales, pero la UFCO poseía el control de la tecnología, los créditos y el acceso al mercado estadounidense. Debido a las amenazas naturales de los huracanes y las enfermedades de las

CUADRO 10.1. Comercio centroamericano con Estados Unidos, 1920-1988 (en porcentajes)

	1920		1950		1988	
	Export.	Import..	Export.	Import.	Export.	Import.
Costa Rica	71	52	70	67	44	39
El Salvador	56	79	86	67	39	42
Guatemala	67	61	88	79	40	43
Honduras	87	85	77	74	49	57
Nicaragua	78	73	54	72	0,4	1,3
Panamá	93	73	80	69	50	19

Fuentes: James W. Wilkie, *Statistics and National Policy*, suplemento 3, *Statistical Abstract of Latin America*, Los Ángeles, UCLA Latin America Center, 1974, cuadro XV-3; James W. Wilkie y Peter Reich (eds.), *Statistical Abstract of Latin America*, 28, Los Ángeles, UCLA Latin American Center, 1990, cuadro 2.602.

plantas, la compañía también se propuso mantener en reserva cantidades importantes de terreno, que solía obtenerse por concesión gubernamental, hecho que requirió de la compañía su entrada en política. El cuadro era claro: la UFCO proporcionó un estímulo relativamente escaso al desarrollo económico centroamericano, pero tomó parte directa en asuntos de Estado nacionales.

El café y los plátanos dominaban la economía al terminar el siglo. Como muestra la figura 10.1, los dos productos supusieron más del 70 por 100 de las exportaciones latinoamericanas en 1913 y 1938, y casi lo mismo en 1960. La proporción disminuyó a comienzos de los años setenta, a medida que ganaron importancia el algodón y otros productos como carne, azúcar, gambas, petróleo refinado (de las instalaciones de Panamá) y manufacturas ligeras, pero los productos tradicionales siguieron manteniendo un gran peso.

Resulta evidente una conclusión: la economía centroamericana se hizo completamente dependiente de la exportación de dos cultivos comerciales, el café y los plátanos. Ahora la fortuna económica del istmo dependía casi por entero de los caprichos del mercado internacional. Cuando los precios de estos dos productos eran bajos, también lo eran los ingresos y había poco espacio para una respuesta flexible, ya que no era fácil ni rápido convertir las plantaciones para que produjeran productos alimentarios básicos (en caso de que los propietarios quisieran hacerlo, lo que no era habitual). También merece la pena destacar que el café representaba una proporción mayor de las exportaciones que los plátanos y que la UFCO no controlaba su mercado. En términos económicos estrictos, sólo Costa Rica, Honduras y Panamá eran «repúblicas bananeras». Guatemala, El Salvador y Nicaragua eran principalmente países cafetaleros.

Además, la estrategia basada en el café y los plátanos llevó al establecimiento de una fuerte dependencia de un solo socio: Estados Unidos. A fina-

les del siglo XIX y comienzos del XX, Centroamérica sostenía un floreciente comercio con Europa; de hecho, Alemania era el mayor cliente para el café. Pero tras la primera guerra mundial, Estados Unidos afirmó su supremacía. Desde los años veinte hasta los cincuenta, como muestra el cuadro 10.1, Estados Unidos compró del 60 al 90 por 100 de las exportaciones de la región y proporcionó un porcentaje similar de importaciones. Su predominio en las transacciones internacionales cayó a un 30-40 por 100 en los años setenta para la mayor parte de los países, que comerciaban más que antes entre sí y con Europa Occidental (y descendió casi a cero para Nicaragua en los años ochenta, en gran medida debido al boicot impuesto por Estados Unidos). De un modo u otro, Estados Unidos seguía manteniendo una considerable influencia comercial sobre las naciones del istmo.

El acento sobre las exportaciones agrícolas y la persistencia de economías campesinas se combinaron para desalentar la industrialización centroamericana. El tamaño reducido de los mercados nacionales presentaba otro obstáculo importante para el crecimiento industrial.

Como reconocimiento de estas dificultades, los dirigentes del istmo decidieron crear el Mercado Común Centroamericano (MCCA) en 1960. La idea era estimular el desarrollo industrial mediante una estrategia doble: promover el comercio libre entre los países miembros y crear aranceles comunes para proteger las empresas jóvenes. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua se hicieron miembros; Panamá no, debido a su estatus especial por el canal, pero expresó desde el comienzo un interés continuado en asociarse con el grupo.

→ El Mercado Común tuvo un éxito inmediato. El comercio entre los países miembros se multiplicó, creciendo del 7,5 por 100 de todas las exportaciones en 1960 al 26,9 por 100 en 1970. La manufactura floreció —en ámbitos como el equipamiento eléctrico, alimentos preparados, productos de pulpa y papel, y fertilizantes— a medida que el istmo se embarcó por el camino de la industrialización para sustituir las importaciones. Pero el MCCA hizo pocos progresos en el sector agrícola, donde las medidas proteccionistas siguieron siendo la regla, y no logró vencer el desempleo (que era de un 9,4 por 100 en 1970).

También acusó disputas políticas. Honduras había comenzado a quejarse por la distribución de beneficios a mediados de los años sesenta y abandonó el mercado tras un enfrentamiento armado con El Salvador en 1969 (descripto más adelante). Desde entonces, Honduras ha negociado después acuerdos bilaterales con los demás países —exceptuado El Salvador— pero el MCCA perdió gran parte de un impulso precioso.

A pesar de estos esfuerzos, la economía regional sigue siendo principalmente agrícola y su sociedad, rural. Alrededor de 1900 menos del 10 por 100 de la población vivía en las ciudades; en 1970 el número oscilaba entre un 20 y un 40 por 100 (comparado con el 66 por 100 de Argentina, por ejemplo, y el 61 por 100 de Chile). Incluso las mayores ciudades centroamericanas son pequeñas para los patrones internacionales. En 1970, la ciudad de Guatema-

la, la mayor con diferencia, estaba muy por debajo del millón de habitantes (731.000) y las demás capitales tenían una población que iba de los 200.000 habitantes a algo más de 400.000. La urbanización llegó tarde a esta región.

A su vez, este retraso ha producido un hecho social trascendente: Centroamérica nunca ha tenido una clase obrera urbana importante. Hay algunos trabajadores en las ciudades, por supuesto, y se han hecho esfuerzos esporádicos para su sindicalización desde los años veinte. Pero la falta de impulso a la manufactura y el tamaño reducido de las ciudades no han permitido el surgimiento de movimientos obreros semejantes a los que aparecieron en Argentina, Brasil, Chile o México. (En Nicaragua, por ejemplo, el porcentaje de población económicamente activa que pertenecía a un sindicato en 1973 llegaba a un miserable 2 por 100.) Un importante actor colectivo ha sido permanecer ausente de la escena: del mismo modo que Argentina no ha contado con un campesinado clásico, Centroamérica ha carecido de proletariado urbano.

Además, la falta de incentivo histórico a la manufactura significó que el sector agrícola nunca fuera desafiado por un sector industrial. El MCCA ayudó a dar forma y fortaleza a un grupo empresarial inexperto, pero no condujo a un asalto directo del orden social. En consecuencia, habría poco incentivo para formar la alianza populista multiclassista que con tanta frecuencia surge del conflicto sectorial (como en Argentina, donde Perón reunió a trabajadores industriales y empresarios en un ataque común a la aristocracia rural). En ausencia de una amenaza industrial, los latifundistas y campesinos, en su mayoría indios en Guatemala, se enfrentaron en el campo centroamericano. Cuando estalló el conflicto, tendería a seguir las líneas de clase. El control de la tierra sería el tema dominante.

Los grupos más activos de las ciudades centroamericanas han estado generalmente compuestos por comerciantes y profesionales de clase media: abogados, periodistas, intelectuales y estudiantes. No han demostrado mucha conciencia de clase, pero han generado algunos movimientos políticos reformistas y producido un número considerable de dirigentes políticos. A medida que ha pasado el tiempo, su papel en el Estado y la sociedad ha aumentado de forma constante.

A pesar de su crecimiento y desarrollo, las masas centroamericanas han seguido siendo pobres. Las rentas per cápita son bajas (la media rondaba los 1.100 dólares en 1992) y la riqueza está fuertemente concentrada. Como indicadores de bienestar social, los índices de alfabetización nacional revelan que en 1970 sólo el 45-60 por 100 de los adultos sabía leer y escribir en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua (Costa Rica, siempre la excepción, se aproximaba al 90 por 100). La proporción de niños (de siete a trece años) que iban a la escuela era del 70 por 100 o más en todos los países menos en Guatemala, el país mayor, donde era del 50 por 100. Pero estos porcentajes eran mucho más que compensados por la baja proporción de los adolescentes que asistían a escuelas secundarias: menos de un 20 por 100 en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y sólo del 33 por 100 en Costa

Rica. En caso de que los niños centroamericanos recibieran alguna educación, su asistencia a la escuela era generalmente breve.

Con el tiempo, este modelo de desarrollo y pobreza ejercería una presión tremenda sobre los sistemas políticos de la región. La comprensión de este proceso requiere un examen breve de la historia reciente de cada país.

Panamá: una nación y una zona

Panamá no se convirtió en república independiente hasta que terminó el siglo. Durante la década de 1880 fue provincia de Colombia; pero, debido a las pobres comunicaciones y a la distancia que la separaba de Bogotá, se había vuelto semiautónoma. Durante su permanencia en el cargo (1885-1894), el enérgico presidente de Colombia Rafael Núñez trató de reafirmar el control central, pero sólo lo logró de forma parcial. Tras su muerte, el país cayó en el desorden, y liberales y conservadores comenzaron una lucha espantosa que culminó con la guerra de los Mil Días (1899-1903). El conflicto terminó con la derrota liberal, la economía paralizada y el gobierno casi en bancarrota.

Ante estas condiciones, Panamá podría haber buscado su independencia, ya que desde hacía tiempo se sentía incómoda bajo el gobierno de Bogotá. Sin embargo, la soberanía panameña no acabaría surgiendo de un movimiento popular indígena, sino de la diplomacia de las grandes potencias y la intriga internacional.

Estaba en discusión un canal interoceánico, un sueño antiguo de Centroamérica. Los planes se remontaban al siglo XVII. En 1878, el gobierno de Colombia dio su autorización para que un grupo francés al mando de Ferdinand de Lesseps, constructor del canal de Suez, excavara una ruta a través de Panamá. Los ingenieros estadounidenses se inclinaron por Nicaragua y una compañía norteamericana recibió un contrato para comenzar los trabajos en ese país. Se había iniciado la carrera. Luego llegó el pánico financiero de 1893 y ambos grupos se quedaron sin dinero, así que abandonaron la empresa.

La opinión popular estadounidense estaba a favor de una acción valiente en América Latina. Las obras de Rudyard Kipling esparcieron la convicción profunda acerca de la «obligación del hombre blanco». La popularización de las versiones del darwinismo social ayudaron a convencer a los estadounidenses de que se hallaban entre los «más capaces» de la historia. La adquisición de Cuba y un imperio en el Pacífico mediante la guerra Hispano-Americana propiciaron el interés en posesiones distantes. Y en libros tan magistrales como *The Influence of Sea Power upon History* (La influencia del poder marítimo en la historia; 1890), el historiador y publicista Alfred Thayer Mahan sostenía con vigor que el poder naval era la clave para la influencia internacional, doctrina que requería de Estados Unidos una marina para dos océanos. Cuando Theodore Roosevelt se convirtió en presidente en 1901, era evidente que Washington daría un paso, pero ¿de qué tipo?

La política colombiana propició la solución del problema. Cuando la gue-

rra de los Mil Días estaba próxima a su fin en 1903, Washington envió tropas para sofocar el desorden de Panamá, lo que ocasionó una crisis diplomática, solventada con el Tratado Hay-Herrán, acuerdo por el que se autorizaba a Estados Unidos para construir un canal en Panamá. El Congreso estadounidense aprobó de inmediato el documento, pero el legislativo colombiano, poco dispuesto a comprometer la soberanía nacional, se negó a seguir adelante.

El paso siguiente fue la insurrección. El ingeniero jefe de De Lesseps, Philippe Bunau-Varilla, había seguido apoyando la construcción del canal y ahora vio su oportunidad. Con el pleno conocimiento de Roosevelt, Bunau-Varilla comenzó a hacer planes para que se diera una rebelión separatista en Panamá. Cuando comenzó el alzamiento, los barcos estadounidenses impidieron que las tropas colombianas cruzaran el istmo para dirigirse a la ciudad de Panamá. La revuelta fue un éxito.

En pocos días, Washington extendió el reconocimiento al nuevo gobierno soberano de Panamá y recibió a Bunau-Varilla (todavía ciudadano francés) como su representante oficial. El secretario de Estado estadounidense John Hay y Bunau-Varilla firmaron áprisa un tratado que proporcionaba a Estados Unidos el control de la zona del canal de 16 a 17 km de ancho «a perpetuidad como si estuviese bajo su soberanía». Una dócil legislatura panameña aprobó pronto el documento. Luego Bunau-Varilla y la camarilla administrativa dirigieron su atención al Senado estadounidense, donde el sentimiento pro Nicaragua seguía siendo bastante fuerte. La mañana del voto decisivo, Bunau-Varilla colocó en cada uno de los escaños de los senadores un sello de correos nicaragüense con la imagen de una erupción volcánica y el mensaje silencioso prendió. El Senado aprobó la medida por un margen de sesenta y seis a cuarenta: la suerte estaba echada.

De este modo, Panamá se convirtió en nación por un alarde de fuerza de la diplomacia. Abierto en 1914, el canal fue de inmediato una importante vía internacional y el gobierno comenzó a recibir rentas anuales constantes. La zona del canal se convirtió de facto en una colonia estadounidense, una extensión de privilegios legales y prosperidad de club campestre que resaltaba aguda y notablemente con la sociedad local. Fuera de la zona, Panamá desarrolló las características propias de Centroamérica en su conjunto: dependencia de las exportaciones agrícolas (en especial plátanos) y del mercado estadounidense, y control interno ejercido por una oligarquía latifundista muy cerrada. A pesar del Tratado Hay-Bunau-Varilla, la situación no podía durar para siempre.

En 1952, el coronel José Antonio Remón se convirtió en presidente y comenzó la renegociación del tratado de 1903. Tres años después, sus esfuerzos dieron como resultado un acuerdo que aumentaba las rentas anuales que recibiría Panamá, recortaba los privilegios económicos de los ciudadanos estadounidenses y buscaba igualar las rentas salariales de estadounidenses y panameños. Pero no se tocó la cuestión de la soberanía. Sobre vino el asunto en 1956, después de que Egipto tomara el canal de Suez. Cuando el presidente

Ricardo Arias protestó con acritud por la exclusión de Panamá de una conferencia sobre la crisis de Suez, el secretario de Estado John Foster Dulles replicó con frialdad que Estados Unidos «tenía derechos de soberanía sobre el canal de Panamá con la entera exclusión de Panamá de cualquier derecho de soberanía, poder o autoridad».

Las tensiones y consultas continuaron. En enero de 1964, los alumnos estadounidenses de la Balboa High School (en la zona del Canal) izaron sólo la bandera estadounidense, sin que la acompañara la panameña, a lo que siguieron disturbios a gran escala. Ellsworth Bunker, embajador estadounidense ante la Organización de Estados Americanos, acusó de los asaltos a la zona del canal a canalla «infiltrada dirigida por extremistas, que incluían personas entrenadas en países comunistas». El presidente panameño Roberto F. Chiari rompió las relaciones con Washington.

Los ánimos se calmaron y se reanudaron las discusiones. En 1968, el doctor Arnulfo Arias ganó unas disputadas elecciones, en una campaña que él mismo denominó «una de las más vergonzosas de la historia del país». Tras ocupar el puesto sólo once días, fue derrocado por la Guardia Nacional, que estableció el gobierno de una junta bajo el mando del general de brigada Omar Torrijos Herrera. Este hecho marcó la clara hegemonía de la Guardia en la política y llevó al surgimiento de Torrijos como hombre fuerte, quien proporcionó continuidad de liderazgo mientras negociaba pacientemente con las administraciones de Nixon, Ford y Carter.

Estados Unidos acabó aceptando un tratado que otorgaba a Panamá la soberanía completa sobre el canal en 1999. Ronald Reagan (mucho antes de asumir la presidencia) y otros conservadores estadounidenses denunciaron enérgicamente el acuerdo como «traición», pero el presidente demócrata Jimmy Carter logró obtener la aprobación del Senado. Los intelectuales y hombres de Estado de todo el mundo aplaudieron la decisión. Aunque por corto espacio, las relaciones entre Estados Unidos y América Latina tomaron un giro positivo.

Pero Panamá continuó teniendo problemas. Torrijos murió en un accidente aéreo en 1981. El 30 de julio de 1982, el presidente civil Aristides Royo renunció de forma abrupta y pasó el cargo al vicepresidente. Puso el pretexto de su mala salud, pero la mayoría de los observadores creyeron que le había echado la Guardia Nacional. El nuevo hombre fuerte fue el general Manuel Antonio Noriega, que tenía fama de estar profundamente envuelto en la corrupción que asolaba Panamá. (También había sido agente a tiempo parcial de la CIA.) El nacionalismo panameño se exaltó cuando ese gobierno se negó a renovar un acuerdo con Estados Unidos mediante el cual había operado en Panamá la School of the Americas, programa de formación dirigido y financiado por Estados Unidos para el ejército latinoamericano.

El sentimiento antiestadounidense volvió a surgir en 1988, cuando el gobierno estadounidense impuso un boicot económico en un esfuerzo por derrocar a Noriega. Al año siguiente, éste anuló las elecciones que en apariencia había ganado Guillermo Endara, líder de una «cruzada civil» opuesta al

dictador,' y Estados Unidos apretó los tornillos. En diciembre de 1989, la administración Bush despachó más de 20.000 soldados para aplastar el régimen de Noriega. La fuerza invasora se enfrentó a una resistencia fuerte pero esporádica, luego arrolló las defensas panameñas, capturó a Noriega y lo llevó a Miami, donde se enfrentaría a juicio por complicidad en el tráfico de drogas. Los mandos militares estadounidenses informaron que sólo habían perdido la vida veintitrés estadounidenses, pero habría una controversia constante sobre las bajas causadas a los panameños (los cálculos oscilan entre varios cientos y varios miles). Las pérdidas económicas originadas por la invasión quizás alcanzaran los 2.000 millones de dólares.

Muchos panameños recibieron con entusiasmo a las tropas estadounidenses, pero acabaron desencantados. Estados Unidos tardó demasiado en proporcionar ayuda económica tras su operación militar. Como consecuencia de las sanciones y de la invasión, el producto nacional bruto se redujo un 22 por 100 entre 1988 y comienzos de 1991. El desempleo superaba el 20 por 100 y el 40 por 100 de la población vivía en los límites de la pobreza. Sobrecargado y sin inspiración, Endara resultó ser un dirigente ineficaz: según las encuestas de opinión, el apoyo popular a su coalición gobernante descendió del 73 por 100 a mediados de 1989 al 17 por 100 en marzo de 1991. Un partido de oposición acusó al desvalido presidente de estar vinculado a redes de blanqueo de dinero, el mismo ataque que había utilizado Estados Unidos en primer término para justificar su invasión.

La economía panameña comenzó a recuperarse a comienzos de los años noventa, cuando las tasas de crecimiento promediaron más del 7 por 100, a la vez que Endara lograba finalmente normalizar las relaciones con los acreedores externos. No obstante, los elevados niveles de pobreza y desempleo persistieron, y los líderes de la élite tradicional recayeron en disputas partidistas. Las elecciones presidenciales de mayo de 1994 dieron un vuelco irónico a la situación al dar la victoria a Ernesto Pérez Balladares, un antiguo allegado de Noriega que sobrepasó a los numerosos candidatos (incluido el cantante de salsa Rubén Blades) apelando al extendido sentimiento de frustración. Durante la campaña Pérez Balladares distanció su persona y su partido de Noriega, reclamando en cambio el legado de Omar Torrijos, pero persistió un hecho básico: los leales a Noriega han retornado al poder. Años después de la invasión estadounidense, la política en Panamá era casi la misma.

Cuando el año 1999 comenzó a asomarse en el horizonte, la atención volvió al canal de Panamá. Aunque había pocas dudas sobre la capacidad de Panamá para administrar el canal propiamente dicho, existía una gran preocupación sobre su capacidad para mantener las instalaciones de apoyo y las propiedades anexas que tienen un costo de funcionamiento de 500 millones de dólares anuales. Ocupantes ilegales entraban en la zona del canal en un número de 300 al día, y los edificios estaban deteriorándose. Un sondeo de opinión mostraba que el 75 por 100 de los panameños preferían la continuación de la presencia militar estadounidense en el canal por razones económicas.

cas así como políticas. El gobierno de la Zona del Canal es una cuestión pendiente para Panamá, Estados Unidos y el hemisferio en su conjunto.

Costa Rica: una democracia frágil

Desde hace mucho tiempo, Costa Rica ha sido única. A pesar de su nombre, su importancia económica fue mínima para España, y al ser la zona más al sur del reino de Guatemala se encontró relativamente alejada del resto de Centroamérica. Desde el comienzo, tuvo una población escasa y nunca desarrolló una clase subordinada negra o india considerable. Tampoco contó con una rica oligarquía latifundista.

El cultivo del café comenzó en granjas modestas de tamaño familiar en la década de 1830. El floreciente comercio hizo surgir un sector medio agrícola próspero —y una clase comercial en las ciudades—, sin producir un campesinado sin tierras. La United Fruit estableció plantaciones de plátanos en la costa oriental a finales del siglo XIX y comienzos del XX, con lo que los plátanos se convirtieron pronto en la exportación seña de la país.

Por motivos económicos y demográficos, Costa Rica surgió como una sociedad homogénea en cuanto a clases y razas. En 1925, cerca de un 80 por 100 de la población era blanca, el 4 por 100 negra (en su mayoría trabajadores de las plantaciones de plátanos), el 14 por 100 era mestiza y menos de un 1 por 100 era india. La cultura de clase media prevaleció y en general no hubo conflictos raciales.

El consenso social llevó a una amplia aceptación de la política constitucional. A comienzos del siglo XX, el gobierno fomentó programas de bienestar (por lo que, de forma inevitable, Costa Rica, como Uruguay, llegó a ser comparada con Suiza). Los conservadores alternaban el poder con los liberales. No había mucho por qué pelear y la tradición democrática comenzó a echar raíces.

Luego la depresión mundial de los años treinta alimentó el descontento social. El Partido Republicano Nacional surgió como una alternativa al comunismo. La distinción entre liberales y conservadores se desvaneció y, con el apoyo de la izquierda, los republicanos ganaron las elecciones presidenciales de 1936, 1940 y 1944. Se dio cabida a un sistema de seguridad social y un código laboral progresistas.

Luego surgieron dos facciones importantes. Una fue el Partido de Unión Nacional, vehementemente anticomunista y liderado por Otilio Ulate Blanco. La otra fue el Partido Democrático Social, de centro-izquierda (pero anticomunista), organizado por el antiguo conservador José (Pepe) Figueres Ferrer. En las elecciones de 1948, ambos movimientos se unieron en una coalición contra el Partido Republicano Nacional. Hizo aparición la violencia, brotaron las disputas y Figueres asumió la autoridad. Actuando con vigor y decisión, disolvió el ejército, asignó nuevos impuestos, convocó una Asamblea Constituyente y —como ocurría por entonces en otras partes de

América Latina— proscriptió a la Vanguardia Popular comunista. La polvareda se calmó y Ulate Blanco tomó posesión del cargo en 1949.

Figueroes obtuvo la presidencia en 1952 y volvió la normalidad. Estimuló las exportaciones agrícolas y negoció un nuevo contrato con la United Fruit, por el cual la parte correspondiente a Costa Rica de los beneficios aumentaba de un 10 a un 30 por 100. Con el apoyo de Washington, resistió un levantamiento en 1955. Las elecciones de 1958 transcurrieron con normalidad. Figueres declaró tras la derrota del candidato de su partido: «Considero nuestra derrota como una contribución, en cierto modo, a la democracia en América Latina. No es costumbre que un partido en el poder pierda unas elecciones».

Los hechos que siguieron sostendrían esta afirmación. La participación de los votantes costarricenses ha superado en general el 80 por 100, una de las más altas del mundo (comparada con el 55-60 por 100 estadounidense). Y ha prevalecido la moderación: menos de un 10 por 100 de los votos han ido a candidatos extremistas de izquierda o derecha. En contraste con la mayor parte de Centroamérica, Costa Rica tiene un centro político fuerte y viable.

Los apuros económicos, como siempre, sometieron al sistema a una prueba severa. Bajo la dudosa administración de Rodrigo Carazo (1978-1982), Costa Rica acumuló una deuda externa de 4.000 millones de dólares, enorme para un país de su tamaño. La tasa de crecimiento descendió del 8,9 por 100 en 1977 a -2,4 por 100 en 1981, año durante el cual la moneda local (el colón) fue devaluada más de un 400 por 100. El desempleo ascendió a un 10 por 100 y parecía seguir subiendo.

La democracia costarricense logró sobrevivir a las terribles presiones financieras de los años que siguieron a 1982, mientras los dos partidos nacionales dominantes proseguían con su tradición de alternarse en el poder. Pero el país tuvo que pagar un alto precio por ser vecino de Nicaragua. Cuando se agudizó la guerra entre los sandinistas y la Contra, los refugiados nicaragüenses y elementos de la Contra se escondieron en Costa Rica, otra nación a la que la guerra fría centroamericana puso en peligro.

Oscar Arias Sánchez, elegido presidente en 1986, decidió afrontar estos problemas de forma directa. Con una diestra diplomacia y una determinación obstinada, persuadió a los jefes ejecutivos de los demás países centroamericanos para que se reunieran a negociar. El resultado de este proceso fueron los denominados Acuerdos de Esquipulas, que recibieron el nombre de la ciudad donde se celebró el primer encuentro, y que pedían a las naciones desgarradas por la guerra de la región que 1) iniciaran un cese el fuego, 2) entablaran el diálogo con los movimientos de oposición, 3) impidieran el uso de su territorio para iniciar agresiones contra otros estados y 4) el cese y la prohibición de la ayuda a las fuerzas irregulares o movimientos rebeldes. Estos dos últimos puntos se dirigían especialmente a Nicaragua y Estados Unidos. El acuerdo de agosto de 1987 también pedía elecciones libres y la democratización de todas las naciones de la región. Era un plan ambicioso, que parecía demasiado bueno para ser verdad, pero tenía el mérito inequívoco de

ser una solución centroamericana a sus propios problemas. En la práctica, ayudó a proporcionar cierta situación de paz a la región e hizo ganar a Arias el premio Nobel.

Las elecciones subsiguientes revelaron la persistente importancia de las familias políticas ilustres. La victoria de 1990 le tocó a Rafael Ángel Calderón, hijo de un ex presidente, y la victoria de 1994 correspondió a José María Figueres, hijo de otro ex presidente. A raíz de la crisis de la deuda de los años ochenta, Figueres trató de combinar la reforma económica con una posición progresista sobre cuestiones sociales y económicas. Multinacionales tales como Motorola y Coca Cola continuaron invirtiendo en Costa Rica y el crecimiento económico fue fuerte en general. Hacia 1993 el desempleo declarado había descendido a algo más del 4 por 100, una de las tasas más bajas en toda América. En comparación con los países vecinos de Centroamérica, Costa Rica seguía siendo una excepción.

Nicaragua: de la dinastía a la revolución

Durante gran parte de su historia, Nicaragua ha sido una prenda en manos de potencias extranjeras, sobre todo de Estados Unidos. A lo largo del siglo XIX recibió una atención incesante por parte de aventureros avariciosos, muchos de los cuales querían construir un canal, y soportó la breve pero ignominiosa presencia de William Walker. Esta pauta seguiría hasta el siglo XX.

Los ingleses cedieron la cuenca del Caribe a la esfera de influencia estadounidense en la década de 1890 y Washington no dejó pasar la oportunidad. Estados Unidos ocupó Cuba, «tomó» Panamá y estableció un protectorado en la República Dominicana. Para justificar estas y futuras acciones, Theodore Roosevelt proclamó en 1904:

Todo país cuyo pueblo se conduzca bien puede contar con nuestra amistad sincera. Si una nación muestra que sabe cómo actuar con una eficiencia y honestidad razonables en los asuntos sociales y políticos, si mantiene el orden y cumple con sus obligaciones, no debe temer la interferencia de Estados Unidos. La perfidia crónica o la impotencia que da como resultado una pérdida general de los lazos de la sociedad, sea en América o en otras partes, acaba requiriendo la intervención de alguna nación civilizada, y en el hemisferio occidental la adhesión de Estados Unidos a la Doctrina Monroe puede forzarlo, aunque se muestre reticente, en casos flagrantes de dicha perfidia o impotencia, a ejercer un poder de policía internacional.

Conocido como «Corolario Roosevelt» a la Doctrina Monroe, tenía un significado claro. Para impedir la intervención de Europa, Estados Unidos podía intervenir en América Latina a discreción.

Nicaragua pronto descubriría lo que significaba esa máxima en la práctica. Washington había terminado aborreciendo a José Santos Zelaya, el dictador liberal que había resistido firmemente el control extranjero en las ne-

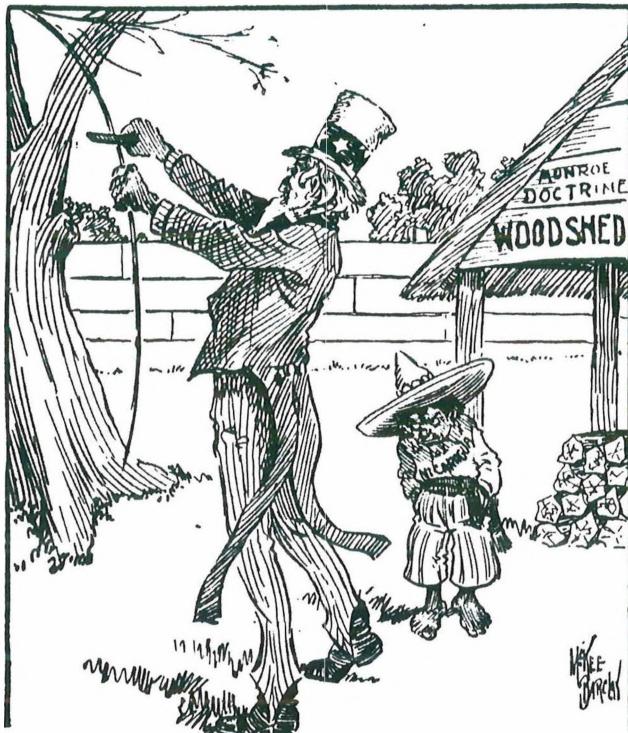
gociaciones sobre la ruta del canal. En 1909, ordenó la ejecución de dos aventureros estadounidenses. El secretario de Estado Philander C. Knox lo denunció como «un borrón en la historia de este país» y expulsó al embajador nicaragüense de Estados Unidos. A continuación apoyaron una revuelta contra Zelaya, que se vio obligado a renunciar.

Siguió el caos financiero. Los acreedores europeos comenzaron a demandar el pago de sus deudas. Desesperado, el nuevo presidente, el conservador Adolfo Díaz, pidió a Estados Unidos que enviara ayuda militar para proteger sus intereses económicos de la amenaza de la guerra civil y que «extendiera su protección a todos los habitantes de la república». Citando la declaración de Roosevelt, el presidente William Howard Taft envió a los marines. Un plan para la recuperación financiera obtuvo una garantía de un conglomerado bancario de Nueva York, que recibió el control del banco nacional y el sistema de ferrocarriles como fianza por su inversión. Desde el punto de vista político y económico, Nicaragua se convirtió en un auténtico protectorado de Estados Unidos.

Esta condición duró hasta 1933. A mediados de 1920 surgió una disputa sobre la sucesión presidencial. Estados Unidos impuso al leal Adolfo Díaz y aceptó supervisar las elecciones siguientes. Como resultado de este compromiso, un liberal llamado Juan Bautista Sacasa obtuvo la presidencia en 1932 y pidió la retirada de las tropas estadounidenses. Los banqueros neoyorquinos ya habían recobrado su inversión y Franklin Delano Roosevelt estaba a punto de proclamar la política de la «Buena Vecindad». En 1933 los marines abandonaron Nicaragua.

Pero un activista liberal, Augusto César Sandino, se negó a respetar el acuerdo de finales de los años veinte. Patriota ferviente, nacionalista y socialista moderado, había emprendido una campaña guerrillera contra la intervención estadounidense y los colaboracionistas nicaragüenses. Consiguió un amplio respaldo popular, pero Estados Unidos temía la presencia de izquierdistas entre sus seguidores. Los marines estadounidenses se unieron a la campaña orquestada contra él, pero consiguió una y otra vez eludir a sus perseguidores. Cuando las fuerzas estadounidenses ya habían abandonado el país, Sandino continuó luchando. Consideraba que la Guardia Nacional, entrenada por Estados Unidos, era la mayor amenaza para la independencia nicaragüense. Ahora ésta y los sandinistas competían ferozmente para influir sobre el gobierno. Una vez que Sacasa se halló bien instalado en la presidencia, Sandino aceptó asistir a una reunión para intentar alcanzar un acuerdo de paz. Cuando dejaba el palacio presidencial, Sandino y dos generales que lo apoyaban fueron apresados por la Guardia Nacional y ejecutados de inmediato. Héroe nacional genuino, ahora también se convirtió en un mártir.

El poder político no residía en el sistema electoral, sino en la Guardia Nacional, fuerza de policía interna creada durante la ocupación estadounidense. A su cabeza estaba el general Anastasio (Tacho) Somoza García, tirano ambicioso y despiadado que había dado la orden de ejecutar a Sandino.



La mayoría de los estadounidenses aceptaron la afirmación de que el protectorado de Estados Unidos sobre Nicaragua se justificaba por el «Corolario Roosevelt» para la Doctrina Monroe; la leyenda original de esta caricatura decía: «Cortando una vara para un niño malo». (McKee Barclay, *Baltimore Sun*, 1910. Cedida por The Baltimore Sun.)

Acabó derrocando a Sacasa y ocupando la presidencia en 1937. Así comenzó el régimen somocista.

Siendo un astuto político, Somoza obtuvo el respaldo de diferentes fuentes: de la Guardia Nacional a la que fomentó y protegió, de la élite terrateniente con cuyos miembros formó numerosas asociaciones, y de Estados Unidos, cuya estructura de poder político sabía manipular muy bien.

Amasando una fortuna enorme para él y su familia, Somoza promovió el crecimiento económico de Nicaragua y cultivó la ayuda estadounidense. Un asesino lo hirió en 1956 y fue trasladado de inmediato a un hospital de la zona del canal, controlada por Estados Unidos. Siempre agradecido por su anticomunismo rabioso, el presidente Eisenhower envió a su cirujano personal para tratar de salvar la vida del dictador. A pesar de todo, Somoza murió.

La empresa familiar perduró. El hijo mayor, Luis Somoza Debayle, tomó el mando y fue elegido presidente con una mayoría del 89 por 100 en 1957.

Un colaborador fiel de la familia, René Schick, asumió el cargo en 1963. Cuatro años después, Luis Somoza murió de un ataque al corazón. Entonces el poder pasó a Anastasio Somoza Debayle, licenciado de West Point y, como su padre, jefe de la Guardia Nacional. Egoísta, despiadado y corrupto, sujetó al país con un gobierno férreo, pero ofendió a los nicaragüenses sensatos con sus excesos. Se rumoreó, por ejemplo, que había obtenido grandes beneficios económicos con la reconstrucción de Managua tras el devastador terremoto de 1972.

La ausencia completa de instituciones representativas significó que la oposición a Somoza sólo pudiera tomar una forma: la resistencia armada. En los años sesenta, emergió el movimiento guerrillero, que acabaría formado por tres grupos importantes. El primero, conocido como la Guerra Popular Prolongada (GPP), se formó a comienzos de los años sesenta entre los campesinos del norte montañoso. El segundo era los Proletarios, que se separaron de la GPP en 1973 para llevar el movimiento a los obreros y en especial a los intelectuales de las ciudades. El tercero era los Terceristas, grupo no marxista y moderado en política dirigido por Edén Pastora, renombrado por sus hazañas militares como el legendario «Comandante Cero». Tomando el nombre de Augusto César Sandino, todos los movimientos se combinaron para formar el Frente Sandinista de Liberación Nacional (nombre del grupo central desde 1961).

Tras un año y medio de lucha, el régimen somocista se derrumbó de improviso en 1979, del mismo modo que se había entregado Batista en Cuba dos décadas antes. A salvo en su exilio de Miami, Somoza culparía a fuerzas más allá de su control. «El pueblo nicaragüense no me ha derrocado. He sido derrocado por una conspiración internacional que hoy cuenta con una mayoría de comunistas y desea que Nicaragua sea un país comunista.» Más tarde encontró la muerte a manos de asesinos en Paraguay.

Una vez en el poder, los sandinistas proclamaron dos amplios objetivos políticos. Uno era una política exterior «independiente y no alineada», lo que significaba que ya no se someterían a Estados Unidos. El otro preveía la creación de una «economía mixta» para lograr la justicia socioeconómica.

La revolución tuvo unos inicios prometedores. El presidente Carter invitó a los dirigentes nicaragüenses a la Casa Blanca, envió 8 millones de dólares como ayuda de urgencia a Managua y consiguió una autorización adicional del Congreso para un paquete de ayuda de 75 millones de dólares. Su tarea interna se vio facilitada por la magnitud de la fortuna de la familia Somoza, que incluía cerca de un 20 por 100 de la tierra cultivable del país. El gobierno revolucionario nacionalizó estas posesiones e inició una reforma agraria sin tenerse que enfrentar a la oposición intransigente de una aristocracia latifundista atrincherada.

Los revolucionarios nicaragüenses pronto atacaron los mismos problemas sociales cuya resolución había hecho famosos a los cubanos, como el analfabetismo, una medicina preventiva inadecuada y una formación profesional y educación superior insuficientes. Nicaragua recibió aproximadamen-

te a 2.500 cubanos (el número fue supervisado con cuidado por la CIA y el Departamento de Estado), médicos, enfermeros, maestros y especialistas en salud pública, para ayudar al gobierno revolucionario a mejorar las condiciones de vida básicas. También llegó personal del ejército, la policía y el servicio de información cubanos para ayudar a consolidar el régimen contra los ataques contrarrevolucionarios del interior y el exterior, que los sandinistas (y cubanos) estaban seguros de que se producirían.

Los nicaragüenses también solicitaron auxilio de Estados Unidos, que respondió en 1980 con su programa, muy modesto, de 75 millones de dólares. De Europa Occidental llegó una colaboración financiera mucho más importante, en especial de Alemania Occidental, Francia y España. Los soviéticos, por otro lado, no ofrecieron créditos en divisa fuerte. Por ello, los nicaragüenses parecieron tener más oportunidad que Cuba en 1959-1961 de evitar el comercio exclusivo y la dependencia financiera de un bloque ideológico.

Sin embargo, la euforia nicaragüense no duró mucho. En Estados Unidos, la plataforma electoral del Partido Republicano de 1980 deploró formalmente «el dominio marxista sandinista de Nicaragua» y la administración Reagan comenzó desde entonces una campaña persistente para socavar al gobierno sandinista. Estados Unidos lanzó un embargo comercial contra Nicaragua, con lo que empujó a los sandinistas a aumentar su dependencia de Cuba y la Unión Soviética. Quienes no pertenecían al frente desaprobaban enérgicamente la naturaleza del régimen nicaragüense. Los sandinistas controlaban a las claras la policía, el ejército y casi todos los puestos ejecutivos. Habían cerrado la práctica totalidad de los medios informativos de la oposición. Por otro lado, la mayor parte de la tierra y el sector de servicios permanecían en manos privadas, funcionaban los partidos de oposición y las multinacionales extranjeras (como Esso) continuaban operando. Al menos Nicaragua resultaba más abierta que Cuba, y no por coincidencia, ya que Fidel había instado a los sandinistas para que no repitieran su error de romper por completo con el mundo capitalista.

El movimiento constante de los sandinistas hacia el modelo cubano se vio acelerado por los ataques de la Contra, ejército de exiliados fundado por Estados Unidos bajo el mando de antiguos oficiales somocistas, junto con algunos antisomocistas desilusionados con el gobierno sandinista. Aunque la Contra acosaba al régimen, no pudo tomar y conservar blancos importantes dentro de Nicaragua. Sin embargo, forzó al gobierno a gastar la mitad de su presupuesto en defensa y a enajenarse a sus ciudadanos con medidas de tiempos de guerra. En parte como resultado de estos factores, la economía cayó en picado. La producción descendió un 4 por 100 en 1987 y un 8 por 100 en 1988, al mismo tiempo que la inflación alcanzó el nivel espectacular del 33.000 por 100.

En este contexto, se celebraron las elecciones de febrero de 1990. Con Daniel Ortega como candidato, los sandinistas anticipaban confiados la victoria. Su adversaria era Violeta Barrios de Chamorro, viuda de un distinguido anti-

somocista y dirigente de una coalición de oposición fragmentada (UNO). La mayoría de los sondeos de votos anunciaron que la delantera de Ortega se pronunciaba a medida que se acercaban las elecciones. Luego llegaron los sorprendentes resultados: la UNO obtuvo el 54,7 por 100 de los votos, contra el 40,8 por 100 de los sandinistas. A instancias de Jimmy Carter (presente como observador internacional), Ortega pronunció un amable discurso de cesión. Para sorpresa casi universal, la oposición se preparó para tomar el poder.

Chamorro proclamó el fin de la lucha y, en su toma de posesión, anunció una «amnistía incondicional» para los crímenes políticos y el fin del alistamiento. Sin embargo, no fue capaz de ampliar su base política. Con una fuerte representación en la Asamblea Nacional, los sandinistas pudieron impedir la reforma de la Constitución; también continuaban controlando las fuerzas armadas y otras instituciones clave, incluidos los sindicatos. Chamorro también tuvo que negociar con antiguos contras descontentos que insistían en sus derechos a la tierra. Antonio Lacayo, su yerno y principal consejero, inspiraba desconfianza en muchos círculos. Asolada por la guerra, Nicaragua estaba resultando difícil de gobernar.

La inestabilidad y la incertidumbre prevalecieron durante los inicios de los años noventa. Auxiliados por casi 900 millones de dólares en ayuda internacional directa y más de 200 millones en deudas declaradas incobrables, el equipo de economistas de Chamorro lograron rebajar la inflación, pero el crecimiento global se mantuvo lento. El desempleo se elevó del 12 por 100 en 1990 al 22 por 100 en 1993 (y el subempleo otro 28 por 100). Ahora conocidos como «recontras», los antiguos contras se enzarzaron en escaramuzas esporádicas con los sandinistas desmovilizados, conocidos como los «recampas», pero ambas partes aceptaron un acuerdo de paz en abril de 1994. (A veces se unieron en una causa común, como en los esfuerzos para lograr beneficios apropiados para los ex combatientes en general.) Los choques ocasionales continuaron no obstante ya que el gobierno nacional se mostró incapaz de mantener el orden en el campo.

Las actuaciones políticas comenzaron a centrarse en las inminentes elecciones de 1996. Una serie de reformas constitucionales en febrero de 1995 redujo el periodo presidencial de seis a cinco años, prohibió la reelección inmediata, y —en un intento de frustrar al ambicioso Lacayo, así como de impedir un régimen dinástico— prohibió al presidente ser sucedido por un pariente cercano. Tanto el FSLN como la UNO comenzaron a descomponerse y en ese agitado contexto el clan Somoza (representado por tres hermanos) comenzó a preparar su retorno político. Desanimados por años de conflicto militar y penuria económica, muchos nicaragüenses comenzaron a ver a la familia Somoza como el mal menor. Al expresar una severa crítica a los sandinistas, un trabajador de mediana edad discurría: «Somoza era diez veces mejor que esos ladrones. Sí, él robaba. Pero nuestra deuda externa era de 1.000 millones de dólares después de cincuenta años de Somoza, y una década después era de 12.000 millones y no vemos nada que nos haya reportado ningún fruto. Así que pregunto: ¿quién es el más ladrón?».

Honduras: el gobierno de los militares

Honduras ha experimentado la transición de menor profundidad entre todas las repúblicas centroamericanas. Las rivalidades entre los partidos Liberal y Conservador han persistido hasta mediados del siglo xx, la agitación popular ha sido mínima y el poder ha permanecido en manos de una alianza triangular: latifundistas, inversores extranjeros (principalmente la United Fruit) y el ejército. Debido a su debilidad política y económica, ha resultado especialmente vulnerable a la influencia exterior. Sigue siendo, en muchos aspectos, el estereotipo de una «república bananera».

Su historia revela, con una claridad meridiana, un hecho fundamental de la vida política centroamericana: el surgimiento del ejército como una casta autónoma y como árbitro supremo de los asuntos nacionales. Allí, como en otras partes del istmo, la carrera en las fuerzas armadas (o la Guardia Nacional) ofrecía a los ladinos de clase media la oportunidad de ascender en la escala social. La tierra ya estaba controlada por la aristocracia, las universidades eran restrictivas y apenas había desarrollo industrial: un joven ambicioso de orígenes humildes casi no tenía otra alternativa. Como resultado, los reclutas y cadetes se sentían muy orgullosos del honor y la dignidad del ejército como institución, y los oficiales tendían a mirar por encima del hombro a políticos y civiles. Hasta tal punto, que las fuerzas armadas permanecieron al margen de la sociedad civil, pero su consentimiento (si no apoyo) era esencial para la supervivencia de toda coalición política.

La figura señera de Honduras a comienzos del siglo xx era Tiburcio Cárdenas Andino, a cuyo Partido Nacional de orientación conservadora le impidieron tomar la presidencia en 1923. Tras cierta disputa, se permitió gobernar al candidato de Cárdenas hasta 1929, cuando los liberales recobraron el cargo. En 1932 el mismo Cárdenas obtuvo la presidencia y se mantuvo en ella hasta 1948.

En 1957, un grupo de oficiales jóvenes supervisó la elección del doctor Ramón Villeda Morales, liberal progresista que se convirtió en un partidario franco de John Fitzgerald Kennedy y la Alianza para el Progreso. Pero los mandos veteranos se resintieron de sus tendencias reformistas y en 1963 le despidieron en favor del dirigente de las fuerzas armadas Oswaldo López Arellano, que gobernó hasta 1975 (cuando un golpe militar lo derrocó).

Los militares retuvieron el control hasta 1981. En parte como consecuencia de la presión internacional, sobre todo de Estados Unidos, se celebraron elecciones bastante abiertas ese mismo año. El candidato del Partido Liberal, Roberto Suazo Córdova, obtuvo el 54,1 por 100 de los votos; los militares decidieron aceptar el resultado. Hasta nuevo aviso, al menos, Suazo tuvo la oportunidad de gobernar, y en 1985 unas elecciones pacíficas llevaron al triunfo de otro candidato del Partido Liberal, José Azcona Hoyo.

Las refriegas con los países vecinos han desempeñado un papel importante en la historia hondureña. Durante los años sesenta, por ejemplo, las

tensiones con El Salvador aumentaron de forma constante. Habían existido antiguas disputas fronterizas, aunque de poca importancia, pero el motivo principal de los problemas era económico: El Salvador estaba densamente poblado, con aproximadamente 240 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que Honduras sólo tenía 34 aproximadamente. En consecuencia, los salvadoreños comenzaron a buscar trabajo y tierra en Honduras y los hondureños, como es de comprender, se resintieron de su presencia. Una ley de 1963 prohibió a las compañías emplear más de un 10 por 100 de extranjeros (es decir, salvadoreños) y un decreto de 1968 impidió que los salvadoreños pudieran escriturar tierras hondureñas.

La violencia hizo erupción en ambas capitales en 1969, cuando los equipos de fútbol nacionales jugaron una ronda eliminatoria de la Copa Mundial. El antagonismo alcanzó tal punto que el tercer partido, que era definitivo, tuvo que jugarse en México. El Salvador ganó la contienda y algunos hondureños frustrados atacaron a los residentes salvadoreños de Tegucigalpa y otras ciudades. El Salvador rompió las relaciones diplomáticas y pidió satisfacciones. Lo mismo hizo Honduras. El caso se dirigió a la OEA cuando El Salvador declaró que aviones hondureños habían efectuado bombardeos en su territorio.

Mientras el mundo observaba asombrado, la denominada «guerra del fútbol» comenzó en serio y duró dos semanas. En un sentido, arrojó luz sobre la función política del deporte organizado en la sociedad latinoamericana. En otro, reveló la hostilidad y rivalidad latentes entre las repúblicas centroamericanas.

La geografía hizo inevitable que Honduras se viera arrastrada a la guerra de la Contra patrocinada por Estados Unidos contra los sandinistas. Estados Unidos transformó de inmediato a Honduras en un enclave de lanzamiento para los ataques de la Contra a Nicaragua. El terreno se vio pronto salpicado con pistas de aterrizaje, almacenes de provisiones y campamentos base para las tropas de la Contra. Miles de unidades regulares estadounidenses y de la Guardia Nacional se turnaban el servicio en Honduras y la economía estaba inundada por la afluencia de cientos de millones de dólares. Todas estas actividades reforzaron el poder de los militares hondureños.

El gobierno civil sobrevivió, al menos nominalmente, cuando Rafael Leonardo Callejas asumió la presidencia en 1990 en una serena transferencia de poder. Las elecciones de 1993 favorecieron a Carlos Roberto Reina, del Partido Liberal, que luchó para corregir la decadencia económica. Su mayor desafío político provino de las fuerzas armadas, que se resistían a los esfuerzos del presidente por tomar medidas enérgicas contra la colusión de los militares con los narcotraficantes internacionales. Para protestar contra las investigaciones sobre presuntos abusos de los derechos humanos, el ejército envió tanques a las calles de Tegucigalpa en agosto de 1995. El despliegue de poder habló por sí mismo.

El Salvador: de la estabilidad a la insurgencia

El control oligárquico acabó prendiendo en El Salvador durante el siglo XIX. En 1863, Rafael Carrera lanzó una invasión desde Guatemala e impuso a un conservador de su elección, pero los liberales contaron con una revuelta exitosa en 1871. En la década de 1880, se prohibió por decreto legal que las comunidades indias pudieran mantener la propiedad colectiva de la tierra y, de este modo, se pavimentó el camino para su usurpación y la consolidación de una diminuta aristocracia, las famosas «catorce familias» (que han aumentado de número y tamaño). El café se convirtió en el principal cultivo para la exportación, el comercio floreció y de 1907 a 1931 el poder político permaneció en manos de una sola familia, el clan patriarcal Meléndez.

Los campesinos no lo aceptaron pasivos. Enfurecidos por la pérdida de la tierra, organizaron cuatro revueltas diferentes entre 1870 y 1900. Los movimientos fueron aplastados, pero dejaron un mensaje: como los zapatistas de México, los campesinos de El Salvador estaban dispuestos a luchar por sus derechos.

La coalición gobernante de oligarcas cafetaleros, inversores extranjeros y mandos militares —y prelados de la Iglesia— permaneció durante todos los años veinte. La quiebra de 1929 tuvo repercusiones severas para el país, ya que a los pequeños cultivadores independientes y a los trabajadores de las plantaciones les afectó mucho la caída de los precios del café. En 1931, un agregado militar estadounidense, el comandante A. R. Harris, completó el siguiente informe:

Parece no haber nada entre los coches caros y las carretas de bueyes con su ocupante descalzo. Prácticamente no existe clase media entre los muy ricos y los muy pobres. Cerca del 90 por 100 de la riqueza del país pertenece al 0,5 por 100 de la población. Treinta o cuarenta familias poseen casi todo lo que hay en el país. Viven en un esplendor regio [mientras] el resto no tiene prácticamente nada. Podría retrasarse una revolución socialista o comunista en El Salvador algunos años, diez o incluso veinte, pero cuando llegue, será muy sanguinaria.

No tardaría tanto.

El primero de mayo de 1930, una muchedumbre de 80.000 personas se manifestó en el centro de San Salvador contra el deterioro de los salarios y las condiciones de vida. Al año siguiente, un terrateniente idealista y admirador del Partido Laborista inglés, Arturo Araujo, ganó las elecciones presidenciales con el respaldo de estudiantes, campesinos y obreros. De forma algo cándida, anunció que se permitiría al Partido Comunista Salvadoreño tomar parte en las elecciones municipales de diciembre de 1931. Exasperadas por esta perspectiva, las fuerzas armadas le separaron del cargo el 2 de diciembre e impusieron al general de derechas Maximiliano Hernández Martínez.

Los campesinos se alzaron en rebelión. A finales de enero de 1932, cuando una cadena de volcanes hizo erupción en Guatemala y en el norte de El Salvador, bandas de indios armados con machetes dejaron las cañadas y los cerros para dirigirse a los pueblos de la región. Encabezados por Agustín Farabundo Martí, comunista devoto que había combatido al lado de Sandino en Nicaragua, los campesinos asesinaron a algunos latifundistas y sumergieron al país en un estado de revuelta.

Hernández Martínez respondió con ferocidad. Desplazó unidades militares contra los rebeldes y el conflicto tomó la apariencia de una guerra racial, ya que los indios —o cualquiera que lo pareciese— sufrieron los ataques del gobierno. En el diminuto país de 1,4 millones de habitantes, entre 10.000 y 20.000 salvadoreños perdieron la vida.

Los acontecimientos de 1932 enviaron varios mensajes. Los campesinos aprendieron a desconfiar de los revolucionarios criados en la ciudad, que los conducían a la destrucción. Los indios comenzaron a buscar su salvación despojándose de hábitos y ropas indígenas. En el ámbito político, la izquierda concluyó que podían seguir cultivando su apoyo en las zonas rurales, sobre todo porque no existía una alternativa reformista. La derecha extrajo su propia conclusión: la represión era el modo de tratar la agitación popular.

Hernández Martínez, simpatizante del protofascismo y uno de los primeros en reconocer el régimen de Franco en 1936, permaneció en el cargo hasta 1944. Los oficiales del ejército tomaron el poder con el consentimiento y la bendición de las catorce familias, y el comandante Óscar Osorio dirigió una dictadura moderada de 1950 a 1956. En 1960, el sucesor que había elegido personalmente, el coronel José María Lemus, fue derrocado por un grupo de civiles y militares de tendencia ligeramente izquierdista, bajo el mando del coronel César Yanes Urias. Justo un año después, éste fue destituido por la derecha encabezada por el teniente coronel Julio A. Rivera, cuyo Partido de Conciliación Nacional (PCN) se hizo con el control del Estado. Esta alianza de conservadores y mandos militares gobernaría incontestada hasta finales de los años setenta.

Finalmente, José Napoleón Duarte, fundador del Partido Demócrata Cristiano (PDC), acabó presentando un desafío. Como alcalde de San Salvador (1964-1970), el dinámico y elocuente Duarte consiguió un amplio respaldo entre los intelectuales, profesionales y otros sectores urbanos de clase media. El PDC representaba un compromiso de reforma pacífica por medios electorales. A pesar de que es posible que Duarte ganara las elecciones presidenciales de 1972, los militares recalcitrantes hicieron caer el poder sobre uno de los suyos, el coronel Arturo Armando Molina. Duarte fue encarcelado, torturado y exiliado, pero no abandonó.

Mientras tanto, las condiciones empeoraban para los campesinos. Las exportaciones de café prosperaban, pero los pobres sufrían. Alrededor de un 80 por 100 de la población vivía en el campo y en 1975 cerca de un 40 por 100 de los campesinos no tenían tierra, en comparación con el 12 por 100 de 1960. Cada vez más impotentes para acceder a la tierra, los campesinos estaban listos para rebelarse.

La opción orientada a la reforma fue desapareciendo de forma gradual durante los años setenta. El primer intento tomó el camino electoral en 1972, pero fue derrotado por los militares. El paso siguiente conllevo la formación de «organizaciones populares», grupos apolíticos que buscaban rutas de cambio no violentas. Organizados a veces por exiliados como Duarte, encontraron respaldo y estímulo en una institución revitalizada: la Iglesia católica y romana.

Sin duda, el despertar de la Iglesia ha sido uno de los procesos más decisivos en El Salvador contemporáneo. La tendencia se remonta a dos acontecimientos: El Concilio Ecuménico Segundo de comienzos de los años sesenta (Vaticano II) y la conferencia de los obispos latinoamericanos celebrada en Medellín, Colombia, en 1968. Ésta, en particular, denunció el capitalismo y el comunismo como afrontas iguales a la dignidad humana y culparon del hambre y de la miseria a los ricos y poderosos. Para remediar estas desigualdades, los obispos pidieron más educación, un aumento de la conciencia social y la creación de comunidades de base, es decir, comunidades cristianas de doce a quince personas cada una.

Estos hechos tuvieron un profundo impacto sobre la jerarquía eclesiástica salvadoreña, entonces encabezada por el arzobispo Óscar Arnulfo Romero. Como explicó con firmeza un sacerdote:

No es comunismo hacer que los campesinos conozcan el derecho a organizarse y defenderse. Tienen derecho a defender sus intereses y a promover el orden político de su elección, a defender sus derechos de forma efectiva, a denunciar el abuso de las autoridades o agentes de los poderosos. Es simplemente obedecer el mandato del Evangelio, un deber que la Iglesia no debe rechazar o eludir.

Cuando aumentó la represión, la Iglesia acabó reconociendo, en las propias palabras de Romero, «la condición para la insurrección cuando todos los recursos a medios pacíficos se han agotado». Nadie fue inmune a la violencia: en 1980, el mismo arzobispo fue asesinado de un disparo en la catedral de San Salvador.

Sin embargo, la realineación de la Iglesia salvadoreña tenía implicaciones de largo alcance. Las demás partes de la coalición de élite siguieron juntas: las catorce familias, el ejército y el sector exterior. Pero la Iglesia —o al menos un sector influyente de ésta— había desertado de la alianza y había dado su apoyo a las masas, lo que alteraba la estructura de poder.

Las organizaciones populares seculares y religiosas se enfrentaron a una represión continua a mediados de los años setenta. Las fuerzas armadas controlaron cuidadosamente las elecciones de 1977, que llevaron a la presidencia al general Carlos Humberto Romero. Uno de sus actos más significativos fue propiciar una «ley para defender y garantizar el orden público».

La fase siguiente del deterioro del sistema político comenzó en octubre de 1979, cuando un grupo de jóvenes oficiales del ejército derrocaron a Ro-

mero y establecieron un nuevo gobierno. Las perspectivas parecieron prometedoras al principio. La junta buscó el respaldo de las «organizaciones populares». Dado su compromiso con los derechos humanos, la administración Carter recibió el régimen con placer y alivio.

Luego las cosas tomaron un giro hacia lo peor. La represión gubernamental persistió y los asesinatos continuaron a un promedio de 1.000 por mes. Los cálculos periódicos provenían de la Iglesia y los grupos de derechos humanos, que trataban de supervisar la matanza. El gabinete dimitió en protesta, pero el ministro de Defensa, el general José Guillermo García, se mantuvo en su cargo. El ala liberal del Partido Demócrata Cristiano abandonó la coalición. Con una apariencia conservadora innegable, el aca-sado Duarte tomó la dirección del gobierno y anunció un plan de reforma agraria.

En esos momentos la oposición se movía en la clandestinidad. Un grupo, el Frente Democrático Revolucionario, era liderado por Enrique Álvarez, ministro de Agricultura en la primera junta tras octubre de 1979. Otro elemento clave era el Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí (FMLN), que recibía su nombre del dirigente del alzamiento de 1932. En noviembre de 1980, Álvarez y cinco máximos colaboradores fueron abatidos por fuerzas gubernamentales, acto que eliminó todo un cuadro de políticos reformistas. Guillermo Ungo pasó a reemplazar a Álvarez, pero la causa de la reforma moderada había sufrido un golpe devastador. La oposición guerrillera al régimen fue aumentando su matiz radical.

Al mes siguiente, cuatro mujeres estadounidenses, tres monjas y una trabajadora seglar, encontraron una muerte brutal. La administración Carter protestó enérgicamente y Duarte prometió una investigación. A comienzos de 1981, la administración Reagan, más preocupada por el anticomunismo que por el cambio social o los derechos humanos, suavizó las demandas estadounidenses. A mediados de 1982, se implicó en el crimen a unos cuantos miembros de la Guardia Nacional de bajo rango, pero no hubo un procesamiento serio. De este modo, el régimen sobrevivió al furor internacional.

No obstante, Washington presionó para que se celebrasen elecciones a comienzos de 1982. Se trataba de elegir una Asamblea Constituyente que a su vez nombrara un presidente interino, pero la campaña presentaba signos ominosos. Al frente de la derecha se hallaba un feroz ex comandante, Roberto d'Aubuisson, a quien Robert White, antiguo embajador estadounidense, había llamado «asesino patológico». Conocido como «Comandante Bob» por sus admiradores, D'Aubuisson resumía su plataforma con un lema de campaña: «Otro 32», que significaba que había llegado el momento de que El Salvador repitiera la matanza de 1932. El centro, o centro-derecha, lo representaba Duarte y los democristianos semiconservadores. Por su parte, el Frente Democrático Revolucionario —y la izquierda en general— decidió boicotear las elecciones. Ungo y sus portavoces sostuvieron que en esa atmósfera de violencia era muy probable que mataran a los candidatos de izquierda, se intimidara a los votantes y de todos modos el ejército manipula-

ría los resultados. En consecuencia, las elecciones se convirtieron en una contienda entre la derecha política y los restos desmoronados del centro.

La participación de votantes fue notablemente elevada, si pueden creerse las estadísticas oficiales, y los resultados dieron el poder a la derecha. Los democristianos de Duarte obtuvieron el 35,3 por 100 de los votos, o veinticuatro de los sesenta escaños de la Asamblea Constituyente. El partido de D'Aubuisson, la Alianza Republicana Nacional (ARENA), consiguió un 25,7 por 100, o diecinueve escaños, pero logró formar una coalición efectiva con otros grupos de la derecha y se hizo con el control de la Asamblea.

En Washington se habían puesto muchas esperanzas en que Duarte, titulado por Notre Dame y favorito de los responsables políticos estadounidenses, llevara a la práctica programas reformistas capaces de recortar el apoyo de las guerrillas marxistas-leninistas. En la práctica, resultó menos efectivo en San Salvador que en Washington. Los miembros del FMLN eran muy disciplinados y estaban profundamente atrincherados en zonas que habían controlado durante años. El gobierno de Duarte redistribuyó partes sustanciales de tierra cultivable, pero no pudo desplazar a la oligarquía que había hecho que la brecha de El Salvador entre ricos y pobres fuera de las peores del Tercer Mundo.

La opinión pública estadounidense se convirtió en un factor importante para El Salvador, pues a comienzos de 1983 Estados Unidos proporcionó 205 millones de dólares en ayuda económica y 26 millones en asistencia militar, y había peticiones más elevadas pendientes en el Congreso. Pocos observadores dudaban de que sin esa ayuda el régimen salvadoreño se derrumbaría. Pero empezó a aumentar la oposición a esta ayuda entre los congresistas liberales y grupos religiosos, en especial la Iglesia católica, que seguía encendida por el asesinato en 1980 de las cuatro mujeres católicas estadounidenses. La intensidad de este sentimiento en contra podía verse en las pegatinas de los parachoques, que decían: «El Salvador es Vietnam en español».

La batalla continuó en el campo salvadoreño. Las guerrillas del FMLN hacían incursiones periódicas. Ayudadas por «entrenadores» militares estadounidenses (no se los llamó «consejeros» para evitar la asociación con Vietnam), las fuerzas gubernamentales llevaron a cabo vastas misiones de búsqueda y destrucción. Los habitantes de los pueblos y los campesinos empezaron a temer a ambos bandos. Una década de lucha parecía haber llegado a un punto muerto y haber conducido a la pérdida de 75.000 vidas humanas.

Las elecciones presidenciales de marzo de 1989 llevaron al triunfo decisivo de ARENA y Alfredo Cristiani con un 53 por 100 de los votos. Muchos observadores creyeron que éste, un atlético playboy sin experiencia política, sería sólo un guiñol para D'Aubuisson y las fuerzas de derechas. En noviembre de 1989, seis sacerdotes jesuitas fueron asesinados de forma brutal, al parecer por un escuadrón de la muerte patrocinado por el ejército. Cristiani declaró solemnemente que su gobierno apresaría y procesaría a los asesinos, pero se consiguió poco. Una vez más, un régimen de derechas prestaba escasa atención a los derechos humanos.

En consonancia con los acuerdos de Esquipulas, Cristiani aceptó negociar con el FMLN bajo la supervisión de Naciones Unidas. Las conversaciones se interrumpieron por el asesinato de un importante negociador rebelde, al parecer a manos de la extrema derecha, y luego se fueron dilatando, cuando cada lado acusó al otro de violar los acuerdos de alto el fuego. En marzo de 1991 ARENA perdió su mayoría legislativa, cuando dos partidos escindidos —proclamando ambos la necesidad de la «reconciliación» nacional— consiguieron juntos más del 20 por 100 de los votos. El pueblo salvadoreño parecía ávido de un acuerdo de paz.

A finales de 1991 las negociaciones auspiciadas por la ONU se intensificaron, y en enero de 1992 el gobierno y el FMLN firmaron un acuerdo histórico para la paz y la reforma. Según ese tratado, el FMLN aceptaba entregar las armas a cambio de amplias reformas en las estructuras militares y políticas, incluida una reducción del papel y tamaño de las fuerzas armadas y una purga de flagrantes infractores de los derechos humanos. Bajo la supervisión de la misión de paz de la ONU, se reformó también la fuerza policial. Hacia diciembre de 1992, el FMLN desarmó sus tropas guerrilleras y se convirtió en un partido político legal, y a comienzos de 1994 se convirtió en la segunda fuerza política del país, en las elecciones ganadas por Armando Calderón Sol, de ARENA, que recuperó el control del Congreso también. Al llegar al poder, Calderón Sol afrontaba el persistente desafío de una reconstrucción económica después de una guerra civil que había durado una generación. No sería una tarea fácil.

Guatemala: reacción y represión

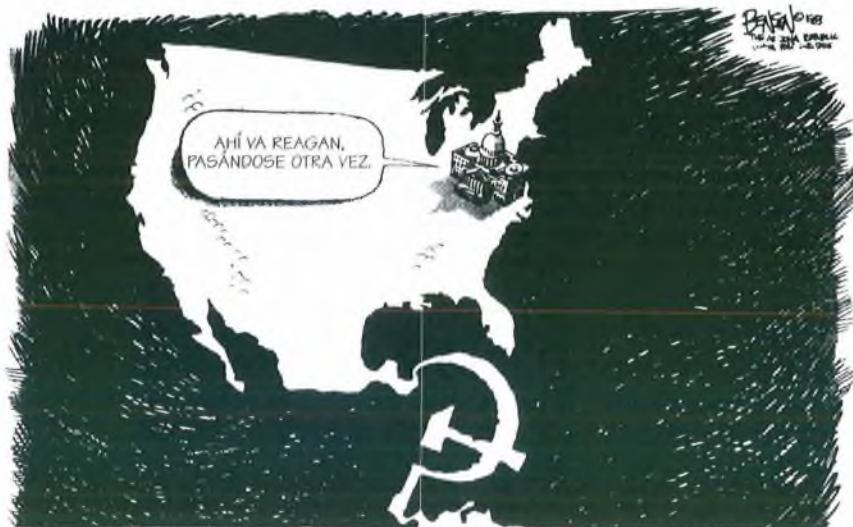
Guatemala posee una larga historia de gobiernos de hombres fuertes. Tras la muerte de Rafael Carrera en 1865, Justo Rufino Barrios estableció una dictadura de doce años (1873-1885) y Manuel Estrada Cabrera siguió con un régimen férreo de veintidós años (1898-1920), el gobierno ininterrumpido de un solo hombre más largo de Centroamérica. En 1931, el general Jorge Ubico llegó al poder y de inmediato lanzó una campaña para aplastar al reciente Partido Comunista. En lugar de depender sólo de los plantadores de café, Ubico formó una base provisional entre los obreros rurales al abolir la esclavitud por deudas. La policía nacional mantenía la ley y el orden. Como Ubico dijo una vez de sus tácticas, «no tengo amigos, sólo enemigos domesticados».

Una oleada de huelgas y protestas llevaron a su renuncia en julio de 1944. Le reemplazó un triunvirato militar, que a su vez fue derrocado por un grupo de oficiales jóvenes. Así llegó la Revolución de Octubre de 1944, hecho que señaló el comienzo de una transformación que duró una década.

Al año siguiente, Guatemala votó como presidente en elecciones abiertas a Juan José Arévalo Bermejo, profesor universitario idealista que proclamaba su creencia en el «socialismo espiritual». Arévalo supervisó la promul-



La política estadounidense en Centroamérica propició un gran debate público en los años ochenta. *Arriba*, el caricaturista Tony Auth satiriza la posición del presidente Reagan y la vacilación del Congreso en expresar su oposición; *abajo*, Steve Benson escenifica la amenaza de la izquierda a los intereses estadounidenses. (Reproducidas con autorización de Universal Press. Todos los derechos reservados.)



gación de una nueva Constitución progresista en 1945, basada en parte en la carta magna mexicana de 1917, y alentó a los obreros y campesinos para que se organizaran. Los salarios industriales aumentaron un 80 por 100 entre 1945 y 1950. Impulsó la educación y otras reformas, pero el trayecto no era fácil: durante sus cinco años de mandato resistió no menos de veintidós revueltas militares.

En 1950 pasó la presidencia al coronel Jacobo Arbenz Guzmán, el ministro de Defensa, que encabezaba una coalición de centro izquierda en las elecciones de ese año. Figura central de la Revolución de Octubre de 1944, desarrolló unas profundas inquietudes sociales, en parte por la insistencia de su esposa, María Vilanova, rica salvadoreña que recordaba a la argentina Evita Perón en su ambición de que su esposo lograra poder político mediante un gran aumento de las prestaciones sociales. Arbenz aceptó el apoyo comunista, tanto durante las elecciones como después, pero era un reformista convencido. En su toma de posesión, expresó sus esperanzas para el futuro del país:

Nuestro gobierno propone comenzar la marcha hacia el desarrollo económico de Guatemala, y propone tres objetivos fundamentales: convertir nuestro país de una nación dependiente con una economía semicolonial en un país independiente económicamente; convertir Guatemala de un país atrasado con una economía predominantemente feudal en un Estado capitalista moderno; y efectuar esta transformación de un modo que aumentará el nivel de vida de la gran masa de nuestro pueblo al nivel más elevado.

Para lograr estas metas, dijo, Guatemala necesitaría fortalecer su sector privado, «en cuyas manos descansa la actividad económica fundamental del país». También se necesitaría capital extranjero, «mientras se ajuste a las condiciones locales, permanezca siempre subordinado a las leyes guatemaltecas, coopere con el desarrollo económico del país y se abstenga estrictamente de intervenir en la vida social y política de la nación». Por último, el nuevo presidente declaró que Guatemala se embarcaría en un programa de reforma agraria.

Arbenz se puso a trabajar de inmediato. Autorizó la construcción de un puerto público en la costa atlántica y de una autopista de este a oeste. Convenció al legislativo para que aprobara un impuesto sobre la renta, una versión muy aguada de una propuesta tenue, pero el primero en la historia guatemalteca. Impulsó la expansión de las obras públicas y la explotación de las fuentes de energía, incluido el petróleo.

La pieza central de la administración de Arbenz fue la reforma agraria. Puesta en vigor en junio de 1952, el proyecto de ley facultaba al gobierno para expropiar sólo las partes sin cultivar de las grandes plantaciones. Todas las tierras que se tomaran debían pagarse con bonos a veinticinco años y un interés del 3 por 100, y su valoración se determinaría de acuerdo con su valor impositivo en mayo de 1952. Durante los dieciocho meses que estuvo vi-

gente, la reforma agraria distribuyó más de 620.000 hectáreas a cerca de 100.000 familias. Las expropiaciones incluyeron 703 hectáreas propiedad del mismo Arbenz, que se había convertido en terrateniente por la dote de su esposa.

Casi de inmediato, Arbenz y la reforma agraria se tropezaron con un serio obstáculo: la oposición implacable de la United Fruit Company y el gobierno estadounidense. La frutera tenía razones obvias para resistirse a la reforma. Poseía enormes extensiones en Guatemala, el 85 por 100 de las cuales estaban sin utilizar o, como mantenía la compañía, se guardaban en reserva contra las catástrofes naturales. Y al concertar los pagos de impuestos, la UFCO infravaloraba de forma consistente sus posesiones. (Basándose en las declaraciones de impuestos, el gobierno guatemalteco ofreció en 1953 a la UFCO 627.572 dólares en bonos como indemnización por una expropiación parcial; el Departamento de Estado estadounidense replicó con una demanda en favor de la compañía de 15.854.849 dólares.)

Washington se vio profundamente implicado. Algunos de los lazos eran personales. El secretario de Estado John Foster Dulles y su hermano, el director de la CIA Allen Dulles, por ejemplo, provenían de una compañía de abogados neoyorquina que tenía estrechos vínculos con la United Fruit. El representante de la compañía en Washington era Thomas Corcoran, prominente abogado muy próximo al fiel ayudante y vicesecretario de Estado del presidente Eisenhower, el general Walter Bedell Smith, que en otro tiempo se había interesado por un cargo directivo dentro de la UFCO. Sin embargo, más importante que los vínculos personales era la doctrina anticomunista desarrollada en Washington.

El comienzo de la década de los cincuenta había contemplado un razonamiento muy bien expresado sobre las necesidades de seguridad nacional en una etapa de guerra fría. Estados Unidos no tenía más elección, según determinaba el razonamiento, que combatir contra la Unión Soviética y sus potencias clientelares, dedicadas al derrocamiento no sólo del capitalismo, sino de todas las democracias occidentales. El Tercer Mundo (término que aún no se utilizaba) sería el blanco soviético favorito, sostenían los teóricos de la guerra fría, que intentarían subvertir los partidos comunistas o sus compañeros de viaje. Los desafíos más drásticos hasta entonces habían ocurrido en Europa (el bloqueo de Berlín, la guerra civil griega, las elecciones francesas e italianas) y en Asia (la guerra coreana, la caída de la China nacionalista y la guerra civil indo-china). ¿Iba a ser inmune América Latina?

Los responsables políticos estadounidenses habían impulsado una dura línea anticomunista en relación con América Latina. El Pacto de Río de 1947 había establecido las bases para la acción colectiva —o así lo esperaba Estados Unidos— contra los avances comunistas en América Latina, provenían de dentro o de fuera. A comienzos de 1953, a John Foster Dulles le preocupaba mucho, pues decía que las condiciones «son en cierto modo comparables a las que había en China a mediados de los años treinta, cuando el movimiento comunista se preparaba Bueno, si no tenemos cuidado, nos

despertaremos una mañana y leeremos en los periódicos que en Suramérica ha ocurrido lo mismo que en China en 1949». La prueba fue Guatemala.

Los publicistas de la UFCO y los hermanos Dulles acusaron al régimen de Arbenz de ser «suave» con el comunismo y lo etiquetaron de amenaza para la seguridad de Estados Unidos y el mundo libre en general. Cultivaron los temores de que la derrota en Guatemala condujera a que los soviéticos se apoderaran del canal de Panamá. Advirtieron que si Guatemala caía, también lo haría el resto de Centroamérica (la «teoría dominó»). Pero el tema principal era la reforma agraria. Escritores como Daniel James de *The New Leader* previnieron de que los comunistas la utilizarían como un escalón para conseguir el control de Guatemala. Fueran cuales fuesen sus intenciones, insistía Estados Unidos, Arbenz era sólo un «secuaz» de los rusos.

En agosto de 1953, Estados Unidos decidió actuar. John Foster Dulles dirigió una campaña en la OEA para estigmatizar a Guatemala como agente de una potencia que no pertenecía al hemisferio (la Unión Soviética) y, por lo tanto, sujeta a la acción colectiva por el Tratado de Río de 1947. Cuando la administración Eisenhower presionó para lograr la aceptación de esta interpretación en la reunión de la OEA celebrada en Caracas a comienzos de 1945, todo lo que obtuvo fue una declaración que establecía que la dominación comunista de un gobierno miembro causaba preocupación y en teoría llevaría a emprender una acción colectiva, pero sin hacer mención específica de Guatemala.

El gobierno de Arbenz consideró entonces que era posible la intervención estadounidense. Impuso duras medidas sobre la oposición interna y se dirigió a Europa Oriental en busca de armamento de pequeño calibre, que en mayo estaba de camino. Mientras tanto, el gobierno estadounidense demandaba, con un lenguaje cada vez más contundente, la indemnización por su propiedad en Guatemala, es decir, por la United Fruit.

Como no logró obtener el respaldo de la OEA para la intervención, el gobierno de Eisenhower optó por la acción encubierta. El Departamento de Estado había organizado la ofensiva diplomática; ahora era el turno de Allen Dulles y la CIA, que organizó una invasión de exiliados bajo el mando de un oscuro coronel renegado guatemalteco, Carlos Castillo Armas. Al otro lado de la frontera, en la vecina Honduras, se reunió una columna rebelde de unos cuantos cientos de hombres, equipados y dirigidos por la CIA, que puso en funcionamiento una emisora de radio rebelde y proporcionó unos cuantos aviones de combate de la segunda guerra mundial para bombardear la ciudad de Guatemala. Sometido al ataque de estos aviones y convencido de que un gran ejército se aproximaba a la capital, Arbenz perdió los nervios y se rindió. Los rebeldes de Castillo Armas llegaron hasta la capital casi sin encontrar resistencia.

El nuevo gobierno purgó a comunistas y nacionalistas radicales, anuló la expropiación de las tierras pertenecientes a la United Fruit y firmó debidamente un Pacto de Ayuda y Defensa mutua con Estados Unidos en 1955. La república centroamericana descarrilada había sido devuelta al orden mediante una operación de la CIA relativamente barata y eficiente.

Los nacionalistas latinoamericanos denunciaron con vigor esta intervención y hasta hoy se considera un símbolo de la cínica actuación estadounidense. Según lo describió veinte años después un cargo de la CIA que había tomado parte activa en el derrocamiento de Arbenz, «Castillo Armas fue un mal presidente que toleró la corrupción durante todo su gobierno y que trató con mayor deferencia a la United Fruit que a su propio pueblo. Estados Unidos pudo haberlo evitado con el ejercicio enérgico de la presión diplomática para asegurarse de que persiguiera la reforma social para muchos y no la satisfacción venal de unos pocos. En lugar de hacerlo, Washington exhaló un suspiro colectivo de alivio y pasó a otros problemas». De todos modos, el destino del régimen de Arbenz serviría de aviso para los dirigentes nacionalistas que contemplaran enfrentarse con las compañías estadounidenses.

El golpe de 1954 marcó un giro en la historia de Guatemala. Eliminó casi por completo las fuerzas del centro político (representadas por Arévalo y Arbenz), así que el país se quedó sólo con una izquierda y una derecha, y la segunda estaba al mando. Los plantadores de café, los demás latifundistas y los inversores extranjeros y sus filiales recobraron el poder bajo la protección de regímenes militares neoconservadores. Desde entonces, se han sucedido diversos gobernantes, pero esta alineación ha persistido. Castillo Armas fue asesinado en 1957. El general Miguel Ydígoras Fuentes, que había perdido ante Arbenz en 1950, gobernó de 1958 a 1963. Luego vino el coronel Enrique Peralta Azurdia. De 1966 a 1970 ocupó la presidencia Julio César Méndez Montenegro, un inteligente civil que remontaba su linaje político a Arévalo, pero las fuerzas armadas le mantuvieron estrechamente controlado. Le siguieron el coronel Carlos Arana Osorio (1970-1974), el general Kjell Langerud García (1974-1978) y el general Romeo Lucas García (1978-1982). En marzo de 1982 se hizo con el poder Efraín Ríos Montt, un ostentoso oficial retirado, convertido al cristianismo evangélico; a mediados de 1983 fue desplazado por el general Óscar Humberto Mejía Victores. Cuanto más cambiaban los líderes, más se inmovilizaba el sistema.

Una característica de todo el periodo, en especial desde mediados de los años sesenta, fue la aterradora violación de los derechos humanos. Los esquadrones de la muerte paramilitares, los más conocidos Mano Blanca y Ojo por Ojo, llevaron a cabo una campaña asesina contra los disidentes políticos. Entre las décadas de 1960 y 1990, se hizo «desaparecer» o morir a no menos de 80.000 personas. El gobierno tuvo al menos una responsabilidad indirecta sobre estas muertes, pero las protestas mundiales no proporcionaron mucho alivio.

A mediados de los años ochenta, el ejército guatemalteco consideró que su campaña contra las guerrillas marxistas había tenido el éxito suficiente como para permitir la elección de un presidente civil. El vencedor fue Víctor Efraín Cerezo, demócrata cristiano y centrista, que goberaría sólo a voluntad de los militares. En 1990 le sucedió Jorge Serrano Elías, un candidato de centro-derecha cuyo triunfo reflejaba el desengaño popular con los partidos políticos tradicionales. Incapaz de construir una mayoría operativa en el

Congreso, Serrano lo disolvió inesperadamente en 1993 y anunció que asumía poderes dictatoriales, tal como había hecho Alberto Fujimori en Perú un año antes. Sin embargo, en la medida en que el repudio nacional e internacional del autogolpe aumentó, el apoyo que sostenía a Serrano desapareció y éste huyó apresuradamente del país.

Los dos años restantes del período presidencial fueron cumplidos por Ramiro de León Carpio, un ex defensor del pueblo para los derechos humanos que suscitó al comienzo esperanzas de un cambio positivo. A comienzos de 1995, las Naciones Unidas supervisaron la negociación de una acuerdo de paz entre el gobierno y las guerrillas, así como un convenio para respetar los derechos de los pueblos indígenas. Las fuerzas gubernamentales continuaron manteniendo esporádicos choques militares con los grupos guerrilleros; sin embargo, De León Carpio se vio obligado a defender a los militares guatemaltecos ante una airada protesta diplomática por la muerte de un ciudadano estadounidense y el cónyuge de otro. Mientras tanto, Efraín Ríos Montt, cuyo gobierno a inicios de los años ochenta fue notorio por su残酷, comenzó a promover su candidatura (o la de su esposa) para las elecciones presidenciales de finales de 1995. Bajo la pátina de la democracia electoral, las fuerzas militares continúan prevaleciendo en Guatemala.

A mediados de los años noventa, Centroamérica parecía lejos de realizar sus sueños. Los pueblos del istmo sufrían pobreza, soportaban una gran violencia y se enfrentaban a una presión externa continua. Parte de la solución quizá esté en la unificación, pero hasta esta meta parece fuera de alcance. En expresión de un historiador, Centroamérica era aún «una nación dividida». Pero también había puntos brillantes: el diminuto país de Belice (en 1985 tenía una población de 159.000 habitantes), antigua Honduras Británica, consiguió la independencia a finales de 1981; y quedaba la esperanza de que la integración económica creara las condiciones para la colaboración y unificación a largo plazo. Despues de décadas de guerra en Centroamérica, los activistas se esforzaban por remediar las divisiones históricas y lograr el potencial que creían que por derecho les correspondía.

América Latina, Estados Unidos y el mundo

La historia de América Latina no se ha desarrollado en un vacío. Desde los tiempos de Colón, la región ha estado constantemente sometida a fuerzas externas. En el siglo xvi, España y Portugal conquistaron el continente y lo colonizaron utilizando grados diferentes de violencia. Durante los siglos xvii y xviii, América Latina se convirtió en prenda y premio de la política-europea, cuando gentes ambiciosas de las naciones empresariales —Inglaterra, Francia y Holanda— lograron hacerse con algunas plazas fuertes en el Nuevo Mundo ibérico. Las primeras décadas de la independencia marcaron un descenso temporal de la influencia exterior, ya que las nuevas naciones latinoamericanas se volcaron hacia sí mismas y las potencias expansionistas de Europa centraron su atención en posesiones más lucrativas situadas en África, India y Asia. A partir de 1880, durante el último siglo o algo más, las economías latinoamericanas han quedado profundamente integradas en la economía capitalista global, un sistema dominado por países del centro industrializado: Europa Occidental, Estados Unidos y después Japón. Hasta ahora, América Latina nunca ha logrado ser independiente del mundo exterior. A pesar de sus luchas continuas y valientes para obtener la autonomía, en general sólo ha conseguido modificar, no eliminar, la forma, naturaleza y extensión de su antigua dependencia de siglos.

Hasta el nombre de América Latina refleja un legado imperialista. El término fue acuñado por los franceses en la década de 1860, cuando se dedicaron a apoyar a Maximiliano de México y a establecer las bases culturales para emprender una ofensiva política y económica por toda la América española y portuguesa. Sostenían que existía una esencia latina —encarnada en la cultura francesa— subyacente en el núcleo de la civilización iberoamericana, lo cual no era una pura fantasía, ya que la cultura francesa disfrutaba de un enorme prestigio entre las élites del Nuevo Mundo.

Cualquiera que fuera la realidad de la reclamación francesa acerca de una influencia homogénea, América Latina ya comenzaba a exhibir un sentimiento continental a finales del siglo xviii. Era difícil realmente que el sistema colonial español y portugués no hubiera logrado crear un sentimiento de interés común en los países que generaron.

Para comprender la posición que ocupa América Latina en el mundo actual, debemos empezar por entender la naturaleza de los imperios coloniales español y portugués. Y lo que es más importante, que las estructuras económicas eran mercantilistas, es decir, que estaban diseñadas para integrar totalmente a las colonias en la economía de la madre patria. En la América española, esto significó, además, que no hubiera comercio intracolonial, ya que todo el comercio de cada región debía establecerse sólo con España. En la práctica, su efecto fue distorsionar el desarrollo económico de las colonias. Si hubieran podido comerciar con mayor libertad, quizás habrían contado con opciones económicas considerablemente diferentes de las que heredaron cuando llegó la independencia. (A la América portuguesa también se le permitió comerciar sólo con la madre patria.)

Las políticas mercantilistas ibéricas obtuvieron resultados culturales y psicológicos, además de económicos. La América española y portuguesa se nutrió del modelo de sociedades cerradas. Estaba en guardia constante contra las incursiones políticas y económicas de los rivales europeos, así como contra las herejías religiosas que provenían de la Inglaterra protestante y de los Países Bajos.

Existen importantes influencias no ibéricas que dejaron su huella en la América Latina colonial. Los 5,2 millones de esclavos enviados desde África occidental a Suramérica, el Caribe, México y Centroamérica aportaron una tradición diferente de la amerindia o la europea. A pesar de los esfuerzos de sus dueños europeos o mestizos, los afroamericanos establecieron marcas persistentes en la sociedad y la cultura. El proceso fue más profundo en Brasil y el Caribe, pero también fue importante en Colombia, Venezuela, México y Centroamérica. Las lenguas, la comida, los deportes y la música muestran una influencia africana profunda y continua. Los esclavos también se rebelaron, huyeron y fundaron comunidades de cimarrones en Brasil y el Circumcaribe, en especial en la Guayana y Curaçao. En los siglos XVII y XVIII, Brasil contaba con florecientes comunidades de cimarrones, que en el siglo XIX fueron barridas o absorbidas por el crecimiento de las sociedades circundantes.

Las posesiones americanas españolas y portuguesas podrían muy bien haber continuado siendo colonias durante el siglo XIX si no hubiera sido por la guerra desencadenada en Europa. Fue la invasión napoleónica de la Península Ibérica lo que provocó la crisis de lealtad en el Nuevo Mundo. Cuando se intensificó, las monarquías se vieron impotentes y los criollos tomaron el control de sus propios asuntos.

Una vez vencidos los franceses, Inglaterra surgió como la potencia militar, económica y política preeminente. Los ingleses pasaron a ocupar, siquiera parcialmente, el vacío creado en América. Su objetivo principal era económico: promover sus intereses comerciales, que habían dependido del comercio de contrabando durante todo el siglo XVIII. La base para esta actividad sería su sólida red de instituciones económicas: lo mejor que se podía conseguir en embarcaciones, banca, seguros y capital de inversión. En la práctica, los in-

genses querían reemplazar la infraestructura institucional ibérica anterior y vincular a América Latina con la economía mundial. Pero diferían de España y Portugal en un aspecto clave: apenas poseían territorios en América Latina. Querían ganancias económicas sin la carga de un gobierno político directo. Era un «imperialismo informal», mediante el cual el mayor inversor y comerciante de Europa evitaba el caro lazo del control territorial, con sus posibles enredos militares.

¿Y Estados Unidos? A comienzos del siglo XIX, no era de ningún modo una potencia hemisférica. Muy al contrario, fue incapaz hasta de impedir que Washington (y la Casa Blanca) fuera devastado por los ingleses en la guerra de 1812. Aunque tenía contactos importantes en México y el Caribe, allí tampoco pudo rivalizar con el poderío naval inglés.

Pero, por lo menos, se había convertido en un símbolo del éxito poscolonial para las élites criollas latinoamericanas y, lo que era más significativo, se había despojado del control europeo. Había nacido de una revolución fundamentada en la Ilustración y demostraba cómo una república podía surgir del colonialismo europeo. Los rebeldes estadounidenses habían luchado por el derecho de representación, algo de lo que notoriamente carecían los iberoamericanos. La estructura federal de Estados Unidos era otro rasgo que impresionaba a los patriotas de las élites criollas de lo que se convertiría en grandes países como México, Brasil y Argentina, donde la reconciliación de la autonomía regional con el poder nacional sería un tema de importancia duradera.

De la independencia al panamericanismo

Las repúblicas independientes (más el imperio de Brasil) del siglo XIX latinoamericano eran algo anómalo en la escena mundial. Junto con Haití y Estados Unidos, estas naciones de lengua española y portuguesa ofrecían los primeros casos de rebelión popular lograda contra el gobierno europeo colonial. Sin embargo, una vez independientes, las nuevas naciones desempeñaron un papel secundario en la escena mundial de la década de 1880. En general, se encontraron absorbidas en su desarrollo propio.

No era lo que había esperado Simón Bolívar, el gran revolucionario de las guerras de independencia, que soñaba con una Hispanoamérica unida surgiendo de las guerras contra el colonialismo. Creía que Hispanoamérica podría subordinar las lealtades regionales a la unidad en una única nación. Pero no se cumplió su sueño. Las colonias rebeldes se fracturaron por las líneas de las antiguas unidades administrativas españolas. Bolívar denunció amargamente a sus contemporáneos criollos por su provincialismo, pero no sirvió de nada. Cada nueva nación tendría que encontrar su propio camino en el mundo.

Una primera preocupación en la América Latina postindependiente fue la naturaleza de la relación con la antigua madre patria. Para las islas caribe-

ñas como Cuba, Puerto Rico y Jamaica, el gobierno colonial continuaba. En Brasil, la antigua colonia se había convertido en un «reino conjunto», que tenía a su monarca en Río de Janeiro. El resto de América Latina tenía que ajustarse a la nueva realidad de tratar con España sólo como otra distante potencia europea. En la práctica, nunca podría ser así, ya que los lazos de sangre e instituciones como la Iglesia, la educación superior y las publicaciones seguían otorgando a España un lugar especial en la América española. España estaba entonces tan dividida entre liberales y conservadores que ni siquiera podía intentar proyectar una única influencia sobre sus antiguas colonias.

Estados Unidos trató de afirmar su poder con la «Doctrina Monroe», promulgada por el presidente James Monroe en 1823. En su origen, iba destinada a las posibles reclamaciones sobre el noroeste americano de la Rusia zarista, pero se hizo más conocida por su desafío a un aparente plan de la Santa Alianza europea para ayudar a España a reconquistar sus antiguas colonias. El presidente Monroe declaró con firmeza que «los continentes americanos, por la condición libre e independiente que han asumido y manteniendo, no deben considerarse de ahora en adelante sujetos para la colonización por parte de cualquiera de las potencias europeas». Otros comentarios advertían a los europeos contra la utilización de medios indirectos para extender su poder político en el Nuevo Mundo. Como más tarde se estableció en un popular lema, el mensaje básico era claro: «América para los americanos».

En la práctica, ese mensaje provocó indiferencia o desprecio en Europa continental, cierta preocupación en Inglaterra y una simpatía considerable en América Latina. Dentro de Estados Unidos, la Doctrina Monroe se hizo muy popular (la expresión data de 1850) y fue una piedra angular de su política y la de América Latina durante el siglo siguiente. Sin embargo, a comienzos del siglo XIX Estados Unidos carecía del poder económico y militar —así como de la voluntad política— precisos para alcanzar un impacto significativo dentro de América Latina.

Francia intentó extender su influencia en una breve expedición militar que emprendió contra México en 1838 para obligar a su gobierno al pago de las reclamaciones por daños efectuadas por ciudadanos franceses. La negociación de un acuerdo permitió su retirada. Junto con los ingleses, los franceses también bloquearon repetidas veces los puertos del Río de la Plata entre 1838 y 1850. Pero fue Inglaterra quien ejerció la mayor influencia extrahemisférica durante gran parte del siglo XIX. Poseía la fuerza naval más poderosa, capaz de imponerse en toda América Latina, a pesar de que este territorio se encontrara a tantos kilómetros de los puertos británicos. En segundo lugar, tenía capital, comerciantes, banqueros y agencias de seguros y embarque para facilitar el comercio entre América Latina y Europa, su gran mercado. Y además profesaba una ideología, el liberalismo, que reforzaba su expansionismo y que las élites criollas latinoamericanas asimilaron en seguida. Ofrecía una razón para integrar a América Latina en la economía mundial, que no por casualidad controlaban los británicos.



A medida que se aproximaba la primera guerra mundial, Estados Unidos trató de afirmar su esfera de influencia en el hemisferio occidental mediante la Doctrina Monroe. (Charles L. «Bart» Bartholomew [?], *Minneapolis Journal*, 1912. Reproducido con autorización de Minneapolis Star and Tribune Company.)

Entre las décadas de 1820 y 1850, los ingleses impusieron su superioridad en ese continente. De inmediato pasaron a controlar los servicios comerciales y financieros de los países principales. Rápidamente concertaron créditos para los gobiernos y establecieron compañías en México, Brasil, Argentina y Perú. Pero el desarrollo capitalista de esas repúblicas resultó más difícil de lo que habían esperado. La mayoría de los deudores no cumplían con el pago de sus créditos y los mercados financieros de Londres pronto señalaron a América Latina como un alto riesgo para el crédito.

México fue el único lugar donde hizo impacto una potencia externa a América Latina que no era Inglaterra antes de 1850. Ahí Estados Unidos siguió su «destino manifiesto», apoderándose de una extensa parte del territorio mexicano. También expresó amenazas hacia el Caribe y Centroamérica. A mediados de siglo, el Caribe y México, tan próximos a Estados Unidos, habían llegado a considerarse casos especiales en las relaciones de América Latina con el mundo.

De 1850 a 1880, América Latina cambió su postura hacia el mundo exterior. El liberalismo, tanto político como económico, ganó preponderancia creciente. En Argentina, por ejemplo, el nacionalista Rosas fue expulsado por sus enemigos argentinos, gracias en buena medida a la intervención inglesa y francesa. Cuando los liberales argentinos llegaron al poder, instalaron en su país instituciones tan admiradas de las democracias de lengua inglesa como la Constitución y el sistema de educación pública estadounidenses. Los liberales también creían que su economía se desarrollaría mediante la aceptación del comercio exterior, lo que significaba aplicar los principios del liberalismo económico: mínima interferencia estatal en el mercado. En la práctica, probablemente reforzó la posición económica británica predominante.

Una aplicación similar del liberalismo se estaba intentando en el Brasil imperial. El emperador Pedro II tomó como modelo para su gobierno la monarquía británica, aunque ejerció un poder político mucho más discrecional que la reina Victoria. Los dos partidos del Parlamento imperial brasileño repetían el sistema bipartidista inglés; hasta los discursos del Congreso estaban llenos de referencias a los precedentes constitucionales ingleses.

Los años comprendidos entre 1850 y 1880 también contemplaron el crecimiento de la influencia francesa en la región, sobre todo en la cultura. El francés era la lengua extranjera que más hablaba la élite, lo que reflejaba una práctica tradicional en la misma Europa. Su prestigio cultural duró hasta bien entrado el siglo XX y siguió siendo predominante en algunos países hasta el final de la segunda guerra mundial, mucho después del declive de Francia como potencia mundial. ¿Por qué esta resistencia? En parte porque se exceptuó a Francia de la reacción nacionalista dirigida contra los británicos y en parte porque los valores culturales franceses coincidían con la imagen que poseía de sí misma la élite latinoamericana. Aunque las élites francesas y latinoamericanas pudieran admirar las proezas económicas de los anglosajones, despreciaban los valores «materialistas» que habían difundido Inglaterra y Estados Unidos. La clase intelectual francesa había producido su propio razonamiento para defender a su país contra Inglaterra, sosteniendo que Francia tenía una visión más humana de la sociedad que la deshumanizadora Revolución Industrial inglesa, y las élites latinoamericanas se identificaban con la superioridad cultural que proclamaban los franceses.

La aparición de la influencia estadounidense

Entre 1880 y el estallido de la primera guerra mundial, Gran Bretaña perdió su supremacía en América Latina. Otras potencias europeas, sobre todo Francia y Alemania, aumentaron sus vínculos económicos, compitiendo con los inversores y comerciantes ingleses. Pero el desafío más importante provino de Estados Unidos.

Durante estos treinta y cinco años, la influencia estadounidense se extendió hacia el sur y penetró con mayor profundidad en los lugares que le

quedaban más próximos, el Caribe y México. A los inversores estadounidenses les resultó atractivo para la inversión y el comercio el México gobernado por Porfirio Díaz y también derramaron capital en Cuba. Allí, antes de que estallara la guerra Hispano-Americana en 1895, ya había eclipsado a España en la economía.

Su entrada en la revuelta cubana contra España señaló una nueva fase en sus relaciones con América Latina. Después de la guerra Mexicano-Americana (1846-1848), había continuado ocupando y colonizando partes del suroeste actual. Cuando Estados Unidos entró en Cuba en 1898 y venció a España de forma decisiva, fue más que una victoria militar. Fue una lucha simbólica que impresionó a toda América Latina. Ya había pasado el tiempo en que a las naciones latinoamericanas las absorbían sólo sus problemas propios.

La guerra de 1898 era la batalla de los patriotas cubanos contra España y otros latinoamericanos simpatizaron de inmediato con ellos. Pero los yanquis se hicieron de improviso con el control de la rebelión y desmoralizaron a muchos cubanos, que habían ansiado vencer a España por ellos mismos. Además, subrayó una preocupación latinoamericana común: ¿eran los españoles y sus descendientes más débiles por naturaleza que los norteamericanos? ¿Estaba Estados Unidos «destinado» racialmente a apoderarse de América Latina?

Una preocupación semejante se había adueñado de los mexicanos tras su humillante derrota de 1846-1848. Explicaron su debilidad en el campo de batalla ligándola a supuestos defectos de su carácter o, de forma más ominosa, a su composición racial. Entonces, en la década de 1890, el racismo estaba en todo su apogeo en Europa y Estados Unidos. Las leyes Jim Crow habían institucionalizado la segregación y las universidades y las iglesias estaban desbordadas de profesores y sacerdotes que explicaban tranquilamente las bases científicas para creer en razas «inferiores» y «superiores».

Estas doctrinas racistas también penetraron en América Latina. En un país tras otro, los principales intelectuales repetían fielmente los dogmas racistas de los europeos. Bajo esa introspección había un temor latente a que algunos nuevos conquistadores les arrebataran sus tierras, manifestado en las reacciones nacionalistas esporádicas contra los ingleses a lo largo del siglo XIX. Los incidentes que las precipitaban solían ser nimios, como los alborotos provocados por los marineros ingleses cuando estaban en puerto, pero revelaban una profunda hostilidad. Las élites latinoamericanas sabían que tanto los británicos como los estadounidenses los solían mirar con desprecio.

Así pues, no es sorprendente que la derrota infligida por Estados Unidos a España en 1898 los preocupara profundamente. Una vez que se había apoderado de Puerto Rico y Cuba (la segunda como protectorado), se preguntaban, ¿hasta dónde llegarían los yanquis? Los pesimistas de México hacía mucho que creían que Estados Unidos tenía designios para más allá de sus tierras.

El expansionismo estadounidense en el Caribe mostró que los temores latinoamericanos no carecían por completo de fundamento. Su búsqueda de

un lugar satisfactorio para construir un canal transcontinental reveló lo que los yanquis harían por hacer prevalecer sus intereses económicos y geopolíticos. El presidente Theodore Roosevelt, la encarnación arrogante del imperialismo estadounidense, trató sin miramientos las objeciones aducidas al lugar elegido para el canal en la parte más septentrional del territorio colombiano que se extendía hacia Centroamérica. Así nació la nueva nación de Panamá y se construyó el canal entre 1904 y 1914. Estados Unidos consiguió su canal, pero a costa de la creación de una nueva república postiza.

Entre 1880 y 1914, Estados Unidos también intentó crear una nueva alianza hemisférica de naciones. Comenzó con los ambiciosos planes del secretario de Estado James Blaine, por cuya iniciativa se celebró en Washington, en 1889, la Primera Conferencia Panamericana. Entre 1826 y 1864 hubo cinco congresos internacionales, que atrajeron sólo a un número limitado de países latinoamericanos. La reunión de 1889 fue la primera en la que participaron todas las naciones latinoamericanas y Estados Unidos. Irónicamente, fue cuando el último estaba acelerando su ofensiva imperialista en América Latina.

De la conferencia en 1889 surgió una autorización para una «Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas», de la que provino la Unión Panamericana y después la Organización de Estados Americanos (OEA). Los logros se limitaron principalmente a temas comerciales.

La ofensiva diplomática, económica y militar estadounidense sobre América Latina a partir de 1880 propició una fuerte reacción en los intelectuales y estudiantes de sus países. La guerra Hispano-Americana hizo surgir a José Enrique Rodó, uruguayo y uno de los críticos militantes más celebrados. En 1900 publicó *Ariel*, un breve ensayo en el que comparaba el excesivo materialismo estadounidense con la sensibilidad cultural superior latinoamericana. Acusaba a Estados Unidos de que: «Su prosperidad es tan grande como su imposibilidad de satisfacer a una mediana concepción del destino humano».

Las ideas de Rodó tuvieron gran influencia en América Latina, cuyas élites estaban bien preparadas para oír hablar de su superioridad espiritual. También se encontraban estimuladas para pensar de acuerdo con la identidad latinoamericana que surgía de la unidad cultural hacia la que tendía Rodó. El tema fue recogido y difundido ampliamente por escritores como el argentino Manuel Ugarte, que escribió al recién elegido presidente Woodrow Wilson en 1913 para pedirle que «las estrellas y las barras dejaran de ser un símbolo de opresión en el Nuevo Mundo». Otros intelectuales famosos que tomaron parte en esta reacción de toda América Latina fueron José Martí de Cuba (cuya crítica comenzó en la década de 1870), Rubén Darío de Nicaragua y Rufino Blanco-Fombona de Venezuela. Sus escritos se publicaron por todo el continente durante el que fue uno de los períodos más cohesionados de América Latina en cuanto a cultura. Muchos de los temas de este movimiento antiyanqui han sobrevivido en las relaciones interamericanas hasta nuestros días.

CUADRO 11.1. Inversión estadounidense en América Latina, 1897-1914
(en millones de dólares al finalizar el año)

	<i>Paises del Caribe</i>	<i>México y Centroamérica</i>	<i>Suramérica</i>	<i>Total</i>
1897	4,5	221,4	37,9	304,3
1908	220,2	713,0	129,7	1.062,9
1914	329,0	946,7	365,7	1.641,4

Fuente: Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina, *External Financing in Latin America*, Nueva York, Naciones Unidas, 1965, p. 14.

La influencia europea continuó siendo muy importante en América Latina entre 1880 y 1914, a pesar del ascenso de la estadounidense. Sólo se necesita observar el volumen de inversión y comercio. El cuadro 11.1 demuestra la magnitud de la inversión estadounidense, que acabó abarcando el Caribe y Suramérica, así como México y Centroamérica. A pesar de ello, como el cuadro 11.2 indica, Gran Bretaña era con diferencia la fuente más importante de capital en vísperas de la primera guerra mundial; Francia y Alemania también tenían peso.

Otra esfera destacable de influencia europea fue la tecnología y formación militar. Desde sus guerras de independencia, las élites latinoamericanas habían sabido que carecían de preparación militar y armamento avanzado. Para derrotar las guarniciones españolas, que solían estar mal dotadas y abastecidas, con frecuencia los patriotas tuvieron que contratar o recurrir a soldados y marinos extranjeros.

A medida que avanzó el siglo XIX, otros ejércitos sirvieron de ejemplo para los ambiciosos gobernantes latinoamericanos. Tanto en Chile (1885) como en Argentina (1899), por ejemplo, se contrataron misiones militares alemanas durante amplios períodos para presentar nuevas armas y explicar su uso. También enseñaron nuevos métodos de mando y de organización del Estado Mayor. En Brasil, el estado de São Paulo, en rápido crecimiento, contrató en 1905 una misión francesa para entrenar a su milicia, que incluía caballería. De estas misiones europeas se esperaba, sobre todo, que transmitieran la nueva profesionalidad que había transformado a su ejército. La guerra había dejado de ser un asunto de aristócratas; ahora era algo serio que requería una completa formación científica y técnica.

¿Qué supuso para América Latina esta transferencia de «profesionalización» a su ejército? Sus consecuencias políticas fueron enormes, pues, aunque resulte irónico, los ejércitos «profesionalizados» aumentaron su actividad en los ámbitos constitucionales de Chile, Argentina y Brasil. Pero sólo resultaría evidente tras la primera guerra mundial.

CUADRO 11.2. Inversiones de capital extranjero a largo plazo en América Latina, 1914 (en millones de dólares)

Origen	Inversión privada extranjera (y deuda pública exterior)	Porcentaje
Alemania	367	3,8
Estados Unidos	1.487	15,2
Francia	1.013	10,4
Inglaterra	5.066	51,9
Otros	1.821	18,6
Total	9.754	100,0

Fuente: Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina, *External Financing in Latin America*, Nueva York, Naciones Unidas, 1965, pp. 16-17.

La consolidación de la influencia estadounidense

La primera guerra mundial, aunque en sus inicios no afectara directamente a América Latina, cambió de forma sustancial sus relaciones con el mundo. En primer lugar, aceleró el declive de Gran Bretaña como fuerza económica más importante del hemisferio. Desgastada por las costosas y largas hostilidades en la Europa continental, tuvo que hacer uso de sus inversiones ultramarinas para pagar la guerra. Además, su competitividad en la economía mundial había comenzado a experimentar un descenso a largo plazo.

En segundo lugar, la guerra puso de relieve la dinámica economía estadounidense, basada en un continente lleno de recursos y ya lo suficientemente maduro como para convertirse en un exportador de capital neto. Su decisiva intervención en la guerra demostró que ahora era el que podía mantener el equilibrio del poder económico y militar: las potencias europeas ya no podrían volver a dejarlo de lado.

La intervención de América Latina en el conflicto fue esencialmente como observadora. Estados Unidos se aplicó con tesón a conseguir que la guerra sirviera de oportunidad para fortalecer su influencia política en esa región, pero sus resultados fueron variados. Sólo ocho repúblicas declararon la guerra a Alemania: Brasil (el único país grande), Cuba, Costa Rica, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Panamá. Otras cinco rompieron las relaciones diplomáticas: Bolivia, República Dominicana, Ecuador, Perú y Uruguay. Siete naciones permanecieron neutrales: Argentina, Chile, Colombia, México, Paraguay, El Salvador y Venezuela.

Cuando concluyó la primera guerra mundial, el poder y la influencia de Estados Unidos en América Latina estaba en aumento. Ahora casi ejercía la hegemonía en la cuenca del Caribe, como podía observarse por la ocupación militar de Nicaragua (1912-1925 y 1926-1933), Haití (1915-1934), República Dominicana (1916-1924) y Cuba (1917-1922). Aunque no permaneció en esos

países, influyó profundamente en su desarrollo, manteniendo el poder de veto sobre su política interna. La mayoría de sus élites dieron por hecho esta hegemonía; sin duda, les habría sorprendido pensar que el mundo pudiera haber sido de otro modo.

Hubo dos excepciones a este modelo: México y Cuba. En el primero, la revolución de 1910 amenazó con alterar las relaciones del país con Estados Unidos. Washington estaba dividido sobre la dirección que había tomado la revolución y efectuó intervenciones repetidas, incluido el desembarco militar en Veracruz en 1914 y el envío de la columna del general John J. Pershing en 1916 para perseguir a las tropas de Pancho Villa. No obstante, la revolución había logrado proporcionar a los mexicanos un brío, un orgullo y un grado de movilización que acabaría ayudando a controlar la marca tradicional de la intervención estadounidense. Pero siguió siendo cierto que poco podían hacer los mexicanos sin tomar en cuenta como se merecía la presión continua de ese poderoso vecino del norte.

Cuba fue un caso diferente. Allí Estados Unidos había establecido un protectorado tras finalizar su ocupación en 1902. Esta presencia generó una reacción nacionalista, que hizo erupción más frecuente entre los estudiantes de la Universidad de La Habana. Aunque fueron reprimidos con facilidad, representaron una importante opinión disidente dentro de la élite y en los años treinta ocuparon un puesto importante en la política nacional.

La Gran Depresión golpeó con dureza a América Latina, pues dejó de afluir nuevo capital y a los inversores extranjeros les resultó difícil repatriar los beneficios. Un país tras otro dejaron de pagar sus deudas (o declararon una moratoria unilateral).¹ La razón era evidente. El derrumbamiento de la economía mundial había reducido la demanda de los productos primarios en los que se basaba América Latina para obtener divisas. De improviso, estos países no tuvieron modo de ganar los dólares, las libras, los marcos o los francos que necesitaban para pagar a sus acreedores exteriores. Así que no podían esperar recibir ninguna afluencia neta de capital y, lo que es más importante, no iban a contar con las divisas suficientes para pagar las importaciones esenciales para el desarrollo de la economía interna, en especial la industrialización.

De este modo, los años treinta fueron una etapa en la que los países latinoamericanos tuvieron que mirar hacia dentro. No resulta una coincidencia que también se caracterizaran por un alto sentimiento nacionalista. Como las opciones de encontrar ayuda económica externa eran tan reducidas, era lógico concentrarse en los recursos internos. Argentina, Brasil y México, por ejemplo, tomaron medidas para aumentar su control sobre la industria petrolera. México fue el que más lejos llegó, cuando en 1938 el presidente Cárdenas nacionalizó todas las empresas extranjeras del sector. Argentina ya había creado una compañía petrolera estatal autónoma en los años veinte; en Brasil, por el contrario, se dio forma definitiva a la empresa petrolera estatal en 1953.

1. Con las excepciones de Argentina, Haití y la República Dominicana.

Los años treinta también importaron algo nuevo a América Latina: la ideología fascista. La versión más clara vino de Italia, donde el movimiento de Mussolini aumentó como respuesta al surgimiento de la izquierda revolucionaria, sobre todo los sindicalistas y comunistas. Con el auge del nazismo en Alemania, el fascismo europeo se hizo con un modelo aún más poderoso. Especialmente importante para América Latina fue el hecho de que España y Portugal hubieran caído víctimas de regímenes autoritarios (Franco desde 1936 en la primera y Salazar desde 1928 en la segunda) con tonos corporativistas, por no decir fascistas.

El giro de Europa hacia la derecha proporcionó municiones y prestigio a los grupos latinoamericanos antidemocráticos y antiliberales, que tenían sus propias razones para desear crear gobiernos autoritarios. Ninguno de los movimientos fascistas de la región fueron copias exactas de los casos europeos. En Brasil, los integristas fueron fundamentalmente un movimiento de clase media, que predicó la necesidad de orden con un mensaje de esencia corporativista. Argentina contó con varios grupos paramilitares de derechas que recordaban las organizaciones fascistas europeas, pero la influencia más profunda la recibió el ejército. Las logias secretas dentro del cuerpo de oficiales produjeron un estímulo inicial para el movimiento peronista, que debió parte de su inspiración al modelo italiano. Pero el peronismo nunca consiguió una forma doctrinaria y de organización como la del fascismo italiano. En México hubo un pequeño movimiento *derechista*, el sinarquismo, que mostró influencias europeas, aunque también se basaba fundamentalmente en un sentimiento cristiano de derechas. Por último, en Chile hubo un Partido Nacional Socialista, una imitación clara del Partido Nazi, que provocó una respuesta furiosa de la izquierda nacional.

Ninguno de estos partidos o movimientos estuvieron próximos a lograr el poder en los años treinta. En Chile y México desaparecieron cuando el sistema político civil demostró ser capaz de contenerlos y absorberlos. En Argentina los sentimientos fascistas fueron eclipsados por el movimiento peronista, una vez que la segunda guerra mundial entró en su fase final. En Brasil los integristas parecieron estar en los umbrales del poder en 1936, pero fueron barridos por el *Estado Nôvo* de Vargas en 1937.

A medida que transcurrió la década de 1930, América Latina se convirtió en el escenario de la competencia geopolítica. Tanto italianos como alemanes miraron hacia esa región para aumentar su influencia económica y política. Los primeros fueron particularmente activos en Brasil y Argentina, donde las grandes comunidades de italianos ofrecían una posible base de operaciones. El gobierno de Mussolini intentó que las repúblicas latinoamericanas mantuvieran una posición pro italiana, lo que significaba estimular y reforzar la opinión contraria a Inglaterra (y, por extensión, a Estados Unidos). El gobierno italiano también colaboró de forma directa con los fascistas brasileños, utilizando su embajada para hacer llegar a los integristas grandes sumas de dinero.

Como el socio más poderoso del Eje europeo, la Alemania de Hitler es-

taba aún mejor situada para ejercer presión en América Latina. El régimen nazi utilizó su compañía aérea subsidiaria, la Condor, y su servicio diplomático para crear una red de agentes y contactos por toda Suramérica. Hitler y sus consejeros más decididos estaban convencidos de que los latinoamericanos de ascendencia alemana estaban ávidos por unirse a la madre patria y crear territorios separatistas, alertas a todo dictado de Berlín.

Pero la población germana de Brasil demostró ser leal en extremo a su nación del Nuevo Mundo. El efecto de las medidas nazis fue justo el contrario al que habían pretendido los alemanes: el gobierno de Vargas adoptó nuevas leyes restrictivas que requerían que la enseñanza en todas las clases de los colegios fuera en portugués, con lo que se eliminaron los que sólo enseñaban en lengua alemana del sur del país. Como consecuencia, se aceleró la asimilación nacional de los descendientes de alemanes.

Las potencias del Eje no eran las únicas naciones externas interesadas en la competencia geopolítica. Durante muchos años, el ejército estadounidense había considerado a América Latina como un flanco vulnerable, lo que proporcionó el justificante militar para la expansión en el Caribe: la necesidad de proteger unos pasos marítimos vitales. La vasta frontera con México, casi sin vigilancia, era otra zona difícil de defender. El canal de Panamá proporcionaba a Estados Unidos una región de peligro adicional. Algunos oficiales pensaban que lo que se necesitaba era un arco de defensa militar que se extendiera hasta el norte de Suramérica.

Cuando la Alemania nazi construyó su maquinaria bélica, los oficiales estadounidenses lanzaron una mirada más preocupada al flanco latinoamericano. Como la potencia japonesa aumentaba en el Pacífico, Estados Unidos se enfrentaba a la posibilidad de una guerra en dos océanos. Ahora América Latina podía ser amenazada por el este y el oeste. Así pues, Estados Unidos examinó sus lazos hemisféricos desde una nueva perspectiva: cómo podía conseguir el máximo apoyo latinoamericano en caso de guerra.

Parte de la respuesta dependería de las relaciones culturales. Entre las dos guerras, los latinoamericanos habían presenciado un pronunciado aumento de programas educativos patrocinados por gobiernos extranjeros. Debido a su enorme prestigio cultural, los franceses ocuparon la posición favorita. El francés seguía siendo la lengua extranjera que más se hablaba y París era el punto de referencia para los artistas y escritores latinoamericanos. Las universidades de la región, en su origen copias de los modelos ibéricos, cada vez presentaron mayor influencia francesa. En Brasil, por ejemplo, cuando los paulistas quisieron fundar una nueva —la Universidad de São Paulo en 1933—, enviaron una delegación a Francia. En respuesta, París mandó una misión de profesores eminentes de ciencias sociales, que incluía celebridades tales como Claude Lévi-Strauss, Jacques Lambert y Pierre Monbeig. El gobierno francés estableció un programa de becas para estudiar en Francia; programas similares surgieron también en otras partes de América Latina.

Aunque la influencia europea seguía dominando entre las élites, la estadounidense hacía grandes progresos en los medios de comunicación, vehículos

sin rival de la cultura popular en nuestro siglo. En los años treinta, las películas de Hollywood hacían furor en toda América Latina. Sus estrellas de cine como Jean Harlow y Clark Gable eran nombres familiares hasta en pueblos provincianos, como *La traición de Rita Hayworth*, del novelista argentino Manuel Puig, señala vivamente. Su música, en especial el jazz, tenía un efecto similar. La dinámica, fluida, deslumbrante y futurista sociedad norteamericana resultaba fascinadora, aunque produjo una división entre las reacciones populares y las de la élite hacia Estados Unidos, que se iba a intensificar y a aumentar en importancia con el tiempo.

Cuando estalló la guerra en Europa, el gobierno estadounidense incrementó la búsqueda de aliados políticos y militares en América Latina. La administración de Franklin Roosevelt quería: 1) bases militares, en especial en el Caribe y en las costas atlánticas de Suramérica; 2) acceso garantizado a las materias primas vitales como el caucho natural y el cuarzo; 3) disposición para unirse a Estados Unidos en una alianza contra el Eje, si éste entraba en la lucha; o 4) como último recurso, una neutralidad que prohibiría a las potencias hostiles extracontinentales crear plazas fuertes en sus países.

Estos objetivos se lograron ampliamente. El sistema interamericano, que había surgido con una lentitud penosa desde la década de 1880, ahora se aprovechó para los intereses defensivos estadounidenses. Su ejército pudo utilizar bases valiosas, sobre todo en Brasil, y la industria bélica logró el acceso a las materias primas vitales que necesitaba.

La segunda guerra mundial aumentó mucho la influencia estadounidense en América Latina. Alemania e Italia, una vez potencias importantes en la región, quedaron desprestigiadas: la segunda por sus bandazos en busca de nuevos territorios en el norte de África; la primera por el horrible sufrimiento desatado por su maquinaria bélica en Europa. El fascismo ya era un legado en bancarrota en 1945. Sólo la anómala supervivencia de Franco en España y Salazar en Portugal mantenían viva la ideología de derechas y resulta irónico que ninguno de estos países tuviera una influencia política considerable en América Latina.

Franceses e ingleses, aunque vencedores en la guerra, habían quedado muy debilitados. Ambos hubieron de liquidar sus inversiones ultramarinas para pagarla. En 1945, no tenían los recursos o el deseo de competir para lograr influencia en la lejana América Latina. El resultado fue que 1945 contempló el auge de la influencia estadounidense en la región.

La expresión de la influencia estadounidense

Estados Unidos emergió de la segunda guerra mundial con un prestigio y una autoridad muy crecidos. La guerra sacó de la depresión a su economía y la introdujo en un ingente esfuerzo industrial. A diferencia de Europa o Japón, no había sufrido daños internos; su economía estaba intacta y prosperaba. En 1945 alcanzó la mitad de la producción manufacturera mundial y unos dos

tercios de las exportaciones globales. Había construido el arsenal más importante que el mundo había visto, culminado con la bomba atómica, el «arma final» que sólo él poseía. La guerra también le proporcionó una red de alianzas que ofrecía una base de poder fuerte en la política internacional de posguerra.

Una vez finalizada la guerra, muchos políticos latinoamericanos esperaban que el nuevo interés estadounidense por América Latina diera sus frutos. Confiaban en que se prestara una atención mayor a sus problemas, en especial a los obstáculos que impedían su crecimiento económico. Después de todo, Washington podía permitirse ahora mirar hacia el sur, donde sería lógico consolidar una influencia que había aumentado tanto.

Pero no iba a ser así. La política gubernamental estadounidense dejó de lado casi totalmente a esa región a partir de 1945 y centró su atención en reconstruir Europa y Japón. La administración Truman (1945-1953) y el Congreso, junto con algunos perspicaces empresarios, se dieron cuenta de que era esencial para su prosperidad que Europa tuviera una economía fuerte. El Plan Marshall de 1947 apeló al aspecto humanitario y económico de la población estadounidense y ayudó a dirigir la atención principalmente hacia Europa.

¿Qué pasó con América Latina? Simplemente, a los responsables políticos no les pareció importante. Los especialistas en este campo del Departamento de Estado y los servicios militares se vieron degradados o transferidos. La administración Truman parecía dar por sentado que continuaría recibiendo su leal respaldo, casi como si fuera de cajón.

Esta relativa indiferencia se rompió de nuevo por una amenaza exterior. Cuando las relaciones estadounidenses con los soviéticos comenzaron a enfriarse, la administración Truman decidió organizar una ofensiva de guerra fría en América Latina, que adquirió dos aspectos. El primero era conseguir que los gobiernos latinoamericanos rompieran relaciones con la Unión Soviética, lo cual tuvo un éxito notable, ya que todos, con la excepción de México, Argentina y Uruguay, lo hicieron. El segundo aspecto fue presionar a los gobiernos latinoamericanos para que proscribieran los partidos comunistas. Aunque no se dio mucha publicidad en Estados Unidos, el éxito de esta campaña demostró lo sensibles que seguían siendo las élites latinoamericanas a sus directrices.

La administración Truman también decidió hacer más permanente la alianza militar creada durante la guerra. En 1945, una reunión especial de los ministros de Asuntos Exteriores del hemisferio, celebrada en Ciudad de México, convino en la necesidad de redefinir el sistema panamericano. El primer paso se dio en 1947, cuando las delegaciones aprobaron un tratado (el Pacto de Río) que definía el ataque a cualquier Estado americano, desde dentro o fuera del hemisferio, como un ataque a todos y demandaba medidas colectivas para rechazarlo.

El segundo paso se dio en Bogotá, Colombia, en marzo de 1948, con la creación de un nuevo organismo: la Organización de Estados Americanos (OEA). La estructura incluía unos estatutos legales que creaban un consejo

para tratar los asuntos diarios, conferencias interamericanas cada cinco años y reuniones consultivas de los ministros de Asuntos Exteriores para ocuparse de las amenazas contra el hemisferio. La infraestructura burocrática tomó la forma de un Secretariado General y una Unión Panamericana. Los estados miembros se comprometían a mantener una solidaridad continental (deseada por Estados Unidos) y una no intervención total (deseada por América Latina), junto con los principios de democracia, cooperación económica, justicia social y derechos humanos. En pocas palabras, Estados Unidos y América Latina crearon la asociación regional mejor enunciada del mundo. No resulta sorprendente que los estados miembros esperaran cosas muy diferentes de ella.

La OEA se puso a prueba cuando estalló la guerra de Corea en 1950. Estados Unidos tenía tropas apostadas en Corea del Sur, así que se vio arrastrado de inmediato al conflicto. Cuando las tropas norcoreanas cruzaron la línea del sur, Washington convenció al Consejo de Seguridad de la ONU para que considerara a Corea del Norte la agresora. Luego la administración Truman se dirigió a la OEA para pedirle que definiera los ataques norcoreanos como una agresión a Estados Unidos, con lo que obligaba a sus miembros, por el Pacto de Río, a unirse a la batalla. Lo que quería de América Latina era una legitimidad adicional y colaboración militar.

El resto de los miembros se opusieron a este llamamiento, excepto Colombia, que envió un batallón de infantería. En sus intervenciones, los latinoamericanos mostraron mucha más preocupación por sus problemas económicos que por el enfrentamiento militar en la distante Corea. La OEA llegó a un acuerdo: como contrapartida a su compromiso de mejorar sus defensas militares y aumentar la colaboración en este terreno, los latinoamericanos consiguieron la promesa estadounidense de que presentaría propuestas para resolver los problemas económicos del hemisferio.

Para los responsables políticos estadounidenses la guerra de Corea demostró que su batalla contra el comunismo era de ámbito mundial y no sólo europeo. La «caída» de China en 1949 lo hizo aún más evidente. En 1951, la administración Truman y el Congreso decidieron al unísono extender a América Latina su Programa de Seguridad Militar de 1949, que en su origen se había pensado para Europa. De 1952 a 1954 Estados Unidos firmó pactos de ayuda a la defensa mutua con diez países latinoamericanos: Ecuador, Cuba, Colombia, Perú, Chile, Brasil, República Dominicana, Uruguay, Nicaragua y Honduras. (Argentina y México se destacaron por su ausencia.) Según estos acuerdos, Estados Unidos iba a intercambiar equipo y servicios militares a cambio de las promesas de ampliar las capacidades defensivas, enviarle materias estratégicas y restringir el comercio con el bloque soviético.

Las implicaciones de estos nuevos tratados defensivos serían de largo alcance. Washington atrapaba a las fuerzas armadas latinoamericanas en su tela: una vez en posesión de equipo estadounidense, dependerían de él para conseguir piezas, recambios y municiones. Además, mediante el contacto frecuente con su ejército en programas de entrenamiento y maniobras conjun-

tas, se podía esperar que la oficialidad latinoamericana se identificara muy estrechamente con Estados Unidos. Y no menos importante, éste ofrecía mucho más equipamiento del que los países receptores pudieran haber comprado mediante las asignaciones normales de sus gobiernos. De este modo, las fuerzas armadas lograban poder en sus sociedades sin tener que luchar por el presupuesto. Estos vínculos estadounidenses eran una renovación de la estructura establecida por la administración Roosevelt en vísperas de su entrada en la segunda guerra mundial. Ahora, a comienzos de los años cincuenta, Estados Unidos fortalecía su prestigio bélico para extender y consolidar su influencia.

Había otro país que había logrado un gran prestigio durante la guerra: la Unión Soviética. Había perdido mucha más población (20 millones) y soportado mucho más sufrimiento que Estados Unidos. Numerosos latinoamericanos admiraban la resistencia y fortaleza del pueblo ruso y algo de esta admiración se transfería a los partidos comunistas de los países respectivos, que disfrutaron de una popularidad floreciente en 1945. El Partido Comunista Brasileño, por ejemplo, obtuvo un 10 por 100 del voto en las elecciones presidenciales de 1946. Más tarde, ese mismo año, tres miembros del gabinete chileno fueron comunistas, y éstos también estuvieron presentes en el Congreso nacional de Cuba, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Chile, Bolivia, Uruguay y Costa Rica.

Ya desde 1946, la administración Truman comenzó a seguir una línea marcadamente antisoviética en América Latina. La cadena de pactos militares bilaterales fue sólo uno de los instrumentos utilizados para movilizar a los latinoamericanos contra los soviéticos. Como la oficialidad militar solía ser un baluarte de opinión anticomunista y antisoviética, Estados Unidos esperaba establecer vínculos más estrechos con estos elementos para fortalecer su firmeza anticomunista. Los pactos militares y los programas de entrenamiento le otorgaron el monopolio de los vínculos externos entre los militares latinoamericanos.

A primera vista, esta penetración quizás parezca similar a las relaciones que los soviéticos establecieron con sus satélites de Europa Oriental a partir de 1945. Sin embargo, éstos lograron que la estructura militar de sus naciones clientes se integrara mucho más en la estructura soviética, mediante una vinculación directa de la estructura de mando y los sistemas de comunicación, y su intervención en las operaciones cotidianas. Los soviéticos pusieron un cuidado especial en la selección de los candidatos para los puestos de mando más elevados. Además, se aprovecharon de la ventaja de seguir contando con grandes contingentes de tropas apostadas en muchos de los satélites. Aunque su control sobre éstos fue más penetrante y completo, se asemejó al de Estados Unidos sobre América Latina en que ambas superpotencias afrontaron poca oposición.

La administración Truman también expresó interés en la ayuda técnica y económica a América Latina, como réplica parcial al Plan Marshall, prototipo de su ayuda ultramarina. Pero las situaciones resultaron ser muy di-

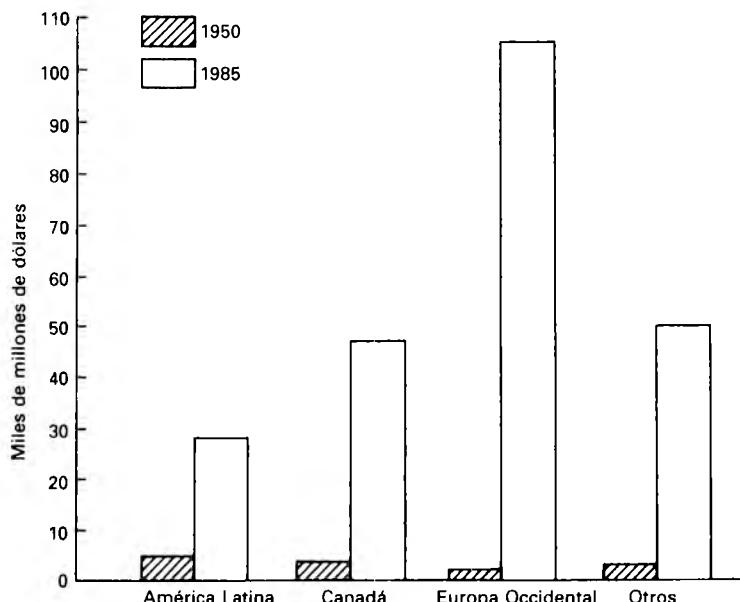
ferentes. El Plan Marshall se dirigió a naciones devastadas, pero que seguían poseyendo el ingrediente económico más importante de todos: fuerza de trabajo cualificada y experimentada. La inversión en esos países europeos—Inglaterra, Francia y Alemania Occidental—podría tener y tuvo una recompensa rápida. Estas economías industriales revivieron y estuvieron en posición de participar en el rápido crecimiento del comercio mundial que iba a producirse a partir de 1950.

El problema económico de América Latina era más fundamental. Había una industria relativamente pequeña incluso en los países mayores; existía una enorme escasez de mano de obra cualificada y de conocimientos técnicos especializados y a menudo se carecía de infraestructura (carreteras, ferrocarriles). Los economistas no sabían cómo estimular el desarrollo económico rápido en esas zonas.

Cualesquiera que fuesen las etiquetas, los economistas y planificadores descubrieron pronto que el simple suministro de más capital, en forma de dólares o de bienes de inversión, no era la respuesta. El desarrollo económico era (y es) un proceso complejo que requiere ajustes en todos los niveles sociales. La administración Truman estimuló una visión compasiva del problema. En su discurso de toma de posesión en 1949, el presidente propuso (en su alocución era el «Punto Cuatro», nombre que después quedó) un programa de asistencia técnica coordinado por su gobierno para ayudar a los países en vías de desarrollo. Era una respuesta parcial a las quejas latinoamericanas acerca de que Estados Unidos no tenía en cuenta sus problemas económicos y concentraba su atención en Europa.

Antes de que el Punto Cuatro del programa de Truman tuviera la oportunidad de ir más lejos, el Partido Demócrata fue expulsado de la Casa Blanca por la victoria electoral del general Dwight D. Eisenhower en 1952. Los republicanos aportaron una nueva filosofía, en especial en la economía internacional. Adoptaron una firme postura de *laissez-faire*, con lo que la primera obligación del gobierno consistía en dejar que operara el mercado libre. El secretario de Hacienda, el empresario de Cleveland George Humphrey, puso en claro de inmediato que esta filosofía de libre empresa eliminaría toda ayuda ultramarina a larga escala, incluso mediante créditos gubernamentales a bajo interés. Igualmente se volvió la espalda a las propuestas en curso para lograr acuerdos destinados a estabilizar los precios del mercado mundial de productos tales como el café y el cacao, especialmente importantes para América Latina. Sobre todo, decían los republicanos, los latinoamericanos no deben desalentar la inversión extranjera privada, lo que en esos años significaba en general inversión estadounidense. (Véase la figura 11.1 para comprobar los datos sobre el crecimiento y la ubicación de la inversión ultramarina estadounidense de posguerra: América Latina atrajo la cuota regional más grande de esta inversión en 1950, aunque sería sobrepasada ampliamente por Canadá y Europa Occidental en los años ochenta.)

Esta orientación republicana hacia América Latina provocó una fuerte reacción entre sus políticos y tecnócratas más jóvenes, reformistas y de men-



11.1. Inversión exterior estadounidense, 1950 y 1985. *Fuentes: New York Times*, 23 de enero de 1967; y Departamento de Comercio estadounidense, *U.S. Direct Investment Abroad*, Washington, U.S. Government Printing Office, 1990, cuadro 1.397, p. 797.

te desarrollada. No resultaba casual que América Latina estuviera comenzando a producir sus propios análisis de sus problemas económicos. Este diagnóstico iba a ayudar a las élites latinoamericanas a definir sus relaciones con el mundo exterior. La rivalidad ideológica se volvía intensa una vez más. En los años treinta, la confrontación había opuesto fascismo y corporativismo, vinculados al poder creciente del Eje en Europa, al liberalismo económico y político, vinculado con Estados Unidos e Inglaterra. Ahora, en la década de los cincuenta, se trataba del nacionalismo radical y el marxismo contra el neoliberalismo, con una posición intermedia que aquí hemos denominado desarrollismo reformista.

El impulso nacionalista

El nacionalismo tiene profundas raíces en América Latina. En una primera forma contribuyó a la rebelión contra España y Portugal a comienzos del siglo XIX. Sin embargo, durante el transcurso de este siglo, pocos nacionalistas se hallaron preparados para resistir las intrusiones económicas extranjeras. El dictador José Gaspar Rodríguez de Francia, de Paraguay (1814-1840), fue uno de ellos, al igual que sus sucesores de la familia López (1844-1870). Pero

este país era relativamente insignificante y su desafío a la potencia económica inglesa significó poco para el resto del continente. Los brotes ocasionales de nacionalismo en Chile y Argentina antes de que mediara el siglo dejaron poco efecto permanente. El siglo XIX contempló el triunfo del liberalismo económico en la región. Sus estrategias orientadas a la exportación se basaban en la ley de la ventaja comparativa. Unas cuantas voces nacionalistas la denunciaron, pero sin mucho impacto real.

Hasta los años treinta, los nacionalistas no pudieron llegar a la esfera de las decisiones políticas. Uno de sus objetivos fue la exploración y producción de petróleo. Algunos nacionalistas, como Alejandro Bunge en Argentina y Roberto Simonsen en Brasil, también sostuvieron con firmeza la industrialización, pues pensaban que no lograrían controlar sus economías hasta que no fuera un hecho. En otras palabras, debían romper con una aplicación ingenua de la ley de la ventaja comparativa que los reducía a exportar bienes básicos para pagar la importación de productos acabados. Tenían que crear la capacidad productiva para sobrevivir a los desplomes de la economía mundial, como la bancarrota de 1929.

Los argumentos en favor de la industrialización comenzaron a influir en la política gubernamental de los años treinta en Brasil y Chile y, en un grado menor, en Argentina. En los tres países, el Estado tomó la iniciativa creando empresas públicas (compañías estatales de petróleo y acero en Argentina y Brasil, CORFO en Chile, PEMEX en México), que aumentaron en gran medida el papel estatal en la economía, un anatema para los que creían en la doctrina económica liberal.

Tras la segunda guerra mundial, el liberalismo económico preparó su vuelta a América Latina, debido en parte al resurgimiento del liberalismo político. También floreció a causa de la fuerte demanda mundial de productos básicos en 1946 y 1947, que hizo aumentar las ganancias en divisas de las economías de la región. Sin embargo, a comienzos de la década de los cincuenta, todas se hallaban en problemas. La demanda mundial de productos primarios se había vuelto caprichosa y sus precios fluctuaban vertiginosamente. Reaparecieron los partidarios de la industrialización, sosteniendo que el liberalismo económico no era la solución del futuro latinoamericano.

En los años cincuenta, se unió al debate una nueva voz latinoamericana: la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), organismo regional de Naciones Unidas creado en 1948. Iba a ser una secretaría de técnicos, fundamentalmente economistas, que analizarían de forma sistemática los problemas económicos de la región latinoamericana y sus países concretos. Su secretario ejecutivo fue Raúl Prebisch, dotado economista argentino que había desempeñado un papel clave en la creación del banco central de su país en los años treinta. La CEPAL se emplazó en Santiago de Chile, en un esfuerzo deliberado por distanciarse de la atmósfera dominada por Estados Unidos de la sede central de la OEA en Washington D.C.

La CEPAL se convirtió en una participante dinámica en el análisis de la relación de América Latina con la economía mundial. Uno de sus logros más

importantes fue formar una generación de economistas latinoamericanos que aprendieron, durante el tiempo pasado en ella, a considerar los problemas de sus países desde una perspectiva continental. También conocieron a sus homólogos de otras naciones y pudieron comparar notas sobre los problemas y las posibilidades de la planificación de la política económica. En esencia, la CEPAL ayudó a producir una mentalidad latinoamericana en el análisis económico.

Sería engañoso concluir que la CEPAL tenía un solo mensaje. Tuvo mucho cuidado en limitar sus publicaciones a análisis técnicos sobre tendencias económicas pasadas, junto con la discusión de las opciones políticas actuales y las proyecciones de los efectos de elecciones políticas apropiadas. A pesar de la selección de temas y la dirección del análisis, mostraba la fuerte influencia de Prebisch y sus discípulos.

La tesis de Prebisch-CEPAL, como acabó conociéndose, era que la economía mundial desde 1880 había funcionado de forma sistemática en detrimento de los países que se basaban en la importación de productos primarios. Se sostenía que los precios de los artículos acabados subían con más rapidez que los de los primarios, por lo que los países en vías de desarrollo se veían en una posición que se deterioraba paulatinamente frente a los países industriales. ¿Cuál era la salida a este dilema? Primero, adoptar acuerdos internacionales para proteger a los exportadores de productos primarios de las enormes fluctuaciones del precio de mercado. Segundo, los países en vías de desarrollo más grandes debían industrializarse.

Estas conclusiones nunca se establecieron claramente en los documentos de la CEPAL, que debían mantenerse como estudios técnicos producidos por una sección de la burocracia de la ONU. Pero eran las implicaciones inequívocas y recibieron un amplio reconocimiento como tales.

Estos argumentos provocaron respuestas feroces, tanto en América Latina como en Estados Unidos. Irritaron a la administración Eisenhower (1953-1961), que consideró al organismo una colmena de pensamiento estatista delusorio al promover políticas que podían afectar a la empresa privada. De hecho, el análisis Prebisch-CEPAL proporcionó munición a los políticos centristas como Vargas, Kubitschek, Frondizi y Frei. Sobre todo, la CEPAL otorgó a los latinoamericanos de mente reformista la confianza para moldear sus estrategias de desarrollo propias, sabiendo que podían contar con un recurso intelectual que era auténticamente latinoamericano.

En otras palabras, la CEPAL ofreció un hito a América Latina en la investigación de sí misma. Era un paso importante, ya que hacía mucho tiempo que sus analistas y políticos se habían sentido en desventaja al enfrentarse a los economistas, banqueros y empresarios del mundo industrial.

La otra fuerza intelectual importante que ganó un nuevo vigor en los años cincuenta fue el marxismo. Para entender su poder en América Latina, ha de observarse de cerca la historia de los partidos comunistas, ya que fueron los principales canales del pensamiento marxista, al menos hasta los años sesenta. No deja de ser cierto que hubo unos cuantos pensadores y políticos

marxistas que no pertenecieron al partido comunista, de los cuales el más famoso e influyente fue José Carlos Mariátegui, de Perú. Pero constituyeron la excepción. Fueron los partidos comunistas ortodoxos, afiliados a la Comintern en los años veinte y treinta, los que más se dedicaron a extender el mensaje marxista. A comienzos de los años cincuenta, ya habían perdido el prestigio que se había desprendido del Ejército Rojo en 1945. Fueron una fuerza insignificante en las elecciones, excepto en Chile. Tuvieron alguna fuerza entre las organizaciones estudiantiles y los sindicatos, pero en general les afectó su identificación con el estalinismo.

Su análisis marxista era una forma relativamente tosca de determinismo económico. Los partidos de cada país explicaban su aplicación concreta según instrucciones de Moscú. Pocos latinoamericanos aceptaron por completo la línea del partido. Sin embargo, cuando los comunistas pasaron a encauzar los sentimientos de un nacionalismo económico, pudieron movilizar más seguidores. Los sentimientos nacionalistas se solían dirigir contra Estados Unidos, contra el que los partidos comunistas concentraban su fuego. Los comunistas y muchos marxistas trataron de desarrollar una postura política claramente antiimperialista (que significaba, sobre todo, antiestadounidense). Sin embargo, el pensamiento marxista estaba relativamente aislado en América Latina durante los años cuarenta y comienzos de los cincuenta, identificado de forma muy estrecha con una red de partidos comunistas bajo la disciplina soviética.

En los años cincuenta se dio una crisis que proporcionó una prueba firme para el argumento antiimperialista. Como se describió en el capítulo 10, Estados Unidos se opuso con fuerza al programa reformista del coronel Jacobo Arbenz en Guatemala. La invasión de exiliados organizada por la CIA en 1954 impuso como presidente a Carlos Castillo Armas, quien de inmediato revocó la expropiación de las tierras de la United Fruit y firmó, como era debido, un pacto de defensa mutua con Estados Unidos en 1955. Los soviéticos, por su parte, sólo permanecieron vigilantes. En Irán se logró un golpe similar en 1953, que derrocó a Mosadegh y repuso al sha. Con su poder y riqueza, Estados Unidos se abría paso a escala global.

El Departamento de Estado podía contar con una falange sólida de votantes latinoamericanos en Naciones Unidas. El dogma de la libre empresa continuaba dominando la política hemisférica estadounidense, a pesar de la existencia de un coro de voces latinoamericanas que pedían acuerdos internacionales sobre los productos, un banco de desarrollo multilateral para las Américas y mayor acceso a la tecnología. Los reformistas demócratas como José Figueres de Costa Rica, Rómulo Betancourt de Venezuela y Eduardo Frei de Chile instaron a Estados Unidos para que fomentara la democracia y la reforma social. Había favorecido con demasiada frecuencia a los dictadores, sosténía Figueres, con lo que alimentó el tipo de izquierdismo extremo que surgió en Guatemala. Se estaba acabando el tiempo: «falta un minuto para la medianoche», como le gustaba anunciar a Figueres de forma teatral.

Estas peticiones cayeron en oídos sordos en el Washington de Eisenho-

wer, hasta que el vicepresidente Richard Nixon viajó a América Latina en 1958. El motivo era fundamentalmente ritual: asistir a la toma de posesión del presidente Arturo Frondizi de Argentina, con paradas en otros siete países suramericanos. Su pasado como virulento anticomunista, al que se había dado mucha publicidad, le convirtió en blanco natural de los estudiantes izquierdistas latinoamericanos. A pesar de las advertencias repetidas de su personal de seguridad, Nixon insistió en hacer sus apariciones públicas. En todas partes hubo manifestaciones, pero fueron especialmente desagradables en Lima y Caracas. En una ocasión los agentes del servicio secreto habían llegado a desenfundar sus pistolas contra una plebe que atacaba el vehículo de Nixon, cuando el conductor logró sacar de allí al vapuleado vicepresidente. Los hechos alcanzaron una publicidad mundial y Washington se preocupó por las causas posibles de ese sentimiento antiestadounidense. La primera revisión importante de su política hacia América Latina comenzó a aparecer en 1959, cuando el gobierno dejó de oponerse a la creación de un Banco de Desarrollo Interamericano. También se hicieron planes para extender la ayuda bilateral. Pero los acontecimientos del Caribe dieron alcance rápido a este modesto cambio en el pensamiento oficial.

La alternativa revolucionaria

Durante su guerra de guerrillas contra el dictador Batista, Fidel Castro se había presentado como un reformista demócrata que luchaba contra la tiranía para restaurar la democracia representativa. Sin embargo, una vez en La Habana, se deslizó firmemente hacia la izquierda. Sabía que cualquier amenaza a la inversión estadounidense —o a su hegemonía política— en Cuba provocaría la intervención de Estados Unidos. A comienzos de 1959, Fidel hizo proposiciones a los soviéticos; a finales de año, Cuba ya recibía ayuda económica de Moscú. Pasado un año más, había completado un cambio casi total en las relaciones comerciales: de una dependencia comercial aplastante de Estados Unidos a una dependencia comercial aplastante de la Unión Soviética. La ayuda militar soviética también había comenzado a derramarse en el país. Resultaba evidente que los soviéticos estaban dispuestos a hacer una apuesta mucho mayor de lo que nunca habían contemplado en Guatemala en 1954.

Entonces se inició la reacción estadounidense prevista por Fidel. El intento de desembarco en Bahía de Cochinos a comienzos de 1961 podría haber resultado si el presidente John F. Kennedy hubiera ordenado que la marina estadounidense proporcionara cobertura aérea, pero rehusó hacerlo. El dilema era muy pronunciado debido a que la administración Kennedy labraba frenéticamente para producir una política latinoamericana nueva y más instructiva.

Estados Unidos se vio humillado: primero por el fracaso de la invasión anticastrista, segundo por la torpe cobertura utilizada para esconder su par-

ticipación. El fracaso hizo a Fidel más fuerte que nunca. Había probado de forma espectacular que Estados Unidos representaba una amenaza constante para la seguridad cubana. Ahora podía aplicar duras medidas contra la oposición interna.

La invasión fallida también confirmó la entrada de otra superpotencia en el hemisferio. El temor tanto tiempo discutido de la penetración soviética en las Américas parecía ser ahora un hecho. Si los soviéticos estaban dispuestos a abastecer a los cubanos, ¿cuántos otros movimientos guerrilleros latinoamericanos podrían esperar el mismo respaldo? Esa preocupación acicateó a los responsables políticos de Kennedy para apresurarse a formular su programa latinoamericano.

La nueva política, según se anunció en 1961, tenía dos aspectos distintos. El primero era un importante programa de desarrollo económico y social patrocinado de forma multilateral, bautizado como Alianza para el Progreso. Iba a implicar tanto crecimiento económico como reforma social y sería llevado a la práctica por los gobiernos democráticos. Cada nación latinoamericana tendría que enviar un plan de desarrollo detallado a un consejo de nueve «hombres sabios», economistas y tecnócratas. El gobierno estadounidense prometió proporcionar fondos, más de 20.000 millones de dólares en diez años. También prometió impulsar a las entidades multilaterales y a los inversores privados de Estados Unidos y Europa para que aumentaran el flujo de capital hacia América Latina. Estados Unidos lanzó esta nueva política con una efusión de publicidad que incluyó una cena de gala en la Casa Blanca para el cuerpo diplomático latinoamericano.

La administración Eisenhower había establecido muchas de las bases de este nuevo programa. No obstante, la teatral adhesión a la causa de la reforma social y la disposición a ejercer presión para conseguir fondos públicos hubiera sido difícil para una administración republicana. En la práctica, el gobierno estadounidense adoptaba ahora la lógica expresada por la CEPAL y por los reformistas demócratas como Figueres y Betancourt. Para sorpresa de muchos de sus detractores, el gobierno estadounidense reclamaba el liderazgo de una revolución social pacífica en América Latina.

El segundo aspecto obtuvo menor publicidad. Se trataba de un programa intensificado de contrainsurgencia mediante el cual el gobierno estadounidense ayudaría a América Latina a combatir contra los movimientos guerrilleros. Los responsables políticos de Kennedy no apostaban sólo por el desarrollo económico y el cambio social. Hasta el reformista más comprometido, razonaban, podía enredarse con una guerrilla rival bien organizada. El ejército y la policía convencionales no podían ocuparse de ello solos. Se necesitaban nuevos métodos, como los que habían perfeccionado los ingleses en su lograda campaña antiguerrillera en Malaya. De este modo, la mística kennediana se aplicó ahora a la creación de nuevos cuerpos de élite de expertos en contrainsurgencia. Se les otorgó una boina verde distintiva y se les dijo que el entrenamiento de fuerzas semejantes en el Tercer Mundo sería una de sus principales tareas.

Como parte de su esfuerzo por proteger a los gobiernos favorecidos, Estados Unidos aumentó sus programas de aprovisionamiento y entrenamiento militar. Se daba la mayor importancia a la modernización del ejército para hacerlo capaz de la acción rápida y coordinada necesaria para combatir a las guerrillas bien entrenadas. También se añadió un nuevo elemento: el entrenamiento y equipamiento de las fuerzas de policía para controlar los disturbios urbanos y el sabotaje, y mejorar sus técnicas de interrogatorio y archivo. Esta actividad se albergó en la U.S. Agency for International Development (USAID; Departamento Estadounidense para el Desarrollo Internacional) con la eufemista etiqueta de «seguridad pública».

La teoría que subyacía en esta política de dos vertientes era que a Estados Unidos le interesaba identificar y respaldar a los dirigentes firmemente reformistas, proporcionándoles ayuda económica para lograr el crecimiento y al mismo tiempo ofreciéndoles los medios de vencer a los rivales armados internos que pudieran contar con ayuda soviética o más probablemente cubana. Estados Unidos apostaba ahora por los reformistas anticomunistas para dirigir la marea histórica latinoamericana y producir naciones más prósperas, más igualitarias y por ello más fuertes, con intereses compatibles con los suyos. Se detendría la penetración soviética, se conservaría la esfera de influencia estadounidense y todo el continente sería mucho más rico.

La Alianza para el Progreso nació para la aclamación pública. El encanto y la elocuencia del nuevo presidente, que contrastaba abruptamente con la imagen empresarial de Eisenhower, excitó la imaginación de los latinoamericanos. Los liberales estadounidenses y europeos se sentían conmovidos, al igual que los que habían criticado la política estadounidense durante mucho tiempo por haberse alineado siempre con los dictadores.

Luego Cuba ganó fama de nuevo. La CIA, en apariencia con aprobación de la Casa Blanca (o al menos de Robert Kennedy), intentó varios complotos para asesinar a Castro, pero todos fracasaron. Mientras tanto, Fidel fortaleció su dominio del país y consideró extender la revolución a otras partes de América Latina.

Los soviéticos se envalentonaron por la debilidad estadounidense en Bahía de Cochinos y decidieron actuar. Durante 1962, inundaron Cuba de equipamiento militar que incluía misiles, difícilmente un arma defensiva, ya que estaban demasiado cerca y eran detectados por el sistema de alarma estadounidense. Estados Unidos consiguió que la OEA aprobara un bloqueo contra todos los barcos que transportaran armas ofensivas a Cuba. Se siguió un alarmante enfrentamiento y los soviéticos acabaron accediendo a retirar los misiles, siempre y cuando Estados Unidos prometiera levantar el bloqueo y diera seguridades de no invadir Cuba en el futuro.

La «crisis de los misiles» de octubre de 1962 tuvo grandes implicaciones en las relaciones de América Latina con Estados Unidos y el mundo. En primer lugar, se había forzado a los soviéticos, mediante la amenaza de un ataque directo estadounidense a sus instalaciones cubanas, a desistir de la ventaja estratégica que trataban de lograr a hurtadillas. En la práctica, ratifi-

caron la hegemonía militar estratégica estadounidense en América Latina, con la excepción de Cuba.

En segundo lugar, Estados Unidos había prometido no entrometerse —al menos mediante invasión directa— en «el primer experimento socialista de América». Fidel sabía ahora que podía concentrarse en construir el socialismo en su país y exportar la revolución al exterior. Sin embargo, necesitaba una gran fuerza de seguridad para guardarse de la CIA y las incursiones patrocinadas por los exiliados, así como para impedir que los cubanos huieran de la isla.

Castro se hallaba en una buena posición para aumentar el apoyo —incluidos dinero, material y entrenamiento— a los revolucionarios de otros lugares de América Latina. Cuba se convirtió en una plataforma para exportar la revolución. Un primer objetivo fue Venezuela, donde el presidente Rómulo Betancourt era el prototipo del reformista demócrata que buscaba la administración Kennedy para América Latina. En noviembre de 1963, el gobierno venezolano anunció su descubrimiento de que Cuba había enviado armas a Venezuela y pidió a la OEA que actuara. Acusaba de que las armas iban destinadas a las guerrillas, precisamente el tipo de fuerzas antidemocráticas que Washington había dicho que justificarían su ayuda contrainsurgente. La OEA apoyó debidamente la acusación venezolana y, en julio de 1964, pidió a las naciones miembros romper todo contacto diplomático con Cuba y suspender todos los vínculos comerciales y de transporte. Cuba iba a ser una nación desterrada del hemisferio. Todos los miembros de la OEA lo acataron, menos México, que tenía razones para querer que continuara el punto muerto entre Cuba y Estados Unidos, pues había reemplazado en parte a la primera como atracción turística y abastecedor de azúcar.

Se había establecido el modelo para el papel que desempeñaría Cuba en el hemisferio. Respaldado por un extraordinario subsidio soviético —mucho mayor per cápita que el otorgado por Estados Unidos a cualquiera de sus regímenes clientes latinoamericanos—, el régimen de Castro se aplicó en dos frentes. Uno era la difícil tarea de construir el socialismo en Cuba, mucho más complicado de lo que la mayoría de los revolucionarios habían previsto en 1960. El segundo era el fomento de la revolución en el exterior. Quien mejor lo exemplificó fue Che Guevara, que pronto se dio cuenta de que, al igual que pasaba en la isla, era más fácil hablar de alentar la revolución que conseguirlo.

Los castristas no fueron los únicos que llamaron a la revolución en América Latina durante los años sesenta. Del mismo modo que la penetración soviética mediante la revolución cubana desafió la hegemonía estadounidense en el hemisferio, la división chino-soviética del mundo comunista fragmentó a la izquierda revolucionaria. Durante los años cuarenta y cincuenta, la izquierda latinoamericana había estado dominada por los partidos comunistas nacionales, casi todos bajo la dirección de Moscú. Sin embargo, a finales de los años cincuenta, la división entre Pekín y Moscú creó nuevas oportunidades para los revolucionarios latinoamericanos. Los maoístas inspiraron a

quienes hacía mucho que se sentían defraudados por los burocratizados partidos comunistas ortodoxos. Ansiaban la revolución ahora, no en un tiempo distante, cuando las «condiciones objetivas» fueran favorables. En los años sesenta surgieron revolucionarios de esta tendencia en todos los países mayores. De forma casi invariable, encontraron un final sangriento.

Los reformistas demócratas y la Alianza para el Progreso

Los forjadores de la Alianza para el Progreso confiaron en una combinación improbable de factores favorables: gobiernos electos que fomentarían el crecimiento económico al tiempo que lograban la reforma social. Si América Latina tenía todos los problemas que sus analistas describían con tanta frecuencia, ¿cómo podían de repente los políticos producir el consenso necesario para llevar a cabo estos programas tan ambiciosos? ¿Por qué iban a apoyarlos los ricos y privilegiados? ¿Podía lograrse el crecimiento económico si las reformas sociales del gobierno amenazaban a los productores establecidos?

En otro lugar hemos visto el destino de los reformistas demócratas de Chile, Brasil, Argentina y Perú. En Chile, Frei (1964-1970) se quedó muy lejos de sus objetivos en ámbitos clave como la reforma agraria y la redistribución. Luego el poder pasó a un reformista más radical, Salvador Allende (1970-1973), bajo quien la política se polarizó de forma muy peligrosa y la economía escapó del control, debido en parte a la guerra económica de Estados Unidos contra Chile. El reformismo —del que Allende seguía siendo representante— había fracasado estrepitosamente. El régimen militar represivo que siguió a partir de 1973 fue en parte lo que la Alianza para el Progreso debía haber evitado.

En Brasil, Jânio Quadros (1961) pareció al principio ser el dinámico reformista muy votado que necesitaba el país. Pero renunció tras sólo siete meses en el cargo, con lo que inició tres años de crisis política que culminaron en un golpe contra su ineficiente sucesor, João Goulart (1961-1964). Los gobiernos dominados por los militares a partir de 1964 hicieron hincapié en el crecimiento económico, pero se ocuparon poco de la reforma social. El resultado fue el aumento de la desigualdad social, combinado con un alejamiento constante en los años sesenta de las elecciones directas, camino que los artífices de la Alianza para el Progreso debían haber pensado que constituiría una invitación a las dificultades.

En Argentina, la mayor esperanza de los reformistas demócratas fue el gobierno de Arturo Frondizi (1958-1962), pero pronto fue puesto en peligro por su impopular programa antiinflacionario y cayó víctima de la antigua confrontación entre peronistas y militares. Ninguno de los gobiernos que siguieron se aproximaron al modelo hipotético de la Alianza para el Progreso.

Venezuela, uno de los pocos países que mantuvieron un gobierno civil continuo, era un lugar privilegiado para la política reformista patrocinada por Estados Unidos. No obstante, produjo una reforma social insignificante y su

importancia siempre se vio comprometida por sus ingresos petroleros llovídos del cielo.

En Perú, el presidente Fernando Belaúnde Terry (1963-1968) parecía un reformista demócrata y apostó por el desarrollo económico, sobre todo mediante la apertura de la Amazonía peruana. Pero no pudo controlar a los militares nacionalistas y también se topó con severas dificultades económicas. Fue depuesto por un golpe militar encabezado por el general Juan Velasco Alvarado, cuyo régimen militar puso en práctica una reforma agraria más radical que cualquiera de las contempladas por Belaúnde. A su vez, Velasco fue reemplazado por un régimen militar más a favor del sector privado, que permitió la celebración de nuevas elecciones en 1980, y Belaúnde, exiliado desde hacía mucho tiempo en Estados Unidos, fue reelegido para la presidencia. Pero las dificultades económicas se amontonaron contra su gobierno reformista.

Colombia fue otro país en el que los planificadores estadounidenses pusieron grandes esperanzas. El presidente de 1958 a 1962, Alberto Lleras Cárdenas, era un elocuente y atractivo político del Partido Liberal, procedente de una importante familia colombiana. Su cuadro de economistas y tecnócratas preparó los detallados planes económicos y sociales que pedía la Alianza para el Progreso. Obtuvieron grandes préstamos del gobierno estadounidense y los organismos multilaterales, y los entusiastas observadores estadounidenses pronto calificaron a ese país de «escaparate» del reformismo democrático. Desafortunadamente, las esperanzas resultaron prematuras, ya que el gobierno colombiano logró una escasa reforma en ámbitos cruciales como la redistribución de la tierra. Aunque el crecimiento económico estaba en ciernes, muy poco de él benefició al sector rural de los poblados de chabolas que se multiplicaban como hongos alrededor de las ciudades. A mediados de los años sesenta, Colombia se había convertido en un ejemplo primordial de las críticas del Congreso estadounidense, como las del senador J. William Fulbright, que encontraba muy pocos de los objetivos de la Alianza cumplidos en ese país «escaparate».

→ Los acontecimientos de la República Dominicana expusieron de modo brutal las contradicciones de la política estadounidense. El asesinato en 1961 de Rafael Trujillo, uno de los dictadores caribeños más famosos, abrió el camino para unas elecciones presidenciales libres, ganadas por Juan Bosch, reformista popular cuyas ideas se adecuaban sin duda al molde de la Alianza para el Progreso. A pesar del apoyo estadounidense, fue depuesto por un golpe militar en 1963. Otra revuelta armada en 1965 desató los temores en la administración de Lyndon Johnson de que surgiera un régimen semejante al castrista, lo que sería un desastre tanto para su política exterior, como para su posición en la opinión interna estadounidense. Johnson escuchó a todos sus consejeros y luego envió 20.000 soldados. Se les unieron tropas de Brasil, ahora regido por un gobierno militar ansioso por mostrar su celo en la guerra fría.

En 1966 fue elegido presidente otro civil, Joaquín Balaguer, y las tropas

estadounidenses y brasileñas se marcharon. Pero Estados Unidos había suscitado resentimiento en gran parte de América Latina por la manera tan dura con la que la administración Johnson había demandado (y apenas había conseguido) la bendición de la OEA para su intervención. No es que se hubiera vuelto a los años veinte, pero tampoco se estaba en la nueva era reluciente que John Kennedy había soñado en 1961.

En 1970 resultaba evidente que la Alianza para el Progreso había fracasado. Las expectativas habían sido demasiado elevadas teniendo en cuenta las realidades políticas de la década. Además, la meta de fomentar la democracia chocó de inmediato con la de impedir más Cubas. En Brasil, por ejemplo, Estados Unidos se convenció de que el presidente João Goulart dirigía a su país hacia la izquierda de forma peligrosa y de inmediato apoyó a la conspiración de civiles y militares cuando lo depuso. A finales de la década, el régimen militar se había unido a las filas de los muy represivos con escasas pretensiones de reforma social; no obstante, continuó siendo el mayor beneficiario de la ayuda estadounidense.

En Argentina, entre 1963 y 1966, Estados Unidos se encontró tratando con el ineficaz gobierno civil de Illia, a quien sucedió el régimen represivo del general Onganía. Pero aquí también un general tenía sus atractivos para Washington, al igual que sus sucesores militares, porque aplastaban el creciente movimiento guerrillero.

La ideología de la Alianza para el Progreso fue establecida por John F. Kennedy y los «nuevos hombres de la frontera», aunque el presidente Lyndon B. Johnson prometió continuar las medidas básicas cuando tomó posesión del cargo en noviembre de 1963. La elección de Richard Nixon en 1968 produjo un cambio en la política. Aunque mantuvo un compromiso retórico con la democracia y la reforma social, en esencia Nixon y sus consejeros estaban a favor del retorno a la postura republicana más conservadora de dejar el desarrollo económico fundamentalmente al sector privado. Su administración también aumentó la ayuda militar, según el consejo del gobernador Nelson Rockefeller, cuya misión presidencial en 1969 a América Latina señaló de forma significativa que «un nuevo tipo de militar está destacando y convirtiéndose con frecuencia en una fuerza importante para la acción social constructiva en las repúblicas latinoamericanas». Las implicaciones resultaban obvias.

Nixon fue el primer presidente estadounidense que tuvo que tratar con un jefe de Estado marxista electo en América Latina. La victoria de Salvador Allende en 1970 fue una prueba para Estados Unidos, comprometido públicamente con la reforma social, pero muy contrario a los movimientos de izquierdas. Aunque el régimen de Allende nunca alcanzó un estadio revolucionario, la administración Nixon estuvo determinada desde el día de su elección a usar cualquier medio («hacer chillar la economía» fue una de las sugerencias de Nixon al director de la CIA, Richard Helms) para impedir que tomara posesión o, si fallaba esto, para acelerar su caída.

Estados Unidos desactivó la inversión privada en Chile y obstruyó, cuan-

do fue posible, su acceso a la financiación de los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo Interamericano. Al mismo tiempo, el presidente Nixon ordenó a la CIA desarrollar y poner en práctica un plan secreto para acosar al gobierno chileno. Se gastaron al menos 10 millones de dólares en subsidios a la prensa opositora chilena (en especial en *El Mercurio*, anti-Allende militante) y a grupos de oposición, incluidos muchos huelguistas que ayudaron a paralizar la economía del país en 1972-1973. Considerado en el contexto de todos los problemas que afrontaba Allende, el esfuerzo estadounidense es muy probable que tuviera una importancia marginal. Fueron los militares y las clases medias y altas quienes se levantaron contra el gobierno de Unidad Popular. No necesitaban lecciones de Estados Unidos sobre qué hacer y cómo, pero éste aumentó la sensación de asedio sentida por el gobierno de Allende y alentó a la oposición para que creyera que les esperaba su generosa ayuda tras el golpe.

De este periodo, no careció de importancia la amplia publicidad que se otorgó a las actividades ocultas de Estados Unidos. La documentación oficial recogida por un comité específico del Senado en 1975 y las revelaciones periodísticas que siguieron confirmaron que seguía estando dispuesto a intervenir del modo que hacía tanto tiempo venían sosteniendo los latinoamericanos. Esta misma tendencia reaparecería durante los años ochenta, cuando el presidente Ronald Reagan autorizó una invasión militar de Granada y una constante campaña de operaciones encubiertas contra Nicaragua.

Desarrollo y endeudamiento

En 1960 Europa Occidental y Japón entraban en América Latina como importantes inversores y comerciantes. Otra fuerza cada vez mayor eran las compañías multinacionales. Empresas como International Telephone and Telegraph (ITT), Philips y Royal Dutch Shell ya no se identificaban con un solo país. Su base de operaciones en distintos países significaba que podían operar un país a otro sólo a la vez que canalizaban los negocios entre sus empresas filiales. Las multinacionales predominaban en muchos ámbitos de gran tecnología. En algunos sectores clave, como el farmacéutico o la informática, a los países no les quedaba más remedio que permitirles la entrada.

Según pasó el tiempo, América Latina fue incapaz de diseñar una estrategia efectiva para solucionar su problema de transferencia tecnológica. La triste realidad es que la tecnología avanzada de los países industrializados la producen empresas privadas que la utilizan para obtener beneficios. No están dispuestas a venderla e insisten en comercializarla ellas mismas. La distribución y las ventas requieren inversión directa, conducente a una remisióninal de beneficios que pueden, en principio, exceder con mucho la inversión original. Además, las multinacionales pueden mantener un poder de monopolio en el mercado local, ofreciendo unos precios más elevados de los que habría permitido un mercado competitivo.

Los intentos efectuados por algunos países (o incluso consorcios de países) para desarrollar una tecnología avanzada se han enfrentado con condiciones desfavorables. Las instalaciones para la investigación y la experiencia de IBM o Bayer, por ejemplo, es difícil que estén al alcance de los científicos e investigadores reunidos con esfuerzo en América Latina. En consecuencia, los términos de la transferencia de tecnología se han convertido en uno de los temas centrales en las relaciones de las economías latinoamericanas con el mundo industrializado.

A finales de los años ochenta, un problema mucho más grave a corto plazo abrumaba a las economías de la región: su asombroso endeudamiento exterior. A comienzos de 1988, la deuda combinada con bancos comerciales (privados) y prestamistas multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano, era de 400.000 millones de dólares y aumentaba a diario. Los tres deudores mayores eran Brasil (113.000 millones), México (108.000 millones) y Argentina (54.000 millones). La mayor parte de la deuda se había producido desde los enormes aumentos establecidos por la OPEP sobre el precio del petróleo en 1973 y 1979, que incrementaron de forma pronunciada la factura de importación de la mayoría de los países latinoamericanos. Los créditos provinieron en general de bancos privados (repletos de depósitos de los exportadores de crudo) y posibilitaron una tasa de crecimiento mayor que la que de otro modo habrían disfrutado. Sin embargo, en realidad sólo pospusieron el pago del incremento del coste del petróleo. Los prestatarios asumieron que podrían aumentar su excedente comercial lo suficiente como para afrontar los créditos. Esto es aplicable a casi toda América Latina, con la excepción de los exportadores netos de petróleo (Bolivia, Ecuador, Venezuela, México desde 1975 y Perú desde 1978) y Argentina, que era prácticamente autosuficiente en crudo.

A finales de los años setenta, los créditos no se limitaron a los importadores de petróleo. Casi todos los países de la región pidieron préstamos ingentes, debido en parte a que los banqueros buscaban decididamente clientes latinoamericanos. Un importante banco estadounidense, por ejemplo, ansioso por emular a los gigantes bancos neoyorquinos, entró tarde al juego y tuvo que contentarse con prestar a Perú, uno de los riesgos mayores. A los banqueros les gustaban estos clientes porque pagaban altos tipos de interés y porque se los suponía inmunes a la bancarrota, ya que Estados Unidos nunca la habría permitido en un país soberano. Pronto los fondos prestados se destinaron al consumo corriente, posibilitando a los gobiernos —ya fueran militares o civiles— ganar el favor a corto plazo de sus conciudadanos urbanos, consumidores de las importaciones. Así, toda América Latina, con la excepción notable de Colombia, se vio enganchada a los créditos de los bancos privados.

El endeudamiento neto de los países en vías de desarrollo es perfectamente normal. Estados Unidos, por ejemplo, fue un prestatario neto hasta 1900. Si los préstamos hubieran ido a América Latina para asegurar un crecimiento futuro y para promover la exportación, entonces la capacidad de

pago habría crecido. En cambio, se derrochó gran parte del dinero. En países como México y Argentina, los ricos controlaron la mayor parte de los fondos prestados e inmediatamente los depositaron en cuentas bancarias en el extranjero.

En agosto de 1982 México declaró que ya no podía efectuar los pagos de su deuda externa y con ello desataría una crisis crediticia mundial. Brasil, el mayor prestatario, se unió a México en diciembre. Desde 1982 ninguno de los principales deudores latinoamericanos había podido pagar demasiado del capital. Incluso el mantenimiento de los pagos de intereses requirió repetidos créditos de «rescate», que luego de inmediato los deudores devuelven al banco como pagos de los intereses. Tales rescates no ofrecieron un alivio a largo plazo, pero produjeron «honorarios» lucrativos para los bancos acreedores y evitaron que los bancos estadounidenses clasificaran los préstamos como morosos. Ello, a su vez, les evitó tener que aumentar sus reservas, lo que habría reducido sus beneficios.

Mientras tanto, los principales deudores se enfrentaron al pago de intereses equivalentes al 5 o 6 por 100 de su PIB. Ni siquiera las cargas impuestas a la Alemania de Weimar como reparaciones por la primera guerra mundial habían alcanzado ese nivel. Casi todos los observadores coincidieron en que los créditos latinoamericanos nunca se pagarían por completo. Los bancos que desearon vender esos créditos a finales de los años ochenta, por ejemplo, se encontraron con que el tipo actual era de cerca del 50 por 100 del valor nominal. Confrontados a tales pérdidas, los banqueros investigaron otras soluciones, como trocar la deuda por inversiones en patrimonio (en el mismo país) o por «bonos de salida», que serían negociables de inmediato en el mercado libre. Ninguno de estos planes redujo de forma significativa el servicio de la deuda a corto plazo. Sólo podía hacerlo una rebaja general del endeudamiento total y el alargamiento de los pagos. Si no se conseguía mediante la negociación, lo más probable era que se produjera por impago, ya fuera declarado o de facto. Algunos bancos estadounidenses comenzaron a aceptarlo como posible en 1987, cuando aumentaron sus reservas en previsión de la pérdida de créditos en América Latina.

La crisis crediticia latinoamericana estuvo acompañada por un prolongado hundimiento económico durante los años ochenta. Un país tras otro ha tenido que adoptar un plan de austeridad ortodoxo al estilo del FMI para satisfacer a los acreedores extranjeros. Las medidas deflacionarias, combinadas con la salida de capital para pagar la deuda, provocaron el estancamiento. En términos per cápita, el PIB latinoamericano cayó un 8,3 por 100 entre 1981 y 1989. No resulta sorprendente que el coste fuera pagado de forma desproporcionada por los más desvalidos, ya que la renta real de los pobres fue la que más se redujo. Pero sus infortunios económicos también afectaron a Estados Unidos, cuyas exportaciones a la región cayeron de 42.000 millones de dólares en 1981 a 31.000 millones en 1986. Los trabajadores de la fábrica Caterpillar, en Illinois, por ejemplo, fueron despedidos, ya que los contratistas de carreteras suramericanos no tenían dólares para comprar las gigantescas

máquinas amarillas que remueven la tierra. La dependencia resultó ser una calle de dos direcciones.

La respuesta internacional a la crisis de la deuda de América Latina comenzó por fin a afrontar los problemas a finales de los años ochenta. En 1985 el secretario del Tesoro de Estados Unidos, James A. Baker III, reconocía abiertamente que los países más endeudados estaban ante una crisis de solvencia estructural, no sólo de «liquidez», y demandó una inyección de 20.000 millones de dólares en los países en vías de desarrollo que quisieran realizar reformas del mercado. El Plan Baker consiguió escasos resultados prácticos, principalmente porque los 20.000 millones de dólares no resultaron disponibles, pero marcó un cambio importante en el enfoque del problema.

En marzo de 1989, Nicholas F. Brady, sucesor de Baker como secretario del Tesoro, propuso una amplia cartera de reducción de la deuda y alternativas de reestructuración y ofreció el apoyo del gobierno de Estados Unidos a los países que emprendieran políticas económicas basadas en el mercado. El Plan Brady tenía dos rasgos distintivos: uno era su flexibilidad y apertura; otro era su explícito reconocimiento de que la reducción de la deuda tenía que ser un elemento integral de una solución duradera de la crisis de la deuda. Hacia febrero de 1990, el Plan Brady desembocó en la reestructuración de casi 50.000 millones de la deuda mexicana, y redujo el valor nominal de la deuda externa comercial de este país hasta en 5.500 millones de dólares. Las negociaciones en términos del Plan Brady también llevaron a acuerdos con Costa Rica, Venezuela, Uruguay, Argentina y, a mediados de 1992, con Brasil. Con las excepciones de Costa Rica y México, la implementación no llevó una reducción muy significativa de la deuda. A través de la expansión de la exportación y el crecimiento económico los países endeudados mejoraron gradualmente su capacidad para pagar los préstamos, y los acuerdos de Brady ayudaron a aligerar la sensación de crisis que envolvía la cuestión durante los años ochenta.

El fin de la guerra fría

Cuando se aproximaba el fin de la década de los ochenta, el orden internacional sufrió un cambio repentino y fundamental: se puso término a la guerra fría. El Muro de Berlín se derrumbó en noviembre de 1989, la URSS se retiró de Europa Oriental y el dinámico dirigente soviético Mijail Gorbachov buscó el reencuentro con Occidente. Hubo un impacto inmediato en Europa, donde Alemania Oriental se incorporó a una Alemania «reunificada» y los países de Europa Oriental se sumergieron de sopetón en transiciones políticas espectaculares. Pero también se produjeron impactos en otros lugares. Estados Unidos y la Unión Soviética, como dos superpotencias mundiales, ya no volverían a enzarzarse en la competición nuclear y en una lucha incesante por todo el mundo. Los países del Tercer Mundo ya no proporcionarían el campo de batalla para este conflicto. Capitalismo y comunismo dejarían de

rivalizar por la supremacía ideológica y económica. Era el fin de una era: algunos llegaron a denominarlo incluso «el fin de la historia».

A mediados de 1990, las implicaciones para América Latina y sus relaciones con Estados Unidos aparecían sólo como un esbozo vago. Estados Unidos ya no percibiría como interés principal evitar la amenaza comunista en la región. En principio, esto debería haberle obligado a revisar su política hacia El Salvador a finales de los años ochenta, donde continuó apoyando al gobierno de derechas contra un movimiento rebelde, y hacia Cuba, donde continuó expresando una implacable hostilidad hacia el régimen de Castro durante los años noventa. El cambio de política fue lento. Se trataba de ver si el gobierno estadounidense dejaría de desconfiar de los movimientos y políticos reformistas, que habían precedido con holgura la llegada de la guerra fría.

Al mismo tiempo, el fin de la guerra fría implicaba un cambio en el contenido ideológico de los movimientos reformistas y radicales latinoamericanos. El derrumbe del comunismo internacional propinó un golpe casi mortal a las doctrinas y organizaciones comunistas y socialistas de toda la región. La adhesión al marxismo parecía ser una receta cierta para el rechazo y la derrota. Sin duda, algunos movimientos permanecieron impávidos frente a la adversidad doctrinal —como Sendero Luminoso de Perú—, pero la mayoría comenzó a revisar sus perspectivas de acuerdo con las ideas «socialdemócratas» que se extendían por Europa y otros lugares. Mientras tanto, el radicalismo tomó una nueva apariencia, pasando del socialismo hacia el nacionalismo o el populismo. En pocas palabras, los acontecimientos globales tuvieron impactos de largo alcance en el panorama político de América Latina.

Una consecuencia más de la conclusión de la guerra fría fue la desaparición de toda gran potencia que pudiera rivalizar por la hegemonía estadounidense dentro del hemisferio occidental. Casi de inmediato, la URSS redujo su perfil en América y su apoyo a Fidel Castro y a los movimientos rebeldes. Una de las características más notables de la invasión estadounidense de Panamá, en diciembre de 1989, fue la ausencia de una condena energética por parte de las principales potencias mundiales. Las autoridades de Europa Occidental estaban preocupadas con los acontecimientos ocurridos en Europa Oriental; y aunque Japón mostraba un interés creciente en mantener relaciones económicas con América Latina, sus portavoces aclararon y resaltaron de forma repetida que no pretendían desafiar la hegemonía estadounidense en la región. Los dirigentes asiáticos y europeos parecían conceder que América Latina era, después de todo, el «patio trasero» —y la responsabilidad— de Estados Unidos.

No estaba claro al comienzo cómo ejercería Estados Unidos su nueva hegemonía en el hemisferio. Algunos observadores sostenían que Washington debería «redescubrir» América Latina y desarrollar una armonía natural de intereses económicos y sociales. Otros predecían que, en ausencia de conflicto Este-Oeste, Estados Unidos no se preocuparía más por la región. «Después de muchos años de preocuparse por la excesiva intromisión de Estados Unidos —escribía un comentarista en 1990—, América Latina podría sufrir

pronto su indiferencia, agravada por el relativo desinterés mundial tradicional. El hemisferio bien podría afrontar la perspectiva de una “africanización”: condena a los márgenes de los flujos financieros y comerciales mundiales, pero también al olvido y a la irrelevancia.» Sin la guerra fría, América Latina podría encontrarse ante una posible marginalidad.

Integración económica regional

Finalmente, los factores económicos llevaron a Washington a abogar por la adopción del «libre comercio» en toda América. El objetivo era desarrollar crecientes mercados para las exportaciones de Estados Unidos, aumentar la eficiencia de sus manufacturas (principalmente mediante el acceso al trabajo de bajo costo), y, en una diversidad de formas, fortalecer su «competitividad» en la economía internacional. La integración regional en América fortalecería el poder de Washington en las negociaciones con Europa, Japón y otras potencias.

En 1990 el gobierno de Bush inició negociaciones formales con Canadá y México para la creación de un área norteamericana de libre comercio. También a mediados de 1990, el presidente Bush propuso el desarrollo de una zona de libre comercio que abarcaría todo el hemisferio occidental. Afirmando que «la prosperidad de nuestro hemisferio depende del comercio, no de la ayuda», Bush preveía la creación de una zona de libre comercio que se «extendiera desde el puerto de Anchorage hasta la Tierra del Fuego».

El primer paso en este proceso sería el tratado con México, firmado en 1992. Tal como se ha descrito en el capítulo 7, el Tratado de Libre Comercio (TLC) entró en vigor en enero de 1994 y creó uno de los bloques comerciales más grandes del mundo. Esencialmente, el TLC promovió la libre circulación de bienes entre Canadá, México y Estados Unidos, al eliminar los gravámenes, aranceles y barreras comerciales durante un período de quince años. El TLC también abrió México a la inversión estadounidense en diversas formas. Finalmente, el TLC marcó un momento decisivo en la política económica de Estados Unidos y en sus relaciones con México. Por primera vez en su historia, Washington estaba siguiendo una estrategia explícita de integración económica con su vecino del sur.

No obstante, las perspectivas de una zona de libre comercio que comprendiera todo el continente americano, permanecían inciertas. George Bush había hablado de una zona de comercio libre que abarcara desde Alaska hasta Argentina, y en diciembre de 1993 el vicepresidente Al Gore respaldó la perspectiva de «una comunidad hemisférica occidental de democracias» que consolidaría la armonía política y económica en toda la región, con el TLC como «punto de partida». Interesados en tener acceso a este círculo privilegiado, los líderes latinoamericanos llegaron a ver la adhesión final al TLC como parte clave de su estrategia de desarrollo. Las expectativas pronto llegaron muy alto.

Sin embargo, la formación de una «área hemisférica de libre comercio» se enfrentaba a formidables obstáculos, tanto económicos como políticos. El fundamento comercial era menos convincente que en el caso del TLC, cuyos socios, especialmente México, podían abrigar dudas sobre admitir nuevos miembros y compartir su estatus como países con acceso exclusivo al mercado estadounidense. Y mientras el TLC tenía fuertes motivaciones políticas, como se ha descrito en el capítulo 7, no había tal incentivo apremiante para un convenio hemisférico.

Pese a estos desacuerdos, el gobierno de Clinton promovió y celebró una grandiosa «cumbre de las Américas» en Miami en diciembre de 1994. Con la asistencia de 34 jefes de Estado, con la notoria excepción de Fidel Castro de Cuba, esta fue la primera reunión de este tipo desde 1967, en que Estados Unidos y América Latina coincidieron en un plan frustrado de integración económica. El objetivo evidente de la cumbre de Miami era desarrollar un proyecto para la colaboración hemisférica en el siglo XXI. Un propósito implícito, desde la perspectiva de Washington, era dar seguridades de que Estados Unidos no descuidaría ni abandonaría al resto de países latinoamericanos fuera de México. Después de una intensa negociación entre bastidores, el programa de Miami finalmente se concentró en una «Área de Libre Comercio en las Américas».

Lo que ocurrió de hecho fue que los firmantes de Miami determinaron que el año 2005 fuera el plazo para la conclusión de *negociaciones* para una área de libre comercio; y cuya implementación seguiría en los años posteriores. Este era un resultado ambiguo. Sus partidarios aclamaron el acuerdo por sus principios altruistas y ambiciosos objetivos. Los escépticos lamentaron su vaguedad y su prolongado calendario, que significaba que las conversaciones oficiales podían demorarse una década o más. Irónicamente, la resistencia principal a la realización práctica de una área de libre comercio en toda América tenía más probabilidad de surgir en Estados Unidos, no en América Latina. Como señalaba un observador: «Los verdaderos escollos son el Congreso y la opinión pública estadounidenses. El público no está listo para un acuerdo de libre comercio con América Latina. En el ambiente de la posguerra fría, no entienden cuáles son los valores dominantes».

Entretanto, los gobiernos latinoamericanos respondieron a esta incertidumbre continuando con estrategias de integración subregional: proyectos de cooperación económica entre grupos de países latinoamericanos, antes que para todo el continente en su conjunto. Se resucitó el Mercado Común Centroamericano, se revigorizó CARICOM, y se reformó y revitalizó el Pacto Andino. Pero el más ambicioso e influyente de estos planes surgió en Suramérica, donde el «Mercado Común del Sur» (MERCOSUR) unió los destinos económicos de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. De acuerdo con el Tratado de Asunción, firmado en marzo de 1991, los países miembros se comprometieron a construir hacia diciembre de 1994 una unión aduanera, con un arancel externo común, y a proseguir adelante hasta un mercado común pleno en los años siguientes. Especialmente a la vista de las antiguas ri-

validades entre los miembros que lo constituyen, MERCOSUR era un avance verdaderamente significativo. Sus países asociados constituyen casi la mitad del producto interno bruto de América Latina, más del 40 por 100 de toda su población y cerca de un tercio de su comercio externo.

Más importante que su tamaño, sin embargo, es su orientación estratégica. Según uno de los artífices originales del proyecto, la principal innovación de MERCOSUR proviene de su compromiso con una «integración orientada hacia afuera», esto es, de su determinación de hacer a los estados miembros más competitivos en el campo internacional, antes que confiar en los mercados cerrados por medio de la industrialización de sustitución de importaciones. MERCOSUR también tiene objetivos políticos claros: la consolidación de la democracia y el mantenimiento de la paz en el Cono Sur. Al mismo tiempo que tomaba cuerpo MERCOSUR, se llegó a acuerdos en el campo nuclear entre Argentina y Brasil, países que compartían una significativa capacidad nuclear así como una rivalidad histórica. En este sentido, MERCOSUR daría a los demócratas civiles en toda la subregión una oportunidad regular de consulta y apoyo mutuo, equilibrando así los cónclaves hace tiempo establecidos de representantes de las fuerzas armadas.

Desde el comienzo, sus creadores vieron MERCOSUR como una institución dinámica, una que evolucionaría rápidamente a través del tiempo y también cristalizaría en las relaciones con las economías industriales avanzadas. Una vez que el presidente Bush anunció la Iniciativa para las Américas, MERCOSUR se convirtió en un instrumento potencial de negociación colectiva: tal como un observador brasileño recordaba: «había la percepción de que sería interesante concentrar esfuerzos y negociar *en bloque*». También surgieron tendencias contradictorias, Argentina expresó interés en negociar su propio tratado de libre comercio con Estados Unidos (y/o conseguir la incorporación al TLC), una acción que llevaría lógicamente al desmantelamiento de MERCOSUR.

Tomando un enfoque diferente, Brasil lanzó su propuesta en abril de 1994, para una Área de Libre Comercio de Suramérica (ALCSA). El objetivo de ésta era crear una zona de libre comercio en todo el continente por un decenio, de 1995 al 2005. Las intenciones subyacentes de ALCSA eran múltiples: capitalizar la experiencia de MERCOSUR, que llevó al crecimiento del comercio intrarregional; evitar el «aislamiento» de MERCOSUR, especialmente de Chile y el Grupo Andino; y acumular capacidad negociadora para tratar la posibilidad de planes de integración más amplios en América. No por casualidad, ALCSA confirmaría el reclamo histórico de Brasil de ser la potencia dominante en Suramérica.

Cuando los esquemas de integración regional avanzaron en los años noventa, un interrogante central surgió: ¿Cuáles serían las implicaciones a escala mundial? ¿Promoverían la cooperación, o provocarían hostilidad entre los bloques regionales competidores? Los optimistas aseguraban que la integración regional necesariamente generaba la consulta y colaboración multilaterales. Los escépticos expresaban el temor de que, incluso aunque lograran la

cooperación interna entre los países miembros, los planes de integración estimularían el conflicto externo con otros grupos regionales. En particular, advertían sobre el surgimiento final de tres grandes bloques económicos:

- un bloque europeo, que finalmente incluiría a Europa Oriental y posiblemente parte de la antigua Unión Soviética;
- un bloque norteamericano, que incluiría a Canadá, México y Estados Unidos (en la forma del TLC) o un bloque hemisférico occidental que incluiría a todos los países de América (como lo preveía el tratado para una «Área de Libre Comercio de las Américas»);
- un bloque asiático o del Pacífico, que incluiría a Japón y a los países vecinos, y eventualmente a China.

La creación de bloques comerciales hostiles podría tener consecuencias imprevisibles para América y el mundo en general. Un desafío central de los años noventa sería asegurar que la liberalización e integración a nivel regional promoviera la liberalización y la cooperación a nivel global.

El programa social

Aparte de la economía, la agenda interamericana de los años noventa se concentró en las cuestiones sociales. Uno de los asuntos más polémicos era la emigración, especialmente la inmigración ilegal. Hacia 1994 la proporción de estadounidenses nacidos en el extranjero había llegado al 8,7 por 100, el nivel más alto en más de 50 años. (Se estimaba que 6,2 millones de estos residentes, legales e ilegales, venían de México, más de 800.000 de Cuba, y más de 700.000 de El Salvador.) Según otra estimación, puede haber entre 2,5-4,0 millones de «ilegales» en Estados Unidos de todas partes del mundo a comienzos de los años noventa, con más de la mitad procedentes de México, y otros muchos de Centroamérica y del Caribe.

Los migrantes indocumentados llegaron a desempeñar un importante papel en la economía de Estados Unidos, especialmente en áreas como Florida y California, donde proporcionaban trabajo cualificado por bajos salarios. Además de trabajar como braceros en la agricultura, los ilegales de América Latina ocuparon empleos en la construcción, restaurantes, hoteles y otros sectores de servicio. Mientras algunos trabajadores estadounidenses consideraron a estos migrantes una fuente de competencia, los empleadores tendían a considerarlos como una fuente de trabajo segura y dócil.

El flujo de extranjeros, no obstante, encendió una reacción política. Como se ha señalado en el capítulo 7, sobre México, la ley Simpson-Rodino de 1986 no redujo significativamente la migración ilegal («indocumentada») a Estados Unidos. Cuando la economía estadounidense luchaba por salir de la recesión en los años noventa, los políticos comenzaron a acusar a los migrantes de ocupar los empleos de los ciudadanos estadounidenses y de abu-

sar de la seguridad social. Los votantes en California aprobaron una medida que privaría de servicios sociales (como atención médica y educación pública) a los ilegales y a sus hijos. La acción militar en Haití fue promovida en parte por el deseo de impedir una migración en gran escala desde Haití. Y en 1995, un juez de Texas declaró a una mujer culpable de abuso infantil por hablar sólo en castellano en su casa. El sentimiento xenófobo estaba claramente en alza, y el clima se había hecho tenso en muchas comunidades en Estados Unidos.

Otra cuestión social se refería a las drogas ilegales. El tráfico de drogas ilegales desde América Latina a Estados Unidos, especialmente cocaína, continuó durante los años ochenta y comienzos de los noventa. Según algunas estimaciones, este tráfico creció hasta 110.000 millones de dólares anuales, y se decía que era la actividad económica más importante para el crimen organizado en Estados Unidos. La hoja de coca era cultivada en los Andes, especialmente en Perú y Bolivia, se remitía luego a Colombia donde se transformaba en cocaína y se preparaba para exportarla al mercado estadounidense. La marihuana crecía en México, Centroamérica y en otras partes (incluidas partes continentales de Estados Unidos). La heroína venía de otros lugares del mundo, pero respondía a las leyes de oferta y demanda: cuando el suministro del Oriente Próximo se agotó a comienzos de los años setenta (con la ruptura de la infame «conexión francesa»), los traficantes hábiles alentaron su producción en América Latina; y cuando la heroína recobró su popularidad entre los consumidores de Estados Unidos en los años noventa, la producción latinoamericana creció significativamente. Entretanto, otros países de la región —Jamaica, Panamá, Venezuela, Brasil, Argentina y Chile— se convirtieron en centros para el transbordo de drogas y el blanqueo de dinero.

Uno de los efectos más corrosivos de este tráfico es fomentar poderosos círculos de traficantes, que llegaron a organizar graves desafíos a la legítima autoridad política. Esto fue más evidente en Colombia, donde los «cárteles» criminales organizados ejercieron un poder *de facto* combinando la corrupción y la intimidación. Durante los años ochenta, el «cártel de Medellín» intentó tomar el país por rehén al desatar una masiva campaña de violencia, asesinando a una serie de funcionarios públicos y a un candidato presidencial. A comienzos de los años noventa, el «cártel de Cali» utilizó tácticas más sutiles y avanzadas, recurriendo al soborno y a la cooptación antes que a la coerción; esto estalló en un escándalo político en 1995, cuando se hizo patente que el presidente del país había aceptado grandes sumas de dinero de la droga para financiar su campaña electoral. Asimismo, en México y en otros países de la región, los barones de la droga y sus organizaciones criminales acumularon un nivel significativo de influencia política y económica.

La causa última del narcotráfico en América Latina ha sido la fuerza de la demanda de los consumidores, especialmente en Estados Unidos. A inicios de los años ochenta, se estimaba que casi 25 millones de estadounidenses ha-

cían uso habitual de drogas ilegales. Hacia inicios de los noventa, esta cifra se había reducido a la mitad, cuando los habitantes suburbanos de clase media dejaron las drogas, pero el uso de drogas duras, el «crack» y la heroína, persistió en los barrios marginales de las ciudades de Estados Unidos. La demanda de sustancias ilegales también floreció en Europa, Asia y la ex Unión Soviética, lo cual ofreció una oportunidad irresistible para los barones de la droga y planteó un desafío a las autoridades gubernamentales. Como un ex presidente de Colombia lamentaba una vez: «La única ley que los narcoterroristas no rompen es la de la oferta y la demanda».

En respuesta a estos desarrollos, la política de Estados Unidos intentó detener el narcotráfico acabando con la fuente de suministros. El presidente Ronald Reagan declaró la «guerra a la droga» que se concentró principalmente en erradicar cultivos y confiscar envíos: la idea era cortar los suministros, elevar los precios y disuadir a los consumidores de comprar drogas. George Bush continuó con esta línea, lanzando la invasión militar de Panamá en 1989 como parte de la guerra a la droga. Con el presidente Clinton, esta política cambió, aunque sólo ligeramente, con el aumento presupuestario para el tratamiento y prevención de la drogodependencia. Pero la insistencia principal era todavía el cumplimiento de la ley, y estos esfuerzos tuvieron pocos resultados. Algunos observadores demandaron la creación de una fuerza policial internacional; otros defendían la descriminalización (o legalización) de la posesión de drogas en Estados Unidos. Sólo una cosa era evidente: en tanto que el tráfico ilícito continúe, supondrá una grave amenaza para el orden social y político en América Latina, y un obstáculo importante en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina.

La cultura hispana dentro de Estados Unidos

En la década de los noventa, Estados Unidos se encontró frente a una nueva dimensión en su relación con América Latina. De repente descubrió que tenía una de las mayores poblaciones de hispanohablantes del hemisferio. En 1990 los datos de la Oficina del Censo situaron a la población hispana en 22,3 millones, pero los observadores mejor informados pensaban que era mayor si se incluían todos los inmigrantes ilegales (etiquetados de «indocumentados» en el lenguaje oficial más circunspecto). Esto significaba que sólo México, Argentina y Colombia tenían poblaciones de hispanohablantes mayores en el hemisferio occidental.

Según los datos de 1990, por ejemplo, la ciudad de Nueva York tenía 1.800.000 hispanos, fundamentalmente de Puerto Rico y el Caribe. Suponía un aumento sobre el 1.200.000 de 1970, logrado a pesar del hecho de que la población total de la ciudad había descendido durante los años setenta. En el sistema de educación pública de Los Ángeles y Chicago, los estudiantes hispanos habían llegado a sobrepasar a los blancos. Representaban el 26 por 100 de la población de California, el estado más poblado de la nación, y el 26 por

100 de Texas, el tercer estado más poblado. En gran parte del sur de Florida, especialmente en la zona de Miami, la influencia hispana (cubana sobre todo) predominaba claramente. Y lo que resulta más significativo de todo, entre 1970 y 1980 la población hispana estadounidense aumentó más de un 50 por 100 y otro 53 por 100 hasta 1990. En muchas ciudades del suroeste la población crece más de prisa que la negra o la anglosajona (como se ha etiquetado a los blancos no hispanos). El incremento se debe no sólo a los nacimientos, sino a la afluencia de nuevos inmigrantes.

Hay razones para creer que quizás estos hispanos conservarán su lengua y cultura por más tiempo del que lo hicieron las generaciones previas de inmigrantes de lengua no inglesa a Estados Unidos. Millones de inmigrantes se han enfrentado a la dolorosa cuestión de cómo —si es que se puede— preservar la cultura no estadounidense. Las oleadas de europeos fueron filtradas por las escuelas públicas de Nueva York, Filadelfia, Chicago y Cleveland, donde cada uno asumió que la única lengua que allí se hablaba era el inglés. De hecho, los padres inmigrantes solían prohibir a sus hijos hablar su lengua del Viejo Mundo porque se sentían ansiosos de hacerlos americanos. El resultado fue que usualmente la segunda generación inmigrante y con certeza la tercera no conocía en absoluto su lengua ancestral: alemán, polaco, italiano o griego. Todos querían americanizarse y la lengua era el primer instrumento que tenían a mano.

Por otro lado, los hispanos han alcanzado una fase central en Estados Unidos en un momento diferente de su historia. Siguieron al activismo del movimiento negro de los años sesenta, que generó con retraso una nueva legitimidad para las tradiciones culturales de las minorías étnicas. Al operar en este clima de opinión (que mezcla culpabilidad y compasión anglosajona), los hispanos han efectuado una campaña exitosa para instituir el bilingüismo en las escuelas y los servicios públicos. La lógica consiste en que los estadounidenses de habla española, por su número y por la discriminación que han sufrido, se merecen la oportunidad de continuar utilizando su lengua. Y lo que es más importante, sostienen que los niños hispanos se desorientan y desmoralizan cuando se enfrentan a una escuela exclusivamente en lengua inglesa. El mantenimiento de cierta instrucción en español ayudará a fortalecer su confianza y forjará vínculos entre su cultura y la sociedad estadounidense más amplia.

El bilingüismo en las escuelas públicas pretende posibilitar de forma oficial que los niños de habla española den las asignaturas en español a la vez que aprenden inglés. El argumento es que pueden aprender biología o matemáticas lo mismo en español que en inglés. El objetivo final es que el niño termine sus estudios secundarios con un dominio absoluto del inglés y el español. Quienes critican el sistema sostienen que resulta demasiado frecuente, sobre todo en las escuelas con un alto porcentaje de hispanohablantes, que los alumnos no aprenden un inglés correcto y quizás tampoco gramática española. De ser así, entran en el mercado laboral con una grave desventaja.

Sea cual fuere el caso, hay millones de hispanohablantes estadounidenses

que no cuentan con el inglés suficiente para poder desenvolverse en asuntos esenciales. En respuesta, el gobierno federal de Estados Unidos publica ahora en español y en inglés una amplia gama de anuncios oficiales e impresos. Las autoridades de las ciudades, condados y estados de las zonas clave —incluidas ciudades del norte como Chicago y Kansas City— han tenido que contratar personal que hable español. En la práctica, Estados Unidos tiene ahora grandes regiones y bolsas urbanas donde el español posee sanción oficial como segunda lengua.

No cabe duda de que esto tendrá implicaciones para la sociedad estadounidense. Las ciudades de Nueva York, Newark, Miami y Los Ángeles cuentan con una programación regular de televisión en español y todo el suroeste, desde Texas hasta Los Ángeles, tiene una red de televisión por cable conectada directamente con la televisión nacional mexicana. Ésta, como el bilingüismo, ayudará a mantener viva la cultura hispana.

La política es otro de los ámbitos donde ha comenzado a sentirse el poder hispano. Como los negros, los hispanos han tendido a ser apáticos. Suspicaces durante mucho tiempo hacia el mundo anglosajón, no solían ver ninguna ventaja en votar. Sin embargo, en algunas ocasiones los votantes hispanos han comenzado a hacer oír su voz. En San Antonio, Texas, por ejemplo, Henry Cisneros fue elegido alcalde en 1981, el primero de ascendencia mexicano-americana. Nuevo México eligió un gobernador mexicano-estadounidense, Jerry Apodaca, al igual que ocurrió en Arizona con Raúl Castro. En la ciudad de Nueva York, los hispanos van aumentando su influencia en el Partido Demócrata de forma constante. En Miami, la comunidad cubano-estadounidense ha logrado prominencia en sectores del comercio, la banca y los bienes raíces, y se ha convertido también en una fuerza política importante. Y, una vez elegido en 1992, el presidente Bill Clinton designó a dos hispanos como miembros de su gabinete.

Este aumento de la presencia hispana influirá en el modo de pensar público acerca de asuntos clave de sus relaciones con América Latina. Por una amplia gama de complejas razones, los ciudadanos estadounidenses ya no pueden permitirse dejar de lado a América Latina.

Desde los años sesenta, América Latina se ha visto cada vez más atraída por un mundo más amplio. La hegemonía estadounidense en la región, en su cima de 1940 a 1960, pareció estar decayendo después, pero luego revivió una vez finalizada la guerra fría. De todos modos, el pluralismo puede ser una opción para ella. Los gobiernos pueden negociar el modo de conseguir ayuda de un amplio espectro de fuentes extranjeras. La experiencia pasada sugiere que el único medio de escapar de la dependencia es aumentar las opciones. Gabriel García Márquez, uno de los escritores latinoamericanos contemporáneos más famosos, lo precisó de forma elocuente en su discurso de aceptación del premio Nobel en 1982:

¿Por qué la originalidad que se nos admite sin reservas en la literatura se nos niega con toda clase de suspicacias en nuestras tentativas tan difíciles de cambio social? ¿Por qué pensar que la justicia social que los europeos de avanzada tratan de imponer en sus países no puede ser también un objetivo latinoamericano con métodos distintos en condiciones diferentes?

Mientras Estados Unidos afirmaba su preeminencia hemisférica en el entorno posterior a la guerra fría, los latinoamericanos continuarían su búsqueda de una vía autónoma para la igualdad, la prosperidad y la independencia.

Epílogo

¿Qué futuro le espera a América Latina?

Predecir el futuro es siempre arriesgado, mucho más el de América Latina. De ella se ha dicho una y otra vez que se encontraba al borde de un desarrollo maravilloso, sólo para defraudar a los optimistas. En 1912, lord Bryce, tras una gira por Suramérica, predijo que su zona templada «sería la cuna de naciones ricas y populosas, y posiblemente de grandes naciones». En 1910, otro viajero inglés situó a Brasil «en el camino que conduce con toda seguridad, aunque despacio, a un futuro de gran prosperidad». Más de ochenta años después la certeza se había desvanecido.

Se ha afirmado con frecuencia que la educación resolvería todos los problemas latinoamericanos. La ignorancia y el analfabetismo mantenían atrasados a sus pueblos. ¡Si pudieran seguir el ejemplo europeo y estadounidense de ofrecer una educación estatal generalizada! ¿Pero cuáles han sido las naciones más educadas de América Latina? Argentina, Chile y Uruguay, y esos países han producido las dictaduras militares más represivas de los años setenta. Se quebrantaron sus elegantes constituciones, se clausuraron sus congresos y sus tribunales se convirtieron en un simulacro. ¿Cómo pudo suceder?

Pero si la predicción es traidora, también es necesaria. Cuando seguimos el desarrollo económico de América Latina, no podemos evitar preguntarnos por el resto de la historia. Y como Estados Unidos sigue teniendo intereses vitales en la región, no podemos dejar de lado las posibles implicaciones de sus acontecimientos futuros para él y sus ciudadanos.

La predicción también cuenta con otras virtudes. Cuando nos esforzamos por pensar en el futuro, hemos de volver a pensar sobre el pasado. Para calcular un futuro equilibrio de fuerzas, debemos comprobar el peso pasado y presente. Si el movimiento obrero urbano ha estado sujeto a la manipulación en Brasil, ¿continuará estándose? ¿Por qué el golpe chileno de 1973 costó miles de vidas, mientras que el brasileño de 1964 apenas se cobró alguna? Deben ponderarse estas preguntas históricas antes de considerar escenarios posibles para los años noventa y en adelante. Y, con cierto cuidado, podemos esperar identificar fuentes de cambio y determinar una escala probable de resultados.

Preparación para la predicción: análisis comparativo

Comencemos por una investigación retrospectiva acerca de los estudios presentados en este libro. En el capítulo 2, ofrecemos un esbozo sistemático de las transformaciones históricas sufridas por América Latina desde 1880 y en los siguientes trazamos la historia de países y regiones concretos. Una de nuestras preocupaciones permanentes ha sido centrarnos en 1) la situación de cada país dentro de la economía mundial, 2) la estructura social asociada con cada modelo de actividad económica, 3) el tipo de coalición entre las clases o grupos que pudieran resultar, y 4) las consecuencias políticas derivadas de todos estos factores.

Tratamos de abordar este problema mediante un análisis comparativo sistemático, lo cual requiere una estructura conceptual amplia. En la conclusión del capítulo 2, presentamos una serie de cuestiones que se consideran en cada uno de los casos estudiados. Resulta esencial para estas interrogaciones el enfoque otorgado a la estructura y alineación de las clases sociales. Para explicitar más estos temas, ofrecemos ahora un esquema analítico abstracto.

La idea central requiere la clasificación de los estratos sociales en dos dimensiones separadas: posición rural-urbana y posición de clase. Desde esta perspectiva existen seis grupos:

- *clase alta urbana*, formada fundamentalmente por empresarios, banqueros, financieros y comerciantes de gran escala o, en términos marxistas, la alta burguesía.
- *clase alta rural*, principalmente latifundistas.
- *clase media urbana*, estrato heterogéneo que incluye profesionales, maestros, tenderos y demás, conocida también como pequeña burguesía.
- *clase media rural*, que a menudo pasa inadvertida en América Latina, formada por pequeños agricultores y comerciantes de las zonas rurales.
- *clase baja urbana*, en general, una clase obrera industrial o proletariado, pero que también incluye segmentos crecientes de migrantes desempleados del campo.
- *clase baja rural*, ya sea un proletariado agrario o un campesinado tradicional, algunos de cuyos miembros pueden tomar parte en la economía nacional y otros (en especial en las comunidades indígenas) pueden subsistir en los márgenes del mercado.

Las agrupaciones de las clases bajas, con frecuencia conocidas como «clases populares» en América Latina, representan, con mucho, el segmento mayor de la sociedad. Son pobres, carecen de educación y a veces presentan desnutrición, y se les ha privado de forma sistemática de los beneficios del desarrollo. Muchos de ellos han empezado a participar en el «sector informal» que surge con rapidez, trabajando en tareas esporádicas fuera de la economía formal. (El sector informal es un grupo desusadamente amorfo

Clases sociales		Sector externo		Instituciones nacionales
	Urbana	Rural		
Alta	Empresarios, banqueros	Grandes latifundistas	Inversores, comerciantes extranjeros	Estado
	Comerciantes, profesionales, intelectuales	Pequeños agricultores	Gobiernos extranjeros	Iglesia
	Obreros, migrantes desempleados	Campesinos		

12.1. Ordenamiento hipotético de los actores sociales.

que incluye vendedores ambulantes, mendigos y empresarios a pequeña escala, que por simplificar las cosas no recibe una consideración separada en este análisis.)

Un sector social adicional —no una clase o un estrato, pero un grupo crítico sin embargo— es el *sector extranjero*, que incluye inversores privados y compañías, así como gobiernos extranjeros y establecimientos militares. Aunque a veces ha presentado divisiones, este sector ha manejado un poder enorme en América Latina.

Para realizar su posición relativa, estos actores sociales suelen competir para controlar las instituciones principales. La más crucial, al menos en tiempos recientes, ha sido el *Estado*, que gobierna recursos a gran escala y suele reclamar un monopolio efectivo del uso legítimo de la fuerza (sólo un gobierno, por ejemplo, puede encarcelar a un ciudadano). Un grupo clave dentro del Estado son los militares; otro son los partidos políticos (cuando existen); otro más está compuesto por los tecnócratas y burócratas. También ha sido importante como institución la Iglesia católica y romana.

La figura 12.1 proporciona un cuadro general de estos grupos e instituciones. No presenta el esbozo de ninguna sociedad latinoamericana específica, sino que es un esquema abstracto, un medio hipotético de ilustrar el tema en cuestión.

Para aplicar la estructura a una situación histórica necesitamos formular las preguntas planteadas en el capítulo 2. En resumen son:

- ¿Cuáles son las principales clases sociales? ¿Cuáles están presentes y cuáles ausentes?
- ¿Qué clases sociales tienen más poder?
- ¿Qué grupos están aliados entre sí? ¿De qué modo?

— ¿Hasta qué punto es autónomo el Estado? ¿Está cautivo de alguna clase social o es independiente?

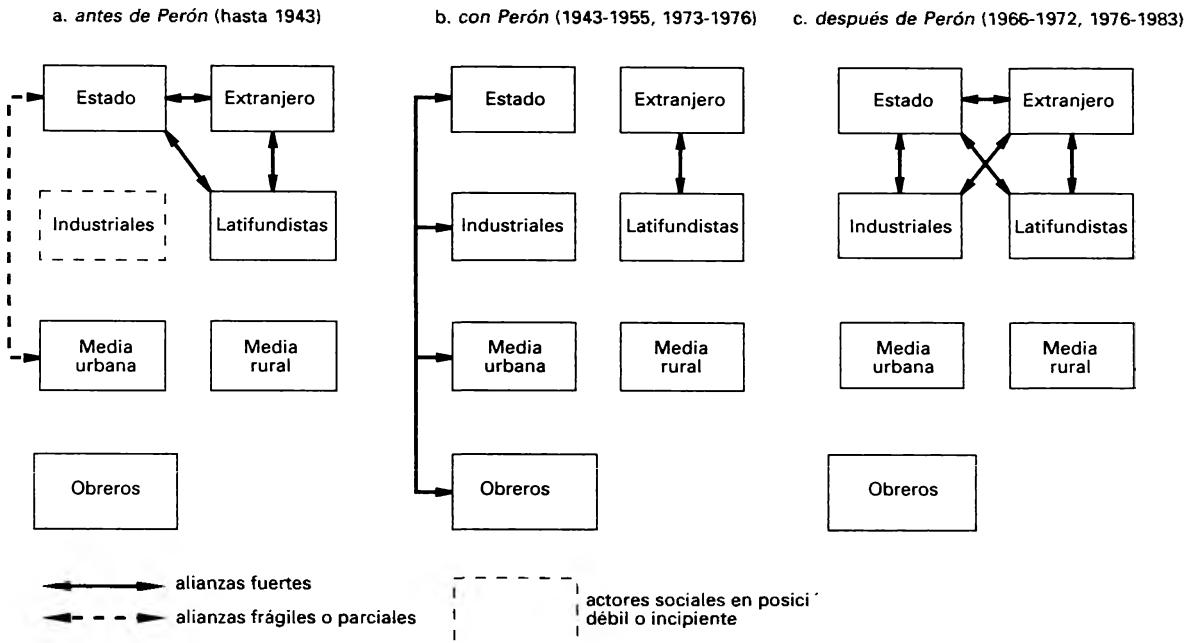
— ¿Cuáles son los factores predominantes en la escena internacional? ¿Cuál, en particular, es la posición de Estados Unidos?

Para demostrar estas posibilidades, presentamos a continuación unos análisis esquemáticos de las transiciones políticas y sociales de cada una de las regiones estudiadas desde el capítulo 3 hasta el 10. Aquí nos concentraremos en acontecimientos relativamente recientes, aunque el método podría aplicarse por igual a períodos anteriores. Recalcamos que se trata de un ejercicio interpretativo, no una pronunciación definitiva; requiere estimaciones y juicios que deben producir discusiones y debate. Sin embargo, pensamos que el planteamiento proporciona una clara confirmación de nuestros argumentos básicos: que los resultados políticos de América Latina se derivan en general de la posición que ocupa cada país en la economía mundial y que una perspectiva comparativa de estos fenómenos puede ayudar a dilucidar las variaciones y regularidades de la sociedad y la política latinoamericanas.

Nuestra primera aplicación se ocupa de Argentina, donde el dominio económico de la carne y el trigo produjo dos importantes resultados sociales: la ausencia de un campesinado, en especial en la región de la pampa, y la importación de mano de obra de la clase obrera europea. En los años anteriores a Perón, el Estado y el sector externo solían coaligarse con los intereses latifundistas, como muestra la figura 12.2. (Las flechas continuas representan alianzas relativamente firmes; las discontinuas, coaliciones frágiles o parciales.) Hasta los radicales que gobernaron con el apoyo de la clase media de 1916 a 1930 tendieron a favorecer a los oligarcas ganaderos.

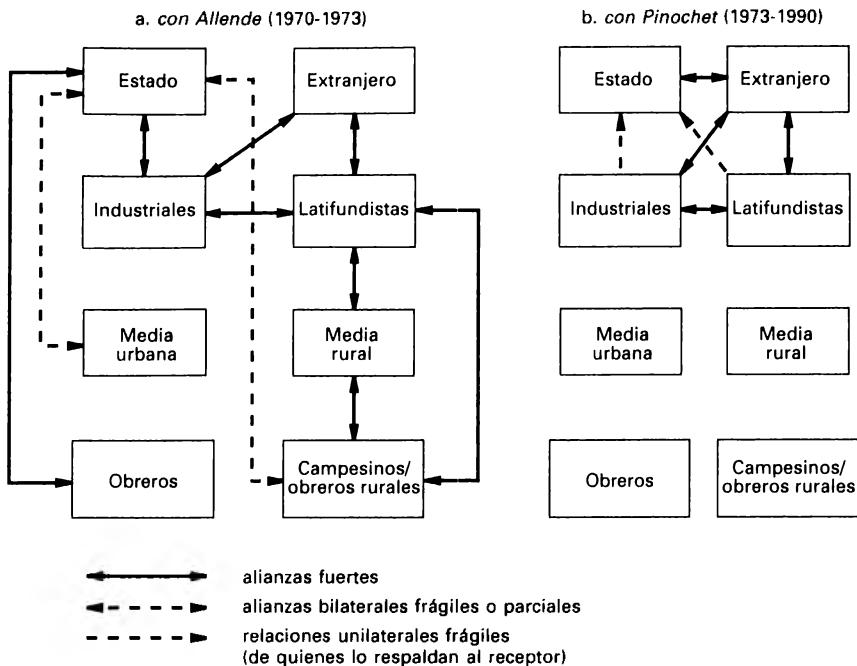
Por razones económicas y demográficas, la clase obrera urbana argentina comenzó de improviso a ejercer presión sobre el sistema político en los años treinta, pero no existía la posibilidad de establecer una alianza de clase con el campesinado; en su lugar, los aliados más idóneos fueron los nuevos industriales emergentes, dispuestos a enfrentarse a la aristocracia terrateniente y a sus conexiones extranjeras. Así, se dieron las condiciones previas para una coalición multiclassista urbana de obreros, industriales y algunos segmentos de la clase media. El instinto político, la retórica populista y el carisma personal del coronel Juan Perón hicieron realidad esta alianza, utilizando una estructura estatal corporativista para institucionalizarla. Una razón de su éxito inicial fue que los latifundistas no contaban con un campesinado con el que formar un frente conservador común. Una razón de su fracaso final fue que el crecimiento industrial limitado llevó a un conflicto de clase entre obreros y propietarios dentro de la coalición.

En 1966 y de nuevo en 1976, los militares se apoderaron del Estado e intentaron imponer un régimen «burocrático-autoritario». La alianza dominante la componían la oficialidad, los inversores extranjeros, los industriales locales y los latifundistas. Se reprimió a los obreros y se los excluyó a la fuerza



12.2. Coaliciones políticas y sociales: Argentina. Antes de Perón (a) una coalición de intereses latifundistas y extranjeros controlaban el Estado y obtenían el apoyo de los dirigentes de la clase media urbana; con Perón (b) una coalición populista de obreros urbanos y nuevos industriales —con alguna participación de la clase media— dominaron el Estado hasta la exclusión casi total de los extranjeros y oligarcas latifundistas; después de Perón (c) una alianza de intereses extranjeros, latifundistas e industriales llevó a los militares y los tecnócratas a imponer un régimen «burocrático-autoritario» (1966-1972; 1976-1983).

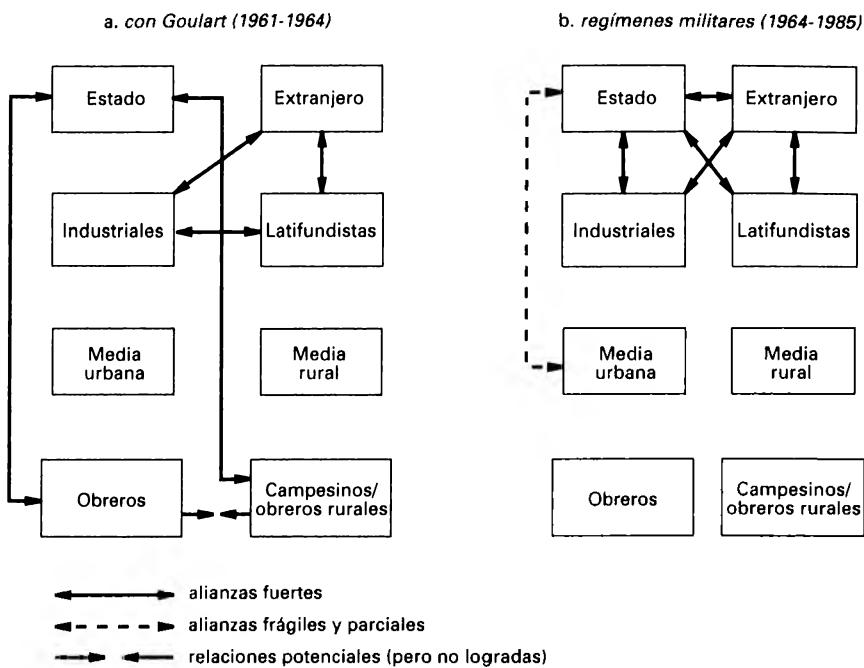
Nota: En este y los gráficos siguientes, el sector extranjero se presenta como una unidad, ya que los intereses económicos y políticos de las potencias extranjeras particulares en general han tendido a coincidir.



12.3. Coaliciones políticas y sociales: Chile. Con Allende (a) un movimiento político basado fundamentalmente en los obreros urbanos obtuvo el control del Estado, en contra de la oposición de los intereses extranjeros, los industriales y un ordenamiento multiclassista de grupos rurales; después de Allende (b) una coalición de industriales y latifundistas se unió a los intereses extranjeros, el más notable Estados Unidos, para crear un Estado burocrático-autoritario dominado por los militares, que mostró una autonomía considerable en el ámbito interno (de ahí las flechas discontinuas de una sola dirección).

del poder. Los sectores medios se mantuvieron en un compás de espera y luego hallaron su oportunidad con la elección de Alfonsín en 1983. Su partido fue, a su vez, desplazado por un presidente peronista, Carlos Menem, quien pronto lanzó un programa ortodoxo de estabilización que puso a la política de clases argentina de vuelta abajo. Los peronistas, una vez enemigos implacables de la ortodoxia económica, daban ahora los votos en el Congreso para llevar a la práctica esa doctrina, incluida una privatización global.

Chile es un caso bastante diferente, ya que contenía todos los tipos de actores sociales, incluido el campesinado (y un proletariado rural migratorio), y una clase obrera que en 1900 ya estaba bien organizada, al menos según los parámetros latinoamericanos. Los intereses extranjeros, en especial los de las compañías dedicadas al cobre, colaboraban con la clase alta que, en contraste con Argentina, participaba de forma profunda en las finanzas y la industria, además de hacerlo en la tierra. Aunque los partidos políticos re-

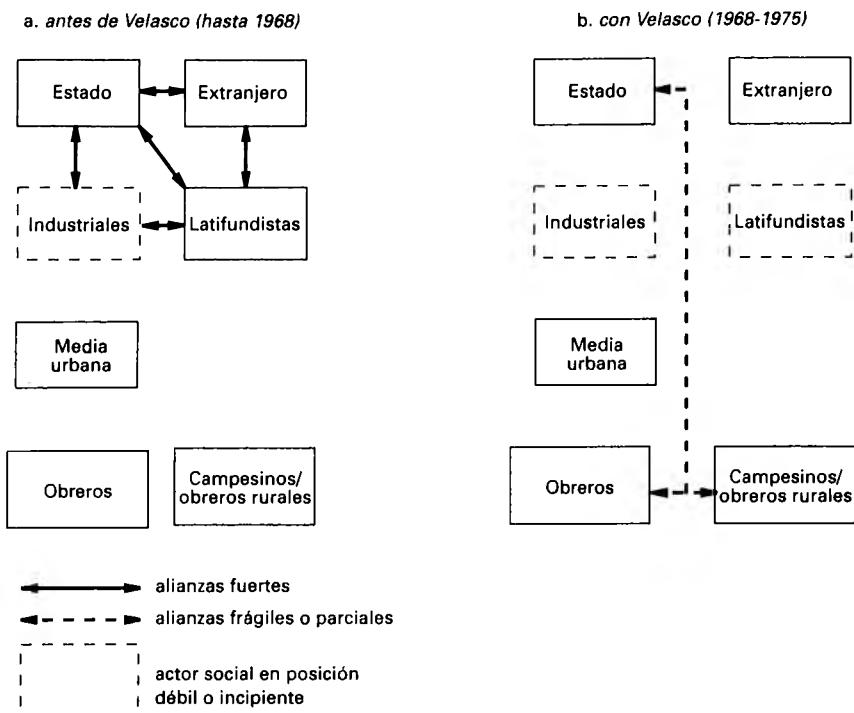


12.4. Coaliciones políticas y sociales: Brasil. Con Goulart (a) el Estado movilizó el apoyo de obreros y campesinos, creando el espectro de una alianza obrero-campesina potencial; después de su mandato (b) el Estado burocrático-autoritario se basó en varios grupos constituidos y conservó una considerable fidelidad de la clase media urbana.

presentaban a grupos sociales específicos, el Estado mantuvo en general una independencia sustancial.

Así que, allí, existían los elementos de un poderoso movimiento socialista. Los partidos políticos podían (y lo hicieron) conducir a la polarización ideológica. La alianza del sector exterior con la clase alta añadía una dimensión nacionalista al resentimiento hacia la aristocracia. Parecía posible una amplia coalición de obreros y campesinos: de ahí el triunfo y euforia de los comienzos del gobierno de Salvador Allende. Sin embargo, el movimiento socialista chileno no fue capaz de aumentar su apoyo mucho más allá de su base obrera industrial. En particular, sus partidarios no lograron convencer a mucha de la clase media baja. Por otro lado, los elementos rurales y urbanos de la clase alta mantuvieron su solidaridad, en parte a través de conexiones familiares, y los latifundistas obtuvieron el respaldo de otros estratos del campo. La intervención encubierta de Estados Unidos aceleró más aún la caída del régimen de Allende (figura 12.3).

Desde 1973 los militares chilenos, como sus homólogos argentinos, establecieron un sistema burocrático-autoritario. La coalición gobernante incluía industriales, latifundistas, inversores extranjeros y un Estado que poseía un

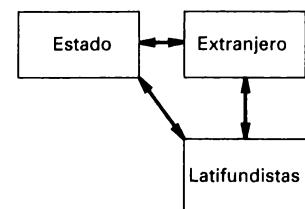


12.5. Coaliciones políticas y sociales: Perú. Antes de Velasco (a) una coalición de latifundistas, intereses extranjeros e industriales incipientes controlaban el Estado; con Velasco (b) el Estado logró debilitar la oligarquía latifundista e intentó movilizar el apoyo de los obreros y campesinos mediante una estructura corporativista (sin forjar una alianza horizontal de clases bajas), pero no pudo hacerlo a largo plazo.

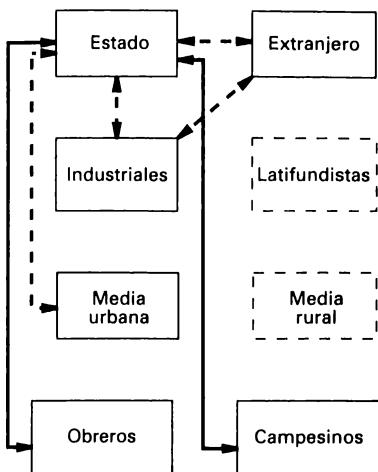
poder extraordinario. Formado por generales y tecnócratas, en especial los «Chicago boys», el gobierno chileno comenzó su andadura dispuesto a predominar sobre toda oposición. En el curso de la reorganización financiera y de la privatización total, el gobierno también aumentó la concentración de la riqueza, pues unos cuantos clanes y conglomerados ricos compraron las empresas estatales privatizadas.

Brasil presentó un cuadro similar. Con Vargas, el *Estado Nôvo* organizó a los obreros urbanos bajo los auspicios del control estatal. A comienzos de los años sesenta, su protegido, João Goulart, escalonó la movilización de los obreros e incluso fomentó (o al menos permitió) la organización de los campesinos. La perspectiva de una alianza obrero-campesina se oponía tanto a los intereses de la clase alta como a los extranjeros, reflejados en la figura 12.4, y propició la intervención militar en 1964 para establecer un régimen burocrático-autoritario prototípico. A pesar de las oleadas represivas que golpearon a todos los sectores sociales (aunque en grados muy diferentes), el

a. antes de la Revolución (hasta 1910)



b. desde Cárdenas (1934)



←→ alianzas fuertes
 ←→ alianzas frágiles o parciales
 |
 | actor social en posición
 | débil o incipiente

12.6. Coaliciones políticas y sociales: México. Antes de la Revolución (a) los latifundistas y los intereses extranjeros se combinaron con los militares y los tecnócratas contemporáneos (los «científicos») para obtener el control del Estado; después de los años treinta (b) la coalición gobernante estaba formada por un delicado equilibrio entre los intereses extranjeros, los financieros e industriales nacionales y el Estado, que mantuvo la mano firme sobre obreros y campesinos mientras cultivaba cierto apoyo de la clase media urbana.

gobierno brasileño logró retener más respaldo residual de la clase media que sus homólogos de Argentina o Chile, lo que explica en parte por qué el proceso de apertura tuvo éxito aquí en un estadio anterior.

En Perú, el periodo comprendido entre 1948 y mediados de los años sesenta fue testigo de una estrecha asociación entre el Estado (en especial con Odría), el capital extranjero, los terratenientes y —en la medida en que existían como un grupo de poder identificable— los industriales nacionales (véase la figura 12.5). Los sectores medios urbanos adoptaron una postura ambivalente, unas veces en apoyo del APRA y otras de Acción Popular de Belaúnde, pero sin desafiar la estructura de poder general. Fuera de la alianza gobernante quedaron los obreros organizados, los migrantes de los poblados de chabolas y, por supuesto, los campesinos que acabaron tomando las armas en la sierra.

El régimen militar revolucionario encabezado por Velasco Alvarado (1968-1975) desmanteló esta coalición y construyó una completamente nueva, basada en la movilización patrocinada por el Estado y el control de obreros y campesinos contra los grupos en ascendencia anteriores: inversores extranjeros y latifundistas aristocráticos en particular, los últimos muy debilitados por la reforma agraria. El Estado se caracterizó por su autonomía y ningún sector fue inmune a su intervención. Finalmente, los militares reformistas resultaron incapaces de institucionalizar su estructura corporativista para, de ese modo, consolidar sus lazos con los obreros y campesinos. Los gobiernos que siguieron —Morales Bermúdez (1975-1980), Belaúnde (1980-1985)— devolvieron de forma gradual cuotas de poder significativas a las facciones de la élite anterior a 1968, aunque García (1985-1990) probó medidas populistas.

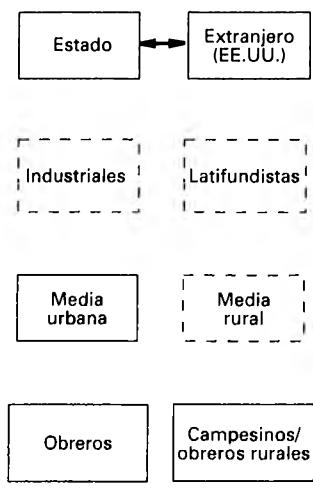
Méjico ofrece una combinación diferente. Antes de la Revolución de 1910, el país no tenía élite industrial autóctona o sector medio rural; existía una clase obrera incipiente pero sin organizar. Como muestra la figura 12.6, la coalición gobernante durante el porfiriato incluía tres grupos: latifundistas, sector extranjero y Estado.

La Revolución rompió esta coalición y, mediante la reforma agraria, debilitó a la élite rural. El Estado aumentó su autoridad y, a partir de los años treinta, alentó la formación de una burguesía industrial. Los gobiernos posrevolucionarios atrajeron el apoyo popular de obreros y campesinos, y con Cárdenas desarrollaron su estrategia para controlar a las masas: el Estado organizaría a los obreros y los campesinos de modo que permanecieran aparte. El PRI desarrolló «sectores» separados de obreros y campesinos, que reflejaban la obsesión del régimen de atajar toda política espontánea de clases. Hacia mediados de los años noventa, sin embargo, el PRI experimentaba grandes derrotas electorales, especialmente en ámbito estatal y local. Además, las disputas a alto nivel estaban amenazando con destruir la presunta hegemonía multiclassista del partido.

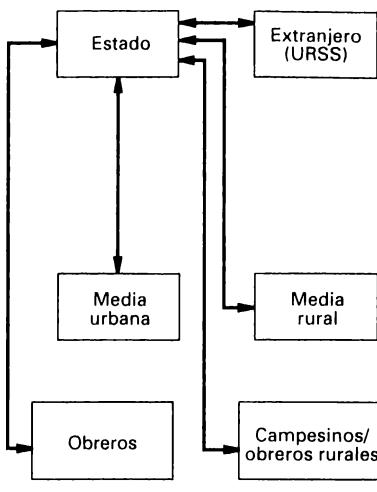
La sociedad de monocultivo cubana presenta aún otro perfil. El dominio extranjero (esto es, estadounidense) de la industria azucarera significó que, a todos los efectos prácticos, fuera difícil que hubiera una clase alta nacional. Los trabajadores de los ingenios y las plantaciones formaban un proletariado activo, como refleja la figura 12.7, y la emigración estrechó los lazos entre los obreros de las ciudades y el campo. Los sindicatos eran débiles, el ejército corrupto y, con Batista, el Estado era un juguete despreciable de los intereses estadounidenses.

Cuba poseía elementos de un movimiento socialista que pudiera capitalizar los sentimientos antiimperialistas. Había otro secreto para el éxito final de Fidel: su movimiento encontraría muy poca resistencia, excepto del sector extranjero, cuyos procónsules no utilizaron todos los recursos de que disponían. Desde 1959, Fidel y sus lugartenientes han renovado la estructura social de la isla, eliminando los vestigios de la antigua clase alta, organizando los grupos de clase media y baja de las ciudades y el campo, y poniendo en prá-

a. antes de la Revolución (hasta 1959)



b. después de la Revolución (desde 1959)



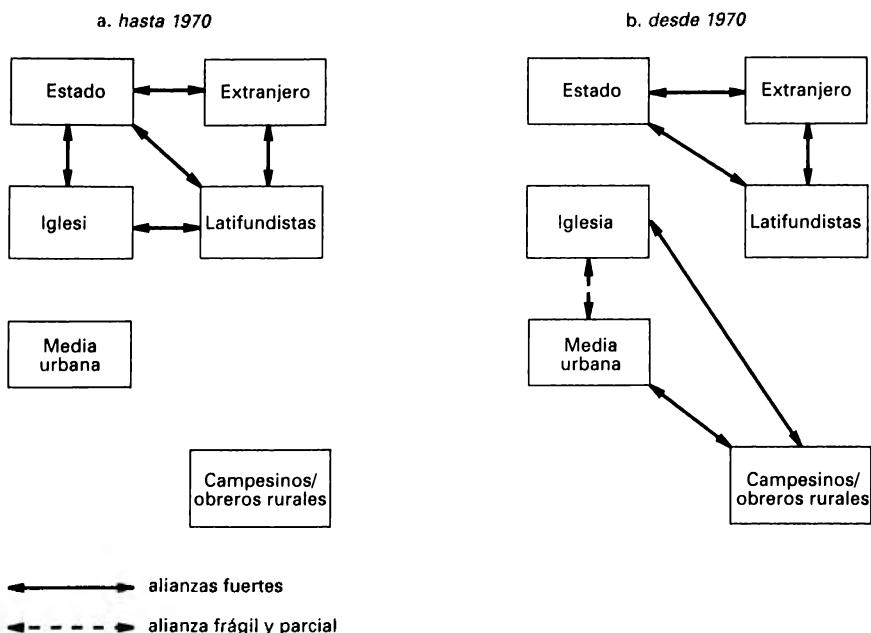
← → alianzas fuertes

— actor social en posición débil o incipiente

12.7. Coaliciones políticas y sociales: Cuba. Antes de la Revolución (a) había un Estado débil que dependía de Estados Unidos para su subsistencia y respaldo; el Estado posrevolucionario (b) ha echado a la clase alta (mucha de la cual emigró a Estados Unidos) y ha movilizado el apoyo del resto de la sociedad cubana, pero recibió ayuda y protección de una potencia extranjera hasta los primeros noventa.

tica una economía «dirigida». Pero se logró sólo con el apoyo soviético masivo. Esta dependencia se hizo penosamente evidente cuando la Unión Soviética y su subsidio desaparecieron a comienzos de los años noventa.

A semejanza parcial de Cuba, la mayor parte de Centroamérica antes de los años setenta presentaba una sociedad de «plantación» tradicional: terratenientes (pero residentes y no ausentes) y campesinos en el sector rural, una clase media incipiente y una alianza gobernante formada por una aristocracia, intereses extranjeros y un Estado dictatorial plenamente respaldado por la Iglesia. En la última década más o menos, han tenido lugar dos cambios importantes, en especial en Nicaragua y El Salvador (el último se refleja en la figura 12.8). En primer lugar, los dirigentes políticos de la clase media han buscado el apoyo de los campesinos. En segundo lugar y quizás más importante, la Iglesia católica y romana ha abrazado de forma abierta y valerosa la causa de los pobres. Pero la intervención masiva de Estados Unidos contribuyó a derrotar a las guerrillas izquierdistas en El Salvador y a invertir la revolución en Nicaragua. En general, la alianza de la élite terrateniente y los



12.8. Coaliciones políticas y sociales: El Salvador. Antes de 1970 (a) El Salvador estaba dominado por una alianza de latifundistas, intereses extranjeros y militares, con la aprobación de una jerarquía eclesiástica conservadora; a mediados de los años setenta (b) un movimiento reformista de clase media empezó a buscar el apoyo del campesinado y los clérigos principales expresaron su solidaridad con los desposeídos.

intereses extranjeros ha defendido éxitosamente su control sobre el Estado en Centroamérica.

Además de situar cada uno de los estudios concretos dentro de un marco comparativo, esta perspectiva general puede ofrecer varias pistas básicas para predecir tendencias y resultados. Una de ellas es que *gran parte de la influencia sobre el desarrollo futuro latinoamericano seguirá proviniendo de fuera de la región*. El crecimiento económico (o descenso) en el centro industrial del sistema capitalista mundial tendrá efectos importantes sobre la demanda de bienes latinoamericanos y podría afectar a las relaciones de poder entre los grupos en los países productores. Por ejemplo, que Cuba o Centroamérica se embarquen en la industrialización no sólo depende de sus recursos y planes, sino también de las acciones de Estados Unidos y la Unión Europea y posiblemente Japón y otras potencias. A medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente, es menos probable que esta situación pueda cambiar.

En segundo lugar, la acción de cualquier grupo o clase social particular no dependerá sólo de su propio crecimiento y fuerza, sino también *de lo que*

suceda en otros grupos sociales. Es razonable suponer, por ejemplo, que la clase obrera urbana aumente en la mayoría de los países latinoamericanos, pero esto solo no determinará los resultados políticos, que dependerán en gran medida de los otros grupos de cada sociedad: de qué otros grupos estén presentes, de la naturaleza de las alianzas y de los acuerdos de poder resultantes. El movimiento socialista tuvo éxito en Cuba pero fracasó en Chile no sólo debido a sus diferentes grados de cohesión interna, sino también por sus bases y grados de oposición diferentes.

Estas críticas son aplicables sobre todo a los grupos medios, denominados con frecuencia clases o sectores medios, que están destinados a crecer, pero su actividad política probablemente dependerá, en una gran medida, de las relaciones de poder entre los otros grupos importantes de cada sociedad. *Las clases medias latinoamericanas han tendido a reaccionar ante las oportunidades políticas, en lugar de iniciar la transformación estructural, y no hay razón para esperar que esto cambie.* Los movimientos de la clase media del periodo 1890-1910 representaron intentos por lograr el acceso al poder, no de efectuar un cambio estructural; hasta Francisco Madero, el «apóstol» de la Revolución mexicana, tenía objetivos limitados. Desde ese periodo, los partidos de clase media —de Argentina, Chile, Brasil y otros lugares— han adoptado una postura en respuesta. Sin duda, algunos *individuos* de estos estratos (y las élites de clase alta) han asumido el liderazgo de los movimientos populares y revolucionarios, pero la conducta *colectiva* ha sido cauta, tentativa y a menudo incoherente. La expansión de los sectores medios por sí misma no determinará modelos de cambio político. No obstante, en conjunción con otros factores se puede convertir en una fuerza decisiva.

La interacción entre grupos sociales clave tendrá una influencia crítica en lo que pase en América Latina desde ahora hasta el año 2000 y quizás después. Para expresar las implicaciones de este hecho, debemos empezar por anticipar el entorno social y económico que probablemente prevalecerá.

Dimensiones del cambio: demografía y economía

Entre los factores más importantes se encuentra el tamaño y el crecimiento de la población latinoamericana, que determinará la demanda general de recursos (en particular alimentos), y de puestos de trabajo, servicios y participación política. El espectro de una «explosión demográfica» hace tiempo que viene rondando las previsiones sobre el futuro del continente y no sin razón. Según una estimación, la población de América Latina —unos 453 millones en 1992— podría aumentar a más de 515 millones para el año 2000, casi el doble de la proyectada para Estados Unidos. Una expansión de esta magnitud representaría una enorme tensión para la sociedad latinoamericana y muchos observadores han predicho que provocará hambre, desorden y estancamiento.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que las perspectivas varían mucho de un país a otro. Entre 1970 y 1980, la población de México aumen-

CUADRO 12.1. Crecimiento poblacional y proyecciones, 1980-2025

	Tasa de crecimiento anual medio (%)		Población (millones) 1992	Proyecciones de población (en millones)	
	1980-1992	1992-2000		2000	2025
Argentina	1,3	1,0	33	36	43
Brasil	2,0	1,4	154	172	224
Chile	1,7	1,3	14	15	19
México	2,0	1,9	85	99	136
Perú	2,1	1,8	22	26	36

Fuente: Banco Mundial, *World Development Report 1994*, Nueva York, Oxford University Press, 1994, cuadro 25.

tó a un tasa media anual de un 2,2 por 100. La tasa de Chile fue del 1,7 por 100 y para Cuba se redujo a cerca del 1,3 por 100. Basándonos en las tasas de crecimiento recientes, el cuadro 12.1 refleja un conjunto de proyecciones para los países mayores de la región. Parece que Brasil podría acercarse a los 172 millones de habitantes a finales de este siglo, lo que representará casi dos tercios de la población estadounidense de unos 276 millones de habitantes. Argentina, Cuba y Chile no necesitan preocuparse por una demanda extraordinaria de recursos, al menos en lo que respecta al crecimiento poblacional. México y Centroamérica ofrecen un motivo de preocupación debido al crecimiento en la demanda de puestos de trabajo.

Los cambios en las tasas de crecimiento poblacional tienen causas múltiples. La historia reciente ha mostrado que la urbanización y el aumento de la renta se acompañan generalmente de una reducción de la tasa de natalidad. También resultan importantes las actitudes sociales y la disponibilidad de anticonceptivos. El caso más espectacular de cambio reciente en la tasa de crecimiento demográfico en América Latina es Cuba, que entre 1958 y 1980 vio declinar su tasa de natalidad un 46 por 100. Con catorce nacimientos por cada mil habitantes, la tasa cubana es comparable a la de las naciones más desarrolladas o aún más baja. Esto puede explicarse por la transformación de la estructura social y las condiciones económicas, así como por la escasez de viviendas y el coste del cuidado infantil. El gobierno cubano ha hecho que se pueda disponer de anticonceptivos de forma gratuita y ha permitido el aborto a petición, aunque se aconseja a las mujeres que no lo utilicen nunca como un medio para controlar la natalidad.

En otros lugares de América Latina, el cuadro del control de la natalidad es más complicado. Ha habido mucha resistencia, no sólo debido a las enseñanzas de la Iglesia católica, sino porque la gente pobre de la sociedad rural tradicional tiende a considerar que tener muchos hijos es algo beneficioso. Las altas tasas de mortalidad infantil inducen a los padres a tener muchos hi-

jos para que algunos, al menos, sobrevivan. Y los niños no son sólo bocas que alimentar: a una edad muy temprana, pueden comenzar a trabajar en el campo u otros lugares y contribuir a la renta familiar. Además, los padres suelen tener previsto que sus hijos los respaldarán cuando lleguen a viejos. Dentro de esta perspectiva tradicional, la reticencia a usar anticonceptivos, aunque se pueda disponer de ellos, es completamente razonable.

Sin embargo, las actitudes hacia la maternidad han cambiado en las décadas recientes. La urbanización y el aumento del nivel de vida, entre otros factores, han llevado a un descenso significativo de las tasas de crecimiento poblacional, que han bajado de un promedio anual del 2,8 por 100 en los años sesenta al 1,9 por 100 a inicios de los años noventa. La tasa bruta de natalidad mexicana cayó de 45 nacimientos por mil habitantes en 1965 a 28 en 1988, mientras que la de Brasil descendió de 39 a 28.

Además, el problema no consiste sólo en el número de nacimientos en los años venideros. Una preocupación crítica deben ser los jóvenes que ya están aquí y que buscarán trabajo en el futuro predecible. En países como México y Brasil, casi la mitad de la población tiene menos de quince años. Así pues, en las próximas dos décadas la presión para obtener un empleo será enorme. Las tendencias demográficas se convierten de prisa en realidades sociales.

¿Será capaz la economía regional de sostener esta población? Los años ochenta fueron poco alentadores. El producto interior bruto per cápita descendió cerca de un 10 por 100 durante la década. El de Brasil cayó más de un 5 por 100, el de México más de un 8 por 100 y el de Perú un asombroso 30 por 100. Los años ochenta sin duda han sido una «década perdida». Los inicios de los años noventa aportaron un modesto crecimiento anual del 3,5 por 100, no mucho más que la tasa de crecimiento demográfico del 1,9 por 100.

Y el crecimiento económico capitalista, incluso cuando se acelera, rara vez genera uniformidad económica, sobre todo en las primeras fases. Por el contrario, tiende con frecuencia a concentrar la riqueza en pequeños sectores de la población; sobre todo en sociedades «dependientes», donde la expansión económica suele darse dentro de enclaves o «bolsas» restringidas. A finales de siglo, América Latina será abrumadoramente urbana. Pero debido al crecimiento económico, la migración del campo y la escasez de puestos de trabajo, los habitantes de las ciudades sin un empleo dentro del sector formal podrían muy bien llegar a ser *casi la mitad* de la población total. Este grupo quizás siga manteniéndose inactivo en política durante un tiempo, pero las perspectivas a largo plazo no dejan de ser inquietantes. Las ciudades pueden convertirse en semilleros de descontento.

Además, a mediados de los años noventa, la mayor parte de América Latina seguía soportando el agobiante peso de los pagos de la deuda exterior. Durante la década anterior transfirió a sus acreedores extranjeros más de 200.000 millones de dólares. El peso neto descendió a causa de la renegociación de la deuda, el crecimiento de la exportación y el retorno de la entrada de capital. Sin embargo, en 1993, casi uno de cada tres dólares de los ingresos de la exportación se destinaba a pagar los antiguos préstamos.

Mirada hacia adelante: respuestas políticas

La miseria económica por sí sola no crea la revolución (o Haití se habría convertido desde hace mucho tiempo en un polvorín revolucionario). Y en los años setenta fueron los hijos de las clases medias y altas, no los segmentos más pobres de la sociedad, quienes se unieron a los movimientos guerrilleros en Uruguay y Argentina. A comienzos de los años noventa, el potencial revolucionario latinoamericano, tan celebrado por la izquierda tras la Revolución cubana, parecía mínimo. Los partidos comunistas, que rara vez se han encontrado a la vanguardia de la acción armada, estaban en una desorganización total, y con frecuencia disolviéndose, ya que sus modelos soviético y europeos orientales bregaban por deshacerse de sus aderezos ideológicos e institucionales. Hasta la izquierda más radical, una vez militante en su admiración de Mao y Che Guevara, disminuía casi en todas partes e incluso desaparecía.

Los sindicatos de trabajadores sólo luchaban para proteger o restaurar los logros materiales tradicionales. Por ejemplo, el movimiento sindical argentino había mostrado una habilidad extraordinaria para sobrevivir, pero, debido a su orientación peronista y populista, nunca había demostrado mucho interés en la revolución. Sus preocupaciones son el pan de cada día —salarios y condiciones laborales— y continuarán siendo un poderoso factor en el panorama político de su país. Chile también contaba con un movimiento sindical próspero antes del golpe de 1973 y, a pesar de la represión continua sufrida bajo el gobierno militar, está resurgiendo como fuerza sustancial.

En Brasil la experiencia ha sido diferente. Ha sido un país excedentario en mano de obra durante todo este siglo, lo que ha ido en detrimento de la sindicalización, incluso en la dinámica región surcentral. El gobierno brasileño ha seguido una mezcla sagaz de represión y cooptación para mantener bajo control a los sindicatos importantes. Los años 1979 y 1980 trajeron una nueva militancia laboral en São Paulo, que amenazaría su hegemonía. Pero desde entonces no ha habido nada que sugiera que el movimiento sindical brasileño haya alcanzado el grado de conciencia de clase o experiencia organizativa evidente en Argentina y Chile. De hecho, en las elecciones presidenciales de 1989, São Paulo, la plaza fuerte del sindicalismo brasileño, fue una de las pocas capitales estatales que votaron contra Lula, el antiguo trabajador del metal que se presentaba a presidente con una plataforma de izquierda radical. En la elección presidencial de 1994, el apoyo a Lula en São Paulo fue incluso menor.

México, al igual que Brasil, es una economía con excedente en mano de obra. Los trabajadores urbanos saben que si hacen huelga, hay muchos recién llegados del campo dispuestos a ocupar sus puestos. Como en Brasil, el gobierno ha sabido utilizar medidas cooptativas para corromper a los dirigentes sindicales. Donde se ha llegado a la confrontación, el gobierno mexicano no ha dudado en reprimir a los trabajadores y encarcelar a sus líderes durante largos períodos. México parece tener un control más estrecho sobre

su clase obrera que ningún otro país importante de América Latina. Parece seguro asumir que el movimiento sindical mexicano no podrá doblegar la historia a su voluntad.

Ninguno de los cambios políticos importantes de América Latina han sido producidos de forma directa por los trabajadores. Han sido capaces, una vez movilizados, de hacer sentir su peso, como en Argentina, pero por sí mismos no han logrado apoderarse del control de los acontecimientos. Lo intentaron en Chile y fracasaron. Y en Cuba, la rebelión fidelista se efectuó fuera del movimiento sindical organizado, que estaba dominado por los comunistas. Las guerrillas fueron predominantemente de clase media y no tuvieron vínculos iniciales con la clase obrera organizada. Decir que es poco probable que el movimiento sindical tome la iniciativa en América Latina no es negar que luchará por los derechos al pan de cada día de sus miembros. Lo hará con gran coste para sus dirigentes, como ha ocurrido bajo los gobiernos militares de Argentina, Chile y Brasil. Pero no es lo mismo que la revolución.

¿Y el campesinado? El potencial revolucionario de los obreros rurales es evidentemente difícil de medir. Alimentó la Revolución mexicana en estadios cruciales y ha dejado su marca en Chile (las invasiones de tierra durante las presidencias de Frei y Allende), Bolivia (en la revolución de 1952) y Perú (el movimiento guerrillero que esperaba provocar la revolución militar de 1968 el movimiento bastante más grave de Sendero Luminoso), por mencionar sólo algunos casos. La revuelta de Chiapas a comienzos de 1994 en el sur de México amenazó la estabilidad política en un año de elecciones presidenciales. Pero a mediados de 1995, los rebeldes parecían haber sido efectivamente controlados. Más al sur, los militares guatemaltecos habían liquidado a sus opositores guerrilleros en una brutal campaña, y Sendero Luminoso había sido reducido a una amenaza mínima a la seguridad en Perú. El único país donde sobrevivían significativas fuerzas guerrilleras era Colombia.

¿Y las clases medias? En los años cincuenta, fueron «descubiertas» de forma repetitiva por los estudiosos estadounidenses, que declararon solemnemente que su crecimiento serviría como lastre para asegurar una iniciativa reformista gradual ante los problemas profundamente arraigados de la región. Tras la segunda guerra mundial, surgió un estrato medio considerable, sobre todo en Argentina, Chile, México y Brasil. En los dos últimos, la clase media era mucho menor en proporción a la población total, pero seguía significando un número importante en cifras absolutas.

El problema de las clases medias latinoamericanas era que residían allí, no en Europa o en Estados Unidos, lo cual significaba que su relación con las otras clases fuera completamente diferente de la de los dos anteriores. Sobre ellas se encontraba una clase alta, rica y poderosa, cuyo estilo de vida enviudaban a menudo. Por debajo había una inmensa clase baja, en México, Brasil y Chile quizás el 65 o 75 por 100, en Argentina el 50 por 100. En las crisis, las clases medias tendían a identificarse con la clase alta, como sucedió en

Chile en 1973, en Brasil en 1964 y en Argentina en 1976. Parecían aterrorizarse ante la perspectiva de perder renta, posición y propiedad.

En tiempos más calmados, podía esperarse que votasen por un gobierno representativo y dirigentes centristas. La tendencia es estar a favor de los golpes en una crisis, pero de las elecciones cuando se aclara la atmósfera. Esto ha supuesto un problema constante para los militares que han efectuado los golpes. Las clases medias seguirán siendo importantes, no menos debido a que producen muchos de los tecnócratas que formulan la política en casi todos los gobiernos, sean civiles o militares.

¿Y los industriales? En un país tras otro, la comunidad empresarial ha resultado ser tímida e indecisa. Aunque la producción manufacturera aumentará, los empresarios latinoamericanos están tan preocupados por sobrevivir —frente a la formidable desventaja de la inflación, los reglamentos gubernamentales y la competencia extranjera— que no han sido una fuerza política importante. En tiempos de crisis, se han puesto al lado de los militares y las clases medias. Los hombres de empresa sólo rara vez han desempeñado el papel reformista de «la burguesía progresista nacional» prevista en la teoría marxista. En su lugar, se han enfrentado a una presión creciente del sector estatal y las empresas extranjeras. En muchos casos han decidido asociarse con compañías extranjeras para lograr capital y tecnología, con lo que han socavado su papel potencial como portavoces nacionales independientes. Además, recientemente han sido golpeados por las medidas económicas neoliberales que han suprimido los aranceles, reducido los subsidios y endurecido el crédito en un esfuerzo por fomentar la productividad para mejorar la situación competitiva de América Latina en la economía mundial. Son vulnerables y están a la defensiva, por lo que es poco probable que tomen la iniciativa.

¿Y la Iglesia? Esta institución está sometida a una estrecha vigilancia. En Brasil, Chile y Centroamérica había creado, desde los años sesenta, entre la población laica, una conciencia y movilización nuevas y extraordinarias. El impulso no se encuentra en el clero, sino en los fieles. La «teología de la liberación» fue la reacción más espectacular de la Iglesia a la «cuestión social» de América Latina. La experiencia subsiguiente de dictaduras, que dirigieron la represión sobre todo contra los sacerdotes liberales, produjo un profundo efecto sobre las clases latinoamericanas activas en política.

Pero oponerse a la tortura ha resultado más simple que formular una postura viable sobre los complejos temas sociales y económicos que de forma inevitable dividen a más sociedades abiertas. Los progresistas católicos también están sometidos al cerco institucional en dos frentes muy diferentes. Uno es Roma, donde el papa Juan Pablo II ha sabido utilizar sus poderes para silenciar a los teólogos de la liberación y nombrar obispos conservadores por toda América Latina. El otro frente es interno, donde el antiguo monopolio de la Iglesia sobre la cristiandad está siendo minado por las rápidas incursiones del protestantismo, encabezado por los evangélicos muy bien organizados.

Los militares constituyen otro grupo clave. Es difícil hoy recordar el entusiasmo generado por los militares peruanos «progresistas» tras su golpe de 1968. Dada la experiencia de los años setenta, los militares latinoamericanos son ahora recordados como pretorianos represivos que protegen a los privilegiados en demasiados países. El retorno de los gobiernos civiles en Argentina y Brasil los ha dejado en la sombra. Y el golpe apoyado por los militares en Perú en 1992 mostró cuán rápidamente los generales podían librarse de los civiles.

América Latina: el fin de la vía socialista

Entre finales de los años cuarenta e inicios de los noventa, los latinoamericanos se han visto como blanco de la rivalidad ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Cuando Cuba se hizo marxista-leninista en 1961, dio a los soviéticos un «escaparate» potencial para el socialismo en las Américas. Estados Unidos respondió con una ofensiva propia sobre América Latina, promoviendo el crecimiento económico de orientación reformista y la contrainsurgencia. Ahora que la guerra fría ha desaparecido de América Latina, ¿lo ha hecho también la perspectiva de una revolución de izquierdas?

En la Europa del siglo XIX, los movimientos políticos de orientación marxista discutían apasionadamente las tácticas apropiadas para lograr una sociedad socialista. Un ala radical apremiaba por métodos revolucionarios, que incluían la violencia cuando fuera necesario. Los capitalistas y sus apologistas nunca estarían dispuestos a renunciar a una sociedad de la que obtenían beneficios tan notables, sosténían los marxistas radicales. Los moderados mantenían que era posible avanzar poco a poco hacia el socialismo trabajando dentro de la estructura legal, sobre todo donde hubiera un gobierno representativo.

Esta discusión dividió profundamente a la izquierda europea, separando a los revolucionarios de los socialistas demócratas. De los últimos surgieron partidos políticos tan importantes como el Socialdemócrata alemán, el Laborista británico y el Socialista francés. Los revolucionarios siguieron fragmentados hasta que la Revolución rusa de 1917 proporcionó un nuevo punto central. Los bolcheviques victoriosos crearon una estructura de mando internacional para coordinar (y, como pronto se comprobó, dominar) los partidos comunistas de nueva formación por todo el mundo. La mayoría de los revolucionarios entraron en estos partidos, aunque sobrevivieron importantes facciones disidentes, como los trotskistas.

Esta discusión sobre el camino revolucionario versus «el pacífico» hacia el socialismo se trasladó a América Latina. Resulta interesante que los partidos comunistas de la región promovieran hasta 1959 la vía pacífica en la política interna, con dos excepciones: El Salvador en 1932 y Brasil en 1935. Así pues, el legado comunista de América Latina no era revolucionario. La elección de Allende en Chile en 1970 se mantenía dentro de esta tradición.

En contraste, el camino revolucionario al socialismo fue emprendido en Cuba y Nicaragua. Ambos regímenes tuvieron que afrontar la incansable hostilidad de Estados Unidos, que incluía actividades militares abiertas (o encubiertas). Y aunque podían atribuirse significativas mejoras en la salud y educación pública, especialmente en la alfabetización de adultos, perdieron el apoyo de importantes sectores de su propia población. En grados diferentes, también se hicieron excesivamente dependientes de la generosidad del antiguo bloque comunista. El fin de la guerra fría y el subsiguiente colapso de la URSS no sólo trajo la desaparición del patrocinio soviético; también produjo un desencanto generalizado con la ideología marxista. En consecuencia, los ciudadanos de Nicaragua exhaustos de la guerra votaron contra los sandinistas en las elecciones de 1990. Y la Cuba de Fidel Castro, aislada y abandonada, perdió su antes apreciado estatus de vanguardia de la revolución continental.

En cambio, los pueblos de América Latina se han distanciado de las ideologías utópicas para realizar esfuerzos prácticos a nivel de las bases. Están menos ocupados en conquistar el Estado con fines revolucionarios y más interesados en aplicar el poder a la solución práctica de problemas locales o específicos. Al mismo tiempo, el nacionalismo ha perdido mucho de su atractivo en toda la región, especialmente entre la nueva clase dirigente. A mediados de los noventa, la vía socialista para América Latina parece haber desembocado en un callejón sin salida.

Las perspectivas de desarrollo en el capitalismo

El capitalismo ha tenido una accidentada historia en América Latina. La etapa colonial implantó el sistema mercantilista clásico, en que las colonias estaban forzadas a producir el máximo excedente para las monarquías española y portuguesa. A finales del siglo XVIII comenzaron a aparecer grietas en el sistema. El contrabando, inducido por los ingleses, erosionó el monopolio ibérico del comercio, y comenzaron a aparecer a su vez incipientes mercados libres junto a la economía oficialmente aceptada, y frecuentemente a pesar de ella.

En el siglo XIX, una fracción de las élites trató de eliminar los vestigios del privilegio colonial e introducir una economía orientada al mercado, preparada para el comercio exterior. Los más radicales de estos reformistas querían reducir todas las relaciones sociales a una definición de mercado. Como era más fácil en países sin indios, fue mucho más sencillo en Argentina que en México. El intento de acelerar este proceso ayudó a provocar las rebeliones rurales de la Revolución mexicana.

Esta transición al capitalismo ha dominado América Latina en nuestro siglo. Cambió de forma aguda desde los años treinta, al aumentar la intervención estatal en la economía. En todos los países mayores el gobierno central utilizó instrumentos tales como las compañías petroleras estatales, los institutos de mercado gubernamentales y programas de crédito especiales. El

papel estatal era tan grande a comienzos de los años setenta que ya no se podía hablar de capitalismo de manual en América Latina, sino de capitalismo *híbrido*. Había tres fuentes de capital: nacional privado, estatal y extranjero (por lo general multinacional). Cuando llegó el capital extranjero para complementar al nacional, las élites consideraron peligroso que los extranjeros obtuvieran demasiado poder económico, así que el Estado aumentó cada vez más su responsabilidad. En países tales como Argentina y Brasil, los militares reforzaron fuertemente esta tendencia. El resultado fue una economía de mercado con muchas más restricciones artificiales de las que los liberales decimonónicos habrían podido imaginarse.

Los políticos latinoamericanos también utilizaron el Estado en los años treinta y cuarenta para institucionalizar una profunda división en la fuerza de trabajo. Crearon una red de beneficios sociales (salario mínimo, vacaciones pagadas, asistencia médica, estabilidad laboral) para los trabajadores en el mercado formal de trabajo, esto es, funcionarios públicos, profesionales, miembros de sindicatos. Éstos eran predominantemente residentes urbanos, lo que los convertía en una minoría de la masa trabajadora en casi toda América Latina. Pero eran los más activos políticamente y, por tanto, más importantes para los políticos en busca de votos.

Este capitalismo *híbrido* suscitó la furia de los economistas liberales del siglo xx. Por toda América Latina, pero en especial en el Cono Sur, los economistas y empresarios partidarios al máximo del *laissez-faire* han luchado contra el papel creciente del Estado. Gracias a los golpes militares de Argentina en 1976 y de Chile en 1973, se hicieron con el control de la política económica. Intentaron reducir el sector estatal de forma drástica vendiendo las empresas que poseía y abriendo el mercado nacional mediante una reducción de aranceles y regulaciones.

A finales de los años ochenta, esta visión de la política, frecuentemente etiquetada como «neoliberal», había sido adoptada también por organismos financieros multilaterales tales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, así como por el gobierno de Estados Unidos (de ahí la etiqueta de «consenso de Washington»). No es necesario decir que dicha concepción había sido desde hacía mucho tiempo grata a los inversores extranjeros en Nueva York y Londres. La ola neoliberal se extendía así en América Latina. Brasil era el único que se mantenía al margen, y subiría a bordo a mediados de 1995.

Así, la reciente redemocratizada América Latina enfrentaba a una medicina fuerte: políticas de «ajuste» encaminadas no sólo a corregir el desequilibrio sin precedentes en las cuentas externas, sino también a imponer la disciplina de los mecanismos de mercado en sociedades asentadas desde hace tiempo en un corporativismo abrigado y en el favoritismo de las familias extensas. ¿Estará llegando por fin el capitalismo a América Latina?

Si es así, ¿qué impacto político tendrá? A mediados de los años noventa, los responsables políticos neoliberales estaban en su apogeo (incluso en Chile, el segundo gobierno centrista elegido evitó alterar muchos elementos

esenciales de la política económica de Pinochet), mientras la izquierda, que representaba mucho menos el potencial revolucionario, se encontraba desorganizada. Pero si el ajuste —ayudado por una economía mundial en expansión relativamente libre de barreras comerciales— logra restaurar el crecimiento, ¿conseguiría la izquierda prolongar su vida? Como Tocqueville nos recuerda, es más probable que surja el descontento cuando las condiciones materiales, y con ellas las expectativas, mejoran. Y merece la pena no olvidar que en América Latina, desde la depresión mundial, el crecimiento económico más sostenido se ha dado bajo políticas nacionalistas que se concentraron en la producción para los mercados internos. La atracción de ese modelo ha disminuido pero no ha muerto. Se puede contar con que reviva entre los intelectuales y tecnócratas cuyas filas están dominadas ahora por doctrinas más ortodoxas.

No resulta menos importante el tema de la justicia social. Si se utilizan medidas como la distribución de la renta (aunque los datos varían en cuanto a calidad), la mayor parte de América Latina se ha vuelto más desigual en las dos últimas décadas. El gasto interno en servicios sociales —educación, salud y vivienda— se ha desplomado, aunque organismos internacionales como el Banco Mundial han tratado de compensarlo.

Nuestra investigación nos lleva de vuelta a la conexión entre el tipo de régimen político y las políticas económicas. La sumamente exitosa aplicación en Chile del modelo neoliberal fue realizada por un gobierno militar, no una democracia. Ahora vemos que los gobiernos elegidos democráticamente intentaban seguir el modelo. Desafortunadamente, estos sistemas democráticos están todos manipulados por «los que no son pobres» (para usar el eufemismo del Banco Mundial), que muestran poco interés en mejorar el bienestar social en sus sociedades. Por el contrario, ellos se destacan en usar el Estado para promover sus propios intereses. Parecen inclinados a producir un capitalismo primitivo que recuerda la Europa y los Estados Unidos de finales del siglo XIX. En aquellos días felices, les fue dicho a los futuros capitalistas: «Enrichez-vous» (¡Enriqueceos!). Lo hicieron y dejaron a la mayoría de sus sociedades esperando por décadas la intervención estatal para corregir las graves desigualdades. ¿Podría ser que los capitalistas latinoamericanos de finales del siglo XX, como los Borbones de Francia, no hayan aprendido ni recordado nada?

¿Qué será de las culturas no europeas de América Latina?

Pocos pueden estudiar la historia latinoamericana sin sentirse fascinados por su mezcla calídoscópica de razas y pueblos, y de inmediato surge la pregunta: ¿lo inusual, lo diferente, lo exótico se homogeneizará en amalgamas nacionales carentes de la originalidad de las culturas indias, africanas o provincianas? ¿Qué pasará con los indios chiapanecos o los del altiplano peruano, o los negros de Bahía en Brasil? ¿Desaparecerán ellos o su identidad étnica?

No es fácil sostener que su modo de vida sobrevivirá. América Latina no puede ser inmune al proceso de homogeneización social tan conocido en el mundo industrial. La televisión y la radio han erosionado las barreras regionales y provinciales y han concentrado la atención sobre modelos «nacionales», como los de las tan populares telenovelas. También existe una implacable presión económica sobre los remanentes étnicos para que aprendan la lengua nacional y adopten su cultura. En México, por ejemplo, la proporción de la población que sigue hablando sólo una lengua india ha descendido a menos de un 2 por 100 a mediados de los años noventa. La incorporación de estos indios a la población de habla española ha sido un objetivo prioritario de los líderes mexicanos. Sin embargo, en el proceso se han perdido tradiciones étnicas. ¿Podría ser de otro modo? El gobierno mexicano, más que cualquier otro de América Latina, ha intentado preservar sus tradiciones indígenas (en parte para obtener los dólares de los turistas, ya que las costumbres «nativas» son una atracción). También ha existido un interés genuino de preservar su cultura prehispánica única. Sin embargo, la búsqueda del desarrollo social tiende a oponerse a estos objetivos.

En Brasil, la tradición no europea más importante ha sido la africana. De hecho, los esclavos africanos penetraron tanto en todas las regiones brasileñas, que su cultura contemporánea ha quedado estampada de forma indeleble con su presencia. ¿Puede sobrevivir al implacable proceso de asimilación cultural? Parece persistir como una influencia soterrada, en especial en la religión. El contexto lo aporta el mundo religioso brasileño de muchos niveles. En la cima se encuentra la Iglesia católica y romana, oficial en todos los aspectos. Por debajo yacen los mundos de *umbanda*, espiritismo y cultos afrobrasileños como el *candomblé* y *macumba*. En estas religiones no oficiales el elemento africano ha impregnado de tal manera la cultura nacional que su supervivencia, aunque de un modo asimilado, parece asegurada.

Las únicas zonas donde las culturas indias parece probable que sobrevivan mucho tiempo son los Andes, el sur de México y Guatemala, donde la población indígena parece lo suficientemente concentrada como para preservar las identidades sociales tradicionales. Sin embargo, en general, la urbanización de América Latina está engullendo o liquidando lo rural y lo provincial. El resultado más probable es que esas naciones surjan como culturas predominantemente europeas con remanentes dispersos de influencia indígena o africana. No parece más sorprendente que la aniquilación de la cultura india americana en Estados Unidos o la implacable destrucción de la cultura regional de Norteamérica. En el último análisis, pocas élites de dentro o fuera de América Latina dieron importancia a la preservación de la cultura africana o india. ¿Y dónde se sitúa en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud o el Fondo Monetario Internacional? Lo pintoresco puede interesar a los turistas, pero se convierte en un impedimento para reducir el analfabetismo o la mortalidad infantil. En el mundo moderno, la heterogeneidad cultural parece contar muy poco.

El potencial de conflicto regional

América Latina no ha presenciado guerras frecuentes en el siglo XX, aunque han permanecido vigentes algunos conflictos de mucho tiempo. Entre los más importantes se encuentra la disputa por las islas Malvinas entre Argentina y Gran Bretaña, el enfrentamiento de Argentina y Chile por el estrecho de Beagle, la tensión entre Perú y Chile de 1979 a 1982 por las tierras tomadas por el segundo en la guerra del Pacífico y el conflicto fronterizo entre Venezuela y Guyana. En los Andes, el próspero tráfico de drogas continúa ofreciendo un potencial enfrentamiento interestatal, como ha sucedido recientemente en la frontera amazónica de Perú y Brasil. Un conflicto limítrofe estalló en 1995 en la frontera peruano-ecuatoriana. En la anterior guerra fronteriza de 1942, Perú había resultado victorioso con grandes trozos del territorio ecuatoriano donde se decía que había grandes cantidades de oro y plata. Este nuevo conflicto, que duró sólo unas semanas, fue rápidamente detenido por la intervención multilateral de otras naciones latinoamericanas.

¿Existe la posibilidad de un conflicto en la frontera de México con Estados Unidos? ¿Puede continuar el enorme flujo de migrantes indocumentados sin que el último reaccione? Esta cuestión volátil debe considerarse dentro del contexto de la política estadounidense hacia toda la cuenca del Caribe. La cuestión es hasta qué grado Estados Unidos está dispuesto a seguir sirviendo de válvula de escape para quienes huyen de la pobreza y/o la represión política. La clave será la actitud de su opinión pública.

Los signos dados por el Congreso han sido contradictorios. En 1986 Estados Unidos aprobó una ley que endurecía las sanciones contra los empresarios que contrataran a sabiendas extranjeros sin documentación legal. A pesar de las predicciones de quienes la apoyaron y quienes se opusieron a ella, la ley resultó tener un efecto poco duradero en el flujo de migración indocumentada, ya que la frontera sur estadounidense continuó siendo notablemente porosa y muchos «ilegales» obtuvieron con facilidad documentos de identidad falsificados una vez en Estados Unidos. Mientras tanto, la economía estadounidense siguió absorbiendo «ilegales» en el sector de servicios peor remunerados. En California, no obstante, ha ocurrido una poderosa reacción adversa en la forma de un referéndum aprobado en 1994 por los votantes que privaría de muchos servicios públicos a los «ilegales» e incluso a algunos extranjeros legales. Un largo proceso judicial es probable.

La otra continua fuente de tensión en la frontera entre Estados Unidos y México ha sido el tráfico de drogas. Pese a la cooperación intermitente de las autoridades estadounidenses y mexicanas, la entrada de droga se ha incrementado debido a una más efectiva inhabilitación en el Caribe. Las repetidas denuncias de corrupción a alto nivel por parte de los santurrones políticos estadounidenses no han hecho más que empeorar las cosas.

Existe una fuente final de conflicto regional: la intervención de potencias extranjeras. El culpable histórico ha sido Estados Unidos. Animada por el bajo coste (para las fuerzas militares estadounidenses, no para las nativas) de las invasiones de Granada en 1983 y Panamá en 1989, el socavamiento de la popularidad sandinista mediante el apoyo a los «contras», más la espectacular victoria de 1991 en la guerra del Golfo contra Irak, la Casa Blanca bajo Bush se vanagloriaba de que había «dado una patada al síndrome de Vietnam». La mayoría de los latinoamericanos lo encontraron poco tranquilizador. El enfrentamiento entre Cuba y Estados Unidos sigue reteniendo el mayor potencial explosivo. El acuerdo entre éste y la Unión Soviética que puso fin a la crisis de los misiles en 1962 incluía su promesa de no invadir la isla. La administración Reagan consideró seriamente rescindirlo. A medida que el apoyo económico ruso se esfumaba rápidamente, los niveles de vida se hundían y el comunismo desaparecía de Europa, las posibilidades de que surgiera un conflicto interno en Cuba aumentaban. Si se hiciera violento, la opinión pública estadounidense podría ser movilizada con facilidad para que apoyara la intervención.

Contribución latinoamericana al mundo

Dadas sus limitaciones políticas y económicas, ¿cómo puede contribuir a la experiencia humana? Ya se ha distinguido en literatura. Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Jorge Luis Borges, Jorge Amado, el «boom» de la literatura latinoamericana ha hecho que se tradujera a las lenguas europeas más importantes. Las ediciones en rústica han facilitado una amplia distribución. La música es otro ámbito artístico en el que América Latina ha logrado la excelencia. La música afrobrasileña y afrocubana ha penetrado en la música popular norteamericana, otorgándole un estilo y ritmo inconfundibles.

Los latinoamericanos se han distinguido por sus impresionantes contribuciones al atletismo. En fútbol, el deporte más universal, Brasil es el primer país que ha ganado la Copa Mundial cuatro veces. Argentina obtuvo la copa en 1978 y 1986. Incluso países tan pequeños como Uruguay se han llevado a casa la Copa Mundial. Los clubes de fútbol europeos ofrecen millones de dólares para tentar a las estrellas latinoamericanas.

La teología y la organización eclesiástica han presenciado una innovación impresionante en esa región. La tan controvertida «teología de la liberación» es en gran medida un fenómeno latinoamericano, un intento de los teólogos latinoamericanos de reconciliar su tradición religiosa con las presiones políticas y económicas que los rodean. No menos importantes son los grupos laicos que aumentan con rapidez («las comunidades de base eclesiásticas»), que representan un despertar en las naciones largo tiempo sumergidas en la apatía religiosa. Merece la pena recordar que la Iglesia, mediante su clero y sus laicos, desempeñó un papel clave en la redemocratización de Brasil en los años setenta. En Chile, la Iglesia también sirvió como punto de reunión para resistirse a un régimen militar represivo. Este papel de oposición la colocó de

nuevo en primer plano y ha recordado a los demócratas de todas partes que una de las instituciones más tradicionales de la sociedad latinoamericana puede seguir siendo muy importante en el mundo moderno.

América Latina también ha hecho una gran contribución en el campo de las relaciones raciales. A pesar de la persistente crueldad con aquellos de origen no europeo, ha producido sociedades en las que los mestizos han disfrutado de una gran movilidad. Los de México, Centroamérica y la región andina representan una nueva categoría social originada de la mezcla de europeo e indio. Aunque siguen existiendo muchas formas de racismo, la movilidad ha sido notable. Lo mismo puede decirse del mulato en Brasil, Cuba, Colombia y las naciones caribeñas. Para ver el contraste, sólo hace falta observar Norteamérica. Por supuesto, sigue habiendo prejuicios y discriminación en América Latina, sobre todo contra los indios «puros» y la gente de piel muy oscura en general. No obstante, la relativa armonía social es considerable, sobre todo a la luz del miserable récord dejado por los europeos en tantas partes del mundo en vías de desarrollo actual.

En el futuro, como en los siglos pasados, el destino de América Latina dependerá en gran medida de su relación con los centros de poder internacionales. Mientras tanto, debe movilizar sus propios recursos para el crecimiento económico sostenido y buscar una distribución más equitativa de los resultados. La región tendrá que seguir afrontando también las implicaciones de la subordinación y la dependencia, mientras que los extranjeros continuarán admirando y sintiendo fascinación hacia lo que García Márquez denominó «las noticias fantasmales de la América Latina, esa patria inmensa de hombres alucinados y mujeres históricas, cuya parquedad sin fin se confunde con la leyenda».

Apéndice estadístico

CUADRO 13.1. Indicadores sociales seleccionados

	Población (millones)		Tasa de crecimiento de población anual (%)		Urbanización ^a (%)		Esperanza de vida (años)	
	1900	1992	1900-1910	1980-1992	1900	1980	1992	
Argentina	4,6	33,1	4,3	1,3	24,9	70,2	71	
Brasil	18,0	153,9	2,2	2,0	8,7	45,7	66	
Chile	3,0	13,6	1,2	1,7	19,9	67,9	72	
México	13,6	85,0	1,0	2,0	9,2	42,5	70	
Perú	3,0	22,4	3,0	2,1	6,0	47,2	65	
Centroamérica								
Costa Rica	0,3	3,2	1,5	2,8	8,5	30,1	76	
El Salvador	0,8	5,4	2,1	1,4	6,0	24,9	66	
Guatemala	0,9	9,7	2,1	2,9	—	18,9	65	
Honduras	0,4	5,4	2,8	3,3	—	23,8	66	
Nicaragua	0,4	3,9	2,6	2,7	—	36,9	67	
Panamá	0,3	2,5	2,4	2,1	6,8	40,9	73	
Caribe								
Cuba	1,6	10,8	1,0	1,0	25,0	47,5	76	
Granada	s.d.	(91.000) ^b	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.	71	
Haití	1,25	6,7	3,2	2,0	8,2	16,5	55	
Jamaica	s.d.	2,4	s.d.	1,0	—	s.d.	74	
República Dominicana	0,6	7,3	2,1	2,1	3,6	40,8	68	
Estados Unidos	76,1	255,4	—	1,0	28,9	64,0 ^c	77	

s.d.= sin datos.

^a Población en comunidades de 20.000 habitantes o más, como porcentaje del total nacional.

^b Cifra total (no en millones).

^c Cifra de 1970.

Fuentes: *Statistical Abstract of Latin America*, vol. 19, Los Ángeles, UCLA Latin American Center, 1978, cuadro 623; vol. 21 (1981), cuadros 104, 623, 634; y vol. 25 (1987), cuadros 600, 661; Banco Mundial, *World Development Report 1994: Infrastructure for Development*, Nueva York, Oxford University Press, 1994, cuadros 1, 1a, 25, 31.

CUADRO 13.2. Indicadores económicos seleccionados

	PNB per cápita (dólares)	Crecimiento económico medio anual (PIB)		Deuda externa, 1992	
		1992 (porcentaje) 1965-1980	1980-1992 (porcentaje)	Miles de millones de dólares	Pagos de intereses totales en % de ingresos por exportación
Argentina	6.050	3,3	0,4	67,6	18,7
Brasil	2.770	9,0	2,2	121,1	9,2
Chile	2.730	1,9	4,8	19,4	10,4
México	3.470	6,5	1,5	113,4	16,4
Perú	950	3,9	-0,6	20,3	10,7
Centroamérica					
Costa Rica	1.960	6,3	3,3	4,0	9,1
El Salvador	1.170	4,4	1,3	2,1	5,0
Guatemala	980	5,9	1,4	2,7	7,9
Honduras	580	4,1	2,8	3,6	15,3
Nicaragua	340	2,6	-1,7	11,1	12,6
Panamá	2.420	5,5	0,9	6,5	4,3
Caribe					
Cuba	1.370 ^a	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
Granada	2.310	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
Haití	340 ^b	2,9	s.d.	0,8	s.d.
Jamaica	1.340	1,5	1,8	4,3	8,5
República					
Dominicana	1.050	7,3	1,7	4,6	5,4

s.d. = sin datos.

^a Cifra de 1989.^b Cifra de 1991.

Fuentes: Banco Mundial, *World Development Report 1984: Infrastructure for Development*, Nueva York, Oxford University Press, 1994, cuadros 1, 1a, 2, 20, 23, 24; y Agencia Central de Inteligencia, *World Factbook 1994-95*, Washington, Brassey's, 1994.

CUADRO 13.3. Estructura de la fuerza laboral, a inicios de los años noventa

	Porcentaje de la mano de obra en		
	Agricultura	Industria	Servicios
Argentina ^a	12	31	57
Brasil	29	25	44
Chile	18	27	56
México ^b	28	21	51
Perú	33	17	50
Centroamérica			
Costa Rica	24	25	51
El Salvador ^a	40	15	45
Guatemala	28	21	51
Honduras ^a	62	12	26
Nicaragua	30	16	40
Panamá	27	13	59
Caribe			
Cuba ^b	20	32	48
Granada ^a	24	13	63
Haití ^a	66	9	26
Jamaica	27	19	54
República Dominicana ^b	31	20	49
Estados Unidos	3	30	67

^a Datos de fines de los años ochenta.

^b Datos de 1990.

Nota: El sector agrícola comprende agricultura, silvicultura, caza y pesca; en algunos países la práctica de la agricultura de subsistencia (fuera de la economía de mercado) puede llevar a una subvaloración del tamaño del sector. La industria incluye minería, manufactura, construcción, electricidad, agua y gas. Todos los demás sectores de la actividad económica se han clasificado como servicios.

Fuentes: Economist Intelligence Unit, *Country Profiles, 1993-94 y 1994-95*, Londres, Economist Intelligence Unit, 1993 y 1994; y Agencia Central de Inteligencia, *World Factbook 1994-95*, Washington, Brassey's, 1994.

Jefes de Estado*

Argentina

1861	Bartolomé Mitre	1955	Eduardo Lonardi, 23 de septiembre-13 de noviembre
1868	Domingo F. Sarmiento	1958	Arturo Frondizi
1874	Nicolás Avellaneda	1962	José María Guido
1880	Julio Argentino Roca	1963	Arturo Illia
1886	Miguel Juárez Celman	1966	Juan Carlos Onganía
1890	Carlos Pellegrini	1970	Roberto Marcelo Levingston
1892	Luis Sáenz Peña	1971	Alejandro A. Lanusse
1895	José E. Uriburu	1973	Héctor Cámpora, 27 de mayo-13 de julio
1898	Julio Argentino Roca		Juan Domingo Perón, 12 de octubre-1 de julio de 1974
1904	Manuel Quintana	1974	María Estela (Isabel) Martínez de Perón
1906	José Figueroa Alcorta	1976	Jorge Rafael Videla
1910	Roque Sáenz Peña	1981	Roberto Viola, 29 de marzo-22 de diciembre
1914	Victorino de la Plaza		Leopoldo Fortunato Galtieri, 22 de diciembre-17 de junio de 1982
1916	Hipólito Irigoyen	1982	Reynaldo Benito Antonio Bignone
1922	Marcelo Torcuato de Alvear	1983	Raúl Alfonsín Foulkes
1928	Hipólito Irigoyen	1989	Carlos Saúl Menem
1930	José Félix Uriburu	1995	Carlos Saúl Menem
1932	Agustín P. Justo		
1938	Roberto M. Ortiz		
1940	Ramón S. Castillo		
1943	Arturo Rawson, 5-7 de junio		
	Pedro P. Ramírez, 7 de junio-9 de marzo de 1944		
1944	Edelmiro J. Farrell		
1946	Juan Domingo Perón		

Barbados

1966	Errol Walton Barrow	1986	Errol Walton Barrow
1976	J. M. G. M. («Tom») Adams	1987	Erskine Sandiford
1985	H. Bernard St. John	1994	Owen Arthur

Brasil

1831	Dom Pedro II	1956	Juscelino Kubitschek
1889	Deodoro da Fonseca	1961	Jânio Quadros, 31 de enero-25 de agosto
1891	Floriano Peixoto		Ranieri Mazzilli, 25 de agosto-8 de septiembre
1894	Prudente de Moraes Barros		João Goulart, 8 de septiembre-2 de abril de 1964
1898	Manoel Ferraz de Campos Salles	1964	Ranieri Mazzilli, 2-15 de abril
1902	Francisco de Paula Rodrigues Alves		Humberto de Alencar Castello Branco, 15 de abril-15 de marzo de 1967
1906	Afonso Augusto Moreira Penna	1967	Artur da Costa e Silva
1909	Nilo Peçanha	1969	Augusto Hamann Rademaker Gruenewald, 31 de agosto-25 de octubre
1910	Hermes da Fonseca		Emílio Garrastazu Medici, 30 de octubre-15 de marzo de 1974
1914	Wenceslau Bras Pereira Gomes	1974	Ernesto Geisel
1918	Delfim Moreira da Costa Ribeiro	1979	João Baptista Figueiredo
1919	Epitácio da Silva Pessôa	1985	José Sarney
1922	Artur da Silva Bernardes	1990	Fernando Collor de Mello
1926	Washington Luís Pereira de Sousa	1992	Itamar Franco
1930	Julio Prestes, 24 de octubre-4 de noviembre	1995	Fernando Henrique Cardoso
	Getúlio Dornelles Vargas, 4 de noviembre-31 de octubre de 1945		
1945	José Linhares		
1946	Eurico Gaspar Dutra		
1951	Getúlio Vargas		
1954	João Café Filho		
1955	Carlos Luz, 8-11 de noviembre Nereu Ramos, 11 de noviembre-31 de enero de 1956		

Chile

1876	Aníbal Pinto		Emiliano Figueroa, 6 de septiembre-18 de septiembre de 1911
1881	Domingo Santa María	1911	Ramón Barros Luco
1886	José Manuel Balmaceda	1915	José Luis Sanfuentes
1891	Jorge Montt	1920	Luis Barros Borgoño, 25 de junio-23 de diciembre
1896	Federico Errázuriz		Arturo Alessandri Palma, 23 de diciembre-8 de septiembre de 1924
1901	Germán Riesco Errázuriz		Luis Altamirano
1905	Rafael Rayas		
1906	Pedro Montt		
1910	Elías Fernández Albano, 16 de agosto-6 de septiembre	1924	

1925	Junta militar presidida por Carlos Ibáñez del Campo, 23 de enero-21 de marzo Arturo Alessandri, 21 de marzo-1 de octubre Luis Barros Borgoño, 1 de octubre-diciembre Emiliano Figueroa Larraín, diciembre-4 de mayo de 1927	Bartolomé Blanche Espejo, 13 de septiembre-2 de octubre Abraham Oyanedel, 2 de octubre-24 de diciembre Arturo Alessandri Palma, 24 de diciembre-24 de diciembre de 1938
1931	Carlos Ibáñez del Campo Pedro Opazo Letelier, 26-27 de julio Juan Esteban Montero Rodríguez, 27 de julio-18 de agosto Manuel Trucco Franzani, 18 de agosto-15 de noviembre Juan Esteban Montero Rodríguez, 15 de noviembre-4 de junio de 1932	Pedro Aguirre Cerda Gerónimo Méndez Arancibia Juan Antonio Ríos Morales Alfredo Duhalde Vázquez, 27 de junio-17 de octubre Juan A. Irabarren, 17 de octubre-3 de noviembre Gabriel González Videla, 3 de noviembre-3 de noviembre de 1952
1932	Arturo Purga, 4-12 de junio Marmaduke Grove, 12-16 de junio Carlos Dávila Espinoza, 17 de junio-13 de septiembre	Carlos Ibáñez del Campo Jorge Alessandri Rodríguez Eduardo Frei Montalva Salvador Allende Gossens Augusto Pinochet Ugarte Patricio Aylwin Eduardo Frei Ruiz-Tagle

Costa Rica

1876	Tomás Guardia	1940	Rafael Ángel Calderón Guardia
1882	Próspero Fernández	1944	Teodoro Picardo Michalski
1885	Bernardo Soto y Alfaro	1948	Santos León Herrera, 19 de abril-8 de mayo
1890	José Joaquín Rodríguez		José Figueres, 8 de mayo-8 de noviembre de 1949
1894	Rafael Iglesias Castro	1949	Otilio Ulate Blanco
1902	Ascensión Esquivel Ibarra	1952	Alberto Oreamuno Flores
1906	Cleto González Víquez	1953	José Figueres Ferrer
1910	Ricardo Jiménez Oreamuno	1958	Mario Echandi Jiménez
1912	Cleto González Víquez	1962	Francisco José Orlich
1914	Alfredo González Flores	1966	José Joaquín Trejos Fernández
1917	Federico Tinoco Granados	1970	José Figueres Ferrer
1919	Julio Acosta García, 7 de mayo-13 de agosto	1974	Daniel Oduber
	Juan Bautista Quirós, 13 de agosto-8 de mayo de 1920	1978	Rodrigo Carazo
1920	Julio Acosta García	1982	Luis Alberto Monge Álvarez
1924	Ricardo Jiménez Oreamuno	1986	Óscar Arias Sánchez
1928	Cleto González Víquez	1990	Rafael Ángel Calderón
1932	Ricardo Jiménez Oreamuno	1994	José María Figueres
1936	León Cortés Castro		

Cuba

1899	John R. Brooke, 1 de enero-23 de diciembre	1935	Manuel Márquez Sterling, 18 de enero
	Leonard Wood, 23 de diciembre-20 de mayo de 1902 (ocupación estadounidense)		Carlos Mendieta Montefur, 18 de enero-11 de diciembre de 1935
1902	Tomás Estrada Palma	1936	José A. Barnet y Vinageras
1906	William Howard Taft, 29 de septiembre-13 de octubre		Miguel Mariano Gómez Arias, 20 de mayo-24 de diciembre
	Charles Edward Magoon, 13 de octubre-28 de enero de 1909 (ocupación estadounidense)	1940	Federico Laredo Bru, 24 de diciembre-10 de octubre de 1940
1909	José Miguel Gómez	1944	Fulgencio Batista y Zaldívar
1913	Mario García Menocal	1948	Ramón Grau San Martín
1921	Alfredo Zayas	1952	Carlos Prío Socarrás
1925	Gerardo Machado Morales	1959	Fulgencio Batista y Zaldívar
1933	Carlos Manuel Céspedes, 12 de agosto-5 de septiembre		Manuel Urrutia Lleo, 2 de enero-17 de julio [a partir de aquí, el jefe de gobierno de facto es Fidel Castro Ruz]
	Consejo de los Cinco, 5-10 de septiembre		Osvaldo Dórticos Torrado, 17 de julio-3 de diciembre de 1976
	Ramón Grau San Martín, 10 de septiembre-15 de enero de 1934	1976	Fidel Castro Ruz se convierte en presidente del Consejo de Estado
1934	Carlos Hevia, 15-18 de enero		

Guatemala

1873	Justo Rufino Barrios	1954	Carlos Díaz, 27-29 de junio
1885	Alejandro Sinibaldi, 2-15 de abril		Elfego J. Monzón, 29 de junio-8 de julio
	Manuel Lisandro Barillas, 15 de abril-15 de marzo de 1892		Carlos Castillo Armas, 8 de julio-26 de julio de 1957
1892	José María Reina Barrios	1957	Luis Arturo González López, 27 de julio-25 de octubre
1898	Manuel Estrada Cabrera		Guillermo Flores Avendaño, 28 de octubre-2 de marzo de 1958
1920	Carlos Herrera		Miguel Ydígoras Fuentes
1922	José María Orellana		1963 Enrique Peralta Azurdia
1926	Lázaro Chacón		1966 Julio César Méndez Montenegro
1930	Baudilio Palma, 13-16 de diciembre	1970	Carlos Arana Osorio
	Manuel Orellana C., 16-31 de diciembre	1974	Kjell E. Langerud García
	José María Reyna Andrade, 31 de diciembre-14 de febrero de 1931	1978	Fernando Romeo Lucas García
1931	Jorge Ubico	1982	Efraín Ríos Montt
1944	Federico Ponce Vaidez, 1 de julio-21 de octubre	1983	Óscar Humberto Mejía Victores
	Jacobo Arbenz Guzmán, 12 de diciembre-1 de marzo de 1945	1986	Marco Vinicio Cerezo Arévalo
1945	Juan José Arévalo Bermejo	1991	Jorge Serrano Elías
1951	Jacobo Arbenz Guzmán	1993	Ramiro de León Carpio

Haití

1867	Sylvain Salnave	1946	Frank Lavaud, 12 de enero-15 de agosto
1870	Nissage-Saget [fnu]		Dumarsais Estimé, 15 de agosto-10 de mayo de 1950
1874	Michel Dominique	1950	Frank Lavaud, 10 de mayo-6 de diciembre
1876	Boisrond Canal [fnu]		Paul (Eugène) Magloire, 6 de diciembre-12 de diciembre de 1956
1879	Étienne Félicité Salomon	1956	Joseph Nemours Pierre-Louis
1888	Télémaque, 24 de agosto-19 de septiembre	1957	François Sylvain, 7 de febrero-2 de abril
	François Denis Légitime, 23 de octubre-22 de agosto de 1889		Comité Ejecutivo de trece ministros bajo la protección del ejército, 6 de abril-20 de mayo
1889	Louis Mondastin Floréal Hippolyte		Léon Cantave, 20-26 de mayo
1896	P. A. Tirésias Simon Sam		Daniel Fignolé, 26 de mayo-14 de junio
1902	Boisrond Canal [fnu], 9 de mayo-21 de diciembre		Antoine Kebreau, 14 de junio-15 de octubre
	Alexis Nord, 21 de diciembre-2 de diciembre de 1908		François Duvalier, 22 de octubre-21 de abril de 1971
1908	Antoine Simon	1971	Jean-Claude Duvalier
1911	Michel Cincinnatus Leconte	1986	Henri Namphy
1912	Tancrède Auguste	1988	Leslie Maingat, 7 de febrero-20 de junio
1913	Michel Oreste		Henri Namphy, 20 de junio-18 de septiembre
1914	Oreste Zamor, 8 de febrero-29 de octubre		Prosper Avril, 18 de septiembre-13 de marzo de 1990
	Joseph Davilmare Théodore, 7 de noviembre -23 de febrero de 1915	1990	Ertha Pascal-Trouillot
1915	Jean Velbrun-Guillaume, 4 de marzo-26 de julio	1991	Jean-Bertrand Aristide
	Philippe Sudre Dartiguenave, 12 de agosto-15 de mayo de 1922	1991	Raoul Cédras
1922	Joseph Louis Bornó	1994	Émile Jonaissaint
1930	Étienne Roy, 15 de mayo-18 de noviembre	1995	Jean-Bertrand Aristide
	Sténio Vincent, 18 de noviembre-abril de 1941		
	(1915-1934, <i>ocupación estadounidense</i>)		
1941	Élie Lescot		

Honduras

1876	Marco Aurelio Soto	1907	Miguel R. Dávila
1883	Luis Bográn	1911	Francisco Beltrán
1891	Pariano Leiva	1912	Manuel Bonilla
1893	Domingo Vázquez	1913	Francisco Bertrand
1894	Policarpo Bonilla	1915	Alberto Membreño
1899	Terencio Sierra	1916	Francisco Bertrand
1903	Manuel Bonilla	1920	Rafael López Gutiérrez

1924	Fausto Dávila, 27-31 de marzo	1963	Oswaldo López Arellano
	Vicente Tosta, 1 de abril-2 de febrero de 1925	1971	Ramón Ernesto Cruz
1925	Miguel Paz Barahona	1972	Oswaldo López Arellano
1929	Vicente Mejía Colindres	1975	Juan Alberto Melgar Castro
1933	Tiburcio Carías Andino	1978	Policarpio Paz García
1949	Juan Manuel Gálvez	1982	Roberto Suazo Córdova
1956	Roque I. Rodríguez	1986	José Simeón Azcona Hoyo
1957	Ramón Villeda Morales	1990	Rafael Leonardo Callejas
		1994	Carlos Roberto Reina

Jamaica

1962	William Alexander Bustamante	1972	Michael Norman Manley
1967	Donald Burns Sangster [desde 1965 actuó como primer ministro], 22 de febrero-11 de abril	1980	Edward Phillip George Seaga
	Hugh Lawson Shearer, 11 de abril-1 de marzo de 1972	1989	Michael Norman Manley
		1992	P. J. Patterson

México

1876	Porfirio Díaz	1928	Emilio Portes Gil
1880	Manuel González	1930	Pascual Ortiz Rubio
1884	Porfirio Díaz	1932	Abelardo Rodríguez
1911	Francisco León de la Barra, 25 de mayo-6 de noviembre	1934	Lázaro Cárdenas
	Francisco Madero, 6 de noviembre-18 de febrero de 1913	1940	Manuel Ávila Camacho
1913	Victoriano Huerta	1946	Miguel Alemán
1914	Venustiano Carranza	1952	Adolfo Ruiz Cortines
1920	Adolfo de la Huerta, 21 de mayo-1 de diciembre	1958	Adolfo López Mateos
	Álvaro Obregón, 1 de diciembre-1 de diciembre de 1924	1964	Gustavo Díaz Ordaz
1924	Plutarco Elías Calles	1970	Luis Echeverría Álvarez
		1976	José López Portillo
		1982	Miguel de la Madrid Hurtado
		1988	Carlos Salinas de Gortari
		1994	Ernesto Zedillo Ponce de León

Nicaragua

1879	Joaquín Zavala	1910	José Dolores Estrada
1883	Adán Cárdenas	1911	Juan José Estrada, 1 de enero-9 de mayo
1887	Evaristo Carazo		Adolfo Díaz, 9 de mayo-31 de diciembre de 1916
1889	Roberto Sacaza	1917	Emiliano Chamorro Vargas
1893	Innere Wirren	1919	Diego Manuel Chamorro
	José Santos Zelaya		
1909	José Madriz		

1923	Bartolomeo Martínez	1950	Anastasio Somoza García («Tacho»)
1925	Carlos Solórzano (<i>ocupación estadounidense</i>)	1956	Luis Somoza Debayle
1926	Emiliano Chamorro Vargas, 15 de enero-11 de noviembre Adolfo Díaz, 11 de noviembre-1 de enero de 1929	1963	René Schick Gutiérrez
1929	José María Moncada (<i>ocupación estadounidense</i>)	1966	Lorenzo Guerrero Gutiérrez
1933	Juan Bautista Sacasa	1967	Anastasio Somoza Debayle («Tachito»)
1936	Carlos Brenes Jarquín	1972	Junta de gobierno de la familia Somoza
1937	Anastasio Somoza García («Tacho»)	1974	Anastasio Somoza Debayle («Tachito»)
1947	Leonardo Argüello, 1-26 de mayo Benjamín Lacaya Sacasa, 26 de mayo-15 de agosto Víctor Román y Reyes, 14 de agosto-6 de mayo de 1950	1979	Junta de Francisco Urcuyo: Daniel Ortega y otros
		1985	José Daniel Ortega Saavedra
		1990	Violeta Chamorro

Panamá

1904	Manuel Amador Guerrero	1932	Ricardo J. Alfaro, 16 de enero-1 de octubre de 1932
1908	José Domingo de Obaldía	1936	Harmodio Arias
1910	Carlos Antonio Mendoza, 1 de marzo-1 de octubre Federico Boyd, 1-4 de octubre Pablo Arosemena, 4 de octubre-2 de febrero de 1912	1939	Juan Demóstenes Arosemena
1912	Rodolfo Chiari, 2 de febrero-7 de marzo Pablo Arosemena, 7 de marzo-1 de octubre Belisario Porras, 1 de octubre-1 de octubre de 1916	1940	Augusto S. Boyd
1916	Ramón Maximiliano Valdés	1941	Arnulfo Arias
1918	Ciro Louis Urriola, 3 de junio-1 de octubre Pedro Antonio Díaz, 1-12 de octubre Belisario Porras, 12 de octubre-30 de enero de 1920	1945	Ernesto Jaén Guardia, 9 de octubre
1920	Ernesto Tisdel Lefevre, 30 de enero-1 de octubre Belisario Porras, 1 de octubre-1 de octubre de 1924	1948	Ricardo Adolfo de la Guardia, 9 de octubre-15 de junio de 1945
1924	Rodolfo Chiari	1949	Enrique Adolfo Jiménez
1928	Florencio Harmodio Arosemena	1951	Domingo Díaz Arosemena
1931	Harmodio Arias, 2-16 de enero	1952	Daniel Chanis, 28 de julio-20 de noviembre
		1955	Roberto Chiari, 20-25 de noviembre
		1956	Arnulfo Arias, 24 de noviembre-10 de mayo de 1951
		1956	Alcibiades Arosemena
		1960	José Antonio Remón Cantera
		1964	José Ramón Guizado, 3-15 de enero
		1964	Ricardo M. Arias Espinosa, 15 de enero-1 de octubre de 1956
		1964	Ernesto de la Guardia, jr.
		1964	Roberto F. Chiari
		1964	Marco Aurelio Robles

1968	Arnulfo Arias Madrid, 1-11 de octubre Omar Torrijos, 11 de octubre-septiembre de 1978	1985	Eric Arturo Devalle Henríquez
1978	Aristides Royo	1988	Manuel Solís Palma (de facto, general Manuel Antonio Noriega)
1982	Ricardo de la Espriella	1989	Francisco Rodríguez, septiembre-diciembre
1984	Jorge Illueca Nicolás Ardito Barletta Vallarino	1989	Guillermo Endara
		1994	Ernesto Pérez Balladares

Perú

1886	Andrés Avelino Cáceres		David Sámanez Ocampo, 11 de marzo-8 de diciembre
1890	Remigio Morales Bermúdez		Luis M. Sánchez Cerro, 8 de diciembre-30 de abril de 1933
1894	J. Borgoño, 1 de mayo-10 de agosto Andrés Avelino Cáceres, 10 de agosto-19 de marzo de 1895	1933	Óscar R. Benavides
1895	Manuel Candamo, 21 de marzo-8 de septiembre Nicolás Piérola, 8 de septiembre-8 de septiembre de 1899	1939	Manuel Prado y Ugarteche
1899	Eduardo López de Romaña	1945	José Luis Bustamante y Rivero
1903	Manuel Candamo	1948	Zenón Noriega, 29-30 de octubre
1904	Serapio Calderón, 7 de mayo-24 de septiembre José Pardo y Barreda, 24 de septiembre-24 de septiembre de 1908	1950	Manuel A. Odría, 31 de octubre-1 de junio de 1950
1908	Augusto B. Leguía	1956	Zenón Noriega, 1 de junio-28 de julio
1912	Guillermo E. Billinghurst	1962	Manuel A. Odría, 28 de julio-28 de julio de 1956
1914	Óscar R. Benavides	1963	Manuel Prado y Ugarteche
1915	José Pardo	1968	Ricardo Pérez Godoy
1919	Augusto B. Leguía	1975	Nicolás Lindey López, 3 de marzo-28 de julio
1930	Manuel Ponce, 25-27 de agosto Luis M. Sánchez Cerro, 27 de agosto-1 de marzo de 1931	1980	Fernando Belaúnde Terry, 28 de julio-3 de octubre de 1968
1931	Ricardo Leoncio Elías, 1-5 de marzo Gustavo A. Jiménez, 5-11 de marzo	1985	Juan Velasco Alvarado
		1990	Francisco Morales Bermúdez
		1995	Fernando Belaúnde Terry
		1995	Alan García Pérez
		1990	Alberto Fujimori
		1995	Alberto Fujimori

Puerto Rico

1948	Luis Muñoz Martín	1976	Carlos Romero Barceló
1964	Roberto Sánchez Vilella	1984	Rafael Hernández Colón
1968	Luis A. Ferré	1988	Rafael Hernández Colón
1972	Rafael Hernández Colón	1992	Pedro J. Rosselló

República Dominicana

1868	Buenaventura Báez	Rafael Leonidas Trujillo y Molina,
1874	Ignacio (María) González	18 de agosto-18 de junio de 1838
1876	Ulises Francisco Espaillat, 29 de junio-noviembre	[presidente de facto hasta 1961]
	Ignacio González, noviembre-diciembre	1938 Jacinto Bienvenido Peynado
	Buenaventura Báez, diciembre-24 de febrero de 1878	1940 Manuel de Jesús Troncoso de la Concha
1878	Cesáreo Guillermo	1942 Rafael Leónidas Trujillo y Molina
1879	Gregorio Luperón	1952 Héctor Bienvenido Trujillo
1880	Fernando Arturo de Meriño	1960 Joaquín Balaguer
1884	Ulises Heureaux	1962 Rafael (Filiberto) Bonnelly, 1-17 de enero
1885	Francisco Gregorio Billini	Huberto Bogaert, 17-19 de enero
1887	Ulises Heureaux	Rafael Bonnelly, 19 de enero-27 de febrero de 1963
1889	Juan Wenceslao Figuereo, 1-31 de agosto	1963 Juan Bosch Gavino, 27 de febrero-26 de septiembre
	Horacio Vásquez, 1 de septiembre-14 de noviembre	Emilio de los Santos, 26 de septiembre-22 de diciembre
	Juan Isidro Jiménez, 19 de noviembre-2 de mayo de 1902	Donald Reid Cabral, 22 de diciembre-25 de abril de 1965
1902	Horacio Vásquez	1965 Disturbios y guerra civil, 25 de abril-3 de septiembre de 1965
1903	Alejandro Wos y Gil, 27 de abril-20 de noviembre	Elías Wessin y Wessin, 28 de abril-7 de mayo
	Juan Isidro Jiménez, 28 de diciembre-2 de abril de 1904	Antonio Imbert Barreras 7 de mayo-30 de agosto
1904	Carlos Morales	Francisco Caamaño Deñó, 25 de abril-3 de septiembre
1906	Ramón Cáceres	Héctor García Godoy Cáceres, 3 de septiembre-1 de julio de 1966 (1965, ocupación estadounidense)
1911	Eladio Victoria	1966 Joaquín Balaguer
1912	Adolfo Nouel y Bobadilla	1978 Silvestre Antonio Guzmán Fernández
1913	José Bordas y Valdés	1982 Jacobo Majluta, 4 de julio-14 de agosto
1914	Ramón Báez, 27 de agosto-5 de diciembre	1982 Salvador Jorge Blanco
	Juan Isidro Jiménez, 5 de diciembre-8 de mayo de 1916	1986 Joaquín Balaguer
1916	Francisco Henríquez y Carvajal	1990 Joaquín Balaguer
1922	Juan Bautista Vicini Burgos (1916-1922 ocupación estadounidense)	1994 Joaquín Balaguer
1924	Horacio Vásquez	
1930	Rafael Estrella Urena, 2 de marzo-16 de agosto	

El Salvador

1876	Rafael Zaldívar y Lazo	1890	Carlos Ezeta
1885	Francisco Menéndez	1894	Rafael Gutiérrez

Jefes de Estado 459

1898	Tomás Regalado	1949	Óscar Osorio, 4 de enero-22 de octubre
1903	Pedro José Escalón	1950	Óscar Bolaños, 22 de octubre-14 de septiembre de 1950
1907	Fernando Figueroa	1956	Óscar Osorio
1911	Manuel Enrique Araújo	1960	José María Lemus
1913	Carlos Meléndez	1961	Miguel Ángel Castillo
1914	Alfonso Quiñones Molina	1962	Aníbal Portillo
1915	Carlos Meléndez	1967	Eusebio Rodolfo Cordón, 25 de enero-1 de julio
1919	Jorge Meléndez	1972	Julio Adalberto Rivera, 1 de julio-1 de julio de 1967
1923	Alfonso Quiñones Molina	1977	Fidel Sánchez Hernández
1927	Pío Romero Bosque	1979	Arturo Armando Molina
1931	Arturo Araujo, 1 de marzo-4 de diciembre de 1931	1980	Carlos Humberto Romero
	Maximiliano Hernández Martínez, 4 de diciembre de 1931-29 de agosto de 1934	1982	Jaime Abdul Gutiérrez, Adolfo Arnoldo Majano y junta
1934	Andrés Ignacio Menéndez	1984	José Napoleón Duarte
1935	Maximiliano Hernández Martínez	1989	Álvaro Alfredo Magaña (presidente provisional)
1944	Andrés Ignacio Menéndez, 9 de mayo-21 de octubre de 1944	1994	José Napoleón Duarte
	Osmín Aguirre y Salinas, 21 de octubre de 1944-1 de marzo de 1945		Alfredo Cristiani
1945	Salvador Castañeda Castro		Armando Calderón Sol
1948	Manuel de J. Córdova		

Trinidad y Tobago

1962	Eric Eustace Williams	1987	A. N. Raymond Robinson
1981	George Chambers	1991	Patrick Manning

Sugerencias para lecturas complementarias

Las lecturas sugeridas están ordenadas según la secuencia de capítulos seguida en el texto, lo que hace que se solapen por necesidad. Algunas de las indicadas para los capítulos dedicados a los países y a las subregiones también resultan importantes para el prólogo, los capítulos 1, 2 y 11, y el epílogo. Los lectores interesados en un país concreto de los tratados en esos capítulos pueden también acudir a las sugerencias anotadas para el capítulo específico que se le dedica.

Los títulos que siguen se han seleccionado para que proporcionen una lectura interesante y provechosa a quien se inicia en el estudio de América Latina contemporánea, por lo que hemos evitado obras «definitivas» inmanejables. Nuestro objetivo es sugerir libros que se vayan a leer realmente y se destacan aquellos publicados recientemente. La lista se ciñe a los temas desarrollados en cada capítulo del texto. Los lectores que deseen mayor detalle encontrarán gran profusión de ellos en la mayoría de los títulos sugeridos.

Prólogo: ¿Por qué América Latina?

Los estereotipos estadounidenses acerca de América Latina, según se reflejan en las caricaturas de los periódicos y revistas desde finales del siglo XIX, aparecen recogidos en John J. Johnson, *Latin America in Caricature*, Austin, University of Texas Press, 1980. Uno de los mejores intentos de explicar América Latina contemporánea al lector no especializado es Peter Winn, *Americas: The Changing Face of Latin America and the Caribbean*, Nueva York, Pantheon, 1992. Para un desarrollo bastante más esqueta de la misma materia, véase Oxford Analytica, *Latin America in Perspective*, Boston, Houghton Mifflin, 1991. Una nueva obra de referencia de carácter multidisciplinario sobre América Latina es Simon Collier, Thomas E. Skidmore y Harold Blakemore, eds., *The Cambridge Encyclopedia of Latin America and the Caribbean*, ed. revisada, Cambridge, Cambridge University Press, 1992. Un amplio tratamiento de temas escogidos aparece en Alfred Stepan, ed., *The Americas: New Interpretive Essays*, Nueva York, Oxford University Press, 1992, y un examen de las tendencias actuales de investigación puede encontrarse en Peter H. Smith, ed., *Latin America in Comparative Perspective: New Approaches to Methods and Analysis*, Boulder, Westview Press, 1995.

El análisis de la dependencia ha originado una amplia literatura y una controversia considerable. La formulación clásica sigue siendo la de Fernando Henrique Car-

doso y Enzo Faletto, *Dependencia y desarrollo en América Latina*, México, Siglo XXI Eds., 1969. El intento más sistemático de desacreditar al enfoque independentista es Robert A. Packenham, *The Dependency Movement: Scholarship and Politics in Development Studies*, Cambridge, Harvard University Press, 1992.

Un punto de partida excelente para comprender la experiencia chicana en Estados Unidos es Rodolfo O. de la Garza *et al.*, eds., *The Mexican American Experience: An Interdisciplinary Anthology*, Austin, University of Texas Press, 1985. Para una profunda historia social de la Mesoamérica más septentrional, véase Ramón A. Gutiérrez, *When Jesus Came, the Corn Mothers Went Away: Marriage, Sexuality, and Power in New Mexico, 1500-1846*, Stanford, Stanford University Press, 1991. La complicada cuestión de la identidad latina es abordada hábilmente en Suzanne Oboler, *Ethnic Labels, Latino Lives: Identity and the Politics of (Re)Presentation in the United States*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1995.

1. Los cimientos coloniales (1492-década de 1880)

Con demasiada frecuencia, la «conquista» se considera sólo desde la perspectiva europea. El libro de Miguel León-Portilla, *El reverso de la conquista. Relaciones aztecas, mayas e incas*, México, Joaquín Mortiz, 1964, constituye un excelente correctivo. Para una síntesis magistral de este drama, véase Hugh Thomas, *Conquest: Montezuma, Cortes, and the Fall of Old Mexico*, Nueva York, Simon & Schuster, 1993. Un estudio pionero de cómo los pueblos nativos se ajustaron al gobierno europeo mientras preservaban el sentido de la comunidad es el de Steve J. Stern, *Los pueblos indígenas del Perú y el desafío de la conquista española: Huamanga hasta 1640*, trad. de Fernando Santos Fontela, Madrid, Alianza Editorial, 1986. Un excelente libro paralelo para un periodo anterior de México es el de Inga Clendinnen, *Ambivalent Conquest: Maya and Spaniard in Yucatan, 1517-1570*, Cambridge, Cambridge University Press, 1987.

La mejor síntesis actual sobre el mundo colonial ibérico es la de Leslie Bethell, ed., *Historia de América Latina*, vols. 1-4: *América Latina colonial*, Barcelona, Cambridge University Press y Crítica, 1990. Para un tratamiento breve y eficaz, véase Mark A. Burkholder y Lyman L. Johnson, *Colonial Latin America*, 2.^a ed., Nueva York, Oxford University Press, 1994. Para el Brasil colonial, no existe sustituto del clásico libro de Gilberto Freyre, *Casa grande y senzala*, Buenos Aires, Emecé, 1943. El mejor estudio monográfico sobre la esclavitud colonial brasileña es el de Stuart B. Schwartz, *Sugar Plantations in the Formation of Brazilian Society: Bahia, 1550-1835*, Cambridge, Cambridge University Press, 1985. Nueva investigación sobre la estructura familiar se ofrece en Alida C. Metcalf, *Family and Frontier in Colonial Brazil: Santana de Parnaíba 1580-1822*, Berkeley, University of California Press, 1992.

Los orígenes y afanes de la independencia en la América española son descritos por John Lynch en el amplio *Las revoluciones hispanoamericanas, 1808-1826*, Barcelona, Ariel, 1976. El periodo postindependentista está bien tratado en Leslie Bethell, ed., *Historia de América Latina*, vol. 6: *América Latina independiente, 1820-1870*, Barcelona, Cambridge University Press y Crítica, 1992, y en David Bushnell y Neill Macaulay, *The Emergence of Latin America in the Nineteenth Century*, 2.^a ed., Nueva York, Oxford University Press, 1994. Esta historia para México es explicada con abundante detalle en D. A. Brading, *Orbe Indiano, De la monarquía católica a la república criolla, 1492-1867*, México, Fondo de Cultura Económica, 1991. Traducción de Juan José Utrilla. La creación de identidades nacionales mediante la literatura se in-

vestiga en Doris Sommer, *Foundational Fictions: The National Romances of Latin America*, Berkeley, University of California Press, 1991.

2. *La transformación de América Latina contemporánea (década de 1880-década de 1990)*

La historia más fiable de gran parte de este periodo se encuentra en Leslie Bethell, ed., *Historia de América Latina*, vols. 7-10, Barcelona, Cambridge University Press y Crítica, 1992. Victor Bulmer-Thomas, *The Economic History of Latin America since Independence*, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, la primera historia económica global en inglés, narra la historia del cambio del predominio de la exportación a la sustitución de importaciones y de ahí al neoliberalismo. Se proporciona una crítica de la ideología que las acompaña en Joseph L. Love y Nils Jacobsen, eds., *Guiding the Invisible Hand: Economic Liberalism and the State in Latin American History*, Nueva York, Praeger, 1988. Un estudio pionero de la creación del Estado moderno latinoamericano es Florencia E. Mallon, *Peasant and Nation: The Making of Postcolonial Mexico and Peru*, Berkeley, University of California Press, 1995. A la industrialización, uno de los temas más importantes, se le dedica un esclarecedor análisis comparativo en Gary Gereffi y Donald L. Wyman, eds., *Manufacturing Miracles: Paths of Industrialization in Latin America and East Asia*, Princeton, Princeton University Press, 1990. Una década esencial en este proceso es analizada en Leslie Bethell e Ian Roxborough, eds., *Latin America Between the Second World War and the Cold War 1944-1948*, Cambridge, Cambridge University Press, 1992, y en David Rock, ed., *Latin America in the 1940s: War and Postwar Transitions*, Berkeley, University of California Press, 1994.

La carga de la deuda exterior, que resultó abrumadora en los años ochenta y dejó un terrible legado para los noventa, produjo un torrente de análisis, como el de Robert Devlin, *Debt and Crisis in Latin America: The Supply Side of the Story*, Princeton, Princeton University Press, 1989. Los costes humanos de los ajustes de la deuda se desarrollan en Howard Handelman y Werner Baer, eds., *Paying the Costs of Austerity in Latin America*, Boulder, Westview, 1989. Para un buen estudio comparativo, véase Stephan Haggard y Robert R. Kaufman, eds., *The Politics of Economic Adjustment: International Constraints, Distributive Conflicts, and the State*, Princeton, Princeton University Press, 1992.

El punto de partida indispensable para comprender la izquierda política es Jorge G. Castañeda, *Utopia Unarmed: The Latin American Left after the Cold War*, Nueva York, Alfred A. Knopf, 1993. Un análisis global de la interacción entre el Estado y los trabajadores aparece en Ruth Berins Collier y David Collier, *Shaping the Political Arena: Critical Junctures, the Labor Movement, and Regime Dynamics in Latin America*, Princeton, Princeton University Press, 1991. Se ha dado un rápido crecimiento de la investigación y publicación sobre las mujeres en la historia de América Latina. Para ejemplos, véase Rae Lesser Blumberg, Cathy A. Rakowski, Irene Tinker y Michael Monteón, eds., *EnGendering Wealth and Well-Being: Empowerment for Global Change*, Boulder, Westview, 1995; Christine E. Bose y Edna Acosta-Belén, eds., *Women in the Latin American Development Process*, Filadelfia, Temple University Press, 1995; Carmen Diana Deere y Magdalena León de Leal, eds., *Rural Women and State Policy: Feminist Perspectives on Latin American Agricultural Development*, Boulder, Westview, 1987; Jane S. Jaquette, ed., *The Women's Movement in Latin America: Par-*

ticipation and Democracy, 2.^a edición, Boulder, Westview, 1994; Emilie Bergmann *et al.*, *Women, Culture and Politics in Latin America*, Berkeley, University of California Press, 1990, y Gertrude M. Yeager, ed., *Confronting Change, Challenging Tradition: Women in Latin American History*, Wilmington, Scholarly Resources, 1994.

El argumento de nuestro capítulo sobre la transformación (década de 1880-década de 1990) ha sido muy influido por Guillermo O'Donnell, *Modernización y autoritarismo*, Buenos Aires, Paidós, 1972, cuya resistencia es criticada por David Collier, ed., *The New Authoritarianism in Latin America*, Princeton, Princeton University Press, 1979. El terrible costo humano de las dictaduras latinoamericanas se describe en Juan E. Corradi, Patricia Weiss Fagen y Manuel Antonio Garretón, eds., *Fear at the Edge: State Terror and Resistance in Latin America*, Berkeley, University of California Press, 1992. La transición a la democracia en gran parte de América Latina durante los años ochenta se analiza satisfactoriamente en Guillermo O'Donnell, Philippe C. Schmitter y Laurence Whitehead, eds., *Transitions from Authoritarian Rule*, 4 vols., Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1986, y en Scott Mainwaring, Guillermo O'Donnell y J. Samuel Valenzuela, eds., *Issues in Democratic Consolidation: The New South American Democracies in Comparative Perspective*, Notre Dame, University of Notre Dame Press, 1992. El creciente papel de la televisión se examina en Thomas E. Skidmore, ed., *Television, Politics, and the Transition to Democracy in Latin America*, Washington, The Woodrow Wilson Center Press, 1993.

3. Argentina: prosperidad, estancamiento y cambio

La mejor síntesis es la de David Rock, *Argentina, 1516-1987: From Spanish Colonization to the Falklands War* y *Alfonsín*, ed. rev., Berkeley, University of California Press, 1987. Para entender el siglo XIX argentino y los orígenes de su nacionalismo moderno, se debe comenzar con el famoso Rosas, que ha recibido su mejor biografía académica en John Lynch, *Argentine Dictator: Juan Manuel de Rosas, 1829-1852*, Oxford, Oxford University Press, 1981. El papel crucial del movimiento obrero se investiga en Ronaldo Munck, Ricardo Falcón y Bernardo Galitelli, *Argentina: From Anarchism to Peronism*, Londres, Zed, 1987. La interacción de grupos de interés y la planificación política para un sector entre 1900 y 1946 se explora en Peter H. Smith, *Politics and Beef in Argentina: Patterns of Conflict and Change*, Nueva York, Columbia University Press, 1969. La forma en que sistemáticamente Estados Unidos malinterpretó las intenciones de la política exterior argentina se revela en Ronald C. Newton, *The «Nazi Menace» in Argentina, 1931-1947*, Stanford, Stanford University Press, 1992.

Carlos F. Díaz Alejandro, *Essays on the Economic History of the Argentine Republic*, New Haven, Yale University Press, 1970, es la primera historia económica sobre la Argentina contemporánea. Investigaciones posteriores se incorporan en Guido di Tella y D. C. M. Platt, eds., *The Political Economy of Argentina, 1880-1946*, Nueva York, St. Martin's Press, 1986, y Guido di Tella y Rudiger Dornbusch, eds., *The Political Economy of Argentina, 1946-1983*, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1989. Para el periodo más reciente, véase Felipe A. M. de la Balze, *Remaking the Argentine Economy*, Nueva York, Council on Foreign Relations Press, 1995.

Juan Domingo y Eva Perón despertaron tales emociones, que ha tardado mucho en aparecer una historia objetiva sobre ellos. El ambicioso *Perón: A Biography*, Nueva York, Random House, 1983, de Joseph A. Page, está bien escrito y documentado.

Existe un estudio similar sobre Eva Perón, si bien a escala menor, escrito por Nicolas Fraser y Marysa Navarro, *Eva Perón*, Nueva York, W. W. Norton, 1980. Para una visión negativa de las políticas económicas de Perón, véase Paul H. Lewis, *The Crisis of Argentine Capitalism*, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 1990. El importante papel del gobierno de Frondizi es estudiado en Celia Szusterman, *Frondizi and the Politics of Developmentalism in Argentina, 1955-62*, Londres, Macmillan, 1993.

Una de las cuestiones más persistentes sobre Argentina es por qué un país tan desarrollado económicoamente se ha visto plagado de régimes autoritarios desde 1945. Los orígenes de ese fracaso aparente se establecen con claridad en Peter H. Smith, *Argentina and the Failure of Democracy: Conflict among Political Elites. 1904-1955*, Madison, University of Wisconsin Press, 1974. Si se busca el análisis de un sociólogo argentino, véase Carlos Waisman, *Reversal of Development in Argentina: Postwar Counterrevolutionary Policies and Their Structural Consequences*, Princeton, Princeton University Press, 1987. Guillermo O'Donnell ha profundizado su análisis anterior (véase la referencia en el capítulo 2) en *Bureaucratic Authoritarianism: Argentina, 1966-1973, in Comparative Perspective*, Berkeley, University of California Press, 1988. El sórdido final de la dictadura de Galtieri es narrado de forma amena en Jimmy Burns, *The Land that Lost its Heroes: Argentina, the Falklands and Alfonsín*, Londres, Bloomsbury, 1987. Un recuento de los acontecimientos recientes es E. Epstein, ed., *The New Argentine Democracy: The Search for a Successful Formula*, Westport, Praeger, 1992.

4. Chile: socialismo, represión y democracia

Brian Loveman ha escrito una historia general precisa en *Chile: The Legacy of Hispanic Capitalism*, 2.ª ed., Nueva York, Oxford University Press, 1988. La historia del sector agrario entre 1850 y 1940 se traza en Arnold J. Bauer, *Chilean Rural Society from the Spanish Conquest to 1930*, Cambridge, Cambridge University Press, 1975. Un aspecto de esa historia es actualizado en D. E. Hojman, *Change in the Chilean Countryside: From Pinochet to Aylwin and Beyond*, Londres, Macmillan, 1993.

La interpretación del siglo XIX chileno gira en torno a la del presidente Balmaceda y la guerra civil de 1891. La más documentada y mejor fundamentada —aunque no aceptada de forma universal— es la de Harold Blakemore, *British Nitrates and Chilean Politics, 1886-1896: Balmaceda and North*, Londres, Athlone Press, 1974. Las luchas de los trabajadores por el derecho a la negociación, así como las ganancias cotidianas, están bien reflejadas en Peter DeShazo, *Urban Workers and Labor Unions in Chile, 1902-1927*, Madison, University of Wisconsin Press, 1983, que resalta los sindicatos anarquistas.

Uno de los estudios más penetrantes sobre uno de los partidos políticos latinoamericanos es el de Paul W. Drake, *Socialism and Populism in Chile, 1932-1952*, Urbana, University of Illinois Press, 1978. El partido es el Socialista, que atrajo a muchos antiguos anarquistas y luego se desplazó a la izquierda del Partido Comunista Chileno. Una historia detallada del gobierno de Allende puede encontrarse en Edy Kaufman, *Crisis in Allende's Chile: New Perspectives*, Nueva York, Praeger, 1988.

Uno de los cuadros más equilibrados del proceso que llevó al golpe de 1973 se encuentra en Arturo Valenzuela, *The Breakdown of Democratic Regimes: Chile*, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1978. Un relato muy bien escrito acerca de la

ocupación de una fábrica por sus trabajadores en 1971 se presenta en Peter Winn, *Wetavers of Revolution: The Yarur Workers and Chile's Road to Socialism*, Nueva York, Oxford University Press, 1986. Un buen recuento de cómo la oposición tecnocrática proyectó la etapa pos-Pinochet es J. M. Puryear, *Thinking Politics: Intellectuals and Democracy in Chile, 1973-1988*, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1994. La evolución de Chile con las políticas neoliberales es analizada en Barry P. Bosworth, Rudiger Dornbusch y Raúl Labán, eds., *The Chilean Economy: Policy Lessons and Challenges*, Washington, The Brookings Institution, 1994; Joseph Collins y John Lear, *Chile's Free-Market Miracle: A Second Look*, Oakland, Food First, 1995, y D. E. Hojman, *Chile: The Political Economy of Development and Democracy in the 1990s*, Londres, Macmillan, 1993.

Pocos negarían que la Iglesia católica ha desempeñado un papel primordial en el siglo xx chileno. La historia de ese papel se analizada con lucidez en Brian H. Smith, *The Church and Politics in Chile: Challenges to Modern Catholicism*, Princeton, Princeton University Press, 1982.

Si se quiere una gran riqueza de información y análisis sobre Chile desde 1973, véase Pamela Constable y Arturo Valenzuela, *A Nation of Enemies: Chile Under Pinochet*, Nueva York, W. W. Norton, 1991, y Genaro Arriagada, *Pinochet: The Politics of Power*, Londres, Unwin Hyman, 1988. La autobiografía del premio Nobel de poesía chileno es un viaje fascinante por los mundos artísticos de América Latina y Europa: Pablo Neruda, *Confieso que he vivido: memorias*, Barcelona, Seix Barral, 1974. También abre los ojos a la persecución política, ya que militó durante mucho tiempo en el Partido Comunista.

5. Brasil: ¿desarrollo para quién?

E. Bradford Burns, *A History of Brazil*, 3.^a ed., Nueva York, Columbia University Press, 1993, es una investigación fundamentada con una completa bibliografía para lecturas adicionales. La interpretación general más importante de la historia económica de Brasil es la de Celso Furtado, *The Economic Growth of Brazil*, Berkeley, University of California Press, 1963, que llega hasta comienzos de los años cincuenta. Los años más recientes se tratan en Werner Baer, *The Brazilian Economy: Growth and Development*, 4.^a ed., Westport, Praeger, 1995, que incluye una gran riqueza de datos, al igual que Edmar L. Bacha y Herbert S. Klein, eds., *Social Change in Brazil, 1945-1985: The Incomplete Transition*, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1989. Se otorga a la cultura contemporánea de Brasil un análisis interesante en Roberto A. Da Matta, *Carnivals, Rogues, and Heroes: An Interpretation of the Brazilian Dilemma*, Notre Dame, University of Notre Dame Press, 1991, y en David Hess y Roberto A. Da Matta, eds., *The Brazilian Puzzle: Culture on the Borderlands of the Western World*, Nueva York, Columbia University Press, 1995. Joseph A. Page, *The Brazilians*, Reading, Addison-Wesley Publishing Company, 1995, es una visión general con mucha información.

Emilia Viotti da Costa presenta un brillante análisis del periodo de 1822 a 1889 en *The Brazilian Empire: Myths and Histories*, Chicago, University of Chicago Press, 1985. Uno de los mejores microestudios de una región de América Latina es el de Stanley J. Stein, *Vassouras: A Brazilian Coffee County, 1850-1900*, Cambridge, Harvard University Press, 1957. Un estudio posterior, concentrado en los sindicatos industriales de São Paulo, destaca el papel esencial de las trabajadoras: Joel Wolfe, *Women*

provocado pasión. De la multitud de obras sobre la abolición, la más penetrante es la de Robert Conrad, *The Destruction of Brazilian Slavery, 1850-1888*, Berkeley, University of California Press, 1972. La interesante vida de un afrobrasileño de finales del siglo XIX es recobrada en *Prince of the People: The Life and Times of a Brazilian Free Man of Colour*, trad. Moyra Ashford, Londres, Verso, 1993. Para un análisis gramsciano de las relaciones raciales contemporáneas véase Michael George Hanchard, *Orpheus and Power: The Movimento Negro of Rio de Janeiro and São Paulo, Brazil, 1945-1988*, Princeton, Princeton University Press, 1994.

El intento de la élite brasileña por reconciliar la ciencia racista y la realidad de su sociedad multirracial se describe en Thomas E. Skidmore, *Black into White: Race and Nationality in Brazilian Thought*, ed. rev., Durham, Duke University Press, 1993. Sobre el reflejo del ideal de «blanqueamiento» en la literatura brasileña, véase David T. Haberly, *Three Sad Races: Racial Identity and National Consciousness in Brazilian Literature*, Cambridge, Cambridge University Press, 1983.

6. Perú: soldados, oligarcas e indios

Frederick B. Pike proporciona una eficaz investigación sobre la historia peruana en *The United States and the Andean Republics: Peru, Bolivia and Ecuador*, Cambridge, Harvard University Press, 1977. De la historia económica se ocupa admirablemente Paul Gootenberg, *Between Silver and Guano: Commercial Policy and the State in Post-independence Peru*, Princeton, Princeton University Press, 1989, e *Imagining Development: Economic Ideas in Peru's «Fictitious Prosperity» of Guano (1840-1880)*, Berkeley, University of California Press, 1993, así como en Rosemary Thorp y Jeffrey Bertram, *Peru 1890-1977: Growth and Policy in an Open Economy*, Nueva York, Columbia University Press, 1978.

Los efectos del rápido cambio económico sobre la población de las tierras altas se describen con complacencia en Florencia E. Mallon, *The Defense of Community in Peru's Central Highlands: Peasant Struggle and Capitalist Transition, 1860-1940*, Princeton, Princeton University Press, 1983. Para un estudio que enfoca un periodo posterior, véase Carmen Diana Deere, *Household and Class Relations: Peasants and Landlords in Northern Peru*, Berkeley, University of California Press, 1990. Frederick B. Pike, *The Politics of the Miraculous in Peru: Haya de la Torre and the Spiritualist Tradition*, Lincoln, University of Nebraska Press, 1986, brinda un análisis heterodoxo sobre el más famoso político peruano del siglo XX.

Muchas obras escritas sobre Perú se han concentrado en el régimen militar que tomó el poder en 1968. Uno de los retratos más cuidadosos del régimen posterior a 1968 es la colección editada por Cynthia McClintock y Abraham F. Lowenthal, eds., *The Peruvian Experiment Reconsidered*, Princeton, Princeton University Press, 1983. El enorme sector «informal» peruano recibió un análisis de fama mundial en Hernando de Soto, *The Other Path: The Invisible Revolution in the Third World*, Nueva York, Harper & Row, 1989. El tremendo impacto de Sendero Luminoso recibe interpretaciones diferentes en Deborah Poole y Gerardo Rénique, *Peru: Time of Fear*, Londres, Latin American Bureau, 1992, y en David Scott Palmer, ed., *The Shining Path of Peru*, 2.ª ed., Nueva York, St. Martin's Press, 1994.

7. México: domesticar una revolución

México tiene la fortuna de poseer una historia detallada, bien equilibrada y actualizada en un solo volumen: Michael C. Meyer y William L. Sherman, *The Course of Mexican History*, 5.^a ed., Nueva York, Oxford University Press, 1995. Incluye bibliografía en cada uno de los capítulos tanto en inglés como en español. La mejor introducción general a México es Alan Riding, *Vecinos distantes, un retrato de los mexicanos*, México, Joaquín Mortiz-Planeta, 1985, a pesar de las frecuentes opiniones accesorias del autor sobre el carácter mexicano. Puede encontrarse una interesante incursión en la mentalidad y estilo de la élite mexicana en Larissa Adler Lomnitz y Marisol Pérez-Lizaur, *A Mexican Elite Family, 1820-1980: Kinship, Class and Culture*, Princeton, Princeton University Press, 1987.

El más famoso reformador liberal (e indio de pura raza) del siglo XIX es tratado en Brian Hamnett, *Juárez*, Nueva York, Longman Publishing, 1994. El tema de la industrialización durante el porfiriato y después se trata en Stephen H. Haber, *Industry and Underdevelopment: The Industrialization of Mexico, 1890-1940*, Stanford, Stanford University Press, 1989. William H. Beezley presenta una maravillosa historia social sobre este periodo en *Judas at the Jockey Club and Other Episodes of Porfirian Mexico*, Lincoln, University of Nebraska Press, 1987.

Las explicaciones de la Revolución han acabado dominando la historiografía mexicana del siglo XX. Una síntesis rica y de fácil lectura sobre la primera década revolucionaria puede hallarse en Alan Knight, *The Mexican Revolution*, Cambridge, Cambridge University Press, 1986. Puede sentirse la atmósfera del periodo por las magníficas ilustraciones en Anita Brenner, *The Wind that Swept Mexico: The History of the Mexican Revolution of 1910-1942*, Austin, University of Texas Press, 1971. Uno de los más satisfactorios enfoques de la Revolución es el de la historia regional, como puede verse en Gilbert M. Joseph y Daniel Nugent, eds., *Everyday Forms of State Formation: Revolution and Negotiation of Rule in Modern Mexico*, Durham, Duke University Press, 1994.

El mejor estudio sobre la revolución agrarista es el de John Womack, Jr., *Zapata y la Revolución Mexicana*, México, Siglo XXI, 1969. Mientras éste se concentra en el estado de Morelos, John Tutino ofrece un análisis nacional y un contexto histórico más amplio en *From Insurrection to Revolution in Mexico: Social Bases of Agrarian Violence, 1750-1940*, Princeton, Princeton University Press, 1986, y en Friedrich Katz, ed., *Riot, Rebellion, and Revolution: Rural Social Conflict in Mexico*, Princeton, Princeton University Press, 1988. Se ha considerado durante mucho tiempo a Lázaro Cárdenas un héroe de la Revolución, pero su presidencia ha sido objeto de una crítica revisionista en Nora Hamilton, *The Limits of State Autonomy: Post-Revolutionary Mexico*, Princeton, Princeton University Press, 1982.

Un excelente panorama del ajuste neoliberal en México lo ofrece Nora Lustig, *Mexico: The Remaking of an Economy*, Washington, The Brookings Institution, 1992. Anterior y más pesimista es el texto de David Barkin, *Distorted Development: Mexico in the World Economy*, Boulder, Westview, 1990. Todo análisis sobre el PRI debe comenzar con sus métodos de reclutamiento, que se estudian de forma sistemática por primera vez en Peter H. Smith, *Los laberintos del poder: el reclutamiento de las élites políticas en México, 1900-1971*, trad. de Soledad Loaeza y Joaquín Urquidi, México, El Colegio de México, 1981. El papel predominante de los tecnócratas es analizado en Miguel Ángel Centeno, *Democracy Within Reason: Technocratic Revolution in Me-*

xico, University Park, Pennsylvania State University Press, 1994. Sobre un grupo menos estudiado, véase Roderic Ai Camp, *Generals in the Palacio: The Military in Modern Mexico*, Nueva York, Oxford University Press, 1992.

Sus relaciones con Estados Unidos han sido centrales en la historia mexicana, investigadas en la obra de Josefina Zoraída Vásquez y Lorenzo Meyer, *The United States and Mexico*, Chicago, University of Chicago Press, 1985. Para un estimulante diálogo entre un mexicano y un politólogo estadounidense, véase Robert A. Pastor y Jorge G. Castañeda, *Limits to Friendships: The United States and Mexico*, Nueva York, Alfred A. Knopf, 1988. De relevancia actual es el informe sobre política de la Comisión Bilateral de alto nivel sobre el Futuro de las Relaciones México-Estados Unidos, *The Challenge of Interdependence: Mexico and the United States*, Lanham, Md., University Press of America, 1988, cuyos hallazgos se sustentan en trabajos académicos preparatorios en *Dimensions of United States-Mexican Relations*, 5 vols., La Jolla, Center for U.S.-Mexican Studies, 1989-1990, editado por Rosario Green y Peter H. Smith.

Los intelectuales mexicanos han escrito relatos conmovedores sobre sus enfrentamientos con la realidad nacional. Sirva de ejemplo José Vasconcelos, *Ulises criollo*, en *Obras completas*, México, Editores Mexicanos Unidos, 1957-1961, 4 vols. La interpretación más famosa del carácter nacional mexicano es la que desarrolla Octavio Paz, *El laberinto de la soledad* (1.ª ed., 1959), México, Fondo de Cultura Económica, 1993, que tuvo una continuación en 1970, *Postdata*, México, Fondo de Cultura Económica, 1993.

8. Cuba: última colonia, primer Estado socialista

Cualquiera que estudie la historia de Cuba adquiere de inmediato una deuda con Hugh Thomas por su soberbia investigación de agradable lectura, *Cuba: la lucha por la libertad*, versión castellana de Neri Daurella, Barcelona, Grijalbo, 1973-1974. Una excelente historia general es la de Louis A. Pérez, Jr., *Cuba: Between Reform and Revolution*, Nueva York, Oxford University Press, 1988. La agitada historia de los afro-cubanos, que culminó en la masacre de 1912, es narrada en Aline Helg, *Our Rightful Share: The Afro-Cuban Struggle for Equality, 1886-1912*, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 1995. La figura predominante de la historia cubana sigue siendo José Martí, objeto de una biografía de Christopher Abel y Nissa Torrents, *José Martí: Revolutionary Democrat*, Durham, Duke University Press, 1986. Rosalie Schwartz, *Lawless Liberators: Political Banditry and Cuban Independence*, Durham, Duke University Press, 1989, proporciona una parte importante del trasfondo de la lucha por la independencia.

La relación de Cuba con Estados Unidos, que fue crucial para el aumento de su nacionalismo, se esboza con lucidez en Louis A. Pérez, Jr., *Cuba under the Platt Amendment, 1902-1934*, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1986, y Jules R. Benjamin, *The United States and the Origins of the Cuban Revolution: An Empire of Liberty in an Age of National Liberation*, Princeton, Princeton University Press, 1990. El relativo descubrimiento en torno a las mujeres en la historiografía cubana recibe corrección en K. Lynn Stoner, *From the House to the Streets: The Cuban Woman's Movement for Legal Reform, 1898-1940*, Durham, Duke University Press, 1991.

Se ha generado mucha mitología sobre la caída de Batista. La reconstrucción más concienciosa de los «factores político-militares» que llevaron a la victoria rebelde se

ofrece en Ramón L. Bonachea y Marta San Martín, *The Cuban Insurrection, 1952-1959*, New Brunswick, Transaction Books, 1974, que no apoya la pretensión castrista de la victoria total de una guerrilla rural. El cambio rápido de la reacción estadounidense se describe en Richard E. Welch, Jr., *Response to Revolution: The United States and the Cuban Revolution, 1959-1961*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1985. Una obra pionera sobre un tema crucial es la de Maurice Zeitlin, *Revolutionary Politics and the Cuban Working Class*, Princeton, Princeton University Press, 1967.

Uno de los retratos más interesantes de Fidel se ofrece en Lee Lockwood, *Castro's Cuba, Cuba's Fidel*, Nueva York, Random House, 1969, profusamente ilustrado. Para una interpretación muy crítica de un revolucionario que rompió con Fidel, véase Carlos Franquí, *Family Portrait with Fidel: A Memoir*, Nueva York, Random House, 1984. Tad Szulc ofrece una biografía muy favorable, *Fidel: A Critical Portrait*, Nueva York, William Morrow, 1986, mientras que Georgie Anne Geyer, *Guerrilla Prince: The Untold Story of Fidel Castro*, Boston, Little Brown, 1991, es exageradamente anticastrista. El mejor estudio sintético es Sebastian Balfour, *Castro*, 2.ª edición, Londres, Longman, 1995. Pese a su título sensacionalista hay mucha información valiosa en Andrés Oppenheimer, *Castro's Final Hour: The Secret Story Behind the Coming Downfall of Communist Cuba*, Nueva York, Simon & Schuster, 1992.

El punto de partida indispensable sobre los logros económicos del gobierno fidelista es Carmelo Mesa-Lago, *The Economy of Socialist Cuba: A Two-Decade Appraisal*, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1981. Si se quieren consultar estudios de economistas que discrepan en gran medida de Mesa-Lago, véase Andrew Zimbalist, ed., *Cuba's Socialist Economy: Toward the 1990s*, Boulder, Lynne Rienner, 1987. La política cubana posterior a 1986 se analiza en Richard Gillespie, ed., *Cuba after Thirty Years: Rectification and the Revolution*, Londres, Frank Cass, 1990. La reacción de Cuba a la actual crisis económica ha sido el tema en Susan Eva Eckstein, *Back from the Future: Cuba Under Castro*, Princeton, Princeton University Press, 1994, y en Carmelo Mesa-Lago, *Are Economic Reforms Propelling Cuba to the Market?*, Miami, North-South Center, 1994.

Sobre las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, pueden consultarse las opiniones de un antiguo diplomático estadounidense, muy crítico con la política de su país, en Wayne S. Smith, *The Closest of Enemies: A Personal and Diplomatic Account of U.S.-Cuban Relations since 1957*, Nueva York, W. W. Norton, 1987. Jorge I. Domínguez y Rafael Hernández, eds., *U.S.-Cuban Relations in the 1990s*, Boulder, Westview, 1989, presentan un estudio pionero escrito en colaboración por estudiosos estadounidenses y cubanos.

Un área de éxito notable para el gobierno revolucionario es la salud pública, como se documenta en Julie M. Feinsilver, *Healing the Masses: Cuban Health Politics at Home and Abroad*, Berkeley, University of California Press, 1993. En Oscar Lewis, Ruth M. Lewis y Susan M. Rigdon, *Four Women: Living the Revolution: An Oral History of Contemporary Cuba*, Urbana, University of Illinois Press, 1977, se realizan una serie de retratos individuales fascinantes, basados en entrevistas profundas. Este proyecto produjo otros dos volúmenes, *Four Men* (1975) y *Neighbors* (1978). Para el lado más oscuro de la Revolución, véase Jorge Valls, *Twenty Years and Forty Days: Life in a Cuban Prison*, Nueva York, Americas Watch, 1986, y Jacobo Timerman, *Cuba: A Journey*, Nueva York, Alfred A. Knopf, 1990.

9. El Caribe: colonias y miniestados

Franklin W. Knight, *The Caribbean: The Genesis of a Fragmented Nationalism*, 2.^a ed., Nueva York, Oxford University Press, 1990, ofrece una panorámica de la región. En Leslie Bethell, ed., *Historia de América Latina*, vol. 9: *Méjico, América Central y el Caribe*, Barcelona, Cambridge University Press y Crítica, 1991, puede encontrarse una acreditada historia en colaboración. La exportación más importante del Caribe desde el punto de vista histórico recibe un tratamiento erudito e ingenioso en Sidney W. Mintz, *Sweetness and Power: The Place of Sugar in Modern History*, Nueva York, Viking Penguin, 1985.

Entre las obras clásicas sobre la historia del Caribe se encuentran la de C. L. R. James, *The Black Jacobins: Toussaint-L'Ouverture and the San Domingo Revolution*, 2.^a ed., rev., Nueva York, Vintage, 1989, y Sidney W. Mintz, *Worker in the Cane: A Puerto Rican Life History*, New Haven, Yale University Press, 1960. En Sidney W. Mintz y Sally Price, eds., *Caribbean Contours*, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1985, se encuentra una excelente colección de artículos sobre temas caribeños.

Las antiguas colonias británicas han sido objeto de numerosos estudios, como el de David Watts, *The West Indies: Patterns of Development, Culture and Environmental Change since 1492*, Cambridge, Cambridge University Press, 1987. Ningún antillano fue más elocuente acerca de su experiencia colonial que C. L. R. James, como lo demuestra en su clásico libro sobre el críquet, *Beyond a Boundary*, Londres, Stanley Paul, 1963. Entre otros estudios por países están los de Frank Moya Pons, *The Dominican Republic: A National History*, New Rochelle, Hispaniola Books, 1995, y David Nicholls, *From Dessalines to Duvalier: Race, Colour and National Independence in Haiti*, Cambridge, Cambridge University Press, 1979.

Puerto Rico ha padecido una identidad política ambigua, pero gran parte de su experiencia corre paralela a la del resto del Caribe. Los aspectos económicos se tratan en James L. Dietz, *Economic History of Puerto Rico: Institutional Change and Capitalist Development*, Princeton, Princeton University Press, 1986. Raymond Carr, *Puerto Rico: A Colonial Experiment*, Nueva York, Vintage Books, 1984, analiza el nexo entre Puerto Rico y Estados Unidos desde la perspectiva de un académico inglés.

10. Centroamérica: colonialismo, dictadura y revolución

Los historiadores estadounidenses habían descuidado la historia de esta región hasta tiempos recientes. Con la explosión de los movimientos guerrilleros a finales de los años setenta y la participación intensa de Estados Unidos, han empezado a aparecer libros «instantáneos» que con frecuencia carecen de perspectiva histórica y documentación. La mejor iniciación a esta región la constituye el libro de Ralph Lee Woodward, Jr., *Central America: A Nation Divided*, 2.^a ed., Nueva York, Oxford University Press, 1985, que incluye una guía de cuarenta y tres páginas de bibliografía. Para el periodo moderno, véase James Dunkerley, *Power in the Isthmus: A Political History of Modern Central America*, Londres, Verso, 1988, y del mismo autor *The Pacification of Central America*, Londres, Verso, 1994, así como Leslie Bethell, ed., *Historia de América Latina*, vol. 9: *Méjico, América Central y el Caribe*, Barcelona, Cambridge University Press y Crítica, 1991. Los orígenes de la penetración económica

estadounidense se discuten en Thomas D. Schoonover, *The United States in Central America, 1860-1911: Episodes of Social Imperialism and Imperial Rivalry in the World System*, Durham, Duke University Press, 1991. Su historia económica reciente ha recibido un análisis muy elaborado en Victor Bulmer-Thomas, *The Political Economy of Central America since 1920*, Cambridge, Cambridge University Press, 1987. Detalles importantes sobre el periodo de entreguerras pueden encontrarse en Rodolfo Cerdas-Cruz, *The Communist International in Central America, 1920-1936*, Basingstoke, Macmillan, 1993.

Guatemala, el país más grande y con mayor riqueza potencial de la región, ha atraído recientemente la atención de los historiadores de primera línea tales como David McCreevy, *Rural Guatemala 1760-1940*, Stanford, Stanford University Press, 1994, y Jim Handy, *Revolution in the Countryside: Rural Conflict and Agrarian Reform in Guatemala, 1944-1954*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1994. El papel de Estados Unidos en el derrocamiento del presidente Arbenz en 1954 se ha documentado y descrito magistralmente en Piero Gleijeses, *Shattered Hope: The Guatemalan Revolution and the United States, 1944-1954*, Princeton, Princeton University Press, 1991.

La historia nicaragüense del siglo pasado está dominada todavía por la dinastía de Somoza, cuyos orígenes se describen en Knut Walter, *The Regime of Anastasio Somoza, 1936-1956*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1993. Esencial para comprender la persistencia de la dinastía Somoza es el libro de Richard Millett, *Guardians of the Dynasty: A History of the U.S.-Created Guardia Nacional de Nicaragua and the Somoza Family*, Maryknoll, Orbis Books, 1977. Para una institución clave, véase John M. Kirk, *Politics and the Catholic Church in Nicaragua*, Gainesville, University Press of Florida, 1992. Entre los muchos libros que describen Nicaragua desde 1979 se encuentran el de Dennis Gilbert, *Sandinistas: The Party and the Revolution*, Nueva York, Basil Blackwell, 1988, el de David Close, *Nicaragua: Politics, Economics and Society*, Londres, Pinter, 1988 y el de Rose J. Spalding, *Capitalists and Revolution in Nicaragua: Opposition and Accommodation 1979-1993*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1994.

La desafortunada república de El Salvador ha descendido a una sangrienta guerra civil, con gran injerencia de potencias exteriores. Este país cuenta con una antigua tradición de represión de la oposición popular, como puede verse en James Dunkerley, *The Long War: Dictatorship and Revolution in El Salvador*, Londres, Verso, 1982. El curso de los acontecimientos recientes se discute en Joseph S. Tulchin y Gary Bland, eds., *Is There a Transition to Democracy in El Salvador?*, Boulder, Lynne Rienner, 1992.

La presencia estadounidense se cerne sobre Centroamérica, haciendo de toda decisión política interna un posible conflicto con el tío Sam. Walter LaFeber, *Inevitable Revolutions: The United States and Central America*, Nueva York, W. W. Norton, 1983, representa el intento de una autoridad en política exterior estadounidense por explicar este contexto. Un análisis actualizado y penetrante de la cuestión aparece en John H. Coatsworth, *Central America and the United States: The Colossus and the Clients*, Nueva York, Twayne, 1994. LaFeber ha escrito también la mejor visión general sobre un tema que durante mucho tiempo confundió las relaciones entre Estados Unidos y esta región: *The Panama Canal: The Crisis in Historical Perspective*, edición actualizada, Nueva York, Oxford University Press, 1989.

11. América Latina, Estados Unidos y el mundo

Las guerras mundiales del siglo XX han afectado mucho a esta región, como puede comprobarse en Bill Albert, *South America and the First World War: The Impact of the War on Brazil, Argentina, Peru and Chile*, Cambridge, Cambridge University Press, 1988. El papel soviético en la región se estudia en Nicola Miller, *Soviet Relations with Latin America: 1959-1987*, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, y Eusebio Mujal-León, ed., *The USSR and Latin America: A Developing Relationship*, Boston, Unwin Hyman, 1989.

Las relaciones entre Estados Unidos y América Latina han generado una bibliografía enorme, en general desde un punto de vista diplomático e histórico tradicional. Para la época reciente, véase John D. Martz, ed., *United States Policy in Latin America: A Quarter Century of Crisis and Challenge, 1961-1986*, Lincoln, University of Nebraska Press, 1988, y Gaddis Smith, *The Last Years of the Monroe Doctrine, 1945-1993*, Nueva York, Hill and Wang, 1994. El triunfo de las doctrinas de la guerra fría se investiga de forma clara en Stephen G. Rabe, *Eisenhower and Latin America: The Foreign Policy of Anticommunism*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1988. Entre los estudios recientes sobre las relaciones de Estados Unidos con países particulares, se encuentran el de Joseph S. Tulchin, *Argentina and the United States: A Conflicted Relationship*, Athens, University of Georgia Press, 1990; Louis A. Pérez, Jr., *Cuba and the United States: Ties of Singular Intimacy*, Athens, University of Georgia Press, 1990; W. Michael Weis, *Cold Warriors & Coups D'état: Brazilian-American Relations, 1945-1964*, Albuquerque, University of New Mexico, 1993, y Anthony P. Maingot, *The United States and the Caribbean*, Boulder, Westview, 1994.

Para un examen crítico de la política estadounidense hacia América Latina, véase Abraham F. Lowenthal, *Partners in Conflict: The United States and Latin America in the 1990s*, ed. rev., Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1990. También son útiles las reflexiones y análisis en Robert A. Pastor, *Whirlpool: U.S. Foreign Policy toward Latin America and the Caribbean*, Princeton, Princeton University Press, 1992. Una revisión original y actualizada de la cuestión es Peter H. Smith, *Talons of the Eagle: Dynamics of U.S.-Latin American Relations*, Nueva York, Oxford University Press, 1996.

La segunda guerra mundial prácticamente acabó con el papel preponderante de Inglaterra en América Latina, como se refleja en R. A. Humphrey, *Latin America and the Second World War*, 2 vols., Londres, Athlone, 1981-1982. El primer volumen trata de 1939 a 1942 y el segundo, de 1942 a 1945. La historia se continúa hasta la actualidad en Victor Bulmer-Thomas, ed., *Britain and Latin America: A Changing Relationship*, Cambridge, Cambridge University Press, 1989. El papel clave de la familia Rockefeller, que fue destacada en la penetración económica estadounidense en América Latina, es documentada en Elizabeth A. Cobbs, *The Rich Neighbor Policy: Rockefeller and Kaiser in Brazil*, New Haven, Yale University Press, 1992, y Gerard Colby y Charlotte Dennett, *Thy Will Be Done: The Conquest of the Amazon: Nelson Rockefeller and Evangelism in the Age of Oil*, Nueva York, HarperCollins Publishers, 1995.

En los años setenta, los derechos humanos se convirtieron en un tema muy controvertido dentro de las relaciones de Estados Unidos y América Latina. El estudio más amplio sobre esta cuestión es el de Lars Schoultz, *Human Rights and United States Policy toward Latin America*, Princeton, Princeton University Press, 1981. Pone un gran énfasis en los derechos humanos, posición rotundamente condenada por Jeane

J. Kirkpatrick en *Dictatorships and Double Standards: Rationalism and Reason in Politics*, Nueva York, Simon & Schuster, 1982. Para un esclarecedor análisis de las posiciones de los mandos estadounidenses que han confeccionado la política latinoamericana, véase Lars Schoultz, *National Security and United States Policy toward Latin America*, Princeton, Princeton University Press, 1987. Para análisis sumamente críticos de la política estadounidense hacia América Latina en los años ochenta, véanse Eldon Kenworthy, *America/Americas: Myth in the Making of U.S. Policy Toward Latin America*, University Park, Pennsylvania State University Press, 1995, y Thomas Carothers, *In the Name of Democracy: U.S. Policy Toward Latin America in the Reagan Years*, Berkeley, University of California Press, 1991.

Las perspectivas de integración económica han llevado a muchos análisis, pese a la quiebra financiera mexicana de 1994-1995. La cuestión se discute en un contexto amplio en Peter H. Smith, ed., *The Challenge of Integration: Europe and the Americas*, New Brunswick, Transaction Publishers, 1993.

Alejandro Portes y Robert L. Bach, *Latin Journey: Cuban and Mexican Immigrants in the United States*, Berkeley y Los Ángeles, University of California Press, 1985, y George J. Borjas, *Friends or Strangers: The Impact of Immigrants on the U.S. Economy*, Nueva York, Basic Books, 1990, sitúan en perspectiva la cuestión de la inmigración. El tráfico ilícito de drogas, otra cuestión importante de la agenda de la posguerra fría, merece un cuidadoso estudio en Peter H. Smith, ed., *Drug Policy in the Americas*, Boulder, Westview, 1992.

Epílogo: ¿Qué futuro le espera a América Latina?

En Edward C. Epstein, ed., *Labor Autonomy and the State in Latin America*, Boston, Unwin Hyman, 1989, tenemos una investigación muy útil sobre el movimiento obrero en toda América Latina. Con la democratización los partidos políticos han vuelto al primer plano, como se señala en Scott Mainwaring y Timothy Scully, eds., *Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America*, Stanford, Stanford University Press, 1995.

Los «nuevos» movimientos sociales que surgieron en los años setenta se analizan muy bien en Susan Eckstein, ed., *Power and Popular Protest: Latin American Social Movements*, Berkeley, University of California Press, 1989. Un excelente referente para iniciarse en el estudio de la Iglesia es el volumen colectivo editado por Scott Mainwaring y Alexander Wilde, *The Progressive Church in Latin America*, Notre Dame, University of Notre Dame Press, 1989.

El trasfondo del retorno al neoliberalismo en la economía se ofrece en Rudiger Dornbusch y Sebastian Edwards, eds., *The Macroeconomics of Populism in Latin America*, Chicago, University of Chicago Press, 1991, mientras que la aplicación de las nuevas políticas se examina en William C. Smith, Carlos H. Acuña y Eduardo A. Gamarra, eds., *Democracy, Markets, and Structural Reform in Contemporary Latin America: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, and Mexico*, Miami, North-South Center, 1994.

El más famoso cantante de tangos argentino es retratado en Simon Collier, *The Life, Music, and Times of Carlos Gardel*, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1986, libro que recuerda que América Latina trata de muchas otras cosas que de generales e inflación. Otro tema descuidado cuenta con un excelente tratamiento colectivo en Joseph L. Arbena, *Sport and Society in Latin America: Diffusion, Dependency, and the Rise of Mass Culture*, Westport, Greenwood Press, 1988. El tema de la cultu-

ra popular se explora en William Rowe y Vivian Schelling, *Memory and Modernity: Popular Culture in Latin America*, Londres, Verso, 1991.

Para un análisis admirablemente claro del escenario económico a inicios de los años noventa, véase Eliana Cardoso y Ann Helwege, *Latin America's Economy: Diversity, Trends, and Conflicts*, Cambridge, The MIT Press, 1992.

El debate sobre el futuro de América Latina comienza de modo invariable con el de su pasado. Nunca fue tan evidente como en la polémica estimulada por el Quinto Centenario colombino, en la que la salva de salida fue disparada por Kirkpatrick Sale, *The Conquest of Paradise: Christopher Columbus and the Columbian Legacy*, Nueva York, Alfred A. Knopf, 1990. Para contrastar la opinión de un filósofo español, véase Xavier Rubert de Ventós, *El laberinto de la Hispanidad*, Barcelona, Planeta, 1987. Uno de los observadores estadounidenses más perceptivos ha sido Richard Morse, cuyo *New World Soundings: Culture and Ideology in the Americas*, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1989, sostiene que sus compatriotas han malentendido y malinterpretado de forma sistemática a América Latina. Quizá el periodismo de más alto nivel es la mejor guía para el futuro, como el conmovedor y agudo libro de Alma Guillermoprieto, *The Heart that Bleeds: Latin America Now*, Nueva York, Alfred A. Knopf, 1994.

Índice alfabético

Acción Popular, en el Perú, 231, 238-239, 340, 429

Acuerdo de Comercio Recíproco cubano-estadounidense, 287

Agencia Central de Inteligencia (CIA): y Chile, 146, 406-407; y Cuba, 296, 299-300, 303, 402, 403; y Guatemala, 375, 376, 399; y Nicaragua, 362

Aguirre Cerda, Pedro, 140

Alamán, Lucas, 246

Álamo, El, 245, 246

Alberdi, Juan Bautista, 59

Alberto, João, 182

ALCSA, véase Área de Libre Comercio de Suramérica

Alem, Leandro, 93

Alemán, Miguel, 260

Alemania nazi, 98, 185, 389-390

Alessandri, Arturo, 137-139, 143

Alessandri, Jorge, 143-144, 148-149

Alfonsín, Raúl, 121-122, 125, 426

Aliança Libertadora Nacional (ALN), del Brasil, 183

Alianza Anticomunista Argentina, 115

Alianza Liberal de Brasil, 182

Alianza para el Progreso, 144, 148, 364, 404-406; orígenes de, 402

Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), 226, 429; como oposición, 227-232; elecciones de 1931, 227; elecciones de 1980, 237-238; elecciones de 1985, 239-240

Alianza Republicana Nacional (ARENA), de El Salvador, 370-371

Allende, Salvador, 76, 159, 235, 297, 298, 426, 437, 440; caída de, 154-156; como candidato de la oposición, 143, 145, 147; en el poder, 149-155; y los Estados Unidos, 404, 406-407

Almazán, Juan Andreu, 259

Alsogaray, Álvaro, 107

Alvarado, Pedro de, 340

Alvares Cabral, Pedro, 33

Álvarez, Enrique, 369

Alvear, Marcelo T. de, 95

Amado, Gilberto, 179

Amado, Jorge, 445

Amauta, 226

American Smelting and Refining Company, 216

Anaconda Mining Company, 130, 147

Andino, Pacto, 236, 413

Andrade e Silva, Antonio Carlos, 162

Andrade e Silva, José Bonifacio, 162

Andreoni, Guerino, 124

Angeloz, Eduardo, 123

Antirreeleccionista, grupo, en México, 250-252

Apodaca, Jerry, 419

APRA, véase Alianza Popular Revolucionaria Americana

Aramburu, Pedro, 104-105, 112

Arana, Julio C., 215

Arana Osorio, Carlos, 376

Aranha, Oswaldo de, 191

Araujo, Arturo, 366

Arbenz Guzmán, Jacobo, 291, 373-376, 399

Área de Libre Comercio de Suramérica (ALCSA), 414

ARENA, véase Alianza Republicana Nacional

Arévalo Bermejo, Juan José, 371, 376

Arguedas, José María, 205; *Canto Kechwa*, 206

Arias, Arnulfo, 354

Arias, Ricardo, 354

Arias Sánchez, Óscar, 357-358

Aristide, Jean-Bertrand, 323, 324

Arns, cardenal, 200

Artigas, José, 47

Asunción, acuerdo de, 125, 413

Atahualpa, 26

audiencias, 32, 342
 Austin, Stephen, 245
 Austral, Plan, 122
 Avellaneda, Nicolás, 83
 Ávila, Pedro Arias de, 340
 Ávila Camacho, Manuel, 259-260
 Aviz, casa real de, 32
 Avril, general Prosper, 323
ayllu, Patricio, 159
 Aylwin, Patricio, 159
 ayuntamientos, 340
 Azcona Hoyo, José, 364
 aztecas, 23-24, 26, 33

Baker, James A., 410
 Baker, Lorenzo, 347
 Balaguer, Joaquín, 326-327, 405
 Balbín, Ricardo, 105, 106, 113
 Balboa, Vasco Núñez de, 340
 Baldwin, James, 328
 Balmaceda, José, 133-135
 Balta, José, 210-220
 Banchero Rossi, Luis, 217
 Banco de Crédito Ejidal, 256
 Banco de Desarrollo Interamericano, 69, 400, 441; y Chile, 148, 150, 407; y la política estadounidense, 400
 Banco Mundial, 69, 124, 148, 150, 407-408, 441, 442
bandeirantes, 35
 Barbosa, Rui, 176, 179
 Barrios, Gerardo, 345
 Barrios, Justino Rufino, 345, 371
 Barrios, Rubén, 333
 Bastos, Tavares, 55
 batallones rojos mexicanos, 254
 Batista, Fulgencio, 298, 361, 400, 430; caída de, 293-294; en el poder, 288-293; y la política revolucionaria, 293-297
 Bayer, empresa, 408
 Belaúnde, Víctor Andrés, 206
 Belaúnde Terry, Fernando, 429, 430; elecciones de 1956, 231; en el poder, 232-233; 238-239; y los Estados Unidos, 405
 Beltrán, Pedro, 231
 Benavides, Óscar R., 228-229, 230
 Bentham, Jeremy, 63
 Bertram, Geoffrey, 230
 Betancourt, Rómulo, 399, 401, 403
 Bignone, Reynaldo, 120
 Billinghurst, Guillermo, 221-222, 223
 Bishop, Maurice, 336
 Bismarck, Otto von, 138

Bissell, Richard, 299
 Blades, Rubén, 355
 Blaine, James, 385
 Blanco-Fombona, Rufino, 385
hoyotazo, revuelta del, 290
Bohemia, 297
 bolcheviques, 439
 Bolívar, Simón, 48, 380; biografía de, 40-41; campañas militares, 42-44; objetivos políticos, 40-41, 46, 207, 209
 Bonaparte, José, 39, 127
 Bonaparte, Napoleón, 39-40, 45, 127, 379
 Bonillas, Ignacio, 255
 Bootstrap, operación, 318, 332
 Borbones, monarquía de los: de Francia, 442; reformas de, 37-39, 206, 244, 343; y la independencia, 31-32, 40
 Bordón, José, 125
 Borges, Jorge Luis, 445
 Bosch, Juan, 326, 405
 Boston Fruit Company, 347
 braceros mexicanos, 260
 Braden Copper Company, 130
 Brady, Nicholas F., 410
 Braganza, casa real de, 39
 Brathwaite, Nicholas, 337
 Bryce, lord, 421
 Bulnes, Manuel, 128
 Bunau-Varilla, Philippe, 353
 Bunge, Alejandro, 397
 Bunker, Ellsworth, 34
 Bush, George, 124, 324, 412, 414, 417, 445
 Bustamante, Alexander, 328
 Bustamante, José de, 342
 Bustamante y Rivero, José Luis, 229-230

Cabañas, Lucio, 266
 Cabello de Carbonero, Mercedes, 75
 cabildo, 38, 40, 43
 Cáceres, Andrés, 211, 220
 cakchiqueles, indios, 340
 Calderón, Rafael Ángel, 358
 Calderón de la Barca, Fanny, 244
 Calhoun, John C., 246
 Callejas, Rafael Leonardo, 365
 Calles, Plutarco Elías, 255-256
 Cámpora, Héctor, 113-114
 Campos, Roberto, 198
 Cananea, Compañía de Cobre, 249
 Candamo, Manuel, 221
candomblé, 443
 Carazo, Rodrigo, 357
 Cárdenas, Cuauhtémoc, 273-274

Cárdenas, Lázaro, 235, 262, 430; como populista, 66; como presidente, 256-259, 388

Cardoso, Fernando Henrique, 202-203

Carías Andino, Tiburcio, 364

Caribe, 312, 313

CARICOM, véase Comunidad Caribeña y el Mercado Común

Carlos III, rey de España, 37-38, 280

Carpizo, José, 274

Carranza, Venustiano, 252-253

Carrera, José Rafael, 344-345, 366

cártel de Cali, 416

cártel de Medellín, 416

Carter, Jimmy, 158, 324, 354, 361-363, 369

Casa de Contratación, 317

Castello Branco, Humberto, 197-199

Castilla, Ramón, 209-210

Castillo, Ramón, 98-100

Castillo Armas, Carlos, 375-376

Castro, Fidel, 13, 149, 152, 234-235, 263, 310, 326, 330, 411, 413, 430, 440; biografía de, 289-290; campañas de guerrillas, 290-293; y la revolución, 293-300, 302-309; y los Estados Unidos, 311, 400-403

Castro, Raúl (Cuba), 290-291, 294

Castro, Raúl (Nuevo México), 419

Castro Pozo, Hildebrando, 223

Cavallo, Domingo, 123-124

Cédras, Raoul, 323-324, 327

Cerezo, Vinicio, 376

Cerro de Pasco Copper Corporation, 216, 224, 236

Chamorro, Violeta Barrios de, 362-363

Chaney, Elsa M., 78

Chase Manhattan Bank, 236

Chiapas, revuelta guerrillera de, 277, 437

Chiari, Roberto F., 354

«Chicago boys» de Chile, 69, 156, 240, 428

chichimecas, tribus, 23

Chile Exploration Company-Chuquicamata, 130

Chilpancingo, Congreso de, 42

ciboney, 312

Cisneros, Henry, 419

Clinton, Bill, 275-276, 278, 324, 413, 417

Coard, Bernard, 337

Coard, Phyllis, 337

Coca Cola, 358

Cochrane, almirante, 46

Collor de Mello, Fernando, 201-203

Colón, Cristóbal, 23, 25-6, 280, 312, 314

colorado, gobierno, 166

Comecon, 309, 310

Colosio, Luis Donaldo, 277

Comisión Económica para América Latina (CEPAL), 397-398, 401

Comités para la Defensa de la Revolución (CDR), 297, 309

Compagnie des Isles d'Amérique, 317

Compañía Peruana de Vapores, 221

Comunidad Caribeña y el Mercado Común (CARICOM), 319

Concilio Ecuménico Segundo (Vaticano II), 319

Concordancia, coalición argentina de partidos, 98

Condorcanqui, José Gabriel, véase Túpac Amaru II

Confederación de Trabajadores Chilenos, 140

«Confederación del Ecuador», 163

Confederación General del Trabajo (CGT), de Argentina, 103, 110-111, 114-115, 124

Confederación General Económica (CGE), de Argentina, 113-114

Confederación Nacional Agraria (CNA), del Perú, 234

Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), 255

«Conquista del Desierto», 89

Consejo de Indias, 28

Cooperativas Agrícolas de Producción (CAPS), del Perú, 234

Corcoran, Thomas, 374

Corea, guerra de, 231, 321, 393

Corporación de Fomento (CORFO), de Chile, 140, 397

corregidores, 37

Cortés, Hernán, 26, 340

Cortes Gerais, 45-46

Costa e Silva, Artur da, 198-199

cristeros, 255-256

Cristiani, Alfredo, 370-371

D'Aubuisson, Roberto, 369-370

Dantas, Santiago, 194, 195

Darío, Rubén, 385

darwinismo social, 352

Dávila, Pedrarías, 340

Daza, Hilarión, 211

Debray, Régis, 232

De la Madrid, Miguel, 271-272, 273, 274

De León Carpio, Ramón, 377

Delgado de Odría, María, 231

Departamento de Estado de los Estados Unidos, 296, 374-375, 392

Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) de Brasil, 186

Depresión de 1930, 266-267; efectos generales, 63-66; y Argentina, 85, 95; y Brasil, 173, 181; y Chile, 139; y Cuba, 284, 288; y El Salvador, 366; y el Perú, 212, 216, 226, 229

Dessalines, Jean Jacques, 319

deuda, crisis de la: en Argentina, 120-121; en Brasil, 196-198; en Chile, 154; en general, 70; en Haití, 322-323; en México, 265-269; en Perú, 234-236

Deústua, Alejandro O., 205-206

Díaz, Adolfo, 359

Díaz, Porfirio, 60, 242, 252, 254, 255, 345; en el poder, 57, 247-250; y los Estados Unidos, 384

Díaz Lanz, Pedro, 295

Díaz Ordaz, Gustavo, 263-265

Diez Años, guerra de los, 281

dominicos, orden de los, 342

Drake, Francis, 315

Dreyfus, Adolph, 210-212

drogas, tráfico de, 416-417

Duarte, José Napoleón, 367-370

Dulles, Allen, 374-375

Dulles, John Foster, 354, 374-375

Dumont, René, 305

Durán, Julio, 147

Dutra, Eurico, 185, 188

Duvalier, François, «Papa Doc», 290, 321-322

Duvalier, Jean-Claude, «Baby Doc», 322-323

Duvalier, Marie Denise, 322

Echenique, José Rufino, 210

Echevarría, Esteban, 82

Echevarría, Luis, 265-269

Edwards, Alberto, 135

Eisenhower, Dwight D., 360, 395, 402; política sobre América Latina, 395, 399-400; y Brasil, 190-191; y Cuba, 293, 294, 299, 399-400; y Guatemala, 374; y Somoza, 360

Ejército Popular Boricua (EPB), de Puerto Rico, 333

Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), de Argentina, 114

Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), 277

ejido, sistema comunal, 254, 256, 259

El Comercio, de Lima, 223

El Mercurio, de Chile, 407

Ellington, Duke, 328

encomienda, 314, 324

Endara, Guillermo, 354, 355

Esquipulas, acuerdos de, 371

Estado Nôvo, 184-187, 188, 191, 389, 428

Estimé, Dumarsais, 320

Estrada Cabrera, Manuel, 371

Estrada Palma, Tomás, 282

Export-Import Bank, 150, 320

Exxon, 335

Falkland, islas, véase Malvinas, islas

Farias, P. C., 202

Federación de Mujeres Cubanas (FMC), 307

Federación Obrera Regional Argentina (FORA), 90

Federación Obrera Regional Peruana (FORP), 222

Federal Reserve Bank de Atlanta, 286

Felipe IV, rey de España, 37

Fernando el Católico, rey de Aragón, 26

Fernando VII, rey de España, 39-44

Figueiredo, João, 200

Figueres, José María, 358

Figueres Ferrer, José (Pepe), 356, 399-401

Fondo Monetario Internacional (FMI), 70-71, 142, 143; y Argentina, 107, 115, 121, 122, 124; y Brasil, 192, 194, 200; y Chile, 142-143, 407; y Jamaica, 330; y la crisis de la deuda, 409; y México, 271; y Perú, 237, 238

Fonseca, Deodoro da, 169, 178

Fonseca, Hermes da, 179, 182

Ford, Gerald, 269, 354

Ford Motor Company, 150

franciscanos, orden de los, 342

Franco, Francisco, 227, 367, 391

Franco, Itamar, 202

Frei, Eduardo, 106, 153, 159, 398, 437; como presidente, 145-148; y Allende, 150-151; y las elecciones de 1958, 143; y las elecciones de 1964, 148; y los Estados Unidos, 399, 404

Frente de Acción Popular (FRAP), de Chile, 143, 145-146

Frente Democrático, de Chile, 145

Frente Democrático Nacional, del Perú, 229

Frente Democrático Revolucionario, de El Salvador, 369

Frente Nacional de la Juventud Democrática, del Perú, 231

Frente Popular de Chile, 140-141

Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), 357, 361, 363, 440, 445

Frepaso (Frente País Solidario), coalición argentina, 125

Freyre, Gilberto, 161

Frondizi, Arturo, 110-111, 398; como líder de partido, 106; como presidente, 106-109; y los Estados Unidos, 400, 404

FSLN, véase Frente Sandinista de Liberación Nacional
 Fuentes, Carlos, 279, 445
 Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), de Puerto Rico, 333
 Fujimori, Alberto, 240-241, 377
 Fulbright, J. William, 405
 Furtado, Celso, 194, 195

Gable, Clark, 391
 Gainza Paz, familia, 105
 Gairy, Eric, 336
 Gaitán, Jorge Eliécer, 290
 Gallisá, Carlos, 333
 Galtieri, Leopoldo, 118-120
 Gamarra, Agustín, 207
 García, Alan, 239-241, 430
 García, José Guillermo, 369
 García, Romeo Lucas, 376
 García Márquez, Gabriel, 419-420, 445
 García Pumacahua, Mateo, 206
 Gardel, Carlos, 89
 Garvey, Marcus, 328
 GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio), 272, 276
 Geisel, Ernesto, 199
 «Generación de 1880», 91, 95, 220, 345
 Gibbs, Anthony, 209
 Góes Monteiro, Pedro, 185
 Golfo Pérsico, guerra del, 126, 445
 Gomes, Eduardo, 188
 Gómez Morales, Alfredo, 103
 Gómez Peña, Francisco, 327
 González, Joaquín V., 90
 González, Manuel, 247
 González Prada, Manuel, 225
 González Videla, Gabriel, 141
 Goodyear, Charles, 170
 Gorbachov, Mijail, 410
 Gore, Al, 276, 412
 Goulart, João, 191, 194, 196-197, 404
 Grace, contrato, 211-212, 220
 Gran Colombia, nuevo estado de, 43, 44
Granma, 290, 291, 305
 Grau San Martín, Ramón, 288-289
 Grenfell, almirante, 46
 Grove, Marmaduke, 139-140
 Grupo Obra de Unificación (GOU), 99
 Guadalupe, Virgen de, 41
 Guadalupe Hidalgo, tratado de, 246
 guanahuatebey, indígenas, 312
 Guardia, Tomás, 345
 Guardia Civil, 219

guerra civil española, 228
 guerra contra Paraguay, 83, 166-167, 169
Guerra dos Farrapos, 165
 guerra Hispano-Americana, 352, 384, 385
 guerra de 1812, 380
 guerra del Pacífico, 129, 133, 211, 444
 guerra mundial, primera, 56, 61, 282, 325, 347-349, 386; y Argentina, 85, 90; y Chile, 135-137; y el inicio de la influencia de los Estados Unidos, 385-386; y las movilizaciones laborales, 60; y el Perú, 215, 222
 guerra mundial, segunda, 383, 393-394, 397; y Argentina, 98-99; y Brasil, 174, 185, 259; y Chile, 141; y el ascenso de la influencia de los Estados Unidos, 390-393; y México, 259-260; y Perú, 217, 230
 «Guerra Nacional» de Nicaragua, 345
 Guerra Popular Prolongada (GPP), movimiento guerrillero nicaragüense, 361
 Guevara, Che (Ernesto), 13, 232, 403, 436
 Guggenheim, familia, 130
 Guido, José María, 109
 Guzmán, Abimael, 241

Harlow, Jean, 391
 Harris, A. R., 366
 Hawkins, John, 315
 Hay, John, 353
 Hay-Bunau-Varilla, tratado, 353
 Hay-Herrán, tratado, 353
 Haya de la Torre, Víctor Raúl, 223-226, 227, 231, 238, 239
 Helms, Richard, 406
 Hernández Colón, Rafael, 333
 Hernández Martínez, Maximiliano, 366-367
 Herrera, Bartolomé, 205
 Hidalgo, Alberto, 205
 Hidalgo y Costilla, Miguel, 41-42, 47, 50
 Hitler, Adolfo, 16, 184, 389-390
 Hoover, Herbert, 288
 Horne, Lena, 328
 Huerta, Victoriano, 252-254
 Hughes, Langston, 328
 Humphrey, George, 395
 Hunt, Shane, 230

Ibáñez, Carlos, 138-139, 142-143
 IBM, 69, 408
 Illia, Arturo, 109-112, 406
 incas, 23, 33, 204, 205, 232; conquistados, 28; organización social, 24;
 independencia, guerras de, 380, 386; conversa-

ciones sociales, 49-50; en América Central, 342-343; en Argentina, 80-81; en Chile, 128; en México, 242-245; en Perú, 211; en la América española, 39-44; en la América portuguesa, 45-46

Iniciativa para la Cuenca del Caribe, 330

Inquisición española, 28, 43

Instituto Argentino de Promoción del Inter-cambio (IAPI), 100-102

Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), 259

Instituto de Reforma Agraria, de Chile, 150

Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA), de Cuba, 295

integristas, 183-184, 389

intendencias, sistema de, 37

Internacional Comunista, 140, 183, 225, 399

International Petroleum Company (IPC), 216, 224, 233; nacionalización de, 236

International Railways of Central America, 347

Isabel la Católica, reina de Castilla, 26

ITT (International Telephone and Telegraph), 407; en Argentina, 101; en Chile, 150, 157; en Perú, 236

Iturbide, Agustín de, 42, 44, 82, 342

Iturrigaray, José de, 41

Izquierda Unida del Perú, 239

Jamaica Labor Party (JLP), 330

James, Daniel, 375

Jemeres Rojos, 240

jesuitas, orden de los, 38, 290

Jiménez, Núñez, 295

João VI, rey Dom, 45, 162, 163

Jockey Club, 89, 104

Johnson, Lyndon B., 262, 405-406

Juan Pablo II, papa, 438

Juana Inés de la Cruz, sor, 75

Juárez, Benito, 247

Junín, batalla de, 207

«justicialista», doctrina, 101, 104, 108; véase también Perón; peronismo

Justo, Agustín P., 96, 98

Karol, K. S., 305

Keith, Henry Meiggs, 347

Keith, Minor Cooper, 347

Kennecott Corporation, 130, 147

Kennedy, John Fitzgerald, 364, 406; y Castro, 309; y la Alianza para el Progreso, 401, 406; y la invasión de la Bahía de Cochinos, 299-300, 309, 400

Kennedy, Robert, 402

Kipling, Rudyard, 352

Knox, Philander C., 359

Krieger Vasena, Adalberto, 111-113

Kruschew, Nikita, 300, 305

Kubitschek, Juscelino, 106, 197, 398; como presidente, 191-192

Lacayo, Antonio, 363

Lacerda, Carlos, 191

Lambert, Jacques, 390

Langerud García, Kjell, 376

Lanusse, Alejandro, 113, 114

La Prensa de Buenos Aires, 102, 105

La Prensa de Lima, 223

La Reforma, período de, 246

Las Casas, Bartolomé de, 314

Leguía, Augusto B., 221-223

Leguía y Martínez, Germán, 223-226

Lemus, José María, 367

Lesseps, Ferdinand de, 352

Letelier, Orlando, 158

Lévi-Strauss, Claude, 390

Libre Comercio, decreto de, 38

Levingston, Roberto, 113

Liga Patriótica Argentina, 94

Lima, Alceu Amoroso, 179

Limantour, José Y., 250

Lincoln, Abraham, 246

Lleras Camargo, Alberto, 405

Lonardi, Eduardo, 104

López Arellano, Osvaldo, 364

López Mateos, Adolfo, 261-263

López Portillo, José, 11, 269, 270, 274

López Rega, José, 115

L'ouverture, Toussaint, 319

Luís, Washington, 181-182

Lula da Silva, Luís Ignacio, 201, 203

Machado, Gerardo, 288, 293, 294

Machado de Assis, Joaquim María, 168

macheteros, véase Ejército Popular Boricua (EPB) de Puerto Rico

macumba, culto, 443

Madero, Evaristo, 250

Madero, Francisco I., 250-254, 433

Madrazo, Carlos, 263

Magloire, Paul E., 321

Magoon, Charles, 282

Mahan, Alfred Thayer, 352

Maine, navío estadounidense, 281, 331

Makouke, Claude, 334
 Malraux, André, 192
 Maluf, Paulo, 201
 Malvinas, islas, 118-120, 444
 Manigot, Leslie, 323
 Manley, Michael, 329-330
 Manley, Norman, 328
 Mano Blanca, escuadrón de la muerte, 376
 Marcona Mining Company, 217, 236
 Mariátegui, José Carlos, 225-226, 399
 Mariel, 308
 Marshall, Plan, 71, 392, 394-395
 Martí, Agustín Farabundo, 367
 Martí, José, 281, 282, 299, 385
Martín Fierro, 87
 Martínez de Hoz, José, 118
 Martínez Estrada, Ezequiel, 89
 Mas Canosa, Jorge, 310
 Matos, Huberto, 295
 Matthews, Herbert, 291
 Matto de Turner, Clorinda, 75
 Maximiliano de Habsburgo, 246-247, 378
 maya, imperio, 23-24, 340
 Mazorca, escuadrón coercitivo, 82
 McKinley, William, 281
 Meiggs, Henry, 211, 347
 Mejía Victores, Óscar Humberto, 376
 Meléndez, familia salvadoreña, 366
 Méndez Montenegro, Julio César, 376
 Menem, Carlos Saúl, 123-126, 426
 Mercado Común Centroamericano, 413
 Mercado Común Centroamericano (MCCA), 350-351
 Mercado Común Europeo, 115
MERCOSUR (Mercado Común del Sur), 125-126, 413, 414
Mercurio Peruano, 206
 Mexicano-Americanas, guerra, 246, 384
 Mil Días, guerra de los, 353
 Mill, John Stuart, 63
 Minero Perú, 236
 Miranda, Francisco de, 41
 Miró Cardona, José, 294
 Miró Quesada, Antonio, 223
 Mitchell, Keith, 337
 Mitre, Bartolomé, 82-83
 Moctezuma II, 24, 26
 Molina, Arturo Armando, 367
 Monbeig, Pierre, 390
 Monroe, Doctrina, 331, 358, 381
 Monroe, James, 381
 Montesinos, Antonio de, 314
 Montt, Jorge, 135
 Morais, Prudente de, 178
 Morales Bermúdez, Francisco, 237, 430
 Morales Bermúdez, Remigio, 220
 Morazán, Francisco, 343
 Morelos, José María, 42, 44, 47, 49
 Moreno, Mariano, 40
 Morgan, Henry, 315
 Motorola, 358
 Movimiento para la Renovación Nacional, de Haití, 322
 Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), en Chile, 152
 Muñoz Marín, Luis, 332
 Mussolini, Benito, 184, 389
 musulmanes, 25
 Nabuco, Joaquim, 168
 Nacional Financiera, 265
 Naciones Unidas, 307, 371; y Duvalier, 322, 399; y Fidel Castro, 294; y la crisis de las Malvinas, 119; y Luis Echevarría, 267-268
 NAFTA, véase Tratado de Libre Comercio nahuas, asentamientos, 340
 Namphy, Henri, 323
 National Alliance for the Reconstruction, en Trinidad y Tobago, 336
 National Motor Factory, 186
 Neto, Delfim, 200
 Neves, Tancredo, 200-201
New Leader, The, 375
 New National Party, de Granada, 337
New York Times, 291
 Nixon, Richard M.: política sobre América Latina, 406; viaje a América Latina en 1958, 400; y Chile, 150; y Cuba, 294, 297, 299; y Panamá, 354
 Nobel, premio, 358, 419
 Noriega, Manuel Antonio, 354, 355
 Northern Peru Mining, 216
Nuevas Leyes, para protección de los indios, 29
 Núñez, Rafael, 352
 Nuremberg, juicios de, 121
 Obregón, Álvaro, 254-255
 Odría, Manuel A., 230-231, 429
 OEA, véase Organización de Estados Americanos
 O'Higgins, Bernardo, 127
 Ojo por Ojo, escuadrón de la muerte, 376
 olmeca, cultura, 340
Oncenio, en el Perú, 223
 Onganía, Juan Carlos, 110-113, 406

OPEP, 114, 329, 408
Organización de Estados Americanos (OEA), 354, 385, 397; orígenes de la, 385, 392; y Cuba, 263, 403; y Duvalier, 322; y Guatemala, 375; y el conflicto de las Malvinas, 119; y la guerra de Corea, 393; y la «guerra del fútbol», 365; y la República Dominicana, 326, 406
Organización Mundial de la Salud (OMS), 444
Ortega, Daniel, 362
Ortiz, Roberto, 98
Ortiz Rubio, Pascual, 256
Osorio, Óscar, 367
Ouro Preto, vizconde de, 169

Padilla, Heberto, 305
Paéz, José Antonio, 42, 49
Pardo, José, 221-222, 223
Pardo, Manuel, 211
Partido Autonomista Nacional (PAN), de Argentina, 91
Partido Civilista, del Perú, 211, 221, 223
Partido Comunista: de Argentina, 94, 100; de Brasil, 180, 183, 394; de Chile, 140-141, 145, 158-159; de Cuba, 298, 307, 309, 436; de El Salvador, 371; de Guatemala, 371; de la República Dominicana, 326; de México, 270; del Perú, 231
Partido Conservador de Chile, 127, 133, 145
Partido Constitucional Liberal, de Brasil, 183
Partido Constitucionalista, del Perú, 223
Partido de Acción Nacional (PAN), de México, 259, 263, 273-274, 278
Partido de Conciliación Nacional (PCN), de El Salvador, 367
Partido de la Revolución Mexicana (PRM), 257
Partido de los Obreros, del Perú, 222
Partido Demócrata: de Brasil, 180; de Chile, 134; del Perú, 220-221, 223
Partido Demócrata Cristiano (PDC): de Chile, 145-149; de El Salvador, 367-369; de Guatemala, 376; del Perú, 232
Partido de Unión nacional, de Costa Rica, 356
Partido do Movimiento Democrático Brasileiro (PMDB), 200
Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), 333
Partido Laborista británico, 366, 439
Partido Liberal: de Chile, 127, 133-134; de Honduras, 364, 365; del Perú, 223
Partido Nacional, de Honduras, 364
Partido Nacional Revolucionario (PNR), de México, 256
Partido Nacional Socialista, de Chile, 389
Partido Nuevo Progresista (PNP), de Puerto Rico, 333
Partido Popular Cristiano (PPC), del Perú, 238
Partido Popular Democrático (PPD), de Puerto Rico, 333
Partido Radical, de Argentina, 50, 93-95; dividido, 105; orígenes del, 93; y la clase media, 108-109, 112, 424; y la clase trabajadora, 98; y las elecciones de 1983, 121; y las elecciones de 1987, 122
Partido Radical, de Chile: como partido centrista, 145; orígenes, 128; y el Frente Popular, 140, 141
Partido Republicano, de Brasil, 167-168, 178
Partido Republicano, de los Estados Unidos, 362
Partido Republicano Nacional, de Costa Rica, 356
Partido Revolucionario Dominicano (PRD), 326-327
Partido Revolucionario Institucional (PRI), de México, 260, 261, 263, 265, 266, 273, 277-279, 430
Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC), de la República Dominicana, 326
Partido Social Democrático (PSD), de Brasil: alianza con el PTB, 192, 195; como partido de gobierno, 200-201; orígenes del, 188; y Kubitschek, 192; y Vargas, 189-190
Partido Socialdemócrata alemán, 439
Partido Socialista, de Argentina: orígenes, 90; y el movimiento obrero, 94; y Perón, 99
Partido Socialista, de Francia, 439
Partido Socialista, del Perú, 222, 225
Partido Socialista, en Chile, 140-142, 146; fundación del, 139; y Pinochet, 158
Partido Socialista Puertorriqueño, 333
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB): alianza con PSD, 192, 195; orígenes del, 188; y Goulart, 191; y Vargas, 191
Pascal-Trouillot, Ertha, 323
Pastora, Edén, 361
Patria y Libertad, de Chile, 153
Patterson, P. J., 331
Pedro I, Dom, 46, 162-165
Pedro II, Dom, 167, 383; exilio de, 169; y la centralización, 57-58, 165-166
Peixoto, Floriano, 178, 197
Pena, Alfonso, 179
pensamiento ilustrado: influencia del, 38, 207; y Bolívar, 40; y liberalismo, 48; y los Estados Unidos, 380

People's National Movement (PNM), de Trinidad y Tobago, 335

People's National Party (PNP), de Jamaica, 329-330

People's Revolutionary Government (PRG), de Granada, 336

Peralta Azudía, Enrique, 376

Pérez, José Joaquín, 133

Pérez Balladares, Ernesto, 355

Perón, Evita, 99, 100, 101-102, 103, 115, 373; como mujer en la política, 77; muerte de, 103

Perón, Isabel Martínez de, 77, 110, 114-116

Perón, Juan, 111, 122, 149, 187, 231, 235, 298; alcance del poder, 99-100; como populista, 66, 351, 424; en el exilio, 104, 110; primera presidencia, 100-104; segunda presidencia, 114; y las elecciones de 1972, 113; y las islas Malvinas, 118

peronismo, 123, 404; supervivencia del, 104-105; y la clase trabajadora, 261-262, 436; y las mujeres, 76; y los militares, 389; véase también justicialista, doctrina

Perot, Ross, 275-276

Pershing, John J., 388

Petróleos Mexicanos (PEMEX), 258, 275, 397

PetroPerú, 236

Philips, compañía internacional, 69, 407

Piñola, Nicolás de, 210-211, 220-221

Pike, Frederik, 209

Pinheiro, João, 179

Pinochet, Augusto, 442; bajo Allende, 154; en el poder, 156-159; y las elecciones, 159

Pizarro, Francisco, 26

Plan Bilateral Integrado, 276

Plan de Ayala, 251

Plan de Guadalupe, 253

Plan de Iguala, 342

Plan de San Luis Potosí, 250

Plan Túpac Amaru, 237

Platt, Enmienda, 282, 289

Polk, James K., 246

Portales, Diego, 50, 82, 127-128

Portes Gil, Emilio, 256

positivismo, 169, 247

Prado, Antonio, 180

Prado, Manuel, 229-231

Prado, Mariano Ignacio, 210-211

Prats, Carlos, 154

Prebisch, Raúl, 397, 398

Prestes, Julio, 181

Prestes, Luís Carlos, 180, 187

Preston, Andrew, 347

PRI, véase Partido Revolucionario Institucional

Prío Socorrás, Carlos, 289

Proletarios, movimiento guerrillero nicaragüense, 361

Provincias Unidas de América Central, 44, 343

Puig, Manuel, 391; *La traición de Rita Hayworth*, 391

Punto Cuatro, discurso de Truman, 395

Quadros, Janio, 192, 194, 201, 404

Quetzalcóatl, 26

quichés, indios, 340

Rawson, Arturo, 99

Reagan, Ronald: y Argentina, 120; y Chile, 158; y el Canal del Panamá, 354; y Granada, 336-337, 407; y Jamaica, 330; y la América Central, 362, 369, 445; y las drogas, 417; y México, 11; y Nicaragua, 407

Rebouças, André, 168

Reid Cabral, Donald, 326

Reina, Carlos Roberto, 365

Remón, José Antonio, 353

Reserva Federal de los Estados Unidos, 72

Reston, James, 11

Retrato de Teresa, película cubana, 307

Revolución Industrial, 54, 314, 316

Reyes, Bernardo, 252

Río, Pacto de 1947 de, 374, 392

Río, Juan Antonio, 141

Ríos Montt, Efraín, 376, 377

Riva Agüero, José de la, 207, 227, 229

Rivera, Julio A., 367

Robinson, A. N., 336

Roca, Julio, 83, 96

Roca-Runciman, Pacto, 64

Rockefeller, David, 330

Rockefeller, Nelson, 406

Rodó, José Enrique, 385; *Ariel*, 385

Rodríguez, Abelardo L., 256

Rodríguez, Carlos Rafael, 302

Rodríguez de Francia, José Gaspar, 396

Rojas, Ricardo, 87

Romero, Carlos Humberto, 368

Romero, Óscar Arnulfo, arzobispo, 368

Romero Barceló, Carlos, 333

Roosevelt, Franklin D.: y Cuba, 287-288; y la política de la Buena Vecindad, 359; y la segunda guerra mundial, 391; y México, 257-260

Roosevelt, Theodore: corolario a la Doctrina Monroe, 358; y la guerra con España, 281; y Panamá, 352-353, 385

Rosas, Juan Manuel de, 128, 383; como dictador, 47, 50; en el poder, 81-82; y Brasil, 166; y Sarmiento, 82

Ross, Gustavo, 139-140

Rosselló, Pedro, 333

Royal Dutch Shell, 407

Royo, Aristides, 354

Ruiz Cortines, Adolfo, 261

Ryswijk, tratado de 1695 de, 324

Sacasa, Juan Bautista, 359-360

Sáenz Peña, Roque, 93-94, 96, 98, 99

Salazar, Antonio de Oliveira, 184, 389, 391

Salgado, Plínio, 183-184

Salinas de Gortari, Carlos, 273, 274, 277, 278

Samedi, Baron, 322

Sánchez Cerro, Luis M., 226-229

Sánchez, Mariquita, 75

Sandino, Augusto César, 359-361

Sanfuentes, Juan Luis, 137

San Martín, José de, 43-44, 46, 80, 207

Santa Anna, Antonio López de, 245-246

Santa Cruz, Andrés, 207

Sarmiento, Domingo, 82-83; *Facundo*, 83

Sarney, José, 201

Schick, René, 361

Schneider, René, 149

School of the Americas, 354

Scott, Winfield, 246

Seaga, Edward, 330, 336

Seineldín, Mohamed Alí, 124

Sendero Luminoso, 239-241, 411, 437

Senna, Ayrton, 203

Serrano Elías, Jorge, 376-377

Siete Años, guerra de los, 334

Simonsen, Roberto, 397

Simpson-Rodino, ley, 272, 415

SINAMOS, véase Sistema Nacional en Apoyo de la Movilización Social

Sinarquismo, movimiento derechista mexicano, 389

Siqueiros, David Alfaro, 263

Sistema Nacional en Apoyo de la Movilización Social (SINAMOS), del Perú, 234-237

Smith, Walter Bedell, 374

Smoot-Hawley, arancel, 287

Sociedad Agrícola para el Interés Social (SAIS), del Perú, 234

Solano López, Francisco, 83, 166

Solidaridad, sindicato de Polonia, 306

Somoza Debayle, Anastasio, 361

Somoza Debayle, Luis, 360-361

Somoza García, Anastasio (Tacho), 290, 359-360

Soto, Marco Aurelio, 345

Spencer, Herbert, 83

Standard Oil, 103, 216

Suazo Córdova, Roberto, 364

Sucesión española, guerra de, 32

Taft, William Howard, 359

taíno arawak, grupo indígena, 312

tapuías, indios, 33

Tavora, Juárez, 189

Taylor, Zachary, 246

Teixeira Lott, Henrique, 192

Tenochtitlán, 23-24, 26

teología de la liberación, 434

Terceristas, grupo guerrillero nicaragüense, 361

Thatcher, Margaret, 119

Thorp, Rosemary, 230

Timerman, Jacobo, 117

TLC, véase Tratado de Libre Comercio

toltecas, indios, 23

Tomás de Aquino, 29

Tomic, Rodomiro, 149

Tontons Macoutes, 322-323

Tordesillas, tratado de, 33

Torres, Alberto, 179

Torrijos Herrera, Omar, 354, 355

Tratado de Libre Comercio (TLC o NAFTA), 160, 274-279, 412-413, 415

Tropical Radio and Telegraph Company, 347

Tropical Trading and Transport Company, 347

trotskistas, 187, 439

Trotsky, Leon, 258

Trujillo, Rafael Leónidas, 325, 326, 405

Truman, Harry S., 333, 392-395

Túpac Amaru II, 38-39, 206

tupí-guaranés, indios, 33

Ubaldini, Saúl, 124

Ubico, Jorge, 371

Ugarte, Manuel, 385

Ulate Blanco, Otilio, 356-357

umbanda, 443

Ungo, Guillermo, 369

União Democrática Nacional (UDN), de Brasil, 188, 189, 191, 192, 194

Unidad Popular (UP), de Chile, 149-150, 151-152, 153-154, 407

Unión Cívica Radical (UCR), de Argentina, 93, 105; véase también Partido Radical

Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP), de Argentina, 105-106

Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), de Argentina, 105-106

Unión Nacional Odriísta, del Perú, 231

Unión Panamericana, 385, 393

Unión Revolucionaria, del Perú, 227

United Fruit Company (UFCO), 58, 399; en Costa Rica, 356-357; en Guatemala, 374-376; en Honduras, 364; orígenes y crecimiento, 347-348, 349

United States Agency for International Development (USAID), 362, 402

Universidad de Chicago, 156

Universidad de Harvard, 271

Universidad de La Habana, 388

Universidad de San Marcos, 206, 222

Universidad de São Paulo, 390

Universidad de Yale, 278

Uriburu, José F., 97-98, 100

Urquiza, Justo José de, 82

Urrutia, Manuel, 294, 295

Utah Construction Company, 217

Valle Espinosa, Eduardo, 279

Vallejo, Demetrio, 261-262

Vanderbilt, Cornelius, 344-345

Vandor, Augusto, 111

Vanguardia Popular, de Costa Rica, 357

Vargas, Getúlio, 195-197, 398; como populista, 66, 428; suicidio de, 191; vuelta al poder, 189-191; y el *Estado Nôvo*, 181-187, 188

Vargas Llosa, Mario, 240

Vasconcelos, José, 205, 255

Vaticano, 104

Vázquez, Horacio, 325

Velasco Alvarado, Juan, 233-237, 405, 428

Velázquez, Fidel, 259

Vianna, Oliveira, 179

Victoria, reina de Inglaterra, 162, 383

Videla, Jorge Rafael, 116-118

vikingos, 25

Vilanova, Marfa, 373

Villa, Pancho, 252-255, 388

Villanueva, Armando, 238

Villeda Morales, Ramón, 364

Vincent, Sténio, 320

Viola, Roberto, 118

Volkswagen, 69

Von Schouwen, general, 154

Walker, William, 344-345, 358

Walters, Vernon, 196

White, Robert, 369

Williams, Eric, 335-336

Wilson, Henry Lane, 252

Wilson, Woodrow, 253, 385

Wright, Richard, 328

Yanes Urías, César, 367

Yáñez, decreto, 137

Ydígoras Fuentes, Miguel, 376

Yrigoyen, Hipólito, 93, 95, 96-97, 222

Zapata, Emiliano, 250, 251, 252-255

zapatistas, 251, 253, 254, 366

Zedillo Ponce de León, Ernesto, 277-278

Zeitlin, Maurice, 288

Zelaya, José Santos, 345-346, 358-359

Índice

<i>Agradecimientos</i>	9
<i>Prólogo: ¿Por qué América Latina?</i>	11
Interpretaciones de América Latina	16
Temas analíticos de este libro	20
1. <i>Los cimientos coloniales (1492-década de 1880)</i>	23
El contexto europeo	25
América española: de la conquista a la colonia, 1492-1600	25
América española: la transformación de la sociedad colonial, 1600-1750	31
América portuguesa: ¿un mundo diferente?	32
Las raíces de la independencia	37
La respuesta colonial	39
La consecución de la independencia	42
El camino brasileño hacia la independencia	45
Las secuelas de la independencia, 1830-1850	47
El impulso de la economía internacional (1850-década de 1880)	51
2. <i>La transformación de la América Latina contemporánea (década de 1880-década de 1990)</i>	53
Fase 1. Inicio del crecimiento basado en la exportación-importación (1880-1900)	54
Fase 2. Expansión del crecimiento basado en la exportación-importación (1900-1930)	58
Fase 3. Industrialización en lugar de importación (1930-década de 1960)	63
Fase 4. Estancamiento del crecimiento basado en la sustitución de importaciones (década de 1960-década de 1980)	67
Fase 5. Crisis, deuda y democracia (década de 1980-década de 1990)	70
Mujeres y sociedad	74
Un marco para establecer comparaciones	78

3. <i>Argentina: prosperidad, estancamiento y cambio</i>	80
La lucha por la nación	81
Visión general: crecimiento económico y cambio social	83
El sistema político: consenso y reforma	91
Los militares atrasan el reloj	96
El peronismo y Perón	100
La administración militar	104
El fracaso del reformismo desarrollista	106
La solución burocrático-autoritaria	110
Vuelta al poder de los peronistas	113
El regreso de los militares	116
La transición a la democracia	120
4. <i>Chile: socialismo, represión y democracia</i>	127
Visión general: crecimiento económico y cambio social	128
Política y parlamento	133
De la inestabilidad al Frente Popular	138
La etapa de la política de partidos	141
¿Socialismo vía democracia?	149
El régimen de Pinochet	156
Vuelta a la democratización	159
5. <i>Brasil: ¿desarrollo para quién?</i>	161
Dom Pedro I (1822-1831)	162
Dom Pedro II (1840-1889)	165
El fin del imperio	167
Visión general: crecimiento económico y cambio social	170
La Primera República (1889-1930)	176
Getúlio Vargas y el <i>Estado Nôvo</i>	181
La Segunda República (1946-1964)	188
El gobierno militar	196
De la liberalización a la redemocratización	200
6. <i>Perú: soldados, oligarcas e indios</i>	204
El periodo independentista	206
El periodo del guano	208
Visión general: crecimiento económico y cambio social	212
Gobierno oligárquico	220
Leguía: el <i>Oncenio</i>	222
La crítica reformista	225
Coqueteo con las alternativas	226
Liberalismo económico y vacilación política	230
La revolución militar	233
¿Vuelta a la normalidad?	237

7. <i>Méjico: domesticar una revolución</i>	242
Méjico tras la independencia	242
La invasión estadounidense	245
El periodo de Díaz: progreso a un precio	247
La Revolución mexicana	250
Institucionalización de la revolución	255
Estabilidad, crecimiento... y rigidez	258
El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá	274
La tecnocracia en crisis	277
8. <i>Cuba: última colonia, primer Estado socialista</i>	280
Independencia dudosa	282
Visión general: crecimiento económico y cambio social	283
Política: corrupción y decadencia	288
Fidel Castro y la construcción de la revolución	289
La definición de la revolución	293
Una década de experimento	301
La consolidación del régimen	304
La lucha por sobrevivir	308
9. <i>El Caribe: colonias y miniestados</i>	312
El periodo colonial: conquista y rivalidad	314
Visión general: crecimiento económico y cambio social	317
Haití: república esclavista, dictadura de vudú	319
República Dominicana: un experimento inacabado	324
Jamaica: fugitivos y socialismo revolucionario	328
Puerto Rico: de colonia de asentamiento a escaparate del capitalismo	331
Antillas Menores: las luchas de los microestados	334
10. <i>Centroamérica: colonialismo, dictadura y revolución</i>	339
Antecedentes coloniales	339
Independencia: la lucha por la unificación	342
Rafael Carrera y la supremacía conservadora	343
La teoría liberal y las «dictaduras republicanas»	345
Visión general: crecimiento económico y cambio social	346
Panamá: una nación y una zona	352
Costa Rica: una democracia frágil	356
Nicaragua: de la dinastía a la revolución	358
Honduras: el gobierno de los militares	364
El Salvador: de la estabilidad a la insurgencia	366
Guatemala: reacción y represión	371
11. <i>América Latina, Estados Unidos y el mundo</i>	378
De la independencia al panamericanismo	380

La aparición de la influencia estadounidense	383
La consolidación de la influencia estadounidense	387
La expresión de la influencia estadounidense	391
El impulso nacionalista	396
La alternativa revolucionaria	400
Los reformistas demócratas y la Alianza para el Progreso	404
Desarrollo y endeudamiento	407
El fin de la guerra fría	410
Integración económica regional	412
El programa social	415
La cultura hispana dentro de Estados Unidos	417
<i>Epílogo: ¿Qué futuro le espera a América Latina?</i>	421
Preparación para la predicción: análisis comparativo	422
Dimensiones del cambio: demografía y economía	433
Mirada hacia adelante: respuestas políticas	436
América Latina: el fin de la vía socialista	439
Las perspectivas de desarrollo en el capitalismo	440
¿Qué será de las culturas no europeas de América Latina?	442
El potencial de conflicto regional	444
Contribución latinoamericana al mundo	445
Apéndice estadístico	447
Jefes de Estado	450
Sugerencias para lecturas complementarias	460
Índice alfabético	476